



Paces desde abajo

Desafíos y oportunidades de otra paz

John Jairo Uribe Sarmiento
Iokiñe Rodríguez Fernández
Jairo Baquero Melo
EDITORES ACADÉMICOS



PACES DESDE ABAJO

Paces desde abajo: desafíos y oportunidades de otra paz

Resumen

Las paces construidas desde los territorios son resultado de la interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas de autonomía local. Los capítulos que componen este libro amplían, profundizan y problematizan estos ejes. Cada capítulo aborda y ofrece un panorama muy rico de los modos como se construyen las paces locales. Con especial énfasis en el departamento del Tolima, este libro pretende contribuir a crear una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades locales vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

El recorrido muestra la necesidad de reconocer otras formas de construir la paz, más allá de las narrativas oficiales y de los arreglos institucionales centrados en la reincorporación, la reducción de la violencia y la reparación a víctimas. Las tensiones regionales que se analizan evidencian que, a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y comunidades han logrado construir múltiples propuestas que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la academia, con los medios de comunicación, con activistas, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional.

Palabras clave: construcción de la paz, proceso de paz, conflicto armado, solución de conflictos, sociedad civil, Colombia.

Building peace from below: challenges and opportunities for a different peace

Abstract

Peace built from the territories is the result of an interaction between state recognition/alignment processes, the presence of violent actors, and the dynamics of local autonomy. The chapters that make up this book broaden, deepen, and problematize these thematic axes. Each chapter addresses and offers a rich panorama of how local peace processes are created. Focusing on the department of Tolima, this book aims to create a narrative against the dominant discourses of peace in Colombia and analyzes the various ways in which local communities have been constructing other conceptions and practices of peace.

The journey demonstrates the need to recognize other ways of building peace beyond the official narratives and institutional arrangements focused on reincorporation, violence reduction, and victim reparations. The regional tensions analyzed here show that, despite the constraints imposed by violent actors and public policies, organizations and communities have been able to create multiple proposals that require establishing a dialogue among them, as well as with the academia, the media, activists, Colombian society, and the international community.

Keywords: peace building, peace process, armed conflict, conflict resolution, civil society, Colombia.

Citación sugerida/Suggested citation

Uribe Sarmiento, J. J., Rodríguez Fernández, I, Baquero Melo, J. (2022). *Paces desde abajo: desafíos y oportunidades de otra paz*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, East Anglia University, Universidad de Ibagué. <https://doi.org/10.12804/urosario9789587848908>

PACES DESDE ABAJO:
desafíos y oportunidades de otra paz

JOHN JAIRO URIBE SARMIENTO
IOKIÑE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
JAIRO BAQUERO MELO
—Editores académicos—

Paces desde abajo: desafíos y oportunidades de otra paz / John Jairo Uribe Sarmiento, Iokiñe Rodríguez Fernández, Jairo Baquero Melo, editores académicos. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Universidad de Ibagué, East Anglia University, 2022.

xxv, 417 páginas: ilustraciones.
Incluye referencias bibliográficas.

1. Paz – Colombia. 2. Construcción de la paz – Colombia. 3. Solución de conflictos. 4. Proceso de paz – Colombia. 5. Conflicto armado. 6. Sociedad civil – Aspectos sociales. I. Uribe Sarmiento, John Jairo. II. Rodríguez Fernández, Iokiñe. III. Baquero Melo, Jairo. IV. Universidad del Rosario. V. Universidad de Ibagué. VI. East Anglia University. VII. Título.

303.66 SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI

DJGR

Marzo 02 de 2022

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Esta investigación contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia –convenio 277 de 2018–, y del Economic and Social Research Council de Inglaterra. Fue financiada con recursos del Fondo Newton-Caldas constituido por ambos países.

© Editorial Universidad del Rosario
© Universidad del Rosario
© Universidad de Ibagué
© East Anglia University
© Varios autores
© Carlos Mario Perea Restrepo, por el Prólogo

Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 N° 12B-41, oficina 501
Teléfono 601 297 02 00, ext.: 3112
editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá, D. C., 2022

ISBN: 978-958-784-888-5 (impreso)
ISBN: 978-958-784-889-2 (ePub)
ISBN: 978-958-784-890-8 (pdf)
<https://doi.org/10.12804/urosario9789587848908>

Corrección de estilo: Lina Morales
Diseño de cubierta: César Yepes y Luz Arango
Diagramación: Precolombi EU-David Reyes
Impresión: Xpress. Estudio Gráfico y Digital SAS

Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a las universidades ni sus políticas institucionales.

El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de las editoriales.

Contenido

Prólogo	XI
<i>Carlos Mario Perea Restrepo</i>	

Introducción	1
<i>John Jairo Uribe Sarmiento</i>	
<i>Iokiñe Rodríguez Fernández</i>	
<i>Jairo Baquero Melo</i>	

PRIMERA PARTE

LAS DISCUSIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA PAZ CONSTRUIDA DESDE LO LOCAL Y REGIONAL

Capítulo 1. Legitimidades en disputa: la construcción estatal en escenarios de posconflicto	21
<i>John Jairo Uribe Sarmiento, Santiago Andrés Padilla Quintero,</i>	
<i>Iokiñe Rodríguez Fernández, Ulrike Theuerkauf,</i>	
<i>Cristina Sala Valdés, Nohora Isabel Barros Navarro,</i>	
<i>María del Pilar Salamanca Santos, Mónica del Pilar Álvarez Bustos</i>	

Capítulo 2. El papel de la investigación acción transformadora en la construcción de paz territorial	53
<i>Iokiñe Rodríguez Fernández, Cristina Sala Valdés, Nohora</i>	
<i>Isabel Barros Navarro, María del Pilar Salamanca Santos,</i>	
<i>Santiago Andrés Padilla Quintero, María Teresa Armijos Burneo</i>	

Capítulo 3. Paces locales y estrategias transformadoras: más allá de la paz dominante en el sur del Tolima	91
<i>Cristina Sala Valdés, Nohora Isabel Barros Navarro,</i>	
<i>María del Pilar Salamanca Santos, Mónica del Pilar</i>	
<i>Álvarez Bustos, Iokiñe Rodríguez Fernández, John</i>	
<i>Jairo Uribe Sarmiento, Santiago Andrés Padilla Quintero</i>	

SEGUNDA PARTE

MARCOS SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS EN
LOS QUE LOS ACTORES LOCALES CONSTRUYEN PAZ

Capítulo 4. Construcción de una estatalidad contrainsurgente en el sur del Tolima durante el siglo XXI.....	119
<i>Santiago Andrés Padilla Quintero, John Jairo Uribe Sarmiento</i>	
Capítulo 5. Conocimientos, saberes y territorios. Trayectorias analíticas y exploraciones empíricas en el sur del Tolima y occidente de Neiva.....	157
<i>Jairo Baquero Melo, John Jairo Uribe Sarmiento, Germán Augusto Pachón Gantiva, Emmanuel Quiroga Rendón, Vicente Vega Reina</i>	
Capítulo 6. El Estado y la construcción de paz territorial en San Vicente del Caguán y Tumaco (Colombia).....	189
<i>Juan David Ardila Suárez, Iokiñe Rodríguez Fernández</i>	

TERCERA PARTE

VOCES, ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DESDE ABAJO

Capítulo 7. “Paz es que a las mujeres se nos reconozca todo, que podamos decir: ¡Somos libres!”. Una apuesta hacia la construcción de una tejeduría de paces justas al género. Caso Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz en el sur del Tolima.....	223
<i>Nohora Isabel Barros Navarro, Cristina Sala Valdés, Martha Ibeth Cardona Bonilla, María Ximena Figueroa Olaya</i>	
Capítulo 8. Mujeres indígenas, justicia y paz territorial.....	263
<i>Laura Yaneth Rivera Revelo</i>	
Capítulo 9. Lo que se teje mientras se teje: sanación, reinterpretación desde el presente y participación política. El caso de Asomeht en el sur del Tolima.....	297
<i>María del Pilar Salamanca Santos, Cristina Sala Valdés, María Escilda Ramírez, Alixe Ulcue Albarracín</i>	

Capítulo 10. Las guardias indígenas y cimarronas y sus aportes en la construcción de paz en el Cauca.....	321
<i>Axel Alejandro Rojas Martínez, Leidy Vanessa Useche Acevedo</i>	
Capítulo 11. Paz ambiental y juventud alternativa: un aporte desde la experiencia de la Fundación Protectora Ambiental de Planadas Tolima	349
<i>Santiago Andrés Padilla Quintero, María del Pilar Salamanca Santos, Jeferson Rodríguez Yate, Yeison Ricardo Castellanos Rincón</i>	
Capítulo 12. Formación entre caficultores tolimenses: una herramienta para la superación del conflicto armado	377
<i>Vicente Vega Reina</i>	
Los autores	409

*A nuestros hijos, por esa maravilla
de vivir en la incertidumbre*

Prólogo

Carlos Mario Perea Restrepo*

¡La sociedad debe tomarse la paz!

Dicha así, con signos de admiración y énfasis, la frase condensa una renovada intencionalidad política frente a la paz. Más de una implicación está allí en juego.

Empero, antes de ahondar su contenido, sale al paso la pregunta de partida: en medio de los tantos reveses que la paz ha enfrentado, ¿aún tiene vigencia el enorme esfuerzo que supone construirla? Sin duda, la paz ha debido sortear más de una dificultad. La derrota en el plebiscito de octubre de 2016 (que erosiona de manera drástica su legitimidad)¹ y el ascenso al poder de una fuerza con declaradas animadversiones hacia ella (profundizando la precariedad en la implementación de los acuerdos) constituyen quizá los dos acontecimientos que han lanzado los mayores obstáculos al camino de construcción de la paz.

No obstante, es nuestro punto —así como también la apuesta del libro que el lector tiene entre manos—, pese a los reveses sufridos, la paz no pierde vigencia. Todo lo contrario, numerosos acontecimientos en marcha la revisten de mayor urgencia, tres dignos de mención.

En primer lugar, Colombia acumula una larga y atormentada historia en el intento de exorcizar la guerra e instaurar la paz, una de las más prolongadas

* Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia. Director del Centro de Pensamiento Región Nación.

¹ La victoria del NO fue una derrota, pero la mayor adversidad del plebiscito fue el 64 % de abstención. Un porcentaje tan elevado da muestras de un país de espaldas al conflicto violento.

del planeta. En su más lejano origen, el Frente Nacional buscó extirpar la amarga experiencia conocida bajo el rótulo de la ‘Violencia’ con mayúscula, incluyendo un paquete de medidas que pasaron hasta por la reforma agraria. Pocos años después, el nacimiento de las guerrillas modernas y algo después el del narcotráfico y el paramilitarismo desataron un intenso conflicto armado que se ha intentado conjurar mediante un espectro de iniciativas que van de la Constituyente de 1991 al Acuerdo de La Habana de 2016.

No obstante, a la vuelta del sinnúmero de dispositivos de paz caldeados por más de siete décadas de guerra y exterminio, el país enfrenta hoy, una vez más, la irrupción de un ciclo violento. Así es, despuntando la tercera década del siglo XXI, viejos y remozados actores imponen su dominio armado sobre los territorios donde se implantan, reensamblando un fenómeno conocido con suficiencia en más de una región. La guerra y sus gramáticas no se van, convirtiendo la paz en una urgencia más viva que nunca. Colombia no termina de resolver la cita con la paz.

Segundo, la paz encarna un valor supremo que tiene la virtud de movilizar aspiraciones de cambio y transformación. Durante las últimas tres décadas las utopías han visto desarmado su papel movilizador; en contravía de esa tendencia, la paz ha venido a cumplir el papel de cemento de proyectos de transformación. Es el caso de Colombia, en más de una coyuntura ha tendido los puentes que hacen posible la convergencia de fuerzas dispares y hasta antagónicas, cuyo ejemplo paradigmático lo encarna la jefatura tripartita que condujo la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.²

No es el único caso, entre las realidades menudas de la vida en las regiones y localidades la paz ha servido de argamasa de actores diversos en torno a proyectos colectivos. Las masivas movilizaciones del 21 de noviembre de 2019 y del 28 de abril de 2021 —evidencias del hondo malestar que recorre transversalmente la sociedad colombiana— hicieron de la paz una de sus consignas aglutinadoras.

Por último, *en tercer término*, la paz preserva su vigencia en razón de la condición constitucional que ensambló el Acuerdo de La Habana. El período jurídicamente establecido para su ejecución está lejos de expirar.

² La Asamblea tuvo la dirección conjunta de Horacio Serpa (liberal), Álvaro Gómez (conservador) y Antonio Navarro (recién insertado en representación de la fuerza Alianza Democrática M-19).

Ciertamente el actual gobierno ha golpeado su implementación.³ Con todo, pese a los atrasos, al tiempo jurídico de la paz le queda todavía más de un respiro, dando actualidad y sentido a sus temas.⁴

En suma, en conexión con tres acontecimientos —nuevo ciclo violento, capacidad de movilización y tiempo legal—, la paz posee vigencia. La obra *Paces desde abajo* hace un testimonio cierto de una voluntad indeclinable de paz: nos muestra varias de sus modulaciones tanto entre universidades y activistas como en las prácticas de indígenas, mujeres, ambientalistas y productores campesinos en localidades del sur del Tolima y regiones circunvecinas.

Doble desafío

La paz tiene vigencia, no ha perdido su actualidad y urgencia. No obstante, de cara al venidero proceso de su construcción se impone repetir la frase que abre este prólogo: ¡la sociedad debe tomarse la paz!

Pero... ¿qué significa un ‘asalto’ de esa naturaleza?

La violencia en Colombia exhibe una prodigiosa capacidad de reciclamiento. ¿Cómo más explicar siete décadas de incesante reproducción? Y colocando sobre la mesa las muchas tentativas de paz puestas en marcha desde mediados del siglo xx, ¿por qué no logran quebrar los engranajes que aceitan la muerte violenta?

Enfrentamos un nuevo ciclo violento, otro más lleno de evidencias, tornando perentoria la necesidad de imaginar nuevos caminos. Junto al Acuerdo de La Habana y el marco legal que lo respalda, está lanzado el reto de cimentar un nuevo lugar de sociedad frente a la paz. Varias situaciones lo hacen factible.

Primero, el planeta presencia un momento de sociedad, incluida Colombia. Las movilizaciones de 2019 y 2021 dan cuenta de un malestar que cala hondo en los más diversos segmentos de la sociedad. No es un asunto

³ Sea el caso, las 900 obras PDET (planes de desarrollo con enfoque territorial) se circunscriben nada más a obras de infraestructura, haciendo caso omiso de sus componentes político y social. Además, la movilización que respaldó los PDET se desactivó, quebrando un ingrediente esencial de la dimensión territorial de la paz.

⁴ A modo de ilustración, no tendría lugar la preocupación por la reforma agraria si no fuera porque el Acuerdo de La Habana la convierte en tema de álgida discusión.

doméstico, movilizaciones ciudadanas de corte similar recorren el planeta desde inicios de la segunda década de este siglo.⁵

Un inquietante y decisivo fenómeno de construcción de poder se avizora tras esta irrupción de la sociedad que protesta a lo largo y ancho del mundo entero. En todos los casos —con las más variadas trayectorias finales—, la sociedad ya no pide ser representada. Su voz y su indignación no las delega ni en los partidos ni en los movimientos políticos, ni en el Estado ni en las instituciones. La sociedad se hace y se manifiesta a sí misma, ahí reside su fuerza, ahí reposa su debilidad —al menos toda vez que deba nuclear sus demandas heterogéneas para convertirlas en polo de poder alternativo—.

Siguiendo la estela de esa realidad actuante, este prólogo emplea la noción de sociedad a fin de visualizar el timonazo que, pensamos, debe adoptar la construcción de la paz.⁶

Segundo, todo indica que existe una especie de techo en los posibles logros de la paz centrada arriba, esto es, en el Estado y los actores armados. Claro, uno y otros no pierden su importancia estratégica.⁷ Con todo, el diseño que pone en ellos el motor de la paz mostró en definitiva su precariedad, no logró sacarnos de la guerra. Llegó entonces el momento de allanar otra vía. Como dice el subtítulo del libro y se aborda en varios de sus capítulos, suena la hora de ensayar una paz centrada abajo, la paz de sociedad.

Tercero, los procesos de paz en el mundo —con mayor razón uno con la intensidad y duración del nuestro— ya no dependen en exclusivo de las dinámicas domésticas. La constitución de la Corte Penal Internacional impuso que la tramitación de los conflictos internos se vea sometida a la veeduría de circuitos transnacionales. El resultado vino a ser la inversión en el horizonte de la paz: de un centramiento en los centros de poder (Estado y sublevados), el foco se desplazó hacia las víctimas y los destrozos de la

⁵ Entre otros, arrancó con la ‘Primavera Árabe’ al norte de África, luego pasó a Europa y poco después a Estados Unidos. El fenómeno se repite en más de una nación. En los mismos días del 21-N, entre otros países, Chile traía una impresionante estela de marchas.

⁶ La sociedad está hecha de una abigarrada cantidad de sectores: entre otros, mujeres y jóvenes, negritudes e indígenas, gremios y sindicatos, movimientos y partidos políticos, academia y sector educativo... Lo territorial, incluyendo lo comunitario, constituye una dimensión de enorme valía.

⁷ Sin la voluntad estatal para la reforma y el aliento de numerosos procesos, la paz sería impensable; al igual que tampoco podría concebirse si los alzados en armas no las deponen y se disponen a la reintegración en los circuitos de la vida corriente.

guerra. En ese contexto de equidad con la sociedad, adquieren cuerpo las demandas por la verdad, la justicia y la reparación, las tres consignas que cruzan en la actualidad cualquier proceso de paz en el globo entero.

Cuarto, la sociedad colombiana bulle. Aquí y allá se confirma la presencia de una movilización recubierta de motivaciones diversas, armando un abanico que se mueve de las víctimas y la urgencia de reparación a la producción económica y el logro de la vida digna. Se trata de una acción colectiva que la guerra no logró acallar —aunque sí golpeó y lesionó con enorme potencia—. El texto la muestra en el despliegue de su fuerza poniendo en escena experiencias con mujeres, indígenas, emprendimientos productivos y proyectos ambientales, todos a la manera de evidencia de una sociedad que se mueve con autonomía y determinación.

Bajo la luz de estas situaciones, están dadas condiciones que hacen plausible la toma social de la paz.

Entonces, ¿qué supone esa toma? Diríamos que ella entraña un doble desafío. De un lado, un sostenido proceso de reconstrucción del tejido social mancillado por tantos y tantos años de muerte y violencia; del otro, la cimentación de otros equilibrios de poder, unos balanceados hacia el polo de la sociedad.

No son cualquier cosa, los dos desafíos (internamente conectados entre sí) han de enfrentar numerosas dificultades: una historia de la paz hecha desde hace largo tiempo con su anclaje arriba, en el Estado y los actores armados; una sociedad golpeada y manipulada por la guerra, socavada en su poder y voluntad colectiva; unas gramáticas de poder enraizadas en historias regionales hechas a la medida de gamonalismos y clientelismos; arquitecturas institucionales puestas al servicio de los poderosos, así como deja ver la extrema inequidad en el reparto de la tierra.

Son muchas las dificultades en movimiento, contenidas en que la paz hasta hoy puesta en marcha no entrega a la sociedad el protagonismo que le corresponde. De tal suerte, la coyuntura actual reclama un viraje que provenga justo de una nueva presencia de sociedad.

Es la apuesta, la misma que está tras la afirmación lanzada en la introducción: “El libro pretende contribuir a crear una contranarrativa frente a los discursos dominantes de la paz en Colombia”. Así es, el texto es tanto una invitación a caminar ese imprescindible de la toma social de la paz

como una ilustración de dispositivos y exploraciones que se pueden seguir en el intento.

¿En qué consisten entonces los dos desafíos —reconstrucción y poder— y cómo pensarlos siguiendo la huella que traza el libro *Paces desde abajo*?

La reconstrucción

Si entendemos por tejido social los nexos que nos proveen el sentido de un nosotros y, a la vez, los encuadres efectivos sobre los que se soporta la pertenencia, la tarea de la reconstrucción tiene tanto una dimensión simbólica como otra de construcción (reconstrucción) de espacios dónde pertenecer y proyectar la vida digna. Cuatro elementos salen al paso.

Como primera medida, los términos de guerra, actor armado, homicidio, desplazamiento, desaparición y otros tantos más dan cuenta de la mediación que cumple el lenguaje de la violencia en los ensambles colectivos de Colombia. Es cierto que no somos el país donde los militares han puesto y dispuesto a su antojo la totalidad del poder, como ha sucedido en más de un país latinoamericano, pero sí somos el país donde la lógica de las armas y su ley de fuego han tiranizado el devenir como nación. Hemos estado militarizados al extremo, con la particularidad de que aquí lo militar se entretreje en el abigarrado cruce que mezcla lo legal y lo ilegal, lo político y lo criminal, lo estatal y lo paramilitar.

Luego de tantos años de militarismo y armas, ¿hasta dónde se nos ha metido la violencia? ¿En qué grado ha permeado las mediaciones que hacen efectivos los intercambios entre unos y otros? Es un interrogante capital de sociedad. El Estado puede y debe ayudar a resolverlo, pero es a la sociedad a quien corresponde extirpar la violencia de modo definitivo de los procesos mediante los cuales se configura al Otro, se tramita el conflicto, se construye el poder.

Hemos vivido (¿seguimos viviendo?) un desastre humanitario de proporciones mayúsculas, uno de los más graves de la historia reciente de la humanidad. Los casi nueve millones de víctimas registrados en la contabilidad estatal son su testigo elocuente. La vida, la convivencia y los vínculos entre unos y otros han sido quebrados de uno y mil modos, como bien lo recuerdan los siete millones y medio de desplazados con su carga de fractura de los hilos que zurcen la vida en sociedad. El cometido de la reconstrucción

de los tejidos sociales es una tarea prioritaria, una tarea que descansa de buen grado sobre los hombros de la sociedad.

En segundo término, la reconstrucción que toma como epicentro la sociedad asume que la paz no es una terapéutica traída desde ‘fuera’ (desde los poderes centrales y los saberes instituidos) a fin de curar un mal ‘adentro’ (en las localidades y las comunidades). Por el contrario, como lo afirman varios capítulos del texto, se trata de asumir que allí mismo hay multitud de mundos de sentido enterrados en la historia y la experiencia vivida de las gentes en los territorios.

La resignificación de saberes, los zurcidos de memoria y la recomposición de la identidad se convierten en estrategias de reconstrucción. El libro se ocupa de ellas, dando cuenta de las sinuosidades que envuelven la edificación de la paz territorial.

El saber y la memoria hacen parte de la construcción de lo comunitario en la investigación acción transformadora (capítulo 3), los saberes en la construcción de experiencias locales (capítulo 5), la formación entre campesinos en el desarrollo productivo (capítulo 11) y en general en el enfoque reflexivo que atraviesa el texto en su conjunto. De su lado, el tema de la identidad cruza las búsquedas de los indígenas y las mujeres (capítulos 7, 8 y 9).

Revalorar el saber local (en diálogo con otros saberes), edificar memoria y recomponer la identidad es tanto como comprender los resortes del pasado, las dinámicas configuradoras del presente y las esperanzas factibles hacia futuro, todo en el contexto de un país cruzado por la guerra y una de sus destacadas manifestaciones, el patriarcado.

En tercer lugar, la reconstrucción del tejido social demanda la organización de la sociedad, esto es, la movilización organizada de sus miembros y prácticas sobre las realidades estratégicas de la vida colectiva, tanto en lo local como en niveles más ampliados que tocan lo regional, nacional y global.

El libro hace una apuesta por el poder de lo comunitario. Como reza la introducción, “es necesario [...] darle visibilidad a la extraordinaria fuerza de las voces comunitarias, su capacidad para recrear sus territorios [...] a partir de las secuelas de la guerra, incluso a pesar de los diseños institucionales de paz”. El modelo comunitario es sin discusión un camino obligado, no de modo gratuito la comunidad se invoca ante cada ocasión en que se pretenden poner en juego energías locales. Por demás las juntas de acción comunal —el correlato institucionalizado de la comunidad— constituyen

la organización de base más extendida a lo largo y ancho del país, casi de manera literal cada vereda y barrio posee su junta.

Sobre su eficacia social, la simbólica de la comunidad y el poder que se le asocia ayudan a nombrar la organización de la sociedad. No obstante, la comunidad se presta también a equívocos, corre el peligro de recluir los esfuerzos en lo local desdibujando el énfasis en niveles ampliados de acción. El poder de sociedad cobra una de sus expresiones en lo comunitario, pero no se agota en él. De allí que hablemos de sociedad, la toma de la paz fuerza el desborde de los límites circunscritos del barrio o la vereda proyectando intereses ampliados sobre subregiones, regiones, el país, el mundo.

De tal suerte, la noción de una sociedad orgánica denota la movilización organizada sobre la mayor cantidad de objetos de acción posibles, conectados a niveles diversos de universalidad: la producción, la identidad (mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, afrodescendientes), el poder político, la inequidad, el medio ambiente, la cultura, la educación y toda aquella esfera de realidad que impacte el curso de la vida colectiva.

Finalmente, *en cuarto término*, la reconstrucción implica poner en juego el ‘salto’ que trae consigo la paz y su imaginario de transformación —según quedó señalado en el primer apartado—. Las organizaciones locales en funcionamiento ¿son por fuerza una cimiento de paz? ¿La mera existencia en el territorio, por sí misma, le confiere la condición de experiencia de paz?

La capacidad disolvente de los actores armados tanto como su poderío indisputado sobre la vida en los territorios no descalifican el calificativo de resistencia con que quiera mirarse la acción organizada de la sociedad inerme y desarmada. Empero, la paz ha de cumplir también su papel de resignificación de la experiencia organizada. Su presencia y las intenciones que se le coligan introducen un horizonte de significación que conecta las acciones a la voluntad decidida de cambio y modificación de estructuras profundas. Se trata de poner en juego el valor utópico de la paz, introduciendo un referente que ilumine con renovados sentidos la acción colectiva.

La reconstrucción de tejido social significa, así las cosas, tanto un viaje hacia adentro haciendo uso de ‘estrategias’ como el saber, la memoria y la identidad, como una proyección hacia afuera de la mano de una sociedad que da cuenta de sí misma y que actúa con eficiencia sobre los nudos de la vida, incluyendo los poderes que le atraviesan desde variados niveles.

El poder

La consigna de tomar la paz será eficaz solo si está acompañada de procesos de construcción de poder de sociedad, poderes capaces de disponer renovados equilibrios ante fuerzas que por siempre han detentado el ascendiente sobre las decisiones y la institucionalidad. Por supuesto, las fuentes de producción de poder emanan de nichos diferenciados de la trama social. Unos provienen de fuentes ‘externas’, como el Estado central y los poderes corporativos; otros emergen ‘adentro’, entre las regiones, como el Estado local y su aparato político, los dueños de la riqueza, las organizaciones del territorio y los actores armados. El panorama no es nada simple. Entonces, ¿cómo propiciar poder local y territorial en medio de equilibrios de fuerza tan complejos y en tantos sentidos adversos? En este apartado, como en el anterior, se aborda la pregunta en cuatro puntos.

Como primera medida, el poder de la sociedad deviene del desarrollo de una conciencia radical de sí misma, todo lo cual supone caminar en varias direcciones: centrarse en las fuerzas que posee; visualizar los efectos disolutivos de la guerra; comprender el significado de Colombia como nación, su historia y los poderes que la constituyen; consolidar una visión de región y localidad. Naturalmente, una conciencia radical se traduce en acción, trastocando los saberes en instrumentos de determinación y autonomía. Ya hay caminos recorridos, lo ejemplifican las mujeres y los indígenas —motivo de tres capítulos del libro—.

Desde la óptica de la paz, para la sociedad es crucial no permanecer atrapada en la condición de víctima, un discurso que con facilidad deriva en pasividad y dependencia. Ciertamente la violencia ha afectado la sociedad al límite, determinando un grado extendido de victimización que exige reparación del daño sufrido; el reclamo de verdad, justicia y no repetición, así las cosas, ha de hacerse sin miramientos.

No obstante, un paso más allá, la resignificación de la victimización se impone. El resarcimiento, justo por definición, debe hallar raíces en propósitos de transformación del estado de cosas reinante. Es el alfa y omega del poder social, la reconstrucción y el cambio. Hacia allí apunta, de nuevo, el norte utópico de la paz.

Poner en su sitio justo la victimización es requisito de la conciencia radical de sí. En realidad, se trata de trastocar en empoderamiento los derechos que la victimización confiere.

En segunda instancia, el poder de sociedad se cimienta en conexión con el Estado, un espinoso asunto abordado en los capítulos 1 y 4 del libro. Espinoso en tanto, a nivel de sociedad, la relación con el Estado reclama el sostenido desplazamiento entre el diálogo y la autonomía, entre el consenso y la autodeterminación. ¿Hasta dónde es necesario estar más allá del Estado? La sociedad colombiana, fracturada y sojuzgada por la guerra, ¿en qué línea debe actuar en consonancia con el Estado y en qué línea debe emprender el camino de su autonomía?

Así como la conciencia radical pasa por el desmonte de la victimización, la relación con el Estado pasa por la puesta en tela de juicio del estatismo que impregna la cultura política nacional, presente con facilidad en los movimientos sociales, pero presente por igual entre los partidos y el Estado mismo: la acción colectiva se descifra desde las exigencias y demandas al Estado, colocando las iniciativas de sociedad en completa dependencia respecto de los recursos y decisiones estatales.⁸ Una vez sometida a los dictados del Estado, la acción colectiva se achata en delegataria del poder ‘afuera’.

Lo dicho se cumple igual en el terreno de la paz. En Colombia no se da la situación de una paz impuesta desde fuera, desde poderes transnacionales comprometidos con los intereses de Occidente, como sucede en otros lugares del planeta. Aquí las agencias multilaterales han cumplido su papel, sin duda, sea como garantes de negociaciones, sea como aportantes en la financiación de multitud de procesos. Sin embargo, la paz colombiana se ha producido a partir de iniciativas echadas a rodar ya por el Estado ya por los actores en armas. Pese a ese origen, la descolonización —abordada en el capítulo 2— mantiene su vigencia en relación con los contenidos de la paz.

De igual modo, habrá de mirarse con detenimiento la condición liberal de la paz colombiana, una polémica avanzada en los dos primeros capítulos. Aunque se nos advierte de la dificultad de una definición única, si se asume la triple condición de democracia formal, mercado y pacificación como rasgos distintivos de la paz liberal, ¿habrá que etiquetar con ese rótulo el Acuerdo de La Habana?⁹

⁸ Es común que las iniciativas locales operen no más que cuando reciben financiación del Estado o de organizaciones no gubernamentales.

⁹ El interrogante se sugiere, pero no se aborda en el libro.

Los tres rasgos distintivos están presentes. Naturalmente, la desmovilización de los ejércitos insurgentes (la pacificación) fue una condición esencial que al día de hoy está cumplida. La apertura no se achata en una mera reformatización de la democracia, que en ningún momento ha dejado de operar, aunque siempre asediada por las armas. Por último, frente al contenido del Acuerdo, la economía de mercado no opera a modo de santo y seña que lo defina.

Más bien, el Acuerdo de La Habana se ocupa de puntos neurálgicos de la vida nacional. Se adentra en la reforma rural en el intento de paliar la histórica desigualdad que aqueja las zonas rurales, todo en el intento de tramitar un conflicto rural que no deja de nutrir el conflicto armado. Igual, el problema de las drogas ilícitas es con mucho un nudo ciego de la historia nacional.

De tal suerte, el debate por la paz en Colombia es, ante todo, frente a la perspectiva de la construcción desde arriba, desde el Estado y los actores armados —tema que también aborda el texto—. Es un rasgo que cruza una dilatada historia, la negociación en Cuba bien lo confirma. El prolijo acuerdo resultante se construyó entre élites del Estado y élites guerrilleras; la participación de la sociedad, hecha de visitas y consultas, no modifica en mucho la condición elitista del Acuerdo. Es cierto que experiencias anteriores habían puesto en evidencia la necesidad de negociaciones en el exterior, impenetrables a los medios y la sociedad, cuyo ejemplo sobresaliente fue el fracasado diálogo en el Caguán. Empero, la consigna del hermetismo se llevó al extremo suprimiendo de tajo la participación activa de la sociedad. ¿Ese blindaje radical no ayuda a explicar el infortunio del plebiscito de 2016, evidencia de una sociedad descreída en una paz que resulta más que urgente en un país invadido de violencia y atravesado de la inequidad sin trabas?

En este contexto de dirección y conducción desde arriba irrumpe, preciso, la sentencia de la sociedad que se ha de tomar la paz. Sería necio insinuar que ella ha estado ausente de los muchos dispositivos de la larga paz colombiana, la sociedad ha desempeñado papeles protagónicos en un sinfín de direcciones. Empero, tanto los diseños de las negociaciones como las estrategias para su implementación no confieren a la sociedad el papel que le corresponde. En el espíritu general del Acuerdo la participación social

es invocada, los PDET y los PNIS constituyen mecanismos que la vehiculizan.¹⁰ No obstante, ambos mecanismos depositan en el Estado la dirección y ejecución del proceso, como lo dejan ver con claridad los recortes en la implementación de unos y otros durante el gobierno de Iván Duque. La cultura política estatista se impone, tanto arriba como abajo.

En tercer lugar, el poder de sociedad enfrenta los poderes locales a la manera de tiranías de gamonales y estructuras clientelares reproducidas con la anuencia del Estado, tanto del central como del local. Son de todos conocidos los relatos de las dominaciones regionales a manos de castas familiares, dotadas del poder discrecional de repartir a sus anchas el erario público. Tan conocidos como la repetida historia de formación de los grandes latifundios improductivos, hechos sobre complicidades estatales que avalan la expropiación de tierras baldías trabajadas por campesinos colonizadores. Tan difundidas como el poderío territorial de los actores armados, impartiendo ‘justicia’, imponiendo ‘leyes’ y controlando el curso de la vida.

No es posible concebir el poder territorial al margen de tales poderes, profundizados por el poder corporativo de la minería actuando de nueva cuenta con la complicidad desembozada del Estado. El poder de sociedad tiene que vérselas con los poderes regionales, forzada a trabar relación con ellos, obligada a diseñar procedimientos efectivos que impongan una contención a sus desafueros. El poder de sociedad enfrenta el desafío de armar renovados equilibrios de poder, unos que tengan un saldo positivo hacia el lado de la sociedad: solo una sociedad dotada de conciencia de sí misma puede desarrollar el poder capaz de contenerlos.

En cuarto lugar, para finalizar nuestro recorrido, resta aún un plano de mayor alcance, el global. ¿De qué modos puede contribuir la sociedad al desmantelamiento de las economías ilegales que mantienen vivos a los actores armados, haciendo factible su sostenida reproducción?

El narcotráfico, en particular, ha quebrado desde lo profundo más de una nación latinoamericana. Frente a la triste realidad de ser hoy la región más violenta del planeta, el clamor por la paz se ha erigido en consigna regional que compete a casi todos sus países, no solo a Colombia por su guerra interna. La búsqueda de la paz es un propósito regional. Frente a

¹⁰ Los PDET atrás mencionados y los PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos).

esa condición, el poder de sociedad pasa por la constitución de un bloque latinoamericano capaz de modificar la política de guerra hoy imperante a nivel mundial. Se trata, no cabe duda, de una labor de largo plazo.

A modo de cierre, invocamos una paz armada desde abajo, una paz dotada de conciencia de sí y del poder que tiene en sus manos la sociedad. Como se resaltó a lo largo de este prólogo —y como destacan las páginas del libro que comienza en la página que sigue—, la paz adquiere uno de sus resortes en el territorio siguiendo las singularidades que lo constituyen. Desde los mundos de vida puestos en acción en comunidades y localidades se abren paso modos diversos de concebir y hacer la paz. Es la fórmula del título *Paces desde abajo*, es la consigna que nos guio...

¡La sociedad debe tomarse la paz!

Bogotá, abril de 2021

Introducción

John Jairo Uribe Sarmiento
Iokiñe Rodríguez Fernández
Jairo Baquero Melo

La paz se construye, esto es, se llena de contenido y se convierte en acción, a través de un proceso conflictivo, dinámico, complejo, en el que múltiples actores, escenarios, temporalidades y niveles de decisión confluyen, se tensionan, se disuelven. No existe, por lo tanto, una sola idea de paz, ni, obviamente, una única manera de promoverla y practicarla. A la exploración de esta diversidad se dedica el presente libro. Pero la multiplicidad de paces remite a la diversidad de las contiendas que se expresan en cada territorio, invoca, entonces, la interacción de los poderes locales, regionales, nacionales y globales, una interacción compleja en la que al mismo tiempo se pueden observar sinergias y articulaciones, así como confrontaciones y negaciones.

La paz involucra al futuro. Muchas organizaciones y comunidades se esfuerzan por crear su propio tiempo, esto es, por gestar nuevas posibilidades, por desmarcarse de un pasado determinado por los actores armados, por crear un presente que les pertenezca, en fin, por generar alternativas frente al control social que sobre ellos han ejercido (y en algunos casos ejercen todavía) los actores violentos. En este sentido puede entenderse la paz como un ejercicio de libertad: libres para pensar, para decidir, para salir de casa, para hablar con los vecinos, para gestionar proyectos, para educar a los hijos, para cultivar, para sanar, para el agua, para los páramos y las selvas.

De ahí que la paz supone una compleja relación entre el orden social y la administración de los conflictos. Cada paz implica una cierta distribución de los costos y beneficios de la actividad social. Esta puede condenar a

unos a pagar los efectos negativos de la actividad económica, como la tala de árboles, el deterioro de las fuentes de agua, la disposición de las basuras, la negación de su cosmovisión, la destrucción de sus oportunidades. Cabe preguntar, entonces, a quién beneficia la paz, cómo se concibe, qué alternativas emergen y quiénes pueden ser los perdedores en cada caso. En esta dirección, cabe recordar que cierta literatura internacional ha puesto en evidencia que algunos procesos de paz no han mejorado la situación de las mujeres, ni de comunidades oprimidas por actores armados (Moola, 2006; Paarlberg-Kvam, 2019; Mac Ginty, 2008, 2010; Roberts, 2011), sobre todo cuando estos han logrado sostener sus privilegios luego del silenciamiento de los fusiles. Así que la guerra proyecta sus sombras en la construcción de la paz. Sin embargo, las resistencias y las dinámicas de supervivencia desplegadas por las comunidades también pueden afectar las violencias, por lo menos a nivel local, por ejemplo, cuando se movilizan para impedir que sean tratados como elementos de su actividad política armada, cuando se resisten a cumplir algunas de las órdenes que reciben; así, en Herrera, un corregimiento de Rioblanco (en el sur del Tolima), se realizó una marcha para no apoyar un paro armado organizado por las FARC. Este tema ha sido poco tratado en la literatura colombiana, más preocupada por las dinámicas de las violencias y por los modos como estas se han reciclado o se pueden reciclar.

El caso colombiano ofrece ejemplos de ambos procesos: existe una importante riqueza de propuestas locales que han recogido sus experiencias de supervivencia, resistencia y poder transformador en lo que hoy son alternativas de paz en pleno desarrollo, pero también se encuentran las formas de violencia que reciclan las prácticas de las guerrillas, los grupos paramilitares, las fuerzas armadas legales y los carteles narcotraficantes. Las guardias indígenas y afro que han emergido en Colombia en las últimas décadas (sobre todo en Cauca) son un buen ejemplo de las resistencias que se han ido tejiendo en un escenario de reproducción de ciclos de violencia vinculados con la producción y comercialización de drogas. Como veremos en esta obra, la gestión de los territorios ancestrales ha rearticulado las dimensiones de seguridad, identidad y medio ambiente como una de las múltiples formas que adquieren las dinámicas comunitarias para construir paz por fuera de los marcos hegemónicos de control y desarrollo territorial.

Sin embargo, es necesario problematizar la relación entre las paces locales y las estrategias nacionales, en tanto que las primeras no siempre encuentran

el apoyo y los recursos necesarios para desarrollarse, ni las segundas niegan toda iniciativa comunitaria. Un camino alternativo remite a la implementación de políticas de construcción de paz territorial desde el Estado, bien a partir de la formulación de los PDET en diferentes partes del país, bien a partir de las políticas de consolidación que se han venido tejiendo en algunas zonas, como en el sur del Tolima. Pero para conocer la efectividad de estas nuevas políticas públicas de construcción de paz es necesario examinar en detenimiento cómo se institucionaliza la paz, prestando atención a los diseños institucionales y a los mecanismos de participación usados, así como a las diversas estrategias de respuesta que despliegan las organizaciones y comunidades locales para hacer valer sus propias visiones de paz.

De igual forma, es necesario estudiar y dar visibilidad a la extraordinaria fuerza de las voces comunitarias, su capacidad para recrear sus territorios, sus vínculos, sus memorias, sus proyectos, a partir de las secuelas de la guerra, incluso a pesar de los diseños institucionales de paz. Esas secuelas no solo tienen que ver con el tamaño del despojo, ni con las dimensiones del dolor y el sufrimiento, sino que se relacionan con la manera como el Estado ha definido a los pobladores de los territorios más afectados por el conflicto, por ejemplo, como poblaciones en zona roja, objetivo de políticas contrainsurgentes, en fin, como comunidades que requieren ser reeducadas e integradas al orden nacional, a la legalidad e institucionalidad. Con todo, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los cafeteros y muchos otros construyen versiones propias de paz: paces ambientales, con rostro y manos de mujeres, paces productivas, todas ellas reelaboran las fronteras entre lo público, lo privado, los hombres, las mujeres, las edades, lo propio y lo externo. Este enorme esfuerzo creativo merece reconocimiento, solidaridad y apoyo, pues no solo son ejemplo de dignidad, sino que contribuyen a enriquecer los imaginarios nacionales, enriquecen la concepción de lo que somos como país, amplían el horizonte de lo que podemos ser, crean oportunidad de futuro.

Este texto busca explorar la multiplicidad de procesos regionales de construcción de paz con especial atención a las paces desde abajo y las condiciones que las hacen posibles.¹ En síntesis, son tres los ejes analíticos que nos permiten abordar los procesos regionales de construcción de paz:

¹ De un lado, existen condiciones que a un tiempo posibilitan y limitan el quehacer de las organizaciones. De otro lado, las organizaciones construyen sus procesos, y pueden incluso superar tales condiciones, crear su propio mundo.

1. El lugar que ocupa cada territorio en las economías de guerra: fundamentalmente se trata de establecer si este hace parte de zonas en disputa (dada la importancia de los recursos para los actores armados), es decir, si este es un espacio dominado por un actor violento, o si, por el contrario, poco importa para el desarrollo de las acciones bélicas establecidas por los actores en disputa.
2. La fortaleza de los tejidos sociales supervivientes/resistentes: esta fortaleza se relaciona con la existencia de organizaciones durante los períodos de confrontación más intensos y con el nivel de autonomía de dichas organizaciones frente a los actores armados legales e ilegales. En efecto, el control territorial que despliega un actor armado remite al control de las organizaciones presentes en dicho lugar. En algunos casos, estas fueron ‘borradas’ al ser consideradas como auxiliadoras del enemigo; en otros, fueron duramente golpeadas y controladas tanto para amedrentar a la población como para limitar su quehacer.
3. El tipo de relación con la institucionalidad estatal, especialmente con la dedicada a la paz: las políticas de paz pueden, a un tiempo, crear oportunidades para las comunidades y limitar su quehacer, silenciando, invisibilizando e incluso excluyendo algunas de sus reivindicaciones, problemáticas y propuestas. En efecto, las políticas, a pesar del reconocimiento formal de los derechos de la población, promueven un cierto tipo de orden social basado en las regulaciones estatales, así como en el alineamiento de los territorios con las perspectivas de desarrollo definidas a nivel nacional. Este reconocimiento/alineamiento opera también sobre la necesidad de incrementar la legitimidad del aparato estatal en poblaciones que desconfían del Estado, pero también de un Estado que desconfía de tales poblaciones por considerarlas cercanas al enemigo.

En forma esquemática puede plantearse que cuanto menos estratégico sea un territorio para la obtención de recursos requeridos por un actor armado ilegal² es más probable que existan organizaciones autónomas, capaces de

² Esto no quiere decir que los actores armados se definan como organizaciones puramente codiciosas, sin objetivos políticos o reivindicaciones. Sin embargo, suponer que se trata de

aprovechar las oportunidades promovidas por el Estado y de contrarrestar los efectos negativos de los modelos de desarrollo que a través de este se despliegan. Cabe aclarar que este esquema no es determinista ni considera todos los factores posibles. De hecho, pueden existir organizaciones cooptadas por las dinámicas clientelistas, poco autónomas, débiles frente a las lógicas estatales, en territorios muy poco afectados por el conflicto. Al contrario, pueden existir organizaciones fuertes que enfrentan condiciones muy adversas. Estos casos no destruyen el valor analítico de los ejes propuestos, ni su capacidad heurística, o su utilidad para abordar otros casos. En efecto, no se pueden abordar las propuestas de paz regionales sin considerar cómo estas se han articulado a los circuitos culturales, económicos y políticos nacionales y globales.

Algunas zonas del sur del Tolima, por ejemplo, al aglutinar campesinos y organizaciones con orientación comunista que se refugiaron allí por efecto de la Violencia, no lograron articularse al orden bipartidista del Frente Nacional, mientras que otras se vincularon a dicho orden a través de su pertenencia al Partido Liberal. Esto creó una dinámica de exclusión y de conflicto: marginación de las localidades insurgentes, conflicto entre unas y otras, esto es, entre los ‘limpios’ (guerrillas vinculadas al Partido Liberal) y los ‘comunes’ (de orientación comunista). Para los años 1980 y 1990, la confrontación se transformó de modo que los comunes, reorganizados desde 1964 en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y los limpios, que se reorganizan primero en el Rojo Atá, luego en una Convivir y finalmente en el Bloque Tolima (con el apoyo de la casa Castaño), mantuvieron una confrontación violenta que se agudizó al punto de que a inicios del siglo XXI se desataron masacres, bombardeo a poblaciones con cilindros y desplazamiento de miles de personas (Aponte, 2019; Barros y Uribe, 2019). Toda esta transformación se dio de la mano del auge y la decadencia del cultivo de amapola y comercialización de la ‘mancha’. Cuando su precio baja y el negocio desaparece, una serie de factores se conjugan para que este no sea sustituido por el cultivo de coca: la decisión de las FARC de mantener una retaguardia estratégica en el marco de su plan de guerra para cercar a Bogotá; su intención de mantener a raya a los grupos paramilitares, que,

entidades completamente altruistas, en las que no están en juego intereses, conflictos y dividendos, es iluso.

desde su perspectiva, tendrían mayor interés en la región con el desarrollo de una economía cocalera; la persistencia de comunidades interesadas en el café; incluso cierto apoyo estatal y de la cooperación internacional para desarrollar una economía cafetera. Así que, a pesar de que entre 1985 y 2016 se registraron en los cuatro municipios del sur del Tolima más de cien mil víctimas, producto de una intensa disputa entre todos estos actores, en el territorio se desarrollaron organizaciones que lograron hacerse un lugar, construir una historia de supervivencia, desarrollar proyectos sociales y económicos, e incluso resistir a los actores armados. Estas organizaciones pueden recoger hoy su propio proceso tanto para transformar su territorio como para proyectar su experiencia a otros escenarios.

Así que las paces construidas desde los territorios son resultado de la interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas de autonomía local. Los capítulos que componen esta publicación amplían, profundizan y problematizan, cada uno a su manera, estos ejes. Como el lector verá, cada capítulo aborda con mayor énfasis uno u otro asunto, pero, en conjunto, se puede obtener un panorama muy rico de los modos como se construyen las paces locales.

El libro pretende contribuir a crear una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en Colombia (con especial énfasis en el departamento del Tolima). Así que, mientras la paz se ha venido encasillando como un proceso de estabilización que se limita a los asuntos de justicia, reparación y reincorporación, a través del texto se analizan los diversos modos como las comunidades locales vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

Es claro que todas estas prácticas no se limitan al silenciamiento de los fusiles, a la reincorporación de los combatientes, a la integración de mercados y al funcionamiento del Estado, sino que apuntan a la re-creación de otras relaciones sociales, de otros modos de actuar en la vida cotidiana, de otras formas de lidiar con el pasado, de otras maneras de construir escenarios y de gestionar el futuro.

El libro pretende dar cuenta de estos procesos, a través de los cuales el desescalamiento de actividades bélicas ha motivado la creatividad de organizaciones y comunidades en el país. Sin embargo, es necesario prestar atención a las tensiones, problemas y limitaciones que esos procesos enfrentan, por ejemplo, la aparición de nuevos ciclos de violencia, el modo como

el Estado interactúa con las comunidades, las desventajas para vincularse a circuitos económicos, el clientelismo, el patriarcado, la exclusión endémica.

El origen de la obra

Esta publicación surgió como resultado de un diálogo entre dos proyectos de investigación actualmente en marcha en Colombia sobre las diversas maneras como actores locales abordan la construcción de paz territorial en el contexto previo y posterior al Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado colombiano en 2016. Estos son: a) el proyecto “Escuela, territorio y posconflicto: construyendo una cultura de paz local en el sur del Tolima”, desarrollado por la Universidad de Ibagué, Eureka Educativa de Colombia y la Universidad de East Anglia del Reino Unido; y b) el proyecto: “Conocimientos y saberes de comunidades y organizaciones sociales en el sur del Tolima y occidente del Huila como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles”, realizado por la Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué, ambas de Colombia.

“Escuela, territorio y posconflicto” es un proyecto de investigación participativa dirigido a apoyar la paz sostenible en el sur del Tolima, colaborando con maestros/maestras, estudiantes y miembros de organizaciones comunitarias de los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Participan como coinvestigadores maestros de un total de ocho escuelas (dos por municipio) y líderes de ocho organizaciones comunitarias, lo que hace que el equipo de investigación, en su conjunto, sume más de 100 personas entre investigadores del equipo coordinador (de la Universidad de Ibagué, de la Universidad de East Anglia y Eureka Educativa), maestros y líderes.

El fin último del proyecto es ayudar a generar desde el espacio escolar y comunitario propuestas que permitan consolidar procesos de construcción de paz territorial desde lo local. El proyecto ha sido imaginado desde dos temas vertebrales: por un lado, la vida en la escuela y el conflicto armado; y, por otro, la construcción desde lo cultural-territorial de una visión compartida de futuro. Así mismo, el proyecto está siendo abordado a través de dos miradas sobre la construcción de paz: una que se pregunta por cómo el conflicto ha impactado en la escuela y qué transformaciones ha provocado en el ámbito escolar; y otra que se interroga por la manera en que las organizaciones comunitarias han construido/construyen paz en medio del conflicto.

En este texto ponemos el foco en la segunda pregunta de investigación: cómo las organizaciones construyen paz en medio del conflicto. La respuesta a la primera pregunta de investigación es abordada por Lozano *et al.* (en imprenta) en una publicación aparte.

Por su lado, está el proyecto “Conocimientos y saberes de comunidades y organizaciones sociales en el sur del Tolima y occidente del Huila como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles” (Colciencias/Minciencias, Contrato 80740-180-2019). Este aborda los modos como las comunidades locales, por medio de los saberes y conocimientos de diversos orígenes y desde varios actores, construyen territorios de paz. Los saberes ofrecen herramientas a las comunidades para producir nuevas propuestas de configuración territorial, teniendo en cuenta que dichos territorios han estado en disputa a través del conflicto armado y son objeto de intervención para políticas de desarrollo. La relación entre saberes y territorios de paz se encuentra atravesada por dinámicas de poder que afectan las formas como diversos actores piensan el territorio y habitan sus espacios cotidianos. Se analizan los conflictos que se despliegan, así como las estrategias de negociación y concertación que se promueven. El proyecto se enfoca en los municipios de Planadas, Neiva, Coyaima, Natagaima y Purificación, analizando procesos como la expansión del café en el sur del Tolima y occidente de Neiva, y las dinámicas y conflictos en relación con la construcción del distrito de riego del Triángulo del Tolima.

Al diálogo inicial entre estos dos proyectos se le fueron sumando otras experiencias que dan aportes muy importantes para hacer un balance sobre los desafíos y oportunidades actuales para la construcción de la paz desde abajo en las diferentes regiones del país. En efecto, se cuenta con resultados de un trabajo de maestría presentado a la Universidad de East Anglia, un trabajo de investigación posdoctoral presentado a la Universidad de Giessen (Alemania) y un proyecto apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz).

Con todo, la obra no pretende ofrecer un panorama completo de lo que ocurre en Colombia, por esta razón no se incluyen capítulos de Putumayo, Chocó, los Montes de María o el Catatumbo, regiones que cuentan con una importante historia de resistencia comunitaria y conflicto bélico. De un lado, los casos seleccionados responden a los diálogos desplegados entre los investigadores participantes; del otro, creemos que un trabajo de tal

envergadura no solo es necesario, sino que merece un espacio propio y de un esfuerzo mayor, que esperamos poder emprender en el futuro.

Estructura del libro

El texto se divide en tres partes: en la primera, titulada “Las discusiones teóricas y metodológicas de la paz construida desde lo local y regional”, se presentan los debates planteados alrededor de la paz liberal, la construcción del Estado y los límites y condiciones que crean los marcos institucionales, de un lado, así como las estrategias que las comunidades despliegan para lidiar con esas condiciones. También se ofrece una discusión sobre el papel de la investigación en la construcción de la paz, señalando algunos planteamientos sobre la investigación acción transformadora y el papel de los actores locales como sujetos (y no meros objetos) de la investigación.

En la segunda, “Marcos sociales, políticos, económicos en los que los actores locales construyen paz”, se discuten las tensiones que los diseños institucionales generan en lo local. Se ha identificado, por ejemplo, que la construcción de la estatalidad en algunas zonas del país se encuentra atravesada por la tensión seguridad-legitimidad, esto es, por la tarea de destruir las bases sociales del enemigo y el reconocimiento de la ciudadanía de aquellos que se han encontrado en contacto con este (lo que los convierte en potenciales informantes, o simpatizantes de la guerrilla). Se trata de una cuestión de legitimidad (de confianza ciudadana en la autoridad), pero en un contexto de desconfianza del Estado frente a ‘sus’ ciudadanos (en el despliegue de acciones contrainsurgentes). Se podría plantear del siguiente modo: “Confía en mí —dice el Estado—, pero yo no confío en ti”. Así, desde la perspectiva estatal, los ciudadanos locales requieren de una cultura de la legalidad en la que acepten la ley (pues se considera que se han acostumbrado a la autoridad guerrillera y aceptan actividades ilegales), de articulación al mercado (infraestructura vial, asistencia técnica, etc.), de participación ciudadana directa (en comités de políticas locales) y de participación electoral. Como se desprende de lo planteado, estas acciones crean oportunidades (vías, proyectos productivos, participación en el plan de desarrollo) y problemas (como estigmatización, persecución de líderes, invisibilización de los abusos de la fuerza pública, etc.). Además, este enfoque coloca en segundo plano asuntos ambientales y de género.

Y en la tercera (quizá la más importante), “Voces, estrategias y propuestas desde abajo”, da cuenta de las diversas maneras como los actores locales y regionales crean su propio mundo (crean su propia paz), lidiando e, incluso, superando los condicionamientos estructurales, pero también acomodándose o reproduciendo dichos límites y directrices. Por ejemplo, el poder comunitario, como poder transformador de las mujeres, jóvenes y cafeteros, evidencia la creatividad de los habitantes del sur del Tolima para crear la paz desde la paz, para ir más allá de las políticas de estabilización, tejiendo, reinventándose. La identidad y la acción se articulan de un modo diferente: se trata de ser jóvenes campesinos alternativos, de ser mujeres de otra manera, de ser cafeteros que van más allá, pero también de guardias indígenas y cimarronas.

La primera parte cuenta con tres capítulos. El primero, denominado “Legitimidades en disputa: la construcción estatal en escenarios de posconflicto”, aborda la discusión sobre el papel del Estado en la construcción de la paz. Para ello analiza una amplia literatura que problematiza la relación entre los proyectos liberales de pacificación y la participación de organizaciones ciudadanas. Allí se ofrece una crítica a los procesos que ‘desde arriba’ asumen dicha construcción, pues estos suelen reproducir las relaciones de poder vigentes durante los períodos de violencia, en la medida en la que subestiman las relaciones informales, se centran en el Estado y promueven dinámicas de mercado que suelen reproducir las inequidades.

El segundo capítulo, “El papel de la investigación acción transformadora en la construcción de paz territorial”, profundiza en el rol que puede tener la investigación como motor de cambio en la transición de la guerra a la paz cuando la investigación se hace con los propios actores que han formado parte de las dinámicas del conflicto. En primer lugar, expone algunos elementos conceptuales alrededor de la construcción de paz territorial y el papel que puede jugar la investigación acción transformadora en este proceso. Luego, define este enfoque, con un foco en el proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”. Posteriormente, se presentan en detalle las metodologías desarrolladas en el proyecto para investigar con las organizaciones sus procesos de construcción de paz. A partir de aquí se analizan los aportes que les ha significado a las organizaciones el proceso de investigación en voz de las propias organizaciones comunitarias; y, finalmente, brinda reflexiones finales sobre los impactos a largo plazo del proyecto.

El tercer capítulo, “Paces locales y estrategias transformadoras: más allá de la paz dominante en el sur del Tolima”, responde a la pregunta ¿qué formas y expresiones adquieren las paces que se construyen desde la base? Para ello critica la paz liberal al considerarla colonialista, esto es, que excluye las propuestas locales al concebirlas como inferiores. La paz liberal, hegemónica, se puede considerar como un proyecto civilizatorio que desconoce los procesos locales: “Contrariamente a las disquisiciones coloniales, la narrativa de la paz descolonizadora afirma que la paz ya existe a nivel local y que no necesita construirse de acuerdo con los valores y entendimientos de un entorno extranjero”. El capítulo aboga por la necesidad de este reconocimiento y ofrece un panorama de las paces locales en el sur del Tolima.

La segunda parte del documento cuenta con tres capítulos: “Construcción de la estatalidad contrainsurgente en el sur del Tolima durante el siglo xxi” ofrece un análisis de las políticas pro paz que se han desplegado en este territorio por los últimos 20 años. Aquí se despliegan las definiciones institucionales sobre las poblaciones locales, al igual que el tipo de relaciones que generó la búsqueda de legitimidad estatal. El capítulo brinda un panorama de las tensiones que esta intervención produjo en el territorio.

El capítulo “Conocimientos, saberes y territorios. Trayectorias analíticas y exploraciones empíricas en el sur del Tolima y occidente de Neiva” plantea una discusión alrededor del papel de los saberes locales en la construcción de los territorios. Para ello muestra diferentes referentes teóricos, en los que se destacan las relaciones de poder que operan en la gestión del conocimiento y del espacio. A partir de aquí presenta las configuraciones territoriales del sur del Tolima y del occidente de Neiva, en las que resalta la tensión entre diversos modelos de desarrollo (los promovidos desde arriba y aquellos impulsados por los actores locales).

El capítulo “El Estado y la construcción de paz territorial en San Vicente del Caguán y Tumaco (Colombia)” analiza los procesos de construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial en un municipio del Caquetá y otro de Nariño, un mecanismo de construcción de paz derivado del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC. También se ilustra que las zonas de conflicto antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no eran caóticas. Más bien, prevalecían dos tipos de órdenes: la rebelocracia y la gobernanza comunitaria. Por lo tanto, la cuestión del rol del Estado en la construcción de paz territorial debe examinar su interacción

con aquellas estructuras políticas locales al poner en práctica acciones que buscan incrementar la participación local, como los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). En el escrito se trata de ilustrar que la interacción entre el gobierno y las estructuras comunitarias a través de los PDET carecía de buena participación; en cambio, otras iniciativas dirigidas por las organizaciones locales y religiosas muestran una agencia participativa significativa. A pesar de que la consolidación de la paz local es prometedora, tiene barreras, derivadas de la falta de presencia del Estado.

La tercera parte cuenta con seis capítulos. El primero de ellos se titula “Paz es que a las mujeres se nos reconozca todo, que podamos decir: ¡Somos libres!’. Una apuesta hacia la construcción de una tejeduría de paces territoriales justas al género. Caso Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz en el sur del Tolima”. Aquí se abordan las experiencias y procesos de construcción de paz desplegados por mujeres en el sur del Tolima. De acuerdo con las autoras, a partir de sus vivencias es que “se activa un proyecto político colectivo, que requiere de la unión y del permanecer juntas. Por lo tanto, la construcción de paz está directamente relacionada con el objetivo de transformar el pensamiento de las mujeres y las familias rurales: que la mujer no debe dedicarse exclusivamente al ámbito de lo doméstico (como nos han enseñado), sino que debe hacer parte del mundo social, participar, gestionar lo político y lo productivo”. El texto analiza el camino hacia el empoderamiento de las mujeres mediante la transformación de la identidad, del reconocimiento de las diversas formas de ser mujeres en el territorio, y desde las cuales es posible construirlo y ejercer ciudadanía.

El segundo capítulo de esta tercera parte se intitula “Mujeres indígenas, justicia y paz territorial”. Pese a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en ciertas zonas la guerra continúa su curso, ahora liderada por actores armados posconflicto denominados Grupos Armados Posdesmovilización (GAP), que se enfrentan para controlar territorios antes ocupados por la mencionada guerrilla. Estas áreas son en su mayoría zonas de frontera, pobres, con escasa presencia estatal y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Se trata de territorios étnicos, como es el caso del territorio colectivo del pueblo indígena awá, en el cual durante los últimos 20 años se ha desarrollado la guerra de una manera muy intensa, dejando a su paso innumerables violaciones a sus derechos humanos y colectivos, siendo las mujeres awás uno de los grupos más afectados.

Tomando en cuenta el anterior contexto y haciendo énfasis en las variables de género, adscripción étnica y clase social, se pretende vislumbrar cómo estos factores inciden directamente en el acceso a la justicia, la verdad, las garantías de no repetición y la construcción de paz territorial, evidenciando además cómo la persistencia del conflicto y de las desigualdades sociales estructurales intensifica e incide en la denegación de justicia, generando un caldo de cultivo para la reproducción y recreación de nuevos escenarios de violencia que afectan principalmente a las mujeres y niñas indígenas, quienes ven disminuida su capacidad de agencia y participación en la concreción de iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social comunitario.

En el capítulo “Lo que se teje mientras se teje: sanación, reinterpretación desde el presente y participación política. El caso de Asomeht en el sur del Tolima”, las autoras exponen el proceso llevado a cabo por un grupo de mujeres en el corregimiento de Herrera, municipio de Rioblanco, quienes, por medio del bordado y confección de un traje propio, han reconstruido su historia y proyectado un quehacer político que le aporta a la construcción de la paz desde sus propias vivencias y estrategias, tal y como lo recogen las investigadoras a través de un testimonio de una de las líderes del proceso: “Tenemos que abrir la política a las mujeres y los jóvenes. Nosotros ya hacemos política. Podemos y debemos llegar a más personas, especialmente combatir el machismo en todos los espacios, porque, por eso, muchas veces las mujeres pierden el interés en participar en espacios políticos. Hay que bajar la política a lo cotidiano” (María Escilda Ramírez, Asomeht, 2019).

El capítulo “Las guardias indígenas y cimarronas y sus aportes en la construcción de paz en el Cauca” aborda la historia, trayectoria, estrategias y tensiones que experimentan las guardias indígenas y cimarronas en el Cauca. Esta experiencia se desarrolla en medio de la intensificación de la violencia en los últimos años y se presenta como un esfuerzo de identidad, dignidad y saber local, capaz de resistir e, incluso, incidir en el conflicto. De hecho, “las guardias han tenido un rol crecientemente visible en la minga; estos cuerpos organizados de comuneros, encargados de mantener el orden en las movilizaciones, coordinar aspectos logísticos de los desplazamientos y participar de la coordinación entre organizaciones sociales participantes de la minga se han constituido en una de las imágenes representativas de las luchas indígenas, campesinas y afrodescendientes de la última década”. Las guardias representan entonces un actor fundamental en los procesos

de construcción de paz, tanto desde la movilización hasta el ejercicio de autonomía territorial.

El capítulo “Paz ambiental y juventud alternativa: un aporte desde la experiencia de la Fundación Protectora Ambiental Planadas Tolima” da cuenta de la experiencia de Fupapt. Esta es una organización de jóvenes ambientalistas que desde el año 2014 ha dirigido acciones encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente en el municipio de Planadas (Tolima, Colombia). En el marco del proyecto de investigación “Escuela, territorio y posconflicto”, la entidad propuso dos conceptos útiles para explicar su quehacer organizativo y visión de paz, estos son: paz ambiental y juventud alternativa. Reconociendo las dificultades propias de narrar la experiencia de los otros, este capítulo relata ambos conceptos según lo expresado por la Fundación durante los talleres de investigación. También, con el objetivo de enriquecer el relato general del texto, se pone en diálogo la narrativa de Fupapt con un recuento propio sobre la situación reciente de conflicto y paz en la región del sur del Tolima, así como con aportes teóricos construidos desde la academia de los conceptos de paz ambiental y juventudes rurales.

Finalmente, en el capítulo 12, “Formación entre caficultores tolimenses: una herramienta para la superación del conflicto armado”, el autor exalta los proyectos productivos y modelos asociativos desplegados por los caficultores en el territorio, y toma como eje central la relación entre productividad y sostenibilidad ambiental. El texto profundiza en las estrategias pedagógicas gestadas por los campesinos, abordándolas como una herramienta para superar las políticas neoliberales aplicadas a la agricultura. Luego de presentar el contexto general, plantea “la formación campesino a campesino como una herramienta para hacerle frente a los problemas productivos del pequeño y mediano productor”. A partir de este proceso se invita a reconocer las particularidades del territorio, especialmente los procesos formativos pensados desde y para los campesinos.

Apuntes finales: desde abajo, ni románticos ni ingenuos

Leer las paces desde abajo no implica ignorar lo que ocurre arriba. No se trata de oponer las concepciones locales frente a las perspectivas institucionales que se agencian desde los aparatos estatales o desde las instancias de cooperación que operan desde lo alto. No se pretende simplificar maniqueamente

la realidad, colocando a los actores locales del lado de lo bueno (lo anti-liberal) y del lado del mal a la paz liberal que promueve la economía del mercado y la democracia occidental. En efecto, esta es una falsa dicotomía (Hirblinger y Simons, 2015; Kumuyi, 2017; Mac Ginty, 2010; Paffenholz, 2015; Rigual, 2018), existen ejemplos de dinámicas liberales que han creado oportunidades para comunidades locales, incluso para defenderse frente a los abusos de otros actores locales y regionales que emplean la violencia.

En esta dirección, es importante subrayar que los espacios y dinámicas locales se desarrollan en relación con otros niveles y esferas territoriales, a través de una multiplicidad de vínculos que no se reducen a la simple confrontación; pero reconocer esto no significa que la lectura desde abajo pierda todo sentido. De hecho, uno de los aspectos clave que recorren el libro se refiere a las diferencias de poder entre unos y otros, a la necesidad de reconocerlas para discutirlos y problematizarlos. Por esta razón, ‘desde abajo’ no supone una postura acrítica ante las comunidades. Implica, por el contrario, contribuir a un cambio de ángulo frente al análisis de la paz en Colombia: no tanto desde la guerra y sus consecuencias, sino desde los actores que la han resistido y hoy se atreven a promover su propia estrategia. Como se ha mencionado, las dinámicas locales no se explican por sí solas, allí concurren las economías de guerra, las lógicas estatales y la fortaleza de las organizaciones, pero estas relaciones distan de ser mecánicas y lineales.

Lo anterior no quiere decir que la discusión sobre los modos como los ciclos de violencia se reproducen sea inapropiada o innecesaria. Significa que este ángulo no es suficiente, que las voces locales tienen mucho que plantear frente a la manera como entendemos la paz o como construimos futuro. Se requiere profundizar en ellas, abrir espacios para que otras más se sumen, para comprender cómo se forman, se articulan y vinculan conflictivamente a los circuitos económicos, culturales y políticos regionales, nacionales o globales.

Puede ser cierto que la paz desde lo local cuente con ciertas limitaciones conceptuales (Heathershaw, 2013; Hirblinger y Simons, 2015; Neufeldt et al., 2020; Paffenholz, 2015; Rigual, 2018), por ejemplo, falta claridad sobre lo que lo ‘local’ significa, un concepto que puede ser usado por diferentes actores políticos para promover sus propias agendas (incluso contra las propias comunidades que pretenden representar). Pero los trabajos que aquí se reúnen no solo pueden contribuir a enfrentar esas limitaciones, también

aportan al análisis de las tensiones alrededor de la paz, de las estrategias a través de las cuales diferentes actores locales las afrontan.

El recorrido que se ha presentado pone sobre el tapete la necesidad de reconocer otras formas de construir la paz, más allá de las narrativas oficiales y de los arreglos institucionales centrados en la reincorporación, la reducción de la violencia y la reparación a víctimas. Estas actividades son, claro, importantes, pero no suficientes. Las tensiones regionales que aquí se analizan evidencian que, a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y comunidades han logrado construir múltiples propuestas que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la academia, con los medios de comunicación, con activistas, con la sociedad colombiana, con la comunidad internacional. Los autores esperamos que este sea un aporte en esta dirección.

Referencias

- Cohen, S. B. (2014). The challenging dynamics of global North-South peacebuilding partnerships: practitioner stories from the field. *Journal of Peacebuilding & Development*, 9(3), 65-81.
- Goodhand, J., & Walton, O. (2009). The limits of liberal peacebuilding? International engagement in the Sri Lankan peace process. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 3(3), 303-323.
- Heathershaw, J. (2013). Towards better theories of peacebuilding: beyond the liberal peace debate. *Peacebuilding*, 1(2), 275-282.
- Hirblinger, A. T., & Simons, C. (2015). The good, the bad, and the powerful: representations of the local in peacebuilding. *Security Dialogue*, 46(5), 422-439.
- Kumuyi, L. O. (2017). Lost in implementation? Where is gender in the Somali compact for peacebuilding and Statebuilding? *Journal of Peacebuilding & Development*, 12(1), 97-102.
- Mac Ginty, R. (2008). Indigenous peace-making versus the liberal peace. *Cooperation and Conflict*, (43), 139-163.
- Mac Ginty, R. (2010). Hybrid peace: the interaction between top-down and bottom-up peace. *Security Dialogue*, 41, 391-412.
- Mac Ginty, R. (2010). Warlords and the liberal peace: State-building in Afghanistan. *Conflict, Security & Development*, 10(4), 577-598.

- Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: a critical agenda for peace. *Third World Quarterly*, 34(5), 763-783.
- Moola, S. (2006). Women and peace-building: the case of Mabedlane women. *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, (69), 124-133.
- Neufeldt, R. C., Klassen, M. L., Danboyi, J., Dyck, J., & Zakka Bako, M. (2020). Gaps in knowledge about local peacebuilding: a study in deficiency from Jos, Nigeria. *Third World Quarterly*, 41(7), 1103-1121.
- Paarlberg-Kvam, K. (2019). What's to come is more complicated: feminist visions of peace in Colombia. *International Feminist Journal of Politics*, 21(2), 194-223.
- Paffenholz, T. (2015). Unpacking the local turn in peacebuilding: a critical assessment towards an agenda for future research. *Third World Quarterly*, 36(5), 857-874.
- Paris, R. (2010). Saving liberal peacebuilding. *Review of International Studies*, 36(2), 337-365.
- Rigual, C. (2018). Rethinking the ontology of peacebuilding: gender, spaces, and the limits of the local turn. *Peacebuilding*, 6(2), 144-169.
- Roberts, D. (2011). Beyond the metropolis? Popular peace and post-conflict peacebuilding. *Review of International Studies*, 37(5), 2535-2556.

Primera parte

LAS DISCUSIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA PAZ CONSTRUIDA DESDE LO LOCAL Y REGIONAL

Los capítulos que a continuación se presentan abordan discusiones respecto al papel de las comunidades locales en la construcción de la paz. De un lado, el análisis de la llamada paz liberal, entendida como una perspectiva hegemónica, para plantear sus límites y problemas. De otro lado, la discusión del papel de la investigación participativa en la construcción de la paz: ¿es posible que el proceso investigativo genere transformaciones o hay que esperar a la presentación de publicaciones y el desarrollo de estrategias orientadas desde el Estado o las entidades de cooperación?

El acento en lo local implica dar cuenta de los diversos modos como unos y otras tramitan las propuestas dominantes, un ángulo poco abordado en la literatura, centrada en la discusión de los mejores procedimientos y mecanismos para alcanzar un cierto tipo de Estado y un tipo de paz. Como los lectores podrán ver en las siguientes páginas, este ángulo plantea retos frente a las teorías liberales, pero también preguntas por los alcances y posibilidades de la actividad local. En consecuencia, ambos —los retos y las preguntas— invitan a interrogar por la imaginación política, por la capacidad de crear otras posibilidades, para ver más allá de los estrechos marcos conceptuales y operativos que se despliegan en los territorios.

Capítulo 1

Legitimidades en disputa: la construcción estatal en escenarios de posconflicto

John Jairo Uribe Sarmiento, Santiago Andrés Padilla Quintero,
Iokiñe Rodríguez Fernández, Ulrike Theuerkauf, Cristina
Sala Valdés, Nohora Isabel Barros Navarro, María del Pilar
Salamanca Santos, Mónica del Pilar Álvarez Bustos

Esquemáticamente, se puede plantear que gran parte de las investigaciones sobre la paz en Colombia se centran en las dinámicas de victimización y en la lógica del conflicto. En efecto, las series del Centro Nacional de Memoria Histórica parten de esta perspectiva, aun cuando han referido estrategias de resistencia local y mencionan numerosos casos de construcción de paz en medio de la guerra. La paz desde la perspectiva del conflicto, se define como un proceso de desarme, reintegración y reparación. Sin embargo, vienen emergiendo otras lecturas que enfatizan las capacidades de las comunidades locales para soportar, negociar e, incluso, oponerse a los actores armados (Salamanca y Uribe, 2019). En esta línea, la paz se propone como un proceso que implica la transformación de relaciones de poder y de conflictos que emergen una vez se silencian los fusiles (Mac Ginty, 2008, 2010; Roberts, 2011). Esta perspectiva abre espacios para concepciones que superan la llamada estatalización y *securitization* de la paz.

De hecho, los actores locales plantean la necesidad de construir una paz con el territorio, con el medio ambiente, entre géneros, etnias y grupos sociales diversos. No se trata de un esfuerzo por lograr que el Estado ‘llegue’ a las regiones más azotadas por el conflicto, sino del complejo proceso de construirlo. Se trata de reconstruir relaciones sociales, económicas, políticas,

culturales y ambientales, que obviamente incluyen los temas estatales, pero que no se limitan a estos. No se trata, hay que subrayarlo, de la paz construida desde arriba, sino de intentar una paz movilizadora desde abajo, desde los territorios.

A diferencia de la perspectiva centrada en el conflicto que concibe a los actores locales como víctimas, la que se centra en las resistencias/supervivencias destaca las capacidades locales para que a partir de ellas se construyan alternativas y propuestas (Buitrago, 2019; Salamanca y Uribe, 2019). Como se verá más adelante, esta perspectiva problematiza el papel que desempeña el Estado en la construcción de la paz. Ahora bien, este proceso remite a dos niveles de discusión: 1) cómo se concibe la paz, esto es, a qué tipo de orden social involucra, a quiénes incluye y cómo participan en ella; y 2) los problemas prácticos institucionales asociados a su construcción.

La primera dimensión (político-epistemológica) se encuentra atravesada por las críticas que se han formulado a la denominada paz liberal como estrategia hegemónica. La segunda (político-institucional) coloca sobre el tapete críticas relacionadas con la manera como se definen los denominados Estados frágiles o fallidos y cómo se construye la legitimidad en los procesos de paz. Ambos niveles se articulan y tensionan.

Dimensión político-epistemológica

Según Martín (2013), la paz liberal es un modelo de intervención estandarizado y homogéneo, que busca la transformación de factores políticos, sociales y económicos en contextos posbélicos. Tales transformaciones se articulan a partir de tres ejes: 1) democratización y participación política; 2) recuperación socioeconómica y liberalización; y 3) justicia transicional. La paz liberal implica la participación de un número diverso de actores que provienen de diferentes contextos (militar, civil, público, privado, etc.) y la especialización de estos actores en dimensiones distintas, lo que ha generado una división del trabajo en campo (unos se encargan de la gobernanza, otros de la liberalización, etc.).

Desde los años ochenta, las Naciones Unidas se han concentrado en la obtención de la paz liberal. La literatura crítica ha señalado la formación de un consenso en torno a ese modelo. Martín (2013) plantea que dicho consenso se encuentra compuesto por dos discursos: el primero sobre la

naturaleza de los conflictos como fenómenos endógenos y pospolíticos; el segundo entiende la intervención internacional como un tipo de ‘terapia’ que se aplica a un territorio para erradicar los problemas que ha traído el conflicto.

No existe, sin embargo, una definición canónica de paz liberal, con todo se pueden enumerar los valores centrales que la fundamentan: la primacía de lo individual, la creencia en la maleabilidad de los individuos y las instituciones, el énfasis en el pluralismo y la tolerancia, el respeto a la ley y la protección de la propiedad. Se trata del compromiso con los derechos individuales y la responsabilidad en el contexto de equidad en las oportunidades, el imperio de la ley, la libertad de expresión y asociación, la primacía de la economía de mercado y la selección de los mandatarios en elecciones donde participen varios partidos.

Martín (2013) categoriza a la paz liberal en tres visiones: la visión conservadora-realista, la ortodoxa-liberal y la emancipadora-transformadora.

La paz del vencedor se sustenta en la visión conservadora-realista de las relaciones internacionales y los conflictos, la cual se concentra en la necesidad de mantener ‘el orden’, en términos hobbesianos, es decir, en la necesidad de controlar individuos que son “lobos los unos para los otros” a través del Estado. Busca entonces la victoria militar como único medio para alcanzar una paz estable.

La paz institucional y constitucional se basa en la idea de la ‘gestión de los conflictos’ y se asocia a la visión ortodoxa-liberal. Por un lado, la paz institucional es aquella en la que los Estados aceptan de mutuo acuerdo un tipo de comportamiento según contextos normativos específicos. Por otro lado, la paz constitucional se refiere al mantenimiento de las leyes como garantes de la libertad de los individuos en un orden democrático, de libre mercado y cosmopolita.

La paz civil se centra en la agencia individual, la defensa de la ciudadanía y de la acción directa de los actores locales, y se asocia con una visión emancipadora. Persigue una paz que se funde en la justicia, la cohesión social y la transformación de los conflictos desde un enfoque *bottom-up*.

El consenso sobre la paz liberal combina todos estos elementos en función de las prioridades, valores e intereses de las instituciones promotoras. Se conforma así un ‘modelo o metadiscurso pragmático y elástico’.

Reformulaciones y críticas a la paz liberal

Ruiz-Giménez (2013) aborda los principales debates y prácticas sobre la construcción de la paz, así como de la llamada ‘paz liberal’, específicamente su despliegue en el continente africano. De acuerdo con él, durante los años noventa ocurrió “el fracaso de la paz liberal” (p. 20). En este período creció la insatisfacción con los modelos de intervención liberal y se los señaló como incapaces de frenar la violencia. En este punto nacen dos corrientes que piensan la construcción de paz a partir de las experiencias internacionales: en primer lugar, se encuentra la visión del *problem solving*, la cual defendía la pertinencia del discurso hegemónico, pero buscaba entender sus fortalezas y debilidades con el objetivo de mejorarlo. En segundo lugar, está la perspectiva crítica, que adopta una posición más radical frente a la paz liberal, definiéndola como parte de un mecanismo de gobierno del norte global para controlar el sur.

De manera similar, Lekha Sriram (2007) argumenta que el problema no es el modelo en sí, sino las condiciones de los países donde esta se intenta implementar y la forma de la intervención. Por ello, establece una serie de tensiones que deben ser superadas para llegar a la consecución de la paz según los valores liberales, entre estas están: la falta de coordinación de los actores internacionales, civiles y militares; la escasez de recursos para la agenda; y el enfoque *top-down* que mina la legitimidad de los intentos por establecer democracias.

A partir de la discusión del *problem solving*, se generaron los conceptos de apropiación local y gobernanza internacional. El primero se refiere a la apropiación de los actores locales de los procesos de paz para hacerla más sostenible y legítima, reducir la dependencia y facilitar la salida de los actores internacionales del proceso. El segundo se entiende como la necesidad de lograr que los actores internacionales gobiernen sobre los territorios que transitan a la paz, pues la situación de conflicto se refiere a la incapacidad de los actores locales para ‘gobernarse’.

Desde las perspectivas críticas, Mac Ginty (2010) menciona que la paz liberal favorece los intereses del norte global, señalando que su intervención se centra en el desarrollo de mercados y de democracias inspiradas en los modelos occidentales, fenómeno que va en detrimento de los intereses de los actores locales y de los países periféricos, ya que privilegia el liderazgo y los intereses de los Estados ‘desarrollados’, de las organizaciones internacionales

que controlan y de instituciones financieras globales. Vinculado a esto se encuentra la visión de la transformación de la paz liberal en neoliberal, una paz que desarrolla una reingeniería social agresiva que privilegia el sector privado sobre el bien común y que genera efectos negativos para los actores locales.

De otro lado, Courtheyn (2018) plantea que la paz “estado-centrada” (paz liberal) reproduce el racismo y el patriarcado, e invisibiliza nociones de paz alternativas. Define la modernidad como un proceso social y espacial que se desarrolla a través de relaciones de explotación centro-periferia. Frente a esto, el autor propone una perspectiva radical transrelacional que: 1) recupere la dignidad ecológica y 2) que se produzca por medio de movimientos sociales solidarios.

Desde una perspectiva similar, Mac Ginty (2008) contrasta la denominada paz liberal con perspectivas locales y tradicionales, de esa manera caracteriza la relación entre lo indígena y lo liberal como una relación tanto de tensión como de beneficio entre los actores locales e instancias internacionales involucradas en la construcción de la paz, en la que los primeros pueden estar interesados en lograr los recursos que los segundos ofrecen, mientras estos últimos buscan ganar reconocimiento, aceptación y participación. Las estrategias de participación promovidas por la paz liberal han sido objeto de críticas que plantean que se han convertido en una mera cooptación de élites locales que actúan en medio de los esquemas occidentales de intervención, asunto que termina conduciendo a soluciones tecnocráticas y simplificadas, aun cuando la participación sigue siendo considerada como positiva.

Sin embargo, el autor plantea fuertes críticas a la visión de la paz liberal, que se pueden resumir en tres puntos: 1) La cooptación de líderes que podrían construir una paz alternativa, de modo que comunidades, estructuras burocráticas e, incluso, ONG terminan promoviendo la perspectiva occidental dominante. Se destaca que la paz liberal no solo es una estructura burocrática, sino también un mecanismo de transmisión de ideas sobre cómo debe operar la sociedad, de modo que los agentes locales terminan convertidos en agentes receptores y transmisores de dichas ideas. 2) Los agentes promotores de la paz liberal están convencidos de su superioridad frente a otras concepciones y formas de organización, de forma que buscan superar los obstáculos locales para transformar a las sociedades en oasis liberales de derechos individuales, responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas,

democracia y respeto a la ley, pero la paz liberal también es neoliberal en el sentido de promover la mercantilización de la vida cotidiana, la austeridad en los programas de gobierno y la noción de que el mercado provee de la fuerza para la paz y la reconstrucción. 3) La estandarización del proceso de construcción de paz que ha minimizado los espacios para la construcción de una paz orgánica. En el nivel macropolítico, se refiere al monitoreo del cese al fuego, las negociaciones formales, la desmovilización, desarme y reintegración (DDR), las reformas al sector de seguridad, la reconstrucción de la capacidad de la sociedad civil, la realización de elecciones pos-Acuerdo de Paz, la reforma al servicio civil (a la burocracia), la promoción de la buena gobernanza y reconstrucción económica.

También menciona que en la construcción de la llamada paz liberal existe una ironía central: el uso de medios no liberales en la promoción de valores liberales, esto es, el uso de métodos conservadores centrados en la seguridad del Estado que dan poco espacio a la emancipación y participación popular. Así, se plantea que la seguridad es un prerrequisito de la libertad.

Con todo, no se debe exagerar la uniformidad de la paz liberal, pues esta ha sido modificada y enriquecida, entre otras, por la inclusión de medidas para la protección y promoción de los derechos humanos, y, en esta misma dirección, no debe subestimarse la agencia de los actores locales, ni en la guerra, ni en la construcción de la paz, ya que ellos han sido capaces de generar sinergias con las estrategias desarrollistas de los actores internacionales.

Paz local

De acuerdo con Mac Ginty (2008), las características centrales de la paz local son el consenso, la restauración del balance social, la reciprocidad y las relaciones armónicas entre los grupos. Se resalta la importancia de las relaciones de poder interculturales que pueden llevar a que una cultura imponga sobre otra su concepción de paz. Cuatro temas deben considerarse para conceptualizar lo indígena y lo tradicional: 1) uno y otro no son intercambiables, en efecto, lo tradicional remite a la herencia y a la larga duración, mientras que lo local no necesariamente es tradicional, pues puede crear o recrear estrategias que respondan a las nuevas condiciones y contextos; 2) no debe desarrollarse una defensa romántica de lo local o lo tradicional, dado que, en ocasiones, sus prácticas pueden reproducir condiciones de inequidad; 3) en esta misma dirección, la construcción de paz puede llevar

a que actores locales ‘inventen’ o manipulen tradiciones o estrategias locales para garantizar sus privilegios. De hecho, es necesario tener cuidado con la práctica colonialista de etiquetar algo como tradicional, pues de este modo se reproducen relaciones jerárquicas e inequidades, se reproducen relaciones coloniales; 4) es necesario tomar distancia del dualismo simplista que opone lo occidental frente a lo no occidental, dado que de esta manera se fortalece el imperialismo cultural, en efecto, no existen sociedades aisladas y homogéneas, de modo que es necesario observar las hibridaciones en los procesos de construcción de paz.

Mac Ginty (2008, 2010) plantea que la paz refleja las relaciones de poder prevalecientes. Ahora bien, incluso en el entramado institucional que sostiene la versión dominante, las propuestas tradicionales e indígenas tienen espacio. En todo caso, la colonialidad terminó imponiendo una versión de la paz, sostenida por una cosmovisión que destruye otras perspectivas. El autor presenta varios casos en los que coexisten mecanismos liberales (como la comisión de la verdad o mecanismos de justicia aplicados a los casos de graves violaciones de los derechos humanos) con estrategias locales y tradicionales orientadas a la articulación de actores diversos. Sin embargo, esta coexistencia no necesariamente se da en igualdad de condiciones, de hecho, esas prácticas locales pueden ser consideradas marginales en la arquitectura de la paz liberal.

Existe evidencia de que las intervenciones internacionales pueden generar apoyo a formas tradicionales, pero ¿pueden considerarse como tradicionales esas formas que han recibido apoyo de las instituciones globales? La respuesta es no, puesto que se trata de procesos híbridos que dependen de las maneras como se reciben, interpretan y emplean localmente dichos apoyos.

Los críticos plantean que la paz liberal ‘fetichiza’ el Estado, enfatizando la seguridad y la estabilización. La paz dominante tiene dificultades para involucrar a los actores locales y es incapaz de tratar con las dimensiones afectivas y psicológicas del conflicto y de la paz. Conforme con Mac Ginty (2008), las aproximaciones locales y tradicionales se concentran en contar la verdad, en la reconciliación y en el restablecimiento de relaciones sostenibles. A pesar de la capacidad para cooptar las perspectivas locales, las investigaciones recientes reconocen el poder de dichas perspectivas para ignorar, negociar e, incluso, subvertir las estructuras liberales. De este modo se evidencian los límites y los costos de las prácticas liberales. La paz

liberal está interesada en disminuir los costos y ‘devolver’ la responsabilidad a las comunidades nacionales (algunos dirían, ‘absolver’ su responsabilidad). Pero el mayor aporte de las aproximaciones locales y tradicionales es conceptual: forzar a los actores ortodoxos a reconocer que la paz puede ser plural y no singular.

Ruiz-Giménez (2013) arguye que, luego de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001, el discurso de la construcción de paz sufre una reconfiguración en el que la seguridad adquiere un carácter central, de modo que la construcción de paz se concibe como una estrategia contra el terrorismo. Durante este período los procesos de construcción de paz se traducen en procesos de *securitization* de la sociedad, en los que se busca garantizar democracias de mercado por medio de la reconstrucción y fortalecimiento de los llamados ‘Estados fallidos’, origen de los conflictos.

En este contexto, Belloni y Costantini (2019) presentan las transformaciones que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, operaron en la intervención de Estados Unidos en Irak. Así, mientras en los noventa se planteaba que la estabilización emergería del desarrollo de la democracia y del mercado, hoy se considera que la estabilización es la precondition para el desarrollo. El concepto de estabilización es discutido por actores locales e internacionales, académicos, diseñadores de política y la población. Con todo, se prioriza la seguridad sobre la gobernanza, es decir, se colocan en segundo lugar los asuntos relacionados con los derechos humanos y las necesidades locales. Vale decir que en 2003 se intentó el establecimiento de instituciones democráticas en Irak, con el propósito de generar el terreno sobre el cual se construiría la estabilización. Quince años después, las intervenciones occidentales asumen que la estabilidad puede lograrse a expensas de la libertad.

Aunque la estabilización siempre ha sido un objetivo, la revisión del proceso en Irak significa el fracaso del llamado *State-building*. Los ajustes a la intervención en Irak reflejan un nuevo entendimiento de los intereses occidentales, así como el abandono de las aspiraciones de transformación y el pragmatismo de la acción.

Vale decir que en el contraterrorismo (aplicado en Irak) el uso de la fuerza puede ser despiadado. En la contrainsurgencia, por el contrario, este debe ser controlado, pues de otro modo la población se alinearía con las filas enemigas, esta debe construir su capital político con los actores locales aumentando

la lealtad de la población. Por el contrario, el contraterrorismo justifica las misiones impopulares, basado en su capital político, en su prestigio. Para Irak, entre 2006 y 2008 se desarrollaron estrategias de contrainsurgencia, tratando de ‘ganar los corazones y las mentes’ de la población. Este proceso fracasó. Desde 2014, se desarrollan estrategias contraterroristas, dejando la contrainsurgencia a las autoridades locales.

La transformación social y la libertad han dejado de ser los objetivos de la intervención, de modo que la resiliencia se ha convertido en el propósito. Esta se entiende como la capacidad de los sistemas para resistir desastres. El foco en las capacidades internas sugiere la necesidad de manejar el conflicto, más que transformarlo o resolverlo. En otras palabras, un país resiliente puede ser frágil y no democrático, pero al menos es capaz de manipular su dificultad sin generar inestabilidad en sus vecinos.

De acuerdo con Ruiz-Giménez, la perspectiva crítica también cuenta con diferentes tradiciones teórico-políticas. Entre estas vertientes están la crítica comunitarista, el enfoque constructivista, el enfoque poscolonial, la teoría crítica internacional, el enfoque posmodernista y el feminismo.

La crítica comunitarista analiza el intento de universalización de los valores propios del liberalismo, criticando su aplicación a contextos políticos, sociales y culturales que son diversos y complejos. Así mismo, problematiza el intento de imponer un modelo de paz desde fuera de las sociedades en las que se pretende construir el proceso.

El enfoque constructivista presenta varias críticas con respecto al modelo de paz liberal. Una línea centra su crítica en la idea de construcción ‘tecnocrática’ de la paz, criticando la concepción de que la paz es neutral y apolítica, subrayando los intereses, valores e identidades que median estos procesos.

La teoría crítica internacional cuestiona las relaciones de poder y desigualdad subyacente a la construcción de la paz liberal. Esta es entendida como un proyecto del imperialismo occidental que tiene por objetivo mantener el *statu quo* en el orden internacional. Visiones neofoucaultianas entienden la paz liberal como una forma de regulación y control del mundo colonial por parte de los poderes biopolíticos y neoliberales globales.

El enfoque posmodernista cuestiona los conceptos que subyacen a la paz liberal, tales como la idea de progreso, la racionalidad del desarrollo o las ideas sobre la naturaleza humana. También critica la intención de universalizar una sola forma de modernidad.

Las críticas poscoloniales se centran en reprochar el proyecto de la paz liberal como parte de las relaciones de poder asimétricas que consolida Occidente con respecto al resto del mundo, a través de la reproducción de la cultura liberal sobre otras culturas, valores e identidades.

Por último, y como se verá en mayor detalle más adelante, de los estudios feministas surgirán diferentes vertientes para abordar el tema de la paz liberal. Primero, la crítica a la idea de la intervención militar en el establecimiento de la paz, asunto crucial en el diseño de las misiones internacionales. Segundo, se critica la visión según la cual los actores internacionales son ‘constructores de paz’, pues su intervención ha servido para reproducir espacios de violencia hacia las mujeres. Tercero, el impacto negativo de la paz liberal y los procesos de *securitization* sobre las mujeres, niñas y en general sobre la configuración del sistema de género en los países intervenidos. Esto se origina en la preferencia de la paz liberal por la estabilidad y la gobernanza, a partir de la cual se han establecido alianzas con las élites locales para el control de la población, asunto que ha resultado contrario a la defensa de los derechos de las mujeres y a la mitigación de las violencias de género. Cuarto, la cooptación de la agenda de género por el discurso hegemónico, para la justificación de la intervención internacional.

De todo lo anterior, se desprende que no existe una sola definición de paz. Con todo, cualquiera que sea la idea de paz esta implica un cierto tipo de orden social, un ideal sobre el modo como esa sociedad debe operar, lo que incluye sus valores, las dinámicas de producción, la forma como se entiende, genera y distribuye la riqueza, así como la manera como se distribuyen los costos de la actividad individual y colectiva. Este ideal también expresa relaciones de poder en la medida en que coloca sobre el tapete los intereses de los actores involucrados: de los grupos armados, de los gobiernos, de las agencias de cooperación, de los pobladores, de las víctimas.

La construcción de la paz requiere tanto del cese de la violencia como de la transformación de esos poderes nacionales, regionales y locales, pues de otro modo la guerra volverá. Pero este no es un proceso fácil, ya que lo que se ha conseguido por la violencia será mantenido también con violencia. Sin embargo, muchas comunidades en el mundo han contribuido a la transformación de esa situación, ejerciendo ellas mismas un poder transformador, un poder de convivencia y de construcción de alternativas económicas, educativas y culturales. Para ello han ideado actividades locales, regionales

y nacionales en las que interactúan con otras comunidades, con autoridades, con actores políticos y con medios de comunicación.

Ahora bien, es necesario subrayar algunas críticas frente al enfoque local de construcción de paz. De un lado, no queda claro que esta perspectiva sea siempre mejor que el abordaje liberal (Cohen, 2014; Neufeldt et al., 2020; Paffenholz, 2015; Rigual, 2018). En efecto, estas no necesariamente promueven procesos de paz emancipadores, justos o equitativos. Algunos de ellos, por el contrario, pueden contribuir a la reproducción de privilegios de actores poco interesados en reconocer a las mujeres o a los jóvenes, o en promover un acceso equitativo a bienes y servicios como el agua potable, el manejo de basuras o el desarrollo de proyectos productivos. De otro lado, estos poderes locales, con su articulación a dinámicas nacionales e internacionales de construcción de paz, pueden ser útiles para generar control sobre la población, pero muy ineficientes a la hora de crear legitimidad estatal, favorecer el ejercicio de derechos o promover equidad (Tom, 2013).

Pero esta perspectiva ha sido reconocida por los propios promotores de la paz local como un llamado a enfrentar las relaciones de poder presentes: tanto las que se imponen desde las entidades comprometidas con la paz liberal como aquellas que se despliegan en los territorios y que se originan en tradiciones o en las propias lógicas de la guerra que se pretende superar (Mac Ginty, 2010; Tom, 2013).

El papel de las mujeres en la construcción de paz

Tanto la construcción del Estado como de la paz supone dinámicas de poder que deben considerarse. Uno y otra pueden continuar las lógicas de dominación, exclusión o explotación, o pueden contribuir a transformarlas (González, 2014). Una de estas lógicas de poder sobre las cuales el Estado (y el conflicto armado) se han construido es justamente la del patriarcado (Buitrago, 2019).

Moola (2006) plantea que los programas *top-down* fracasan porque no son capaces de reconocer las relaciones de inequidad basadas en el género. La autora asume como postura central la idea de que las mujeres son creadoras de vida y cuidadoras en el marco de normas culturales, de modo que ellas juegan un papel central en la formación de la sociedad y de la protección de sus propias familias. Esto las orienta hacia la no violencia, dado que, desde temprana edad, son socializadas en habilidades para la construcción de paz.

Son las mujeres, entonces, el cemento de la sociedad. Incluso cuando han sido víctimas de abuso sexual y han perdido a sus hijos, hermanos, padres y compañeros, ellas se han convertido en activistas de la paz y la justicia social. No obstante, muchas mujeres actúan como soporte de las violencias propias de los conflictos. En todo caso, al convertirse en apoyo de la sociedad civil en medio de la guerra, se transforman en objeto de explotación laboral y en objetivo de control de los actores armados.

Ella considera necesario desarrollar un enfoque *bottom-up* para dimensionar la participación de las mujeres en la construcción de la paz, enfoque que en su opinión no es reconocido por las agencias internacionales. Sin embargo, plantea que este enfoque (*bottom-up*) puede ser complementario de acciones tradicionales (*top-down*). Para la autora, este último tipo de abordaje presenta una narrativa que (siguiendo a Freire) se centra en “la enfermedad” (*narration sickness*), pues las intervenciones se convierten en una suerte de “acción sanadora” de sociedades e individuos enfermos.

Así que las ONG y las agencias suelen imponer su visión y no se enfocan en la transformación de las mentalidades, ni en generar escenarios de poder desde y para las mujeres. En general, las agencias internacionales privilegian la constitución de mesas de negociación entre élites guerreras masculinas, bajo el supuesto de que son los hombres de la guerra quienes pueden detenerla. Olvidan que las negociaciones solo son un soporte y que se requiere de una mayor participación (especialmente de las mujeres) para construir la paz. La participación de las mujeres tanto en las mesas de negociación como en procesos posteriores es limitada o subordinada.

Frente a esto, Confortini (2006) aboga por la incorporación de las teorías feministas en los estudios de paz. En su criterio, la inclusión de un análisis que incorpore la categoría de género, como una noción clave en la ordenación de las relaciones sociales, puede aportar al entendimiento de lo que Galtung ha nombrado como dimensiones estructurales y culturales de la violencia, asunto que puede aplicarse a diversos contextos, siendo uno de ellos el de la guerra.

Por otro lado, el trabajo de Kathe Paarlberg-Kvam (2019) responde a la idea de que existe un gran campo de investigaciones en experiencias de las mujeres en la guerra, pero muy pocas sobre sus visiones de paz. En este sentido, sostiene que, a partir de las formas en que se visualiza la paz, se construyen las sociedades en el posconflicto. Por eso, investiga y expone

las visiones de paz de las activistas feministas presentadas en la mesa de La Habana que dio origen al acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Qué significan, a quiénes benefician y si la concepción oficial de la paz que se pactó realmente recoge esas propuestas. Esto lo discute a partir de su trabajo en Colombia en los años de negociación, durante el cual realizó entrevistas a las lideresas del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz-Magdalena Medio (MSM), la Red de Mujeres del Caribe Colombiano (RMCC) y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

De acuerdo con la autora, las mujeres activistas obtuvieron grandes logros en las negociaciones de La Habana (las cuales recogieron notables avances en la incorporación de realidades y problemas en perspectiva de género). Aun así, sus visiones van más allá de la paz liberal imaginada por el gobierno y tienen que ver con el abordaje de los fundamentos (el patriarcado, la hegemonía de mercado y el militarismo) y no simplemente con las expresiones del conflicto.

En la literatura internacional sobre mujeres y construcción de paz, se evidencia que, a pesar de que los movimientos de mujeres por la paz tienen trayectorias disímiles, tienen algo en común: una visión de paz holística que sostiene su actividad política (Paarlberg-Kvam, 2019). Algunas autoras la han categorizado como “política feminista de paz maternal”, que aboga por las transformaciones de las representaciones tradicionales al género, mientras se ejerce resistencia desde la no violencia. Otras investigadoras abordan los ‘análisis de género del militarismo y la represión sexista’, que sostienen que las ideas de paz y seguridad feministas trascienden las interpretaciones patriarcales tradicionales. Esto apunta a la comprensión de que la guerra es algo más que las confrontaciones entre actores armados, es también un modo de socialización de personas en un sistema que ha militarizado la vida social y ha creado herramientas neoliberales para sostener dichos poderes.

Ahora bien, para Moola (2006), el llamado *peace-building* hunde sus raíces en la teoría de la modernización de los años cincuenta y sesenta, teoría que supone que existe una evolución natural que lleva a los pueblos hacia la democracia y el mercado. Pero la imposición de la democracia electoral y del mercado puede exacerbar los conflictos, pues no contribuye a transformar la pobreza o la inequidad. De otro lado, la división del trabajo que produce la paz liberal no mejora las condiciones de las mujeres y, por el contrario, agrega cargas sobre sus hombros.

La autora plantea la necesidad de fortalecer el apoyo a las organizaciones de mujeres, que suelen trabajar en condiciones muy precarias. También argumenta la necesidad de fortificar su posición para que accedan a los escalones más altos de la toma de decisiones. En esta dirección, anota que algunas mujeres en posiciones de privilegio terminan asumiendo posiciones masculinas para prevalecer en las estructuras de poder existentes. Además, se observa una feminización de la pobreza, puesto que el mercado de trabajo para ellas se ha estancado como resultado de la prescripción liberal de la construcción de la paz. Por ejemplo, Sudáfrica adoptó una política de integración a la economía global, pero esto llevó a que las mujeres asumieran la peor parte, de modo que se emplean en el mercado informal.

Para Moola, el mayor reto de las mujeres en la construcción de la paz es la prescripción universal, de democracia, derechos humanos, gobernanza y liberalización del mercado. En efecto, el modelo de vida occidentalizado solo se logra a costa de quienes cuentan con menos posibilidades económicas, culturales y políticas, generalmente mujeres.

Marulanda Taborda (2018) examina cuál es el sentido que dan las mujeres a la paz y qué características tienen sus movilizaciones. Indaga por las iniciativas de paz que construyen las mujeres desde sus ámbitos locales y territoriales, qué impacto tiene el contexto, cuáles han sido las condiciones del conflicto armado que impactan su desarrollo y qué aprendizajes se tejen desde estos procesos. En este sentido, la construcción de paz, desde las mujeres, se asocia con la generación de transformaciones sociales y la búsqueda de equidad, está sujeta a la redignificación de la vida y a la reconstrucción de las estructuras sociales transformadas por la violencia.

Estos proyectos políticos de paz mirados desde las mujeres plantean nuevos paradigmas sociales en donde se reinventa el mundo a favor de los que no habían sido escuchados, definen nuevas formas de entender y ejercer el poder, el conflicto y las relaciones sociales. Es una opción por construir paz desde abajo, en donde las comunidades sean protagonistas y las propuestas surjan de sus necesidades, vivencias, tradiciones y descontentos.

En síntesis, las autoras analizadas plantean la necesidad de superar los dualismos propios de la paz liberal (y de la perspectiva moderna) que sostienen las divisiones tradicionales: privado/público, blanco/negro, hombre/mujer, estructural/cotidiano. Sugieren la necesidad de analizar las relaciones de poder que han afectado la vida de mujeres y hombres, reconociendo los

diversos modos como unos y otras han creado respuestas y alternativas. Desde esta perspectiva, insisten en que las mujeres no son solo víctimas y que es necesario reconocer y fortalecer sus capacidades para transformar sus propias vidas y entornos.

Aproximación a la dimensión político-institucional

Como se ha presentado hasta ahora, ni la definición de la paz ni las prácticas que se derivan de ella son políticamente neutrales. Pueden favorecer a unos actores más que a otros, promover o transformar prejuicios y lógicas de dominación. Aquí el Estado puede ser tanto el principal agente del proceso como uno de los problemas más complejos por resolver. Este puede ser un elemento generador de dinámicas democráticas, responder a necesidades sociales y servir de escenario para que la diversidad cultural y de género se expresen en igualdad de condiciones a fin de construir nuevas posibilidades que superen la violencia, o, por el contrario, puede constituirse en un instrumento apropiado por diversos grupos para proteger sus intereses. Como se ha mencionado antes, varios autores plantean que las perspectivas de paz estado-centradas tienden a ser incapaces de promover transformaciones en las dinámicas de poder que demanda la paz.

En este apartado se hará una rápida discusión sobre el papel del Estado en la construcción de la paz. En términos generales, se puede organizar la presentación alrededor de dos temas clave: 1) cómo armonizar las tareas de paz y el fortalecimiento estatal; y 2) cómo fortalecer la legitimidad de los Estados considerados frágiles o fallidos. Aquí cabe subrayar que buena parte de la literatura que considera el papel del Estado en la construcción de la paz tiende a definirlos como Estados con problemas, fracasados, con fallas o débiles. Por esta razón, mencionar algunas críticas sobre las dificultades conceptuales, metodológicas y políticas que estos enfoques plantean contribuye a formular preguntas sobre el papel de lo local en la construcción de paz.

Tensiones entre paz y construcción estatal

Según Sanz (2010), los modelos de construcción de paz se han desarrollado desde la década de los noventa hasta los años 2000. Estos se pueden clasificar conforme con la visión que asumen respecto al papel del Estado y de la sociedad civil. Su crítica se dirige a lo que se podría llamar el ‘consenso liberal’, es decir, el acuerdo sobre la necesidad de generar una democracia de mercado

(democracia liberal, economía de mercado y pluralismo étnico-cultural) en sociedades afectadas por la guerra. Una segunda crítica se orienta a la visión estatista de la realidad social, es decir, cuestiona aquellas visiones que son incapaces de concebir a la sociedad por fuera de las relaciones estatales.

Como se dijo antes, la llamada ‘paz liberal’ incluye varios subtipos: la conservadora, la ortodoxa y la transformadora, entre ellas existen diferencias y continuidades que se articulan de acuerdo con tres ejes: 1) el de los conceptos sociocentrismo y estadocentrismo; 2) las visiones *bottom-up* y *top-down*; y 3) la tensión entre el fortalecimiento de la institucionalidad estatal o su reducción. Vale decir que la perspectiva sociocéntrica remite al hecho de que son las dinámicas de clase, los grupos de presión, los movimientos de masas y la sociedad civil los que constituyen las relaciones políticas y al Estado. La perspectiva estadocéntrica privilegia las relaciones en el seno del Estado (las élites, las instituciones, las leyes, los ejércitos) como constituyentes de la realidad social.

La paz transformadora corresponde a la perspectiva sociocéntrica, que se inclina a la construcción de abajo hacia arriba, propendiendo por el fortalecimiento de la sociedad civil. La paz conservadora, por el contrario, tiene una visión *top-down* que privilegia a los procesos orientados desde las instituciones estatales y propende por la construcción de un Estado fuerte que sea capaz de garantizar una democracia de mercado.

Ahora bien, frente a estas formas que adquiere la paz liberal, Sanz menciona dos perspectivas críticas que pretenden repolitizar e historizar los procesos de construcción de paz. Desde allí se cuestiona la visión del Estado como institución natural y legítima *per se*.

El llamado sociocentrismo posliberal se nutre de las ideas posestructuralistas, haciendo énfasis en la historicidad de conceptos como Estado, sociedad civil, gobernanza, etc., criticando los discursos liberales-conservadores que pretenden la existencia de un solo modelo de Estado y de sociedad. Utiliza términos tales como gubernamentalidad, regímenes disciplinarios o resistencias, y propone la superación de la paz liberal a través de conceptos como paz posliberal, órdenes híbridos y resistencias subalternas.

El estadocentrismo crítico hace énfasis en el papel central de los Estados fuertes en la construcción de sociedades liberales, pero plantea el hecho de que estos procesos han sido inherentemente violentos. Cuestiona la visión sociocentrista posliberal, pues afirma que, al ser el Estado el principal campo

de contestación política, una visión que se centre exclusivamente en la sociedad puede ser despolitizadora. La problemática en sociedades posbélicas y el reto para la construcción de paz desde esta perspectiva se encuentra en temas como la soberanía territorial, las estructuras económicas globales o el desarrollo autónomo. Con todo, el estadocentrismo crítico es antiestatista en el sentido de no reducir el proceso al ajuste estatal. Así que una de las discusiones sobre la construcción de la paz se remite precisamente a qué Estado promover, cómo lograrlo y qué papel juegan las poblaciones y las élites en su construcción.

Desde una perspectiva distinta, Alina Rocha Menocal (2011) sugiere la existencia de varias tensiones respecto a la construcción del Estado y la paz, pues, aun cuando existen importantes articulaciones entre ambos procesos, es necesario tener en cuenta varias situaciones problemáticas:

1. La construcción del Estado no necesariamente lleva a la paz. El consenso internacional es que el *State-building* es un proceso consensuado, inclusivo, desde abajo y democrático. Sin embargo, las experiencias históricas sugieren que el Estado ha sido desarrollado en un proceso de largo plazo, a través de una dinámica no lineal, conflictiva, violenta, incluso asociada a la guerra (en la vía de Tilly). Estos procesos son generalmente dirigidos por élites incluso cuando participan movimientos sociales. A pesar de la complementariedad entre la construcción de paz y de Estado, es necesario tener en mente que se trata de dos procesos y que, en el caso de Estados frágiles, estos procesos pueden tomar direcciones opuestas. No obstante, la construcción del Estado es una cuestión profundamente política. Es algo que ha sido recientemente reconocido por los actores internacionales, sin embargo, no se han tomado en serio las implicaciones prácticas.
2. Existen tensiones respecto a las etapas necesarias para consolidar la paz: generar un escenario político formal adecuado para la paz puede socavar la creación de un Estado capaz y efectivo a largo plazo. Así, por ejemplo, los esfuerzos por apaciguar a los actores pueden llevar a legislaciones e instituciones represivas, o a cristalizar políticas que terminan promoviendo la renovación de los conflictos (como en Bosnia). En Liberia, la presencia de actores responsables de violaciones

graves de derechos humanos en las mesas de negociación complejiza el panorama, pues pueden manipular las negociaciones o retirarse de ellas, creando escenarios de desestabilización. Las medidas para incrementar la confianza entre los actores en los procesos de construcción de acuerdos de paz que implican compartir el poder pueden ser útiles en el corto plazo, pero problemáticas al afectar la efectividad de las instituciones a mediano y largo plazo. La cuestión de la justicia para los actores violentos complica el asunto, ya que la aplicación de medidas de justicia demasiado prontas puede comprometer el escenario político, pero no aplicar esas medidas generará desconfianza en la población sobre el proceso. Una cultura de tolerancia frente a los actores políticos puede llevar a la perpetuación de la violencia. En el balance entre paz y justicia se generan procesos complejos de construcción estatal.

3. La construcción de paz socava la construcción del Estado cuando las intervenciones internacionales desvían el quehacer de las instituciones que componen el Estado, por ejemplo, cuando los recursos externos se canalizan a través de entidades no estatales, dejando de lado a las instituciones encargadas del presupuesto o de la electricidad, de modo que no se fortalece su capacidad para responder a las necesidades de la población. Se requiere entonces vincular la construcción de paz al fortalecimiento estatal.

Los esfuerzos de construcción del Estado también pueden estar enfocados en la construcción de la formación del Estado central. A pesar del énfasis en la relación entre Estado y sociedad, los esfuerzos suelen dirigirse a la construcción del Estado a nivel nacional, dejando de lado organizaciones y dinámicas no estatales de autoridad social. Además, cuando los Estados son ilegítimos pueden convertirse en socios ‘tóxicos’ para los cooperantes en el proceso de construcción estatal. Se pueden construir regímenes con poca legitimidad, lo que condena a la población a vivir condiciones de pobreza o situaciones de abuso.

De acuerdo con esta autora, es necesario entender el rol de los actores no estatales en los procesos políticos. Otro reto se refiere al balance entre el nivel central y el descentralizado. En Estados frágiles se privilegia el centro,

pero esto puede llevar a que los gobiernos locales queden excluidos. Excesiva descentralización o centralización puede ocasionar conflictos violentos.

Aquí se esbozan una serie de asuntos prácticos que deben subrayarse: ¿cuáles son las dinámicas de poder que están realmente en juego durante los procesos de paz, tanto en la construcción de los acuerdos como en su aplicación? Varios factores deben considerarse aquí: las relaciones formales e informales de carácter social, político, cultural y económico; los vínculos entre las regiones y el centro (o los centros); la forma como se establecen y desarrollan las relaciones entre agencias de cooperación, los Estados, las élites y las poblaciones; el lugar que ocupan esas regiones y poblaciones en los circuitos globales de creación y circulación de bienes, servicios y símbolos.

Legitimidad, estatalidad y paz

Desde la preocupación por la soberanía, las Naciones Unidas propusieron el llamado *peace-building* en los noventa. En 1992 se creó la Agenda for Peace, que se centró en el posconflicto. Se trata de una iniciativa de paz negativa que adelanta intervenciones de corto plazo, bajo el enfoque de la llamada paz liberal: elecciones rápidas y economía de mercado. La aplicación de esta agenda tuvo resultados positivos y negativos. Se obtuvo un relativo éxito en El Salvador, mientras la violencia retornó en Ruanda y Liberia. Esto llevó al replanteamiento de sus fundamentos. Una de las principales lecciones de estas experiencias se refiere a que en esos contextos no existen estructuras institucionales encaminadas al respeto de los derechos humanos o a la atención de demandas sociales. Ello conllevó la necesidad de construir Estados —por lo menos aquellos mínimos primordiales—, a finales de los noventa, sin embargo, los actores no estatales mantienen un papel central en el proceso. De allí se dio el surgimiento de una perspectiva maximalista de la paz que incluye democracia, equidad, desarrollo, institucionalidad capaz de responder a las demandas sociales, en últimas, la transformación de la sociedad.

El redescubrimiento del Estado como clave del desarrollo en los círculos internacionales de política es relativamente reciente dado el antiestatismo del consenso de Washington. La ‘agenda de buen gobierno’ en los noventa retomó el asunto del Estado desde una perspectiva despolitizada y tecnocrática que era relativamente antiestatista. Con el nuevo milenio, la construcción del Estado se convirtió en prioridad. Esta renovación va en dos vías: 1) La

comprobación de la necesidad de Estado para sostener la paz (sin lo uno no hay lo otro). 2) La preocupación por la articulación entre Estado débil y pobre desempeño para el desarrollo.

Desde el 9/11 emerge una preocupación por la relación entre bajo desarrollo e inseguridad, esto también anima la pregunta por el Estado. Ha surgido un creciente interés por la relación Estado-sociedad, específicamente por el modo como se puede lograr que ambos ajusten mutuamente sus demandas, obligaciones y expectativas. Así, un Estado frágil es aquel que no opera eficientemente en este continuo proceso de ajuste, lo que hace que el concepto de legitimidad sea central.

Según Rocha Menocal (2011), las agendas de *State-building* y *peace-building* se yuxtaponen desde hace años. Anota que una investigación sobre el papel de la sociedad civil en trece conflictos sugiere que mientras los esfuerzos de esa sociedad civil son valiosos en la construcción de paz, estos no tienen un fuerte impacto. Es preciso que el Estado y las élites contribuyan efectivamente a establecer una atmósfera que favorezca las actividades de la sociedad civil.

Los esfuerzos internacionales para promover la construcción del Estado y de la paz se centran en el trabajo con actores locales en la creación de instituciones más incluyentes, representativas y más capaces de dar respuesta a sus necesidades. La inclusión se relaciona aquí con la legitimidad. Tanto la construcción del Estado como de la paz son procesos que deben ser gobernados desde dentro, pero estos no se desarrollan en el vacío, se encuentran atravesados por poderes y tensiones complejas.

El impacto del entorno nacional e internacional puede ser positivo o negativo en la construcción del Estado y en las relaciones entre este y la sociedad. La construcción de instituciones no se remite solo a la creación y administración de políticas formales, sino a arreglos políticos informales, a la desarticulación de las élites, así como a las tensiones entre estas y otros grupos sociales. Se entiende aquí la legitimidad como una creencia normativa, básicamente que una norma o institución debe ser obedecida. Así que los Estados son legítimos cuando las élites políticas y el público aceptan las normas que regulan el ejercicio del poder y la distribución de la riqueza. La necesidad de construir legitimidad es el corazón del *State-building* y a su vez es el requerimiento primario para la paz, la estabilidad y la resiliencia a largo plazo.

De otro lado, la autora sostiene que existen diferentes maneras de establecer la legitimidad: 1) como reconocimiento de la comunidad internacional, 2) basada en el nacionalismo, 3) basada en el clientelismo, 4) basada en formas tradicionales de autoridad y 5) basada en el desempeño y en los procedimientos. Algunos de los métodos que pueden emplearse para ganar legitimidad son más inclusivos que otros y son problemáticos dependiendo de quiénes son incluidos y quiénes no. El clientelismo genera diferencias claras entre grupos que reciben servicios y aquellos que no, así que la legitimidad es difícil de lograr en esos escenarios.

Pueden coexistir varias formas de legitimidad en escenarios complejos, por ejemplo, el clientelismo y la legitimidad basada en resultados y en el respeto a los procesos. Esta coexistencia se puede desarrollar, en parte, por los esfuerzos y presiones internacionales. Tal coexistencia de modelos puede ser problemática, chocar entre sí. Los Estados frágiles pueden mantener órdenes híbridos, formales e informales.

Pese a la importancia que se le concede a la legitimidad, la asistencia internacional no ha entendido las diversas fuentes y formas de legitimidad. De este modo tiende a fortalecer lo formal y no ha atendido lo informal, ni el hecho de que otros actores pueden competir con el Estado.

La discusión que se ha planteado hasta aquí pone en evidencia la necesidad de comprender la construcción de la paz desde una perspectiva plural. De una parte, es preciso reconocer que los actores locales han desarrollado capacidades para supervivir e incluso oponerse a los actores armados legales e ilegales. Esas capacidades se relacionan con la posibilidad de transformar relaciones de poder asociadas con la explotación de los territorios, inequidades de género, racismo, exclusión y deterioro ambiental. Así que la pregunta por el papel de organizaciones y excombatientes es tan importante como la pregunta por el papel del Estado en el proceso de construcción de paz. En otras palabras, se requiere discutir cómo se traducen las relaciones y tensiones sociales en mecanismos políticos (de una política no ‘estado-centrada’, pero que no niegue el papel del Estado) capaces de generar nuevas posibilidades.

Conforme con Fernán González (2014) y Rocha Menocal (2011), pueden coexistir diversas lógicas de legitimidad y diversos mecanismos para tramitar demandas sociales y resolver conflictos, de modo que, mientras el Estado central puede contar con ciertas instituciones orientadas por la racionalidad tecnocrática, los poderes regionales pueden convertirse en

intermediarios de recursos, limitar o potenciar el quehacer burocrático, o incluso usar la violencia para controlar las amenazas locales y para ejercer presión a nivel nacional.

Los territorios entonces se articulan de múltiples formas a los circuitos económicos, políticos y culturales, bien como resultado de una centralización burocrática en la que se combina el desarrollo capitalista con la expansión de instituciones estatales (como el acceso a la justicia), bien como el resultado de una articulación mediada por élites regionales. En el caso colombiano, fueron los partidos tradicionales (y no el Estado) los aparatos que cohesionaron la nación (González, 2014). Entonces, la pregunta por la construcción de territorios en paz pasa por comprender al Estado como proceso y por problematizar la relación entre la paz desde arriba.

Estados fallidos, Estados frágiles y paz

De acuerdo con Rocha Menocal (2011), el análisis de la relación entre la construcción estatal y la paz pasa por el análisis de los denominados ‘Estados fallidos’, entendidos como aquellos que no ejercen su autoridad en todo el territorio, no cuentan con el monopolio sobre el uso de la fuerza y no son capaces de satisfacer las necesidades de su población, siendo, entonces, ilegítimos. El asunto clave de este tipo de Estados se refiere a una cuestión política: el proceso político no puede lograr un equilibrio entre las capacidades institucionales y las expectativas sociales. El conflicto exagera esa fragilidad (aun cuando se puede vivir en Estados frágiles y no estar en violencia). Los procesos de transición (de fin de conflicto) se constituyen en escenarios clave para reordenar el Estado.

Los acuerdos de paz se convierten en una oportunidad para crear un nuevo contrato social basado en obligaciones y derechos mutuos, para promover una nueva relación Estado-sociedad. Sin embargo, se trata solo de una oportunidad, que dista mucho de que se haga realidad, como en el caso de Guatemala. La cuestión clave es la rearticulación de las instituciones formales e informales para, a partir de allí, crear instituciones incluyentes, sensibles y respetuosas de los derechos humanos. Esto supone llegar al corazón de las estructuras de poder para alterarlas. Este asunto vincula la construcción de la paz y del Estado.

Oliver Nay (2013) y Francisco Gutiérrez Sanín (2016) ofrecen una importante crítica a los conceptos, mediciones e instituciones vinculadas a

la gestión de los llamados Estados frágiles y fallidos. En sus trabajos demuestran que estas categorías no cuentan con solidez teórica, ni metodológica o técnica, y que se emplean para reproducir relaciones de poder globales.

Según Nay (2013), las categorías de Estados 'fallidos' y 'frágiles' no surgieron simultáneamente, ni cuentan con las mismas trayectorias. El concepto de 'Estado fallido' fue introducido por analistas de política exterior a principios de la década de 1990, en el contexto de la pos-Guerra Fría, cuando los académicos intentaron describir la proliferación de conflictos civiles que engendraron la fragmentación de instituciones estatales, recesión económica y deterioro de las condiciones de seguridad. El estallido de las guerras en Bosnia y Croacia, los conflictos entre facciones en Somalia, la pobreza y la anomia social en Haití, el fracaso del gobierno camboyano para poner fin a la actividad guerrillera del Khmer Rouge, entre otros, indujeron a un creciente número de analistas de políticas a forjar nuevas categorías como 'cuasi-Estado', 'Estado fallido' o 'Estado colapsado'. Posteriormente, el concepto de 'Estados fallidos' ha sido ampliamente difundido por las administraciones estadounidenses y los analistas políticos después del 11 de septiembre de 2001, en especial en el campo de la seguridad internacional.

La noción de 'Estado frágil' ha tenido una trayectoria ligeramente diferente. Se ha extendido internacionalmente entre donantes, agencias técnicas y algunos gobiernos, principalmente en las áreas de desarrollo, asistencia humanitaria y consolidación de la paz. En particular, ha sido ampliamente utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial desde mediados de la década de 2000 para designar a los países más pobres e inestables que no pueden cumplir con los estándares mínimos establecidos por los principales donantes de ayuda al desarrollo. También se usan muchas otras nociones: los Estados se describen como débiles, vulnerables, inestables, inseguros, en crisis, colapsados, fragmentados, suspendidos, rotos, en la sombra, entre otros. Cada concepto se refiere a una situación específica. Sin embargo, el concepto de 'Estado frágil' es utilizado por muchos académicos y analistas para representar países donde la legitimidad, autoridad y capacidad de las instituciones estatales está disminuyendo dramáticamente, debilitándose o quebrándose. El 'Estado frágil' es una categoría genérica e integral adoptada por un gran número de gobiernos occidentales y organizaciones internacionales desde 2005, mientras que los 'Estados fallidos' siguen siendo nociones

más controvertidas a pesar de su amplio uso por parte de los responsables políticos de Estados Unidos en la última década.

Francisco Gutiérrez Sanín (2016) analiza la noción de falla estatal. Esta parece más o menos evidente al aludir al hecho de que las capacidades estatales caen por debajo de cierto nivel, cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza, o cuando la entidad que debe ejercer la soberanía deja de existir. “Pese a lo sencilla que resulta la intuición básica, ha resultado sorprendentemente difícil de conceptualizar razonablemente bien” (p. 77). Según el autor, “las listas de Estados fallidos proporcionadas por diversos expertos e indicadores son enloquecedoramente heterogéneas, hay una enorme dispersión conceptual, el marbete es utilizado a menudo de manera facciosa, y las conclusiones de los trabajos cuantitativos relevantes están lejos de ser mínimamente robustas” (p. 77). Las clasificaciones son inconsistentes, de modo que en una misma categoría aparecen Estados como el sudafricano, el ruandés y el congolés, casos que cuentan con profundas diferencias en cuanto a sus capacidades. “Por otra parte, se confunden rutinariamente en un mismo concepto dimensiones causales (qué causa la falla), definicionales (qué es la falla) y consecuenciales (qué implicaciones tiene la falla)” (p. 77).

Como un esfuerzo por resolver el problema se ha creado un continuo en el que todos los Estados tienen algún elemento de falla, pero estas pueden ser más o menos profundas. Algunas teorías explican la falla estatal como la falta de provisión de servicios a la población. Se trata de una perspectiva funcionalista que casa con la ya enorme literatura sobre ‘buen gobierno’, que propone un conjunto de recetas y prácticas para prevenir derivas predatorias. Esta perspectiva carece de historicidad; además, es incapaz de ofrecer una definición satisfactoria de los servicios fundamentales que cada tipo de Estado y nivel de desarrollo deben ofrecer. Al parecer, esas definiciones dependen solo del criterio de los autores. De otro lado, no es claro si esta perspectiva se sostiene empíricamente.

Otros teóricos explican las fallas estatales según “la maldición de los recursos”. Aquellos ricos en materias primas tienen mayor probabilidad de que fallen y creen conflictos. Por una parte, la abundancia de recursos de este tipo implica que el Estado no debe captar impuestos y, por consiguiente, tampoco es capaz de generar apoyo ciudadano. Por otra parte, se producen prácticas predatorias de los gobernantes, pues al contar con esos recursos tienden a arruinar a los ciudadanos. “Aunque la asociación entre participación

de la economía petrolera en el PIB y guerra civil es una de las regularidades más estables encontradas en los ejercicios estadísticos sobre conflicto y falla estatal [...], ella esconde trayectorias y formas muy diferenciadas de constitución del poder político: desde Iraq hasta Noruega” (p. 78).

Según Nay (2013), las categorías de Estados fallidos y Estados frágiles se emplean como etiquetas políticas para producir efectos de dominación. La retórica sobre los Estados fallidos y frágiles no puede dissociarse de las doctrinas militares, las opciones diplomáticas y las opciones económicas de las potencias occidentales. Estas proporcionaron las bases para intervenciones políticas en conflictos regionales, así como para combatir el terrorismo transnacional y el crimen organizado internacional. Podrían usarse para justificar formas de interferencia política en los asuntos internos de países pobres o devastados por la guerra.

Varios investigadores sugirieron que los Estados fueron etiquetados como fallidos solo cuando los intereses occidentales parecían directamente amenazados, como en Afganistán, Somalia y Liberia, mientras que dicho etiquetado no se había utilizado en otros conflictos, como en Sudán y Nigeria (Nay, 2019). Otros investigadores criticaron la formación de un ‘complejo de desarrollo militar’ detrás de la retórica de ayuda internacional (aparentemente) altruista hacia los llamados Estados frágiles. Este complejo está dominado por los países occidentales y apoya un proyecto de estabilización social, político y económico de Estados frágiles o fallidos mediante un coc-tel de medidas profundamente intrusivas en los ámbitos de la gobernanza política, la desregulación económica, la consolidación de la sociedad civil y la reforma del sector de la seguridad.

Para Nay, los estudios sobre la fragilidad de los Estados cuentan con varias limitaciones analíticas. Una de ellas radica en la incapacidad de los autores para acordar criterios consistentes que permitan definir adecuadamente dicha fragilidad. Estos conceptos están sujetos a una variedad de usos, incluso contradictorios. Se sobrecargan con múltiples significados, haciéndolos profundamente ambiguos. Algunos remiten a la eficiencia de la administración pública, otros a la legitimidad de las instituciones gubernamentales, o a la seguridad nacional e internacional, o, incluso, al bienestar de las poblaciones locales. Estos conceptos a veces se usan para describir las incapacidades y disfunciones de las instituciones estatales, como el bajo desempeño del gobierno, los gobiernos débiles, o la incapacidad para

proporcionar servicios básicos a las poblaciones, ausencia de gobierno representativo, corrupción extensa dentro del aparato burocrático y depredación de los recursos públicos por parte de las élites en el gobierno.

Como se puede ver, ambos estudiosos cuestionan la capacidad de dichos conceptos para analizar la situación de los Estados. Además, llaman la atención sobre el uso político de estas construcciones teóricas, así como su contribución al desarrollo de proyectos y programas que responden a los intereses de países dominantes.

A pesar de sus limitaciones, estos conceptos siguen animando diseños institucionales para la construcción de paz, sobre todo de aquellos centrados en la construcción del Estado y que tienden a desestimar lo local y lo informal. Debe enfatizarse que la articulación de instituciones políticas liberales y prácticas locales (paz híbrida) no siempre contribuye a la construcción de una paz transformadora, esto es, que contribuye a crear mejores condiciones para los grupos excluidos. Tom (2013) argumenta que en el caso de Sierra Leona se han creado mecanismos de reconocimiento político para líderes locales, lo que ha llevado al desarrollo de dinámicas clientelistas que terminan reforzando la pobreza y la ineficiencia estatal. Puede plantearse que la fragilidad estatal, como punto de partida, ha contribuido a reproducir situaciones como esta.

A modo de cierre

A nivel político-epistemológico se pueden formular las siguientes preguntas frente a la construcción de la paz y su relación con la construcción del Estado: ¿de qué paz se trata?, ¿para quién?, ¿para qué? Puede ocurrir que se priorice la paz (entendida como cese de la violencia directa) y que se excluya la justicia, o que se invisibilice a ciertos actores (como a las mujeres), o que se oculten ciertos problemas (como la explotación o la dominación). Puede suceder que se generen procesos que transformen dinámicas de poder o pueden sobrevenir negociaciones, tensiones y ajustes entre ambas posibilidades. En todo caso, las propuestas comunitarias, locales o indígenas pueden trascender el tradicional marco liberal (dualista) de la paz negativa y la paz positiva. Se trata de procesos de invención de identidades, en últimas, de nuevas maneras de entender lo que pasó y de actuar en el presente, sobre todo de pensar la paz desde la paz misma. Se trata de paces en plural.

Pero esta pluralidad se encuentra tensionada por las diferentes maneras como se concibe el papel del Estado en la construcción de la paz. Si se promueve un Estado liberal, se obliga a las organizaciones, comunidades y líderes a actuar según sus lógicas formales e informales. Las reglas del juego político son definidas desde fuera, lo que generalmente favorece a ciertos grupos y coloca en desventaja a otros. Un punto clave aquí es que las agencias y los mismos Estados dan por sentado que la perspectiva liberal es la mejor opción.

En este punto vale la pena retomar algunos aspectos clave de los contrapúblicos que Fraser (1991, 1995) define a partir de la discusión de la concepción burguesa (liberal) de la esfera pública. De acuerdo con ella, en dicha esfera los sujetos actúan “como si fueran iguales” bajo la idea de que todos cuentan con las mismas oportunidades. Sin embargo, esa igualación formal termina privilegiando una estética y un lenguaje específicos, lo que a su vez genera un sesgo a favor de ciertos temas e intereses: todos se ‘igualan’ según la concepción de los grupos dominantes. Ahora bien, lo que los espacios contrapúblicos permiten, precisamente, se refiere a la participación desde la diferencia, desde las concepciones de mundo que no son reconocidas por los espacios públicos formales/burgueses. Se participa desde la diferencia y desde el reconocimiento de la desigualdad e inequidad.

Conforme con Fraser (1991), el espacio público se define como una esfera racional, extrapolando un modelo idealizado de la esfera pública burguesa. Para dicha esfera el actor individual ha sido entendido como secular, incorpóreo y racional. Este paradigma fue utilizado para pensar la organización y la relación entre experiencia individual y colectiva. En el corazón de este entendimiento se encuentra la categoría de representación. Así que, en virtud de cierta identidad regional o nacional, los sujetos pueden ser representados por otros, de modo que la representación cultural habilita la representación política. Sin embargo, las identidades construidas desde los contrapúblicos no encuentran oportunidad en este juego de representaciones.

El surgimiento de los contrapúblicos requiere de una dinámica compleja de construcción de un “nosotros” capaz de expresar sus propios puntos de vista a partir de su propia ética y estética. Por ejemplo, los espacios creados a partir de las congregaciones negras en el sur de Estados Unidos, con su música, su discursividad particular, sus símbolos y sus propuestas. En todo caso, los contrapúblicos compiten con los espacios públicos formales,

construyendo un estilo propio que les permita recoger las reivindicaciones y lenguajes que los espacios de corte burgués no pueden reconocer. La manera como los actores se construyen tanto desde las diferencias como desde posiciones subordinadas se constituye en un elemento por tener en cuenta, pues alude a su estética, al modo como construyen unos medios para definirse, visibilizarse y proyectarse.

Fraser (1991, 1995) entiende que los actores se construyen a través de sus relaciones, bien con el contexto, con contendores sociales o políticos, o con sujetos mejor posicionados. En esta dirección, se requiere analizar esas relaciones, los espacios en los que ocurren y la dinámica que despliegan. Así que las diferencias de poder, el acceso a recursos expresivos, su capacidad para ‘traducir’ sus demandas en acción política institucionalizada son, entre otros, elementos que se deben tener en cuenta para analizar la pluralidad de las paces.

Desde los contrapúblicos se desarrolla un proceso que pasa por el “reconocerse”, recreando una estética, un “sentir común” que no corresponde a las lógicas estatalizadas, burocratizadas (en palabras de Fraser, “burguesas”). No obstante, esta relación entre lo público y lo contrapúblico debe matizarse, debido a que es posible caer en lecturas maniqueas. Existen complejas transacciones entre lo “público burgués” y lo contrapúblico, al punto de que se evidencian confrontaciones y complicidades, así como transacciones y rechazos.

Entonces, la construcción de la estatalidad no puede entenderse como un proceso homogéneo (a la manera del estadocentrismo y la perspectiva liberal), tampoco puede entenderse como una dinámica inherentemente justa, equitativa y no violenta. Mucho menos puede suponerse que el Estado es ‘la solución’ y que, como un doctor, actúa sobre la sociedad, sanándola. Como se ha planteado, este responde a múltiples relaciones de poder: de las agencias internacionales, de ciertos Estados que insisten en generar condiciones de seguridad, de los poderes nacionales y regionales en disputa, de las víctimas, de las poblaciones, de las organizaciones de todos los niveles que compiten por recursos, de los medios de comunicación.

De otro lado, suponer que las organizaciones locales construyen procesos de paz inherentemente buenos puede llevar a subestimar al Estado, a las agencias, así como a los poderes locales. Si bien es cierto que la mayor parte de estos movimientos tienden a transformar las dinámicas de poder

que los excluyen (como se anotó respecto a los movimientos de mujeres), esas transformaciones se relacionan con el tipo de estatalidad (y con las relaciones de poder que ella promueve) en las que se encuentran. Esto no significa que el Estado determine a las organizaciones, sin embargo, puede crear escenarios capaces de callar las voces disidentes, o las propuestas alternativas, o, por el contrario, puede crear posibilidades que las organizaciones saben aprovechar y transformar.

Referencias

- Belloni, R., & Costantini, I. (2019). From liberal Statebuilding to counterinsurgency and stabilization: the international intervention in Iraq. *Journal of Ethnopolitics. Formerly Global Review of Ethnopolitics*, 18, 509-525.
- Buitrago, A. (2019). La paz desde abajo: breve historia, impacto del conflicto y participación política de los movimientos sociales en los acuerdos de paz. En A. Buitrago, M. Cundumi, R. Yaya & M. T. Yate, *La paz desde abajo. Breve historia, impacto y participación de los movimientos sociales en Colombia* (pp. 51-165). Bogotá: Ediciones USTA.
- Cohen, S. B. (2014). The challenging dynamics of global North-South peacebuilding partnerships: practitioner stories from the field. *Journal of Peacebuilding & Development*, 9(3), 65-81.
- Confortini, C. (2006). Galtung, violence, and gender: the case for a peace studies/feminism alliance. *Peace & Change*, 31, 333-367.
- Courtheyn, C. (2018). Peace geographies: expanding from modern-liberal peace to radical trans-relational peace. *Progress in Human Geography*, 42(2), 741-758.
- Fraser, N. (1991). Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy. In C. Calhoun (Ed.), *Habermas and the public sphere* (pp. 109-142). Cambridge, MA: MIT Press.
- Fraser, N. (1995). Politics, culture and public sphere: toward a postmodern conception. En K. Nicholson & S. Seidman (Eds.), *Social postmodernism beyond identity politics* (pp. 287-312). Cambridge: Cambridge University Press.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Odecofi-Cinsep-Colciencias.
- Gutiérrez Sanín, F. (2016). Los análisis históricos y conceptuales que inspiran esta investigación. Construcción, deconstrucción y reconstrucción del Estado. Una revisión de la literatura nacional e internacional. En C. López, *Adiós a las FARC. ¿Y ahora qué?* Bogotá: Debate.

- Lekha Sriram, C. (2007). Justice as peace? Liberal peacebuilding and strategies of transitional justice. *Global Society*, 21(4), 579-591.
- Mac Ginty, R. (2008). Indigenous peace-making versus the liberal peace. *Cooperation and Conflict*, (43), 139-163.
- Mac Ginty, R. (2010). Hybrid peace: the interaction between top-down and bottom-up peace. *Security Dialogue*, 41, 391-412.
- Martín, O. M. (2013). Capítulo V. Desfragmentando el “consenso de la construcción de la paz liberal”: un análisis a partir de Sierra Leona y de la reforma del sector seguridad. En I. Ruiz-Giménez Arrieta (Ed.), *El sueño liberal en África subsahariana. Debates y controversias en torno a la construcción de la paz* (pp. 150-187). Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Marulanda Taborda, A. F. (2018). *Construcción de paz desde abajo: acciones de paz de mujeres en Guatemala y Colombia* (Trabajo de obtención de grado, Maestría en Derechos Humanos y Paz, ITESO, Tlaquepaque, Jalisco, México).
- Moola, S. (2006). Women a peace-building: the case of Mabedlane women. *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, (69), 124-133.
- Nay, O. (2013). Fragile and failed States: critical perspectives on conceptual hybrids. *International Political Science Review*, 34(3), 326-341.
- Neufeldt, R. C., Klassen, M. L., Danboyi, J., Dyck, J., & Zakka Bako, M. (2020). Gaps in Knowledge about local peacebuilding: a study in deficiency from Jos, Nigeria. *Third World Quarterly*, 41(7), 1103-1121.
- Paarlberg-Kvam, K. (2019). What’s to come is more complicated: feminist visions of peace in Colombia. *International Feminist Journal of Politics*, 21(2), 194-223.
- Paffenholz, T. (2015). Unpacking the local turn in peacebuilding: a critical assessment towards an agenda for future research. *Third World Quarterly*, 36(5), 857-874.
- Rigual, C. (2018). Rethinking the ontology of peacebuilding: gender, spaces, and the limits of the local turn. *Peacebuilding*, 6(2), 144-169.
- Roberts, D. (2011). Beyond the metropolis? Popular peace and post-conflict peacebuilding. *Review of International Studies*, 37(5), 2535-2556.
- Rocha Menocal, A. (2011). State building for peace: a new paradigm for international engagement in post-conflict fragile States? *Journal Third World Quarterly*, 32, 1715-1736.
- Ruiz-Giménez Arrieta, I. (2013). Capítulo 1. Introducción. La “paz liberal” en África: debates y prácticas. En I. Ruiz-Giménez Arrieta (Ed.), *El sueño liberal en África subsahariana. Debates y controversias en torno a la construcción de la paz* (pp. 13-47). Madrid: Los Libros de la Catarata.

- Salamanca Santos, M. del P., & Uribe Sarmiento, J. J. (2019). Aprendiendo a ser fuertes y emprendedoras. Estrategias de supervivencia en mujeres desplazadas víctimas del conflicto armado. En *Gobierno y gobernanza. Desplazamiento forzado, análisis para la prevención y la restauración de los vínculos sociales rotos*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Recuperado de <https://pure.unibague.edu.co/es/publications/aprendiendo-a-ser-fuertes-y-emprendedoras-estrategias-de-superviv>
- Sanz, E. (2010). *Estadocentrismo, sociocentrismo y estatismo en la construcción de paz posbélica*. Bellaterra, España: Escola de Cultura de Pau, MRA, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Tom, P. (2013). In search for emancipatory hybridity: the case of post-war Sierra Leone. *Peacebuilding*, 1(2), 239-255.

Capítulo 2

El papel de la investigación acción transformadora en la construcción de paz territorial

Iokiñe Rodríguez Fernández, Cristina Sala Valdés, Nohora Isabel Barros Navarro, María del Pilar Salamanca Santos, Santiago Andrés Padilla Quintero, María Teresa Armijos Burneo

Introducción

La guerra y la paz han sido ampliamente investigadas en Colombia desde hace décadas. Que el conflicto armado figure entre unos de los más largos a nivel internacional sin duda tiene mucho que ver con esto. También el hecho de que las guerrillas de las FARC y el ELN tengan una longevidad sin par en el continente. Esto ha llevado a que Colombia se haya constituido en una suerte de laboratorio de investigación que ha alimentado una amplia gama de perspectivas tanto analíticas como teóricas que han buscado explicar la razón de ser de este largo conflicto, así como entender las dinámicas de conflictos armados y sociales de manera más amplia. Colombia también se ha destacado por la proliferación de iniciativas de construcción de paz (paces) que han surgido en las últimas décadas desde lo local, lo cual igualmente ha sido objeto de gran interés investigativo (Richmond, 2011; Mac Ginty y Richmond, 2011). Además, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC y el gobierno Nacional, se abrió un nuevo compás para entender las dinámicas de transición de guerra a la paz, y con ello han surgido nuevos intereses de investigación (Estrada, 2019).

Sin embargo, a pesar de la amplia gama de temas de investigación sobre el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia, poco se

habla del rol que puede tener la investigación como motor de cambio en esa transición de la guerra a la paz cuando se hace con los propios actores que han formado parte de las dinámicas del conflicto.

Este capítulo ofrece esta perspectiva. Para ello nos basamos en la experiencia del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”, trabajando con organizaciones comunitarias del sur del Tolima en el estudio de sus experiencias de construcción de paz en medio del conflicto. Un recuento más detallado y reflexivo de la investigación, con atención también a las dudas y acomodos que fuimos experimentando los investigadores-coordinadores, al entrar en diálogo con las organizaciones, está disponible en un libro de sistematización del proceso (Rodríguez et al., 2021).

El capítulo está dividido de la siguiente forma. En una primera sección, discutimos algunos elementos conceptuales que indican cómo entendemos la construcción de paz territorial y el papel que puede jugar la investigación acción transformadora en este proceso. En el segundo apartado, definimos en mayor detalle qué entendemos como investigación acción transformadora, con un foco en el proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”. En la tercera parte, presentamos en detalle las metodologías que desarrollamos en el proyecto para investigar con las organizaciones sus procesos de construcción de paz. En la cuarta sección, analizamos los aportes que le ha significado a las organizaciones el proceso de investigación; y cerramos, en el quinto apartado, con unas reflexiones finales sobre los impactos a largo plazo del proyecto.

Claves conceptuales para una investigación acción transformadora en construcción de paz desde lo local

Uno de los aportes clave del Acuerdo de Paz de 2016 fue el concepto de paz territorial introducido por Sergio Jaramillo (2014), el comisionado a cargo del proceso de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por su foco en la necesidad de crear incentivos e instituciones que ayuden a organizar el desarrollo territorial y a hacer valer los derechos constitucionales de todos los ciudadanos por igual.

Entre los aportes novedosos de esta forma de abordar la construcción de paz, destacan los siguientes:

- Descentra el conflicto armado y lo reconoce como un problema territorial.

- Hace explícita la necesidad de democratizar el proceso de desarrollo como salida integral al conflicto armado.
- Reconoce la necesidad de movilizar las comunidades rurales para construir, a través de la planeación, una noción conjunta de desarrollo y levantar las bases de la institucionalidad estatal.

Sin embargo, en esencia, se trata de un enfoque estatista basado en la construcción y consolidación de instituciones ordenadoras del territorio que permitan: a) determinar el mejor uso y distribución del espacio; b) recuperar las relaciones entre la nación y sus entidades y unidades de dirección territorial; c) consolidar la descentralización y la autonomía territorial; d) crear las regiones, círculos electorales, provincias y áreas metropolitanas; e) formular planes de ordenamiento territorial nacionales, regionales y locales; y f) recuperar los territorios que la guerra ha deteriorado (Borja, 2016).

El foco en la construcción de paz a través del respeto por los derechos constitucionales de los ciudadanos y en la construcción de una institucionalidad democrática más equitativa permite abordar dos de las formas de violencia presentes en el conflicto armado y que es posible que se extiendan en la planeación del territorio en el posacuerdo: la violencia directa y la violencia estructural, pero deja por fuera otra forma de violencia que tiene que ver con dinámicas más invisibles de exclusión y dominación que históricamente han dificultado la integración de perspectivas y saberes locales en los procesos de desarrollo y ordenación territorial: la violencia cultural o epistémica.

Mientras la violencia directa refiere a actos violentos físicos y psicológicos dirigidos intencionalmente contra personas, la violencia estructural se refiere a sistemas políticos, económicos y sociales que afirman mecanismos de explotación, represión o exclusión (Galtung, 1969). La violencia cultural o epistémica, por su parte, legitima las otras dos formas de violencia a través de la imposición, muchas veces invisible, de sistemas de valores y creencias que excluyen o violentan la integridad física, moral o cultural de ciertos grupos sociales al subvalorar sus propios sistemas de valores o creencias (Galtung, 1990).

Esta última forma de violencia tiene expresión en el modelo de desarrollo dominante como discurso y visión de mundo homogeneizante, y los cambios culturales y de identidad que se han venido dando en nuestra región producto de procesos de modernización, de construcción de conocimiento y políticas educativas que han terminado erosionando o fragmentando las visiones de

mundo y conocimientos locales (Santos, 2010; Walsh, 2007). En muchos casos, producto de este proceso, el conocimiento local es invisibilizado o escondido como forma de protección cultural o por simple vergüenza étnica. La falta de atención a esta forma de violencia, y en especial a un análisis profundo del modelo de desarrollo nacional y sus efectos sobre las condiciones de inequidad y riqueza en el país, fue uno de los puntos cuestionados por los movimientos sociales del Acuerdo de Paz de 2016 (Salcedo, 2015).

Un enfoque de construcción de paz que no aborde la violencia cultural o epistémica corre el peligro de reproducir o generar nuevas formas de violencia, tal como está pasando en diferentes regiones del país con el avance de actividades extractivas y el asesinato de líderes y excombatientes tras la firma del Acuerdo de Paz (Salazar et al., 2018).

Una paz territorial duradera requiere, además de los esfuerzos realizados desde la institucionalidad del Estado para fortalecer el control y desarrollo territorial, de procesos que desde las bases ayuden a construir una mayor justicia epistémica o cognitiva en la manera como se define y conceptualiza la propia paz. En otras palabras, se hace indispensable generar procesos que ayuden a resignificar la construcción de paz territorial desde lo local, contribuyendo a fortalecer tanto la agencia y el sentido de responsabilidad relacional local (Moix, 2020) como las visiones del mundo y cosmovisiones, significados de la naturaleza y sistemas de conocimientos que la guerra y las políticas del Estado han invisibilizado.

El concepto de *paz positiva cultural* de Galtung (1990) da aportes importantes en este sentido, ya que habla de la importancia de reconocer la diversidad de perspectivas e interpretaciones del mundo, aceptar y respetar lo diferente, adoptar el principio de la unidad en la diversidad entre todas las formas de vida humana y no humana. Esto implica, como diría Arturo Escobar (2016), pensar en la paz fuera de las categorías de la modernidad y más como el diseño para la autonomía y la liberación de la Madre Tierra, y desde la diversidad.

Para resignificar la paz territorial desde lo local y la diversidad, por lo tanto, es necesario, por un lado, comenzar por *resignificar el propio pos-conflicto o posacuerdo* como un proyecto crítico del proceso civilizatorio de la modernidad y como un proyecto en el cual sea posible refutar aquellas ideas, valores y políticas propias de la modernidad, que han derivado en un mundo desigual, poco incluyente y violento.

Por otro lado, es necesario *resignificar la identidad* de los protagonistas del Acuerdo de Paz más allá de la ‘víctima’ o ‘el guerrillero’, y desde las raíces, los conocimientos locales y la dignidad de quienes habitan los territorios diversos de Colombia.

Por último, es necesario *resignificar el territorio* más allá de la ordenación del espacio y de la construcción de institucionalidad para dar reconocimiento a la presencia histórica, el sentido y significado de lugar, la restitución de los vínculos con el lugar y las visiones de futuro de quienes habitan los territorios.

La construcción de paz territorial desde lo local requiere también de procesos que ayuden a fortalecer las iniciativas de paz locales que ya están en marcha en muchas partes del país y que permanecen a menudo invisibilizadas, para potenciar el poder transformador de las comunidades a favor de la construcción de paz.

La investigación acción transformadora (IAT) puede jugar un papel importante en este proceso por su foco en la coconstrucción de conocimiento social generado desde experiencias investigativas ‘sembradas’ en la sensibilidad de los sujetos sociales y subjetividades (Zuluaga de Prato, 2012).

Lo que distingue la IAT de otras formas de investigación participativa (Kemmis y Mc Taggart, 1992; Latorre, 2003) es su foco en “recrear posibilidades dinámicas de conocimiento y aprendizaje dialogadas y generadas desde la reflexión crítica; desde el contexto, desde lo hologramático (micro-macro) de lo social, desde la reflexividad, desde la recursividad (no causa-efecto) compleja, desde el valor de lo colectivo, y desde una visión abarcadora de la realidad social, el conocimiento y la acción” (Zuluaga de Prato, 2012). Se trata en esencia de una forma plástica, dialógica y dinámica de hacer investigación, cuya acción es en respuesta a la expresión de la voluntad y decisión comunitaria del empoderamiento popular.

La investigación se constituye de esta manera en una herramienta puesta al servicio de la comunidad para ayudar a articular, visibilizar y fortalecer saberes, experiencias y visiones locales de construcción de paz.

Haciendo investigación acción transformadora en el sur del Tolima: una metodología situada para investigar la paz

El proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” es un proyecto de investigación participativa dirigido a apoyar la paz sostenible en el sur del Tolima, colaborando con maestros/maestras, estudiantes y miembros de organizaciones

comunitarias de los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Participan como coinvestigadores maestros de un total de ocho escuelas (dos por municipio) y líderes de ocho organizaciones comunitarias, lo que hace que el equipo de investigación, en su conjunto, sume más de 100 personas entre investigadores del equipo coordinador (de la Universidad de Ibagué, de la Universidad de East Anglia y Eureka Educativa), maestros y líderes.

El fin último del proyecto es ayudar a generar desde el espacio escolar y comunitario propuestas que permitan crear o consolidar procesos de construcción de paz territorial desde lo local. El proyecto ha sido imaginado desde dos temas vertebrales: por un lado, la vida en la escuela y el conflicto armado; y, por otro, la construcción desde lo cultural-territorial de una visión compartida de futuro. Así mismo, el proyecto está siendo abordado a través de dos miradas sobre la construcción de paz: una que se pregunta por cómo el conflicto ha impactado en la escuela y qué transformaciones ha provocado en el ámbito escolar; y otra que se interroga por la manera en que las organizaciones comunitarias han construido/construyen paz en medio del conflicto.

En este texto ponemos el foco en las metodologías que hemos desarrollado para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación: cómo las organizaciones construyen paz en medio del conflicto. La respuesta a la primera pregunta de investigación es abordada por Lozano *et al.* (en imprenta) en una publicación aparte.

El sur del Tolima posee múltiples formas organizativas locales que conservan la paz como un anhelo de futuro. Las ocho organizaciones comunitarias que hacen parte del proyecto como coinvestigadores y coinvestigadoras son una muestra de esta diversidad. Unas de ellas son asociaciones cafeteras, de hombres, de mujeres y mixtas; hay organizaciones de jóvenes, de mujeres y ambientales. Algunas de ellas con un largo recorrido y otras más noveles, o incluso organizaciones que tuvieron que frenar su andadura por un aumento en la intensidad del conflicto.

En concreto, se trabajó en Chaparral con la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, Aprovocal y Asocalarama; en Ataco con Asproicol y Ascafesagrado; en Planadas con Fupapt; y en Rioblanco con Asumeht y el Grupo de Jóvenes de Herrera (ver figura 2.1). Algunas de estas organizaciones ya venían trabajando juntas en aspectos productivos, como las asociaciones cafeteras Aprovocal (un proyecto pionero en Tolima de indígenas pijaos productores

de café) y Asocalarama (una asociación cafetera de hombres). También Asumeht (Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima) y el Grupo de Jóvenes de Herrera venían reuniéndose desde 2018 con el fin de recuperar la memoria de los mayores de Herrera. Las organizaciones cafeteras de Asproicol y Ascafesagrado de El Paujil han comenzado a encontrarse a partir de este proyecto. En los capítulos 3, 7, 9 y 11 se discuten las visiones de paz recogidas en el proyecto de cada una de estas organizaciones.

Para las investigadoras del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”, investigar la paz desde lo local ha significado la puesta en marcha de un camino para visibilizar lo extraordinario de las experiencias de resistencia civil, de cuidado colectivo de la vida, convocando así al reconocimiento de las capacidades para construir paz que emanan del poder, de la fuerza comunitaria. Esta es una apuesta ética, política, epistemológica-sentipensante, solidaria y de autocuidado, comprometida, intercultural y lúdico-estética.



Figura 2.1. Los coinvestigadores de las organizaciones comunitarias

Fuente: foto de Iokiñe Rodríguez Fernández.

Decimos que es una apuesta *ética* porque se basa en la propuesta de los actores locales de poner en el centro de las reflexiones los proyectos de vida colectivos, pues es lo que da fuerza y motoriza lo político en sus regiones. Es *política* porque le da un lugar a la paz en un mundo donde los conflictos y

violencias abarcan todos los espacios. Es *epistemológica-sentipensante* porque rompe con las formas tradicionales de investigación y permite la apertura a las emociones, los saberes y metodologías que emergen de lo comunitario, pero dialogan con el saber académico, evitando así reproducir la violencia epistémica en el proceso de investigación. Es una apuesta *solidaria y de autocuidado*, dado que las dinámicas de conflicto armado siguen vigentes en los territorios (aunque no con la misma intensidad), por lo cual la investigación debe estar abierta a moldear sus lenguajes y referentes sobre la marcha para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las y los coinvestigadores. Es *comprometida* porque tiene como centro la generación de conocimiento que contribuya con procesos de liberación, justicia e igualdad social, y, por lo tanto, busca producir conocimiento que sea pertinente y útil para las propias comunidades en la reafirmación de sus proyectos sociales y políticos. Es *intercultural* porque, partiendo de un reconocimiento de las asimetrías históricas en la construcción de conocimiento (Walsh, 2005), el diálogo de saberes entre diferentes sistemas de conocimiento se constituye a la vez en el andamiaje y el fin mismo de la investigación. Es *lúdico-estética* porque la forma de construir conocimiento trasciende los métodos racionales tradicionales y se adentra en otras formas artísticas de construcción de conocimiento, como las artes plásticas, la costura y el tejido, el teatro, las exposiciones museográficas, la fotografía y el video, el uso de lego para la construcción de prototipos de paz y, en tiempos de pandemia, los webinars.

Se ha apostado por la utilización de una gama diversa de metodologías participativas que permitan un diálogo fluido, en un entorno de confianza y en el que se valoren las inquietudes presentes. En este proceso, el reto está en el investigador/a externo/a que genera conversaciones pertinentes, emergentes en el presente y principalmente moderadas por las propias comunidades.

Se trata de un acercamiento al proceso de investigación desde lo que denominaríamos indisciplina, es decir, problematizando la relación del investigador con el problema, con lo investigado, y “transitar a una investigación sin objeto” (Colectivo Situaciones, 2002, en Haber, 2011, p. 17). Ello implica también que sea una investigación sin sujeto —pues si no hay pregunta de investigación (no hay objeto) no se puede presuponer que haya sujeto que formule—. “La investigación indisciplinada hace de un problema de investigación una situación, una excusa para pensarnos y revelarnos a nosotros habitando el mundo y objetivando, no para que ese ‘nosotros’ sea

nuestro nuevo objeto, sino para que en todo caso reconozcamos las relaciones en las que somos ya sujetos” (Haber, 2011, p. 18). Este proceso rompe con las jerarquías de poder establecidas desde la construcción de ciencia occidental colonial (Santos, 2010) para poder iniciar conversaciones con la otredad que permitan el diseño de procesos de paz endógenos. Dichas conversaciones y discursos han permitido crear un espacio de reflexión en el que brotan las inquietudes presentes en las comunidades y se convierten en nuestros anclajes para la intervención política del espacio, y *diseñar* (soñar las transformaciones de) la cultura política local. De esta manera dibujamos un camino para nuestra comprensión de las resistencias locales y su construcción de paz en medio del conflicto a partir de una variedad de métodos de investigación.

Métodos para resignificar y motorizar la construcción de paz territorial desde lo local

Para potenciar el efecto de acción transformadora de la investigación, se utilizaron dos tipos de métodos: a) métodos para investigar y dialogar sobre la paz territorial; y b) métodos para visibilizar las visiones de paz territorial desde lo local.

a) Investigando y dialogando sobre la paz territorial desde lo local

Para investigar las formas de construcción de paz desde lo local, se han desarrollado tres tipos de encuentros de investigación:

Talleres in situ en las comunidades

Estos se han llevado a cabo en cada municipio o vereda, donde hemos trabajado en los espacios que la comunidad ha dispuesto para ello (sus casas, las sedes de sus organizaciones, el vivero comunitario, etc.). Desde estos espacios de intimidad, han emergido los intereses y propuestas de investigación propias de las organizaciones. Se han desarrollado en total ocho talleres *in situ* con diferentes metodologías para ayudar a sistematizar, a analizar críticamente y a dar sentido a las diferentes formas en que se viene construyendo paz desde lo local en el sur del Tolima. Los métodos usados se ajustaron a cada organización, dependieron de sus propias formas de construcción de paz, de sus elecciones para investigar, reflexionar sobre y potenciarlas, y para hacerlas visibles.

Caminos de vida: todas las organizaciones comenzaron su proceso de investigación realizando un camino de vida personal. Este camino les permitió reflexionar acerca de su trayecto de vida personal, familiar y organizacional, sus logros y sus retos por cumplir. Jóvenes o mayores, líderes y miembros de la comunidad reflexionan sobre quién soy, quién he sido, dónde estoy, cómo he llegado hasta aquí y hacia dónde me dirijo.

Mapeo participativo: en Risalda, Herrera, El Paujil (ver figura 2.2), este método permitió visitar lugares comunes de los territorios y renombrarlos desde los personajes que les dan vida, desde las historias del pasado, desde el legado de los ancestros, lo que los hace sentirse orgullosos (como la riqueza natural y humana) y sus sueños a futuro.

Relatos colectivos: principalmente desde la oralidad todas las organizaciones han indagado sobre su razón de ser, las dificultades o retos que les hicieron organizarse colectivamente, sus apuestas políticas y los aprendizajes que han ido recogiendo en el camino.

Campañas comunicativas: focalizadas en una serie de inquietudes colectivas, estas campañas comunicativas permitieron en El Paujil y Risalda indagar sobre y profundizar en valores nucleares que vertebran la vida en comunidad y que han permitido a los pobladores mantener firmes los lazos colectivos o, por el contrario, reflexionar sobre los valores que harán posible una comunidad activa y fortalecida.

Líneas de tiempo: este método hizo visibles los procesos de las organizaciones de Fupapt y la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Las líneas de tiempo generaron conversaciones desde las que se ordenó y se puso en valor cada paso dado por las organizaciones, y verlo en perspectiva municipal, regional y nacional.

Cartografías del cuerpo: las organizaciones de mujeres que hicieron parte del proyecto usaron este método en reconocimiento del cuerpo-territorio como un lugar de lucha y reivindicación, donde se albergan memorias, surgen sueños, deseos, frustraciones, etc.

Fotografía comunitaria: en Risalda, Herrera, El Paujil y Planadas, la fotografía comunitaria fue el método para profundizar sobre y comprender la importancia de conceptos clave que iban emergiendo y que arrojaban luz sobre los procesos que las organizaciones venían adelantando. Conceptos como paz ambiental, juventudes alternativas, liderazgo, convivencia se convirtieron en fotografías de los territorios.

Videos participativos: la pandemia ha impedido que los videos participativos siguieran su recorrido tradicional para convertirse en un proceso colectivo que el equipo coordinador ha apoyado desde la distancia. Un proceso en el que las dos organizaciones de Herrera, Fupapt y la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, han podido reflexionar colectivamente acerca de la historia que querían contar y cómo la querían contar. Este proceso, que incluye una etapa de reflexión, planificación, grabación y edición, activa la búsqueda de sentido y conecta presente-pasado-futuro, lo que ha hecho florecer procesos de resignificación que se venían intuyendo a partir de métodos anteriores (ver figura 2.3).

Narración y escritura de memoria institucional: a partir de talleres de escritura colectiva, en los que se incluyó la ideación de la línea de tiempo y la realización de dibujos insignia, la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz fue cuestionándose sus puntos clave, cuál era su proceso histórico y político, quiénes eran las figuras importantes en el relato, qué transformaciones se habían dado a lo largo de los años, cuáles eran los logros colectivos, etc., hasta dar lugar a los capítulos que componen su libro (ver figuras 2.4 y 2.5).



Figura 2.2. Mapa participativo de Risalda

Fuente: foto de Cristina Sala Valdés.



Figura 2.3. Miembros de la organización Fupapt filmando testimonios de construcción de paz territorial en Planadas

Fuente: foto de Mauro Cardona.





Figuras 2.4 y 2.5. Integrantes de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz en el “Taller de narración y escritura de su memoria institucional”

Fuente: fotos de Mauro Cardona.

Talleres de diálogo entre las organizaciones

Aulas de pensamiento “Sentipensando el territorio”, “Educación para la paz integradora” y “Nuevas ciudadanías”: estos talleres se dictaron como preámbulo al “Taller general 2” (ver más adelante). El propósito era doble: por un lado, reflexionar alrededor de los temas que habían surgido en el trabajo de campo; y, por otro, preparar una exposición que compartir con los maestros y maestras. Se trataba de una propuesta kinésica, de reflexión y revolución, en la que trabajasen distintos sentidos, se pusieran en común distintos sentires y se pudiera realizar una muestra colectiva de cosmovisiones de resistencias. Desde el diálogo y la reflexión se abordó no solo lo evidente, sino también lo simbólico, que queda entre líneas o, incluso, no dicho. Los y las coinvestigadoras elaboraron murales colectivos e individuales, organizaron exposiciones, se grabaron en video, diseñaron talleres para realizar en las escuelas, etc. (ver figura 2.6).

“Taller sobre visiones de paz”: este taller buscaba abrir un espacio de reflexión colectiva para que las organizaciones recapacitaran sobre su propio trabajo e hicieran visible la necesidad de imaginar el territorio colectivo como espacio de construcción de paces diversas e interconectadas. Las diferentes asociaciones fueron las protagonistas de una jornada de intensa reflexión, creatividad y análisis del territorio en el que desarrollan su vida cotidiana,

su vida familiar y actividades económicas, y las diversas actividades de construcción de paz asociadas a estas.

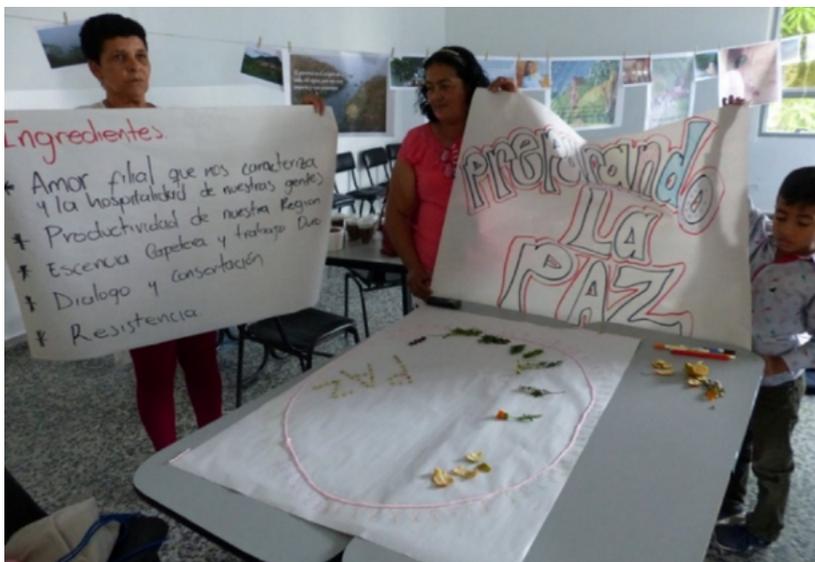


Figura 2.6. Integrantes de Asumeht durante el taller “Sentipensando la paz”

Fuente: foto de Iokiñe Rodríguez Fernández.

“*Taller sobre poderes transformadores*”: en este taller las ocho organizaciones del sur del Tolima hablaron de los poderes hegemónicos y transformadores que están presentes en el territorio y que están impactando la construcción de paz en las comunidades. Todo el encuentro estuvo presidido por la idea de que, como organizaciones, poseemos una serie de capacidades que nos otorgan poder para el cambio. Una fuerza comunitaria que nos habla, más allá de la resistencia, de una imaginación, unas experiencias y unas esperanzas colectivas para el sur del Tolima. En esta jornada se utilizaron diferentes herramientas, como las estatuas humanas y el teatro del oprimido, para reflexionar sobre los conceptos de paz y guerra, y sobre las dinámicas de poder que han tenido que vivir las organizaciones en el conflicto armado y desde la firma del Acuerdo de Paz (ver figuras 2.7 y 2.8). En el capítulo 3 de este libro, se discuten en detalle los resultados arrojados por la investigación sobre los distintos poderes transformadores de las organizaciones comunitarias en la construcción de paz territorial.



Figura 2.7. Haciendo teatro del oprimido para discutir diferentes tipos de poder en la guerra y la paz

Fuente: foto de Iokiñe Rodríguez Fernández.



Figura 2.8. Presentando los resultados de trabajo de grupo sobre los diferentes poderes transformadores de las organizaciones en el sur del Tolima

Fuente: foto de Iokiñe Rodríguez Fernández.

Serie de conversatorios virtuales “Compartamos sueños y paces”: este espacio para la conversación estuvo estructurado en cinco sesiones: 1) “Medio ambiente y paz”, 2) “Mujer y paz”, 3) “Café y paz”, 4) “Cultura y paz”, e 5) “Investigación y paz”. Debido a la pandemia, los encuentros físicos se vieron limitados. Estas conversaciones virtuales (ver figura 2.9) permitieron a todo el equipo investigador indagar sobre lo aprendido en el proceso de investigación. Dependiendo de la sesión, unas u otras organizaciones compartieron sus experiencias en construcción de paz territorial y sobre los aprendizajes que se derivan del proceso de investigación.



Figura 2.9. Sesión 1: “Medio ambiente y paz”, con la participación de Jefferson Rodríguez (Fupapt), Julieth Katherine Escobar (Herrera Juvenil), Nohora Barros (Universidad de Ibagué) y Teresa Armijos (Universidad de East Anglia)

Fuente: foto de Iokiñe Rodríguez Fernández.

Talleres entre organizaciones y maestros

Los talleres generales entre maestros y organizaciones fueron pensados para socializar los procesos de investigación que se llevan localmente y generar diálogos de saberes entre las organizaciones, los maestros y maestras, y el equipo investigador coordinador. En total se llevaron a cabo tres talleres generales de dos días de duración con todos los coinvestigadores del proyecto. Los temas fueron los siguientes: a) investigar el conflicto y la paz; b) el territorio que sentimos; y c) construir paz sostenible desde el territorio. En los tres talleres se utilizaron las exposiciones museográficas y diversas dinámicas reflexivas para promover el diálogo de saberes entre maestros y

organizaciones sobre sus experiencias de vida en el conflicto armado y en la construcción de paz.

Al culminar el proyecto, y como resultado del último taller general, se contó con siete propuestas que condensan la visión que tienen los equipos de las escuelas y organizaciones acerca de las maneras de construir una paz sostenible para su territorio (ver cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Propuestas elaboradas por maestros y organizaciones de los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco para el trabajo conjunto en la construcción de paz

- “Proyecto contra la violencia hacia niñas y niños”. Chaparral, IE Manuel Murillo Toro y Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz.
- “Mujer valiosa... transformadora de vida”. Risalda, Chaparral, IE Risalda, Aprovocal y Asocalarama.
- “Velada cultural: tejido del pensamiento”. Rioblanco, IE Francisco Julián Olaya, IE San Rafael, Asomeht y Herrera Juvenil.
- “Tejiendo y cocinando como la abuela”. Rioblanco, IE Francisco Julián Olaya, IE San Rafael, Asomeht y Herrera Juvenil.
- “Planadas: mi cuna, mi gran corazón”. Planadas, IE Santo Domingo Savio y Fupapt.
- “Formación en cultura de paz desde la perspectiva de la producción del café, el arte y el juego”. Ataco, IE Santiago Pérez y Asproicol.
- “Construyendo entornos pedagógicos”. Ataco, IE Martín Pomala y Ascafesagrado.

b) Haciendo visible las visiones locales de paz territorial

Un compromiso con las organizaciones desde los inicios de la investigación fue la producción de productos que ayudaran a hacer visibles los diferentes procesos de construcción de paz que estaban adelantando, así como sus visiones de paz y de futuro deseado para el sur del Tolima. Estos productos fueron:

Mapas parlantes: los mapas parlantes son instrumentos metodológicos que permiten la organización y comunicación de información del medio social y comunal, a través de la diagramación de escenarios (pasado, presente y futuro) en mapas territoriales. Con el uso de fotografías y cámaras de video los líderes comunitarios de Asomeht y Herrera Juvenil (municipio Rioblanco), Asproicol y Ascafesagrado (municipio Ataco), y Asocalarama y Aprovocal (municipio Chaparral) recogieron información sobre la herencia cultural histórica y ambiental en sus territorios y sus visiones de futuro, la cual fue sistematizada en mapas digitales interactivos que están disponibles de manera pública para su uso en las escuelas o las propias organizaciones.

Libros coautorados: aunque la escritura creativa como método de investigación ha venido siendo empleada en diferentes campos, incluida la investigación sobre la paz, desde hace más de una década (Harper, 2008; Vass et al., 2008; Clark, 2019), la escritura creativa colectiva todavía está en su infancia. Este proyecto es innovador en el uso de la escritura creativa colectiva como metodología de investigación acción. En el proyecto se produjeron cuatro libros colectivos que recogen los distintos aspectos del proceso de investigación y que buscan revitalizar el conocimiento y la identidad local, y fortalecer el sentido de arraigo al sur del Tolima:

- *Construyendo paz desde el sur del Tolima*, realizado con niños, maestros y todas las organizaciones.
- *La paz con manos y rostro de mujer*, elaborado por la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz.
- *La fuerza comunitaria y la construcción de paz* —dos cartillas, creadas una por Asproicol y Ascafesagrado (municipio Ataco), y la otra por Asocalarama y Arovocal (municipio Risalda)—.

Un vestido típico: el proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” también fue innovador en la incorporación de metodologías de investigación lúdico-artísticas propuestas por las propias comunidades. La reconstrucción de la historia de la comunidad a través del uso del tejido y la recuperación de un vestido típico fue una propuesta usada por Herrera Juvenil y Asomeht de Herrera, Rioblanco. En el capítulo 8 de esta obra, se explica en detalle cómo se desarrolló dicha metodología (ver figuras 2.10, 2.11 y 2.12).

Videos participativos: los videos participativos son parte de una nueva tendencia global en la investigación acción (Shaw, 2012; White, 2003), como parte de enfoques de investigación que buscan promover el cambio social. La construcción de la paz es uno de ellos (Rodríguez e Inturias, 2016; Bau, 2014). De manera similar a otros métodos de investigación de acción que usan el arte, como “el teatro del oprimido” (Boal, 1993), los videos participativos son conocidos por su potencial para estimular la reflexividad local y la comunicación como parte de una agenda de investigación más amplia. Están hechos completamente por miembros de la comunidad a través de un proceso que incluye: aprender haciendo, análisis participativo (por medio del uso de una variedad de herramientas de evaluación participativa



Figuras 2.10, 2.11 y 2.12. Integrantes de Asumeht enseñando el prototipo del vestido a los maestros coinvestigadores del proyecto y a la representante del Minciencias durante la exposición museográfica del “Taller general 3”

Fuente: fotos de Mauro Cardona.

utilizadas para ayudar a crear la historia), crear un argumento y filmar, proyectar y editar. En nuestro proyecto, usamos videos participativos para dar visibilidad a las voces de líderes locales sobre los dos principales temas de investigación, pero también para fomentar el intercambio intercultural, los diálogos intergrupales y la coexistencia para la construcción de la paz durante el proceso de investigación y más allá. Se formaron grupos por cada organización para capturar una historia que represente su experiencia y perspectiva de construcción de paz. Hemos producido un total de tres videos participativos:

- Mujeres Chaparralunas: *Paz con manos y rostro de mujer.*
- Asomeht-Herrera Juvenil: *Reconstruyendo nuestra historia a través del tejido y el folklore.*
- Fupapt: *La paz ambiental.*

Cada uno de estos productos puede ser consultado y descargado en la página del Proyecto en la siguiente dirección: <https://pluriversodepazentolima.net/>. A continuación, presentamos algunos de los resultados preliminares que hasta la fecha ha generado esta forma de hacer investigación para el fortalecimiento de una paz territorial desde lo local.

Contribuciones de la investigación acción transformadora: aprendizajes en el camino

El proyecto ha sido un espacio de aprendizaje y lo valoro de esta manera: una posibilidad donde no solo los territorios y las personas tengan que acudir a la academia, sino que Uds., los académicos y las personas que trabajan en estos espacios, puedan venir y desplazarse hacia los territorios para tener un aprendizaje colectivo donde aprendemos haciendo. Me parece también muy interesante diseñar estas nuevas formas de aprender. Yo creo que estos espacios nos permiten reiterar que no solo desde la academia es que se aprende dentro de los territorios, y estos procesos de investigación me parece que son y representan mucho más valor porque realmente representan las realidades que vivimos acá en las regiones. Yo creo que los resultados de todo lo que se ha mencionado en este encuentro y de lo que se ha

realizado a través del transcurso del proyecto ya se han visto reflejados. No creo que debamos esperar que los resultados positivos de este proyecto se vean a futuro. Esto es algo que empezó a caminar desde el mismo inicio del proyecto y es algo que me parece muy valioso, que no es como otros proyectos que se plantean desde un aspecto muy técnico y teórico, sino que implica que podamos participar de ello y que se vaya viendo esa evolución en la medida que se va desarrollando. Desde mi visión como coinvestigador del proyecto, me parece muy interesante que exista una relación estrecha entre Uds. como investigadores y que trascienda más allá de un aspecto técnico y teórico, y todos Uds. lo expresan de esa manera. Es algo mucho más emocional. Lograron crear una conexión con el proyecto, con el territorio, con cada uno de los elementos que nos constituyen como territorio, y me parece que desde esa mirada hace que sea mucha más rica esa lectura que se ha realizado y que contribuye [a crear] insumos para próximas investigaciones. Porque yo creo que esto es un inicio de algo que se puede empezar a materializar en otras acciones que puedan estar presentadas desde acá del territorio. Yo creo que todos estos aspectos y todo lo que Uds. mencionan desde la investigación, desde la experiencia y los productos que se generaron, productos físicos, pero también productos expresados en experiencias, van a contribuir a que las organizaciones en los territorios puedan generar un bienestar común en el tejido social de estos aspectos organizacionales en espacios específicos que hacen parte de la construcción de la paz de manera puntual. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo que va mucho más allá de lo que de pronto nos imaginamos al inicio donde nos reuníamos y hablábamos, proyectábamos y planificábamos, y tal vez nos sorprendió que el proyecto fuera llegar a esta fase donde solo nos vemos las caritas acá por medio de cámaras, pero que igual continuamos con la misma energía y positivismo para seguir trabajando.

Estas son las palabras de uno de nuestros coinvestigadores comunitarios, Jeferson Rodríguez, director de Fupapt, en uno de nuestros conversatorios virtuales “Compartamos sueños y paces”, diseñados para reflexionar sobre, y socializar, los procesos de construcción de paz de las organizaciones y el

aporte del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” en dichos procesos. Estos comentarios capturan muy bien la esencia del proyecto como una investigación situada en las propias experiencias de los coinvestigadores comunitarios. De igual manera, su valor como procesos de aprendizaje mutuo, donde todos aprendemos haciendo. Refleja también el valor de la investigación acción transformadora para la generación de cambios desde el proceso mismo de la investigación, en lugar de tener que esperar hasta que los resultados sean publicados para lograr impactos. Además, recoge bien la apertura en el proceso de investigación a las emociones en doble sentido, desde la academia y las organizaciones, como parte intrínseca del proceso de coconstrucción de conocimiento. Todo esto es parte de las cualidades éticas, políticas, epistemológica-sentipensantes, solidarias y de autocuidado, comprometidas, interculturales y lúdico-estéticas del proyecto.

De modo más específico, y con base en comentarios de los coinvestigadores comunitarios capturados a lo largo del proyecto en los talleres, en los productos producidos, en las conversaciones que tuvimos en las redes sociales y a través de los webinars, podemos decir que los espacios de aprendizaje y reflexión individual y colectiva creados por la investigación hasta la fecha han tenido contribución importante en dos sentidos: a) en la resignificación de la construcción de paz como proceso; y b) en el fortalecimiento de los procesos de construcción de paz puestos en marcha por las organizaciones.

a) Resignificando la construcción de paz

De receptores a agentes de cambio en el posconflicto/posacuerdo

Una primera dimensión en la que vemos se ha dado un proceso de resignificación importante con el proyecto es en la concepción de agencia de cambio dentro del nuevo escenario social y político que creó la firma del Acuerdo de Paz. Dado que los protagonistas del Acuerdo de Paz fueron el Estado y las FARC, y que la política de construcción de paz ha sido generada desde el Estado, existía en las comunidades en el inicio del proyecto una fuerte sensación de que la paz es algo que se construye desde afuera. Sin embargo, esto comenzó a cambiar cuando se empezó a prestar atención a las diferentes formas en que las organizaciones han venido construyendo paz en los territorios en medio del conflicto:

A pesar de la guerra nos mantuvimos en la lucha. Surgimos con procesos, como el de cultivar café, y cómo llevarlo al mundo. Hoy en día estamos construyendo el nuevo país, la nueva realidad. Como asociación hemos podido construir la paz porque fuimos los que vivimos ese proceso de lucha, permanente, de mucho sacrificio, donde muchos familiares quizá cayeron a manos de la guerra, pero así mismo nos hemos podido encaminar hacia los sueños. No dejamos de soñar nunca. Fue la consigna de todos nuestros antepasados y de los que surgimos. Para nosotros construir paz no es mirar el pasado, en cuanto a lo que sufrimos, pero [sí] aprender a ser pujantes, que es lo que nos ha caracterizado como campesinos. A ser el ave fénix, esos que son capaces de levantarse del fuego a surgir con más fuerza. Así es como nosotros, con organizaciones, con la lucha personal de cada uno somos capaces de construir la paz. Con esa fuerza, con esa fortaleza y con esa lucha diaria (Héctor Enover Yate, Asocalarama. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

En la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, logramos en estos quince años de pervivencia, resistir en el territorio sin salirnos de él. Nos tocó pasar muchos años en bajo perfil, mientras tanto nos capacitamos, validamos la primaria, el bachillerato. Ahora ya profesionales, incidimos en la política pública de la mujer, prevención de violencia contra las mujeres, y ocupamos los espacios de participación. Es una historia de altos y bajos, y construcción de paz en medio de la violencia, la nuestra (Dagmar Lucía Hernández, extracto del video participativo de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”).

En algunos casos, es solo a raíz de los procesos reflexivos abiertos por el proyecto que se comenzó a valorar la asociatividad como parte de una agenda local de construcción de paz: “Yo nunca imaginé que, al hacer una organización para cultivar café, estaba construyendo paz” (Cristina Noguera, Ascafesagrado. Comentario en el “Taller general 2”, julio de 2020).

De modo interesante, vemos que este es un aprendizaje expresado también por los maestros coinvestigadores del proyecto al conocer las iniciativas desarrolladas por las organizaciones y reflexionar sobre sus propios esfuerzos de construcción de paz en el entorno educativo:

Siempre pensamos que las políticas de paz deben venir de afuera y que son como las recetas milagrosas para que toda nuestra comunidad cambie y funcione a la perfección. O sea, algo de afuera para arreglar lo que ni siquiera conocen. El arreglo debe empezar por la casa y debe salir de nosotros mismos... Las instituciones educativas están en proceso de transformación tomando en cuenta su contexto social, natural y económico, generando prácticas y ambientes seguros para los niños y niñas y jóvenes y adolescentes, para que desarrollen sus proyectos de vida dentro del territorio y ayudar a la reconstrucción del tejido social para evitar la no repetición del conflicto armado, dando a conocer cómo nació, se ejerció y finalizó el conflicto armado como enseñanza de vida para transformarnos como sujetos activos de paz (Kip Wilson, maestro del municipio Planadas, Institución Educativa Santo Domingo de Planas, sede educativa El Silencio. Comentario en el “Taller general 3”, julio de 2020).

Esta resignificación no implica, sin embargo, una negación a la importancia del Acuerdo de Paz y al rol del Estado y otros actores en la construcción de una nueva institucionalidad, sino más bien su valoración como oportunidad para potenciar y fortalecer los procesos y sueños que ya existían de manera latente o silenciosa en las propias comunidades: “El proceso de paz nos ha hecho florecer, como el árbol de la vida” (Alixé Elcue, Asoemeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

La paz es un reto, porque se construye en el día a día. Muy diferente son los acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz nos han dado la oportunidad de una mayor participación, nos han dado la posibilidad de construir en colectivo, de asociarnos, y vemos que hay muchas cosas que hacen falta, pero tenemos todo el optimismo de que se puede, de que desde nosotros comienza ese gran cambio. Desde nosotros es que construimos la paz. Por ejemplo, vemos los PDT. Esos PDT se dan de acuerdo con la voluntad política de cada gobierno en el momento, pero dentro de nuestros territorios vamos construyendo, vamos formando, somos actoras del cambio, porque somos las llamadas a generar ese cambio desde nuestro territorio. Porque nosotras hemos podido, a través de estos acuerdos de paz, comenzar a transformar, salir de ese

rol de amas de casa a salir como líderes a fortalecer nuestros procesos organizativos (Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

De modo interesante vemos que el fortalecimiento del sentido de agencia local para el cambio ha llevado a una apropiación del posconflicto, ya no tanto como proyecto del Estado, sino como de las propias comunidades:

Para mí que estoy en este proyecto, el posconflicto lo hacemos cada uno de nosotros, no un gobierno, pues si tienes en cuenta la historia de Colombia, ningún gobierno se ha preocupado por nuestro derecho a vivir en paz. No sabes lo lindo que es vivir en posconflicto y tener la esperanza [de] que algún día será una paz perfecta. Tengo un hijo de 8 años y una bebé de 6 meses, y no sabe cómo me alegra que ellos no vivan lo que yo viví: zozobra, miedo, terror, angustia, frustración de mi sueño más preciado y lo peor es que normalicé la guerra, a tal punto de ser incrédula a la paz. Es cierto, el gobierno no nos está ayudando para nada, pero ya muchos sabemos que es vivir y tener en paz nuestro territorio, y no nos vamos a dejar arrebatar lo que tanto hemos soñado (Alixie Ulcue, Asomeht. Conversación en Facebook, 21 de octubre de 2019).

Un mayor reconocimiento de la agencia local en la construcción de paz lógicamente conlleva una resignificación de la paz misma, con un foco en la construcción de un tejido social resiliente, de nuevos valores y una nueva visión de futuro donde quepan los jóvenes dentro de sus territorios y no al margen de ellos, como ha sido la regla del conflicto armado, que se ha caracterizado por su fuerza de expulsión centrífuga hacia las generaciones más jóvenes:

La paz es ese tejido que se hace en el día a día, y no necesariamente como un acuerdo entre un Estado y un grupo armado. Se va construyendo en la medida que se van cambiando valores y significados (Alixie Ulcue, Asomeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

La paz supone visionar un futuro mejor para nuestros hijos y en nuestros territorios (María Escilda Ramírez, Asomeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

La paz ha traído la posibilidad de expresarnos sin miedo en cualquier ámbito. La paz también ha traído en nosotros los jóvenes un arraigo al territorio que nosotros antes no teníamos, por miedo de nuestros padres de pronto, nos enviaban a estudiar a otros lugares, o miedo incluso de nosotros mismos, como era un poco complejo quedarnos en el territorio por lo mismo. Todo eso ha traído un cambio en la estigmatización de nuestro pueblo, que ha ido generando nuevas visiones de nuestro territorio, no solo para nosotros, sino también para otras personas que quieren conocerlo y que antes tenían un concepto negativo de él (Julieth Katerine Escobar, Herrera Juvenil. Extracto de webinar 1: “Medio ambiente y paz”).

Resignificando la identidad de los tolimenses

Una segunda dimensión donde hemos visto que el proyecto ha ayudado a generar procesos de resignificación importantes es en la identidad de los coinvestigadores, producto de los diversos procesos de revitalización y recuperación cultural y de reconexión con el territorio desarrollados en la investigación y que la guerra había silenciado.

Este proyecto nos ha permitido recuperar lo que la guerra nos había quitado, rescatar lo propio, nuestro pasado e identidad, que quedaron borrados con la guerra, rescatando nuestros saberes propios, plantas medicinales, nuestra historia (Alixé Ulcue, Asomeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

También, para mí ese proceso de investigación ha sido muy bonito, porque a mí, en lo personal, me ha permitido darme cuenta de cosas de mi comunidad que desconocía, como, por ejemplo, personas que antes fueron líderes importantes, que aportaron grandes cosas al corregimiento y que yo no lo sabía. Conocer lugares que son importantes para la ecología, del bienestar de la comunidad, en general en cuanto al medio ambiente, conocer historias impactantes de personas importantes que desconocía. Hablaba con ellas, pero no conocía a fondo cuántas cosas habían podido vivir a lo largo de su vida. Entonces, cada una de las cosas que hicimos en cuanto a cartografía, a dibujos, las capacitaciones, los diálogos a ese compartir de vivencias en esos

encuentros que hacen tanta falta, pues es muy bonito encontrarse uno con esto (Héctor Enover Yate, Asocalarama. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

Pero quizá lo más valioso del proceso de investigación en términos de resignificación de la identidad fue la oportunidad que ofreció para que las agendas de revitalización cultural fueran desarrolladas en función de los intereses propios de las organizaciones. Así, mientras algunas organizaciones prefirieron reencontrarse con su pasado y su identidad a través de metodologías más académicas, como la cartografía social y los mapas parlantes, otras como Asumeht y Herrera Juvenil decidieron hacerlo mediante la reconstrucción de un vestido típico, el cual por medio del bordado en manos de la mujeres de Asumeht y un diálogo intergeneracional entre los jóvenes de Herrera Juvenil y abuelos de la comunidad reconstruyó la identidad y el pasado de los herrerunos:

A través del vestido estamos contando lo que fue y lo que existe en estos momentos en el territorio, cada dibujo para nosotros cuenta una historia. Por ejemplo, la gente que no conocía sobre los arrieros y cómo fue que aparecimos nosotros por acá. También, hay otras historias como el árbol de la vida y el árbol de la garza, que hace referencia a la hospitalidad de pueblo herreruno, y también tenemos historias del desplazamiento y del regreso, y lo que es la paz para nosotros.

El traje como símbolo de paz también nos permite decirles a los niños que hay otras formas de ocupar su tiempo libre, por ejemplo, una danza, creando arte, pintando, bordando, y eso hace que nuestros jóvenes se enamoren de nuestro entorno, del medio ambiente. En la medida que los jóvenes están conectados con la idea de proteger el ambiente, eso hace que haya una paz (Alixé Ulcue, Asumeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

El proyecto igualmente abrió la posibilidad a las propias organizaciones más jóvenes a pensarse y definirse de una manera acorde con los objetivos propios perseguidos por sus entes emergentes, con focos en nuevas agendas y asuntos de prioridad para la construcción de paz, como lo es el tema ambiental:

Nosotros, con este proyecto de investigación, empezamos a hablar de juventud alternativa y también empezamos a hablar de paz ambiental. Entonces, este tipo de lecturas que se realizan nos ofrecen la posibilidad de pensarnos a nosotros desde adentro, pero también a realizar una visión desde afuera de la organización. Entonces, cuando nos vemos a todos, y no solo las personas de Fupapt, sino con otras organizaciones del municipio que también están realizando trabajos supremamente importantes. Porque ya no solo somos nosotros, hay muchas organizaciones productoras que también empiezan a tener ese sentido ambiental, todo esto empieza a ser una oportunidad para construir paz. Y no solo la paz dentro de la armonía entre las personas, la inexistencia del conflicto armado, sino la paz ambiental, que la vemos como aquellas acciones que realizamos nosotros habitando el territorio que no generan impactos negativos, como hacer turismo ecológico o hacer una producción agrícola limpia. Entonces, surgen todos estos conceptos desde acá de Planadas, como lo son juventudes alternativas y paz ambiental (Jeferson Rodríguez, Fupapt. Extracto de webinar 1: “Medio ambiente y paz”).

Resignificando el territorio

Una tercera dimensión de resignificación en la que el proyecto ha tenido un impacto importante y que se desprende de las dos anteriores es la territorial.

Cuando entré en este proyecto tan hermoso, de una vez enfoqué mi vida en cómo construir el territorio. Lo más bonito de como nosotros comenzamos a construir la paz es desde esa fundamentación, desde el sentido de pertenencia que cada uno llevamos dentro y cómo podemos nosotros a través del tiempo afirmar nuestras descendencias y que ese sentido de pertenencia llegue a ser mucho más bonito. Que las personas luchemos cada día más por el territorio. La verdadera paz está en cuándo podemos surgir y tener oportunidades dentro de nuestros territorios (Héctor Enover, Asocalarama. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

El proyecto nos ha ayudado a conocer más nuestro territorio y a quererlo profundamente. Yo creo que esto es lo que a mí me queda como persona de este proyecto de conocer tantas historias que ha

habido en el territorio... Para mí eso es algo muy importante, es algo que me motiva a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir aportando al desarrollo social de esta región (Marinela Sánchez, Aprovocal. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

El fortalecimiento del sentimiento de arraigo y la reconexión con el territorio, además, han dado aportes relevantes para visionar de manera reflexiva un futuro diferente:

Para mí, el proyecto ha sido una oportunidad muy grande, porque nos han dado la posibilidad de visionarnos, primero identificando cada una de las cosas que tenemos, que de una y otra manera hemos podido ido adquiriendo en el proceso de la asociatividad: cómo nos hemos transformado, cómo nos han mejorado todos los procesos en los que hemos sido beneficiarios. Bueno transformar todo el proceso de la caficultura, y ahora nos estamos enfocando más en eso, y cómo podemos iniciar a reconstruir y ver qué se hizo mal, que se hizo bien y cómo podemos corregir algunas cosas para no cometer los mismos errores (Héctor Enover Yate, Asocalarama. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

Se ha comenzado, como resultado, a resignificar no solo el pasado, sino también el futuro posible del sur del Tolima, especialmente para las generaciones más jóvenes: “El mensaje más bonito que les tengo a los jóvenes es que un proyecto de vida se puede iniciar en cualquier parte, y especialmente desde nuestros territorios, y no solo en las ciudades, como muchas veces nos lo hacen creer” (Héctor Enover Yate, Asocalarama. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

En este proceso de resignificación territorial, el tema ambiental surgió como agenda común a futuro en todas las organizaciones, no solo de parte de las que tienen la agenda ambiental incorporada en sus líneas directrices, como Fupapt.

El tema ambiental no ha sido ajeno al conflicto. Si nos ponemos a analizar los orígenes del conflicto, sumado a toda la inconformidad que había, también había un tema muy ambiental con el tema del

campesinado. Entonces, si vamos a crear una agenda de paz, el medio ambiente tiene que estar ahí de la mano, aparte de todo porque fue en la ruralidad en donde más se ha padecido, y el conflicto armado como tal ha tenido y tiene muchas consecuencias. Ahora hay planes de desarrollo, hay que aprovechar todos estos temas en este contexto para lograr dentro de la agenda pública estas iniciativas ambientales, y en la agenda de construcción de paz es algo que no podríamos ni siquiera contemplar la posibilidad de dejarlo a un lado o de minimizar la acción del medio ambiente dentro de la construcción de la paz, porque la paz es como un sinónimo del medio ambiente. Y acá en Colombia, nosotros siendo el segundo país más megadiverso del mundo y el sur con nuestra riqueza hídrica son cosas de las cuales no nos podemos desligar (Jeferson Rodríguez, Fupapt. Extracto de webinar 1: “Medio ambiente y paz”).

En particular, el agua y la importancia de conservar las fuentes hídricas del sur del Tolima surgió como elemento articulador de la agenda de construcción de paz territorial a futuro:

En los cuatro municipios sentimos que nos une el medio ambiente, nos une el río Saldaña, nos unen las ganas de defender los derechos al agua... derechos que sentimos que nos unen, y que nos pueden llevar a tejer una unión de todos para construir paz (Julieth Katherine Escobar, Herrera Juvenil. Comentario en “Taller general 2”, julio de 2019).

Nosotros hemos decidido que vamos a lanzar una campaña de rechazo al plástico, porque todo el plástico se está yendo a las cuencas hídricas, entonces nos están dañando las fuentes de agua. Nosotros como territorio nos debemos de concientizar [de] que, sin agua, no podríamos vivir en ninguna parte, donde sea, porque el agua es vida, y enseñarles a nuestros hijos que el agua es vida. Entonces, no dañar las cuencas hídricas y aguas abajo, porque botamos mucho papel y plástico a las fuentes hídricas, y entonces yo diría que para proteger nosotros nuestros territorios debemos cuidar primeramente nuestras fuentes de agua (Cristina Mosquera, Ascafesagrado. Extracto webinar 3: “Café y paz”).

No debemos expandir las fronteras agrícolas, porque estamos desprotegiendo nuestras fuentes hídricas. El tema de los plásticos es cuestión de sentido de pertenencia, de querer nuestro territorio y saber que nosotros lo vamos a disfrutar, pero que vienen muchas más generaciones después de nosotros. Lo principal para proteger el territorio es quererlo, es sentirlo, es vivirlo. Creo que cuando nosotros nos encontramos en el territorio con los derrumbes, las erosiones, tantas situaciones, creo que no es nada agradable ni nada bueno. Entonces, cuando nosotros sentimos, queremos el territorio, luchamos por transformarlo, por conservarlo. Entonces, lo más importante es una caficultura que no sea impulsada solo por el amor del dinero, sino también por el amor de proteger y de lo que de aquí a mañana va a pertenecer a nuestros hijos. Entonces, esa es la consigna más importante: hoy estamos nosotros acá porque mañana vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, y que también tienen derecho a vivir lo que nosotros hemos vivido en un territorio que nosotros podamos conservar y dejarlo en las mejores condiciones para ellos (Héctor Enover Yate, Asocalarama. Extracto de webinar 3: “Café y paz”).

b) Fortalecimiento de los procesos de construcción de paz

Al reflexionar sobre los aportes de la investigación, los coinvestigadores comunitarios indican que, adicionalmente a los procesos de resignificación vivenciados, el estudio ha tenido una contribución importante en el fortalecimiento de sus procesos de construcción de paz en diferentes formas.

Fortaleciendo capacidades humanas

En primer lugar, podemos decir que la investigación ofreció un espacio nuevo para el aprendizaje reflexivo, la autoevaluación y la sistematización de las experiencias y trayectorias de las organizaciones, lo cual, además de su relevancia para la reconstrucción de su memoria histórica, ha tenido un gran valor ayudando a aflorar las capacidades humanas de los miembros de las organizaciones que permanecían en forma latente o invisible debido al conflicto armado.

Nosotras sentimos que el proyecto ha sido un gran apoyo para nosotras para poder sacar lo que teníamos guardado. Vivimos mucho

tiempo en una represión, donde no se podía pensar, donde no se podía expresar, y todo esto nos ha permitido sacar a flote todas nuestras ideas, lo que queremos, es una gran oportunidad que hemos tenido junto con Uds. Hemos compartido muchos sueños con las personas de Ataco, de Planadas, de Chaparral, hemos compartido anécdotas, también hemos visto las diferencias, para bien (Alixé Ulcue, Asomeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

Nos ha sorprendido mucho todo lo que hemos descubierto, no solamente de nosotros como personas que venimos de este conflicto, del temor, de las amenazas, sino también, analizando las cosas, nos hemos sorprendido de lo que hemos sido capaces de hacer como mujeres y orientar a un grupo de jóvenes. No habíamos hasta ahora tenido una mirada hacia el pasado de la trayectoria que tenemos y de lo que hemos podido hacer. Como mujeres estábamos con el temor, con la cultura del machismo, y con el conflicto armado eso se acentuaba más. Entonces, a mí me ha sorprendido lo que hemos podido hacer. También me ha sorprendido la capacidad que tienen los profesores/investigadores del proyecto para despertar en nosotros todas esas capacidades. Ellos nos han puesto a nosotros en unas metas que no nos las han dicho, nos han puesto unas metas que sin querer nosotros las hemos ido descubriendo, nos han despertado mucho, y nosotros quisiéramos seguir investigando para seguir mirando todas estas cosas que hemos hecho y podemos hacer. ¿Por qué? Porque una vez iniciadas todas estas tareas, todas estas labores que hemos estado haciendo, como que no podemos parar. Mire que ahora la misma gente lo busca a uno para preguntar qué se puede hacer en este caso y en este caso. Pidiéndonos consejo como líderes. Tenemos un compromiso con nuestra gente y nuestro territorio que no nos deja ahora parar el trabajo que hemos iniciado y con el aprendizaje que hemos tenido de parte del proyecto... Entonces, podemos decir que el proyecto nos ha fortalecido, con los aprendizajes que hemos tenido, las experiencias que vemos vivido. Con su capacitación, su orientación y compañía nos han dado fuerzas para seguir (María Escilda Ramírez, Asomeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

El proyecto ha sido una experiencia de aprendizaje que nos ha ayudado a sentarnos a recopilar nuestra experiencia en estos 16 años

de trabajo en el territorio. Porque a veces hacemos las cosas y no nos sentamos a mirar qué ha sido nuestro pasado, cómo hemos logrado llegar hasta aquí, y es a través de este proyecto que hemos logrado, desde la Red de Mujeres, reconstruir nuestro pasado, recordar el reconocimiento a muchas mujeres que han formado parte de esta organización (Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas para la Paz. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

Fortalecimiento de los procesos en marcha

Otro de los aportes importantes ha sido el valor de la investigación situada para el fortalecimiento de los procesos en marcha de las organizaciones:

El proceso de investigación fue algo totalmente nuevo para nosotros y es muy satisfactorio sentir que podemos participar de una investigación y no que alguien nos está analizando y sacando conclusiones, sino que nosotros podemos aportar a esa investigación, para entre todos construir y realizar una lectura muy aterrizada de lo que es nuestro territorio, las problemáticas reales que tenemos y hacia dónde queremos apuntar. Entonces, ese proceso de investigación definitivamente nos ha ayudado en el sentido de que podemos generar una lectura de nosotros mismos empleando las herramientas metodológicas que nos han brindado desde las universidades para nosotros poder utilizar esta lectura como una herramienta para tomar un impulso y empezar a realizar acciones dentro de nuestras organizaciones. Yo creo que este proceso de investigación nos va a contribuir a nosotros a futuro en el sentido de que de él vamos a sacar unas muy buenas conclusiones para, de esta manera, tomarlo como un insumo para las próximas acciones que nosotros queramos realizar desde las organizaciones, y que sean acciones aterrizadas, que ya tenemos algo consolidado que son nuestras organizaciones, sobre cómo están ellas posicionadas dentro del territorio, sobre qué tipo de incidencia debemos realizar acá y por dónde empezar. Entonces, yo creo que es algo que nos ha aportado muchísimo como personas y como organización (Jeferson Rodríguez, Fupapt. Extracto de webinar 5: “Investigación y paz”).

Fortalecimiento del sentido de dignidad

Adicionalmente, vemos que la apuesta por una investigación comprometida que contribuya con productos que sean de relevancia y utilidad para las organizaciones no solo es de importancia para el fortalecimiento de sus propios procesos, sino también para el reforzamiento del sentido de dignidad de sus integrantes: “¿Qué resultados arroja esta forma de hacer investigación? Que los protagonistas somos nosotros. Por primera vez vemos que lo que se produce, por ejemplo, en los videos participativos y los mapas, lo contamos nosotros” (Jeferson Rodríguez, Fupapt. Extracto de webinar 5: “Investigación y paz”).

Fortaleciendo lazos y redes con otras organizaciones

Las organizaciones también mencionan el destacado aporte de la investigación ayudando a fortalecer el tejido social local para la construcción de paz a través de todos los procesos de diálogo e intercambio desarrollados entre las organizaciones y los maestros miembros del proyecto.

El proyecto nos ha ayudado muchísimo para establecer contacto con la asociación de mujeres (Asumeht), que comenzó con el proyecto, y la relación ha sido constante desde entonces. Conocer a otras personas y organizaciones de otros territorios que antes no conocíamos ha sido muy enriquecedor, sus experiencias, sus trabajos (Julieth Katherine Escobar, Herrera Juvenil. Extracto de webinar 1: “Medio ambiente y paz”).

El proyecto también nos ha servido para interactuar con las demás organizaciones. Para también conocer el trabajo de ellas dentro de su territorio. Para conocer las luchas de ellas y todo lo que han logrado a través de su trabajo en colectivo. Ha sido una experiencia formidable. Damos las gracias a este proyecto, “Escuela, territorio y posconflicto”, que nos ha permitido compartir, conocer, fortalecer ese liderazgo, ese trabajo en equipo, y a todas las compañeras de las otras organizaciones que han compartido sus historias de vida, que también nos ayudan a crecer. Este ha sido un proceso de crecimiento personal y colectivo (Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

Conocer otros territorios a través de sus relatos y experiencias nos ha hecho ver que todos tenemos el mismo sueño, que es habitar y seguir habitando nuestro territorio, y hacer nuestro territorio más productivo en cuanto a nuestras gentes. En el sur del Tolima, nuestras riquezas son nuestras gentes. Este proyecto de investigación me ha permitido ver que las riquezas de nuestro territorio son nuestras gentes, todos los que he conocido en este proyecto. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma necesidad y deseo de salir adelante, y todos tenemos el mismo sueño de permanecer en nuestro territorio, hacerlo más productivo, innovar y hacer de nuestra tierra una gran despensa. En todos los aspectos, de ser despensa agropecuaria, porque tenemos buenos climas, buenas tierras, buenas aguas y también nuestra riqueza ambiental y turística. Yo sueño mucho con que haya una ruta turística de la paz, para conocer las historias de la paz y la violencia (María Escilda Ramírez, Asumeht. Extracto de webinar 2: “Mujer y paz”).

Reflexiones finales

Apostarle a un proceso de investigación transformadora para contribuir con la construcción de paz desde lo local acarrea un alto grado de complejidad, no solo por lo demandante que es moral, política, ética, física, creativa y metodológicamente, sino también por lo complejo del tema mismo. Por ello, no es fácil saber qué se transforma en el camino y cuán duraderos serán los cambios.

Los resultados hasta la fecha del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” indican que la investigación acción transformadora puede efectivamente jugar un papel importante en la construcción de paz desde lo local. Esto se evidencia en los procesos de resignificación del posconflicto, la paz, las identidades y el territorio que se fueron generando entre los y las coinvestigadores/as al analizar cómo han venido construyendo paz en medio del conflicto. Se evidencia también en los procesos de aprendizaje y construcción de diálogo de saberes, fortalecimiento de la dignidad y autoestima, y construcción de tejido social que se fueron gestando en la investigación. Sin embargo, el impacto que pueda tener el proyecto a largo plazo en la consolidación de una paz territorial solo se verá una vez que las organizaciones pongan en uso los aprendizajes y productos del proyecto en los diálogos que se propicien con instituciones del Estado y de la sociedad

civil para ir tejiendo y consolidando sus agendas de construcción de paz territorial desde lo local.

Hay que reconocer, no obstante, que la paz duradera en el sur del Tolima, como en la mayor parte del territorio de Colombia, sigue siendo un proceso en construcción que depende no solo de los esfuerzos hechos desde las organizaciones comunitarias, sino de la propia agenda política, económica y social del Estado, así como de la reconfiguración presente y futura de los poderes de los grupos armados que hacen vida en el país.

Por otro lado, es difícil aún saber cuál será el rumbo que tomará la agenda de construcción de paz en esta región del país. A pesar de los grandes avances que ha habido en los últimos cuatro años en la consolidación de una agenda de paz, los investigadores comunitarios y los maestros que formaron parte del proyecto indican que también ha habido grandes retrocesos, evidenciados en un aumento de la delincuencia común, el consumo de drogas entre las generaciones más jóvenes y un temor por nuevos proyectos de desarrollo que están siendo planificados sin la debida consulta en las comunidades.

Lo que es indiscutible es que, en medio de este futuro incierto, atravesado por complejas relaciones de poder, seguirá siendo imperativo ayudar a consolidar una contranarrativa de paz que ayude a visibilizar y fortalecer el poder transformador de las organizaciones comunitarias a favor de una paz duradera. La investigación acción transformadora tiene mucho que seguir ofreciendo en este sentido.

Referencias

- Bau, V. (2014). Telling stories of war through the screen. Participatory video approaches and practice for peace and conflict-affected contexts. *Conflict and Communication online*, 13(1).
- Boal, A. (1993). *Theatre of the oppressed*. Nueva York: Theatre Communications Group.
- Borja, M. (mayo-agosto, 2017). Perspectivas territoriales del Acuerdo de Paz. *Análisis Político*, (90), 61-76.
- Clark, M. L. (2019). *The creative path to peace: an exploration of creative arts-based peacebuilding projects*. Creative Studies Graduate Student Master's Projects 293. Recuperado de <https://digitalcommons.buffalostate.edu/creativeprojects/293>

- De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber reinventar el poder*. Montevideo: Ediciones Trilce.
- Escobar, A. (2016). Desde abajo, por la izquierda, y con la Tierra: la diferencia de Abya Yala/Afro/Latino/América. *Intervenciones en Estudios Culturales*, 2(3).
- Estrada A., J. (Coord.). (2019). *El Acuerdo de Paz en Colombia: entre la perfidia y la potencia transformadora* (1ª ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Clacso. Bogotá: Gentes del Común-Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo).
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Galtung, J. (2004). *Trascender & transformar. Una introducción a la resolución de conflictos*. México: M&S Editores.
- Haber, A. (2011). Nometodología payanesa: notas de metodología indisciplinada. *Revista Chilena de Antropología*, 23(primer semestre), 9-49.
- Harper, G. (2008). Creative writing: words as practice-led research. *Journal of Visual Art Practice*, 7(2), 161-171. DOI: https://doi.org/10.1386/jvap.7.2.161_1
- Jaramillo, S. (2014). *La paz territorial*. Presentación en la Universidad de Harvard, Cambridge, MA, Estados Unidos.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1992). *Cómo planificar la investigación acción*. Madrid: Laertes.
- Latorre, A. (2003). *La investigación acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó.
- Lozano, M., Mendoza, M., Montaña, D., & Parra, R. (2020). *Biographical narratives and participatory research with teachers on conflict and peace*. [Manuscript submitted for publication]. “Escuela, territorio y posconflicto” project. Eureka Educativa, University of Ibagué and University of East Anglia.
- Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: a critical agenda for peace. *Third World Quarterly*, 34(5), 763-783.
- Moix, B. (2020). Peace drivers: local agency, relational responsibility and the future of peacebuilding. En S. Connaughton & J. Berns (Eds.), *Locally lead peacebuilding. Global case studies*. Londres: The Rowman and Littlefield Publishing Group.
- Navas, G., Mingorria, S., & Aguilar-González, B. (2018). Violence in environmental conflicts: the need for a multidimensional approach. *Sustain Sci*, 13, 649-666.
- Richmond, O. P. (2011). *A post-liberal peace*. Londres-Nueva York: Routledge.
- Rodríguez, I., Sala, C., Barros, N., & Uribe, J. J. (2021). *Investigación que transforma, investigación que resignifica la construcción de paz. Documentación de un*

- proceso en el sur del Tolima, Colombia*. Escuela de Desarrollo Internacional, Universidad de East Anglia, UK.
- Rodríguez, I., & Inturias, M. (2016). Cameras to the people: reclaiming local histories and restoring environmental justice in community-based forest management through participatory video. *Alternautas*, 3(1), 32-49.
- Salazar, A., Sánchez, A., Villegas, J. C., Salazar, J. F., Ruiz Carrascal, D., ... Duke, J. S. (2018). The ecology of peace: preparing Colombia for new political and planetary climates. *Front Ecol Environ*, 16(9), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1002/fee.1950>
- Salcedo, L. (2015). Propuestas de paz territorial desde los movimientos sociales: multiculturalismo, ordenamiento territorial y ejemplos de paz territorial. *Análisis*, 10. Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza, Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Shaw, J. (2012). *Using participatory video for action research: negotiating the space between social process and research product*. The Open University. Recuperado de <http://real-time.org.uk/wp-content/uploads/2013/10/Using-Participatory-Video-for-Action-Research.pdf>
- Vass, E., Littleton, K., Miell, D., & Jones, A. (2008). The discourse of collaborative creative writing: peer collaboration as a context for mutual inspiration. *Thinking Skills and Creativity*, 3(3), 192-202.
- Walsh, C. (2007). Interculturalidad y colonialidad del poder. En J. L. Saavedra, *Educación superior, interculturalidad y descolonización* (pp. 175-176). La Paz: PIEB-CEUB.
- White, S. A. (2003). *Participatory video: images that transform and empower*. Nueva Delhi-Londres: SAGE Publications.
- Zuluaga de Prato, M. R. (2012). La investigación acción transformadora (IAT): generadora de conocimiento desde lo colectivo popular. *Investigaciones Interactivas Cobaind*, II(5).

Capítulo 3

Paces locales y estrategias transformadoras: más allá de la paz dominante en el sur del Tolima

Cristina Sala Valdés, Nohora Isabel Barros Navarro,
María del Pilar Salamanca Santos, Mónica del Pilar Álvarez Bustos,
Iokiñe Rodríguez Fernández, John Jairo Uribe Sarmiento,
Santiago Andrés Padilla Quintero

[...] ahora nosotros podemos pronunciarlos. En una ocasión se pronunciaron los actores de la guerra, ahorita nosotros nos pronunciamos con la paz. Queremos desarrollo, queremos una mejor convivencia, donde queremos que haya un cambio en realidad, comenzando desde lo más profundo de nosotros: la consciencia. Concientizarnos en todos los aspectos con nosotros mismos, con la gente y con la naturaleza, con todo nuestro entorno. Es como una paz que debe estar completa. Por eso, nosotros le podemos dar al mundo, al país, la paz que nosotros estamos construyendo aquí. Porque lo que estamos haciendo es una paz que no es una paz negociada, ni una paz con algún interés.

CÁNDIDO PRIETO (Asproicol, 2019)

Introducción

La paz es un concepto polisémico, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político. Desde hace siete décadas la *peace research* ha estudiado a los actores y roles de los protagonistas en la construcción de

paz, ya sean los Estados, los actores multilaterales o la sociedad civil. Cuando el foco se pone en la sociedad civil comienzan a visibilizarse distintos tipos de expresiones que, alimentadas por las acciones de las organizaciones sociales en su devenir cotidiano, superan las lógicas de la guerra.

El departamento del Tolima ha ocupado un lugar central en la historia de Colombia; durante el siglo XIX, fue escenario de las numerosas guerras civiles y, más tarde, de los conflictos agrarios y la confrontación bélica de las organizaciones guerrilleras, los grupos paramilitares y el Estado del siglo XX, que se han prolongado hasta la fecha.

Esta violencia la han experimentado de manera sistemática sus habitantes, víctimas de una guerra con matices de poder político, de explotación de tierras, de recursos naturales. A la población la afectó también en forma de desplazamiento forzado, secuestro, abuso, explotación, hostigamiento, tomas, masacres, entre otros; acciones que tienen efectos devastadores sobre la vida, la dignidad, la integridad física, moral y psicológica de las personas.

A pesar de que Colombia tiene una larga historia de violencia, también evidencia una renovada capacidad de resistencia a ella. Hombres, mujeres y jóvenes han mantenido vivas y han hecho emerger propuestas de construcción de paz que abordan el modo en cómo les afectó el conflicto. Tal es el caso de los municipios de Chaparral, Ataco, Rioblanco y Herrera, en el sur del Tolima, donde pobladores y pobladoras se han asociado para desarrollar organizaciones de productores de café, otras relacionadas con el cuidado del medio ambiente, redes de mujeres, jóvenes constructores de paz, entre otras. Comunidades que, como muchas otras en diferentes lugares del mundo, han partido de la fuerza asociativa, de la fuerza comunitaria para transformar sus territorios.

El trabajo de investigación con las organizaciones coinvestigadoras del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto: construyendo una cultura de paz local en el sur del Tolima” ha puesto de manifiesto la presencia de distintas propuestas que, partiendo desde la base, desde las organizaciones sociales, construyen paz en medio del conflicto, pudiendo dar respuesta a la pregunta ¿qué formas y expresiones adquieren las *paces* que se construyen desde la base? Estas propuestas, concretadas en estrategias transformadoras, permiten hablar de la paz como un término plural (*paces*) y como un proceso que tensiona las *paces* desde arriba, dibujando con claridad el mapa de los *pluriversos de paces* del sur del Tolima.

Más allá del paradigma liberal

La denominada teoría política liberal fue desarrollada sobre todo a partir del siglo XVI por pensadores de diferentes disciplinas, principalmente de la filosofía política y de la economía política. Immanuel Kant, John Locke, David Hume, Adam Smith y Thomas Jefferson son pensadores y políticos que suelen asociarse a esta tradición. El liberalismo insiste en la necesidad de promover la cooperación internacional para avanzar en el objetivo de paz, bienestar y justicia (Sala Valdés, 2016). El paradigma liberal promueve un proceso de transformación a tres niveles: democratización, liberalización económica y pacificación como primeros pasos para la construcción de paz. La suposición que subyace es que los avances de estos procesos transformativos influirán los unos en los otros de manera positiva. El marco teórico se basa en las experiencias históricas de Europa Occidental y el cuerpo de investigación sociológica, económica y política en este contexto (Kurtenbach, 2007).

Este enfoque se encuentra detrás de muchos procesos de construcción de paz, principalmente los guiados por organizaciones internacionales y multilaterales, además de los gobiernos occidentales, y constituye lo que se ha denominado *liberal internationalism*. Tal y como lo define Roland Paris (2007), “el principio más importante de este paradigma es la presuposición de que los cimientos más seguros para la paz, tanto dentro como entre Estados, es la democracia de mercado o la política liberal democrática y la economía orientada al mercado”¹ (Paris en Sriram, 2007, p. 581, en Sala Valdés, 2016). Estas narrativas tradicionales dentro de las intervenciones fomentan un concepto de paz como antídoto a una enfermedad que ha de ser curada, promoviendo la renovación de un sistema elitista complaciente con una estructura de poder neocolonial (Fontan, 2012).

La paz liberal ha sido desarrollada por un conjunto de actores específicos, de acuerdo con un conjunto de conocimientos determinados y una comunidad epistémica particular, alineados todos ellos con unos intereses concretos y unas normas técnicas e instituciones por ellos mismos creadas. Por lo tanto, las intervenciones no pueden seguir siendo consideradas neutrales.

Frente a esto, otros enfoques que surgen desde lo local, desde otras epistemologías, ponen en valor la importancia de “[los] espacios sociales

¹ Traducción libre.

y de relación en curso; en otras palabras, personas que generan iniciativas que responden al cambio constructivo” (Lederach, 2008, p. 82). Pues “la respuesta está en comprender que el cambio constructivo, quizá más que cualquier otra cosa, es el arte de tejer estratégica e imaginativamente redes relacionales a través de espacios sociales en escenarios de conflicto violento prolongado” (Lederach, 2008, p. 131).

La paz descolonizada: la construcción de la paz por actores locales

El argumento a favor de la descolonización de la paz proviene de la comprensión de que el mismo paradigma que se invocó para la colonización ahora está sirviendo para canalizar los esfuerzos neocoloniales de la paz liberal en todo el mundo. La descolonización de la paz requiere un enfoque holístico y sistémico de la paz, los procesos que la representan y la ética y los valores que encarna. Descolonizar la paz significa traer lo invisible a nuestro entendimiento y vivir lo visible. Contrariamente a las disquisiciones coloniales, la narrativa de la paz descolonizadora afirma que la paz ya existe a nivel local y que no necesita construirse de acuerdo con los valores y entendimientos de un entorno extranjero (Fontan, 2012, p. 42).

Descolonizar la paz cuestiona las presuposiciones de los estudios de paz y conflictos, y adelanta una epistemología alternativa referida a las iniciativas ‘no convencionales’ que construyen paz en distintas partes del mundo. Es un llamado para intervenir todos los elementos que tienen que ver con la industria de la paz y la paz liberal, trascender a la élite estructural para poner la mirada en las organizaciones y comunidades que facilitan procesos de paz endógenamente sostenibles (Sala Valdés, 2017). Nos referimos a un espacio dentro del cual los actores locales involucrados en “la construcción de la paz, la resolución de conflictos, el desarrollo, etcétera encuentran formas de establecer prácticas pacíficas y dinámicas de formas locales de paz, que también son constitutivas de híbridos estatales, regionales y globales. Pueden hacerlo en relación a la comprensión local que poseen de la política y las instituciones, el bienestar y la economía, la resonancia social de la identidad, la ley y la seguridad”² (Richmond, 2012, p. 14).

² Traducción libre.

El primer paso dado en este sentido fue el entendimiento plural que ha tenido de la paz Galtung, uno de los pioneros de la *peace research*. O, mejor dicho, un entendimiento plural de las *paces*, pues lo que Galtung ha defendido es la heterogeneidad de situaciones y experiencias sociales de construcción de paz desde la base (Galtung, 1996, p. 13, en Barreto Henriques, 2012, p. 66). Esta construcción de paz desde la base acontece en el cotidiano de cada día, en lo que la literatura anglosajona ha denominado *peacebuilding from below*. Ramsbotham menciona que “procesos de construcción de paz eficaces y sostenibles deben basarse no solo en acuerdos de paz desarrollados y firmados por las élites, sino, de modo más importante, en la potenciación de las mismas comunidades asoladas por la guerra, que deben construir, a partir de ellas mismas, la paz desde abajo” (Ramsbotham et al., 2005, p. 215, en Barreto Henriques, 2012, p. 67).

Estamos hablando de paz endógena, soñada desde los pobladores y pobladoras de los territorios azotados por la violencia. Como endógena, surge de una cotidianidad que, aunque hibridada con otras formas de construcción de paz traídas por otros actores externos, tensiona esta aproximación elitista. “Las organizaciones estamos volviendo a retomar, porque nosotros en nuestras comunidades desconfiamos del Estado, ya no tienen credibilidad en las instituciones, porque de la paliza que nos dio la guerra, de la paliza que nos dio el Estado también, nos dejaron casi en estado de coma a todos” (comunicación personal, sur del Tolima, 2020).

Un concepto íntimamente ligado a la construcción de paz desde la base es el de la *sostenibilidad*. Que la paz sea o no sostenible depende de la apropiación de esta. Los y las pobladoras son la clave para que en el largo plazo se pueda construir una infraestructura de paz. Para ampliar y consolidar los procesos de apropiación de la paz, el rol de las organizaciones sociales es fundamental (Mouly, 2011, p. 304, en Barreto Henriques, 2012, p. 38).

En línea con la construcción de infraestructuras de paz, Lederach (2008), promotor de la teoría de transformación de conflictos, centra su propuesta en cómo crear y sostener una infraestructura capaz de generar procesos de cambio adaptables, que tenga en cuenta tanto las expresiones episódicas del conflicto como el epicentro del conflicto relacional. Lederach propone pensar los procesos de construcción de paz como plataformas transformadoras (Sala Valdés, 2016), “espacios sociales y de relación en curso; en otras palabras, personas que generan iniciativas que responden al cambio

constructivo” (Lederach, 2008, p. 82). Estas iniciativas toman la forma de estrategias transformadoras que se manifiestan en distintos ámbitos: relacional, estructural y cultural. En lo estructural toman forma de leyes, instituciones, políticas económicas; en lo relacional, dan forma a nuestras relaciones y a las redes que construimos; y en lo cultural, modelan nuestras visiones de mundo (conocimientos o historias locales), tal y como se puede ver en la figura 3.1.

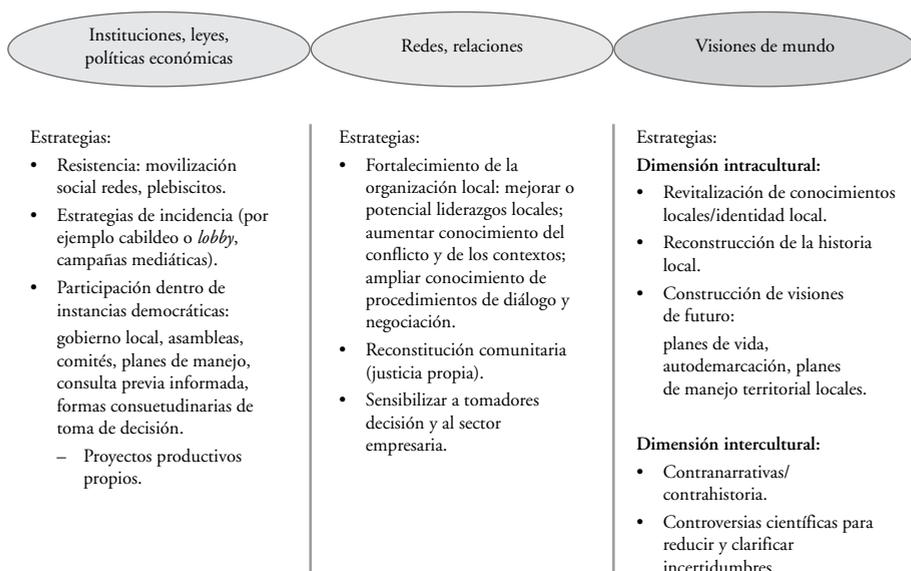


Figura 3.1. Estrategias de transformación

Fuente: Rodríguez *et al.* (2015).

En este marco, la implicación de distintos agentes de paz (actores de agencias multilaterales, investigadores, etc.) que provienen de fuera del ámbito de lo local pueden, idealmente, servir de facilitadores, permitiendo que lo invisible se haga visible a través de metodologías alternativas. El detalle de cómo estas metodologías se han puesto en marcha en el proyecto de investigación se puede encontrar en el capítulo 2: “El papel de la investigación acción transformadora en la construcción de paz territorial”.

La fuerza comunitaria en el sur del Tolima: organizaciones sociales construyendo *paces*

Lo que estamos haciendo es construyendo una fuerza, un poder a través de la paz. Porque sea como sea nosotros somos sobrevivientes de la guerra, ¿o quién dice que no?
CÁNDIDO PIETRO (Asproicol, 2020)

El sur del Tolima cuenta con una gran variedad de organizaciones sociales. Nueve de ellas hacen parte del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”. Como ya se ha mencionado en un capítulo anterior, algunas de ellas son asociaciones cafeteras, de hombres (Asocalarama), de mujeres (Aprovocal) y mixtas (Asproicol y Ascafesagrado); organizaciones de jóvenes que buscan recuperar la cultura (Herrera Juvenil) o el cuidado del medio ambiente (Fupapt); y organizaciones de mujeres (Asomeht y Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz).

Todas estas organizaciones están situadas en las mal denominadas ‘zonas rojas’. Estas zonas, cuyo nombre deriva de un proceso de semaforización que tuvo lugar a comienzos de siglo, demarcaban territorios de las FARC o territorios guerrilleros, estigmatizando a cientos de poblaciones. Casi 20 años después y tras la declaración de todas estas zonas en ‘zonas verdes’ gracias al Acuerdo de Paz de La Habana, la estigmatización sigue presente, y no es raro escuchar a los pobladores de Planadas, Risalda (Chaparral), El Paujil (Ataco) y Herrera (Rioblanco) afirmar: “Digo que soy de otro lugar para que no me llamen guerrillero”. Esta semaforización en Colombia impidió que a estas zonas pudieran llegar las ayudas del Estado, que sí llegaron a otros municipios y veredas colombianos que no fueron calificados así.

Con todo ello, cada una de estas organizaciones ha estado enfrentando luchas y retos que han permitido avanzar en áreas como la visibilización de la mujer en la esfera pública, el diseño de proyectos de vida productivos que permitan que los jóvenes puedan quedarse en el territorio, la conquista del espacio público para enfrentarse a distintos tipos de violencia, etc. Se trata, en definitiva, de un territorio en el que el tejido social ha pasado por momentos que han permitido la idea de que el trabajo comunitario transforma y construye paz:

Un momento importante de la historia de Herrera fue cuando la guerrilla de las FARC ordenó que todos debíamos ir a un paro agrario en el Guamo, y no sabemos quién fue el valiente, no hemos podido dar con él, que se inventó una marcha, esa vez, salimos todos, yo tenía 10 años, salimos todos, con blusas y banderas blancas ¡Salimos todos! Esa fue la primera vez que yo vi tanta gente en Herrera. Entonces, la guerrilla al ver eso se tuvo que abstener de esa idea [...] (Alixé Ulcue, Asomeht, 2019).

En esta línea, para López y Muñoz (2000), han sido esos poderes contestatarios, reivindicadores, invitadores, no convencionales, etc., que, a lo largo de la historia de la humanidad, han intentado presentar alternativas y preferencias a la construcción político-social hegemónico-dominante de la realidad. Esa historia de los *poderes alternativos* es, también, la historia de los *saberes*; poderes asociados a grupos o actores sociales: indígenas, campesinos, obreros, mujeres, minorías.

Todas estas potencialidades para la toma de decisiones sobre el futuro son las que permiten ir imaginando la construcción de paces locales. Esta perspectiva reta la idea de centralidad de poder estatal para reconocer múltiples formas de poder que coexisten de manera emancipada del Estado.

Caracterizando así al término poder y las relaciones sociales en las que este se produce, las intersubjetividades que pone a dialogar permiten establecer categorías útiles para el análisis de las paces locales construidas en los distintos territorios del sur del Tolima. El poder integrador y el poder transformador, relacionados con todos los espacios de producción identificados por De Sousa Santos (1998, 2010) —el espacio doméstico, el espacio de producción, el espacio de la ciudadanía, el espacio mundial y el espacio epistémico—, constituyen un interesante punto de partida desde el que indagar sobre la experiencia territorial de las organizaciones comunitarias de mujeres, jóvenes, cafeteros y ambientalistas, e ir dando respuesta a la pregunta: ¿cómo se construye/n paz/ces en medio de la/s violencia/s?

La hipótesis que guía estas preguntas es que se ha producido y se puede fomentar un poder social que, articulado en torno a objetivos comunes en distintos tipos de relaciones dentro del contexto territorial (que puede combinarse con el nacional, internacional, mundial), ha orientado, orienta y orientará las transformaciones que guían hacia un futuro de paz local,

sostenible, como referente de una cultura comunitaria integradora. Es decir que la construcción de paces locales está relacionada con la capacidad de producir poder desde el ámbito comunitario.

Paces y estrategias transformadoras desde la base

Estamos tratando de tener unas acciones de paz desde nuestro trabajo y nuestro entorno, dejando atrás el conflicto, y hemos empezado a querer tener un cambio, una transformación.

MARÍA ESCILDA RAMÍREZ (Asomeht, 2020)

La paz es para las organizaciones sociales coinvestigadoras del proyecto un significativo lleno de significados como tranquilidad, justicia, equidad, capacidad de llegar a acuerdos, familia, emociones.³ Nociones todas ellas que remiten a planos culturales (justicia, equidad, tranquilidad), estructurales (capacidad de llegar a acuerdos) y relacionales (familia, emociones) de la paz, mas, sin embargo, perdiendo la vinculación de las acciones de las organizaciones en el territorio. Es decir, la paz es una experiencia individual o familiar, una construcción desde el Estado o desde actores terceros y una idea utópica, pero nunca se identifica con una acción sobre el territorio, una territorialidad. Por este motivo, la paz no está nombrada como tal,⁴ sino que está escondida en los idearios, en las estrategias y en la manera en que estas organizaciones apostaron por reelaborar sus identidades colectivas en medio del conflicto y durante el posacuerdo en Colombia.

Desde esta perspectiva, y a partir del trabajo de coinvestigación y diálogo de saberes con las organizaciones sociales, la paz se reconceptualiza en

³ En enero de 2019, se organizó el I Encuentro General del Proyecto “Escuela, Territorio y Posconflicto”. Una de las actividades fue hacer una lluvia de ideas que definieran los conceptos de ‘paz’, ‘territorio’ y ‘conflicto’. De esta actividad surgen estos conceptos que definen la paz para las comunidades: tranquilidad, convivencia, justicia, manejo de emociones, perdón, superar el conflicto, capacidades, derechos y deberes, equidad, situación/actitud, cualidad, superar diferencias, justicia y equidad, justicia social, armonía, familia y sociedad, construcción de acuerdos.

⁴ Es necesario hacer la salvedad de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz que, como organización que busca visibilizar a la mujer en el espacio público, siempre se ha identificado con la labor de construcción de paz. “[En] la Red de Mujeres desde el inicio nos identificamos como constructoras de paz en medio de la violencia” (Carmen Emilia Moreno, 2019).

fuerza comunitaria colectiva, territorial. Un poder, una fuerza comunitaria que resignifica el sur del Tolima y lo hace a partir de una serie de ideas raíz compartidas:

- La reelaboración de las identidades como posicionamientos. “Hemos sobrevivido todo esto, y hay gente buena aquí en el sur de Tolima con ganas de trabajar, gente que tenemos sentido de pertenencia, tenemos amor por lo que somos, por lo que tenemos” (Cándido Prieto, Asproicol, 2019).
- La resignificación del territorio desde la proyección del sur del Tolima como zona en donde lo colectivo es una fuerza que transforma y construye paz. “No solamente decir el Tolima o el sur de Tolima ha sido golpeado por la violencia, sino también mostrar cómo a través del transcurso del tiempo se han logrado superar todos esos percances que ha habido en el Tolima y con énfasis en el sur de Tolima, porque el Tolima no solamente es guerra, el Tolima es mucha riqueza y muchas cosas diferentes” (Dayana Martínez, Asproicol, 2019).
- La búsqueda de un empalme o relevo generacional que sostenga la acción. “Nosotros queremos que nuestros jóvenes se atraigan al territorio” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2020).
- La propuesta por generar proyectos de vida en el territorio. “Esa capacidad de darse a los cambios y de igual forma mantenerse en el territorio como productores campesinos” (Yeison Castellanos, Fupapt, 2019).
- La apuesta por la colectividad, frente al individuo. “[...] más bien busquen la salida, pero organizándose ellos mismos. Haciendo el esfuerzo ellos mismos, que todos podemos. Nosotros nos unimos y podemos hacer las cosas colectivamente” (Cándido Prieto, Asproicol, 2019).

A partir del trabajo de coinvestigación se han identificado cuatro propuestas de *paces* que lideran las organizaciones en el sur del Tolima. Los nombres de las propuestas nacen de las estrategias nucleares que las organizaciones están llevando a cabo en sus territorios. El equipo investigador las recogió, las nombró y las presentó para su discusión en un encuentro

expresamente dedicado a ello. Los acuerdos a los que llegamos nos permiten hablar de:

- Paz ambiental
- Paz con manos y rostro de mujer
- Paz como resignificación desde la cultura
- Paz desde la presencia territorial

Cada una de estas *paces* hace énfasis en una agencia en concreto, en unas posibilidades de cambio. En este sentido, la paz ambiental es una propuesta que nace desde la experiencia de Fupapt en el territorio, como sentido de ser de una protectora ambiental. La *Paz con manos y rostro de mujer* es la apuesta de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, compartida por Asomeht y Aprovocal en algunos de sus aspectos, que interpreta la paz como “una tejeduría de emociones y proyectos políticos” (María Ximena Figueroa, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019). La paz como resignificación desde la cultura tiene que ver con un esfuerzo por recuperar las memorias y la cultura de Herrera tanto de los jóvenes de Herrera Juvenil como de las mujeres de Asomeht. Finalmente, la paz desde la presencia territorial responde a una pregunta de las asociaciones de caficultores de Ascafesagrado y Asproicol que se cuestiona por las relaciones de convivencia y la apropiación del territorio. Por lo tanto, cuidado del medio ambiente, proyectos políticos, cultura, territorio son los referentes situados que hablan de paz en estas organizaciones del sur del Tolima.

Analizaremos cada una de estas *paces* desde dos categorías:

- Ideario, o las ideas que reflejan lo que los actores, desde sus agencias colectivas, entienden que es: el ideario es una proyección del imaginario colectivo a futuro. Es lo que Borges, citado por Lederach, define como esperanza, “ese hermoso recuerdo del futuro” (Comisión de la Verdad, 2018).
- Posicionamiento identitario desde el que surge cada propuesta de paz y que también se proyecta como un sueño de futuro: “[...] la identidad resulta crucial tanto para el reconocimiento de uno mismo como para un sentimiento comunitario de pertenencia” (Porter, 2012, p. 142). Poder expresar la identidad, tener la libertad

de hacer, es un prerrequisito para “realizar las propias capacidades y aspiraciones” (Porter, 2012, p. 142). Por ejemplo, la idea de una identidad campesina que atraiga a los jóvenes como práctica social actual, pero también como sueño de futuro.

La descripción de una diversidad de identidades presentes en el territorio, que se materializan en aspiraciones y visiones de mundo concretas, no nos impide reconocer que existen así mismo verdades muy distintas y narrativas a veces excluyentes.

Paz ambiental

Fupapt es una organización dedicada al cuidado del medio ambiente. En su proceso han dado cuenta de las problemáticas socioambientales por el uso de la tierra, la ampliación de la frontera agrícola y por los posibles proyectos minero-energéticos que confluyen en el municipio de Planadas y que necesitan una respuesta colectiva. Desde el desarrollo de jornadas de pedagogía ambiental en las instituciones educativas y en las juntas de acción comunal comenzaron a incidir en la toma de decisiones locales. “La educación es la columna vertebral de la paz y desde ahí podrían surgir muchas cosas, alternativas” (Jeferson Rodríguez Yate, 2019). Ya, a lo largo de 2019, elaboraron una iniciativa de política pública ambiental municipal. En este recorrido empezaron a emerger discursos y conceptos centrados en lo que Fupapt denomina “paz ambiental” y “jóvenes alternativos”, conceptos que se han ido nutriendo y desarrollando más a partir de la investigación conjunta.

La paz ambiental surge a partir de las posibilidades generadas por la salida de actores armados del territorio y de la entrada de instituciones, pues anteriormente “había una brecha muy grande entre las personas y las instituciones en razón al conflicto” (Carlos Murcia, 2019).

Como ideario, la paz ambiental representa un punto de partida para pensar el territorio entre varios actores que antes estaban polarizados. Un concepto para trabajar por un bien común. Esta paz entiende que lo ambiental está en el centro de varios conflictos, que el cuidado del medio ambiente de un territorio implica también cuidar las relaciones sociales que se tejen en su seno. La paz ambiental es la expresión de un interés colectivo de quienes habitan los territorios, ya que es su sostén material y social. En ella prima

el bien individual y colectivo sobre el bien económico. “Entendemos la paz no como un mero cese bilateral al fuego, sino como una construcción participativa, que no solo se da entre habitantes de un territorio, sino con las instituciones” (Jeferson Rodríguez Yate, 2019).

La noción de “jóvenes alternativos” da cuenta del posicionamiento identitario desde el que se visiona esta paz. Se refiere a “una forma de vivir la juventud” (Jeferson Rodríguez Yate, 2019) en la que los jóvenes han adquirido una conciencia acerca de su lugar en el territorio, como sujetos que lo afectan de forma cotidiana cuando se produce o cuando se consumen productos. Ser un joven alternativo es entonces tener una conciencia de lo medioambiental en un sentido amplio, esto incluye el respeto a todos los seres vivos que lo habitan, tanto plantas como animales. Implica generar una apertura a diferentes formas de ver el mundo, de entender de dónde vienen y cuáles diferencias existen entre las propias y las de los otros. Esta forma de vivir la juventud significa ser activo políticamente, separándose de prácticas clientelistas, actuando y escogiendo a partir de proyectos políticos que atienden a las necesidades de la población que habita el territorio.

[...] jóvenes alternativos son aquellos muchachos que desde muy temprana edad están empezando a trabajar con la comunidad, para la comunidad, para tratar de que su territorio en un futuro sea más amigable con el medio ambiente y lógicamente que le den una oportunidad, una alternativa para quedarse establecidos en el territorio y no tengan que irse a las ciudades, a capacitarse y definitivamente olvidarse del campo. Sino que regresen nuevamente y puedan hacer sus proyectos de vida en su territorio y lógicamente permanecer en nuestro municipio, tratando de aportar ideas nuevas, alternativas, tecnificando para que el medio ambiente sienta la recompensa de nosotros (Yeison Castellanos, 2019).

Otras organizaciones del sur del Tolima como Herrera Juvenil, Asocalarama o Asproicol, en las que los y las jóvenes hacen parte activa (ya bien como socios o como hijos o hijas de socios), manifiestan similares aspiraciones, sobre todo en el interés genuino por el cuidado del medio ambiente. Si bien las asociaciones de las que forman parte no centran su proceso en

la protección y preservación del entorno, algunas de sus estrategias pasan por desarrollar técnicas, procesos y haceres más amables con la naturaleza.⁵

Las estrategias transformadoras que Fupapt pone en marcha en su proceso de diseño de una infraestructura de paz desde la base son:

1. Pedagogía ambiental: diseño de propuesta educativa desde la visión del territorio y sus necesidades y experiencia de la fundación (cultural).
2. Incidencia política: formulación de iniciativas horizontales y participativas de política pública ambiental municipal (estructural).
3. Nuevas prácticas agrícolas: manejo del café con estrategias amigables con el medio ambiente (estructural-medios de producción).
4. Presencia política: juventudes que rechazan el pensamiento que les subestima como fuerza transformadora y proyecta una conciencia sobre su lugar en el territorio (relacional).

Paz con manos y rostro de mujer

Nuestro rol como mujer en esta nueva etapa de la vida, cómo las mujeres hemos logrado ser participativas en todos estos procesos y hemos logrado, de alguna manera, tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Cómo nosotras, desde nuestra condición de mujeres, hemos logrado transformar, participar en estos espacios que tienen, como decimos nosotras desde la Red, “con rostro de mujer”. Cómo desde nuestras condiciones, desde nuestra participación, nosotras las mujeres hemos logrado transformar nuestro territorio.

MARTHA CARDONA (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2020)

El proceso de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz pasa por el reconocimiento de las distintas tensiones que cada una de las mujeres ha vivido, especialmente a través de su cuerpo como territorio. Estas tensiones hablan

⁵ Así, por ejemplo, las asociaciones de Aprovocal y Asocalarama en Risalda (Chaparral) han reconvertido el proceso de aguas mieles (un proceso de lavado de café que, si bien beneficia el sabor del café, es más contaminante que otros métodos) para crear una gran variedad de productos valiosos, como fertilizantes orgánicos.

sobre experiencias comunes de las mujeres rurales en el sur del Tolima. A partir de estas vivencias es que se comenzó a activar un proyecto político colectivo que requiere de la unión y del permanecer juntas. Este mismo proyecto colectivo es el que permite tramitar esas tensiones.

La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz tiene la convicción de que hay que transformar el pensamiento de las mujeres y las familias rurales, pues la mujer no debe dedicarse exclusivamente al ámbito de lo doméstico, sino que debe hacer parte del mundo social, participar, gestionar lo político y lo productivo.

Buscando siempre ser autónomas y superarnos siempre para la toma de decisiones, porque organizadas es la única forma en la que nos fortalecemos; y apoyándonos, en los conocimientos que adquirimos cada día, hace que nos fortalezcamos más y más. Construimos una organización sin ánimo de lucro, en la que las mujeres integrantes [...] dan cada una de su parte [...] en conocimientos y en valor del tiempo, en el que se dedican a estar en las reuniones (Dagmar Hernández, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019).

Es este conocimiento empíricamente construido el que se convierte en una experiencia, extraordinaria e innovadora, no solamente por el cómo, sino por quiénes y desde dónde: mujeres campesinas y diversas que tensionan las relaciones dominantes (masculinas, de clase, de etnia). El proceso de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz impulsa un proceso cultural fortaleciendo: 1) procesos organizativos de mujeres rurales, 2) la formación de lideresas y 3) la promoción de la participación y la incidencia política de la mujer.

La *Paz con manos y rostro de mujer* proyecta un proceso político principalmente emprendido por la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, pero también en alguna medida por Asomeht y Apropocal. Por supuesto, sus agencias son distintas, pero su posicionamiento político, el llamado a una autodeterminación económica y la despatriarcalización del concepto de poder, es compartido.

Ese es otro punto muy importante porque cuando nosotros iniciamos con las juntas de acción comunal eran solo hombres, el patriarcado de la acción comunal [...], a nosotras nos tocó darnos a la tarea de

montarnos presidentas de juntas de acción comunal para que me apoyaran a mí (Dagmar) y montáramos una cúpula de mujeres, de secretarías y delegadas a la acción comunal, y así fue que logramos que las mujeres se lanzaran, nos apoyaran entre mujeres para participar, porque esta era una pelea dura con la acción comunal con los líderes, los hombres que no querían a la mujeres (Dagmar Hernández, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019).

El café es un poder hegemónico, pero una forma de construir paz, porque a las mujeres nos da independencia económica, y acceso a la titularidad de la tierra (Marinela Sánchez, Aprovocal, 2019).

La Paz con manos y rostro de mujer es un camino hacia un empoderamiento donde las mujeres reinventan su identidad, crean diversas formas de ser en el territorio, que les permita posicionarse, construirlo y ejercer ciudadanía. Se van generando nuevas interacciones sociales, nuevos lenguajes y escenarios alternos donde el poder y el conocimiento se redistribuye. Implica una legitimación de las mujeres como sujetos políticos y su poder transformador, que construye nuevos espacios de participación y fortalecimiento de las ciudadanías que emergen desde la subalternidad.

Las estrategias transformadoras que la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, Aprovocal y Asumeht ponen en marcha en su proceso de diseño de una infraestructura de paz desde la base son:

1. Organización desde la sororidad y la horizontalidad que implica tejerse en red desde el equilibrio de poderes (relacional).
2. Intervenciones en el espacio público: marchas en las veredas, corregimientos y municipios para manifestarse en contra del maltrato hacia las mujeres y los feminicidios, reflexiones en torno a fechas importantes como el Día de la Mujer y el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otras (estructural-cultural).
3. Incidencia política: participación en los consejos territoriales de planeación, construcción de políticas públicas de mujer y género, investigaciones sobre la violencia, postulación de mujeres de la organización a los comicios electorales (estructural).
4. Politizar lo privado: la propuesta política de las mujeres trasciende de su participación en la vida pública, se nutre, también, del diálogo

cultural e intergeneracional y de las transformaciones en la vida privada, es decir, el cambio de los valores en la crianza, el matrimonio, y la toma de decisiones en la familia (relacional).

5. Promoción de asociatividad de la mujer en el espacio productivo-café (estructural).

Paz como resignificación desde la cultura

El conflicto arrebató a los y las herrerunas la posibilidad de sostener un legado cultural, difuminando quiénes eran, de dónde venían y para dónde van. Por ello, los y las jóvenes de la organización Herrera Juvenil y las mujeres de Asumeht están apostando por la reconstrucción de la memoria como corregimiento, para así resignificar el relato identitario, la cultura y la vida en comunidad.

La propuesta de paz como resignificación desde la cultura es un llamado a la revitalización de la cultura desde la recuperación de la memoria, a la evocación de referentes identitarios que no nos conecten a la violencia: “Retomar raíces es importante, porque la cultura es lo que la guerra nos quitó” (María Escilda Ramírez, Asumeht, 2019). Además, es una apuesta por la sanación, en donde se crea un espacio colectivo para hablar del dolor, que se convierte en una herramienta para reconstruir y crear memoria.

Nosotras somos una organización de mujeres que nos identificamos porque tejemos, bordamos, pero, más allá de reunirnos a bordar, nos reunimos para contar nuestros problemas, para aliviarnos, para darnos aliento, desestresarnos [...] lo importante de nuestra asociación es “lo que se teje mientras se teje”, y es toda esta hermandad que existe entre nosotras (Alixé Ulcue, Asumeht, 2019).

Desde estos espacios colectivos es posible resignificar el relato identitario, la cultura y la vida en comunidad. El ideario radica en revitalizar la cultura desde la construcción de un relato de lo que fueron y lo que son, desde la esperanza y no desde el duelo; es un intento por colectivizar la memoria. “Lo que se queda solo en la mente se olvida, se pierde” (María Escilda Ramírez, Asumeht, 2019).

Los jóvenes y las mujeres de Herrera reivindican su presencia política para la transformación del territorio, construyen una resistencia colectiva

a partir de la gestión de la cultura y de los procesos de intercambio generacional. Posicionan una identidad en la que la memoria del pasado se lanza hacia el futuro en forma de legado, manifestando un orgullo de sus raíces, de su territorio, de sus experiencias y vivencias. “Que se den cuenta de que nosotros no portamos violencia, ni muerte, ni guerra, que somos una lucha por nuestros sueños, que tenemos diversidad” (Marleny Quilguanás, Aso-meht, 2019). Este proceso permite repensar la identidad y el patrimonio, en una apuesta por resistir al olvido, al despojo y al abandono estatal.

Las estrategias transformadoras que Aso-meht y Herrera Juvenil ponen en marcha en su proceso de diseño de una infraestructura de paz desde la base son:

1. Construcción de redes de apoyo desde la sororidad, que cuidan, colectivizan el conocimiento y los recursos (relacional).
2. Intervenciones en el espacio público: conmemoraciones de fechas importantes en el mundo: 8 de marzo, 25 de octubre, entre otras (estructural-cultural).
3. Elaboración de un traje típico, para revitalizar la cultura, pensar la identidad y construir un legado para las nuevas generaciones (cultural).
4. Politizar lo privado: desde el espacio de lo íntimo, de las conversaciones, las mujeres han apostado por un cambio en los valores del matrimonio, de la toma de decisiones en el interior de la familia. Han hecho del diálogo intergeneracional una apuesta para sostener nuevos valores en el futuro (relacional).
5. Juventudes con presencia política: organización juvenil que rechaza el pensamiento que subestima la juventud como fuerza transformadora, y proyecta una conciencia de su lugar en el territorio (relacional).

Paz desde la presencia territorial

Las organizaciones de caficultores de Asproicol, Ascafesagrado, Aprovocal y Asocalarama son quienes están construyendo paz desde esta propuesta. Estas organizaciones tienen en común que se asocian a partir de la dinámica cafetera, la cual, más allá de ser una actividad económica, construye identidad, proyectos de vida y relaciones con el territorio. Abogan por la construcción de lo político desde la autogestión y colectividad, desde lugares y motivaciones

distintas, relacionadas con el contexto histórico, con la ocupación territorial de los actores armados y con las experiencias vividas en el conflicto.

El Paujil es una zona que durante muchos años fue disputada por las FARC y los paramilitares, así que las estrategias de estos actores pasaron por fragmentar el tejido social. Es por ello que la resignificación del territorio surge desde la formulación de la pregunta: cómo podemos construir lealtades, recuperar el tejido social. La respuesta para Asproicol y Ascafesagrado es la fuerza comunitaria, entendida como una suma de esfuerzos en un proyecto que involucre a todos los residentes, para pensar quiénes somos, quiénes podemos ser y qué podemos hacer. Es un esfuerzo por conocerse y reconocerse, cuya idea fuerza es “si me apropio del territorio, yo decido sobre él”.⁶

En Risalda, la experiencia del conflicto permitió que sus habitantes se organizaran, porque fue una zona de control territorial de las FARC. Parte de las estrategias de los armados para sostenerlo fue apoyar, estimular, controlar e, incluso, ordenar la actividad asociativa. Por eso, para ellos y ellas la pregunta que les interpela es cómo proyectamos un liderazgo sin la presencia de los actores armados. La fuerza nuclear de su ideario reside en pensar el liderazgo desde la autonomía, conectarlo con cómo eran los liderazgos antes del conflicto. Este repensar los liderazgos se vincula con la necesidad de seguir sosteniendo su lucha ambiental (reforestación, control de las aguas mieles, etc.), en la necesidad de “saber nuestras raíces para fortalecer nuestro tallo” (Héctor Enover Yate, Asocalarama, 2019).

En ambos casos esta propuesta de paz pasa por la resignificación del territorio desde las vivencias que han construido en él a lo largo de su historia: primero como familias, después como organizaciones. Desde la narración de sus historias, las historias de sus lugares, no solo la más reciente, sino la que tiene que ver con los pobladores originarios, la toponimia, los nombres de los ríos, de la fauna.

Es una apuesta por reivindicar la identidad campesina y hablar desde allí a los hijos e hijas, que vean el campo como un escenario posible para construir su proyecto de vida. Es un posicionamiento identitario que apela

⁶ El Paujil fue una zona de disputa en la que la estrategia de control fue la fragmentación del tejido social. Calarma, sin embargo, fue una zona de control territorial donde las lealtades las conformaban los propios armados. La guerrilla era aliada del mundo agrícola. Esto no significa que las organizaciones sociales lo fueran de la guerrilla.

a las capacidades y posibilidades de transformación del territorio. Se trata de un posicionamiento como sujetos políticos, ciudadanos, anclados en el territorio, centrado en la búsqueda de lo colectivo (de lo que nos une), sin perder de vista el pasado (lo que nos trajo aquí).

Las estrategias transformadoras que Ascafesagrado, Asproicol, Apropocal y Asocalarama ponen en marcha en su proceso de diseño de una infraestructura de paz desde la base son:

1. Ética del cuidado ambiental: vivero comunitario donde se conservan y comercian plantas autóctonas, medicinales, y cafetos, y reforestación de bosques, humedales, cuencas, lagunas y nacimientos de aguas, como una forma de cuidar el territorio que les ofrece el sustento (estructural-control del territorio y medios de producción).
2. La organización cafetera y las posibilidades de vender el grano sin la mediación de la Federación, y con valor agregado de ‘hecho por mujeres’ o de ‘familias campesinas’ como un aporte vital para la construcción de paz y desarrollo regional (estructural-control de medios de producción).
3. Politizar lo privado: en línea con Asumeht y la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, las organizaciones están generando transformaciones en lo privado, apostando por un cambio de los valores en la crianza, el matrimonio, y la toma de decisiones en el seno de la familia (relacional).
4. Poder comunitario: resanar los lazos fragmentados por el conflicto, para construir poder comunitario e influir políticamente, por ejemplo: pensar planes de desarrollo veredales y así incidir en el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo municipal (estructural-relacional).
5. Nuevas prácticas agrícolas: manejo del café con estrategias amigables con el medio ambiente (estructural).

En la figura 3.2 podemos ver la distribución de estas estrategias transformadoras en el sur del Tolima y cómo se conectan con cada una de las propuestas de paz desde la base.

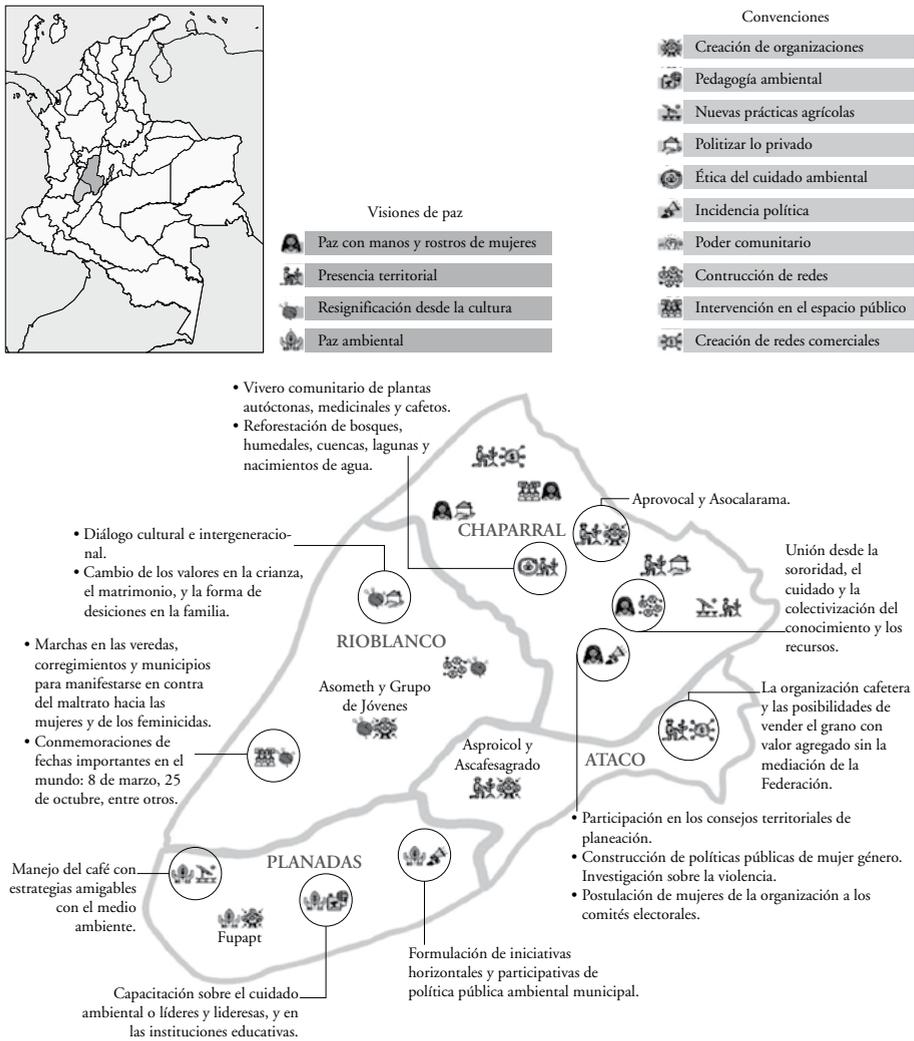


Figura 3.2. Mapa de estrategias territoriales que se manifiestan en lo relacional-estructural

Fuente: FALTA COMPLETAR EL DATO DE DONDE TOMARON EL MAPA

Es necesario comentar que la coinvestigación ha activado nuevas estrategias transformadoras que reinterpretan estas estrategias transformadoras mencionadas en función de la construcción de paz. Como mencionó una de las coinvestigadoras: “Yo nunca imaginé que al hacer una organización para cultivar café estaba construyendo paz” (Cristina Mosquera, Ascafesagrado, 2019).

Las estrategias transformadoras que surgen como materialización de las agencias, del/os poder/es comunitario/s de estas organizaciones, visibilizan y sitúan sus propuestas en el mapa de Colombia. Permiten que los procesos sean completamente endógenos, donde la apropiación de las acciones, de los sentires y, por lo tanto, la sostenibilidad de estos en el tiempo sea más factible.

Todas estas *paces* son *paces* situadas, tanto por su localización geográfica como por las agencias que las motivan. Todas juntas componen el *pluriverso de paces* del sur del Tolima. *Pluriverso de paces* que nos habla de un espacio colectivo compartido en el que estas visiones no son excluyentes, sino complementarias. El *pluriverso* está personificado en sujetos políticos que, desde su construcción de redes y apuestas políticas, dan manos y estructura a una plataforma que se va fortaleciendo en el día a día.

Los *pluriversos de paces* nos invitan a pensar en una geografía de *paces* transformadoras. Estos son una apuesta hacia los agenciamientos, que resignifican las definiciones y los marcos con los que sus territorios se piensan desde afuera.

Conclusiones

Las *paces* que surgen desde la base se enraízan en la fuerza comunitaria de las organizaciones sociales como poder con capacidad de transformación en el territorio. Se trata de poderes que emanan de una fuerza colectiva que tensiona otras propuestas de coconstrucción de paz que fluyen desde los Estados como actores principales de la paz liberal.

Visibilizar lo local implica encontrar las estrategias transformadoras que se manifiestan de formas distintas: en lo estructural, relacional y cultural. Visibilizar lo local implica un ejercicio de descolonizar la paz en el que todas estas estrategias permiten nombrar conceptos subalternos de paces. Porque la paz está surgiendo en otros espacios que no la denominan explícitamente, como en lo productivo, en la gestión de proyectos de vida dignos, en la participación política, trayendo significados diferentes en cada caso para ese mismo significante: polisemia invisibilizada de los sures territoriales.

Los *pluriversos de paces* nos invitan a pensar en una geografía de paces transformadoras. Estos son una apuesta hacia los agenciamientos, que resignifican las definiciones y los marcos con los que sus territorios se piensan desde afuera.

Una de las características destacadas de la construcción de *paces* es lo que hemos denominado *pluriversos de paces*, paces contextuales desde la base que tienen que ver con la idea de tiempo como algo sincrónico y no como un desarrollo diacrónico. La violencia, la resistencia, las acciones de paz suceden a la vez. No hay un proceso de violencia seguido por un proceso de paz. La ilusión de que la paz se negocia exclusivamente desde las élites es una idea liberal que ha permeado el quehacer de muchas organizaciones sociales. Sin embargo, el amor por el territorio, el sentido de pertenencia, los lazos relacionales y la cultura performativa han permitido que, independientemente de las denominaciones, la *paces* vayan ganando espacios en un ahora prolongado en el tiempo, lejos de las concepciones liberales de paz procesual.

Para finalizar, cabe añadir que todo esto ha sido posible porque nos hemos permitido generar espacios de investigación desde múltiples lugares de enunciación. Por lo tanto, este proceso, más allá de fortalecer los procesos comunitarios, también es un aporte a las metodologías en investigación para la paz.

Referencias

- Barreto Henriques, M. (2012). La paz de los pequeños nadas: una mirada desde los laboratorios de paz en Colombia. *Revista Javeriana*, 148(789), 64-77.
- Boulding, K. (1993). *Las tres caras del poder*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Cante, F. (2009). Los diversos rostros del poder y algunos de sus matices. *Desafíos*, (20), 81-109. Recuperado de <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/423/371>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)*. Bogotá: CNMH.
- Comisión de la Verdad. (2018). *Los 'Diálogos improbables' de John Paul Lederach, una forma de construir confianza en los territorios*. Recuperado de <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/los-dialogos-improbables-de-john-paul-lederach-una-forma-de-construir-confianza-en-los-territorios>
- Cruz, M. A., Reyes, M. J., & Cornejo, M. (2012). Conocimiento situado y el problema de la subjetividad del investigador/a. *Cinta de Moebius*, (45), 253-274. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2012000300005>
- De Sousa Santos, B. (1998). *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Ediciones Uniandes.

- De Sousa Santos, B. (2010). *Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)-Prometeo Libros.
- Fontan, V. (2012). *Decolonizing peace*. Lake Oswego: World Dignity University Press.
- Galtung, J. (1993). Los fundamentos de los estudios sobre la paz. En A. Rubio (Ed.), *Presupuestos teóricos y éticos sobre la paz* (pp. 15-45). Granada: Eirene-Universidad de Granada.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Haber, A. (2007). *Arqueología de uywaña. Un ensayo rizomático*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/258508961_Arqueologia_de_uywana_Un_ensayo_rizomatico/citation/download
- Haber, A. (2011). Nometodología payanesa: notas de metodología indisciplinada. *Revista Chilena de Antropología*, 23, 9-49.
- Hernández, E. (2009). Paces desde abajo. *Reflexión Política*, 11(22), 176-186.
- Jiménez Bautista, F. (2016). Paz intercultural. Europa, buscando su identidad. *Revista de Paz y Conflictos*, 9(1), 13-45. Recuperado de <http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/4376>
- Jimeno, M., Varela, D., & Castillo, A. (2019). Violencia, comunidades emocionales y acción política en Colombia. En M. Macleod & N. de Marinis (Eds.), *Resistiendo a la violencia. Comunidades emocionales en América Latina* (pp. 33-63). Ciudad de México- Bogotá: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Kurtenbach, S. (2007). *Why is liberal peace-building so difficult? Some lessons from Central América*. GIGA 59.
- Lederach, J. P. (2008). *La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de paz*. Bogotá: Editorial Norma.
- López, M., & Muñoz, F. (octubre, 2000). *El poder pacifista*. Trabajo presentado en las I Jornadas de Investigación para la Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, Asociación Española de Investigación para la Paz. Recuperado de <https://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/poderpacifista.pdf>
- Moreno Parra, H. (enero-junio, 2014). La paz imperfecta en el marco del conflicto político armado en Colombia. *Entramado*, 10(1), 202-218. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n1/v10n1a13.pdf>
- Muñoz, F. A. (2004). La paz. En F. A. Muñoz & B. M. Rueda (Eds.), *Manual de paz y conflictos*. Granada: Eirene.

- Porter, E. (2012). *Construir la paz. La experiencia y el papel de las mujeres en perspectiva internacional*. Barcelona: ICIP.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015). *Tolima: análisis de conflictividades y construcción de paz*. Recuperado de https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/tolima--analisis-de-conflictividades-y-construccion-de-paz.html
- Richmond, O. (2012). *Failed statebuilding versus peace formation*. Manchester: Manchester University.
- Rodríguez, I., Inturias, M., Volker, F., Robledo, J., Sarti, C., & Borel, R. (2019). *Conflictividad socioambiental en Latinoamérica: aportes de la transformación de conflictos socioambientales a la transformación ecológica*. Ciudad de México: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Rodríguez, I., Inturias, M., Robledo, J., Sarti, C., Borel, R., & Cabria Melace, A. (2015). Abordando la justicia ambiental desde la transformación de conflictos: experiencias en América Latina con pueblos indígenas. *Revista de Paz y Conflictos*, 2(8), 97-128.
- Sala Valdés, C. (2016). *Recorridos de las comunicaciones para la paz: conceptualización, revisión crítica y propuestas desde la comunicación para el cambio social y la teoría de transformación de conflictos* (Tesis, Universidad de Deusto, Bilbao).
- Sala Valdés, C. (2017). *Los procesos de comunicación social como herramienta para descolonizar la paz*. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Comunicación, Conflictos y Cambio Social, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España.
- Sebastián, L. (2014). Investigación intercultural e investigación acción participativa. Un diálogo desde el suroccidente colombiano. *Entramados y Perspectivas*, 4(4), 65-91.
- Sebastián, L. (s. f.). *Investigación comunitaria intercultural*. Cecies, Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Recuperado de <http://www.cecies.org/articulo.asp?id=570>

Segunda parte
MARCOS SOCIALES, POLÍTICOS,
ECONÓMICOS EN LOS QUE LOS
ACTORES LOCALES CONSTRUYEN PAZ

Capítulo 4

Construcción de una estatalidad contrainsurgente en el sur del Tolima durante el siglo XXI

Santiago Andrés Padilla Quintero,
John Jairo Uribe Sarmiento

En el prólogo al libro *¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué?* (López, 2016), Gutiérrez Sanín denominó como “políticas propaz” a una serie de estrategias impulsadas desde los años ochenta para afrontar la incapacidad histórica del Estado colombiano para ejercer el monopolio legítimo de la violencia sobre territorios periféricos y en conflicto. En este conjunto, puede ubicarse la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), que fue formulada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y reformulada por el presidente Juan Manuel Santos bajo el nombre de Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT); su objetivo fue profundizar el control territorial del Estado en varios municipios en conflicto mediante la acción coordinada de instituciones militares, de justicia e inclusión social. Para ello, la política planteó acciones en diferentes áreas: medidas contrainsurgentes, fortalecimiento del aparato judicial local, esfuerzos para la disminución de la pobreza, provisión de servicios básicos, participación local y descentralización del aparato estatal.

Desde su primera formulación en el gobierno de Álvaro Uribe bajo el nombre de Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) y, posteriormente, Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), el proyecto de la consolidación estuvo atravesado por una tensión central que interesa destacar en el presente capítulo: la subordinación de la protección

de los derechos de la ciudadanía a la lógica de la seguridad, tanto en la implementación como en su formulación. Esta dinámica obedeció a la clara composición militar en las altas esferas de esta política y al mecanismo de implementación lineal que priorizaba lo militar como prerequisite de la participación y el desarrollo. Tal tensión atraviesa la construcción de la estatalidad en el sur del departamento del Tolima, creando oportunidades y límites que la acción social ha tenido que enfrentar.

A continuación, se expone la estructura conceptual de las políticas, la disposición institucional, el panorama de los programas implementados. Luego, se analizan las tensiones que emergen en el sur del Tolima a partir de la revisión de prensa y de testimonios obtenidos en el marco del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”. Dicho proyecto fortaleció el acercamiento a organizaciones y líderes¹ a partir de un proceso de investigación participativo. En este capítulo se presentan elementos clave del contexto en el que las comunidades enfrentan la construcción de sus propuestas y perspectivas de paz.

La Política de Seguridad Democrática como antecedente

La PNCRT fue la actualización de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) implementada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde el año 2007 hasta 2010, consistió en una iniciativa que buscaba consolidar los logros de la Política de Seguridad Democrática que se había llevado a cabo en su primer período de gobierno (2002-2006) y que puso el acento en la lucha antiterrorista y antinarcoótica como mecanismo para acabar con la violencia en el país. Desde esta política, los actores armados ilegales no contaban con un carácter político y fueron definidos como grupo criminal. La Seguridad Democrática se propuso la victoria militar, el sometimiento del enemigo y la figura de la desmovilización como elementos clave para poner fin al conflicto armado. Por esa razón, la PCSD, a pesar de haber propuesto un componente de fortalecimiento del Estado de

¹ Proyectos de investigación y de consultoría se realizaron en los municipios de Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco. Estos se desarrollaron como un esfuerzo por fortalecer la participación comunitaria en la construcción de la paz. En el presente libro se dedican varios capítulos a presentar las concepciones de paz que dichas organizaciones vienen creando, así como los procesos que implementan para mejorar sus condiciones y posibilidades.

derecho, se centró principalmente en ejecutar acciones de carácter bélico y antinarcótico (DNP, 2010; FIP, 2011).

Durante el período de implementación de la Política de Seguridad Democrática y de la PCSD, el conflicto armado vivió una etapa de violencia exacerbada que se caracterizó por la crudeza de los ataques a la población civil en medio de la ofensiva contrainsurgente del paramilitarismo y del Estado y la respuesta guerrillera. Esto tuvo como resultado el aumento sustancial en el número de víctimas civiles y armadas, además de diversas acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos en contra de todos los actores armados involucrados, incluyendo a las fuerzas militares estatales, quienes en varios casos habrían formado alianzas con grupos paramilitares como estrategia para combatir a las guerrillas.²

Alrededor de los años 2009 y 2010 el conflicto empieza a mostrar un desescalamiento gradual de la violencia armada vivida durante la mitad de la primera década de 2000, entre otras causas debido a la disminución de la capacidad ofensiva de las guerrillas (sobre todo de las FARC)³ en razón a la avanzada militar del Estado y los grupos paramilitares, asunto que obligó a la guerrilla a retornar hacia la táctica guerra de guerrillas (Aguilera Peña, 2013). Sin embargo, para entonces el conflicto aún mantenía un nivel de violencia bastante alto; por ejemplo, para el año 2010 la Red Nacional de Información de la UARIV (2020) reportó un total de 223 049 víctimas y la base de datos de actores y dinámicas del conflicto del Cinep, un total de 909 infracciones a los derechos humanos.

Con este panorama Juan Manuel Santos inicia su primer mandato (2010-2014), su respuesta fue la formulación de la PNCRT como actualización de la PCSD. Esta nueva política planteó cambios en puntos concretos, pero mantuvo el espíritu de la anterior en lo que concierne a sus objetivos y a la

² Por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la complicidad de miembros del Ejército Nacional con una masacre perpetrada por los paramilitares en el Magdalena Medio. Ver *Verdad Abierta* (2008). Esta estrategia se fundamentó en la idea de “quitarle el agua al pez”, es decir, atacar a la población civil con el objetivo de erosionar la posibilidad de cualquier tipo de relación de la población con la guerrilla (Arjona, 2017), una estrategia repudiable que criminalizó y estigmatizó a los pobladores de varios territorios en conflicto bajo la acusación de ser colaboradores de la guerrilla.

³ Para el año 2010 contaban con 8000 combatientes, 4500 menos que lo contabilizado para el año 2004, y apenas hacía dos años habían registrado el número más alto de desmovilizados individuales hasta el momento. Ver Aguilera Peña (2013).

forma de intervención del Estado en los territorios. Se proyectó entonces como una estrategia para la profundización del control territorial por parte del Estado, para lo que combinó esfuerzos dirigidos a aumentar la presencia y el control militar en diferentes territorios, la provisión de servicios básicos y de acceso a la justicia, y la legitimidad de las instituciones estatales frente a la población.

La Política Nacional de Consolidación y su interpretación del conflicto

La PNCRT define como causas del conflicto armado una dificultad histórica del Estado para establecer el control institucional sobre diferentes territorios, la ampliación y colonización descontrolada de la frontera agrícola, y las características geográficas de las regiones. Estos elementos se mencionan como claves en el nacimiento de actores armados ilegales, quienes han desafiado el monopolio legítimo de la violencia estatal y la integración de regiones y poblaciones bajo los principios del Estado.

Para responder a esta problemática de carácter histórico, la PNCRT se propuso la construcción de unos ‘mínimos’ vinculados a cuatro temáticas específicas: control militar e institucional del territorio, participación ciudadana, integración regional y protección social. Sobre estos temas se estructura la estrategia del Estado en medio de la disputa por el control del territorio con otros actores armados. Para ello planteó la ejecución de un conjunto de acciones bélicas acompañadas de acciones dirigidas a proveer servicios sociales básicos, impartir justicia, tramitar conflictos y vincular a la ciudadanía al sistema electoral y a las decisiones públicas.

La implementación lineal como respuesta al ‘círculo vicioso’ del conflicto

En el documento de formulación de la política se afirma que en las regiones en conflicto existió una gran dificultad para la provisión de servicios sociales básicos en el territorio en razón a la inseguridad que generaban los actores armados que disputaban su control, pero, como si se tratara de un ‘círculo vicioso’, también se afirma que el surgimiento de los actores armados fue producto de esa incapacidad de provisión de servicios sociales básicos. La respuesta que da la política a esta paradoja es una intervención lineal, en la que se deben ir superando etapas de manera sucesiva, así la intervención

del Estado inicia con acciones bélicas y humanitarias que deben asegurar el ingreso de instituciones para la provisión de servicios básicos (UACT, 2014, p. 35).

Las etapas de este mecanismo de implementación lineal son formuladas de manera muy esquemática:

1. Recuperación: dirigida a recuperar el control de las fuerzas militares del territorio a través de acciones armadas ofensivas y de inteligencia, de acompañamiento judicial y policial por medio de un cuerpo de funcionarios especializados, de aspersión de cultivos ilícitos y de emergencia frente a violaciones de derechos humanos con la puesta en marcha del mecanismo de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.
2. Transición: enfocada a establecer unos mínimos en términos de acceso a servicios básicos, recuperación de territorios ambientalmente protegidos y proyectos productivos, todo para evitar el resurgimiento de actores.
3. Estabilización: etapa con la que se conseguiría el control del territorio por parte del Estado y concretamente de la autoridad municipal, mediante la provisión de servicios públicos, el fortalecimiento administrativo de la institución municipal, la titulación de tierras y la presencia continua de operadores de justicia.

De este modo, la PNCRT propone el desmantelamiento de las relaciones y estructuras que mantienen una integración del territorio funcional a los actores armados ilegales. La política plantea que algunas regiones son centrales para el mantenimiento de sus ofensivas armadas, pues proveen de recursos, información o representan un valor simbólico.

La PNCRT debería generar “condiciones básicas de control institucional del territorio” (UACT, 2014, p. 24), entendidas como la anulación de la capacidad de los actores armados ilegales para ejercer control sobre el territorio y la población, garantizando el monopolio de la violencia, la ley y, por lo tanto, la “seguridad y protección de la vida, la libertad y la propiedad del ciudadano” (UACT, 2015, p. 24). En este punto es importante resaltar que las acciones militares se conjugan con la vinculación de los pobladores, a lo que se denominó como cultura de la legalidad, esto es, la interiorización de

las normas como consecuencia de una efectiva administración de justicia. Ambos aspectos se articulan como elementos centrales de la disputa estatal para eliminar la influencia guerrillera.

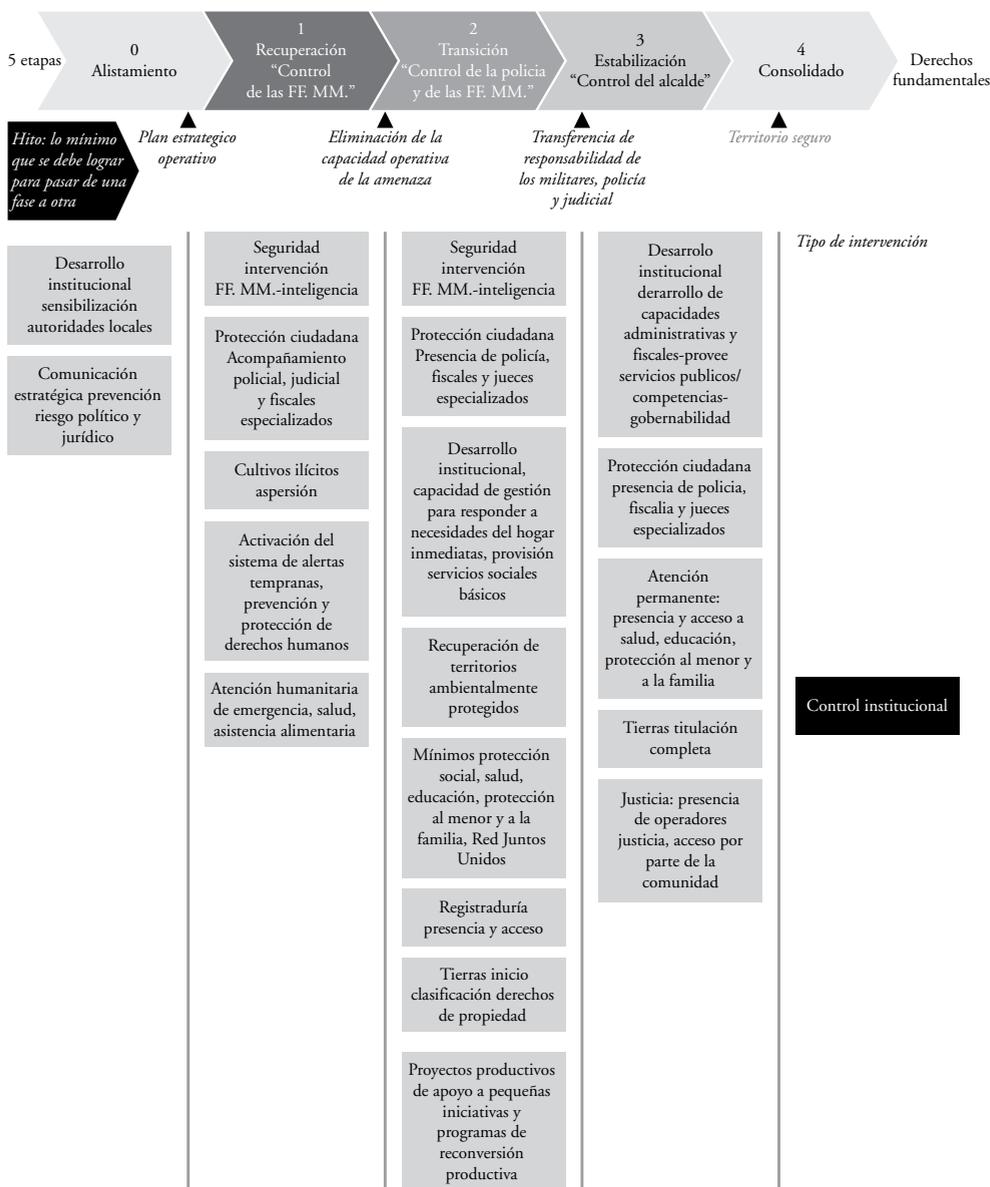


Figura 4.1. Proceso secuencia de la consolidación territorial

Fuente: UACT (2014).

Semaforización como clasificación del territorio y criterio de intervención

Las etapas de implementación de la política implicaban un proceso de clasificación de territorios conocido como ‘semaforización’: de esa manera una zona roja correspondía a un territorio en proceso de recuperación; una amarilla, en proceso de transición; y una verde, de estabilización. Para las zonas rojas el Estado priorizó acciones dirigidas a demarcar núcleos de consolidación, asegurar presencia policial y militar, además de servicios judiciales básicos. Para las zonas amarillas y verdes se implementarían acciones dirigidas a garantizar la gobernabilidad y la integración de las regiones a los centros de poder departamentales y nacionales.

Estas zonas se agruparon en nueve subregiones: Montes de María, Catatumbo, Nudo de Paramillo, Cordillera Central (que incluye el sur del Tolima), Macarena-Río Caguán, Putumayo, Nariño, Cauca y Arauca (ver figura 4.2), su selección, según el Decreto 2332 de 2013, que lo reglamenta, sugiere que “[...] allí han convergido históricamente una serie de factores desestabilizantes que además han tenido un fuerte impacto sobre el desarrollo de regiones aledañas y del país en general: una débil presencia histórica del Estado, cultivos ilícitos, grupos al margen de la ley, altos índices de desplazamiento y victimización y, con frecuencia, una importante destrucción del ambiente” (DPS, 2013, p. 6).

Un criterio adicional que llevó a la selección de tales municipios fueron los resultados del Índice de Vulnerabilidad Territorial desarrollado por el Departamento de Planeación Nacional (DPN) para el período 2008-2012, el cual hizo una medición a nivel nacional de la vulnerabilidad territorial entendida como “la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto provocado por el conflicto armado interno y la criminalidad común y organizada” (DNP, 2015, p. 6).

En los 59 municipios que componen las nueve subregiones, el Estado central pretendía llevar a cabo un “esfuerzo integral”, es decir, implementar las tres etapas de la política; sin embargo, el gobierno amplía los municipios objetivo, introduciendo la noción de “esfuerzo gradual básico”, que buscaba implementar “acciones de apoyo a corto plazo, que tengan impacto y generen confianza: mejoras en infraestructura de conectividad, social,

agua y saneamiento y electrificación rural, a través de un cupo de inversión predefinido” (DPS, 2013, p. 8).

Lo anterior se debió al esfuerzo del Estado por evitar el ‘efecto globo’ que se venía dando en la implementación de la PCSD, es decir, la reubicación de cultivos ilícitos en municipios aledaños a los de consolidación. Esto podría aplicarse no solamente a los cultivos ilícitos, sino a la necesidad de bloquear el reposicionamiento de actores armados en otros municipios; por ejemplo, en la región sur del Tolima, la mayoría de los municipios que fueron catalogados de esfuerzo gradual básico (Roncesvalles, San Antonio, Ortega,

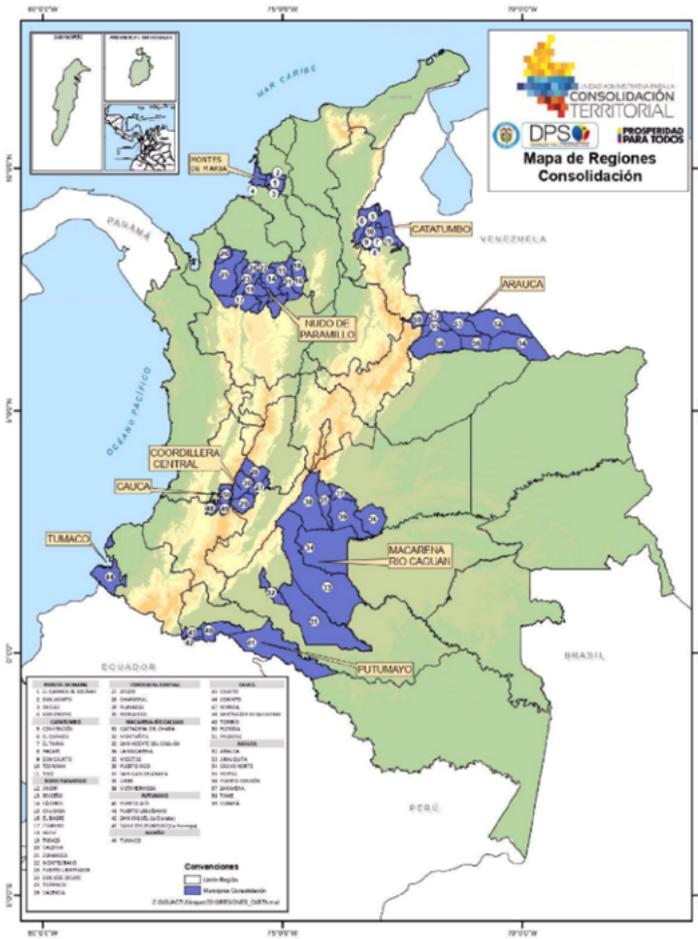


Figura 4.2. Regiones PNCRT (2011)

Fuente: UACT (2012).

Coyaima, Natagaima) limitan con dos grandes municipios de esfuerzo integral (Chaparral y Ataco), y aunque sus cifras de violencia están por debajo de estos últimos, sumados estos municipios de esfuerzo gradual básico registran el 33 % del total de hechos victimizantes de 1985 a 2016 para el Tolima, según la Unidad de Víctimas (Barros y Uribe, 2019, p. 15).

No obstante, en el Tolima los pobladores de los territorios considerados como ‘zona roja’ se sintieron excluidos y estigmatizados, criticando el modelo de semaforización debido a que esta clasificación imposibilitaba la oferta institucional más allá de la presencia de las fuerzas militares en el territorio, acompañado de violaciones a derechos humanos de militares contra la población civil en varias regiones; ambos hechos contribuyeron a aumentar una percepción de inseguridad y desconfianza hacia el Estado (Aponte, 2019; Barros y Uribe, 2019).

Estructura institucional: entre lo militar y lo civil

Con el Decreto 4116 de 2011 el gobierno nacional crea la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT) como parte del sector de inclusión social y reconciliación del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). La Unidad tenía por objetivo coordinar la implementación de la PNCRT con instituciones estatales que integraban componentes de consolidación en sus programas. Con su creación, se pretendió acercar la dirección de la política a la presidencia para darle un componente más civil y facilitar su control. Esta medida buscaba romper con el carácter militar que habían tenido previamente los órganos de coordinación de las políticas de consolidación.

La Fundación Ideas para la Paz, como asesora del proceso de la consolidación, afirmó en su *Balance de la Política de Consolidación Territorial* (FIP, 2011) que durante el gobierno de Uribe “los organismos de seguridad tenían un peso definitorio en la orientación estratégica, mientras que los responsables de la política social o civil quedaban como meros ejecutores de las decisiones del comité directivo” (p. 17). Esta organización recomendó una reformulación del proceso dirigida a la “inversión de la relación [en la que] objetivos sociales y políticos acaben subordinados a los imperativos militares de la guerra irregular o del combate a cualesquiera actores del conflicto” (p. 45).

La inclusión de la UACT al sector de inclusión social buscaba romper la visión que se tenía de la política como una rama más de la Doctrina de Acción Integral (DAI), es decir, de la estrategia contrainsurgente del Ministerio de Defensa, que se planteó como “[...] el curso de acción estratégico en dirección al acercamiento entre la población civil y la Armada Nacional, así como al fortalecimiento de la legitimidad y la imagen institucional de las Fuerzas Militares y el Estado” (Armada Nacional, 2013, p. 25). De forma similar a la política de consolidación, la DAI esbozaba acciones dirigidas a “coadyuvar en la recuperación social del territorio, promoviendo el desarrollo social y económico de una región al tiempo que se garantiza la seguridad” (Armada Nacional, 2013, p. 35).

En un artículo de *La Silla Vacía* del año 2013, se sugiere que la intención de reformular el mecanismo de coordinación se vio frustrado debido a la presión política del entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien logró ubicar como director del Programa de Cultivos Ilícitos (PCI) al politólogo Javier Flórez, que era cercano al ministro y que se convirtió en un enlace entre el ministerio y la UACT.

Un informe de la Contraloría General de la Nación (CGN) (2013) expone una situación preocupante en el componente de erradicación de cultivos ilícitos, en la que argumenta que para el año 2012 la UACT no había logrado establecer una coordinación clara y fluida con las fuerzas militares, asunto que implicaba un “hallazgo con posible connotación disciplinaria” (p. 46). Así lo afirma: “[...] se presenta una débil relación con las fuerzas armadas, cuyo apoyo es vital y definitivo teniendo en cuenta que el fundamento de la consolidación es la ‘seguridad en las zonas focalizadas’ para adelantar los programas de erradicación [...]. Esta situación se presenta por el incumplimiento de los convenios y acuerdos establecidos con las Fuerzas Militares e incide en el cumplimiento de las metas establecidas para la Unidad” (CGN, 2013, p. 46).

Sin embargo, el reverso de la PNCRT, la estrategia militar Plan Espada de Honor, evidenció que, si bien desde la política de consolidación había una búsqueda por supeditar el desarrollo en los territorios periféricos a una visión más civil, el componente de seguridad estaría claramente presente. Así lo explica un informe al Congreso por parte del Ministerio de Defensa para los años 2014-2015: “El concepto estratégico de ‘Espada de Honor II’ a través de la Directiva Lealtad, se basó en la estrategia presidencial para la

estabilización y consolidación, manteniendo enfoque decisivo y sinérgico de ‘Espada de Honor’” (Ministerio de Defensa Nacional, 2015, p. 79).

Acceso a la justicia y control territorial

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) presentó como su componente más alto de inversión el de “consolidación de la paz” (DNP, 2010, p. 605), al que se destinaron 76 billones de pesos y que se dividió en las líneas de “Seguridad, orden público y seguridad ciudadana”, “Justicia” y “Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional”. Mediante este componente se buscó continuar la estrategia de consolidación iniciada en el período anterior, manteniendo la seguridad como prioridad para enfrentar la violencia y subordinando otros temas a esta:

[...] los índices de violencia del país son todavía excesivos bajo estándares internacionales, y adicionalmente la naturaleza de las amenazas de la violencia ha mutado en diversas formas. Lo anterior apunta a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para hacer frente a estos cambios estructurales. En concreto, se requiere una estrategia de seguridad rural para la consolidación territorial [...] y una estrategia integral para la seguridad y la convivencia ciudadana (DNP, 2010, p. 390).

Este componente implicó una segunda fase en la etapa de consolidación, sobre todo en territorios donde había sido posible replegar a los insurgentes y resquebrajar su control territorial. Así, aunque el presupuesto del PND mantuviera las cifras de inversión en seguridad y defensa casi intactas⁴ (lo que reflejaba la necesidad de continuar acciones ofensivas), también incrementó la destinación de recursos a fin de atender temas prioritarios para la consolidación de los avances contrainsurgentes, tales como el fortalecimiento de la impartición de justicia. De esta forma, el presupuesto asignado en este período (2010-2014) para el componente de justicia fue de 16 billones de pesos, una cifra muy superior comparada a lo asignado por el gobierno

⁴ 54 908 430 billones de pesos para 2006-2010 (DNP, 2007, p. 562) y 59 098 492 billones de pesos para 2010-2014 (DNP, 2010, p. 605).

anterior (2006-2010), que fue de 434 989 millones de pesos, compartiendo este monto con otras líneas de acción en el rubro del componente “los requisitos del Estado comunitario” (DNP, 2007, p. 562).⁵

De manera similar, la cooperación internacional registra un aumento claro en la inversión de la agencia de cooperación de Estados Unidos USAID con respecto al fortalecimiento del imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos; de modo inverso se reporta un descenso en la lucha contra las drogas (ver figura 4.3).

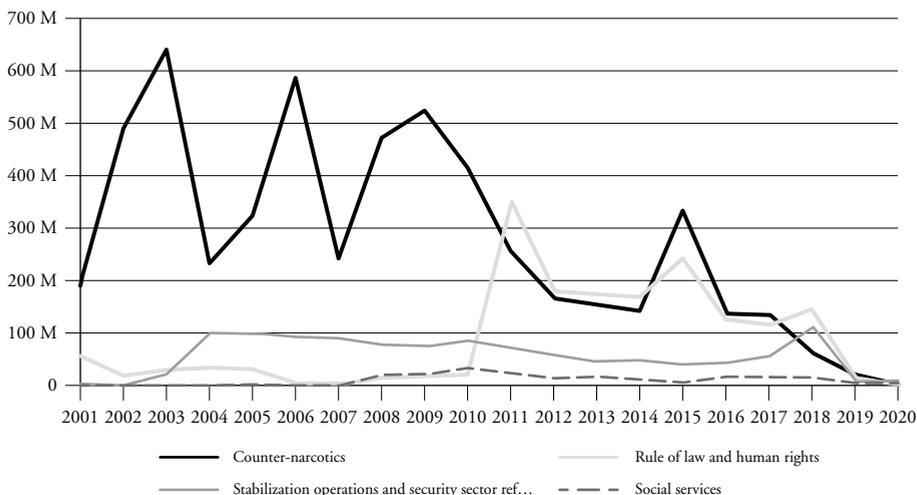


Figura 4.3. Total de desembolsos en dólares USAID por sector y año (2002-2018)

Fuente: elaboración de los autores con cifras de la base de datos de la USAID (2020).

El acceso a la justicia fue concebido como un paso clave para la consolidación de los logros del Estado en términos de frenar la avanzada subversiva y alcanzar el control territorial, con esto se promovía la vinculación de la población a una “cultura de la legalidad” (UACT, 2014, p. 28), entendida como “un proceso continuo que implica la aplicación de incentivos y sanciones, que garanticen la obediencia a las normas dictadas desde el Estado y que eviten que conductas y actividades ilegales sean socialmente tolerables”

⁵ El aumento en el rubro de justicia es significativo a pesar de que el presupuesto total del PND para el período 2010-2014 era más del doble que el del período 2006-2010.

(UACT, 2014, pp. 29-30). Según esta visión, tales incentivos vienen asociados a la promoción de la participación ciudadana en decisiones públicas a nivel local y en el ejercicio efectivo de justicia que “afianza la cultura de la legalidad cuando la población reconoce que hay una sanción por el incumplimiento de la ley” (UACT, 2014, p. 28). La PNCRT llega a afirmar que, si no hay una efectiva impartición de justicia y protección de derechos, “las víctimas contribuyen a expandir la violencia y el uso de la fuerza [cuando] se generaliza el silencio ante los abusos y también la decisión de hacer justicia por propia mano” (UACT, 2012, p. 16).

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, la política buscó ampliar la presencia de los operadores de justicia en territorios de consolidación y fortalecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de observancia de violaciones a los derechos humanos.

En el marco de la consolidación territorial y del apoyo que le concedió la agencia de cooperación de Estados Unidos USAID, se formularon trabajos como el de Vélez Mejía, Pérez y Junca (2015) y el de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que buscaron producir conocimiento sobre este tema. Estos diagnosticaron las barreras de acceso a la justicia en diferentes regiones de conflicto en Colombia, identificando el control territorial de actores armados como una de las principales, y formularon también recomendaciones para la implementación de políticas de justicia en áreas rurales.

También, se crearon propuestas como el proyecto “Acceso a la justicia” (AJA), llevado a cabo por la USAID, Checchi & Co. y algunas universidades regionales, que buscaban asegurar el acceso a la justicia mediante la puesta en marcha de casas de justicia y de brigadas jurídicas. Igualmente, se puso en marcha el Sistema Local de Coordinación de Justicia (SLCJ), el cual tenía por objetivo “[...] garantizar la presencia óptima y básica de los operadores de justicia en todo el territorio municipal, de manera tal que a través de su articulación y comunicación logre maximizar los recursos disponibles, disminuir las restricciones operativas y mitigar las barreras de acceso a la Administración de Justicia que afectan a las comunidades” (Minjusticia y Corporación Razón Pública, 2012, p. 13).

Así mismo, el SLCJ se articulaba a las fuerzas armadas como un mecanismo necesario para la legalización de las acciones armadas realizadas por estos en las zonas de conflicto, por ejemplo, en lo que se refería a la legalización de capturas. De esa forma se buscaba mantener un contacto permanente

entre operadores de justicia y militares, disponiendo para estos últimos de una “base de datos de los operadores de justicia del área correspondiente y de los turnos de servicios de modo que se facilite la ubicación del personal requerido para legalizar las acciones de la fuerza pública” (Minjusticia y Corporación Razón Pública, 2012, p. 42).

El acceso a la justicia y el fortalecimiento del aparato de justicia estatal fueron entendidos como objetivos importantes para propiciar el crecimiento económico del país y como un camino para la integración de las poblaciones en territorios de conflicto a un orden económico. Esto es mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de la siguiente manera: “[...] la literatura económica ha señalado la estrecha conexión entre los sistemas judiciales eficientes y el crecimiento económico [...] un sistema judicial idóneo protege los derechos de propiedad de los asociados y garantiza el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos [...] un marco regulatorio claro y un sistema judicial eficiente, promueve la competencia en los mercados e incentiva el aumento de la competitividad de las empresas [...]” (DNP, 2010, p. 405).

Entre los resultados esperados por la PNCRT respecto del proceso de formalización de la tierra estaban el incremento del precio de la propiedad rural, el crecimiento de los ingresos de los propietarios rurales, la reducción de la conflictividad relacionada con la propiedad de la tierra y la disminución de las posibilidades de desplazamiento y despojo de la propiedad (UACT, 2012).

Legitimidad de las fuerzas militares en cuestión

Como parte del componente de cultura de la legalidad, la política se propuso la protección de los derechos constitucionales de la población como un tema clave para aumentar su confianza en la fuerza pública, sin embargo, a lo largo del país este objetivo riñó con la estrategia de desestructuración de las ‘redes de apoyo’ (CCAI y Gobernación del Tolima, 2010, p. 12) de actores armados ilegales implementada desde gobiernos anteriores.

En ese sentido, según la base de datos *Noche y Niebla* del Cinep (2020), entre el año 2001 y 2019, se reportaron 935 presuntas amenazas del Ejército Nacional contra habitantes de regiones en conflicto; en varios casos se describe cómo los pobladores eran acusados, sin sustento jurídico, de ser colaboradores de los actores armados, siendo estigmatizados, perseguidos y violentados. También, el Ejército es señalado por el Centro Nacional de

Memoria Histórica (CNMH) (2018) como uno de los tres actores armados que, presuntamente, cometieron más ataques contra la población civil y población armada indefensa, ubicándose por debajo de las guerrillas y los paramilitares.

Por otro lado, fuerzas militares buscaron fortalecer su legitimidad mediante la construcción de infraestructura en varios territorios del país. No obstante, la tensión con el componente de seguridad se mantuvo; por ejemplo, en un documento de evaluación del piloto de la política en la Sierra de La Macarena de la Corporación Nuevo Arco Iris (2013), se menciona cómo el desarrollo de proyectos viales por parte de las fuerzas militares generó fuertes cuestionamientos de la población, la que veía tales proyectos como una posible estrategia para mejorar la movilidad de tropas en pro de una ofensiva militar y no como una iniciativa que beneficiara a los civiles en términos de desarrollo. Esta reacción se relaciona con el hecho de que, en el marco del conflicto armado, la población ha sido objetivo militar para los beligerantes, quienes compiten entre sí por su control y el de recursos territoriales (Arjona, 2017; Aguilera, 2013; González, 2014; Kalivas, 2010).

A modo de cierre sobre la política de consolidación

Como se ha intentado mostrar, la PNCRT surgió con el objetivo de fortalecer el control del Estado sobre territorios en disputa armada; esta involucró un modelo de implementación lineal, que clasificó e intervino varios territorios de manera diferenciada según sus niveles de violencia armada. En ese sentido, fue concebida como un proceso por etapas, que combinaba de forma coordinada un componente de seguridad militar y un componente ‘civil’, dirigido a fortalecer la legitimidad estatal frente a la población.

Sin embargo, en su puesta en marcha es posible evidenciar que los componentes de seguridad militar y civil no siempre fueron implementados de modo armónico y coordinado; por el contrario, su trayectoria estuvo atravesada por una tensión entre ambos que se expresó a varios niveles y en diferentes momentos. En ese sentido, uno de los niveles que reflejó tal tensión fue el Estado central, en donde se materializó una reestructuración institucional de la política en pro del fortalecimiento de su componente civil, lo que produjo a su vez una reacción contraria por parte de actores políticos provenientes del partido de gobierno, así como del sector militar y de defensa.

A nivel territorial, esta tensión se expresó en los intentos por subordinar varias acciones dirigidas a construir confianza y legitimidad entre los pobladores a estrategias de desestructuración de las redes de apoyo de fuerzas ilegales y erradicación de cultivos ilícitos. Entre estas acciones destaca la de la impartición de justicia, entendida desde la visión de la ‘cultura de la legalidad’, un concepto con el potencial de poner en riesgo a la población en cuanto ‘moralizó’ y simplificó la coexistencia de poblaciones pacíficas y actores armados ilegales, ignorando las presiones que ejercen los segundos a las primeras en territorios que se encuentran en disputa.

En efecto, la subordinación de las acciones civiles a las de seguridad, que se da con el objetivo de ganar territorio a un rival armado, encarna el peligro de simplificar la dinámica compleja de los territorios, pues construye una noción binaria que equipara el alcance de un estado de paz con la construcción de un Estado fuerte y la desestructuración del control territorial de otros actores armados. Esto pasa por alto la existencia de resistencias e iniciativas pacíficas en medio de contextos de guerra e, incluso, puede llegar a entender a la población como instrumento útil para la instauración del Estado.

De hecho, las lógicas de las violencias obedecen a estrategias de guerra, a capacidades y opciones militares, al modo como se estructuran los poderes en todos los niveles (Arjona, 2017; Aguilera, 2013; González, 2014; Kalivas, 2010). Los Estados se estructuran, entre otras, por las dinámicas de la guerra (González, 2014). Esto quiere decir que los actores se encuentran en un ‘juego’ de relaciones de poder que inciden en sus posibilidades de acción, pero que ellos han contribuido a recrear.

En esta dirección, varias autoras feministas (Paarlberg-Kvam, 2019; Moola, 2006; Posada y Carmona, 2019) subrayan el hecho de que las mujeres han logrado construir propuestas organizativas e identidades (al devenir como lideresas) no solo a pesar de la guerra, sino a partir de ella. Es necesario profundizar en el modo como los actores locales han ‘respondido’ a las prácticas institucionales, en la manera como han enfrentado las tensiones de las prácticas impuestas desde el Estado, específicamente esta compleja relación entre seguridad y legitimidad en el marco de su articulación a lógicas de mercado.

Ahora bien, ¿cómo se construye legitimidad a nivel subregional cuando las instituciones desconfían de los pobladores en las zonas de conflicto?

Como se ha presentado en este aparte, las lógicas estratégicas del Estado han llevado a la idea de que la legitimidad estatal se construye, prioritariamente, sobre la base de la cultura de la legalidad y la intervención militar, definidas como sometimiento al aparato estatal. Esta situación crea límites y posibilidades a la actividad local para la construcción de la paz.

Sin embargo, también se debe resaltar que no todos los esfuerzos civiles pudieron estar subordinados a las lógicas militares. Por ejemplo, en el caso del sur del Tolima la tensión entre lo civil y la seguridad se reflejó tanto en acciones que profundizaron la desconfianza de la población en el Ejército como en acciones que contribuyeron a fortalecer la confianza y legitimidad de instituciones civiles. Las siguientes páginas profundizan en esta relación entre los actores locales y el Estado en ese contexto.

Consolidación cono sur del Tolima

En los municipios del llamado cono sur del Tolima (Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco) se ha vivido fuertemente la violencia del conflicto armado colombiano; en diferentes momentos estos territorios presenciaron el desarrollo de eventos históricos de la guerra en el país, tales como el período conocido como la Violencia, el bandolerismo, el nacimiento de guerrillas liberales y el conflicto entre guerrillas contemporáneas (FARC, ELN, EPL), paramilitares (AUC, ACMM) y Estado.

En ese contexto, el Estado ha sido un actor central del conflicto desde los años sesenta hasta principios del siglo XXI. En este último período, se gestan la Política de Seguridad Democrática y su sucesora, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), que iniciaron en el año 2002 hasta 2010 durante los dos períodos de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Una de las estrategias que ideó la PCSD para el cumplimiento de sus metas fue la clasificación como ‘zona roja’ de varios territorios de intervención en el país. El cono sur del Tolima fue uno de los territorios definidos como zona roja; a través de esta figura el Estado iniciaría una serie de acciones militares en el territorio, cuyo objetivo fue restar control territorial a la guerrilla de las FARC, pero al mismo tiempo esto impediría el arribo de proyectos de inversión social a la región, agudizando las condiciones de inequidad y pobreza

que el conflicto con los paramilitares había generado.⁶ Así resume un líder de la región la estrategia: “[...] esta región quedó vetada, porque llegaron los programas del gobierno nacional que hacían una semaforización, zona roja, amarilla y verde, y nosotros no salíamos del rojo, entonces acá nunca nos botaron ni siquiera un lápiz [...] nosotros perdimos mucho apoyo del gobierno, solo hasta el mandato pasado [...] hubo una inversión de 900 millones para hacer placa huellas” (entrevista líder de Ataco, agosto de 2019).

Junto al aumento de las acciones militares en el territorio, otro elemento importante de la avanzada del Estado sería la instalación en el año 2005 de un Batallón de Alta Montaña en el límite del departamento del Cauca con el sur del Tolima, que tenía como finalidad restringir la movilidad de la guerrilla por la cordillera Central desde la alta montaña (Barros y Uribe, 2019; Aponte, 2019), una ruta histórica de las guerrillas para atravesar hacia Caquetá y Putumayo (Salinas, 2014).

Durante los años 2010 y 2011, ocurrió en el sector del cañón de las Hermosas, en el municipio de Chaparral, una violenta incursión del Ejército Nacional cuyo objetivo era dar con Alfonso Cano, el líder más importante de las FARC para entonces. Este hecho daría como resultado la huida de Cano por el sur del Tolima al departamento del Cauca y su muerte en este departamento a manos del Ejército Nacional en el año 2011 (Barros y Uribe, 2019).

Posterior a este suceso, en 2012, el conflicto en el Tolima sufre una reducción con respecto a los altos niveles alcanzados a principios y hasta poco más de la mitad de la década de 2000. Según un informe de la FIP (2013), para el año 2012 en el sur del Tolima las acciones militares de gran envergadura de grupos armados ilegales habían disminuido. Exceptuando al municipio de Chaparral, los otros tres municipios del cono sur no se encontraban dentro de los indicadores más altos de violencia, a pesar del alto riesgo de reclutamiento forzoso reportado por las autoridades (FIP, 2013; *El Nuevo Día*, 2012). Este mismo informe reporta que hechos como la poca presencia de las llamadas ‘Bacrim’ o grupos posdesmovilización

⁶ Quienes para 2002 habían ejecutado las tomas a Puerto Saldaña y Santiago Pérez, obteniendo una victoria militar que marcaría la salida del Bloque Tolima de las AUC de la región. Acciones que dejarían tras de sí un alto número de víctimas civiles, siendo ambos bandos responsables (Barros y Uribe, 2019).

del Bloque Tolima, así como la ausencia de cultivos de amapola y de coca, propiciaron una baja en la violencia armada y la presencia más clara de las fuerzas militares.

A pesar de este buen panorama, la violencia en el territorio seguía latente. Por ejemplo, según la UARIV, el año 2013 registra el número de víctimas más alto en seis años (figura 4.4). También, el número de amenazas a pobladores de la región sur del Tolima aumenta a partir del año 2012 y solo reporta un descenso hasta el año 2016 (ver figura 4.5).

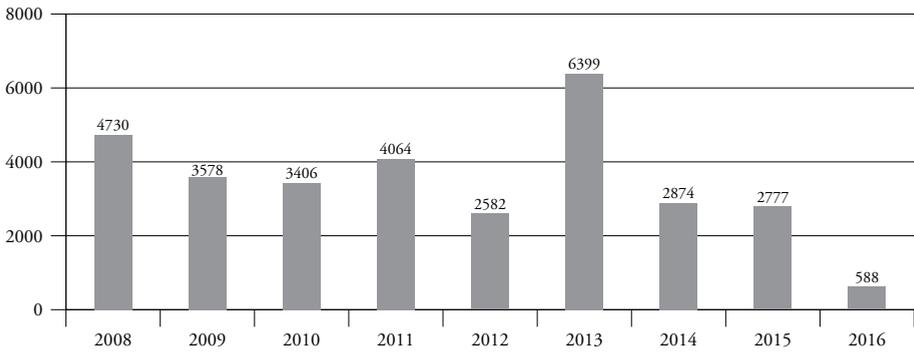


Figura 4.4. Víctimas de desplazamiento (Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco) 2008-2016

Fuente: elaboración de los autores basados en cifras de la UARIV (2020).

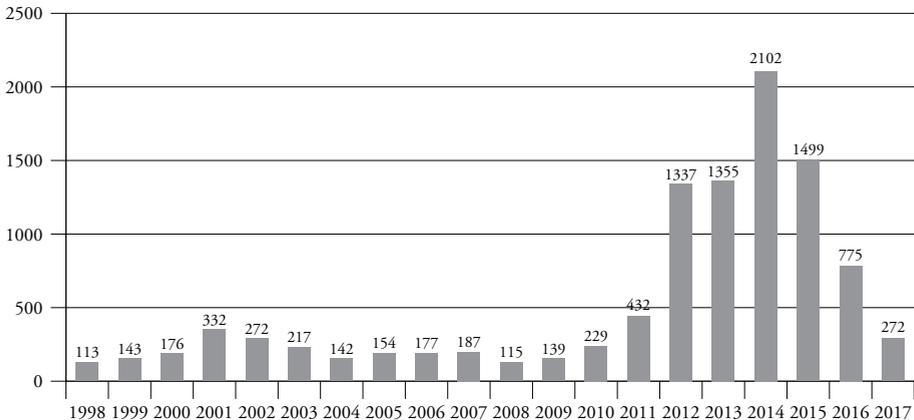


Figura 4.5. Total amenazas sur del Tolima (1998-2017)

En un informe de Human Rights Watch para el año 2013, se relata cómo varias de las amenazas que se encontraban sufriendo los pobladores de la región estaban dirigidas a líderes de organizaciones de víctimas reclamantes de tierras que buscaban retornar a estas. De acuerdo con los pobladores de estos territorios, las amenazas eran autoría de la guerrilla de las FARC, que coaccionaba a los campesinos a asistir a reuniones en donde se declaraba objetivo militar a los desplazados reclamantes, acciones dirigidas a amedrentar a la población con el propósito de impedir la reclamación de sus tierras y frenar el establecimiento de puestos de policía:

[...] esta columna guerrillera ha venido reuniendo obligatoriamente durante estos últimos tres meses a los campesinos de las veredas de este municipio para poner a la gente en contra del retorno de las familias desplazadas y que rechacen el puesto de policía del corregimiento Santiago Pérez, declarando objetivo militar al primer desplazado que retorne. Lo más preocupante es que en esas reuniones estos comandantes han manifestado que a la familia Bernal, representantes y organizadores del retorno, nos van a mandar a matar para callarnos (líder de restitución, Human Rights Watch, 2013, p. 111).

Para el año 2013 en todo el departamento se habían incrementado los ataques de la guerrilla a la fuerza pública a través del uso de explosivos, además de hostigamientos a vehículos y puestos de policía; también se menciona cómo, a pesar de la versión institucional sobre el avance de la fuerza pública, se mantuvieron prácticas como asesinatos selectivos, extorsiones y ataques a infraestructura (*El Nuevo Día*, 2013). Para 2014 los ataques continuaron y ocurrió un hecho de especial importancia: habitantes de Herrera (Rioblanco) reportaron haber visto un grupo de 200 guerrilleros provenientes de Florida (Valle), quienes ingresaron al departamento con el objetivo de reforzar el pie de fuerza del Comando Conjunto Central de las FARC que operaba en la zona (*El Espectador*, 2014).

Lo anterior permite inferir que para el período posterior al año 2012 la relativa victoria del Estado se estaba viendo amenazada por la guerrilla de las FARC, que buscaba frenar el despliegue de la institucionalidad estatal y mantener fuentes de financiación provenientes de las extorsiones.

En ese contexto comienza a implementarse la PNCRT del gobierno Santos en el cono sur del Tolima, siendo un territorio en el que habían surgido las condiciones para la implementación de la etapa de ‘transición’ a la consolidación del territorio bajo el control del Estado, pero en el que seguía presente la lucha por ocupar la retaguardia histórica de la guerrilla de las FARC. Para socavar de manera definitiva el control de las FARC y en consonancia con su modelo de implementación lineal, la PNCRT pasa de implementar acciones de exclusiva recuperación militar del territorio a enfocarse también en acciones para la garantía de ciertos servicios, por esa razón se invierten más recursos en temas como la inserción de operadores de justicia, la puesta en marcha de acciones para la integración política y económica de la región al centro del país, y el fortalecimiento de la capacidad de gobierno de las administraciones locales.

Un antecedente: Programa Familias Guardabosques

Del año 2003 a 2010, el gobierno de Álvaro Uribe implementó el Programa Familias Guardabosques con el objetivo de disminuir la siembra de cultivos ilícitos; este pretendía propiciar la erradicación voluntaria a través del otorgamiento de incentivos económicos a campesinos y la transferencia de conocimientos técnicos para la mejora de sus procesos productivos.

El cono sur del Tolima fue priorizado para la implementación de la estrategia, el programa estaría dirigido a reducir el cultivo de amapola en la región, cuyo número había crecido de forma descontrolada durante los años noventa (Barros y Uribe, 2019). Para el año 2003 el programa se encontraba en marcha y autoridades regionales solicitaban su ampliación, resaltando su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos (*El Tiempo*, 2003).

Sin embargo, habitantes del territorio recuerdan que el programa tuvo consecuencias negativas: por un lado, debido al desorden que había causado la inserción de los subsidios; y, por otro lado, con la generación de riesgos a la seguridad de sus habitantes, pues fue señalado por algunos como una estrategia militar de inteligencia.

Con respecto al primer aspecto, al ser asignados por núcleo familiar y no haber sido articulados a la implementación de acciones para el desarrollo, buena parte de los incentivos económicos y subsidios para los cultivadores fueron utilizados por varios beneficiarios para la compra de licor o el pago a trabajadoras sexuales, dinámica que creció de manera descontrolada al

punto de generar en el territorio un espacio de ocio que fue calificado como ‘zona de tolerancia’. Así lo expresa una líder de la región:

Igualmente pasó con guardabosques, un subsidio muy bueno que el gobierno les dio a los beneficiarios que salieron, pero lamentablemente la mayoría no aprovecharon esos dineros. Cuando Chaparral pagaba guardabosques, bajaba uno entre semana y eso parecía que estuviera en feria [...] no les cabía un alma más. Las Palmas digamos que era un lugar, una zona de tolerancia, había un lugar ahí, un bar y eso lo mantenía lleno. Entonces, se dio el caso que el gobierno miró que eso no estaba dando resultado y mochó el programa. La gente que no aprovechó se quedó igual de jodida, aunque hubo algunos que aprovecharon también y salieron adelante para arreglar sus casitas (entrevista, 1º de abril de 2019).

En un estudio realizado para el año 2004 en el municipio de Chaparral, se encontró que, para los pagos hechos a beneficiarios en los meses de enero, abril y julio, entre el 4,5 % y el 5 % del total de los incentivos entregados se habría gastado en festividades, un porcentaje mayor a la inversión en proyectos comunitarios, que habría sido solo del 4 % (Yepes González, 2005).

La asignación de recursos carecía de controles y no se vinculó a alguna actividad en específico, por ello, con objetivo de obtener mayores recursos, grupos familiares rentaban tierras por las que obtenían subsidios adicionales: “Es que, por ejemplo, una familia con más de cinco hijos, el papá y la mamá les hacían una escritura, un documento, y esos cinco hijos podían recibir su ayuda de ‘guardabosques’. Entonces, había gente que percibía mucha plata por eso también” (entrevista, 1º de abril de 2019).

Se recuerda cómo guardabosques fue uno de los primeros programas de desarrollo alternativo que llegó al territorio; sin embargo, en algunas zonas sus habitantes rechazaron la iniciativa sospechando de ella como un mecanismo de infiltración del Ejército para recolectar información sobre la guerrilla: “La primera entidad que trató de venir aquí fue la de guardabosques, pero entonces la gente no la dejó entrar. Por medio de esas ayudas se iban a infiltrar a investigar, a hacer el seguimiento de esa gente [la guerrilla]” (entrevista, 1º de abril de 2019).

No obstante, para otros, fue visto como una estrategia de carácter político-militar que tenía por objetivo ganar la confianza de la población en relación con el gobierno y con el Estado, así lo registra Aponte (2019) en una entrevista:

Entrevistado: las Familias Guardabosques, dentro de su filosofía de tratar de remediar la situación económica, porque, como le digo, se entiende que no solamente es con represión, sino con programas sociales, que se logra la convivencia, la pacificación. Eso logró calar también dentro de la gente como tal para evitar que siguieran cultivando la amapola, que es lo que se daba acá, ¿cierto?, y porque esa fue la filosofía, sacar los cultivos ilícitos de la población y darles alternativas de cultivos o de otras alternativas lícitas para que convivieran. Entonces, claro, el Programa Guardabosques con sus proyectos productivos de gallinas ponedoras, con sus proyectos de cerdos, porcícolas, caló mucho en la sociedad, en la comunidad, y eso ayudó, créame, también, a alejarlos, todo eso sirvió (entrevista 11, Aponte, 2019, p. 254).

La presunta subordinación del Programa Familias Guardabosques a una estrategia bélica puede vincularse a la tensión entre seguridad militar y legitimidad civil, en el mencionado modelo de implementación lineal de políticas de paz en territorios en conflicto.

Integración regional y estrategia militar

Para el período de transición, la integración del territorio fue una de las prioridades de la Política Nacional de Consolidación Territorial en el sur del Tolima, esto se refleja en el presupuestado correspondiente con una asignación de casi 300 000 millones de pesos, que supera con creces lo asignado a los pilares de protección ciudadana y democracia local, y que duplica lo asignado para el pilar de protección social (ver figura 4.6) del año anterior.

Según cifras del DPS, la oferta institucional en el territorio estuvo dirigida mayoritariamente al pilar integración regional, que había pasado de ofertar 6 programas/proyectos en el año 2011 a 101 en 2012 (ver figura 4.7).

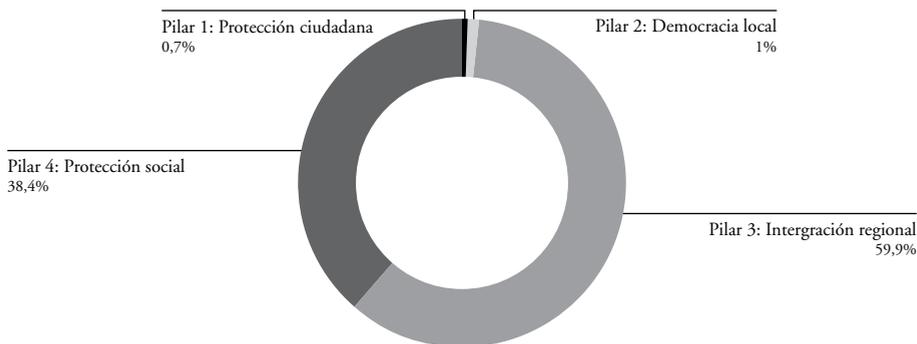


Figura 4.6. PNCRT presupuesto 2010-2012 sur del Tolima

Fuente: CCAI y Gobernación del Tolima (2010).

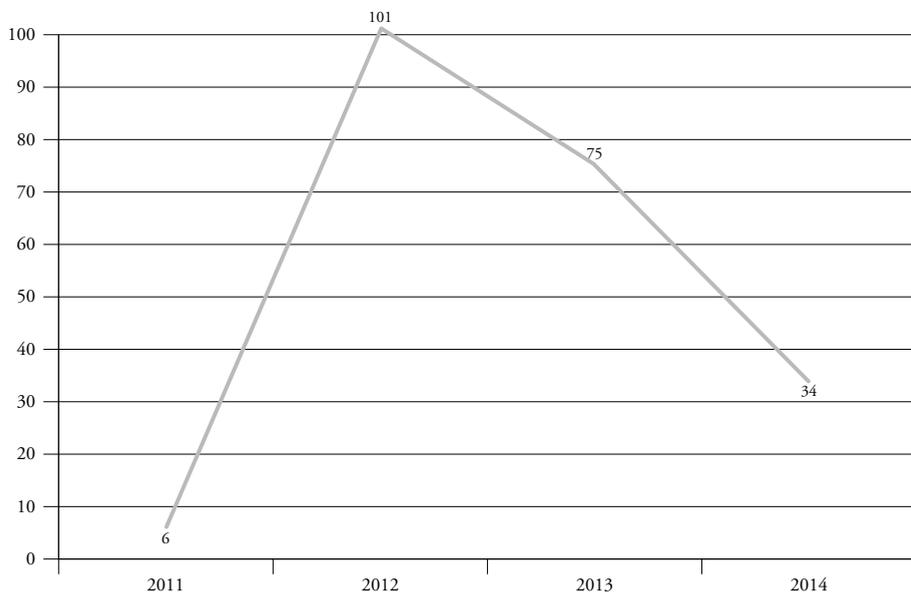


Figura 4.7. Oferta institucional consolidación sur del Tolima (2011-2014)

Fuente: elaboración de los autores basados en datos abiertos del DPS (2019).

Los ejes temáticos a los que se destinó mayor inversión de recursos fueron la construcción de vías para el aumento de la competitividad y la construcción de redes eléctricas y de comunicación.

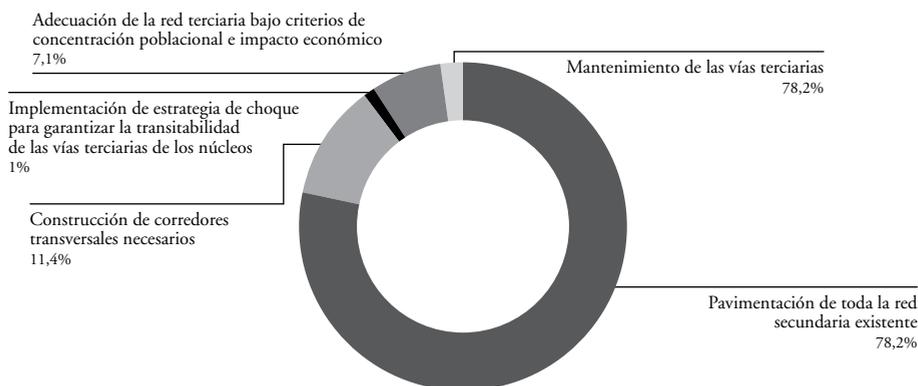


Figura 4.8. Pilar 3. Integración regional. Componente "El sur compete"

Fuente: CCAI y Gobernación del Tolima (2010).

Para el año 2013 en la región, la estructuración y ejecución de proyectos del pilar de integración regional se mantendría como una de las prioridades de la política, ejecutando un total de 91 proyectos que tendrían un valor de 343 000 millones de pesos (ver tabla 4.1).

Tabla 4.1. Resumen estado PAR regional corte a diciembre de 2013

Pilar	Estado	Cantidad de proyectos	Valor de los proyectos
1. Institucionalización de territorio	1. En estructuración	12	4083
	2. En ejecución	12	15 863
	3. Ejecutado	11	4956
	Total	35	24 902
2. Participación y buen gobierno	1. En estructuración	5	2000
	2. En ejecución	5	4035
	3. Ejecutado	8	1538
	Total	18	7574
3. Integración regional	1. En estructuración	27	236 277
	2. En ejecución	37	81 857
	3. Ejecutado	27	25 811
	Total	91	343 945
Total PAR		144	376 420

Fuente: UACT (2014).

Esta tendencia se mantendría en años posteriores; entre 2013 y 2015 se asignaron un total de 150 millones de dólares para la construcción de infraestructura (Llano, 2019) (ver tabla 4.2).⁷

Tabla 4.2. Presupuesto PNCRT 2013-2015

Componentes	US\$ millones
Desarrollo social	8
Desarrollo económico	18
Desarrollo institucional	39
Infraestructura	150
Tierras y ordenamiento territorial	34
Total	249

Fuente: Llano (2019) a partir de datos de la UACT.

Las inversiones se vieron reflejadas en importantes proyectos de infraestructura como la pavimentación de la vía Ataco-Planadas (COING, 2013), una vía clave para recortar tiempos de transporte, aumentar el flujo de vehículos que podían recorrerla y fortalecer el comercio (Aponte, 2019). También se construyeron calles en el casco urbano del municipio de Planadas y la carretera que conecta a la cabecera municipal de Ataco con el corregimiento de Santiago Pérez, esta última construida por el Batallón 52 de Ingenieros Militares con financiación de la PNCRT y las administraciones departamentales y locales (COING, 2013).

Adicionalmente, la PNCRT buscó apoyar el proceso de gestión para la construcción de carreteras para la conexión del departamento con el Pacífico a través del Valle del Cauca, con los tramos Chaparral-Buga y Rioblanco-Pradera (UACT, 2010, p. 10). La carretera Rioblanco-Pradera, como parte de la autopista Pacífico-Orinoquía, sería un tramo más para la conexión del occidente y el oriente del país, y atravesaría al corregimiento de Herrera (Tolima) hasta Florida (Valle del Cauca). Aunque empezó su fase de estudios de factibilidad en el año 2015 (*El Nuevo Siglo*, 2015) y se ha mostrado

⁷ No fue posible hallar un documento oficial de la UACT con el presupuesto para los años 2013-2015 para el sur del Tolima.

como un proyecto clave para el actual gobierno (*Semana*, 2019), todavía no ha sido ejecutada.

Proyectos de infraestructura como la pavimentación de la carretera Ataco-Planadas facilitaron la conexión de la capital del departamento con los territorios del sur, sin embargo, estas inversiones del Estado no solo estuvieron dirigidas a dinamizar la actividad económica en los municipios del sur, buscaban también mejorar la percepción de presencia estatal:

Este proyecto ha permitido establecer lazos de solidaridad, generando confianza en los pobladores y haciéndolos sentir parte importante de esta obra, mediante la generación de empleo a más de 30 familias en la construcción de las obras de arte de esta importante vía (Ingenieros Militares de Colombia, 2012).

Por tal razón, la construcción de vías estuvo acompañada de diferentes proyectos sociales coordinados por el Ejército y dirigidos a la comunidad en la que se intervenía; de manera complementaria se buscaba la desmovilización individual de combatientes⁸ (Ingenieros Militares de Colombia, 2012).

La vía Ataco-Santiago Pérez sería importante en el proceso de integración del territorio y de avanzada de la fuerza pública en el sur del Tolima, su construcción anunciaría el ingreso de la fuerza pública y de las autoridades departamentales al municipio, por ello, durante el evento de inauguración de la estación de policía de Santiago-Pérez (que había permanecido ausente del corregimiento durante diez años), los militares habrían presentado sus avances en la construcción de la vía señalando cómo esta había producido “una ‘sensación de seguridad’ en los ciudadanos y campesinos” (*El Nuevo Día*, 2011).

Lo anterior evidencia la puesta en marcha de los elementos enunciados por la PNCRT como necesarios para la integración del territorio bajo el orden estatal y su intento por conectarlos en la implementación de la política: la garantía de un tipo de seguridad con la avanzada militar y policial en el territorio, y el establecimiento del puesto de policía, la generación de proyectos

⁸ En el sur del Tolima este fue un discurso efectivo por parte del gobierno de Santos para el debilitamiento de la organización guerrillera, mandos medios y soldados rasos dejaron las armas a través de esta figura.

de infraestructura vial para la integración del territorio a nuevos mercados y como respuesta a algunas necesidades de la población, y la puesta en marcha de una cultura basada en la ley y la noción moral del ‘ciudadano de bien’.

Sin embargo, en este proceso las FARC no estuvieron ausentes del territorio; por ejemplo, para el año 2013 la construcción de la vía Ataco-Planadas fue atacada por la guerrilla, que incinera dos retroexcavadoras de una de las firmas contratantes (*RCN Radio*, 2015), según la nota de prensa que lo registra, por el “no pago de la vacuna a la guerrilla” (*El Nuevo Día*, 2013).

Acceso a la justicia y control del territorio en el sur del Tolima

El componente de acceso a la justicia podría haber representado en el sur del Tolima uno de los principales desafíos por parte del Estado a las FARC, pues buscó integrar a la población a un sistema de regulación de los conflictos bajo la tutela del Estado, desafiando la capacidad de control sobre la población y el territorio que el grupo guerrillero había logrado con la puesta en marcha del ‘Juzgado 21’. A pesar de esto y a diferencia de lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos, a nivel regional la impartición efectiva de justicia no representó una de las prioridades de la política, aun así, para el año 2011 los recursos asignados para la ejecución de proyectos de garantía de acceso a la justicia habrían aumentado ocho veces con respecto al año anterior (UACT, 2010, p. 108).

No obstante, con recursos de la agencia de cooperación de Estados Unidos USAID y en alianza con las administraciones locales, el gobierno nacional implementó el proyecto “Acceso a la justicia” (AJA) en los cuatro municipios del cono sur del Tolima entre los años 2013 y 2017. Este tuvo como objetivos principales el fortalecimiento de las casas de justicia, la investigación, el acompañamiento a casos de violencia basada en género y el afianzamiento de la justicia local y de restitución de tierras.

Una de las acciones implementadas por la política, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Colombia Responde de la USAID (*Ecos del Combeima*, 2012), fue el fortalecimiento de los ‘conciliadores en equidad’, una figura que consistía en la designación por parte de las comunidades de líderes comunitarios que actúan como mediadores en conflictos de carácter local y que cuentan con autorización y vigilancia del Estado. Los conciliadores

en equidad se constituyeron en una estrategia del Estado para posibilitar el acceso a la justicia a las comunidades rurales y así articularlas al sistema.

Buena parte de los recursos para acceso a la justicia estuvieron dirigidos al “redimensionamiento y fortalecimiento de servicios formales de la casa de justicia regional” (UACT, 2010, p. 108). Las casas de justicia fueron implementadas desde el año de 1995 como mecanismo de justicia formal y no formal. También fueron claves en la implementación de los planes de consolidación territorial como mecanismo para garantizar el acceso a la justicia a los pobladores de los territorios en conflicto y poco integrados al Estado.

Para 2014 en el cono sur del Tolima había casas de justicia en los municipios de Chaparral, Ataco y Rioblanco, organizadas en casas ubicadas en las cabeceras municipales que cumplían el rol de coordinadoras del sistema y casas periféricas de menor tamaño situadas en zonas rurales. En conjunto con los conciliadores en equidad, en los municipios de Chaparral y Rioblanco, las casas de justicia intervinieron en casos de “violencia intrafamiliar, responsabilidad alimentaria y de derechos de la propiedad [realizando] un promedio de 200 conciliaciones al año” (García et al., 2015).

Conforme con Vélez Mejía *et al.* (2015), la estrategia de los conciliadores en equidad tuvo graves problemas para su funcionamiento, pues, a pesar del debilitamiento de las FARC, en el sur del Tolima estos veían limitado su ejercicio debido a las condiciones que les imponía esta guerrilla (Vélez Mejía et al., 2015). Posiblemente por esta razón para el año 2014 solo actuaban 15 de los 30 conciliadores nombrados en el año 2006 (Universidad Nacional de Colombia y USAID, 2014).

Como parte del fortalecimiento de la justicia local, la PNCRT, en conjunto con la USAID y las administraciones locales, conformó los comités locales de justicia, centros de coordinación de los sistemas de justicia locales encargados de formular la política de justicia a distintos niveles, buscando su coordinación y efectividad en la impartición de justicia. En el sur del Tolima estos fueron puestos en marcha a través de decretos municipales en el año 2015 y 2016; también consiguieron que fueran integrados en los planes de desarrollo municipal de los cuatro municipios del cono sur (USAID, s. f.).

Otra acción de acceso a la justicia fueron las brigadas de justicia móviles en los territorios de control histórico de las FARC, de las cuales se realizaron un total de 39, que atendieron a 8323 habitantes (USAID, s. f.).

La política implicó igualmente un componente de género que pretendió derribar las barreras del acceso a la justicia; en ese sentido se canalizaron recursos para su caracterización, cualificación a los operadores con el enfoque diferencial de género y acompañamiento en casos de violencia de género (Vélez Mejía et al., 2015; USAID, s. f.).

La intención de vincular a la población bajo el orden normativo propuesto por el Estado a través de estos mecanismos de justicia no habría sido muy efectiva, según la evaluación de la USAID sobre los programas implementados. Varios habitantes de la región eran reticentes a aceptar la autoridad del Estado como mecanismo eficaz para la resolución de sus conflictos, ya que presentaban “un sentimiento de añoranza por [las] acciones de control y regulación de la convivencia [de las FARC] ejecutadas bajo un código estricto y de aplicación contundente [y] la justificación de la justicia por mano propia” (p. 319).

Lo anterior pudo deberse a la ineficacia del sistema de justicia para poder llegar a los territorios, a la persistencia de amenazas por parte de la guerrilla y a la escasa atención que obtuvieron las casas de justicia por parte de autoridades locales y departamentales (García et al., 2015). Así mismo, hay que resaltar los señalamientos por parte de colectivos de derechos humanos y movimientos políticos sobre falsos positivos judiciales en el territorio durante el año 2014 (Astracatol, Coalición Larga Vida a las Mariposas, Marcha Patriótica, 2014), este podría haber sido un factor decisivo en la falta de confianza de la población en las instituciones de justicia y su capacidad de ordenación del territorio.

El fortalecimiento de las asociaciones de café

Las asociaciones productivas son organizaciones que operan a nivel local, se encuentran compuestas principalmente por campesinos habitantes de la región, su objetivo es mejorar las condiciones de producción y comercialización de sus socios. Entre ellas en los cuatro municipios destaca una presencia mayoritaria de asociaciones de producción de café y en menor grado de cacao.

La PNCRT habría dirigido pequeñas acciones para el fortalecimiento de las asociaciones de café desde su Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos, como parte de un componente de desarrollo alternativo dirigido a

campesinos que habían erradicado cultivos de amapola y coca; así lo reporta una nota de prensa de la Red de Reporteros de Consolidación:

Con una inversión de 180 millones de pesos, se inicia la construcción del primer nivel del centro de acopio para (Asoceas) Asociación de Productores de Cafés Especiales del Alto Saldaña Herrera en el municipio de Rioblanco (Tolima), con el que se benefician los 92 socios que la componen. Este proyecto surge gracias a la gestión de la Unidad para la Consolidación Territorial mediante su Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos, que busca fortalecer a las organizaciones de productores que decidieron erradicar los cultivos de coca o amapola y hoy, le apuestan a la legalidad [...] (2015).

También, junto al programa Colombia Responde, el cual contaba con apoyo de la agencia de cooperación de Estados Unidos USAID, se habrían iniciado procesos de mejoramiento de la capacidad productiva y de comercialización de café (*Ecos del Combeima*, 2012).

Conclusiones

En el texto se ha entendido la construcción de estatalidad en el sur del Tolima como un ejercicio dirigido a construir legitimidad del Estado frente a la población y a desmontar la capacidad de control territorial de actores armados en un escenario de guerra. Como se mencionó antes, este involucró acciones de tipo militar y contrainsurgentes, pero también de tipo civil. Igualmente, se ha mostrado que el problema que han enfrentado los esfuerzos de construcción de estatalidad en el territorio se relacionan con la necesidad de consolidar el avance militar del Estado (seguridad), pero a su vez ganar legitimidad entre la población.

En ese marco se da la PNCRT, que fue formulada a nivel nacional para incluir un componente civil en su ejecución, el cual se reflejaría en el diseño de la UACT como su órgano coordinador y la inclusión de acciones para el fortalecimiento institucional a nivel municipal, la construcción de una cultura de la legalidad y la provisión de servicios sociales básicos, además del aumento del presupuesto de cooperación internacional de la USAID para el componente de imperio de la ley y derechos humanos. Concretamente en la región del sur del Tolima, esta política significó un abordaje diferente de la

tensión seguridad-desarrollo propiciada por ese cambio de enfoque a nivel nacional y la situación de conflicto armado con las FARC posterior a 2010.

Del período 2010 a 2014, el sur del Tolima pudiera haber indicado un relativo éxito en los términos de consolidación, esto debido a los logros alcanzados por el Estado en cuanto a control militar del territorio, disminución de la capacidad bélica de las FARC, establecimiento de autoridades administrativas y judiciales, y descenso de los hechos victimizantes registrados en 2009 (RNI, 2016). A pesar de lo anterior, el conflicto armado en el territorio se mantuvo, por supuesto, registrando cifras menores de hechos victimizantes en comparación con otros períodos, pero con la particularidad de haber entrado en una especie estancamiento; esto último se evidencia en el número estable de hechos victimizantes anuales de 2009 a 2014 y en el sostenimiento de las FARC como amenaza para la población (aun en uno de sus momentos de mayor debilidad en la región), que todavía ejecutaba reclutamientos, amenazas contra campesinos solicitantes de restitución, acciones contra maquinaria de empresas contratistas, y transitaba por el territorio. Este estancamiento del conflicto habría finalizado con los diálogos de paz entre el Estado y las FARC, y la posterior firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.⁹

Para el período de Juan Manuel Santos, el enfoque de consolidación tuvo que lidiar con la tensión entre seguridad y desarrollo; en el caso del sur del Tolima, el conflicto armado propició el decantamiento por acciones generadas desde el desarrollo o civiles, sin embargo, vale la pena examinar si esto ocurrió en regiones de alto conflicto como Tumaco, Cauca o Catatumbo. Lo anterior puede sugerir la necesidad de pensar los límites y posibilidades de la construcción de paz entendida como construcción de Estado en el marco de guerras en curso, máxime cuando el Estado es un actor en conflicto a través de sus fuerzas militares; además, es pertinente analizar los diferentes lugares desde donde se puede construir paz.

⁹ Según los registros de hechos victimizantes consignados a enero de 2016 en el RNI de la UARIV, se pasó de 9167 hechos victimizantes en 2008 a 4861 para 2009, desde este año la cifra anual de hechos victimizantes reportados se mantendría estable. Sería hasta el año 2015 cuando se registraría un nuevo descenso a casi la mitad, 2711, y en 2016 cuando se llega a 774, cifra no alcanzada en la región desde mitad de los años noventa.

Referencias

- Aguilera Peña, M. (2013). Las FARC: auge y quiebre de su modelo de guerra. *Análisis Político*, 26(77), 85-111.
- Aponte, A. F. (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. Cali: Fundación Centro de Investigación y Educación Popular.
- Arjona, A. (2017). *Rebelocracy: a theory of social order in civil war*. Notre Dame: Hellen Kellogg Institute for International Studies.
- Armada Nacional. (2013). *Doctrina operacional de la Acción Integral para la Armada Nacional*. s. l.: Armada Nacional de Colombia.
- Barros Navarro, N. I., & Uribe Sarmiento, J. J. (2019). *La retaguardia en disputa*. Ibagué: Ediciones Unibagué. Recuperado de <http://repositorio.unibague.edu.co:80/jspui/handle/20.500.12313/1527>
- Barros Navarro, N. I., Uribe Sarmiento, J. J., & Salamanca Santos, M. del P. (2019). Café, conflicto y posconflicto: la disputa por las retaguardias en el sur el Tolima. En *Territorios, conflictos agrarios y construcción de paz: comunidades, asociatividad y encadenamiento en el Huila, y sur del Tolima* (pp. 275-332). Bogotá: Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Recuperado de <https://pure.unibague.edu.co/es/publications/caf%C3%A9-conflicto-y-posconflicto-la-disputa-por-las-retaguardias-en>
- CCAI, & Gobernación del Tolima. (2010). *Plan de Acción para la Consolidación Integral de la Región del Sur del Tolima*. s. l.: CCAI-Gobernación del Tolima.
- CGN. (2013). *Informe auditoría: Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial—vigencia 2012*. Contraloría General de la Nación. Recuperado de <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/479362/022+INFO+RME+DE+AUDITORIA+UNIDAD+CONSOLIDACION+TERRITORIAL+VIG+2012+EE54304.pdf/f4a5d76f-6869-460d-9ece-849cbfab61c?version=1.0>
- Cinep. (2020). *Banco de datos de derechos humanos, DIH y violencia política*.
- CNMH. (2018). *Observatorio de Memoria y Conflicto*.
- Colombia, Departamento de Protección Social (DPS). Decreto 2332 del 22 de octubre de 2013. Recuperado de <http://legal.legis.com.co/>
- Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. (2015). *Balance de las labores cumplidas por el Ministerio de Defensa Nacional entre junio de 2014 y junio de 2015*. Ministerio de Defensa Nacional. Recuperado de <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2014-2015.pdf>

- Corporación Nuevo Arcoiris. (2013). En La Macarena: una cosa será la consolidación territorial en clave de guerra y otra distinta en clave de paz. *Revista Arcanos*, 18. Recuperado de https://issuu.com/arcoiris.com.co/docs/000_revista_arcanos_18_baja
- DNP. (2007a). *Plan Nacional de Desarrollo: Estado Comunitario para Todos*. Tomo I. Departamento Nacional de Planeación.
- DNP. (2007b). *Plan Nacional de Desarrollo: Estado Comunitario para Todos*. Tomo II. Departamento Nacional de Planeación.
- DNP. (2010). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos*. Departamento Nacional de Planeación.
- DNP. (2015). *Índice de vulnerabilidad territorial: resultados 2008-2012*. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/03%20%C3%8Dndice%20de%20Vulnerabilidad%20final.pdf>
- Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). (2019). *Oferta pública consolidación (actualizado a 2019)*. Recuperado de <https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Oferta-Publica/mat9-wm85>
- FIP, USAID, & OIM. (2013). *Boletín N° 62. Dinámicas del conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario*.
- FIP. (2011). *Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial*. Fundación Ideas para la Paz.
- García, M., Espinosa, J., Lalinde, S., Arroyave, L., & Villadiego, C. (2015). *Casas de justicia: una buena idea mal administrada*. Bogotá D.C.: Dejusticia.
- González, F. E. G. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá D.C.: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Human Rights Watch. (2013). *El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia*. Estados Unidos: Human Rights Watch.
- ILSA. (2014). *Tolima | Las Hermosas: hidroeléctrica del río Amoyá y luchas por el territorio*. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos-Miseror. Recuperado de <https://issuu.com/ilsaenred/docs/tolima>
- Kalyvas, S. N. (2010). *La lógica de la violencia en la guerra civil* (Vol. 299). Madrid: Ediciones Akal.
- Llano, A. (2019). Los contratos plan: ¿una buena ruta para el desarrollo rural? En *Quince años de desarrollo territorial rural en América Latina*. Teseo-Rimsip. Recuperado de <https://www.teseopress.com/desarrolloterritorial/chapter/los-contratos-plan-una-buena-ruta-para-el-desarrollo-territorial-rural/>

- López, C. L. (2016). *¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué?* Bogotá D.C.: Penguin Random House Grupo Editorial Colombia.
- Ministerio de Justicia, & Corporación Razón Pública. (2012). *Sistema Local de Coordinación de Justicia (SLCJ)*.
- Moola, S. (2006). Women and peace-building: the case of Mabedlane women. *Agenda*, 20(69), 124-133.
- Paarlberg-Kvam, K. (2019). What's to come is more complicated: feminist visions of peace in Colombia. *International Feminist Journal of Politics*, 21(2), 194-223.
- Posada Zapata, I. C., Orozco Giraldo, I. C., Mendoza Ríos, A., Restrepo Correa, C., & Cano Bedoya, S. M. (2019). Perception of health/illness associated with gender roles displaced women located in Medellín, Colombia, 2013-2014. *Cadernos de Saude Publica*, 35, e00088618.
- Salinas, A. (2014). *Cauca: análisis de las conflictividades y construcción de paz*. PNUD.
- UACT. (2012). *Manual operativo: Grupo Móvil de Erradicación (GME)*. Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. Recuperado de <https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=22104>
- UACT. (2014). *Informe de gestión 2014: Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial*. Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. Recuperado de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7gviHjOTpAhUDTN8Khab0ArsQFjAFegQIBBAB&url=https%3a%2f%2fwww.renovacionterritorio.gov.co%2fdescargar.php%3FidFile%3D22155&usq=AovVaw0PyIBh73vJNmNx-rtdBtRH>
- UACT. (2015). *Lineamientos de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT)*. Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial.
- Vélez Mejía, C., Pérez, G., & Junca, V. (2015). *Institucionalidad socavada. Justicia local, territorio y conflicto*. Bogotá D.C.: USAID-FIP.
- Yepes González, J. F. (2005). *Programa Familias Guardabosques en el municipio de Chaparral: análisis del conflicto*. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10554/7739CA>

Notas de prensa y artículos web

- (22 de diciembre de 2003). Tolima: más familias guardabosques. *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1048830>
- (2 de septiembre de 2008). Masacres: la ofensiva paramilitar. *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/masacres-el-modelo-colombiano-impuesto-por-los-paramilitares/>

- (23 de febrero de 2012). Se agudiza desplazamiento en el sur, dice Defensoría. *El Nuevo Día*. Recuperado de <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/133788-se-agudiza-desplazamiento-en-el-sur-dice-defensoria>
- (7 de marzo de 2012). Organizaciones campesinas del Tolima consolidan alianzas productivas. *Ecos del Combeima*. Recuperado de <http://ecosdelcombeima.com/economicas/nota-16071-organizaciones-campesinas-del-tolima-consolidan-alianzas-productivas>
- (24 de septiembre de 2012). Conciliadores en equidad activos tiene el Tolima. *Ecos del Combeima*. Recuperado de <http://www.ecosdelcombeima.com/judiciales/nota-21117-25-conciliadores-equidad-activos-tiene-el-tolima>
- (24 de abril de 2013). ¿Se consolida el poder militar en el Programa de Consolidación? *La Silla Vacía*. Recuperado de <https://lasillavacia.com/node/43873>
- (13 de octubre de 2013). Van más de 30 ataques guerrilleros en el Tolima durante el 2013. *El Nuevo Día*. Recuperado de <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/197581-van-mas-de-30-ataques-guerrilleros-en-el-tolima-durante-el-2013>
- (5 de noviembre de 2013). Gaitania y Bilbao recibieron obras luego de estar olvidados. *El Nuevo Día*. Recuperado de <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/200195-gaitania-y-bilbao-recibieron-obras-luego-de-estar-olvidados>
- (28 de noviembre de 2014). Se recrudece el accionar de las FARC. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-recrudece-el-accionar-de-las-farc/>
- (11 de mayo de 2019). La vía que conectará el Pacífico con la Orinoquía. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/economia/la-via-que-conectara-el-pacifico-con-la-orinoquia/>
- Argüello, F. (7 de enero de 2010). Las FARC considera a los alcaldes del sur del país como 'objetivo de guerra'. *El Mundo*. Recuperado de <https://www.elmundo.es/america/2010/01/07/colombia/1262904954.html>
- Astracatol, Coalición Larga Vida a las Mariposas, & Marcha Patriótica. (29 de octubre de 2014). *Agresión contra líder social y defensora de DD. HH. del Tolima*. Colectivo de Abogados. Recuperado de <https://www.colectivodeabogados.org/./?Agresion-contralider-Social-y-Defensora-de-DD-HH-del-Tolima>
- Astracatol. (16 de diciembre de 2011). *Fuerza de tarea del sur del Ejército Nacional incurre en graves infracciones al DIH y amenaza a los pobladores de la vereda Herrera-Tolima*. Colectivo de Abogados. Recuperado de <https://www.colectivodeabogados.org/./?Fuerza-de-Tarea-del-Sur-del>

- COING. (2013). *Ingenieros militares entregan obras en Gaitania, Tolima*. COING-Ejército Nacional de Colombia. Recuperado de <https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=354290>
- Colombia 2020. (16 de julio de 2020). *¿Cómo implementar los PDET en medio de la pandemia? Colombia 2020. El Espectador*. YouTube [video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=FOGkRNc55q8>
- Colprensa. (s. f.). Santos liquida el Incoder y crea seis entidades para atender el sector rural. *Vanguardia*. Recuperado de <https://www.vanguardia.com/colombia/santos-liquida-el-incoder-y-crea-seis-entidades-para-atender-el-sector-rural-MBVL338985>
- Fuerzasmilitares.org. (20 de enero de 2012). Plan estratégico ‘Espada de Honor’ de las FF. MM. Recuperado de <http://www.fuerzasmilitares.org/notas/colombia/fuerzas-militares/154-plan-estrategico-qespada-de-honorq-de-las-ffmm.html>
- Ingenieros Militares de Colombia. (2012). Carretera Ataco-Planadas. *Ingenieros Militares de Colombia: Constructores de Paz*. Recuperado de <https://ingenierosmilitaresdecolombia.wordpress.com/tag/carretera-ataco-planadas/>
- Ingenieros Militares de Colombia. (s. f.). Otro futuro para el Tolima. *Ingenieros Militares de Colombia: Constructores de Paz*. Recuperado de <https://ingenierosmilitaresdecolombia.wordpress.com/tag/carretera-ataco-planadas/>
- Red de Reporteros de Consolidación. (28 de abril de 2015). Se inicia construcción de un centro de acopio para una asociación en Rioblanco (Tolima). *Portal de la Federación Colombiana de Municipios*. Recuperado de <https://www.fcm.org.co/?p=5836>

Capítulo 5

Conocimientos, saberes y territorios

Trayectorias analíticas y exploraciones empíricas en el sur del Tolima y occidente de Neiva*

Jairo Baquero Melo, John Jairo Uribe Sarmiento, Germán Augusto Pachón Gantiva, Emmanuel Quiroga Rendón, Vicente Vega Reina

Introducción

Las transformaciones de las sociedades contemporáneas han puesto cada vez más el foco en la producción del conocimiento como una herramienta que promueve el cambio social y la innovación. Desde los años noventa, el término ‘sociedad de conocimiento’ se ha posicionado en las agendas académicas y de organismos multilaterales. Dicho término plantea la comprensión del conocimiento como una herramienta “para el desarrollo de la sociedad humana orientada a la cohesión social, competitividad económica y estabilidad, uso de recursos y desarrollo económico, la salvaguarda de la biodiversidad y el ecosistema” (Hamdija y Carvalho, 2010, p. 31).

Debido al interés reciente en comprender las dinámicas del conocimiento en las sociedades contemporáneas (su relación con el crecimiento

* Este documento se redactó en el marco del proyecto de investigación “Conocimientos y saberes de comunidades y organizaciones sociales en el sur del Tolima y occidente del Huila como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles”, adelantado por la Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué. Proyecto financiado por recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas (Código CT-180-2019). Convocatoria Colciencias 808: “Convocatoria para proyectos de ciencia, tecnología e innovación y su contribución a los retos de país”.

económico, su utilización por personas y organizaciones, su inserción en procesos políticos en distintas escalas espaciales) se han generado distintas reflexiones al respecto. Una de las perspectivas que ha adquirido relevancia ha sido el impacto que poseen los conocimientos y los saberes en la configuración de los territorios, desde las redes de producción de conocimientos a nivel global hasta el acceso a conocimiento en lugares apartados. También han surgido discusiones recientes sobre comunidades locales que rechazan saberes o conocimientos externos, o que promueven activamente otras visiones sobre sus lugares de origen. El propósito de este capítulo es brindar algunos referentes teóricos y conceptuales para entender las características y configuraciones actuales de los saberes y de los conocimientos, y su relación con un enfoque analítico del territorio.

En primera instancia, se van a presentar algunas tendencias académicas generales sobre el concepto de conocimiento. Más adelante, se construyen dos conceptos elaborados alrededor del conocimiento: gestión de conocimiento y economía política del conocimiento. Después, se presenta una perspectiva distinta sobre el conocimiento, a partir de la noción desarrollada por varios autores (De Sousa, 2015; Crespo y Vila Viñas, 2015), de “diálogos de saberes”. Posteriormente, se ofrecerá una perspectiva crítica del concepto de territorio de acuerdo con las reflexiones de Stuart Elden (2010) y Sam Halvorsen (2018). Por último, se establecen algunas líneas de reflexión sobre la relación entre conocimientos, saberes y territorios a partir de una investigación adelantada en el sur del Tolima y el occidente de Neiva.

Perspectivas teóricas sobre conocimientos y saberes

Para comprender la importancia de conceptualizar sobre los conocimientos y saberes, vale la pena describir algunos enfoques teóricos iniciales que abordan las características y la relación entre ambos. ‘Conocer’ y ‘saber’ suelen ser usados como sinónimos en el lenguaje corriente, e incluso en algunas conceptualizaciones académicas; pero, al revisar varios idiomas, aparece una distinción entre ambos términos: latín (*cognoscere/scire*), alemán (*Kennen/Wissen*), francés (*connaître/savoir*), no así en el idioma inglés, que presenta el término *know* —del que deriva el sustantivo *knowledge*—, el cual abarca tanto “conocer” como “saber” (Sarmiento, 2011).

La distinción entre ambos términos —conocer versus saber— ha sido la base de diversos acercamientos conceptuales en filosofía, psicología y

pedagogía. Vale la pena destacar dos: el primero de ellos proviene desde la epistemología (Villoro, 1982), en la que la distinción entre ambos radica en la experiencia que se tiene sobre el objeto de conocimiento/saber. Conocer, entonces, es resultado de una experiencia personal y directa, estar familiarizado gracias a “muchas experiencias variadas, capaces de ser integradas en una unidad” (Villoro, 1982, p. 199). En contraste, saber “no implica una experiencia directa. No es de extrañar, por lo tanto, que pueda saber muchas cosas de un objeto sin conocerlo, o que ignore mucho de algo que conozco” (Villoro, 1982, p. 199). El segundo acercamiento emana de la Escuela de Frankfurt y la hermenéutica alemana: el conocimiento es asumido como fruto de las investigaciones científicas, creadas bajo unos parámetros de neutralidad política y aplicación de un método de investigación. En oposición a ello, el saber se concibe como un proceso subjetivo, histórico, reflexivo y anclado a una situación concreta, en el que el sujeto tiene relación con el mundo. Esta segunda distinción se fundamenta en una crítica que hacen estas tendencias teóricas a los fundamentos positivistas y tecnocráticos de la actividad científica moderna, y la concepción de que todo sujeto es poseedor y productor de saberes (Porta y Cometta, 2017).

Los estudios sociales del conocimiento han desarrollado diversas perspectivas para precisar las características, alcances y limitaciones de los conocimientos y los saberes. Desde una tendencia más cercana a la sociología del conocimiento, está el interés por entender cómo se produce y circula el conocimiento en ciertos contextos sociales. Por un lado, ha crecido interés en la “sociología del conocimiento científico”, la cual se enfoca en los análisis hacia adentro (las disciplinas como campos sociales) (Bourdieu, 1999) y hacia afuera (lo social) de las disciplinas. Otras aproximaciones contemporáneas se enfocan en los laboratorios (Latour, 1987) como lugares donde el científico tiene acceso a máquinas, asistentes y transacciones. Otro enfoque sociológico que se tiene en cuenta aquí es la etnometodología, que propone analizar los procesos de aprendizaje de los individuos y el papel de las redes sociales en dichos procesos de aprendizaje (Garfinkel, 1974). Esta perspectiva se ha aplicado al campo del barismo en el café, donde han surgido nuevos expertos en café, incluyendo nuevos conocimientos sobre su producción, preparación y gusto (Manzo, 2010). Desde un enfoque que podría llamarse “sociología de los oficios”, se analizan los procesos de creación y al individuo como “artesano” (Sennett, 2008). La cultura material

y la actividad artesanal tienen valor por cuanto hay una unión de cabeza y cuerpo que se materializa en prácticas y productos. Sumado a ello, los individuos y colectivos también tienen un vínculo entre la tradición heredada y la capacidad para innovar y resolver problemas en el presente.

Una perspectiva de análisis que presenta otras luces sobre la llamada ‘sociedad de conocimiento’ y sobre la centralidad del conocimiento en las sociedades contemporáneas se conoce como economía política de conocimiento. Desde esta perspectiva se reconoce que el conocimiento no solo cuenta como una capacidad o un recurso que sirve para ciertas finalidades, lo cual puede entenderse como su “valor de uso”, sino que progresivamente se ha configurado como una mercancía que puede ser intercambiada entre personas o entre instituciones, lo que supone un “valor de cambio” (Mateo, 2006). Esta tendencia, que surge a partir de la década de los años setenta, se caracteriza por una demanda creciente para que los trabajadores se inserten en dinámicas continuas de formación complementaria o especializada, las cuales les brinden un factor diferencial que redunde en mayores ingresos y en su movilidad social (Traversa, 2013). Décadas después, ha ocurrido una diversificación de las instancias y canales de producción, intercambio y difusión de conocimiento. Tal como plantean Acosta y Carreño (2013), aunque las universidades siguen siendo actores predominantes, aparecen otros actores que producen conocimiento (agentes consultores, centros de investigación, instituciones gubernamentales). En otras palabras, “[e]l conocimiento por el conocimiento deja de ser valioso en sí mismo y solo obtiene este valor en cuanto es solicitado para una serie de usos específicos que le son necesarios a otros actores diferentes al investigador” (Acosta y Carreño, 2013, p. 72).

Una segunda perspectiva de los estudios sociales del conocimiento apunta más bien a abordar, de manera más pragmática, los usos del conocimiento en las sociedades contemporáneas. Bode (2006) plantea algunas características clave al respecto: i) el conocimiento es específico a cada contexto y persona, y debe ser compartido para volverlo explícito y útil para la sociedad; ii) la creación de conocimiento significa aprendizaje y, por lo tanto, induce al cambio, lo cual es influenciado por intereses políticos y mediado por relaciones de poder; y iii) el conocimiento no puede ser manejado o administrado desde enfoques meramente tecnológicos; ese manejo es un problema socioorganizacional y cultural. Por ejemplo, los enfoques

de comunicación y aprendizaje ayudan a aproximarse a esa socialización y utilidad del conocimiento (Bode, 2006, p. 2).

Uno de los escenarios más relevantes alrededor de los usos y aplicaciones del conocimiento es la gestión de conocimiento. Según Marulanda y otros autores, la gestión de conocimiento consiste en “el proceso de captura, almacenamiento, compartir y utilizar el conocimiento; es también un mecanismo emergente que puede encontrar información particular más eficiente y organizarla para una rápida recuperación y reutilización” (Marulanda et al., 2019, p. 40). La gestión de conocimiento no solo implica la realización de estos pasos, sino que debe llevar consigo una especie de ‘cultura de gestión’ que fomente la utilización intensiva del conocimiento. En dicha cultura aparecen varios aspectos centrales. El primero es la conversión de conocimientos basados en experiencias personales (conocimiento implícito o tácito) en conocimiento codificado y transferible entre personas y entidades (conocimiento explícito o codificado) (Liberona y Ruiz, 2019). El segundo es la transferencia de conocimiento, entendida como una “transición efectiva de conocimiento de un actor a otro”, que implica, “[a]demás de la transición real del conocimiento, [que] el conocimiento transferido tiene que llegar al destinatario de la manera correcta” (Marulanda et al., 2019, p. 40). El tercero es la configuración de instituciones y redes que coordinen y orienten la gestión del conocimiento, como forma de garantizar el acceso de la sociedad en su conjunto a los beneficios que promete (Ivarola, 2019).

Una tercera perspectiva analítica apunta más bien al abordaje crítico de las múltiples formas de desigualdad en torno a la idea de conocimiento, su producción, valoración, acceso y reconocimiento. Es aquí donde autores como Foucault (2005) ponen sobre la mesa la relación entre poder y saber: ¿qué tipo de temas/problemas deben ser conocidos/resueltos?, ¿cómo se establece que esos asuntos fueron efectivamente conocidos? En fin, se trata de la manera como cada sociedad, a través de ejercicios de poder, crea instituciones, procedimientos y ritualidades para producir aquello que se debe conocer, el tipo de sujetos que conocen, así como el vínculo que cada persona o colectivo establece con ese conocimiento. Así que el conocimiento no solo responde a consideraciones epistemológicas o sociales, sino que supone una intensa disputa relacionada con los modos como este se produce y distribuye, al igual que con la manera como los sujetos individuales

o colectivos son ‘producidos’ para conocer, pero también los modos como ese conocimiento ‘produce’ como objetos de conocimiento a esos sujetos.

Las relaciones de poder se enmarcan en estructuras de desigualdad que sustentan “prácticas de dominación, explotación y control étnico-social” (Aguerre, 2011, p. 7). En particular, en América Latina se ha configurado una especie de “colonialidad del saber” (Quijano, 1992): las desigualdades de conocimiento se sustentan en la imposición de la idea de la existencia de un conocimiento occidental y moderno con origen en Europa, el cual determina una especie de patrón que deben seguir las sociedades no europeas. Ese patrón hegemónico de conocimiento excluye otras cosmologías y epistemologías. Desde esta perspectiva del conocimiento como producto y productor de desigualdades, han aparecido propuestas en las que se invita a la visibilización de estas ‘otras’ cosmologías y epistemologías. Así, frente al conocimiento como expresión de un patrón hegemónico con pretensiones de universalidad, surge la necesidad de abrir espacios para mostrar los saberes subordinados y localizados de estas sociedades no europeas.¹

Desde América Latina, varios investigadores (De Sousa, 2015; Escobar, 2016; Quijano, 1992) han propuesto una agenda de investigación que busca resaltar los procesos de construcción de conocimientos/saberes que están por fuera de las universidades y centros de investigación, y están lejos de los grandes centros de producción y de las formas de intercambio y distribución de conocimiento legitimados. De esta forma, han propuesto una estrategia de diálogo de saberes, para evidenciar la capacidad de desarrollar procesos de intercambio en igualdad de condiciones (Santos, 2007; Montoya Ortega, 2019; Pérez y Argueta, 2011). Es así como el diálogo de saberes posee diferentes aplicaciones en dimensiones como la ecología política y la sociología de la educación. En la primera dimensión se enfoca en problemas territoriales, que en gran parte se corresponden con conflictos ambientales entre actores políticos y sus efectos en las subjetividades (Del Cairo, Montenegro y Vélez, 2014). A su vez, en la segunda dimensión se espera desarrollar el

¹ Nótese aquí que vuelve a aparecer la tensión entre conocimientos y saberes. En la perspectiva crítica de los estudios sociales del conocimiento se retoma la distinción de la Escuela de Frankfurt y la hermenéutica alemana entre conocimiento experto y científico versus saber subjetivo e histórico.

diálogo dentro de todos los procesos formativos, con el fin de transformar diversas realidades sociales (Reimers, 2002; Freire, 2005).

La construcción de espacios de diálogo entre saberes ha sido condensada bajo el término *sumak yachay* o buen conocer. Con el *sumak yachay* se reconoce que las formas de habitar se corresponden con las formas de pensar dentro de estos, y, por eso, se invita a dialogar a los saberes occidentales y no occidentales (Crespo y Vila Viñas, 2015). El carácter de diálogo entre las partes se hace explícito al tener en cuenta categorías como lo glocal, lo cual busca expresar que desde lo local se puede construir una globalidad deseable para las comunidades (Escobar, 2012, 2016). Además, busca reconocer que los procesos de producción y transmisión de conocimientos dependen en buena medida de un ejercicio de traducción (Flórez et al., 2018), entendido como un proceso en el cual los diferentes interlocutores buscan reconocer los contextos y lugares de enunciación de los otros, con el fin de poder hacer un intercambio de saberes que construya desde puntos comunes (De Sousa, 2015).

El recuento de las perspectivas teóricas sobre los estudios sociales del conocimiento (sociología del conocimiento, enfoques pragmáticos y enfoques críticos) plantea —unas más que otras— un interés creciente por mostrar el lugar en el que se produce, transmite, distribuye y usan los conocimientos y saberes. Así, se reconoce que existe un conocimiento localizado (sobre todo en las universidades y centros de investigación en Europa y Estados Unidos, principalmente) que cuenta con condiciones privilegiadas para su producción y difusión (Porto Gonçalves, 2009). Además, el creciente “valor de uso” del conocimiento ha promovido una lógica de acumulación y concentración, en detrimento de la diversidad de conocimientos producido por otras personas y comunidades (Crespo y Vila Viñas, 2015). Para Ulloa (2012b),

las formas de producir conocimiento implican también una política de producción de objetos, llámense textos, documentos o informes, en los cuales se articulan representaciones que tienen implicaciones sociales y culturales específicas. A su vez, estas representaciones generan controversias y desigualdades, lo que requiere entender cómo se articulan a formas específicas de producción de conocimientos [...]. Por otro lado, la generación de conocimientos implica considerar

su localización, formas de distribución, escritura y acceso, para dar cuenta de las inequidades que se generan (p. 10).

El planteamiento de Astrid Ulloa sugiere que las dinámicas relacionadas con los conocimientos y saberes deben tener en cuenta la localización de las distintas personas y comunidades que producen, transmiten y usan dichos conocimientos y saberes. Implica reconocer que, lejos de existir un espacio general accesible para todos, existen distintos espacios desde los cuales los individuos y las comunidades participan desde su diferencia y desde posiciones dentro de relaciones de poder (Fraser, 1991, 1995). Se ha mencionado entre líneas cómo estos espacios no solo son discursivos o simbólicos, sino que se despliegan en un ámbito geográfico. Ahora bien, para intentar dar cuenta de estos espacios es inevitable introducir la noción de territorio, tema que será desarrollado en el próximo apartado.

Nociones de territorio y su conexión con saberes y conocimientos

Luego de realizar este recorrido analítico por diversas categorías para la comprensión de conocimientos y saberes, vale la pena explorar cuál es la relación entre estas dos nociones y el concepto de territorio. Realizar esta exploración implica aceptar que la producción, distribución, acceso y uso de conocimientos y saberes tienen consecuencias a nivel espacial. Mientras que instancias hegemónicas de poder tratan de imponer una forma de ordenamiento del territorio —basado en conocimientos de profesionales formados en centros de poder económico y político—, las comunidades locales tienen otros conocimientos sobre sus realidades y pueden tener otras propuestas territoriales (Halvorsen, 2018). Brevemente se expondrá una perspectiva conceptual de territorio propuesta por Elden (2010), y luego se pondrán sobre la mesa algunas líneas de articulación entre esta propuesta y las perspectivas de conocimientos y saberes mencionadas anteriormente.

Stuart Elden (2010, p. 808) elabora una articulación entre tres categorías relacionadas: tierra, terreno y territorio:

- a) la tierra, o la economía política de los recursos (escasos o no), su distribución y delimitación de usos;

- b) el terreno, o la visión desde el Estado, con un componente estratégico-militar donde el Estado busca imponer el orden y el control;
- c) la conjunción de tierra y terreno en el 'territorio'; y el papel de la territorialidad, tomando el contexto socioespacial e histórico de la configuración territorial; el papel de las leyes e instituciones que lo gobiernan; las técnicas utilizadas por los actores para ejercer la territorialidad (mapeo, cartografía, etc.).

Haciendo una revisión crítica de estas categorías propuestas por Elden, se apuesta por mostrar sus posibles comprensiones y aplicaciones para el caso colombiano:

a) Tierra (economía política)

Para la comprensión de la categoría de tierra, vale la pena abordar esta dimensión a partir de las distintas relaciones materiales posibles con este bien escaso. Algunas preguntas clave serían: ¿qué es la tierra? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es el manejo que se le realiza? ¿Cómo se distribuye? Al respecto, hay dos grandes dimensiones:

- La tierra presenta una dualidad, en tanto cuenta con un valor de uso por parte de quienes la poseen y/o la trabajan, y un valor de cambio dentro de un mercado de tierras. El valor de uso está determinado por diversos elementos que pueden incluso desbordar lo económico, pues vincula la relación de los productores/habitantes con la tierra. Lo anterior abarca visiones instrumentales o utilitarias, en la que la tierra se distingue como bien para la producción de otros bienes (cultivos, ganado) o como activo para el acaparamiento, como abarca también perspectivas afectivas, en las que se apela a una relación duradera (que puede tomar una o varias generaciones) con la tierra; e, incluso, perspectivas que invocan una 'ancestralidad' como base de su tenencia y aprovechamiento. Por su parte, el valor de cambio está mediado por la situación de la tierra dentro de un mercado, en el que existen procesos de compraventa, ocupación, tenencia, propiedad, acaparamiento, especulación, entre otros. En este punto se abordan también las dinámicas de uso del suelo de acuerdo con demandas de los productores o de mercados de distintas escalas

(local, regional, nacional, internacional), que incluyen los sistemas de producción usados (monocultivo, policultivo, sistema de asocio—agroforestal, agropastoril, silvopastoril, agrosilvopastoril, etc.—).

- La tierra, en tanto bien escaso, también es sometida a una serie de técnicas para su manejo, recuperación y conservación. En ese sentido, los productores agropecuarios, sean estos de orientación empresarial, campesina, agroecológica o demás, cuentan con un repertorio de saberes y prácticas en torno al manejo de tierras. En algunos casos es usado un paquete tecnológico de síntesis química (derivados de petróleo) que incluye fertilizantes, pesticidas, herbicidas, entre otros elementos. En otros casos, los productores recurren a la compra o procesamiento de abonos orgánicos, biopreparados y procesos de conservación de suelos.

En la categoría de tierra se pueden explorar tensiones presentes en los lugares visitados, como dinámicas de inserción al mercado versus autonomía/soberanía alimentaria, producción versus conservación, acaparamiento versus redistribución, vocación versus demanda versus uso efectivo de la tierra. En dichas estrategias, la aplicación de conocimientos y saberes a nivel local han permitido proponer opciones de aprovechamiento productivo y alimentario acordes con los recursos presentes en el entorno inmediato (Mora, 2006), además de otras maneras de establecer procesos de comercialización y consumo (Boucher y Riveros, 2017). También implica revisar cómo se definen, a nivel local, los usos de los recursos, su distribución y cuidado. Esto implica la intervención de diversos saberes y conocimientos provenientes de distintas escalas espaciales (local, regional, nacional, global) (Escobar, 2012).

b) Terreno (estrategia administrativo-militar)

Para acceder a la categoría de terreno, es importante tener en cuenta cuáles son las dinámicas político-estratégicas que delimitan, incluyen y excluyen un terreno. Algunas preguntas clave serían: ¿de quién es la tierra? ¿Quién o qué distribuye la tierra? ¿Bajo qué criterios?

Para considerar el terreno, de acuerdo con Halvorsen (2018), es necesario considerar una tensión central entre una perspectiva “desde arriba”, la cual busca controlar un terreno a través de distintos mecanismos (jurídicos, administrativos, militares), y una perspectiva “desde abajo”, en la que las

poblaciones y comunidades locales buscan el reconocimiento y el ejercicio de la autonomía sobre las decisiones de uso, producción y propiedad de sus terrenos. A nivel micro, implica abordar distintos mecanismos de acceso a la tierra: ocupación, tenencia, propiedad. Dicho abordaje no se agota en describir estos mecanismos, sino que busca entender: a) los ordenamientos jurídicos y administrativos construidos por entidades públicas y privadas en torno a programas y proyectos que comprometen estas tierras; y b) las aspiraciones y acciones que las personas y comunidades realizan para acceder o mantener el control de las tierras.

En esta dirección, vale la pena considerar lo que Fernán González (2014) ha denominado el “Estado como proceso”. González insiste en el hecho de que el Estado se va construyendo históricamente de forma diferenciada a través de los territorios y regiones. Así que la articulación de los territorios a una centralidad política bajo la cual se desarrolla el uso legítimo de la fuerza se crea a partir (y a través de) las negociaciones y tensiones de los poderes locales y regionales, lo que impacta los procesos culturales, sociales y económicos nacionales. Puede ocurrir que el Estado ‘llegue’ a las regiones con su lógica burocrática-racional o que, por el contrario, llegue a través de intermediarios, de redes clientelistas. De hecho, para este autor, los partidos tradicionales se constituyeron en los ejes articuladores de la nación (no el Estado) durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX (a pesar de las guerras y violencias). Estos llegaron a ser catalogados como confederaciones de gamonales y líderes clientelares que permitían la circulación de bienes, servicios y votos por la geografía nacional. Desde esta perspectiva, Colombia se ha constituido de forma muy desigual de acuerdo con los arreglos entre élites locales, regionales y nacionales, donde pueden convivir diversas lógicas estatales.

Por otro lado, no hay que olvidar que muchos de los territorios de Colombia han sido atravesados por distintos tipos de conflicto (agrarios, ambientales, armados) (Arias, 2017; Ruiz, 2017). Todos ellos han generado serias consecuencias, las cuales se han hecho sentir no solo en zonas rurales, sino que han alcanzado a las zonas urbanas (despojo y concentración de tierras, bajas oportunidades laborales, desplazamiento y migraciones campesidad, aumento de la brecha urbano-rural, entre otros) (PNUD, 2011). Ahora bien, la presencia de estos procesos y conflictividades también ha generado

distintos posicionamientos de varios actores, en los que se ha recurrido a diferentes estrategias legales e ilegales para acceder al control de las tierras.

En la categoría de terreno es pertinente explorar algunas tensiones entre lo legal versus lo ilegal, lo legal versus lo legítimo, el conflicto armado versus otras conflictividades (productivas, ambientales, minero-energéticas). Un paso necesario para entender los conflictos presentes en las zonas rurales debe ser la revisión histórica de los mecanismos legales de distribución y redistribución de la propiedad de la tierra, así como los distintos momentos y coyunturas en los que ha habido reformas agrarias en el país (Franco y De los Ríos, 2011). Implica reconocer también cuáles han sido los procesos de cambio en la distribución de la tierra, a través de sus manifestaciones mediante el uso de la fuerza por parte de actores armados (desplazamiento y despojo) (CNMH, 2016) o la formulación e implementación de proyectos de índole productivo, minero o ambiental (Ulloa y Coronado, 2016). Por último, requiere reconocer cómo las personas y comunidades han hecho uso de varios recursos para que se tengan en cuenta sus decisiones en torno al acceso y conservación de sus derechos sobre tierras (Quiroga, 2014; Hincapié y López, 2016).

c) Territorio (tecnologías/proyectos políticos de apropiación del espacio)

Basado en la articulación de las categorías de tierra (economía política) y terreno (estrategia administrativa-militar), el territorio es una categoría que refleja el despliegue y superposición de múltiples tecnologías políticas a través de herramientas de uso, conservación, medición y control. Dichas tecnologías son, a su vez, la expresión de distintos proyectos políticos de apropiación del espacio (Elden, 2010; Halvorsen, 2018). Algunas preguntas clave son: ¿cómo se concibe un territorio en particular? ¿Quiénes definen las características, componentes y límites de este territorio? ¿Qué mecanismos intervienen para configurar este territorio?

Retomando la postura de Elden (2010) y la crítica de Halvorsen (2018), el territorio es construido a partir de procesos históricos en el que múltiples actores (en el que el Estado es apenas uno de ellos) disputan distintas visiones y ponen en marcha diferentes acciones en diversas dimensiones y escalas. En ese sentido, las posturas alrededor del desarrollo territorial son un buen ejemplo de ello. Existen perspectivas que plantean una articulación

entre los distintos actores desde un enfoque centrado en la gobernanza local (Dematteis y Governa, 2005). Desde estas perspectivas, los distintos actores, pertenecientes a diferentes escalas espaciales y con diversos intereses e incentivos, procuran el establecimiento de reglas e instituciones propicias para adelantar proyectos de desarrollo. Otras perspectivas (Courthney, 2019; Halvorsen, 2018; Salas, 2016) identifican una distinción entre las perspectivas, apuestas y prácticas estatales, caracterizadas por la centralización y la jerarquización, y perspectivas, apuestas y prácticas autónomas por parte de las comunidades y organizaciones, que cuestionan la centralización y jerarquización territorial propuestas por instituciones estatales. Entonces, las visiones locales sobre el desarrollo pueden articularse, o entrar en conflicto, con las visiones del gobierno nacional sobre el desarrollo en un territorio particular. Esto es principalmente observable cuando se identifican prácticas y formas de construcción de políticas locales, las cuales entran en disputa con los planes de las entidades públicas de orden nacional o local, así como de otros actores que participan en la definición del territorio (Hadad et al., 2020; Ulloa, 2012a).

Hacia una propuesta de articulación entre conocimientos, saberes y territorios

A partir de la descripción de las distintas dimensiones que componen el territorio desde las posturas de Elden y Halvorsen (la economía política, la estrategia administrativo-militar y las tecnologías políticas de apropiación del espacio), es posible establecer una relación con los conceptos de saberes y conocimientos. Un primer paso es hacer visibles y conscientes los distintos lugares de enunciación (no solo geográficos, sino epistemológicos), en el cual diversos actores (gobierno nacional, entes territoriales, ONG, gremios productivos, organizaciones y asociaciones comunitarias, instituciones educativas) elaboran sus nociones sobre territorio, al igual que los mecanismos de generación/transmisión/imposición de estas nociones (Halvorsen, 2018; Porto Gonçalves, 2009). Al respecto, puede decirse que existen saberes y conocimientos *sobre* el territorio, así como saberes y conocimientos *en* el territorio.

Reconocer la existencia de diversos saberes y conocimientos *sobre* el territorio implica comprender cómo este último es el resultado de un proceso activo en el que se involucran —y se traslapan— diferentes proyectos

políticos (con sus respectivas estrategias de reconocimiento y apropiación del espacio) en distintas escalas (Halvorsen, 2018). Al respecto, las visiones locales sobre el desarrollo pueden articularse, o estar en conflicto, con las visiones del gobierno nacional. La invitación está orientada a analizar varios aspectos: i) las perspectivas sobre el desarrollo están localizadas en lugares específicos y se configuran desde las características e historia de las comunidades; y ii) el solapamiento de diversas propuestas de desarrollo, el cual se manifiesta en tensiones en torno a la identificación de necesidades, la propuesta de soluciones y la ejecución de políticas, programas y proyectos locales. En ambos aspectos, las discusiones y conflictos pueden dar paso a procesos de negociación y planteamiento de alternativas de solución. Retomando el *sumak yachay*, de lo que se trata es de reconstruir espacios para la confrontación y construcción conjunta entre múltiples formas de pensar (Gudynas, 2015). Si se cuenta con esa participación colectiva entre distintos actores, se empezará a poder hablar de diálogo de saberes dentro de la política pública territorial, ya sea en términos educativos, agrarios, o en formas complementarias de pensar y configurar los territorios.

A su vez, la presencia de diversos saberes y conocimientos *en* el territorio supone poner la mirada en los procesos y actores que movilizan dichos saberes y conocimientos en distintas áreas (docentes, extensionistas, ‘sabedores’ de oficios, productores). La dimensión territorial cobra relevancia, pues abre la puerta para entender las relaciones entre los actores sociales objetivo de programas de transferencia de conocimiento “externos al territorio” (Coppens, 2014; McAdam et al., 2016). Estas formas de construcción y transmisión de conocimiento pueden también entrar en conflicto con formas de construcción y transferencia de conocimientos provenientes desde procesos y actores “dentro” del territorio. Es así como vale la pena reconocer también las acciones localizadas para enfrentar retos como el cambio climático, la conservación de suelos, el manejo y transformación de productos, el acceso a mercados, pues en ellas se manifiestan modos alternos de producción e intercambio de conocimiento entre actores locales, en los que “la organización y la palabra son herramientas para crear vías autónomas para un futuro equitativo y sustentable” (Holt, 2008, p. XIV). Para comprender mejor estas tensiones y acciones sobre los saberes y conocimientos *en* el territorio, vale la pena plantear un análisis histórico y contextualizado de las relaciones de poder

que se establecen entre diversas formas de conocimiento (Ulloa, 2012b), con el fin de generar mecanismos que promuevan una transmisión más horizontal de conocimiento entre los actores participantes (Nunes, 2012).

Avances empíricos sobre la relación entre conocimientos, saberes y territorios: el caso del sur del Tolima y occidente de Neiva

Como se mencionó antes, existen procesos que reflejan los saberes y conocimientos *sobre* el territorio y procesos que demuestran los saberes y conocimientos *en* el territorio. Estas dos dimensiones ocurren de manera simultánea en el análisis territorial. Ambas dimensiones son relevantes para conectar los diversos fenómenos que suceden dentro de un territorio específico, como es el caso del sur del Tolima y del occidente de Neiva. Un territorio en el que, a partir de un proceso histórico de largo plazo, configurado por la presencia conflictiva de varios actores, han aparecido saberes y conocimientos usados, transmitidos y recuperados por las comunidades locales. Esta es la temática principal del proyecto de investigación “Conocimientos y saberes de comunidades y organizaciones sociales en el sur del Tolima y occidente del Huila como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles”. Proyecto adelantado por la Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué, llevado a cabo en varios municipios del sur del Tolima (Natagaima, Coyaima, Purificación y Planadas) y del occidente del municipio de Neiva (Huila).

Para entender la articulación entre saberes, conocimientos y territorio desde las perspectivas locales, vale la pena ahondar en cómo las organizaciones sociales de distinta índole (productiva, educativa, ambiental, de mujeres, de jóvenes) han propuesto diferentes maneras de conocer (y reconocer) su territorio, así como las diversas formas en las que se movilizan saberes y conocimientos en dichos territorios. Este proceso se ha adelantado mediante un trabajo de campo realizado desde octubre de 2019. Desde esta fecha se han hecho algunas visitas a las áreas de cobertura del proyecto de investigación: el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (que comprende los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación) y la región que comprende el municipio de Planadas y la zona rural al occidente del municipio de Neiva. Más adelante, en el mes de marzo de 2020, se efectuó un ejercicio

de cartografía social con miembros de diversas organizaciones provenientes de los municipios mencionados.²

a) Planadas y occidente de Neiva: café, producción y nuevos retos alimentarios y ambientales

En la región que comprende Planadas y el occidente de Neiva, aparecen algunos factores relevantes que han incidido en la reconfiguración de este territorio luego de la firma de los acuerdos de La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Vale la pena recordar que esta región es reconocida como el lugar de origen de las propias FARC —el mito fundacional del grupo armado señala el origen del grupo en la vereda de Marquetalia, perteneciente al municipio de Planadas—, y por espacio de tres décadas fue una importante zona de control territorial de dicha guerrilla (Aponte, 2019). Ahora, con el Acuerdo de Paz y la desmovilización y reincorporación de las FARC, aparecen nuevos retos sobre cómo entender este territorio.

El primer reto ha sido la integración de este territorio en materia económica. Para resolver estos elementos, han surgido varios programas orientados a la renovación del territorio, desarrollados como parte de la implementación de los acuerdos de La Habana. Uno de ellos fue la ejecución de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), como un mecanismo para impulsar la transformación estructural de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Los PDET buscan involucrar a los distintos actores que hacen parte de estos territorios, quienes son encargados de la formulación y ejecución de planes de acción para la transformación regional (PATR), un plan con un horizonte de ejecución de diez años. Por otro lado, la estrategia Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado) consiste en el establecimiento de beneficios tributarios para las empresas y sociedades que inviertan en distintos sectores económicos e impulsen la generación de empleo (Baquero, 2018). Un empleado de una asociación comenta que el Acuerdo de Paz y la inclusión de Planadas dentro del PDET trajo nuevas

² Cabe aclarar que varias actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto de investigación tuvieron que ser suspendidas por cuenta de la emergencia sanitaria causada por la expansión de la covid-19. Este inconveniente dificultó la recolección de información primaria asociada a visitas de campo.

oportunidades: “Volvió a regresar la gente que se fue, se abrieron las puertas, y vienen de todas partes del mundo” (entrevista, 3 de octubre de 2019).

La aparición de una nueva ‘ventana de oportunidad’ para ser reconocido por parte de actores externos (gobierno nacional, élites locales de Tolima y Huila, empresarios, organizaciones no gubernamentales) trae consigo nuevas preocupaciones. Una de ellas se vincula con el esquema de desarrollo económico que se va a implementar. Ante la ejecución de proyectos de reactivación económica propuestos en el marco de los PDET y de la constitución de la figura de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac), asociaciones productivas locales insisten en que han logrado consolidar desde años atrás una propuesta local de desarrollo. Como plantea un líder de la Asociación de Productores y Agricultores de Café Especial de Montalvo (Agprocem), “el desarrollo puede ser endógeno. Es decir, hay que escuchar las partes base, porque son las que realmente están proponiendo una solución. La solución no viene de afuera” (entrevista, 4 de octubre de 2019).

Un factor que ha incidido en el fortalecimiento de una ‘propuesta endógena de desarrollo’ es el posicionamiento del café como principal producto de la región. En la última década, esta región ha sido considerada nacional e internacionalmente como uno de los sitios más prominentes en la cantidad y la calidad del café: Planadas ha sido reconocido como uno de los tres municipios con mayor producción del grano en Colombia. A su vez, varios lotes han ganado concursos de calidad (como la Taza de la Excelencia). Esta confianza en el producto local ha hecho que, en términos de otro líder de una asociación productiva, la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (Asopep), “los productores ya saben qué tienen, y saben qué es lo que pueden pedir” (entrevista, 3 de octubre de 2019).

Una de las herramientas con las que han contado para asegurar la calidad de los cultivos y del grano ha sido la capacitación permanente de los productores en buenas prácticas agropecuarias y buenas prácticas de manufactura en la transformación (o ‘beneficio’). El inspector técnico de Asopep reconoce que al principio la motivación detrás de la creación de esta asociación fue la necesidad de vender la producción de café, pero con el tiempo apostaron hacia la formación de los cafeteros: “Nos hicimos fuertes primero los asociados en capacitación en calidad... Eso es lo más principal que ha tenido la Asociación: capacitar al asociado primero, y ahí sí lo que venga después” (entrevista, 3 de octubre de 2019). Estos procesos de formación han sido

acompañados por parte de distintas instituciones, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y varias universidades. Comentan que, aunque respetan el proceso adelantado por la Federación Nacional de Cafeteros, consideran que el acompañamiento realizado mediante extensionistas de la Federación presenta fallas: “Tiene buenas cosas, tienen conocimientos, pero [...] van al volumen, no les interesa la calidad [...] nos hicieron acabar las variedades que teníamos más manejables” (entrevista, 3 de octubre de 2019). Ante los desacuerdos frente a la propuesta de extensionismo por parte de la Federación, las asociaciones de productores han optado por contratar sus propios extensionistas, con el fin de aplicar sus propias prácticas. No es extraño que muchos de los productores locales se hayan convertido en extensionistas de sus vecinos y compañeros de asociación.

Otra apuesta para mejorar la calidad del café se orienta a la experimentación e innovación, tanto en la producción como en el ‘beneficio’ y venta final del producto. Todo este proceso, aunque en buena medida ha sido acompañado por los extensionistas rurales, también ha sido impulsado por iniciativa propia de los productores. Las dinámicas y procesos de intercambio de saberes y conocimientos alrededor de los árboles que dan mejor sombra para el café, las combinaciones entre variedades para incrementar la calidad de la taza o los secretos para el beneficio ‘honey’ o ‘natural’³ configuran una jerga que se consolida cada vez más en la región. En una de las visitas a la región fue posible acompañar un proceso de capacitación informal en una finca. Una joven que contaba con un lote propio dentro de la finca familiar, quien era la que ‘recibía’ la capacitación, comentaba que este ejercicio “es como un estudio, un aprendizaje para [...] tener otro proceso del café, mejorar la calidad” (visita, 2 de octubre de 2019).

La búsqueda por mejorar la calidad no solo se limita a la fase de producción y beneficio. En los últimos años se han consolidado algunas tendencias en torno al aseguramiento de la calidad, la cual es apoyada por las asociaciones productivas. Así, se han generado escuelas de catación y

³ En los últimos años han cobrado importancia otros tipos de ‘beneficio’ del café, como el ‘honey’ y el ‘natural’. El café tipo ‘honey’ se obtiene mediante la no fermentación del mucílago, el cual se deja recubriendo el grano. A su vez, el método ‘natural’ consiste en dejar secar los granos de café con su pulpa durante varias semanas. Cada uno de estos métodos le brinda a la taza de café características particulares, apreciadas por catadores, baristas y nichos especializados de consumo (Cabrera y Burbano, 2018).

barismo, que vinculan a niños y jóvenes que quieren conocer más sobre cómo reconocer un buen café en taza o cómo potenciar el sabor de la bebida para el consumidor final. Uno de los instructores de la escuela “Construyendo futuro”, de Asopep, ha visto en este proceso de formación propia y de enseñanza a otros jóvenes una oportunidad para construir su proyecto de vida. Manifiesta: “Yo no quería trabajar con café, para qué eso, mi papá todo enfermo y acabado por trabajar toda su vida con eso... ya aprendiendo, poco a poco, me di cuenta de que había otras cosas que podía hacer, cosas más chéveres” (entrevista, 3 de octubre de 2019).

Con la consolidación del café como ‘producto estrella’ de la región de Planadas y del occidente de Neiva, surgen otros intereses que cuestionan la orientación del territorio meramente como un nicho productivo del grano. La crisis cafetera de los años 2012 y 2013 dejó al descubierto serios problemas estructurales en la cadena productiva y mostró la debilidad de los productores frente a la generación de ingresos, debido a la alta dependencia de los ingresos familiares a los precios internacionales (Baquero y Quiroga, 2019). La situación impulsó a las comunidades a enfrentarse a dos cuestiones: la alimentación y la conservación ambiental. Por un lado, las asociaciones de productores han impulsado que los productores cuenten con huertas conformadas por frutas, hortalizas y plantas medicinales. El inspector técnico de Asopep contaba que “dentro de la organización, en el control interno, hay como un estatuto, digámoslo así, donde se obliga y se le dice a cada productor que debe tener, ojalá, su propia huerta casera” (visita a Asopep, 3 de octubre de 2019). El cultivo y venta de otros productos, como cacao o fríjol, también se han convertido en alternativas de ingresos, que han contribuido igualmente a diversificar las fuentes de ingresos.

Por otro lado, la preocupación por temas ambientales ha surgido como opción para asegurar mejores estándares del producto, así como para alcanzar certificaciones que permitan vender el grano con un sobreprecio. Así, varias asociaciones impulsan activamente la generación de buenas prácticas agropecuarias y la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes de origen sintético. Sumado a lo anterior, han surgido nuevas organizaciones locales que tienen como objetivo el trabajo de sensibilización y conservación sobre el medio ambiente. Iniciativas como la Fundación Protectora Ambiental Planadas Tolima (Fupapt) han promovido actividades enfocadas a la sensibilización y cambio de prácticas agropecuarias. Esta organización plantea

que dicha sensibilización ha sido más difícil con los productores de café. Aceptan que “lo están empezando a manejar, más que todo, las asociaciones de café, porque se lo prohíben: ‘Si usted aplica este fertilizante a su café no se lo podemos comprar’, o ‘le va a bajar el precio’. [Los productores] lo hacen más porque los obligan” (entrevista con miembros de Fupapt, 3 de octubre de 2019). Esta dificultad en la sensibilización en torno a temas ambientales se extiende a otros productores agropecuarios (agricultores, ganaderos) y a la población en general.

b) Triángulo del Tolima: proyectos de infraestructura, luchas por la tierra y otras propuestas de saberes y conocimientos territoriales

En la zona que comprende el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (DRTT) se encuentran los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación. Caracterizada por la presencia de población indígena (comunidad pijao), en los siglos XVI y XVII fueron reducidos progresivamente por los colonizadores españoles, y reasentados en resguardos (Colombia, Ministerio del Interior, 2014). Durante mucho tiempo, entre los siglos XVIII y XIX, en la región se consolidó un sistema productivo de haciendas, las cuales abarcaban grandes extensiones de tierra para la ganadería. Además, la descomposición de los resguardos por cuenta de las reformas liberales de mediados del siglo XIX liberaría a los indígenas resguardados y fragmentaría la propiedad de la tierra. La hacienda moldeó no solo la organización espacial, sino las jerarquías sociales de la región: mano de obra india o mestiza trabajaba para los dueños, notables que vivían en las ciudades de Ibagué, Neiva y Santafé (Comisión de la Verdad, 2020).

Más adelante, en el siglo XX, la lucha de Manuel Quintín Lame por la recuperación de los resguardos indígenas desintegrados dio pie para la consolidación de luchas por la titulación de tierras colectivas (Pachón, Olivera y Wiesner, 1996). Las disputas por la tierra y las reivindicaciones de los pijaos de la región fueron fuertemente reprimidas en la época de la Violencia, en la década de los años 1940 y 1950. Solo hacia 1982 se constituye el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), para continuar con el propósito de consolidar la autonomía política y territorial pijao. Nuevamente, esta zona sería duramente afectada por el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, que a finales de los años noventa y la década de 2000 ejerció

control sobre veredas de la región, y procedió a amenazar y a asesinar a los líderes locales (CNMH, 2017).

La zona adquiere importancia estratégica por cuenta de la construcción del DRTT, que marcó un parteaguas en la configuración territorial local. Aunque esta obra estaba proyectada desde la década de los años setenta, solo pudo empezar la adecuación de terrenos a partir de 2007. La obra, que abarca una zona de riego de unas 24 000 hectáreas, se ha establecido de manera parcial en zonas habitadas por indígenas pijaos. La irrigación promete mejorar el acceso de agua a esta región, fuertemente afectada por la alta irradiación solar, elevadas temperaturas y sequías, pero ha generado grandes desafíos para la producción agropecuaria, tanto del arroz mecanizado con orientación comercial como de productos de pancoger para consumidores locales (Rojas, 2016).

Al entender un poco más el impacto de este distrito de riego en los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación, es posible comprender que las implicaciones de este proceso van más allá del manejo del agua, también inciden en las maneras como estas comunidades conciben y viven en su territorio. Un líder indígena perteneciente a la Asociación de Usuarios del Distrito del Triángulo del Tolima (Utritol) recalca la presencia de varias características especiales con las que ha contado el proyecto de infraestructura: uno de ellos es la ubicación de este distrito en el país. Al respecto, expresaba: “¿Por qué es tan importante este proyecto en Colombia últimamente? Primero, porque está en pleno centro del país, pasa una de las carreteras nacionales más importantes que tenemos, que sale al Ecuador” (entrevista, 1º de noviembre de 2019). Sin embargo, su relevancia también está dada en que, en términos de este líder, el distrito se puede convertir en un “laboratorio de cómo se puede manejar esa agua y esa radiación solar en un sitio como este” (entrevista, 1º de noviembre de 2019).

No obstante, la construcción del DRTT no ha estado exenta de grandes transformaciones en este espacio. La construcción de la obra ha implicado tres etapas: la creación de una bocatoma que extrae agua del río Saldaña, la cual es tratada para remover residuos y sedimentos, a fin de ser trasladada a una segunda etapa: la represa de Zanja Honda, que abarca un espejo de agua de unas 240 hectáreas de extensión. La tercera etapa consiste en cuatro grandes canales que salen de la represa y se extienden por los tres municipios de influencia del distrito. El líder indígena cuenta que las obras de

adecuación han desplazado a habitantes de tres resguardos, lo cual considera una consecuencia negativa: “Nosotros como nativos somos muy apegados de donde estamos” (entrevista, 1º de noviembre de 2019). Además, ha generado cambios sustanciales en la propiedad de la tierra en la región. Por cuenta del proyecto se han valorizado notablemente los predios, lo que ha sido aprovechado para movilizar el mercado de tierras —en particular por la llegada de nuevos compradores—. Por otro lado, también se ha cuestionado el tipo de producción que se está viendo en algunos de los predios cubiertos por el distrito. Recientemente han aparecido grandes extensiones de arroz, mango y lulo, cultivos de carácter comercial que requieren una fuerte inversión en adecuación de terreno y aplicación de fertilizantes y pesticidas.

Cabe aclarar que el distrito de riego aún no está en pleno funcionamiento (no se han construido los canales secundarios y terciarios que permitan irrigar los predios). Pero el manejo del agua, las nuevas dinámicas de los predios y la consolidación de producción de cultivos comerciales se convierten en aspectos que hacen pensar a los habitantes locales sobre la necesidad de generar alternativas productivas, alimentarias y organizativas. Uno de los elementos que más preocupa es que los cultivos comerciales terminen desplazando los cultivos típicos de los habitantes (maíz, plátano cachaco, yuca, sandía, entre otros). Tal reemplazo no solo tendría consecuencias en la producción, sino en las prácticas alimentarias tradicionales de los indígenas pijaos. Ante esta situación, varios grupos y organizaciones se han constituido para liderar procesos de recuperación de semillas nativas y criollas, además de la restauración de formas de producción afines a la agroecología.

Grupos de mujeres como la Asociación Manos de Mujer han realizado una defensa firme de las maneras como sus antepasados preparaban, realizaban y cuidaban de los cultivos. Sobre la forma de preparar la tierra, una lideresa de la Asociación decía: “Ellos [sus antepasados] nunca fumigaban... El arado degrada la tierra... [cuando llega] la lluvia, la tierra está suelta” (entrevista, 31 de octubre de 2019). Por otro lado, rescata las huertas caseras como un espacio central para recrear los saberes y conocimientos que poseen los indígenas sobre sus cultivos: “Hay que tener ese tipo de experiencias, ese conocimiento, porque solo cultivar sin ninguna medida no es, no vale. Hay que tener mucho conocimiento para tener un cultivo” (entrevista, 31 de octubre de 2019). En la vivienda de esta lideresa, en una vereda de Coyaima, hay varias huertas, en donde posee cultivos de pancoger, plantas ornamentales

y medicinales, e incluso un pequeño vivero para apoyar proyectos de reforestación con vegetación endémica (iguás y totumos). En esta huerta también se adelanta la conservación de semillas nativas y criollas, entre las que se destacan variedades de maíz bavario amarillo y rojo, maíz guacamayo, al igual que patilla criolla. En su casa también incluye la cocina en la transmisión de saberes a partir de la preparación de los alimentos: “Todos esos saberes vienen desde el fogón. Compartir el vivir desde la cocina, desde el fogón... a nosotras, como mujeres indígenas, nos enseñaron y tenemos ese rasgo de compartir todos los saberes bien desde el fogón, desde la cocina” (entrevista, 31 de octubre de 2019).

La transmisión de estos conocimientos ha sido apoyada por la creación de distintas escuelas y procesos de formación. Relacionado con lo anterior, diversas comunidades de la región del Triángulo del Tolima han constituido procesos de formación en agroecología, que vinculan a académicos con experiencia en manejo de sistemas productivos con habitantes locales con saberes específicos regionales en temáticas productivas, alimentarias y ambientales. Es así como se constituye la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame, un espacio cuyo objetivo es la capacitación de líderes locales (indígenas, campesinos y gremiales) en diversas áreas, “buscando con ello que se desarrollen propuestas alternativas para mejorar su calidad de vida, fortalecer la capacidad institucional de sus organizaciones y la defensa del territorio” (Castrillón y García, 2014). La lideresa de Manos de Mujer hace parte de esta escuela. Comenta que esta escuela ha permitido un intercambio de conocimientos con comunidades y asociaciones de varios municipios del sur del Tolima, incluso tan lejanos como Planadas o Rioblanco. Otro proceso de formación destacado es la conformación de grupos autogestionados de ahorro y crédito; uno de sus impulsores explica en qué se basan estos: “Nosotros tenemos que trabajar nuestra propia economía, [y] además de que nos unimos para ahorrar, nos asociamos” (charla, 31 de octubre de 2019). Estos grupos de ahorro y crédito les han demandado a los participantes instruirse en contabilidad y educación financiera, desde una perspectiva comunitaria que les permita ganar autonomía para solventar los proyectos productivos y las asociaciones locales.

En últimas, la apuesta productiva actual y futura que las comunidades indígenas de la zona están desarrollando en el espacio del DRTT está sustentada en, según sus palabras: “Una producción que permita la sostenibilidad del

suelo, la sostenibilidad del ecosistema, la sostenibilidad de la biodiversidad, la sostenibilidad de nuestra familia, la sostenibilidad de un alimento que podamos brindar a nuestros consumidores, a nuestros amigos consumidores, [alimentos] sanos” (entrevista, 1º de noviembre de 2019). El líder de Utritol indica también que la mayor formación educativa que han tenido niños y jóvenes en años recientes ha contribuido a poseer otra perspectiva de territorio, y en particular sobre el distrito de riego: “Ya ahora nuestros hijos [...] han ingresado a las universidades [...] Ya hay otras opciones de pensamiento, otras posibilidades de manejo de la palabra [...], podemos estar pensando que este proyecto [el distrito de riego] no nos va a quedar grande” (entrevista, 1º de noviembre de 2019).

Conclusiones

Para cerrar este capítulo, vale la pena plantear algunos elementos clave que han moldeado las discusiones teóricas sobre saberes y conocimiento, sus puentes con el concepto de territorio, y la aplicación empírica de una propuesta que vincula estos tres conceptos en la configuración territorial formulada por las organizaciones y asociaciones del sur del Tolima y occidente de Neiva. Al respecto, cabe anotar que a lo largo del texto se procura cuestionar la perspectiva de los saberes y conocimientos como desligados del territorio en el que se producen. Más bien, como se observa en las acciones y testimonios de las organizaciones de la región, los conocimientos y saberes construidos, transmitidos y aplicados tienen una relación en las formas como se comprende el territorio (y, de paso, cómo estas comunidades y organizaciones se entienden dentro del territorio), y en dinámicas de articulación, negociación o disputa con otros actores.

En primer lugar, las discusiones sobre saberes y conocimientos llaman la atención sobre las condiciones concretas de producción, distribución y consumo de saberes y conocimiento, así como las relaciones de poder que delimitan dichas condiciones. En el caso de la zona cafetera (Planadas y occidente de Neiva), así como en el área de influencia del DRTT (Coyaima, Natagaima y Purificación), es posible ver cómo aparecen circuitos de producción y transmisión de saberes y conocimientos que se extienden por fuera de los mecanismos convencionales de las entidades oficiales o de los gremios productivos. Se destacan iniciativas como escuelas informales y

populares, como la escuela “Construyendo futuro” en Planadas y la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame en el Triángulo del Tolima, las dinámicas de extensionismo rural propiciadas por las agremiaciones productivas cafeteras o las iniciativas de intercambio de productor a productor respaldadas por las asociaciones productivas, alimentarias y ambientales locales. Lo anterior no invalida la presencia de instituciones educativas oficiales o del SENA como instancias que favorecen la replicación de conocimientos. La particularidad de estos saberes y conocimientos alternos es que las organizaciones y asociaciones pueden, además de tener una mayor autonomía en su producción y transmisión, procurar que su utilidad esté orientada hacia el mejoramiento de las propias condiciones de vida de las comunidades (Castrillón y García, 2014).

Ahora bien, la introducción del concepto de territorio supone una apertura destacable en las maneras como se conceptualizan los saberes y conocimientos. A partir de herramientas de la geografía crítica (Elden, Halvorsen), es posible adquirir una mayor sensibilidad en relación con el *locus* —en su doble acepción geográfica y epistemológica— en el que se producen los saberes y conocimientos. Bajo esta premisa, este trabajo esboza una distinción básica entre saberes y conocimientos *sobre* el territorio (concepciones, negociaciones y disputas sobre cómo se entiende un territorio) y saberes y conocimientos *en* el territorio (actores y mecanismos que producen, transmiten, recuperan y utilizan saberes y conocimientos en un territorio). Partiendo de esta distinción, se entiende que las organizaciones y asociaciones toman postura frente a la implementación de proyectos de desarrollo o de iniciativas de construcción de paz. Las propuestas de integración económica por cuenta del posconflicto (Planadas y occidente de Neiva) y de implementación de megaproyectos de infraestructura (Natagaima, Coyaima y Purificación) han sido entendidas de manera crítica, negociadas o resistidas por parte de los actores locales.

Propósitos como el desarrollo territorial o la implementación de las agendas de construcción de paz deben revisarse con atención, desde una perspectiva local y cercana a los actores que habitan y permanecen en el territorio del sur del Tolima y del occidente de Neiva. Tal como apunta Porto Gonçalves (2015), las narrativas alrededor del desarrollo privilegian las miradas externas y “desde arriba”, lo que ha provocado dejar de lado

las decisiones autónomas de las comunidades locales sobre sus territorios. En el trabajo de campo realizado, las propuestas de ‘desarrollo endógeno’ ponen en primer lugar a los actores locales como los principales agentes de desarrollo, los cuales tienen la potestad para invitar, incluir o excluir a otros actores (ONG, universidades, empresarios, instituciones públicas). Por otro lado, acerca de las dinámicas de construcción de paz y la implementación de los acuerdos de La Habana, la perspectiva oficial manejada por el gobierno propone la aplicación de una serie de medidas que apuntan a “llenar un vacío” y a “institucionalizar el territorio” (Bautista, 2017). De ese modo, la perspectiva oficial asume un ‘vacío territorial’ que debe ser ‘llenado’. En el diálogo con las organizaciones del sur del Tolima y occidente de Neiva, se plantea más bien la intención de hacer valer sus apuestas territoriales, en cuanto a sus iniciativas productivas, alimentarias y ambientales, muchas de las cuales ya existían durante el conflicto armado. Además, buscan desprenderse de la estigmatización a la que han sido sometidos por parte de las élites económicas y políticas del Tolima, Huila y a nivel nacional, que han catalogado a la región (y por extensión a sus habitantes) como “zona roja” (Aponte, 2019).

En últimas, las categorías de saberes y conocimientos pueden decir algo sobre cómo se configura el territorio del sur del Tolima y del occidente de Neiva. En ese sentido, los conocimientos y saberes, elaborados, adaptados y usados por parte de las organizaciones y asociaciones de los municipios de Natagaima, Coyaima, Purificación, Planadas (Tolima) y de la zona occidente del municipio de Neiva (Huila), tienen un papel activo sobre las concepciones y apuestas territoriales locales. Dichos hallazgos invitan a la academia, a las instituciones públicas, a las organizaciones no gubernamentales y a gremios empresariales a tomar una actitud de prudencia frente a las iniciativas gestadas exclusivamente de forma externa a este territorio, sean de desarrollo económico o de construcción de paz. Invitan, entonces, a tener en cuenta cómo estos saberes y conocimientos *en* el territorio y *sobre* el territorio traen consigo unas apuestas particulares y (sobre todo) *locales* que cuestionan las nociones mismas de desarrollo y de construcción de paz. Es la misión de próximas investigaciones entender cómo se articulan, negocian y disputan estos saberes y conocimientos en otros contextos territoriales.

Referencias

- Acosta Valdeleón, W., & Carreño Manosalva, C. (2013). Modo 3 de producción de conocimiento: implicaciones para la universidad de hoy. *Revista de la Universidad de La Salle*, (61), 67-87.
- Aguerre, L. A. (2011). *Desigualdades, racismo cultural y diferencia colonial*. Berlín: desiguALdades.net.
- Aponte, F. (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz (Cinep/PPP).
- Baquero, J. (2018). *Transformaciones socioeconómicas para construir la paz territorial. Avances y retos de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*. Bogotá: Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/15095.pdf>
- Baquero, J., & Quiroga, E. (2019). La economía política del café y el “doble movimiento”: neoliberalismo, movilización social y asociatividad en el Huila. En J. Baquero Melo (Ed.), *Territorios, conflictos agrarios y construcción de paz: comunidades, asociatividad y encadenamientos en el Huila y sur del Tolima* (pp. 91-128). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- Bautista Bautista, S. C. (2017). Contribuciones a la fundamentación conceptual de paz territorial. *Ciudad Paz-Ando*, 10(1), 100. DOI: <https://doi.org/10.14483/2422278x.11639>
- Bode, R. (2006). *Knowledge management, learning and communication in value chains. A case analysis of the speciality coffee value chain of Fapecafes, Ecuador*. Cali: CIAT-BMBF-GTZ.
- Boucher, F., & Riveros, A. (2017). Dinamización económica incluyente de los territorios rurales: alternativas desde los sistemas agroalimentarios localizados y los circuitos cortos de comercialización. *Estudios Latinoamericanos*, (40), 39-58.
- Bourdieu, P. (1999). The specificity of the scientific field. En M. Biagioli (Ed.), *The science studies reader* (pp. 31-50). Nueva York: Routledge.
- Cabrera, W., & Burbano, M. (2018). *Conocer el perfil de taza generado mediante la implementación de los métodos de cafés naturales, honey y cafés lavados con la variedad castillo general en los asociados a la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila) del municipio de Acevedo (Huila)* (Tesis de Profesional en Agronomía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia).

- Castrillón, F., & García, R. (Coords.) (2014). *Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame. Investigación popular y transformación socioambiental en la región del sur y centro del Tolima*. Bogotá: Grupo Semillas.
- Comisión de la Verdad. (26 de junio de 2020). *Orígenes del conflicto armado. En la búsqueda de verdades históricas: entre luchas, órdenes y poder* [video]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=YBscPygeIWA>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2016). *Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2017). *De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe N° 1*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Colombia, Ministerio del Interior. (2014). *Diagnóstico participativo del estado de los derechos fundamentales del pueblo pijao y líneas de acción para la construcción de su plan de salvaguarda étnica*. Recuperado de https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/diagnostico_participativo_pueblo_pijao.pdf
- Coppens, H. (2014). El Sistema Agroforestal de Tarata–Bolivia: una adopción dependiente de los conocimientos, actitudes y prácticas de los agricultores en relación con la implementación de un nuevo sistema. *Acta Nova*, 6(3), 268-287.
- Crespo, J. M., & Vila Viñas, D. (2015). Comunidades: saberes y conocimientos originarios, tradicionales y populares. En D. Vila Viñas & X. E. Barandiaran (Eds.), *Buen conocer—FLOK Society. Modelos sostenibles y políticas públicas para una economía social del conocimiento común y abierto en el Ecuador*. Quito: IAEN-Ciespal. Recuperado de <http://book.floksociety.org/ec/3/3-2-saberes-yconocimientos-originarios-tradicionales-y-populares>
- De Sousa Santos, B. (2015). *Una epistemología del sur*. Ciudad de México: Clacso Coediciones-Siglo XXI Editores.
- Del Cairo, C., Montenegro, I., & Vélez, J. S. (2014). Naturalezas, subjetividades y políticas ambientales en el noroccidente amazónico: reflexiones metodológicas para el análisis de conflictos socioambientales. *Boletín de Antropología*, 29(48), 13-40.
- Dematteis, G., & Governa, F. (2005). Territorio y territorialidad en el desarrollo local. *Boletín de la AGE*, (39), 31-58.
- Elden, S. (2010). Land, terrain, territory. *Progress in Human Geography*, (34), 799-817.

- Escobar, A. (2012). Una ecología de la diferencia: igualdad y conflicto en el mundo globalizado. En *Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia* (pp. 125-146). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Escobar, A. (2016). Sentipensar con la tierra: las luchas territoriales y la dimensión ontológica de las epistemologías del sur. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 11(1), 11-32.
- Eufemia, L., Bonatti, M., & Sieber, S. (2019a). *Fortalecimiento de la gobernanza comunitaria en el Pantanal paraguayo. Municipio de Bahía Negra. Alto Pantanal, Paraguay*. Berlín: Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF)-Universidad de Humboldt de Berlín (HU)-World Wildlife Fund (WWF).
- Eufemia, L., Bonatti, M., & Sieber, S. (2019b). *Manual de construcción de gobernanza comunitaria. Estudio de caso: municipio de Paz de Ariporo, Casanare (Colombia)*. Berlín: Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF)-Universidad de Humboldt de Berlín (HU)-World Wildlife Fund (WWF).
- Flórez, D., Gil, R., Morales, A., Catalán, J., Del Carmen Avendaño Porras, V., Fuentes, C., & Morales, F. (2018). La función educativa del profesor, del agrónomo y del técnico agrícola en el mundo rural colombiano: ¿agentes del cambio social o generadores de invasión cultural? En R. Martínez, G. Herrera & J. Catalán (Eds.), *Formación docente y pensamiento crítico en Paulo Freire* (pp. 63-82). Buenos Aires: Clacso. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0jhs.6>
- Foucault, M. (2005). *El orden del discurso*. Buenos Aires: Tusquets Editores.
- Franco, A., & De los Ríos, I. (2011). Reforma agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 8(67), 93-119.
- Fraser, N. (1991). Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy. En C. Calhoun (Ed.), *Habermas and the public sphere* (pp. 109-142). Cambridge: MIT Press.
- Fraser, N. (1995). Politics, culture and public sphere: toward a postmodern conception. En *Social postmodernism beyond identity politics* (pp. 287-312). Cambridge: Cambridge University Press.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.
- Garfinkel, H. (1974). The origins of the term 'ethnomethodology'. *Ethnomethodology*, (15), 15-18.
- González, F. (2014). *Podery violencia en Colombia*. Bogotá: Odecofi-Cinep-Colciencias.

- Gudynas, E. (2015). *Derechos de la naturaleza*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Hadad, M. G., Palmisano, T., & Wahren, J. (2020). Socio-territorial disputes and violence on fracking land in Vaca Muerta, Argentina. *Latin American Perspectives*, 48(236), 63-83. DOI: <https://doi.org/10.1177/0094582X20975009>
- Halvorsen, S. (2018). Decolonising territory: dialogues with Latin American knowledges and grassroots strategies. *Progress in Human Geography*, 43(5), 1-25. DOI: <https://doi.org/10.1177/0309132518777623>
- Hamdija, N., & Carvalho, M. (2010). The knowledge society: a sustainability paradigm. *Cadmus*, 1(1), 28-41.
- Hincapié, S., & López, J. (2016). Derechos humanos y bienes comunes. Conflictos socioambientales en Colombia. *Desacatos*, (51), 130-141.
- Holt, E. (2008). *Campesino a Campesino: voces de Latinoamérica. Movimiento Campesino a Campesino para la Agricultura Sustentable*. Managua: SIMAS.
- Ivarola, L. (2019). Consecuencias alternativas: la importancia de su conocimiento en la implementación de políticas. *Trans/Form/Ação*, 42(2), 195-212.
- Latour, B. (1987). *Science in action: how to follow scientists and engineers through society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Liberona, D., & Ruiz, M. (2013). Análisis de la implementación de programas de gestión del conocimiento en las empresas chilenas. *Estudios Gerenciales*, (29), 151-160.
- Manzo, J. (2010). Coffee, connoisseurship, and an ethnomethodologically-informed sociology of taste. *Human Studies*, 33(2-3), 141-155.
- Marulanda, C., Valencia, F., & Marín, P. (2019). Principales obstáculos para la transferencia de conocimiento en los centros e institutos de investigación del Triángulo del Café en Colombia. *Información Tecnológica*, 30(3), 39-46.
- Mateo, J. L. (2006). Sociedad del conocimiento. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, CLXXXII(718), 145-151.
- McAdam, M., McAdam, R., Dunn, A., & McCall, C. (2016). Regional horizontal networks within the SME agri-food sector: an innovation and social network. *Perspective Regional Studies*, 50(8), 1316-1329.
- Montoya Ortega, Y. (2019). Gestión de la comunicación intercultural desde el diálogo de saberes y haceres. *Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas*, 2(1), 8-20. DOI: <https://doi.org/10.5377/recsp.v2i1.8163>
- Mora, J. (2008). Persistencia, conocimiento local y estrategias de vida en sociedades campesinas. *Revista de Estudios Sociales*, (29), 122-133.
- Nunes Alves, J. (2012). Knowledge sharing in horizontal networks: the proposition of a framework. *Pensamiento y Gestión*, 1(33), 39-66.

- Pachón, X., Oliveros, D., & Wiesner, L. (1996). *Geografía humana de Colombia. Región Andina Central* (tomo IV, volumen II). Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Pérez, M., & Argueta, A. (2011). Saberes indígenas y diálogo intercultural. *Cultura y Representaciones Sociales*, 5(10), 31-56.
- Porta, M. J., & Cometta, A. (2017). Acerca de los saberes docentes: enfoques y aportes teóricos. *Entrevistas. Revista de Debates*, 7(9), 1-10.
- Porto Gonçalves, C. W. (2009). De saberes y de territorios. Diversidad y emancipación a partir de la experiencia latinoamericana. *Revista Polis*, (22), 1-13.
- Porto Gonçalves, C. W. (2015). Del desarrollo a la autonomía: la reinención de los territorios. El desarrollo como noción colonial. *Revista Kavilando*, 7(2), 157-161.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011). *Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011*. Bogotá: PNUD.
- Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. *Perú Indígena*, 13(29), 11-20.
- Quiroga, C. (2014). Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia. En B. Göbel & A. Ulloa (Eds.), *Extractivismo minero en Colombia y América Latina* (pp. 283-320). Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá)-Ibero-Amerikanisches Institut.
- Reimers, F. (2002). La lucha por la igualdad de oportunidades educativas en América Latina como proceso político. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 23(1), 9-70.
- Rojas, L. (2016). *Análisis de la percepción de la comunidad indígena pijao frente a los efectos del Distrito de Riego "Triángulo del Tolima" en los municipios de Coyaima y Natagaima* (Tesis de pregrado en Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/22048/RojasAyerbeLauraJulieth2016.pdf>
- Ruiz, D. (2017). El territorio como víctima. Ontología política y las leyes de víctimas para comunidades indígenas y negras en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 53(2), 85-113.
- Santos, B. S. (2007). *Cognitive justice in a global world: prudent knowledges for a decent life*. Lanham: Lexington Books.
- Sarmiento, J. C. (2011). Conocer: una visión epistémica. *Acta Colombiana de Psicología*, 14(1), 81-97.

- Sennett, R. (2008). *The craftsman*. New Haven: Yale University Press.
- Torrent i Sellens, J. (2002). De la nueva economía a la economía del conocimiento. Hacia la tercera revolución industrial. *Revista de Economía Mundial*, (7), 39-66.
- Traversa, F. (2013). Educación, trabajo y nuevas desigualdades. Hacia una economía política del conocimiento para el capitalismo contemporáneo. *Nueva Sociedad*, (247), 50-69.
- Ulloa, A., & Coronado, S. (Eds.). (2016). *Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá)-Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz (Cinep/PPP).
- Ulloa, A. (2012a). Los territorios indígenas en Colombia: de escenarios de apropiación transnacional a territorialidades alternativas. *Scripta Nova*, XVI(418), 1-13. Recuperado de www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-65.htm
- Ulloa, A. (2012b). *Producción de conocimientos en torno al clima. Procesos históricos de exclusión/apropiación de saberes y territorios de mujeres y pueblos indígenas*. Berlín: desiguALdades.net.
- Villoro, L. (1982). *Creer, saber y conocer*. Madrid: Siglo XXI Editores.

Capítulo 6

El Estado y la construcción de paz territorial en San Vicente del Caguán y Tumaco (Colombia)

Juan David Ardila Suárez, Iokiñe Rodríguez Fernández

Introducción

El término ‘construcción de la paz’ apareció tras el final de la Guerra Fría, y se refirió a las intervenciones en los Estados para evitar que estos recaigan en un conflicto interno (Boutros-Ghali, 1992). El enfoque tradicional de la consolidación de la paz afirma que la paz sostenible requiere de institucionalidad democrática, mercados y sistemas judiciales. La lógica que subyace a este discurso es la paz positiva, que recalca que para alcanzar un orden pacífico dentro de un país no basta con prevenir la violencia directa, estructural o cultural, sino que es necesario reconstruir las condiciones estructurales que dieron lugar a esa violencia en primer lugar (Galtung y Fischer, 2013).

La existencia de la categoría de Estado frágil era un supuesto en este proyecto de paz liberal. En términos generales, la idea describe los países en los que el Estado deja de existir o de cumplir sus funciones naturales (Call, 2008, p. 1492). Sin embargo, la idea ha perdido fuerza en los círculos académicos, porque los países clasificados como débiles presentan formas alternativas de gobernanza no gubernamental (Boege, Brown y Clements, 2009). Colombia es un ejemplo de nación en la que las comunidades han utilizado prácticas, relaciones y estructuras locales para manejar el conflicto de manera no violenta (Jaramillo Marín, Castro Herrera y Ortiz Gallego, 2018). Los grupos armados, y en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), desempeñaron un

papel en algunas de ellas. Esta función les permitió alcanzar un control territorial sin restricciones.

En 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP, en el que este grupo armado se comprometió a poner fin a la violencia y a renunciar al control territorial. Por su parte, el Estado ayudó a los excombatientes a seguir una carrera política y a entrar en la vida cotidiana. El acuerdo incluía varios puntos, desde una reforma rural hasta la reintegración de los excombatientes, aprobada en parte por el Senado colombiano. El Estado central adoptó un papel fundamental en la aplicación del acuerdo, que ha estado lejos de tener éxito.

Teniendo en cuenta las dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz y cómo las organizaciones locales han liderado las iniciativas de paz, se podría cuestionar si el Estado debe después de todo jugar un papel en este escenario de posconflicto. No obstante, las mismas comunidades han solicitado la presencia de este en sus regiones, como se encontró en la investigación cualitativa que dio lugar a este artículo. De lo contrario, la ausencia de instituciones estatales reforzará algunas de las condiciones estructurales que provocaron el conflicto colombiano. ¿Cómo entender el papel del Estado en la construcción de la paz en contextos donde las organizaciones locales tienen formas de organización híbridas?

Una posible solución a este dilema es la noción de paz territorial introducida por Sergio Jaramillo, el comisionado a cargo del proceso de paz con las FARC-EP durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En una conferencia en la Universidad de Harvard, definió el concepto de esta forma: “Lo que quiero destacar es que hay que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar instituciones en el territorio que acaben haciendo valer los derechos de todos por igual. El enfoque de los derechos debe complementarse con un sistema territorial para avanzar en esta dirección [...]. Eso es lo que yo llamo paz territorial”.

Por lo tanto, esta noción de paz requiere que el Estado garantice los derechos fundamentales en todo el territorio colombiano y que preste estos servicios a cada región de manera diferenciada y centrada en las periferias.¹

¹ Cabe decir que, según el “Primer informe multipartidista” del 7 de agosto de 2019, el gobierno de Duque ha exhibido un cambio de retórica en la comprensión de la paz, más centrado en la legalidad y estabilidad que en la construcción de paz territorial. El enfoque de este

Las condiciones necesarias para implementar tal idea de paz son el aumento de la participación de los actores locales, la descentralización y la seguridad por parte del Estado (Cairo et al., 2018).

Los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) son una instancia de paz territorial por excelencia. Este instrumento pertenece al primer punto del Acuerdo de Paz, la reforma rural integral, y busca “la transformación estructural del campo y del entorno rural [garantizando] el bienestar y la buena vida de la población en las zonas rurales [...]” (Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC). Este programa proporciona información de abajo hacia arriba sobre las necesidades de las regiones rurales y sobre cómo los actores consideran que deben abordarse las necesidades.

Por ende, la pregunta central de este capítulo es: ¿hasta qué punto los PDET constituyen un instrumento en el que la construcción de la paz central interactúa satisfactoriamente con la paz de base y las organizaciones locales en dos municipios de Colombia?

Las regiones escogidas fueron San Vicente del Caguán y Tumaco (Colombia). La selección de estas zonas se debe al hecho de que muestran las posibilidades de las organizaciones locales para tratar el conflicto de forma no violenta, así como para proporcionar servicios esenciales (González, Castañeda y Barrera, 2017). Las regiones no son totalmente idénticas, ya que las FARC y las organizaciones comunitarias han tenido una relación íntima en San Vicente del Caguán, mientras que, en Tumaco, las FARC basaron su control territorial en la fuerza.

Método

La investigación utilizó un diseño metodológico de tipo cualitativo que estuvo dividido en dos partes. Primero, se realizó un análisis de datos secundarios. Allí se consideraron las leyes que describen cómo deben aplicarse los PDET y también otras que abordan cuestiones derivadas de la ejecución de esta política rural. Así mismo, se examinaron los informes sobre seguridad y el contexto de posconflicto de organizaciones gubernamentales, como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, los informes multipartidistas, la Comisión Presidencial para

capítulo dejará de lado esta modificación del discurso, centrándose más en los legados de la anterior noción de construcción de paz.

los Derechos Humanos, así como los elaborados por ONG locales e internacionales, por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz o la Misión de la Organización de los Estados Americanos para apoyar el proceso de paz en Colombia.² Por último, la investigación tuvo en cuenta los artículos periodísticos de fuentes confiables como *Pacifista*, *La Silla Vacía*, *Caracol Radio*. El período de las fuentes consultadas fue de 2016 hasta 2020.

La segunda parte de la investigación consistió en entrevistas semiestructuradas a cuatro expertos en escenarios de posconflicto de esos dos municipios. Estas autoridades eran miembros de ONG locales especializadas, organizaciones religiosas, profesores de universidades locales y un líder de una importante ONG de Colombia. Las entrevistas fueron acerca de la calidad de la participación de la fase comunitaria local de los PDET, los conflictos entre las ideas oficiales de desarrollo y las de las organizaciones de base, las condiciones de seguridad de las zonas estudiadas y el tránsito de las economías ilegales a la producción agrícola sostenible.

Procedimiento de selección

El foco de atención en esta investigación se centró en los municipios colombianos de San Vicente del Caguán y Tumaco, puesto que han mostrado diferentes interrelaciones entre las organizaciones comunitarias y los grupos armados, y son instancias de modelos híbridos de gobernanza política. Para seleccionar las entrevistas se hizo una lista de ONG y organizaciones gubernamentales que trabajan en esas regiones, así como de universidades. Se efectuó una consulta a cada organización de si podía participar en la investigación y podía remitirse a un miembro de su personal. Se dio prioridad a los miembros con experiencia en la consolidación de la paz y el desarrollo participativo. Algunas veces se pidió que las personas entrevistadas sugirieran otros posibles participantes, siguiendo un modelo de muestreo de bola de nieve.

² Uno de los evaluadores sugirió complementar el capítulo con fuentes como los informes multipartidistas, documentos del Cinep y del Cerac. Cabe decir que el Cinep no cuenta con textos recientes acerca de la situación de San Vicente del Caguán luego de la firma de paz. Tiene un documento sobre el papel de las iglesias en la construcción de paz que aborda a San Vicente y Tumaco; no obstante, su investigación va hasta 2016. No encontramos fuentes actualizadas del Cerac sobre los dos municipios estudiados.

Análisis de datos

Los autores siguieron un análisis temático de la información recogida. En primer lugar, se transcribieron las entrevistas y se establecieron los temas comunes de estas conversaciones. Se examinaron estos temas en fuentes secundarias de las organizaciones y se corroboraron las leyes y otros instrumentos políticos que los autores o los entrevistados mencionaron. Se repitió el proceso hasta que surgieron temas específicos. Se recopiló la lista de temas y se evitó que fueran redundantes. A partir de estos temas e información, se intentó comprender la calidad de la participación de los PDET y las condiciones de seguridad de los municipios seleccionados. Además, se analizaron los resultados a la luz de teorías sobre la paz de base y organizaciones híbridas.

Limitaciones

Los autores reconocen que, en condiciones ideales, la investigación se beneficiaría del trabajo de campo directo en los municipios. Sin embargo, la crisis de la covid-19 hizo imposible llevar a cabo ese estudio cara a cara. Colombia prohibió los viajes dentro del territorio durante los meses en que se realizó esta investigación. Debido a esto, la mejor manera de resolver los problemas centrales del escrito fue contactar a expertos en la materia: ya tienen un bagaje en los temas estudiados.

Revisión de la literatura

La pregunta sobre el papel del Estado en la construcción de la paz ha sido central en la literatura de paz. Sin embargo, en este texto discutimos por qué es necesario rechazar este discurso y adoptar un enfoque de construcción de la paz a nivel local.

La idea de que la debilidad de las instituciones estatales es la culpable de los conflictos nacionales cobró impulso a finales de los noventa y principios de 2000 (París y Sisk, 2009). Como consecuencia, parecía que la solución más sencilla para salir de la guerra y alcanzar la paz era instaurar un Estado estable. El proyecto era una continuación de la construcción de la paz liberal porque tales entidades simulaban el Estado-nación tal como lo concebían los liberales, es decir, un ente democrático, abierto al mercado, etc. Este proyecto liberal ha perdido fuerza en el discurso oficial debido a que sus implicaciones políticas no coincidieron con la realidad. Un ejemplo de construcción estatal secuenciada fue Bosnia-Herzegovina, donde hubo

una reforma constitucional dedicada a disminuir la influencia de los partidos nacionalistas (Chandler, 2017). Sin embargo, la reforma no fortaleció el sistema político porque los funcionarios elegidos carecían de representación política (Chandler, 2017).

Construcción de paz local

Una crítica fundamental contra la construcción del Estado es el punto de inflexión para la paz local. Según este punto de vista, hay una postura neo-colonial en las intervenciones que promovieron las instituciones liberales. Un conjunto particular de estructuras de gobierno establecidas en el norte global que fija objetivos para los países en diversos entornos. En opinión de Cooper, Turner y Pugh (2011), a pesar de que no es idéntico al colonialismo, la construcción del Estado es parte de una intención imperialista, ya que algunas misiones han aportado beneficios económicos a los Estados que las dirijan, como en el caso de Estados Unidos en Irak. En otras palabras, el modelo es rígido o concebido como un plan que supuestamente funciona en todas las situaciones posibles, lo cual está lejos de ser cierto (Mac Ginty y Richmond, 2013).

Hay al menos dos tipos de teorías que cuestionan los principios centrales de la consolidación del Estado. Mac Ginty y Richmond (2013) representan el giro radical; estos autores consideran a las comunidades locales como agentes. Las organizaciones locales surgen de manera natural y poseen legitimidad local e internacional. La paz se produce porque los individuos dejan atrás la exclusión de un grupo determinado y fortalecen las redes sociales entre sí. En opinión de Mac Ginty y Richmond (2013), el enfoque local constituye una excelente oportunidad de emancipación, es decir, un mecanismo para que las comunidades se opongan a los discursos y prácticas dominantes (Paffenholz, 2015b).

Paul Lederach (1997) adoptó una explicación más leve de la consolidación de la paz a nivel local, de acuerdo con la cual las iniciativas de paz deben procurar la reconciliación. Lederach complementa esa idea sugiriendo un proceso de cuatro pasos: la verdad sobre lo ocurrido, una justicia que retribuya los errores del pasado, la misericordia para los malhechores y, por último, la paz, caracterizada por la armonía, el bienestar y la seguridad. Lederach considera que las intervenciones de paz implican a los líderes del gobierno central, a las ONG internacionales y a las comunidades locales.

Se trata de “un enfoque integrador y global que apunta a la necesidad funcional de reconocimiento, inclusión y coordinación en todos los niveles y actividades” (Lederach, 1997, p. 60).

Estas visiones de la construcción de paz están motivadas por la posibilidad de la apropiación local. El concepto describe la influencia de los agentes locales en el diseño y la ejecución de una intervención de paz (Donais, 2009). El fundamento de la apropiación local es que, si los movimientos de base participan activamente en un programa, eso mejorará sus posibilidades de éxito (Mac Ginty, 2016; Richmond y Mitchell, 2011). Los programas locales de paz gozan de esta cualidad crucial, dado que explotan los procesos que surgen naturalmente y donde las comunidades son activas.

Órdenes en tiempo de guerra

¿Tiene sentido hablar de gobernanza si se abandonan los supuestos de la consolidación de la paz liberal? En esta sección se detallará la medida en que las instituciones están presentes en escenarios en los que algunos autores del paradigma liberal supondrían que no las hay: uno relacionado con los rebeldes y otro en el que el protagonista es la comunidad. En la primera parte de la sección, se ofrecerán algunas razones para rechazar la noción de Estado fallido. A continuación, se examina el concepto de gobernabilidad sin hacer referencia a las ideas liberales y contrastando los órdenes de tiempo de guerra antes mencionados.

La ‘falacia’ de los Estados fallidos

Las explicaciones tradicionales sobre los conflictos (Zartman, 1995) denominan a los países afectados por una guerra civil como Estados *fallidos* o *débiles*. Conforme con esas teorías, esos Estados no podían satisfacer las funciones básicas de una nación, como, por ejemplo, retener el monopolio de la violencia dentro de su territorio y prestar servicios esenciales. Su población es pobre y propensa a la violencia en la línea de la hipótesis sobre la codicia como motivación del conflicto: no tienen los incentivos para operar en la legalidad, lo que los llevó, por ejemplo, a saquear los recursos minerales de forma violenta (Collier y Hoeffler, 2004).

Diversos autores han impugnado la categoría de *Estado frágil*. En opinión de Call (2008), la falacia del Estado frágil es la asimilación de países tan diferentes como Colombia o Somalia, los cuales han seguido trayectorias

históricas distintas. Por lo tanto, Call (2008) sugiere a los investigadores y a los encargados de formular políticas que adopten un nuevo vocabulario más matizado. A modo de ejemplo, propone las siguientes categorías de Estados: colapsados (Somalia), débiles (Colombia), desgarrados por la guerra (Chechenia) y autoritarios (Cuba).

Gobernanza sin un gobierno central

Como una crítica a Call, vale la pena señalar que incluso una sola nación como Colombia no es una entidad uniforme en lo que respecta a la gobernanza. Más bien, se pueden encontrar configuraciones diferentes junto con su historia y su geografía. Es mejor entonces hablar de zonas de conflicto para comprender el orden en una guerra civil, ya que dentro de los Estados en guerra interna es posible encontrar diversas configuraciones institucionales que van desde el caos hasta instituciones liberales consolidadas (Arjona, 2016; Kalyvas, 2000).

¿En qué sentido esas regiones tienen un orden político? Irónicamente, el punto de partida de esta definición tiene en cuenta las funciones que normalmente se consideran esenciales del Estado, a saber, la seguridad, la legitimidad y la prestación de servicios esenciales como la educación y la atención sanitaria. En los párrafos siguientes, se mostrará cómo a veces los grupos rebeldes o comunidades han ejercido esas funciones, aunque el Estado no exista en las regiones.

Rebelocracia

El concepto de *rebelocracia* se refiere a los órdenes sociales en los que los combatientes ocupan papeles fundamentales. A primera vista, la expresión ‘orden rebelde’ parece contradictoria. ¿Cuál puede ser el propósito de los grupos armados cuando adoptan estructuras de gobierno? ¿No es más sencillo emplear la fuerza contra la población y garantizar su obediencia? La respuesta a esta reacción inicial es que la fuerza bruta no siempre es la más eficaz para asegurar control en un territorio. Arjona (2016) da un argumento estratégico para ello. Si el propósito principal de una organización es el poder territorial, que es el objetivo por defecto de toda organización rebelde, como parece suponer Arjona, la coerción no es práctica, debido a que aumenta el costo de mantener el control dentro de una región. La forma más eficiente de mantener el control de un municipio es comenzar a ejercer funciones

cuasiestatales como las mencionadas anteriormente. El cálculo estratégico de los rebeldes tiene límites que se deben a la presencia de otros agentes armados, como los grupos no estatales y estatales, así como de sólidas organizaciones locales. En el primer caso, el discurso sobre la gobernanza en tiempos de guerra pierde relevancia, ya que las regiones pueden descender rápidamente al caos. En cambio, en el segundo caso, los combatientes ceden un número importante de funciones a los movimientos de base, lo que ella llama ‘alioocracia’. En la figura 6.1, se ilustran los diferentes resultados de una región en conflicto civil, según Arjona (2016).

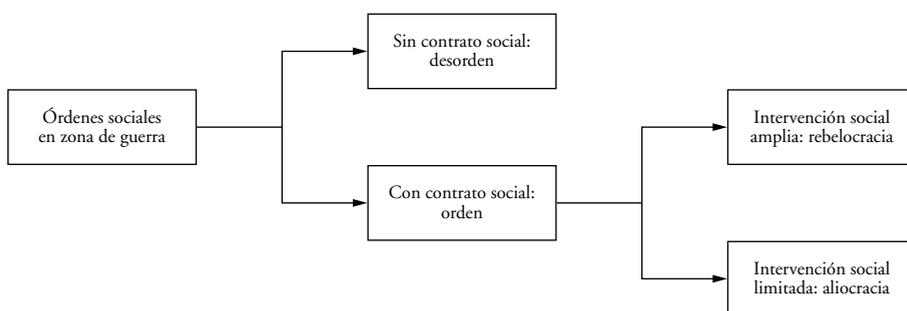


Figura 6.1. Tipos de orden social

Fuente: Arjona (2016).

En síntesis, la fuerza del dominio rebelde depende de la calidad de las funciones que desempeñan los combatientes. En un extremo, en la rebelocracia, los rebeldes alcanzan el máximo control territorial y la integración con las comunidades locales cuando se encargan de servicios y procesos esenciales como la resolución de conflictos. En el lado opuesto, en la alioocracia, las comunidades negocian con grupos no estatales para disminuir su influencia, y solo son responsables de la seguridad y los impuestos (Arjona, 2016; Masullo, 2018). Siguiendo a Arjona (2016), si las organizaciones no satisfacen al menos esas dos últimas funciones, ya no tiene sentido hablar de gobernanza o gobierno rebelde.

La gobernanza comunitaria

Para Kalyvas, los civiles “no pueden ser tratados como actores pasivos, manipulados o invisibles” (2003, p. 481). En ese sentido, siguiendo a Bøås

y Jennings (2015) y Masullo (2018), la microdinámica de los estudios sobre conflictos ha explorado la agencia civil y los contextos en los que viven e innovan. Un ejemplo de la gobernanza comunitaria son las zonas de paz (ZoP). Según Warfield y Jennings (2012), las ZoP son santuarios donde los miembros de una comunidad se resisten a las consecuencias negativas de los conflictos intraestatales, como los asesinatos o los desplazamientos. Además de ser mecanismos de prevención de conflictos, las ZoP crean capacidad para crear un sentido de paz cultural y una prestación de servicios necesarios para hacer frente a la pobreza y el subdesarrollo. Sobre la base de Warfield y Jennings (2012), las ZoP alcanzan una mayor sostenibilidad cuando surgen de forma natural, pues los agentes externos carecen de conocimientos locales.

Otra aproximación a la gobernanza comunitaria es la que propone Ehrlich (2016). Esta autora introdujo el concepto de construcción de paz a nivel de base, el cual tiene que ver con las actividades realizadas principalmente por los agentes comunitarios. Los esfuerzos locales son invisibles y de pequeña escala, así como informales. De acuerdo con Ehrlich (2016), la consolidación de la paz desde la comunidad tiene varias dimensiones, que se corresponden con las ideas anteriores sobre la gobernanza. En primer lugar, este tipo de iniciativa proporciona seguridad a la comunidad. Además, las organizaciones locales podrían reconstruir la infraestructura social y física destruida por la guerra.

Participación y liderazgo

Desde mediados de los noventa, los enfoques participativos han sido objeto de atención en la literatura sobre desarrollo y construcción de paz (por ejemplo, Chu y Luke, 2020). Las organizaciones locales parecen ser altamente participativas (Idler, Garrido y Mouly, 2015), y las iniciativas de paz que surgieron en ellas involucraron en un grado significativo a los principales interesados de la comunidad. Un ejemplo paradigmático es Samaniego (Colombia), un municipio cercano a Tumaco. Entre 1980 y 2010 surgieron más de 150 programas dirigidos por la comunidad en ese municipio (Idler, Garrido y Mouly, 2015).

Para mantener la paz es necesario que la participación tenga calidad; de lo contrario, las organizaciones locales corren el riesgo de incurrir en problemas como la reproducción de las asimetrías de micropoder. Este escrito sigue el marco de Macgee y Norton (2000), que sugieren varias

características para evaluar la calidad de la participación en un programa. En primer lugar, los agentes locales deben poseer información pertinente para la ejecución de los programas, y el gobierno central debería tener en cuenta lo local. En segundo lugar, las comunidades tienen que influir en la adopción de decisiones de nivel superior. El último elemento se refiere a la medida en que las iniciativas incluyen diferentes tipos de interesados, como las víctimas o los excombatientes.

Además de la participación, la gobernanza comunitaria presupone la presencia de un liderazgo comunitario, “que no depende de un solo individuo, sino que toda la comunidad participa en la iniciativa o, al menos, la apoya” (Idler, Garrido y Mouly, 2015, p. 6). En el contexto colombiano y, especialmente, en el discurso oficial, el concepto de *liderazgo social* se ha generalizado. Así, el artículo 81 de la Ley 418 de 1997 considera que las siguientes situaciones definen el ámbito de acción de dicho líder:

- Líderes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.
- Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, sindicatos, campesinos y grupos étnicos.
- Dirigentes y activistas de organizaciones de derechos humanos.

Contexto de la investigación

Tumaco (Nariño) y San Vicente del Caguán (Caquetá)

Tumaco se encuentra en el sur del territorio colombiano, en el departamento de Nariño (figura 6.2). Parte de su valor estratégico deriva de la cercanía con la costa del Pacífico y la frontera con Ecuador. Otra ventaja de la región es la presencia de selva tropical y de fuentes fluviales (Salazar, Wolff y Camelo, 2019). Los abundantes recursos naturales no han complementado el desarrollo económico y social del municipio. En cambio, han sido blanco de los grupos armados, debido a que permiten ocultar su cadena de productos y exportar los cultivos ilícitos. El estallido del conflicto en Nariño fue tardío. A mediados de los años noventa, los grupos guerrilleros de las FARC (Frente 29) y el ELN se desplazaron hacia la zona rural y urbana de Tumaco. Sin embargo, no iniciaron un enfrentamiento hasta la llegada de los grupos paramilitares a principios de los años 2000. La escalada de la violencia se



Figura 6.2. Mapa de Tumaco

Fuente: OCHA (2020).

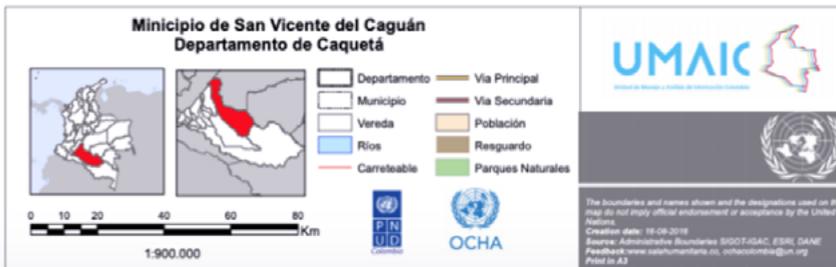


Figura 6.3. Mapa de San Vicente del Caguán

Fuente: OCHA (2020).

disparó a medida que las zonas bajo control territorial de los grupos armados comenzaron a ser objeto de ataques gracias al Plan Colombia y los grupos buscaron zonas sin la atención de los militares (Salazar, Wolff y Camelo, 2019). La desmovilización de los paramilitares representó la oportunidad para que las FARC ampliaran su presencia en Tumaco desde 2006.

El territorio de San Vicente del Caguán está en la cordillera Oriental de Colombia (figura 6.3). El municipio se encuentra ubicado cerca de Bogotá, el Amazonas y la cuenca de los Llanos Orientales de Colombia (García Villegas et al., 2016). Después de la segunda mitad del siglo xx, las historias de las FARC y San Vicente se entrelazaron, cuando llegaron los campesinos a las regiones. En El Pato, algunos de ellos iniciaron una república independiente, que más tarde los militares atacaron (García Villegas et al., 2016), lo que dio lugar al surgimiento de las FARC (CNMH, 2017). La opinión generalizada sobre San Vicente del Caguán es que es una zona caótica de Colombia (Serge, 2011). Esta idea ganó terreno, especialmente después del fallido proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), porque se convirtió en una zona desmilitarizada controlada por las FARC (Vásquez, 2014).

Programas de desarrollo con enfoque territorial

Los PDET son ejercicios de planificación en los que las comunidades seleccionadas deciden lo que se necesita en sus municipios y regiones, los cuales derivan de una idea territorial de paz defendida por Sergio Jaramillo. Los PDET se refieren al primer punto del acuerdo, ‘reforma rural integral’, y fueron introducidos en la Orden 893 de 2017. Buscan solucionar la debilidad institucional de 170 municipios de 16 subregiones de Colombia mediante la provisión de obras y servicios públicos (figura 6.4).

La figura 6.5 muestra que el proceso de flujo de los PDET implica tres fases: veredal, municipal y subregional (Valencia Agudelo y Restrepo Cano, 2020). Los resultados de estos momentos son los planes de acción para la transformación regional (PATR); posteriormente, los gobiernos locales implementarán los programas a través de una hoja de ruta. Los actores comunitarios estuvieron presentes principalmente en el primer momento de los ejercicios, donde deciden cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, el análisis referirá a la primera parte de este programa, dado que es cuando las organizaciones comunitarias podían hacer oír su voz.

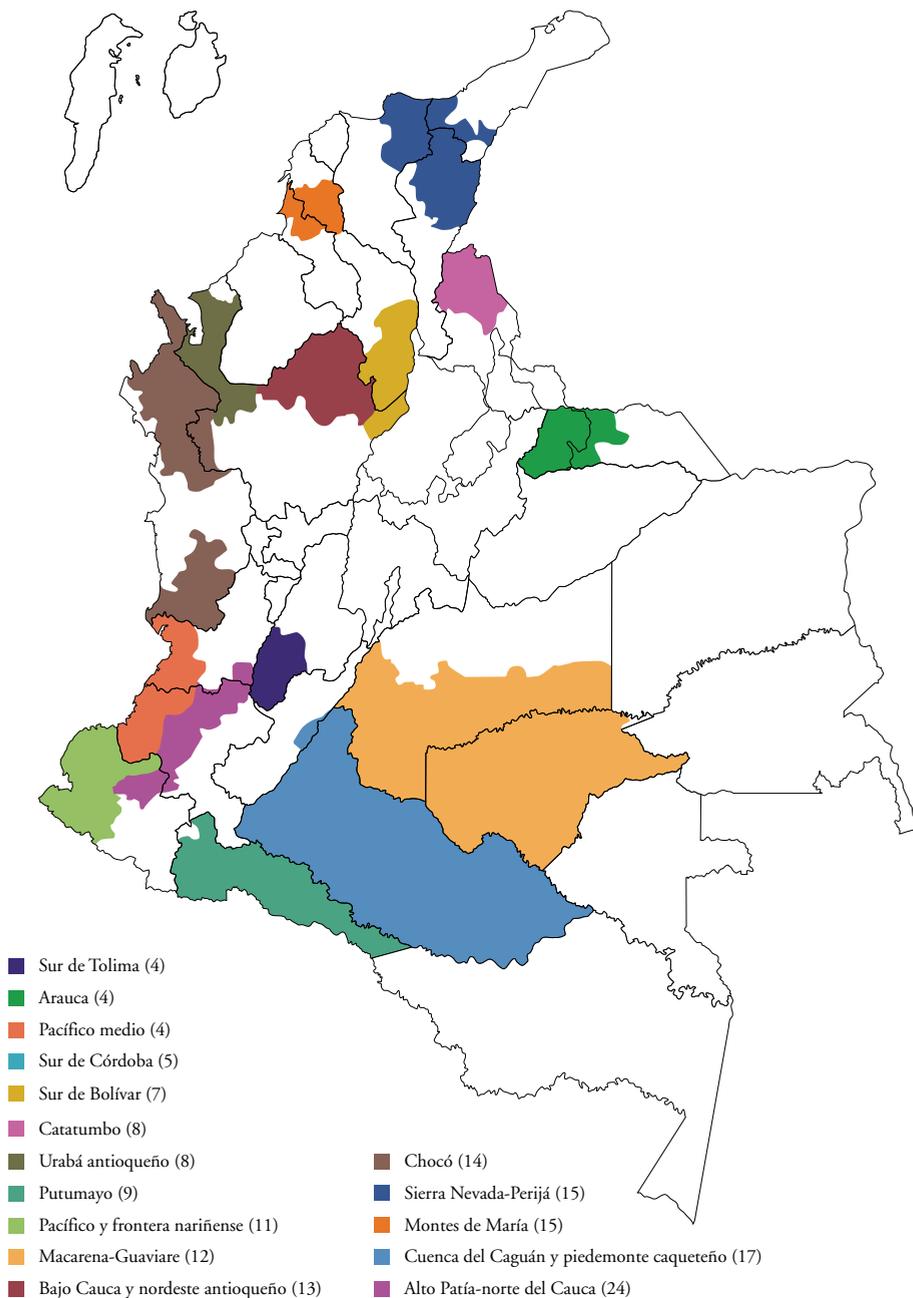


Figura 6.4. Subregiones PDET

Fuente: Valencia Agudelo y Restrepo Cano (2020).

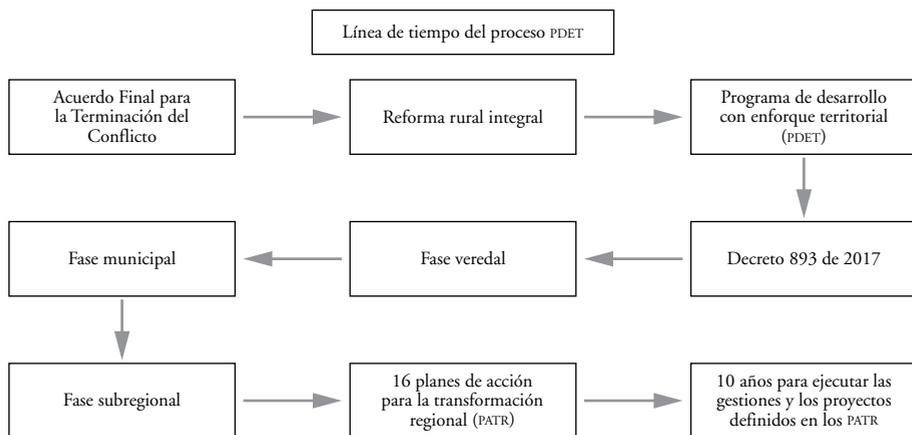


Figura 6.5. Línea de tiempo del proceso de los PDET

Fuente: Valencia Agudelo y Restrepo Cano (2020).

Resultados y discusión

Órdenes de guerra en Tumaco y San Vicente del Caguán

Basados en la discusión de la sección 3, hay razones para describir como regímenes híbridos a los municipios estudiados. Durante la hegemonía de las FARC, la gobernanza rebelde podría haberse desarrollado en Tumaco debido al predominio de esta organización. No obstante, Tumaco no cumplía otra condición para que el grupo armado tuviera una visión a largo plazo de la región. Según González, Castañeda y Barrera (2017), el único interés de las FARC era extraer el valor económico de los cultivos ilícitos; el poder militar no se traducía en legitimidad política. Por consiguiente, la base del control de las FARC era la coacción. Prueba de esto es que, bajo la hegemonía de las FARC, la violencia aumentó de manera significativa (Cinep, 2016b). A pesar de la ausencia de una rebelocracia, el gobierno comunitario es tradicional en Tumaco. Eso se deriva del trabajo de los pueblos afrodescendientes y de los consejos comunitarios. La movilización social es fuerte dentro de Tumaco, representada en la ocurrencia de 111 protestas desde 1975 (González, Castañeda y Barrera, 2017).

A diferencia de Tumaco, San Vicente del Caguán se encuentra en medio del orden rebelde y el gobierno comunitario. De acuerdo con el Centro

Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las organizaciones sociales han desempeñado un papel esencial en la historia del departamento, ya que “desde 1950, [las organizaciones locales] han promovido procesos organizativos para la construcción de escuelas, carreteras y puestos de salud en los enclaves de la colonización”.

Hay una cercanía entre las FARC y las organizaciones allí, debida a razones históricas (González, Castañeda y Barrera, 2017). Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), las FARC negociaron un proceso de paz, que dio lugar a un plan de desarrollo alternativo en el que, junto con las organizaciones locales, reivindicaron las demandas económicas y buscaron fomentar la colonización de la selva (CNMH, 2017). En el siguiente proceso de paz (1998-2002), las FARC reivindicaron a San Vicente del Caguán como zona desmilitarizada que promovía la gobernabilidad rebelde. En su informe sobre el territorio, el Centro Nacional para la Memoria Histórica (2017) cita a un campesino que destaca los beneficios que trajo el dominio de las FARC: “Aquí a nadie le faltó nada [...]. La población de San Vicente prácticamente se duplicó, aquí se construyeron carreteras, escuelas y centros de salud. En cambio, en ese momento, finalmente tuvimos desarrollo”.

La interacción entre la paz central y local

Los PDET pertenecen a un enfoque conocido como ‘paz territorial’. Teniendo en cuenta esta definición de paz, estos programas gubernamentales solo tendrán éxito si fomentan una participación genuina (Mitchell, 2012). En el presente texto se evaluará en qué medida esto ocurrió en las zonas estudiadas. La revisión de la literatura nos permite derivar algunas condiciones deseables para evaluar la interacción exitosa entre la construcción de la paz central y la paz y las organizaciones locales. El requisito primordial es la calidad de la participación de los agentes locales, así que la respuesta a las siguientes preguntas puede arrojar luz:

- ¿Influye la población local en la toma de decisiones que se derivan de las reuniones comunitarias?
- ¿Se reunieron todos los agentes?
- ¿Se tienen en cuenta las voces locales en las etapas posteriores del ejercicio de planificación, como en la supervisión y la ejecución?

Otro requisito previo considera la estabilidad y la seguridad de las regiones, la pertinencia del liderazgo comunitario para ello y cómo el número de muertos constituye un riesgo importante para la consolidación de la paz local y los órdenes híbridos:

- ¿Ha asegurado el gobierno el control territorial de los municipios en los que antes dominaban las FARC?
- ¿Brinda el gobierno central las condiciones necesarias para que las comunidades alcancen una resiliencia?

Calidad de participación comunitaria en los PDET

El concepto de municipio PDET

Los PDET se proponen hacer frente a la ausencia del Estado en determinadas regiones de Colombia, las cuales comparten cuatro características. Por un lado, su población se encuentra en la pobreza y carecen de servicios esenciales. Por otro lado, las regiones carecen de capacidad administrativa y presentan una alta exposición a la violencia (Orden 893 de 2017). Existe una lista de 170 municipios en 16 subregiones prioritarias para PDET.

Sin embargo, la noción de un municipio PDET tiene problemas. En primer lugar, supone una ontología liberal de la guerra civil, donde las regiones en conflicto son caóticas y no tienen una gobernanza adecuada (Kalyvas, 2000; Arjona, 2016). Como se demostró anteriormente en el documento, en algunas zonas de países en guerra civil, los civiles tienen agencia social y política, y un sentido del orden (Arjona, 2016). Dado que el punto de partida del programa es una ontología liberal de las regiones en conflicto, es muy probable que el resultado sea un conjunto de medidas de pura construcción del Estado sin consideración de la comunidad. Otra preocupación importante es que regiones que requieran procesos de paz dentro de sus territorios queden fuera del ámbito de atención. Los habitantes de Samaniego, un pueblo cercano a Tumaco, han impugnado que el municipio no esté incluido en la lista.³

³ Observación debida a Cécile Mouly de Flacso, Ecuador.

Una participación comunitaria limitada en los PDET

El Estado concibió los niveles de los PDET (veredal, municipal, regional) como mecanismos de deliberación participativa, en los que los agentes comunitarios locales, junto con los excombatientes y los gobiernos locales y centrales, podían decidir lo que requerían las zonas priorizadas. La participación tenía dos características positivas. Por una parte, el número de personas locales que asistieron a las reuniones fue considerable. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2018), al menos 220 000 personas asistieron a las reuniones veredales. El informe más reciente del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz (2020) comentaba que las cifras alcanzaban las 147 499 personas. En Tumaco se celebraron 81 reuniones con 8000 participantes (ARN, 2020b), mientras que en la subregión de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño participaron 13 000 personas en las reuniones (ARN, 2020a). En síntesis, las reuniones veredales convocaron a interesados cruciales. El proceso también fue virtuoso en su concepción. El segundo participante del estudio cualitativo advirtió a este respecto que la ventaja de los PDET es que la población anteriormente excluida adquirió una voz e intervino en el proceso en cierto sentido. La FIP (2018) convino en que iniciar la planificación en el campo de Colombia era ventajoso, puesto que podía reconocer las particularidades de cada territorio. Además, el equipo técnico que acompañó los ejercicios tiene un amplio conocimiento de los contextos de las zonas (FIP, 2018).

A pesar de la buena intención, el proceso carecía de los elementos para una participación de calidad. En primer lugar, los organismos oficiales dejaron fuera de la planificación a los actores clave. Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz (2020), la premura del proceso provocó que el mapeo de los interesados en las regiones fuera insuficiente. Así pues, el Instituto citó a indígenas y afrodescendientes que afirmaban que su participación era insuficiente.

Además, las comunidades desconocían cuál era el poder efectivo de las reuniones. Por ejemplo, uno de los entrevistados comentó que algunos de ellos creían que uno de los posibles resultados era la legalización de las propiedades rurales. Sin embargo, ella alegó que eso estaba fuera del alcance de las reuniones y que solo se podía alcanzar con un catastro multipropósito. En efecto, el tema de la formalización y fondo de tierras pertenece a la reforma rural integral, pero no corresponde al componente de los PDET.

Conforme con el “Primer informe multipartidista”, el éxito de este punto depende de crear un fondo de tierras, contar con un acompañamiento técnico en la asignación de tierras y realizar una formalización de tierras, centrándose en especial en los municipios PDET. El gobierno implementó parte de estas demandas en su plan de desarrollo. No obstante, según este mismo informe, solo el 8,7 % se está cumpliendo. La FIP (2018) describe algunas de las posibles razones de tal desconocimiento del poder real de las reuniones. De acuerdo con esta organización, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) refirió las trayectorias de los PDET y los PATR; sin embargo, su explicación carecía de los elementos esenciales que permitieran a las comunidades establecer esfuerzos concretos. Las organizaciones locales propusieron recomendaciones sobre cada territorio, pero sin ninguna información sobre cómo ejecutarlos (FIP, 2018). Adicionalmente, las actividades realizadas en las reuniones tenían por objeto divulgar la información del gobierno la mayor parte del tiempo; a veces, los habitantes locales ofrecían sus puntos de vista, pero no había pruebas de que ese entendimiento influyera en la formulación de políticas en los niveles superiores (FIP, 2018). Aunque los actores gubernamentales estuvieron presentes en las reuniones, una de las entrevistadas puso de relieve la falta de autoridad de estos empleados dentro del Estado.

La participación pura y las organizaciones de terceros como catalizadores de esta

Dos entrevistados mencionaron que, a pesar de la falta de calidad en la participación de los PDET, los movimientos de base tienen un papel más significativo en la paz en municipios como Tumaco. Los jóvenes de Tumaco son unos de los principales actores. Un ejemplo destacado es el teatro para la paz, que trata de promover los derechos humanos y la reconciliación entre los diferentes actores, en el que los jóvenes son la mayor población participante. Algunas de las obras tratan sobre líderes asesinados, mientras que otras se refieren a estructuras organizativas típicas de Tumaco. La mayor parte de la labor de este proyecto culmina con la Semana de la Paz, organizada junto con la Diócesis Católica de Tumaco. En este evento, esta organización rinde homenaje a la hermana Yolanda Cerón, asesinada en 2001 por grupos paramilitares, cuando era directora de la Pastoral Social.

De acuerdo con la primera entrevistada, parte de la motivación de los jóvenes deriva de la historia de violencia de Tumaco. Afirmó que los jóvenes quieren salir de la espiral de violencia que sufrieron sus padres. Este hecho es similar a la idea, defendida por Blattman (2009), de que las experiencias violentas pueden mejorar el compromiso político de los excombatientes.

Sin embargo, las experiencias violentas del pasado no bastaron para promover los ejemplos comentados de gobernanza comunitaria y paz en Tumaco. Por ejemplo, la primera entrevistada expresó que las organizaciones religiosas habían desempeñado un papel en la movilización de los jóvenes, como la Diócesis de Tumaco o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los comentarios reiteran las conclusiones de Idler, Mouly y Garrido (2018), quienes estudiaron el caso de Las Mercedes, una comunidad rural del oriente colombiano. Su análisis se refiere a un proceso que va desde una orden coercitiva impuesta por las FARC-EP hasta una adecuada gobernabilidad comunitaria, donde las organizaciones locales manejaron las necesidades básicas y se abstuvieron de colaborar con otros actores armados. Instituciones de terceros, como la Iglesia y la Misión de la OEA, potenciaron los procesos de base en Las Mercedes, y “ofrecieron apoyo moral y técnico para desarrollar la comunidad de acuerdo con las prioridades de la población local en lugar de las impuestas por la guerrilla” (Idler, Mouly y Garrido, 2018, p. 53).

Cuestiones de seguridad para el gobierno comunitario

Los entrevistados consideran que un obstáculo significativo para las iniciativas de paz locales son los nuevos actores armados en Tumaco y San Vicente del Caguán. Las explicaciones basadas en la microdinámica de la guerra aclaran cuál es la naturaleza de este desafío. Arjona (2016) y Ehrlich (2016) coinciden en que la condición para el gobierno comunitario o rebelde es la estabilidad, lo que suele ocurrir cuando un grupo tiene un interés a largo plazo en una zona. Como se ha descrito anteriormente, un ejemplo de ello fue San Vicente del Caguán, donde gracias a procesos históricos las FARC mantuvieron el control del territorio. En otras palabras, un grupo rebelde no puede tener esa visión a largo plazo cuando numerosos actores compiten entre sí (Cinep, 2019a). ¿Qué sucede cuando el grupo que ayuda a estabilizar la zona cede el control? A menos de que el Estado mantenga el poder que tenían las FARC, la predicción es que las facciones rebeldes menos

influyentes intensificarán una batalla por el dominio territorial (Salazar, Wolff y Camelo, 2019).

Los nuevos conflictos en Tumaco y San Vicente del Caguán

Desde el punto de vista del primer entrevistado, la escalada de violencia en Tumaco proviene de cuatro facciones rebeldes: el ELN, los grupos disidentes de las FARC, los nuevos grupos paramilitares y las bandas criminales. Dos tipos de episodios violentos constituyen impedimentos significativos para la implementación de órdenes locales que promuevan una paz sostenible. En primer lugar, el desplazamiento forzoso se produjo a un ritmo elevado durante 2019 en las aldeas de Carlosama, Playón, Pueblo Nuevo, Congal y Sagumbita; como resultado, esta población se desplazó hacia el centro urbano de Tumaco e incluso hacia el Ecuador. Además, el reclutamiento de niños representa el combustible de los nuevos grupos armados. Aunque los disidentes de otras bandas siguieron desempeñando un papel en el estallido del conflicto, el porcentaje de jóvenes que se incorporan a los grupos armados es considerable (Cinep, 2019a). Los nuevos grupos han abandonado la visión antiestatal de las FARC. Como consecuencia, tienen menor cohesión y disciplina. Se encuentran sujetos a un estado de competencia para captar el dominio de esta región estratégica (Cinep, 2019b, p. 23).

Según la segunda entrevistada, en San Vicente del Caguán existió una breve calma tras el Acuerdo de Paz, motivada por la esperanza de una posible transformación económica debida a la sustitución de los cultivos. Muy pronto, la paz se hizo añicos cuando nuevos actores comenzaron a luchar por el control territorial que las FARC perdieron con su desarme parcial.⁴ La razón de la lucha fue la producción de drogas. En efecto, los carteles mexicanos han ido ganando influencia en los territorios que rodean este municipio. Los actos violentos incluyen asesinatos de excombatientes, campesinos y líderes comunitarios (*Caracol Radio*, 2020). Además, ahora es común oír hablar

⁴ Esta observación no implica decir que el desarme no fue exitoso. En efecto, la Misión de Verificación de la ONU certificó este desarme. Adicionalmente, una gran parte de los guerrilleros de las FARC sigue haciendo parte del proceso de paz que inició en 2016. Así, por ejemplo, de acuerdo con cifras de finales de 2019, la ARN afirmó que el 99 % de las personas que realizaron el proceso de reintegración permanecen en la legalidad, dentro de las cuales hay un porcentaje significativo de exintegrantes de este grupo.

de acciones violentas que implican muertes, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños.

El Estado ha tratado de imponer el orden a través de más violencia y se ha convertido en un factor adicional que provoca destrucción, coincidiendo con Gutiérrez *et al.* (2020), quienes afirmaron que el gobierno es responsable de una parte significativa de la violencia emergente. Por ejemplo, en julio de 2020, en el río Guayabero, cerca de San Vicente del Caguán, la fuerza militar Omega de Colombia implementó acciones de erradicación forzosa; como resultado, hubo una disputa profundamente violenta entre los campesinos y los militares (*Pacifista*, 2020). Adicionalmente, es notorio que, por ejemplo, en Tumaco la estrategia de las nuevas bandas criminales es no enfrentar directamente al Estado, sin que eso implique que se haya disminuido el volumen de violencia (Cinep, 2019b, p. 16).

Número de muertes de líderes sociales

La literatura local sobre la consolidación de la paz ha demostrado que la virtud del liderazgo es su capacidad para fomentar la resiliencia de las comunidades (Arjona, 2015, 2016; Krause, 2020; Hernández Delgado, 2009). El resurgimiento de la violencia que se produce en San Vicente del Caguán y Tumaco hace que esta propiedad sea necesaria, ya que pone de relieve las medidas de autoprotección de la comunidad (Krause, 2020). Según Krause, en algunas zonas de conflicto, “los civiles tratan de escapar o resistir las dinámicas de la guerra” (2020, p. 50), acciones de protección colectiva que hacen frente a la violencia y mejoran las posibilidades de supervivencia. Las comunidades se resisten a un recrudecimiento de la violencia cuando los líderes son capaces de imponer un control social. Para esto, deben rechazar las narrativas polarizantes de los conflictos, evitar que los jóvenes se unan a los ejércitos rebeldes mediante la persuasión y gestionar informalmente los conflictos, además de negociar con los rebeldes y otros actores armados (Krause, 2020). En otras palabras, las funciones sociales de los líderes se ajustan a la naturaleza de los problemas esbozados anteriormente.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia del liderazgo para la gobernanza de la comunidad, el asesinato de líderes en San Vicente del Caguán y Tumaco supone un obstáculo importante para la consolidación de la paz a nivel local. El asesinato de líderes sociales que se produce en las zonas estudiadas no es una excepción. En efecto, el Comisionado Presidencial

de Derechos Humanos (2020) señaló que, hasta enero de 2020, se habían producido 366 muertes de líderes en 191 municipios de Colombia, es decir, el 17 % de la superficie total del país. El caso de Tumaco es alarmante, pues allí se produjeron 13 asesinatos entre 2016 y 2019, y es el que presenta el mayor número de asesinatos en Colombia. Los líderes en Tumaco pertenecen a dos grupos poblacionales, indígenas awás y grupos afro (Cinep, 2019b, p. 16).

El número de muertos de los líderes está relacionado con la implementación de los PDET y los programas complementarios de sustitución de cultivos ilícitos (IEPRI, 2018). De esta manera, en Tumaco, la principal causa de la violencia en contra de los líderes es su compromiso para sustituir cultivos ilícitos (Cinep, 2016b). A su vez, existe una alta correlación espacial entre las regiones con asesinatos de líderes y los municipios del PDET (IEPRI, 2018). En 2018, según el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), “las víctimas de las violaciones de los derechos humanos lideraron el establecimiento de políticas de reforma rural, la participación en la reforma política y la forma de abordar el problema de los cultivos ilícitos” (2018, p. 70). Posteriormente, en 2020, de 65 actos de violencia contra los líderes sociales, 32 se produjeron en territorios del PDET (Observatorio Político-Electoral de la Democracia, 2020). La tasa de asesinatos en 2017-2019 se incrementó en un 25 % en los municipios PDET (Congreso de la República de Colombia, 2019, p. 6). Gutiérrez *et al.* (2020) coinciden en la proximidad entre las zonas donde se producen los programas gubernamentales y los asesinatos (figura 6.6). El modelo de regresión que ejecutaron Gutiérrez *et al.* (2020) muestra que, si un líder de la restitución vive en un municipio del PDET, las posibilidades de ser asesinado aumentan en un 18,12 %, y en un 16,46 % cuando los autores excluyeron variables menos significativas. Para los casos de los líderes de sustitución, la probabilidad de su muerte creció en un 13,72 % cuando están en municipios del PDET y pertenecen a programas de gobierno. La conclusión que surge de estos datos, y que Gutiérrez *et al.* (2020) enfatizan, es que la muerte de los líderes no se deriva del narcotráfico, sino de los esfuerzos de paz.

Para terminar, el gobierno central ha tratado de que los PDET sean un instrumento en el que las iniciativas de paz locales pudieran resonar en niveles de poder más altos y promover una paz sostenible que surgiera localmente. No obstante, el grado de participación de estos programas fue insuficiente. A pesar de los resultados, las iniciativas locales dirigidas por las

comunidades y las organizaciones de terceros llegaron a un organismo más significativo. Se podría esperar que el gobierno respaldara estos programas de base, asegurando el control territorial de Tumaco y San Vicente del Caguán. Esta expectativa no se cumplió, porque los grupos armados que han surgido empiezan a disputar el poder de las zonas estudiadas. En esas condiciones, no es posible que surja el orden en medio de la guerra: las comunidades llevan una vida de incertidumbre, por lo que no puede mantenerse o surgir el liderazgo y la capacidad de resiliencia de las comunidades.

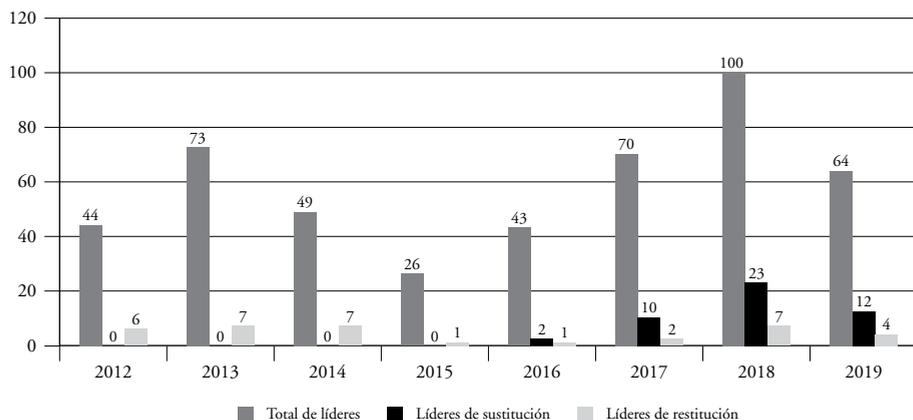


Figura 6.6. Evolución de asesinatos de líderes

Fuente: Gutiérrez *et al.* (2020, p. 10).

Conclusiones

Este trabajo ha tratado de estudiar el grado de interacción exitosa del Estado con las organizaciones y la construcción de la paz local a través de los PDET. Tradicionalmente, el concepto de construcción del Estado se refiere a las intervenciones de paz donde el gobierno central es el protagonista. Sin embargo, este escrito adoptó una noción híbrida de gobernanza de paz. Se mostró que las zonas de conflicto no son caóticas, sino que es posible el surgimiento de dos tipos de órdenes, la rebelocracia y la gobernanza comunitaria. Por lo tanto, el capítulo examinó la interacción del Estado con esas estructuras políticas locales a través de los programas de desarrollo rural con un enfoque territorial (PDET), una iniciativa que supuestamente abandona los postulados de la construcción de paz liberal.

Los PDET pertenecen a la primera parte del Acuerdo de Paz colombiano de 2016, “reforma rural integral”; como tal, tratan de llenar el vacío que dejó el Estado mediante la provisión de servicios esenciales y de seguridad. También son consecuencia de la noción de ‘paz territorial’. A pesar de sus buenas intenciones, el capítulo ha demostrado que la interacción entre el gobierno y las organizaciones en los PDET fue débil. En primer lugar, el concepto de municipio del PDET supone una ontología liberal de los territorios en conflicto; además, algunos pueblos como Samaniego lo impugnaron. En segundo lugar, los PDET no dieron espacio a una participación significativa, ya que los trabajadores gubernamentales no convocaron a todos los actores importantes de las regiones estudiadas, y las comunidades ignoraban el poder real de las reuniones. Adicionalmente, los habitantes no deliberaron sobre los resultados de las reuniones.

En conclusión, la interacción entre las estructuras gubernamentales y comunitarias a través de los PDET no tuvo una participación de buena calidad; por el contrario, otras iniciativas dirigidas por las organizaciones locales y las instituciones religiosas muestran una participación significativa. La consolidación de la paz a nivel local es prometedora, pero tiene barreras, derivadas de la falta de presencia del Estado. Sobre la base de Arjona (2016), se puede predecir que cuando un grupo armado estable renuncia al control territorial, otras organizaciones armadas inician una batalla por las zonas liberadas; como resultado, las condiciones necesarias para la gobernanza comunitaria ya no están presentes. La predicción resultó acertada en los casos de San Vicente del Caguán y Tumaco, donde las FARC perdieron el control del territorio y la búsqueda de este poder territorial por los grupos armados provocó un aumento de las muertes, el desplazamiento y el reclutamiento de niños. Una preocupación más grande es el número de muertes de los líderes, dado que inhibe la resiliencia de las organizaciones locales, que es una cualidad con la que resisten la guerra y mejoran sus posibilidades de supervivencia.

¿Cómo tratar los problemas del escenario de posconflicto colombiano? El Estado debe establecer las condiciones de seguridad en las que la gobernanza comunitaria pueda prosperar por sí misma. Sin embargo, hay un riesgo, representado en las nociones erróneas de seguridad e ilustrado en la historia de las zonas de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe. El centro de esta presidencia fue la seguridad democrática, definida por la ampliación

del gasto militar y el incremento de la presencia del Ejército colombiano alrededor de Colombia (Mitchell y Rojas, 2012). Las comunidades locales de paz que se abstuvieron de la guerra tuvieron que enfrentarse a niveles extremos de conflicto, pues el Estado quería retomar el control de las zonas en las que los grupos insurgentes dominaron hasta el inicio de ese gobierno, como Mogotes, Samaniego, Tarso y San José de Apartadó (Mitchell y Rojas, 2012). En algunos casos, Uribe incluso acusó a las comunidades de paz de apoyar a la guerrilla (Mitchell y Rojas, 2012).⁵

Por lo tanto, un enfoque apropiado de la seguridad va más allá de imponer la seguridad por medio de los militares, y es multidimensional. El apoyo a la transición económica de los medios de vida basados en cultivos ilícitos, como la hoja de coca, es un componente esencial. Según el Cinep (2019b), es necesario aprovechar que los grupos no han podido consolidarse para implementar campañas de estabilización que brinden a pobladores de los municipios estudiados “seguridad económica y política de calidad, acceso a la justicia y al conjunto de instituciones del Estado” (p. 24). El programa de sustitución de cultivos va en esta línea, y es una ilustración de lo que Chandler (2017) llama un enfoque resiliente a la seguridad, aunque una evaluación de este programa excede el alcance de este trabajo.

Referencias

- (1º de julio de 2019). Las FARC fueron una autoridad ambiental. *La Silla Vacía*. Recuperado de <https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/las-farc-fueron-autoridad-ambiental-71180>
- (julio de 2020). El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla. *Pacifista*. Recuperado de <https://pacifista.tv/notas/descontrol-militar-guayabero-estado-calla/>
- (10 de agosto de 2020). Disidencias de FARC contra población civil en Caquetá, Meta y Guaviare. *Caracol Radio*. Recuperado de https://caracol.com.co/radio/2020/08/10/regional/1597073074_163716.html
- Arjona, A. (2016). *Rebelocracy: social order in the Colombian civil war*. Nueva York: Cambridge University Press.

⁵ Una reflexión sobre la estrategia retórica de este gobierno para deslegitimar a las FARC, de lo cual esta identificación de los movimientos de base con las guerrillas es solo un ejemplo, se puede encontrar en López de la Roche (2014). Agradecemos al profesor John Jairo Uribe Sarmiento por esta observación.

- ARN. (2019). *Así avanza la reintegración*. Recuperado de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20en%20cifras%20corte%20abril%202019.pdf>
- ARN. (2020a). *Con el PDET se abre el camino del desarrollo en la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño*. Recuperado de https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/con_el_pdet_se_abre_el_camino_del_desarrollo_en_la_cuenca_del_cagun_y_piedemonte_caqueteo
- ARN. (2020b). *En Tumaco, líderes del Grupo Motor definen prioridades para su territorio*. Recuperado de https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/en_tumaco_lderes_del_grupo_motor_definen_prioridades_para_su_territorio
- Blattman, C. (2009). From violence to voting: war and political participation in Uganda. *SSRN Electronic Journal*. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.1100110>
- Bøås, M., & Jennings, K. M. (2005). Insecurity and development: the rhetoric of the ‘failed State’. *The European Journal of Development Research*, 17(3), 385-395. DOI: <https://doi.org/10.1080/09578810500209148>
- Boege, V., Brown, M. A., & Clements, K. P. (2009). Hybrid political orders, not fragile States. *Peace Review*, 21(1), 13-21. DOI: <https://doi.org/10.1080/10402650802689997>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4^a ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Cairo, H., Oslender, U., Piazzini Suárez, C. E., Ríos, J., Koopman, S., ..., & Zambrano Quintero, L. (2018). “Territorial peace”: the emergence of a concept in Colombia’s peace negotiations. *Geopolitics*, 23(2), 464-488. DOI: <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1425110>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2017). *La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá*. CNMH.
- Chandler, D. (2017). *Peacebuilding: the twenty years’ crisis*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Chu, V., & Luke, B. (2020). A participatory approach: shifting accountability in microenterprise development. *Financial Accountability & Management*. DOI: <https://doi.org/10.1111/faam.12252>
- Cinep. (2019a). *Transformaciones del conflicto armado y conflictividades sociales en Tumaco*. Bogotá: Cinep.
- Cinep. (2019b). *Tumaco: entre la ausencia del gobierno y la encrucijada del posacuerdo*. Recuperado de <https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/753-tumaco-entre-la-ausencia-del-gobierno-y-la-encrucijada-del-posacuerdo.html>

- Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, 56(4), 563-595. DOI: <https://doi.org/10.1093/oep/gpf064>
- Colombia, Congreso de la República. (2019). *¿En qué va la paz? Las cifras de la implementación*. Recuperado de <https://www.juanitaenelcongreso.com/post/la-paz-en-emergencia>
- Cooper, N., Turner, M., & Pugh, M. (2011). The end of history and the last liberal peacebuilder: a reply to Roland Paris. *Review of International Studies*, 37(4), 1995-2007. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210511000143>
- Foucault, M. (1980). *Power knowledge*. Harlow: Longman.
- Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2019). *Obras por impuestos: medida para transformar las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia*. Bogotá: FIP.
- Galtung, J., & Fischer, D. (2013). Positive and negative peace. In *Johan Galtung* (pp. 173-178). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9_17
- García Reyes, P., Gutiérrez, A., & Irreño Quijano, Y. (2018). *La renovación del territorio: los planes de desarrollo con enfoque territorial y la planeación local*. Barranquilla: Universidad del Norte.
- García Villegas, M., Torres Echeverry, N., Eduardo, J., Rafael, J., & Duarte Mayorga, N. (2016). *Los territorios de la paz: la construcción del Estado local en Colombia*. Bogotá: Dejusticia.
- González, F. E., Castañeda, D., & Barrera R., V. A. (2017). *Potencialidades para la paz de las organizaciones sociales y comunitarias en tres municipios afectados por el conflicto armado*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz (Cinep/PPP).
- Gutiérrez, F., Marín, M., Machuca, D., Parada, M., & Rojas, H. (2020). Paz sin garantías: el asesinato de líderes de restitución y sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia. *Estudios Socio-Jurídicos*, 22(2). DOI: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9144>
- Hernández Delgado, E. (2009). Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. *Revista Paz y Conflictos*, 2(1).
- Idler, A., Garrido, M. B., & Mouly, C. (2015). Peace territories in Colombia: comparing civil resistance in two war-torn communities. *Journal of Peacebuilding & Development*, 10(3), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.1080/15423166.2015.1082437>
- Kalyvas, S. N. (2000). *The logic of violence in civil war*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Kalyvas, S. N. (2003). The ontology of “political violence”: action and identity in civil wars. *Perspectives on Politics*, 1(03), 475-494. DOI: <https://doi.org/10.1017/s1537592703000355>
- Krause, J. (2020). *Resilient communities: non-violence and civilian agency in communal war*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kroc Institute for International Peace Studies. (2020). *Estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, 2 años de implementación*. Notre Dame: University of Notre Dame.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: sustainable reconciliation in divided societies*. Washington: United States Institute of Peace Press.
- López de la Roche, F. (2014). *Las ficciones del poder: patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010)*. Bogotá, D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
- Mac Ginty, R. (2016). *International peacebuilding and local resistance: hybrid forms of peace*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: a critical agenda for peace. *Third World Quarterly*, 34(5), 763-783. DOI: <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.800750>
- Macee, R., & Norton, A. (2000). *Participation in poverty reduction strategies: a synthesis of experience with participatory approaches to policy design, implementation and monitoring*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Mitchell, C. (2012). Introduction: Linking national-level peacemaking with grassroots peacebuilding. In C. Mitchell & L. Handcock (Eds.), *Local peacebuilding and national peace: interaction between grassroots and elite processes* (pp. 1-18). Londres: Bloomsbury Academic & Professional.
- Mitchell, C., & Rojas, C. (2012). Against the stream: Colombian zones of peace under democratic security. In C. Mitchell & L. Hancock (Eds.), *Local peacebuilding and national peace: interaction between grassroots and elite processes*. Londres: Bloomsbury Academic & Professional.
- Political Electoral Observatory of Democracy. (2020). *Informe sobre violencia política*.
- Ramsbotham, A., & Wennmann, A. (2014). Legitimacy and peace processes. From coercion to consent. *Accord*, (25).
- Richmond, O. P., & Mitchell, A. (2011). Peacebuilding and critical forms of agency. *Alternatives: Global, Local, Political*, 36(4), 326-344. DOI: <https://doi.org/10.1177/0304375411432099>

- Salazar, L. G. S., Wolff, J., & Camelo, F. E. (2019). Towards violent peace? Territorial dynamics of violence in Tumaco (Colombia) before and after the demobilisation of the FARC-EP. *Conflict, Security & Development*, 19(5), 497-520. DOI: <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1661594>
- Serge, M. (2011). *El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Valencia Agudelo, G. D., & Restrepo Cano, D. (2020). Democracia participativa y planeación del desarrollo en los programas de desarrollo con enfoque territorial. *Campos en Ciencias Sociales*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.15332/25006681/5260>
- Vásquez, T. (2014). Papel del conflicto armado en la construcción y diferenciación territorial de la región de “El Caguán”, Amazonía occidental colombiana. *Agora USB*, 14(1), 147. DOI: <https://doi.org/10.21500/16578031.2599>
- Warfield, W., & Jennings, Y.-R. (2012). A ZoPs approach to conflict prevention. En C. Mitchell & L. Hancock (Eds.), *Local peacebuilding and national peace: interaction between grassroots and elite processes*. Londres: Bloomsbury Academic & Professional.

Tercera parte

VOCES, ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DESDE ABAJO

Las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los campesinos, los cimarrones no solo tienen una visión propia de la paz, sino que han enfrentado las condiciones de exclusión, y con ello han lidiado con los poderes que mantienen los privilegios en las regiones. Esas acciones tienen distintos alcances que van desde los ámbitos domésticos hasta la provisión de seguridad comunitaria en escenarios disputados por grupos bélicos y narcotraficantes, acciones que incluyen la creación de espacios de participación política, la construcción de nuevos referentes identitarios y la creación de prácticas ambientales en clave de paz.

Los siguientes capítulos colocan en perspectiva estas actividades y voces, evidencian sus posibilidades, analizan sus retos y límites, pero, sobre todo, permiten imaginar otras maneras de abordar la historia del país. En efecto, así como las violencias proyectan sus sombras en la paz, las resistencias han sido capaces de moderar algunos escenarios de guerra. Estas merecen ser escuchadas, valoradas, aprovechadas como un patrimonio colectivo útil para el futuro. Nuestra visión de lo que podemos ser se enriquece con estas voces y experiencias.

Capítulo 7

“Paz es que a las mujeres se nos reconozca todo, que podamos decir: ¡Somos libres!”

Una apuesta hacia la construcción de una tejeduría de paces justas al género. Caso Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz en el sur del Tolima

Nohora Isabel Barros Navarro, Cristina Sala Valdés,
Martha Ibeth Cardona Bonilla, María Ximena Figueroa Olaya

*A las manos que nos dieron fuerzas,
motivación, sororidad y sueños.*

A las manos y al rostro de

DAGMAR LUCÍA HERNÁNDEZ PEÑA

Introducción

En el proyecto “Escuela, territorio y posconflicto. Construyendo cultura de paz en el sur del Tolima”, desde la línea comunitaria se propuso construir en colectivo conocimientos sobre: ¿cómo las organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, caficultoras, y de jóvenes han construido paz en medio del conflicto? Esto ha significado una apuesta para el desarrollo de diálogos de saberes en distintos niveles, que han sido la base para la comprensión y reinterpretación de las resistencias locales, y su construcción de paz en medio del conflicto; que han inspirado a las organizaciones que participamos en él a desarrollar/adaptar las herramientas y metodologías de investigación.

Cada organización fue diseñando sobre la marcha sus propias estrategias de recolección para abordar las preguntas, propuestas y temas con los que

iniciaron su proceso de investigación comunitaria, las cuales permitieron pensar el territorio desde un pluriverso de paces, que reafirma las agencias que lo constituyen desde el enraizamiento a una red de emociones, conocimientos y saberes. Dentro de este pluriverso las mujeres hemos posicionado una visión de paz “con manos y rostro de mujer”. Aunque este sea un camino y una lucha emprendida especialmente por la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, recoge a las múltiples organizaciones de mujeres que hacen parte de la red, como también a dos asociaciones de mujeres con quienes compartimos durante esta investigación.

Para empezar, es importante mencionar y describir las organizaciones de mujeres que hicimos parte de este proceso de investigación:

- *Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz*: está conformada por mujeres indígenas, afros, campesinas, adolescentes y adultas, que desde finales de los años noventa trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres; representamos a 25 organizaciones de seis municipios del sur del Tolima, ubicadas en sectores agropecuarios, asociaciones de mujeres pertenecientes a cabildos indígenas y afros, y microempresarias.
- *Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht)*: reúne a un grupo de quince mujeres tejedoras del corregimiento de Herrera, Rioblanco, quienes además de tejer se dedican a la preservación y a compartir saberes medicinales ancestrales, tradiciones y gastronomía que cada una conserva de sus familias.
- *Asociación de Productoras Veredas Organizadas de Calarma (Aprovocal)*: en sus inicios, a finales de los años ochenta, se asociaron como amas de casa en pro de conseguir una vivienda digna, años después dieron un giro y se constituyeron como una organización de mujeres dedicadas al cultivo, transformación y comercialización de cafés especiales, como ellas mencionan: “Pasamos de las cocinas a las dueñas de la producción del café”.

Estas experiencias y procesos se conectan desde el reconocimiento de las distintas tensiones que cada una de las mujeres hemos vivido, especialmente a través de nuestro cuerpo-territorio. Dichas tensiones hablan sobre experiencias comunes de las mujeres rurales en el sur del Tolima. A partir de

estas vivencias es que se activa un proyecto político colectivo, que requiere de la unión y del permanecer juntas. Por lo tanto, la construcción de paz está directamente relacionada con el objetivo de transformar el pensamiento de las mujeres y las familias rurales: que la mujer no debe dedicarse exclusivamente al ámbito de lo doméstico (como nos han enseñado), sino que debe hacer parte del mundo social, participar, gestionar lo político y lo productivo. Es un camino hacia el empoderamiento que nos permite transformar la identidad, reconocer las diversas formas de ser mujeres en el territorio y desde las cuales es posible construirlo y ejercer ciudadanía, como veremos más adelante.

Es este conocimiento empíricamente construido el que se convierte en una experiencia, extraordinaria e innovadora, no solamente por el cómo, sino por quiénes y desde dónde: mujeres campesinas y diversas que tensionan las relaciones dominantes (masculinas, de clase, de etnia).

Ahora bien, las mujeres se integran al campo de lo político a partir de condiciones jerarquizadas que atraviesan todas las esferas sociales que transitan, es por ello que sus acciones colectivas buscan romper las barreras que impiden su aparición, al tiempo que provocan una reorganización de este. También, es importante incluir otras enunciaciones dentro de este movimiento social, esto es, reconocer la diversidad de identidades y opresiones que viven las mujeres en razón de su etnia, nacionalidad, clase y sexualidad. Cuestionando así quiénes, desde dónde y cómo se desarrollan las políticas de representación e inclusión de las mujeres de cara a una agenda liberal de construcción de paz.

Aunque existe una asociación simbólica particular entre las mujeres y la paz, que no hace eco de los procesos y los agenciamientos que las mujeres han sostenido en defensa de la paz, lo cual, según Magallón (2006), se basa, por un lado, en la exclusión histórica de las mujeres en la toma de decisiones acerca de la guerra, la diplomacia y las relaciones internacionales; y, por otro, en la idea de que la maternidad hace a las mujeres más pacíficas que los hombres. Evidentemente, esta unión esencialista fue acompañada de la exclusión de las mujeres y de la paz en el ámbito de la política. El movimiento social de mujeres por la paz sigue generando agencias para posicionar caminos y dispositivos de reivindicación, de reafirmación del derecho a la participación y de autorrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones.

Son estas acciones, tensiones, reorganizaciones y apuestas, que encarnan el activismo social y político de las asociaciones de mujeres en el sur del Tolima, las que han cimentado significados y discursos que le dan sentido a nuestra visión territorial de paz con manos y rostro de mujer. Cuya interpretación y reapropiación emerge del proceso de investigación que realizamos.

Por estas razones, el propósito de este texto es reflexionar sobre las paces justas al género desde una perspectiva territorial, para así enunciar, posicionar y reivindicar la visión de paz con manos y rostro de mujer que tenemos las mujeres en el sur del Tolima.

Es importante mencionar que este texto y este proceso de investigación se nutre de manera especial de la(s) epistemología(s) del punto de vista feminista desde un enfoque decolonial, que en el contexto de lo que se ha denominado “crisis de la modernidad” han cuestionado el principio de objetividad científica y masculina como sinónimo de neutralidad. Comprendiendo que no hay maneras en las que los conocimientos se reflejen de forma neutra en la realidad, siempre hay una carga de valores y relaciones históricas de poder. Reemplazando así los mecanismos, instrumentos y metodologías que la modernidad dibujó para construir dicha cientificidad, incorporando nuevas epistemes y formas de conocer, como también las subjetividades y cargas culturales de aquellos(as) que investigan y de aquellos(as) sobre/con quienes se investiga, reivindicando las experiencias cotidianas y los cuerpos de las mujeres como una fuente vital e importante para producir conocimiento. En consecuencia, estas páginas están escritas en la primera persona del plural, *nosotras*, para así poner de manifiesto que lo que se expone en este texto emana de un encuentro de saberes, equilibrio de poderes, identidades diversas y conversaciones entre las organizaciones de mujeres coinvestigadoras con las investigadoras de la línea comunitaria del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

En este sentido, este texto está dividido de la siguiente forma: en la primera parte, se presentan las críticas que los feminismos decoloniales y poscoloniales han realizado sobre el proyecto de paz liberal, y sobre las teorías hegemónicas de paz y violencia. En la segunda, la descripción metodológica del proceso de investigación que efectuamos con la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. En la tercera, exponemos cómo las mujeres del sur del Tolima definimos y construimos paz territorial. Finalmente, cerramos con un apartado de conclusiones.

Visiones feministas de paz: críticas a la paz liberal desde los feminismos decoloniales y poscoloniales

En la literatura internacional se ha criticado fuertemente el proyecto de paz liberal, pero se ha dicho muy poco desde el enfoque de género (Hudson, 2012). La paz feminista liberal opera desde una razón colonial que ha desempoderado y excluido a las mujeres y a muchas poblaciones en conflicto, porque difumina en la idea de igualdad de género las relaciones de poder que construyen las identidades. Las teorías feministas decoloniales y poscoloniales son una herramienta para entender qué categorías centrales del feminismo, género, mujeres, cooperación internacional para el desarrollo, intervención social, grupos minoritarios, etc., se relacionan con el pensamiento moderno/colonial que ha permeado nuestras subjetividades, las teorías académicas, las metodologías de investigación, los activismos y las acciones políticas, reproduciendo en el feminismo y en la intervención social a ‘favor de las mujeres’ lógicas racistas y neocoloniales, que refuerzan y profundizan las violencias.

Sobre los feminismos decoloniales/poscoloniales

Los feminismos decoloniales develan y problematizan las formas en las que el feminismo occidental ha construido discursivamente a “la mujer del tercer mundo” (Mohanty, 2008) como sujetas homogéneas, débiles y despolitizadas, que necesitan ser salvadas o rescatadas, invisibilizando todos sus caminos de luchas, saberes y conocimientos, reproduciendo así la matriz modernidad/colonialidad. Yurkedys Espinosa (2010, 2019) llama a esto “la colonialidad de la razón feminista”, una razón feminista eurocéntrica, determinista y objetivista que pasa desapercibida, pero que prescribe la política feminista en América Latina.

Sobre esta matriz colonial interna se han establecido las políticas de desarrollo y de construcción de paz en América Latina, Asia y África; ejemplo de ello ha sido la institucionalización del movimiento feminista propiciada por la cooperación internacional que ha instrumentalizado las acciones y apuestas por comprender el género desde la interseccionalidad (Curiel, 2020; Paredes, 2015). Estas políticas iniciaron durante la expansión del neoliberalismo a finales de los sesenta, las mujeres de clases media y alta se beneficiaron —y continúan haciéndolo— del trabajo manual y

reproductivo de las mujeres racializadas. En otras palabras, se ha producido un feminismo institucional que actúa en complicidad con el Estado neoliberal y se convierte en la voz dominante, que, como veremos más adelante, se refleja en los mecanismos de incorporación de las mujeres en las agendas de construcción de paz.

Para tener una visión general sobre los principios de estos feminismos, es importante mencionar cómo las teóricas feministas decoloniales han problematizado el concepto de patriarcado. Por un lado, Martha Lugones (2014) propone el término de “sistema moderno/colonial de género”, en oposición al sistema sexo/género propuesto por Gayle Rubin,¹ para denunciar y explicar que el género como estructura de organización social es producto de la colonialidad del poder, el saber y el ser, pues existe evidencia histórica de que antes de la Colonia habían sociedades que no estaban jerarquizadas en razón del género.

Otra perspectiva es la de Julieta Paredes (2014, 2015), quien sostiene que el patriarcado no nace a partir del sistema colonial-moderno, dado que antes de la colonización en sus comunidades (aymaras) existían relaciones de dominación patriarcales. De lo que se desprende una distinción entre el patriarcado precolonial y el patriarcado colonial-neoliberal, lo que ha llamado “el entronque patriarcal”, cuya salida se encuentra en la recuperación del género como denuncia, ya que las feministas liberales (blancas y de clase media) lo han utilizado a partir de una idea de igualdad y equidad sin profundizar en las causas de la desigualdad, quitándole el carácter contracultural desde donde fue conceptualizado en los sesenta-setenta, y lo tomaron para impulsar e imponer políticas públicas neoliberales. Así, se convirtió en un concepto superficial y descriptivo de roles, que por las estructuras desde las cuales se reproduce no llegará a transformar la matriz que les da continuum y sostén a las desigualdades.

Las teorías feministas decoloniales y poscoloniales nos permiten reconocer en unas geografías de poder norte-sur (Gayatri, 2008) que desmontan y rechazan los marcos interpretativos de una razón feminista colonial.

¹ Para Gayle Rubin (1996), un sistema sexo/género son los acuerdos que construye una sociedad para transformar la sexualidad biológica en un conjunto de normas y productos de la acción humana, y a partir de estas transformaciones sexuales, se satisfacen las necesidades humanas. Desde el concepto de ideología althusseriano, sostiene que el género como categoría se construye desde la dominación de los hombres hacia las mujeres.

Descolonizar el feminismo y el género implica dejar de producir conocimiento a partir de la relación hombre-mujer, para hacerlo desde una visión amplia de comunidad (Paredes, 2015), convocando así a la construcción de un conocimiento para la circulación y defensa de la vida (Ulloa, 2018).

Estas agencias movilizadoras de las demandas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, que confrontan las visiones de género externas, las relaciones occidentales, el colonialismo interno, los efectos de la violencia armada, los extractivismos, el despojo y apropiación de los territorios, se han denominado de diversas formas: feminismos autónomos, comunitarios, territoriales, decoloniales o desde Abya Yala (Ulloa, 2018).

De modo que estos feminismos no nacen en la academia, nacen de las opresiones y emancipaciones de las mujeres, es decir, de la experiencia cotidiana, creando así un movimiento social desde Abya Yala que politiza una propuesta epistémica que: 1) reconceptualiza el patriarcado, como vimos en páginas anteriores; 2) rechaza los principios dualistas que construyó la modernidad, que han justificado la invasión a la tierra y cuerpos de las mujeres; 3) posiciona sus cuerpos-territorios como un lugar de enunciación; 4) le apuesta al ideario de construcción de nuevas identidades no binarias, que puedan romper con el pensamiento patriarcal de dominación; 5) de lo anterior, se desprende una apuesta por reimaginar y retomar el rumbo de la cosmovisión del buen vivir, la comunidad y autonomía, desde el pensamiento de reciprocidad, pero también desde la denuncia del género; 6) construye redes de acuerpamiento y lucha con otras mujeres en Latinoamérica y el Caribe; 7) le da apertura a las múltiples enunciaciones, materialidades, epistemologías y ontologías existentes para construir el mundo social (Cabnal, 2017; Ulloa, 2016; Paredes, 2014; Curiel, 2020).

Paz liberal, paz patriarcal: críticas feministas a la paz y gobernanza liberal

Los dispositivos y tecnologías de gobierno que provienen del sistema moderno/colonial de género siguen operando en maquinarias liberales y neoliberales que han elaborado una agenda global de construcción de paz que, si bien se ha preocupado por la incorporación de las mujeres en los procesos de paz, lo ha hecho desde una visión feminista liberal. Es por ello que estos feminismos encarnan grandes críticas a las teorías de paz y

violencia convencionales, y a su vez elucidan alternativas de paces justas al género (que desarrollaremos en el siguiente capítulo).

Heidi Hudson (2012) sostiene que el andamiaje de paz liberal desde donde se despliegan políticas globales de pacificación es violento en sí mismo. El metaconsenso tácito sobre la interdependencia neoliberal, que posiciona los valores de democracia representativa y de libre mercado para abordar y superar las desigualdades económicas y apoyar el bienestar económico, resulta incompatible con los intereses locales y con las realidades de la mayoría de las mujeres (que en estos países habitan en los sectores de economía informal), lo que se traduce en la exacerbación de la feminización de la pobreza y los desequilibrios de poder basados en el género. Por esto, es necesario estudiar las ‘consecuencias no deseadas’ de las intervenciones que han realizado organizaciones internacionales como la ONU y la OTAN en pro de los derechos humanos, que en su justificación han utilizado un lenguaje feminista o de los pueblos oprimidos (aunque en segundo plano) que ha profundizado los valores patriarcales y las violencias preexistentes.

El proyecto de paz liberal es un proyecto de construcción de Estado, que también construye y hace género, porque se encuentra enmarcado en un discurso y en unas políticas liberales de paz (Hudson, 2012). Por lo tanto, para teorizar la paz, es necesario comprender en detalle las estructuras patriarcales, y cómo la construcción del género, especialmente de la masculinidad, interactúa con el capitalismo, colonialismo y militarismo (Björkdahl y Selimovic, 2016).

¿Cómo los feminismos sur-sur piensan la violencia y la paz?

Catia Confortini (2006) comprende que Galtung formuló una teoría sobre la violencia, basada en el reconocimiento de que la violencia directa y personal (desde las peleas de bares hasta las guerras internacionales) es solo una de las tres formas que asume la violencia. Las otras dos categorías, violencia estructural o indirecta, y violencia cultural, están presentes en la sociedad de forma sutil, pero no menos dañina. Además, concibe la paz en un binario positivo/negativo, negativa (ausencia de violencia directa) y positiva (presencia de justicia social), solo la eliminación de todo tipo de violencias puede conducir a la paz. Pero en este análisis el género es solo una variable más, lo que impide la posibilidad de hacer una comprensión profunda de cuáles son los aspectos de la violencia estructural y directa que se extienden

durante la guerra y la paz, que no pueden hacerse visibles dentro de la noción de paz negativa, es decir, no lee el patriarcado como un sistema de violencia estructural, que puede manifestarse en violencia directa.

Como se puede ver, hay una relación entre las críticas que se le hacen a Galtung con las críticas que los feminismos decoloniales y poscoloniales les han hecho a las visiones feministas de paz liberal (Björkdahl y Selimovic, 2016; Hudson, 2012; Moola, 2006) sobre el desconocimiento de las relaciones de poder que están en el fondo de los conflictos, las violencias y las asimetrías sociales. Por consiguiente, dice Confortini (2006), la violencia se lee como una estructura o sistema, de esta forma parece que fuese una situación estática y una entidad monolítica; de manera que si se entiende como un proceso es posible comprender las complejidades y las tensiones que presenta la violencia como práctica social, así es factible vislumbrar posibilidades de cambio duraderas y no coyunturales. Entonces, se hace necesario comprender cómo la violencia se origina y opera en todos los niveles, cómo y por qué se usa la violencia como método de resolución de conflictos, y cuál es su relación con las normas culturales que establece el sistema patriarcal.

Los feminismos liberales al no profundizar en la relación entre género/ poder y su vínculo con la elaboración de las identidades a la hora de pensar la construcción de paz no ven el género como un resultado de la producción de prácticas de seguridad, asociadas a prácticas patriarcales por fuera de la guerra (Hudson, 2012). Lo mismo ocurre con Galtung (Confortini, 2006), quien quizá sin la menor intención construye un enlace biosocial entre sexo y violencia —con el que se justifican las bases para una polarización—, que, en su reflexión, está en los orígenes de la violencia en sí misma, que incluso podría constituir violencia estructural; ejemplo de ello es cuando asocia a los hombres con una predisposición a la violencia, pues está apoyando el tipo de pensamiento que la perpetúa en la sociedad.

Sin embargo, la construcción de sujetos-víctimas que varios críticos de la paz liberal han cuestionado (Moffett, 2016; Firchow, 2017; Lekha, 2007; Nagy, 2008) pasa por una compleja negociación local en la que se combinan elementos de las definiciones dominantes (de las víctimas como sujetos pasivos) con la gestión de sus necesidades inmediatas y aspiraciones culturales, sociales y políticas, como ser reconocidas como sujetos políticos, supervivientes, resistentes, que es uno de los ejes discursivos de la paz

liberal. Ejcs, menciona Hudson (2012), que se utilizan para ejercer una manipulación de los imperativos morales que justifican las intervenciones de la política de responsabilidad de protección —R2P—. ² Un ejemplo de ello es Afganistán: luego de la caída del régimen talibán se aprobó la cuota del 28 % de participación de las mujeres en la cámara baja; a pesar de que en las primeras elecciones fueron nombradas 69 mujeres (una más de la cuota), las mujeres denunciaron intimidaciones que impidieron la realización activa de su ejercicio político. Entonces, la representación pública de las mujeres se convierte en un arma de doble filo: ofrece visibilidad, pero con un potencial limitado de transformación, porque invisibiliza otras formas de discriminación y desigualdades basadas en género.

Por otro lado, “el pensamiento maternal” planteado por Sara Ruddik fue una propuesta epistemológica que veía en los conocimientos diversos de las mujeres para la práctica del maternaje una apuesta política que podría construir un mundo pacífico. En función del movimiento de mujeres por la paz, se planteó como un modo, una reivindicación coherente que clamaba por colocar el cuidado de la vida como centro de la política internacional (Magallón, 2006). Sin embargo, esta apelación a la superioridad moral de las mujeres no fue suficiente para frenar la violencia y el auge de los conflictos armados, sino que se tradujo en una atribución de roles especiales de las mujeres en relación con la paz —enmarcada en los estereotipos de género— que refuerza la idea de mujer pacífica/hombre violento, naturalizando y reforzando las identidades masculinas propensas a la violencia, y las identidades femeninas responsables del cuidado (Björkdahl y Selimovic, 2016; Hudson, 2012; Confortini, 2006; Paarlberg-Kvam, 2019).

Esto apunta a la comprensión de que la guerra es algo más que las confrontaciones entre actores armados, es también la socialización de personas en un sistema que ha militarizado la vida social y ha creado herramientas neoliberales para sostener dichos poderes. Es necesario no perder de vista lo que Pankhurst, citado por Paarlberg-Kvam (2019), llama “el pensamiento descuidado del conflicto y la paz”, el cual incluye una visión esencialista/

² La responsabilidad de proteger (R2P o RtoP) es un compromiso político global apoyado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005 para prevenir grandes violaciones al DIH, genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad.

naturalista de las mujeres en la paz, que se convierte en peligrosa porque refuerza la masculinización de la guerra. Esto quiere decir que la incorporación de las mujeres desde dichos roles esencialistas no se traduce en la incorporación de una agenda y unas necesidades específicas de las mujeres.

Aunque existen marcos normativos incorporados por la ONU desde una perspectiva de género como el de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS, por su sigla en inglés); la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSCR, por su sigla en inglés) 1325 y UNSCR 1820, que reconocen los impactos diferenciados de los conflictos armados en hombres y mujeres, no desafían las desigualdades estructurales por dos motivos: primero, representan a las mujeres como constructoras de paz desde una visión esencialista, lo que es refutado por sus formas diferenciales de participación directa o indirecta en los conflictos; segundo, los rasgos masculinos de honor y valentía siguen siendo valorizados, no solo en el aparato militar, también en espacios más amplios dentro de las sociedades. Esto produce una situación ambivalente, las instituciones militares hacen una apertura para la participación de las mujeres sin un enfoque de género que cuestione cómo y desde dónde se erigen las masculinidades y feminidades en la construcción de paz (Rocha, 2013). Estas herramientas y resoluciones no están diseñadas para abordar o cuestionar el sistema patriarcal y la hipermasculinidad, lo que termina alimentando la economía política de la guerra (Hudson, 2012).

Ello arroja evidencia empírica de la cooptación del lenguaje feminista y de la despolitización de su agencia por los mecanismos del derecho internacional para cambiar y controlar la situación de las mujeres, ya que, por un lado, visibilizaron las estrategias de *lobby* y cabildeo que hizo el movimiento internacional de mujeres por la paz (Magallón, 2006), pero, por otro, incorporaron a las mujeres en los aparatos militares y en las misiones de paz como ‘figuras’ o ‘modelos’ para garantizar seguridad y prevenir la conducta agresiva masculina, y reducir la violencia sexual en las intervenciones, sin tener en cuenta sus particularidades como sujetas de derecho y deseo.³

Esto se refleja en el hecho de que las agendas locales de activistas feministas por la paz a menudo convergen con el paradigma de los derechos

³ Autoras como Rocha (2013) y Hudson (2012) mencionan que, a pesar de que hay poca documentación, se ha registrado un aumento de las violencias que sufren las mujeres al incorporarse en estas misiones o aparatos militares.

universales (discurso bandera de la paz liberal). Sin embargo, las demandas y la denuncias en perspectiva de género tienden a ser minimizadas por los actores internacionales en respuesta a los procesos territoriales de (re)tradicionalización de los valores locales (Björkdahl y Selimovic, 2016), lo que se origina en la preferencia de la paz liberal por la estabilidad y la gobernanza global, que elabora alianzas con las élites locales para el control de la población, asunto que ha resultado contrario en muchas ocasiones a la defensa de los derechos de las mujeres y a la mitigación de las violencias basadas en género y sexualidad (Ruiz-Giménez, 2013).

El caso colombiano ejemplifica a la perfección esta tensión: a pesar de que el Acuerdo de Paz de La Habana representa grandes avances en la incorporación de una agenda con enfoque de género transversal en sus cinco puntos, este mismo fue usado para generar desinformación y promover el NO durante la campaña al plebiscito de 2016. Por otro lado, es el punto con menos avances en materia de implementación, según manifiesta el IV informe del Instituto Kroc sobre el seguimiento de los acuerdos, pues hasta 2019 la implementación del enfoque de género presenta una brecha del 14 % en relación con las otras disposiciones del acuerdo, y solo el 9 % ha sido completado, aunque el 50 % de las disposiciones con enfoque de género son a mediano y a largo plazo, y, por lo tanto, pueden tardar muchos años en completarse. El seguimiento que ha hecho este instituto año por año demuestra que se ha dilatado la priorización y ejecución de dichas disposiciones, como también las políticas de cuidado, seguridad y prevención frente a los nuevos riesgos que enfrentan las mujeres de cara a sus roles de lideresas, pues “entre febrero de 2018 y mayo de 2019, se registraron 447 amenazas, 13 atentados y 20 homicidios contra lideresas sociales. A diferencia de los ataques contra los hombres líderes, las agresiones en contra de las lideresas frecuentemente son de contenido sexual y refuerzan estereotipos y roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres que menosprecian su papel” (Instituto Kroc, 2020, pp. 42-43).

Frente a este panorama, las instituciones gubernamentales garantes de derechos no velan por la vida y la seguridad de las mujeres, porque no cuentan con un sistema ágil y eficiente para responder a las nuevas violencias que emergen y afectan de forma especial a las mujeres, las cuales se han agudizado a partir de la crisis de los cuidados y el aumento de las violencias domésticas que se están viviendo en medio de la pandemia de la covid-19,

agravado con las nuevas incursiones de actores armados en varios departamentos, que están causando olas de desplazamiento y masacres.

Lo que se está poniendo de manifiesto es: el papel de las mujeres como proveedoras de servicios es distinto a las luchas que existen entre el gobierno y otros actores de la sociedad civil, ya que en la vida pública y para la toma de decisiones se encuentran en mayor medida excluidas por las estructuras locales, por lo tanto, su compromiso con el Estado no solo es diferente, sino también precario: “Hacer formas racionalistas de masculinidad y feminidad [para convertirlas] en portavoces no dejan espacio para ‘otras versiones de masculinidad y feminidad, de mujeres u hombres subalternos, [esto evidencia] la importancia de comprender el género, y sus referencias a otras identidades” (Hudson, 2012, p. 152).

Toda esta reflexión apunta a que los estudios para la paz desde una perspectiva feminista decolonial/poscolonial carean la paz democrática-liberal por ser inevitablemente ciega al género. De hecho, estas investigaciones han demostrado que las mujeres son más vulnerables en la transición del conflicto que durante el conflicto mismo (Björkdahl y Selimovic, 2016). En efecto, los “crímenes de género” no son exclusivamente sexuales, y las mujeres en sus relatos hacen referencia a patrones de desigualdad, exclusión y discriminación que estructuraban su vulnerabilidad durante el conflicto, y que pueden seguir reproduciéndose en tiempos de “paz” (Theidon, 2006).

Confortini (2006) nos dice que una teoría sobre la violencia desde un viraje feminista que estudie con rigor las relaciones de poder que construyen las identidades y el género desmiente el mito de una feminidad pacífica o propensa a la paz, y, en consecuencia, un guerrero o una masculinidad propensa a la guerra. Así, es posible comprender que existe una variedad de masculinidades y feminidades que experimentan violencia en diferentes términos y desde diferentes posiciones de poder. El género como construcción simbólica permite romper con las dicotomías violencia/paz, víctima/perpetrador, sujeto/objeto, enfocándose en las continuidades, complejidades, trayectorias de los fenómenos sociales y las relaciones que construye. Su desmantelamiento también nos permite visualizar caminos para el cambio y el empoderamiento.

Finalmente, Hudson (2012) encuentra en los feminismos poscoloniales una salida que puede acompañar a las agencias feministas para ir más allá de la cooptación liberal, puesto que estos devienen en una elasticidad, no son una alternativa contrahegemónica que busca construir consenso ante

un proyecto emancipatorio. Estos mutan en una particular perspectiva interna que tiene el potencial de ofrecer una forma distinta de comprender la construcción de paz, a partir de una política de lo cotidiano, desde la reivindicación y autorrepresentación de las múltiples subjetividades, desde donde los liderazgos subalternos se podrían hibridar. También coexisten con otros feminismos, por lo que se convierten en una herramienta útil para comprender el porqué y el cómo funciona el lenguaje liberal que utiliza el género dentro de las organizaciones internacionales para afianzar “la seguridad de las mujeres”. Por consiguiente, son la herramienta para dilucidar paces justas al género.

¿Cómo serían las paces justas al género?

Los estudios feministas trascienden de los pensamientos binarios, monolíticos y excluyentes de violencia y paz, describiendo cómo existen y han existido islas de paz dentro de mares de violencia o viceversa. Así mismo, se desprenden de la imagen paralizante e injusta de las mujeres como víctimas o cuidadoras naturales, posicionando los activismos por la paz como opciones libres, políticas y diversas, y no como parte de una virtud o un don innato de las mujeres, rechazando así las categorías biologizantes que refuerzan los simbolismos de género.

Hemos venido sosteniendo y reiterando que la visión dominante de paz liberal tiende a relegar las agencias de los sujetos y las múltiples visiones de paz que construyen, ya que la mayoría de los modelos de paz (incluyendo el de Galtung) se ubican a nivel macro; mientras que las visiones feministas desde las teorías subalternas reconceptualizan la paz y la ubican en lo micro, es decir, se baja la paz del Estado y se pone en las relaciones cotidianas para visibilizar las agencias por la paz:

Las mujeres pueden ser, y a menudo son, agentes de paz [...] Aunque es posible que las mujeres no siempre interactúen con el mundo de los procesos formales de transición, toman acciones en sus propias vidas para construir una paz que se basa en lo cotidiano y aborda las causas y las injusticias del conflicto. Visibilizando a las mujeres como agentes interesadas en la paz más allá del papel de víctima pasiva, se puede obtener una comprensión multifacética del significado de la paz y es posible identificar lugares donde se forma una paz significativa. Al

buscar en los márgenes, podemos detectar activistas que no participan en ningún escenario formal, pero que son piezas importantes en la construcción del tejido social de paz duradera desde abajo (Björkdahl y Selimovic, 2016, p. 5).

Conviene subrayar lo señalado por Ibarra (2007): para ella el movimiento de mujeres por la paz en Colombia ha evidenciado que existe una feminización de público y una diversidad de formas de ejercer la política desde los intereses de las mujeres, pues han hecho un llamado al aprovechamiento de sus “cualidades femeninas” como cantos, tejidos, rituales, con lo que se sostienen y llaman a otras mujeres a construir un espacio simbólico, que actúa como el lugar de enunciación y articulación de un proyecto político que las crea y visibiliza como ciudadanas. Para esta autora, es importante anotar que estas acciones permitieron que dejáramos de ser representadas como “madres desgarradas” que llamaban la atención de los medios de comunicación y curiosos, generando una empatía y solidaridad momentánea, para impactar con las imágenes de unas mujeres que, a pesar del dolor, emprenden acciones políticas.

Siguiendo a la autora, esto permite estudiar las acciones políticas por la paz y las alianzas en contra de la guerra, que toman forma de acciones colectivas que producen transformaciones e intercambios actitudinales y la construcción de identidades políticas:

En sus acciones colectivas ellas (el movimiento de mujeres por la paz) convierten lo personal en político cuando perciben la necesidad de reclamar sus derechos a través de los canales democráticos o por una acción política disruptiva. Con su activismo en estas organizaciones dan “sentido a su vida”, re-significan la experiencia femenina y reelaboran la maternidad. Por ello, en su consigna más representativa, se posicionan frente a los actores armados y plantean que “no van a parir ni a forjar más hijos e hijas para la guerra. Ni soldados ni víctimas de una guerra que no les pertenece”. Pero no sólo gritan la consigna, sino que, efectivamente, reducen la natalidad, reclaman sus derechos sexuales y reproductivos y aunque sienten resistencia al aborto, condenan a las autoridades de salud pública y no a quienes recurren a

este método. Se apropiaron de las reivindicaciones feministas y hacen rupturas en su propia subjetividad (p. 83).

En los movimientos de mujeres en pro de la paz y la antimilitarización de la vida social, es claramente visible la insumisión hacia los valores patriarcales, lo que se lee en las transformaciones de la identidad de las mujeres y en las formas en las que se construyen como sujetas políticas. Evidentemente, el movimiento de mujeres hace visible la paz en lo cotidiano, politizando una agenda en pro de la igualdad, el bienestar, la transformación de las identidades y la búsqueda de libertad.

Consideramos relevante mencionar que Posada y Cardona (2019) presentan el conflicto armado como un punto de inflexión: representa el recuerdo del horror y deshumanización; a su vez, se reconoce como la experiencia que alienta la reelaboración de las identidades de género y la construcción de ciudadanías diferenciadas. No obstante, la reconfiguración de subjetividades de las mujeres lideresas por la paz en Colombia se ha dado a partir de: una reivindicación que clama por otras formas de estar en el mundo de lo social y de lo productivo, cuestionando así las violencias normalizadas; la proyección de la transformación del horror de lo vivido, al encontrarse con otras formas de ser mujer; y la articulación con un movimiento social que recrea el rol y la identidad de lo femenino como un actor político en resistencia; la construcción de sentidos que se anclan en mecanismos, estrategias y herramientas en los que su dolor se dignifica y adquiere un carácter de lucha política, el cual se nutre de las convicciones que crean con otras mujeres y con las que pueden construir nuevas realidades para sí mismas y su comunidad; y desde la legitimación de nuevos cuerpos y nuevas agencias políticas que construyen realidades. En este orden de ideas, el principal aporte de las mujeres a la paz es: “La palabra de la mujer, como lo dicho, como sus actos, como su capacidad performativa, son la contribución de ellas a las nuevas paces, hacia la legitimidad de un ser que por derecho puede ser sujeto discursivo validado en lo público” (p. 239).

Recogiendo las visiones feministas de paz y violencia que hemos desarrollado hasta aquí, la noción de paces justas al género representa una crítica al establecimiento de un proyecto global de paz liberal que atomiza las luchas, despolitiza las experiencias y los saberes de las personas en escenarios locales, fragmenta el tejido social y exacerba las violencias existentes

antes, en medio y después del conflicto. Van más allá de los postulados de paz negativa/positiva, se relaciona con la búsqueda de justicia social, con el desmantelamiento de las múltiples expresiones del patriarcado y del sistema moderno/colonial de género, pues amplían la conceptualización de la paz trayendo al primer plano jerarquías de poder basadas en el género, revelan relaciones de subordinación y la continuidad de la violencia, mientras se destacan múltiples agencias por la paz. Por consiguiente, son apuestas encaminadas a desarrollar una política de paces feministas, cotidianas y diversas, desde los pueblos y mujeres excluidas, campesinas, indígenas, afro, entre otras. En pocas palabras, las paces justas al género trascienden de la idea de la paz como la ausencia de conflictos para centrarse en producción de condiciones de libertad, dignidad y oportunidades para las mujeres, son un horizonte ético, político y epistemológico-ontológico.

Estas perspectivas tienen profundas implicaciones para el paradigma de la paz liberal. Esto significa que la paz entendida como ausencia de guerra no es suficiente, que el discurso y práctica dominante de la paz liberal-democrática ya no puede marcar el estándar. Tal paz es frágil, tentativa y carece de las condiciones que permiten que sea recreada de forma continua. La agenda de investigación de la paz feminista es por el contrario transformadora y emancipatoria, argumenta que la paz no se establece solamente posterior a la erradicación de conflictos violentos de gran escala, sino cuando las mujeres y hombres de las sociedades en post-conflicto perciben la existencia de una paz cotidiana que incluye igualdad de género, de derechos y de oportunidades. Por esto, se requiere una revaloración de los dividendos de la paz. Concluimos que la conceptualización de la paz desde una perspectiva de género nos provee de herramientas y perspectivas para entender y explorar paces plurales (Björkdahl y Selimovic, 2016, p. 9).

Ahora bien, el movimiento social de mujeres en Colombia no solo está tensionado por el proyecto feminista liberal de construcción de paz, también por los procesos diferenciales de construcción de Estado, que ha determinado la trayectoria política de los grupos de mujeres y sus acciones colectivas en los territorios. Como mencionamos anteriormente, el movimiento social de mujeres por la paz ha tenido grandes efectos, han desarrollado acciones

colectivas que le apuntan a desarrollar prácticas y repertorios socioculturales por la paz, acompañados de estrategias de *lobby* e incidencia política que se han concretado en leyes y políticas públicas (Buitrago et al., 2019). Sin embargo, vale la pena preguntarse por cómo se articula este movimiento nacional con los territorios, si estas visiones de paz que representan a los grupos y plataformas más visibles de mujeres por la paz (en su mayoría se coordinan desde el centro del país o están en territorios que han sido centro de políticas propaz por hechos de violencia armada) reflejan, complementan o tensionan las visiones de los colectivos de mujeres en las periferias.

Ibarra Melo (2018) menciona que en el movimiento nacional de mujeres por la paz se pueden identificar distintos tipos de liderazgos: el primero son las mujeres pertenecientes a organizaciones civiles, que en virtud de esta vinculación se incorporan a la institucionalidad como representantes de las víctimas/mujeres, creando una esfera intermedia entre la sociedad civil y el Estado; el segundo son las lideresas que se han destacado a nivel nacional e internacional por su labor con las víctimas en los territorios afectados por la violencia armada. “Cuando hablamos de las representantes de las mujeres en el activismo por la paz nos referimos, sobre todo, a esos dos tipos de mujeres: ‘las femócratas’ —de acuerdo con la denominación que le dan Pringle y Watson (2002) a las feministas que se vinculan a los cargos del Estado— y las líderes de base” (p. 82). Aun así, es importante preguntarse por las mujeres cuyos liderazgos en sus regiones son visibles e importantes, pero a nivel nacional no tienen el mismo eco. Es por ello que en nuestro país pensar las paces justas al género pasa por una dimensión territorial, en la que no solo se cuestione el proyecto feminista liberal de construcción de paz, sino también las dinámicas de articulación de las plataformas nacionales con los grupos de mujeres en lo local.

Por esta razón, estas páginas tienen el propósito de posicionar la visión de paz territorial que tienen las mujeres en el sur del Tolima, desde sus roles como lideresas locales.

Metodología

Este trabajo de investigación se nutre de los principios de las epistemologías feministas desde reflexividad decolonial. Por lo tanto, condensa un esfuerzo por desprenderse de las dicotomías de la modernidad y con ello de la pretensión de universalidad, para establecer un conocimiento desde

múltiples lugares de enunciación. Esto es lo que Silvia Rivera Cusicanqui (2015) denomina “otras epistemes”, “epistemes indias” o “ch’ixi”, las cuales no están sometidas a los nuevos “discursos de indianidad”, estas surgen de adentro de un histórico (*manqhapacha*) y emergen en un campo político convulsionado y en crisis, y, por ende, formulan espacios de universalidad siempre redefinibles.

Indiscutiblemente, se trata de no reproducir violencia epistémica ni matrices de dominación en nuestras prácticas académicas, es reconocer la investigación como una práctica política de construcción de conocimiento interrelacional e intercultural. Como resultado, se trabajó con metodologías de investigación indisciplinada (Haber, 2011; Cruz y Cornejo, 2012) desde: la ética del cuidado, del reconocimiento a los saberes diversos, históricos y activos de las personas que participamos en esta investigación, que nos permitió construir relaciones de confianza, diálogos de saberes y reflexiones colectivas.

Desde el inicio del proyecto de investigación, las mujeres de la red tuvimos como principal apuesta de investigación dentro del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto. Construyendo cultura de paz en el sur del Tolima” construir un libro que cuente nuestro proceso político, elaborar “una biografía de la red de mujeres”. Este deseo surge luego de socializar “los caminos de vida”, una actividad desarrollada en el primer taller para explorar la producción de autobiografías; algunas de las mujeres que participamos en este espacio hicimos pocas referencias a nuestras vivencias antes de ser parte de la red, manifestamos no querer hablar del pasado, porque era revivir recuerdos que causaban mucho dolor y ahora tenemos vidas nuevas, precisamente gracias al trabajo colectivo y a la unión con otras mujeres. Por lo tanto, tomamos la decisión de escribir un libro producto de la realización de una memoria colectiva que se nutre de la reflexión de nuestras propias experiencias para: narrar cómo conquistamos espacios de participación política y los cambios que esto generó en nuestros roles, autoestima e identidad; politizar el tránsito de las mujeres de la esfera doméstica/privada a la esfera pública como uno de los elementos desde los que se construye el poder transformador y nos permite construirnos como sujetas políticas y ciudadanas; y convocar a otras mujeres en diferentes lugares del país y del mundo a replicar y a adaptar nuestros aprendizajes sobre construcción de paz con rostros y manos de mujeres.



Figura 7.1. Taller “Soñando nuestra memoria”. Junio de 2019

Fuente: archivo proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Los contenidos y propósitos de nuestra publicación *Tejidos de paz y sororidad. Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz*⁴ se construyeron en los talleres *in situ*, a partir de varias actividades que apuntaron a un proceso de escritura colectiva:

- *Entrevistas grupales*: las participantes nos realizamos entrevistas entre nosotras, las más jóvenes les preguntaban a las fundadoras de la red cómo se conocieron, qué las motivó a hacer la organización, cómo la han sostenido, qué han aprendido, cuáles han sido los retos y dificultades más grandes, etc.
- *Línea de tiempo*: expresa desde 1998 a 2019 los obstáculos, las acciones, las organizaciones y personas aliadas, los proyectos realizados, los hitos que han tenido como organización. Construida desde la revisión del archivo de la red.

⁴ El texto está disponible gratuitamente en la página web: <https://pluriversodepazentolima.net/wp-content/uploads/2021/08/Libro-Tejidos-de-paz-digital.pdf>

“PAZ ES QUE A LAS MUJERES SE NOS RECONOZCA TODO, QUE PODAMOS DECIR: ¡SOMOS LIBRES!”

- *Cartografías del cuerpo*: reconocimiento del cuerpo-territorio como un lugar de lucha y reivindicación, donde se albergan memorias, surgen sueños, deseos, frustraciones, etc.
- *Acuerdos colectivos de narración y difusión*: creación del comité motor del libro, decisiones colectivas frente a los capítulos y sus contenidos, público a quién se dirige y canales por donde se quiere difundir.



Figura 7.2. Taller “Cartografías del cuerpo”. Agosto de 2019

Fuente: archivo proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Aunque en este texto no hablaremos del libro, el proceso de elaboración y el diálogo con las mujeres que participan en el proyecto nos ha permitido dar cuenta de los ejes centrales que le dan cuerpo y discurso a nuestra visión de paz.

Por otro lado, lo expuesto en estas páginas también se nutre de las conversaciones que tuvimos entre las organizaciones de mujeres que participamos en este proyecto, especialmente de los resultados de la cartografía de paces y poderes hegemónicos/transformadores. Este ejercicio desde una perspectiva de poder condensa un análisis de cómo los poderes hegemónicos impactan los procesos de construcción de paz desde abajo —lo que llamamos poderes/paces transformadores—, sea por relaciones de colaboración, tensión o amenaza/opportunidad. Estas reflexiones se recogieron en



Figuras 7.3. Mapas de los poderes transformadores de las organizaciones de mujeres, y sus impactos en lo cultural, estructural y relacional

Fuente: archivo proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Este ejercicio no solo nos permitió identificar las estrategias transformadoras de la visión de paz con manos y rostro de mujer, también nos acercó a los discursos compartidos sobre los nuevos roles de las mujeres en nuestros territorios de cara al proceso de construcción de paz territorial.



Figura 7.5. Taller “Paces y poderes transformadores”. Febrero de 2020

Fuente: archivo proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Por consiguiente, se desarrolla una estrategia de análisis de contenido (AC) (Ruiz, 2004) para dar cuenta de los significados que le dan cuerpo a nuestra visión de paz. Esta se construye desde una estrategia intensiva, porque se tomaron todas las entrevistas que nosotras realizamos internamente en la red de mujeres, como también las conversaciones resultado de los encuentros con las demás organizaciones participantes en el proyecto; con determinación intertextual, porque establecemos una relación entre estas conversaciones; y extratextual, porque, a partir de estas conversaciones y las relaciones establecidas en ellas, las interpretamos y construimos seis categorías descriptivas que emergen de este análisis. Estas dan cuenta de los significados que le dan sentido a la visión de paz con manos y rostro de mujer.

Paz con rostro y manos de mujer: una tejeduría de emociones y proyectos políticos

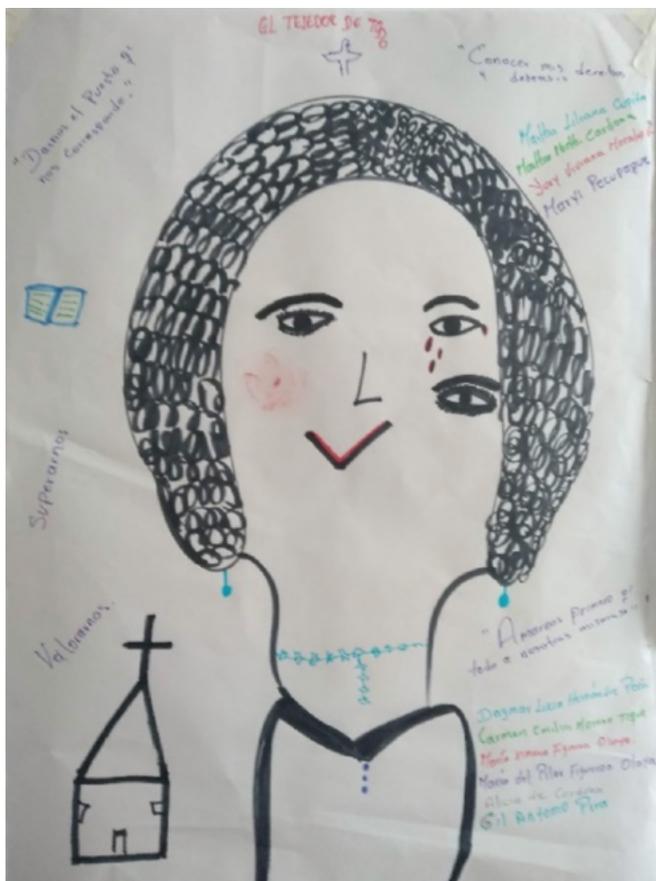


Figura 7.6. Taller “Soñando nuestra memoria”. Junio de 2019

Fuente: archivo proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Como vimos en el capítulo 3, “*Paces* locales y estrategias transformadoras: más allá de la paz dominante en el sur del Tolima”, las visiones de paz emergen de las prácticas, las agencias, las visiones de mundo y los intereses colectivos de las organizaciones que participaron en este proyecto. Estas fueron analizadas desde: “1) el ideario, que se refiere a cómo las personas entienden y definen estas visiones; 2) el posicionamiento identitario desde

donde emergen estas visiones y se proyectan al futuro”. En relación con la visión de paz con rostro y manos de mujer se mencionaba:

Ideario: es un camino hacia un empoderamiento donde las mujeres reinventan su identidad, crean diversas formas de ser en el territorio, que les permitan posicionarse, construirlo y ejercer ciudadanía, con el objetivo de impulsar un cambio cultural. Todo ello se consigue desde el fortalecimiento de: procesos organizativos de mujeres rurales, formación de lideresas y promoción de la participación y de la incidencia política de la mujer. En palabras de ellas, es “una tejeduría de emociones y proyectos políticos”.

Posicionamiento identitario: mujeres campesinas y diversas que tensionan las relaciones dominantes (masculinas, de clase, de etnia), que transforman sus roles. Al hacerlo, dan un giro en sus prácticas de ciudadanía, creando nuevas interacciones sociales, nuevos lenguajes y escenarios donde el poder y el conocimiento se redistribuyen.

Cuando comprendemos que la paz con manos y rostro de mujeres es un camino hacia el empoderamiento, es porque desde la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz llevamos 20 años transitándolo. Este recorrido que emprendimos de manera autónoma, guiadas por nuestra intuición y el deseo de construir territorios libres de violencia con oportunidades para las mujeres, nos ha permitido afianzar aprendizajes y conocimientos empíricamente construidos, que con los años se han convertido en significados que les han dado sentido a nuestras acciones políticas/estrategias transformadoras, lo que nosotras llamamos “tejeduría de emociones y proyectos políticos”.

Lo anterior se explica mejor si usamos como ejemplo una de nuestras estrategias transformadoras más visibles en los territorios: la incidencia política.⁶ En este camino, entendimos que no podíamos hacer incidencia política si no fortalecíamos los procesos organizativos y las capacidades de liderazgo de las mujeres de base, sin la elaboración de conocimientos propios de las distintas realidades e identidades que coexisten en nuestro territorio. Por lo tanto, cada agenda política o proyecto que construimos refleja un proceso colectivo de emancipación y empoderamiento de las mujeres en pro de la transformación del territorio.

⁶ Hablamos de acciones relacionadas con: participación en los consejos territoriales de planeación, construcción de políticas públicas de mujer y género, investigaciones sociales sobre la violencia y la postulación de mujeres de la organización a los comicios electorales.

De manera que las categorías que se narran a continuación le dan cuerpo a nuestra visión de paz territorial justa al género, expresan un proceso de empoderamiento, de articulación política y de proyección de discursos propios.

Despatriarcalización de los imaginarios sobre el poder

Nuestra visión de paz pasa por despatriarcalizar los imaginarios que nos han enseñado a nosotras como mujeres sobre el poder, entendemos este concepto a partir de la definición de Julieta Paredes, ella menciona que “la despatriarcalización [...] es el atrevimiento de las mujeres a soñar el mundo y no reducirnos solamente a visualizar las opresiones, violencias y dominaciones sobre nuestros cuerpos” (2017). Para nosotras, esto se traduce en crear significados propios sobre lo que es el poder, pero de manera especial reconocer que tenemos la capacidad, el derecho y las herramientas para ejercerlo, que las mujeres sí podemos tener poder y no solo los hombres:

Yo escuchaba la palabra poder y para mí era masculino. Siempre era un hombre. Siempre era el Presidente de la República un hombre. Uno tuvo esa idea como desde la infancia. Uno veía que el que mandaba era el papá, mandaba un hombre, siempre un hombre. Ha sido como un proceso liberarse de eso [...] e ir entendiendo poco a poco. Ver otros ejemplos, en la televisión, en los medios de comunicación muestran unas mujeres que han luchado a nivel de América y de nuestro país. El saber que nosotras las mujeres podemos surgir. Desde nuestras luchas también podemos tener poder, desde nuestro medio, desde nuestra familia y podíamos ejercerlo bien. Esto ha sido un proceso largo que nos ha cambiado totalmente la idea de lo que es el poder (Cristina Mosquera, lideresa de Ascafesagrado, Ataco, 2020).

Reconocernos como sujetas capaces de ejercer poder ha sido el primer paso para fortalecer nuestras organizaciones, posicionar nuestros liderazgos y luchar por ocupar o abrir espacios de participación política para las mujeres en nuestros territorios, como lo evidencia el testimonio de Dagmar Hernández:

Ese es otro punto muy importante porque cuando nosotros iniciamos con las juntas de acción comunal eran solo hombres, el patriarcado de la acción comunal [...] a nosotras nos tocó (ponernos en) la tarea de montar presidentas de juntas de acción comunal para que me apoyaran a mí y montáramos una cúpula de mujeres, de secretarías y delegadas a la acción comunal, y así fue que logramos que las mujeres se lanzaran, nos apoyaran entre mujeres para participar, porque esta era una pelea dura con la acción comunal con los líderes, los hombres que no querían a la mujeres. Entonces, cuando pasamos a la asamblea ya yo era la secretaria, y aspiraba a ser presidenta de Asojuntas, pero antes de las elecciones, ya habíamos montado a las mujeres y ellas me iban apoyar, y ellas convencían a las otras. Entonces, lo logramos, barrimos con la elección, y logramos que Asojuntas tuviera en su mayoría participación de mujeres. Hubo compañerismo, se vio el compañerismo entre nosotras para lograr apoyarnos.

Nosotras dentro de nuestras organizaciones hemos luchado por tener un lugar con voz y voto en la toma de decisiones en nuestras comunidades. Por lo tanto, reiteramos que las transformaciones y los espacios que hoy disfrutamos y seguimos construyendo dan cuenta de un proceso empírico y autogestionado de empoderamiento: “Nosotras estamos diciendo que nos hemos sentido poderosas cuando transformamos una situación para bien, cuando nuestro poder pasa de ser individual a ser colectivo [...] por eso, en este caso, el poder se manifiesta de forma positiva, en forma de mujer empoderada” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2020). Entonces, nuestra concepción de poder no se relaciona con la dominación, con lo individual o con el miedo, sino con la transformación de nuestras realidades, con la organización, con la fuerza del trabajo colectivo.

Este poder transformador viene del reconocimiento de los derechos y las capacidades que tenemos como mujeres. Es por ello que el acceso a la educación, sea de manera formal o informal, ha sido el eje central de nuestra lucha, porque “acceder al conocimiento es lo que nos da poder” (Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2020). De ahí que para nosotras sea importante pensar en la redistribución del conocimiento y los recursos.

Redistribución del conocimiento

A mí siempre me ha gustado usar mucho una frase que dice: “Una mujer con conocimiento cambia el mundo”.

DAGMAR LUCÍA HERNÁNDEZ (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019)

Cuando una mujer es educada puede tener mejores posibilidades de vida.

INGRID GÓMEZ (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019)

La presencia política de las mujeres se da desde el acceso al conocimiento. Conocer y educarnos es la principal herramienta para que las mujeres reconozcamos y accedamos al poder. Ejemplo de ello es nuestra experiencia de transformación, nos hicimos fuertes y poderosas cuando logramos capacitarnos, validar la primaria y el bachillerato, y para algunas entrar a la universidad. El conocimiento debe ser para todas las mujeres, no importa si viven en el campo o en la ciudad, si tienen dinero o no; por eso, para nosotras, es vital la lucha por el acceso a la educación formal e informal para todas las mujeres de nuestros territorios, especialmente para aquellas que viven en las zonas rurales. Una de nuestras apuestas de construcción de paz es replicar los aprendizajes, llegar a otras mujeres para motivar la organización y la gestión de sus propios proyectos, como lo relata María Ximena Figueroa: “Nosotras fuimos a la escuela de formación en liderazgo en esa época (2000-2004). Entonces, las mujeres que fuimos a esa formación sentíamos que teníamos como una responsabilidad, la de ir a enseñarle todo lo aprendido a las otras; entonces, fuimos a las veredas, a los corregimientos, ya teníamos mujeres que estaban en la JAC en lo rural y empezamos un trabajo de fortalecimiento de las organizaciones” (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019).

El conocimiento para nosotras es un recurso que se debe redistribuir para que las mujeres tengamos posibilidades y oportunidades de ocupar los espacios públicos. Eso también se relaciona con el análisis de la situación de las mujeres, esto es, con la generación de conocimiento sobre la realidad de las mujeres a través de la investigación social.

La investigación cualitativa nos ha dado las herramientas para: comprender los contextos y necesidades de las mujeres; enseñar a desnaturalizar las

violencias; diseñar agendas de incidencia; y proponer soluciones, pero desde las maneras en las que nosotras queremos, porque a veces dan ‘soluciones’ desde lugares lejanos, especialmente desde Ibagué o Bogotá, mientras que en los territorios podríamos transformar la realidad de forma más sencilla y acorde a lo que vivimos, si la institucionalidad tuviese la voluntad de apoyarnos.

Estos procesos los pensamos desde el reconocimiento que las mujeres tenemos de distintas trayectorias, por ejemplo, las lideresas de las organizaciones tienen realidades muy diferentes a las mujeres de la base, por eso, es esencial darles el espacio de voz y participación a todas. Que las mujeres tengan consciencia de que ellas son importantes, que han hecho parte de ejercicios de investigación para hacer visibles las violencias, las problemáticas y las propuestas que surgen en el territorio.

Organización desde la sororidad, la horizontalidad y la diversidad cultural

Cuando aquí se piensa un proyecto no se piensa en solucionar un problema de una persona específica, sino de un colectivo, de las mujeres y sus comunidades.

CARMEN EMILIA MORENO TIQUE (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019)

Las mujeres somos más fuertes cuando nos juntamos, por eso, la formación que ha hecho la red de mujeres le apuesta a reivindicar la importancia de trabajar organizadas y asociadas, así que hemos venido vinculando a muchas más mujeres a esos ejercicios. Ahora bien, en nuestros territorios es común encontrar procesos asociativos muy exitosos e interesantes, pero las motivaciones y valores que alimentan nuestras apuestas políticas nos diferencian, estos son: la sororidad, la igualdad, el trabajo colectivo y la diversidad cultural.

La sororidad es la hermandad, el amor, el trabajo en equipo y el compartir entre mujeres, nos invita a pensar en cómo ayudar a otras mujeres a fortalecer su autoestima, a salir de las situaciones de violencia y a lograr una superación personal. Así mismo, a construir una organización que se piensa como una búsqueda del bienestar colectivo, de un propósito común,

que, para nosotras, es construir paz territorial desde la presencia política de las mujeres.

Le apostamos al trabajo en red, porque así es posible construir desde las diferencias, de esta forma hemos podido reconocer la diversidad cultural, aprovechar los conocimientos y las fortalezas que tienen las mujeres en sus territorios. Cada una es un punto importante, valioso y vital en el sostenimiento de ese entramado, por eso, nos hemos esforzado en garantizar la mayor participación de todas las mujeres que hacen parte de la red. En efecto, tenemos una estructura horizontal, nuestro comité operativo no está constituido jerárquicamente como normalmente se organizan las asociaciones (presidente, vicepresidente, secretario y demás), todas somos coordinadoras, porque aquí todas somos iguales e importantes, cada una tiene unos talentos que cuando los juntamos se complementan. Redistribuimos el poder y el conocimiento.

Transformación de los roles asignados y de la cultura

Los procesos de formación, capacitación e investigación han permitido construir agendas locales y procesos de incidencia política. Estas agendas van más allá de la organización, porque incluyen una mirada territorial que abarca diferentes temas, y, por lo tanto, asumimos el reto de movilizarla en los gobiernos locales, departamentales y nacionales, para que pueda verse reflejada en la toma de decisiones, lo que representa un gran aprendizaje: fortalecer las capacidades para dialogar con los poderes hegemónicos, con esas estancias formales del poder, que con todos los defectos y las cosas no tan buenas que tengamos para decir, por ahí pasan decisiones importantes sobre nuestros territorios, y, por ende, debemos reclamar nuestra inclusión, nuestra voz y nuestros derechos.

Las mujeres hemos logrado ser participativas en todos estos procesos y hemos logrado de alguna manera tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Desde nuestra condición de mujeres hemos logrado transformar, participar en estos espacios, como decimos nosotras desde la red, “con rostro de mujer”. A pesar de los obstáculos y dificultades, con nuestra participación las mujeres hemos logrado transformar nuestros territorios. Hemos llegado a lugares donde antes no teníamos participación. Hoy en día hemos logrado participar en

campañas políticas, en veedurías, en JAC, en consejos comunitarios de mujeres, también en montar una voz de protesta frente a la violencia contra la mujer (Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2020).

Trabajar por el empoderamiento de las mujeres mediante la formación en derechos humanos es un trabajo cuyos resultados no se pueden medir fácilmente, pero durante estos años hemos visto los cambios en la expresión, en la fuerza y en los caminos propios que muchas organizaciones de mujeres han emprendido de la mano con nosotras. El principal resultado de estos procesos es el reconocimiento de la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública, dignificar el papel que tienen las mujeres en sus casas, asociaciones y comunidades: “Hace unos años las mujeres no teníamos oportunidades de nada, ni de votar, ni participar, ni siquiera una reunión, y por medio de la asociación hemos logrado eso. Nos ha dado más independencia, de llegar a la casa con un proyecto. Los hombres han entendido que cuando las mujeres nos capacitamos es un beneficio para las familias, para sacar adelante a los hijos” (Marinela Sánchez, *Aprovocal*, 2019).

Todos estos procesos que hemos liderado han contribuido a que muchas mujeres transformen los imaginarios que tenían sobre la política, dejó de ser un asunto de los hombres, externo, corrupto y viciado, para convertirse en una lucha diaria por combatir el machismo y las condiciones de exclusión que nos limitan, y, a su vez, un camino para construir familias, comunidades y asociaciones más prósperas, incluyentes y paritarias. Por eso, para nosotras, es esencial visibilizar las transformaciones que operan más en lo cultural, que se reflejan en cambio de mentalidad, de percepción.

Por medio de la plataforma de mujeres que estamos construyendo en el sur del Tolima, hemos hecho énfasis en la visión de paz con manos y rostro de mujer. En esta las mujeres tienen un rol fundamental, no solo frente a la incidencia política, también hacia la recuperación de saberes ancestrales ambientales tradicionales del cuidado de la tierra, de las semillas, de prácticas tradicionales como el tejido, la medicina propia, las huertas; prácticas que se dan en lo doméstico, en lo privado, que poco a poco se van sumando y llegando a dialogar e incidir en la esfera de lo público, generando nuevas oportunidades para las mujeres dentro de sus territorios.

Autodeterminación económica

El café es un poder hegemónico, pero una forma de construir paz, porque a las mujeres nos da independencia económica y acceso a la titularidad de la tierra.

MARINELA SÁNCHEZ (Aprovocal, 2020)

Cambiar las relaciones económicas es importante para el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres, es decir que acceder a los recursos como la propiedad de la tierra, herramientas productivas, trabajo remunerado y el liderazgo de sus propias organizaciones es una estrategia para reivindicar los nuevos roles que ejercemos en la vida pública y dentro del espacio doméstico, como lo menciona Dagmar Hernández: “Nosotras siempre hablábamos de la autonomía, que a nosotras nadie nos manda, entonces nosotras tomamos decisiones, y nosotras somos la que estamos sufriendo la situación aquí (en Chaparral). Por eso, nos lanzamos a legalizar la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, para nosotras tener nuestra cámara de comercio, que los recursos nos llegaran a nosotras, gestionar los proyectos” (Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019).

Ratificamos, entonces, que la alternativa para esta búsqueda de independencia económica es la consolidación de organizaciones de mujeres, ya que de esta manera, para nosotras, ha sido posible subvertir desde lo colectivo las relaciones de poder desiguales que se dan dentro de la familia, la comunidad, el mercado, entre otros.

Localización del activismo por la paz y empalme generacional

Como es lógico, los discursos de defensa de derechos humanos se reflejan en sus prácticas; para nosotras, no basta con que las políticas, y las lideresas que supuestamente nos representan en los espacios nacionales de indígenas y mujeres, hablen de la construcción de paz territorial, de diversidad cultural, de los derechos de las mujeres, si no llegan al territorio a potenciar las organizaciones. “Hay muchas indígenas ciudadinas, que no están en el territorio, no están resistiendo y defendiendo su territorio, su comunidad, están allá en sus cargos nacionales con un pensamiento individual y con

un discurso de derechos humanos sin la práctica, porque no regresan a su territorio, nos olvidan” (María Ximena Figueroa, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2020).

Para nosotras, ejercer un liderazgo desde, para y por el territorio es parte esencial de nuestras acciones políticas de construcción de paz territorial, porque se encuentra directamente relacionado con el proyecto de vida de las mujeres y sus familias en el campo, es una apuesta por resistir y reexistir: “Debemos reconocer que tenemos muchos saberes y conocimientos valiosos, para tener un proyecto de vida en el campo y no en la ciudad, que es el modelo que nos quieren vender. Ir a la ciudad no, nuestros saberes y conocimientos son para hacernos poderosas acá, en el campo” (Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2020).

Por esta razón, trabajamos en generar un empalme generacional, para poder seguir construyendo posibilidades para que nosotras y nuestras familias podamos permanecer en los territorios. Esto se refleja, por un lado, en las formas en las que cada organización ha ido incluyendo el trabajo con las generaciones más jóvenes, las cuales se han sumado al proceso y han creado sus propias acciones, discursos y agendas; y, por otro, en la articulación regional de las asociaciones de mujeres que estamos constituyendo, porque así es posible pensar en un proyecto territorial gestado por nosotras mismas.

Seguir tejiendo la paz desde el territorio: a modo de cierre

Las transformaciones en nuestros roles e identidad traen consigo una toma de consciencia de lo vital que son nuestras prácticas políticas, creando así nuevas interacciones sociales, lenguajes y escenarios alternos donde el poder y el conocimiento se redistribuyen. A su vez, se construyen nuevos espacios de participación y fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres en nuestro territorio.

Reconocemos que nuestras apuestas se encuentran en constante tensión con el mercado, las instituciones públicas, la paz hegemónica y los valores patriarcales. Es por ello que nuestras acciones se direccionan tanto a la incidencia política en las agendas de las organizaciones de cooperación y los planes de desarrollo municipal y departamental como a la transformación de la organización tradicional de las familias. Es una respuesta emancipatoria al sistema patriarcal y a la paz liberal.

El estar juntas y asociarnos ha sido el lugar/herramienta para buscar lo común, para encontrarlo, lucharlo y proyectarlo hacia futuro. Es esta construcción de comunidad, de bienestar, de oportunidades para todas lo que nos ha proporcionado agencia como sujetas políticas, y desde donde legitimamos nuestros roles dentro de la esfera pública.

Una pregunta importante para hacernos sería: ¿cuáles son las diferencias entre las visiones de paz justa al género del movimiento nacional de mujeres por la paz y nuestra visión de paz?

Los significados de paz territorial de las mujeres del sur tienen que ver con el acceso a la tierra, a la productividad, al conocimiento y al trabajo, porque a partir de estos las mujeres logramos tener poder. En este sentido, compartimos la convicción de que la construcción de paz va ligada a la transformación de las condiciones estructurales que nos impiden hacer efectiva nuestra ciudadanía y nuestra presencia política en los territorios, como también reconocemos que debe ser un proceso local, abierto, plural e intercultural. Por consiguiente, nuestras diferencias radican en el lugar de enunciación y proyección política desde donde se construye la idea o proyecto de paz territorial, ya que históricamente las plataformas de mujeres por la paz y las lideresas nacionales han hecho grandes esfuerzos por construir una agenda con acciones en los territorios, incluyendo a las mujeres que los habitamos;⁷ sin embargo, esta relación no deja de ser centro-periférica, tiene un eje central que coordina y adelanta acciones desde lugares a los que nosotras no tenemos acceso.

Así que nuestras diferencias residen en:

1. *El reconocimiento de los saberes locales*: esto como estrategia para fortalecer la práctica política territorial, acompañada de la reivindicación por ejercer el liderazgo desde el territorio. En tanto que a la antimilitarización y el antiextractivismo le sumamos la localización de las políticas y los liderazgos en pro de la construcción de paz. No solo es coordinar acciones desde el centro para el territorio, sino pensarlas y ejecutarlas desde ahí.

⁷ No negamos que tal articulación e intercambio de saberes nos ha sido útil para fortalecer nuestro proceso político y, por lo tanto, agradecemos todo el trabajo que han hecho las redes nacionales por visibilizar el movimiento de mujeres por la paz.

2. *La construcción de redes región-región*: el conflicto armado nos alejó de las posibilidades de conocer y conectarnos con las organizaciones de otras regiones, incluso con otros municipios del Tolima, porque los actores armados instauraron barreras en nuestros territorios, que crearon estigmas y recelos entre nosotros. Por otro lado, los procesos de integración centro-región han promovido que sea más fácil conectarse con el centro del país que con otras regiones y municipios vecinos; por ello, nuestra apuesta es construir redes municipales y entre regiones, con el fin de conocernos y reconocernos en la elaboración de proyectos de paces territoriales justas al género.
3. *La transformación de los imaginarios sobre el poder*: definir el poder desde lo colectivo determina nuestras agendas políticas, lo que se refleja en apuestas de redistribución del conocimiento, construcción de organizaciones desde la sororidad y horizontalidad, generación de conocimientos desde la investigación social y la incidencia política de las agendas coconstruidas con las mujeres en sus territorios. Esto permite que más mujeres se sientan cercanas a la política y emprendan acciones por la búsqueda de la paz.
4. *El acceso al mundo productivo desde lo colectivo*: el trabajo remunerado permite transformar las relaciones desiguales marcadas por el género; si bien esta es una apuesta común que podríamos tener con muchas organizaciones de mujeres, nos podría diferenciar que, para nosotras, esto es una búsqueda colectiva. Así que promover la asociatividad de las mujeres y fortalecer su capacidad organizativa y financiera ha sido la alternativa que hemos utilizado para tener autodeterminación económica.

Para terminar, estos significados que hemos descrito continúan siendo una lucha, es una invitación a seguir pensando, construyendo visiones de paces territoriales justas al género, pues esta no está predefinida, ni estandarizada, la imaginamos como una apuesta que las mujeres constantemente debemos posicionar en nuestros espacios comunitarios, políticos, sociales y académicos.

Por último, deseamos enunciar que las categorías y reflexiones que hemos presentado emergen de un proceso de memoria que realizamos colectivamente como organización, donde recordamos todo lo que se ha hecho

para leerlo en perspectiva crítica, mientras nos reafirmamos en nuestros discursos, liderazgos, estrategias transformadoras y acciones políticas. La construcción de paz con manos y rostro de mujer sigue siendo un reto, ya que, aunque llevamos más de 20 años de experiencia y activismo, los caminos para transitar aún no se terminan, seguiremos construyendo y sosteniendo esta tejeduría de emociones y proyectos políticos, pues aspiramos que la paz sea “que se nos reconozca a las mujeres todo, que podamos decir: ‘¡Somos libres!’” (Zoraida Montes, Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, 2019).

Referencias

- Artemisas. (2020). *Feminismos desde Abya Yala–Ochy Curiel*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=jfWjTurPiug>
- Björkdahl, A., & Selimovic, J. (2016). Gender: the missing piece in the peace puzzle. En O. Richmond, S. Pagodda & J. Ramovic (Eds.), *The Palgrave handbook of disciplinary and regional approaches to peace* (pp. 181-192). Baskingstoke-Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Cabnal, L. (2017). Tzk’at. Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Iximulew–Guatemala. *Ecología Política*, (54), 98-102.
- Confortini, C. (2006). Galtung, violence, and gender: the case for a peace studies/ feminism alliance. *Peace & Change*, 31, 333-367.
- Cruz, M. A., Reyes, M. J., & Cornejo, M. (2012). Conocimiento situado y el problema de la subjetividad del investigador/a. *Cinta de Moebio*, (45), 253-274. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2012000300005>
- Espinosa, Y. (2010). Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos: complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 14(33), 37-54.
- Espinosa, Y. (2019). Hacer genealogía de la experiencia: el método hacia una crítica a la colonialidad de la razón feminista desde la experiencia histórica en América Latina. *Revista Direito e Práxis*, 10(3), 2007-2032. DOI: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2019/43881>
- Firchow, P. (2017). Do reparations repair relationships? Setting the stage for reconciliation in Colombia. *International Journal of Transitional Justice*, 11, 315-338.
- Gayatri, S. (2008). Deconstruyendo la historiografía. En S. Mezzadra (Comp.), *Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales* (pp. 33-68). Madrid: Traficantes de Sueños.

- Haber, A. (2011). Nometodología payanesa: notas de metodología indisciplinada. *Revista Chilena de Antropología*, 23(primer semestre), 9-49.
- Hudson, H. (2012). A double-edged sword of peace? Reflections on the tension between representation and protection in gendering liberal peacebuilding. *International Peacekeeping*, 19(4), 443-460. DOI: 10.1080/13533312.2012.709753
- Ibarra Melo, M. E. (2007). Acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia. *Sociedad y Economía*, (13), 66-86. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=996/99616721004>
- Ibarra Melo, M. E. (2018). Activismo de las mujeres por la paz en tiempos de seguridad democrática. En M. Ibarra, A. Rodríguez, I. Cuesta & Y. Luna (Eds.), *Mujeres en movimiento, género, experiencias organizativas y repertorios de acción en Colombia* (pp. 69-137). Cali: Editorial Universidad del Valle.
- Instituto Kroc. (2020). *Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial. Diciembre 2018 a noviembre 2019*. Nôtre Dame: Instituto Kroc.
- Lekha, C. (2007). Justice as peace? Liberal peacebuilding and strategies of transitional justice. *Global Society*, 21(4), 579-591.
- Lugones, M. (2014). Colonialidad y género. En Y. Espinosa Miñoso, D. Gómez Correal & K. Ochoa Muñoz (Eds.), *Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala* (pp. 57-74). Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Magallón, C. (2006). *Mujeres en pie de paz*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Moffett, L. (2016). Reparations for 'guilty victims': navigating complex identities of victim-perpetrators in reparation mechanism. *International Journal of Transitional Justice*, 10(1), 146-167.
- Mohanty, C. (2008). Bajo los ojos de occidente. En L. Suárez Navaz & A. Hernández (Eds.), *Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes* (pp. 117-167). Madrid: Cátedra.
- Moola, S. (2006). Women an peace-building: the case of Mabedlane women. *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, (69), 124-133.
- Nagy, R. (2008). Transitional justice as global project: critical reflections. *Third World Quarterly*, 29(2), 275-289.
- Paarlberg-Kvam, K. (2019). What's to come is more complicated: feminist visions of peace in Colombia. *International Feminist Journal of Politics*, 21(2), 194-223.
- Paredes, J. (2014). *Hilando fno desde el feminismo comunitario*. México, D. F.: El Rebozo-Zapateándole-Lente Flotante-En cortito que's pa'largo-AliFem ac.

- Paredes, J. (2015). Despatriarcalización. Una respuesta categórica del feminismo comunitario (descolonizando la vida). *Revista de Estudios Bolivianos*, 21, 100-115.
- Paredes, J. (2017). ¿Qué es la despatriarcalización? *Radio Stocolmania*. Recuperado de <https://radiostocolmanianews.wordpress.com/>
- Posada, I., & Carmona, J. (2019). Devenir lideresa en el conflicto armado en Colombia: un tránsito de víctima a reclamante de justicia. En J. A. Carmona Parra & F. Moreno Martín (Eds.), *Reconstrucción de subjetividades e identidades en contextos de guerra y posguerra* (pp. 230-246). Manizales: Fondo Editorial Universidad de Manizales.
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rocha, T. (2013). O equilíbrio de gênero nas operações de paz: avanços e desafios. *Revista Estudos Feministas*, 21(3), 817-837.
- Rubin, G. (1996). El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. En M. Lamas (Comp.), *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual* (pp. 35-98). México: Puegunam.
- Ruiz, A. (2004). Testimonio y metatexto: el análisis de contenido en la investigación en educación. En A. Jiménez & A. Torres (Comps.), *La práctica investigativa en ciencias sociales* (pp. 44-59). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Ruiz-Giménez, I. (2013). Introducción: La “paz liberal” en África: debates y prácticas. En I. Ruiz-Giménez Arrieta (Ed.), *El sueño liberal en África Subsahariana. Debates y controversias sobre la construcción de la paz*. Casa África Editorial.
- Theidon, K. (2006). Género en transición: sentido común, mujeres y guerra. *Cuadernos de Antropología Social*, (24), 69-92.
- Ulloa, A. (2018). Feminismos territoriales en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos. *Nómadas*, (45), 123-139.

Capítulo 8

Mujeres indígenas, justicia y paz territorial*

Laura Yaneth Rivera Revelo

Introducción

Pese a la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en ciertas zonas del país —especialmente rurales e históricamente marginalizadas— la guerra continúa su curso, liderada ahora por actores armados posconflicto denominados Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), que se enfrentan para controlar territorios antes ocupados por la mencionada guerrilla. Hoy en día se estima que estas nuevas estructuras armadas operan en 402 municipios y 16 zonas no municipalizadas de Colombia (*El Espectador*, 2019).

Estas áreas son en su mayoría zonas de frontera, pobres y con una presencia estatal diferencial y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Muchos de estos territorios forman parte de los espacios de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).¹ Además, en un número importante de los casos se trata de territorios étnicos. Es el caso del territorio colectivo del pueblo indígena awá,² ubicado en el departamento de

* El presente trabajo forma parte de una investigación posdoctoral denominada “Acceso a la justicia y desigualdades sociales” que lleva a cabo la autora como investigadora asociada de la Cátedra de Estudios de Paz de la Universidad de Giessen (Alemania).

¹ Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, Santa Bárbara, Ricaurte y El Charco.

² El pueblo awá se ubica en el departamento de Putumayo, Nariño y en el Ecuador en las provincias del Carchi, Esmeraldas e Imbabura. Los awás se articulan en tres organizaciones en Colombia: en Nariño, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), con 20 200 indígenas, y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), con 10 500; en Putumayo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá de Putumayo (Acipap), con 4604; y en el Ecuador, la

Nariño, en el cual durante los últimos 20 años se ha desarrollado la guerra de una manera muy intensa, dejando a su paso innumerables violaciones a sus derechos humanos y colectivos, siendo las mujeres adolescentes, adultas y niñas awás (MAAN-awás) uno de los grupos más afectados.³

Tomando en cuenta el anterior contexto y haciendo énfasis en las variables de género, adscripción étnica y clase social, se pretende vislumbrar cómo la persistencia de la violencia y las desigualdades estructurales inciden directamente en la participación, centralidad y garantía de los derechos de las víctimas, cuestión que a su vez repercute en su capacidad de agencia y participación en la concreción de iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social comunitario.

En un primer momento, se abordará descriptivamente cómo se ha venido incorporando la centralidad de los derechos de las víctimas en la normatividad derivada del Acuerdo Final de Paz, concretamente en el componente de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En el segundo apartado, se indaga sobre cómo se refleja esta centralidad de los derechos de las víctimas y la incorporación del enfoque étnico-territorial a través de la acreditación del pueblo awá y su territorio ancestral como víctima en calidad de sujeto colectivo de derechos en el Caso 2 abierto por la JEP (Auto SRVBIT, 2019). Finalmente, se visibilizará cómo la persistencia de la violencia y las desigualdades estructurales en el territorio indígena awá generan barreras específicas que en la práctica limitan la centralidad, la participación plena y la garantía de los derechos de las víctimas acreditadas en la JEP en tanto sujeto colectivo de derechos, lo cual además restringe las iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social comunitario indígena.

La centralidad de las víctimas en el Acuerdo Final de Paz

Colombia, como uno de los casos singulares de guerra interna a nivel mundial en el siglo XXI, se ha constituido en los últimos años en el centro de

Federación Awá de Putumayo (Acipap), con 4604, y la Federación Awá del Ecuador (FCAE), con 3800 indígenas (Unipa, Camawari & Acipap, 2010).

³ La JEP abrió en 2018 el Caso 2 sobre la situación en los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco del departamento de Nariño —territorio donde habitan los awás—, con el fin de investigar los crímenes cometidos por miembros de las FARC-EP y de la fuerza pública.

atención a nivel internacional, esto en tanto que, después de más de 50 largos y cruentos años de conflicto armado, la guerrilla más antigua de América Latina y el gobierno colombiano firmaron a finales de 2016 el acuerdo de paz y cese bilateral definitivo de la confrontación armada. Este hecho histórico abrió en su momento diferentes incógnitas académicas, políticas, sociales y, por supuesto, jurídicas frente al anhelado posconflicto.⁴

Los debates públicos se han centrado en la impunidad y en cómo la justicia transicional y los marcos jurídicos desarrollados en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz garantizarán los derechos de las víctimas del conflicto armado, pues desde el inicio de las negociaciones se estableció que la participación y los derechos de las víctimas serían la columna vertebral del Acuerdo Final de Paz y de sus instrumentos jurídicos (Acuerdo Final de Paz, 2016).

Esta importante discusión fue desplazando otras conexas, que, con el transcurrir de los años, la persistencia de la violencia y la puesta en práctica de la nueva institucionalidad, se han vuelto más evidentes. Es el caso de los interrogantes frente a la garantía de los derechos de las víctimas en un proceso de justicia transicional en un país que aún se encuentra en medio de un conflicto armado, con una diversidad de actores armados ilegales; y la otra inquietud referente a las barreras de tipo estructural que experimentan las víctimas para su participación y el acceso efectivo a esta justicia transicional.

Frente a los temores e inquietudes jurídicas en particular sobre el componente de justicia creado en el marco de las negociaciones de paz, estos se han ido disipando, incluso el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, aseguró que el diseño y funcionamiento de la JEP⁵ es pionero y ejemplo en el mundo, recalcando la idoneidad de los marcos jurídicos con respecto a los estándares internacionales en materia de garantía de derechos y la lucha contra la impunidad (Noticias-JEP, 2020).

⁴ Tras cuatro años de conversaciones (inicio oficial: 4 de septiembre de 2012) que se llevaron a cabo entre el gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en La Habana; se obtuvo como resultado la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

⁵ La JEP es el componente de justicia dentro del SIVJNR que tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1º de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.

La anterior afirmación tiene un fuerte fundamento normativo, ya que desde un principio los negociadores establecieron que el respeto por los estándares internacionales en materia de justicia se vería reflejado, entre otros, en la centralidad de las víctimas (*El Economista*, 2016). Esto implicó, por ejemplo, tomar como partida la definición amplia del contenido del concepto de ‘víctima’, acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, entendiéndose como:

Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización (ONU, 2005).

De acuerdo con lo anterior, en Colombia existen más de nueve millones de personas que se definen como víctimas del conflicto armado, la mayor parte la componen pobladores campesinos, afrodescendientes e indígenas (Unidad de Víctimas, 2020). Estos habitantes rurales experimentaron en sus cuerpos, en el de sus familiares y comunidades el dolor que deja la guerra. No obstante, no se había contemplado escucharlos en la mesa de negociaciones hasta que la presión de diversas organizaciones sociales de víctimas y defensores(as) de derechos humanos hizo posible que la centralidad de las víctimas se empezará a materializar a través de la participación directa de cinco grupos que en diferentes audiencias y foros dialogaron directamente con los negociadores. Para la selección de las 60 personas se enfatizó en que los(as) participantes irían en representación propia y no como parte de una organización, para evitar protagonismos o enfrentamientos. Además, se buscaba la representatividad de las seleccionadas frente: i) al universo

de víctimas, ii) a los hechos victimizantes y iii) a los victimarios⁶ (*Verdad Abierta*, 2014), con la premisa de “poner al país real en un grupo de 60 víctimas” (Bret, 2017).

La representatividad de la mujer en cada grupo fue importante. Sin embargo solo dos representaban a miles de mujeres colombianas que en el marco del conflicto armado han sido víctimas de violencias basadas en género incluyendo violencia sexual y además ninguna tenía pertenencia étnica.⁷ Esto pone en evidencia la dificultad que implicó representar a más de nueve millones de personas que han padecido directamente el conflicto armado colombiano en un grupo reducido que reflejara todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (*Verdad Abierta*, 2014).

Esta participación inicial fue importante para validar el proceso y también para escuchar las percepciones, inquietudes y recomendaciones de las víctimas frente al Acuerdo Final de Paz y las garantías de sus derechos en tanto víctimas del conflicto armado (Bret, 2017). En estos espacios se recalcó por parte de los negociadores la voluntad de materializar la centralidad de las víctimas como un principio que irradie y se refleje en los seis puntos fundamentales acordados para la terminación del conflicto armado, a saber: i) la reforma rural integral, ii) participación política, iii) fin del conflicto, iv) solución al problema de las drogas ilícitas, v) reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y, por último, vi) los mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos de paz. La centralidad de las víctimas también se vio reflejada en la consolidación del punto 5, que crea el SIVJRNR. Este mecanismo, según el Acuerdo Final de Paz,

⁶ El PNUD, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal debían escoger solo un puñado de las más de siete millones de personas que han padecido directamente el conflicto armado colombiano y a través de ellas “reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”, como pidió la mesa de negociaciones.

⁷ La escogencia de este grupo estuvo a cargo del PNUD, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal, que a petición de la mesa de negociaciones cumplieron esta misión (*Verdad Abierta*, 2014).

contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros (Acuerdo Final de Paz, 2016).

El SIVJRNR está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las medidas de reparación integral para la construcción de la paz, y las garantías de no repetición (Acuerdo Final de Paz, 2016, p. 8).

En el marco de la JEP se planteó la centralidad de los derechos de las víctimas (Ley 1957 de 2019, art. 13), siendo las comunidades indígenas uno de los sectores más victimizados en medio del conflicto armado, por lo que se crearon protocolos con perspectiva étnica y cultural para el relacionamiento con las comunidades étnicas, buscando en el caso de los pueblos indígenas un diálogo intercultural y la coordinación interjurisdiccional entre la jurisdicción especial indígena y la Justicia Especial para la Paz (Protocolo 1, 2019).

De igual forma, en desarrollo del principio de la “centralidad de las víctimas”,⁸ se incluyó el principio *províctima* como criterio de interpretación y aplicación normativa.⁹ Se establecieron los derechos y las garantías de las víctimas en los procesos que se surtan ante la JEP (título I de la Ley 1922 de 2018), incluyendo el derecho a la participación a través de la presentación de informes ante la JEP (Ley 1922 de 2018).

⁸ Este principio se desarrolla en el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2017 y en los artículos 14 en adelante de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, que es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP.

⁹ Artículo 1º, literal d, de la Ley 1922 de 2018, “por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz y se establecen unos principios rectores de la JEP”.

Tomando en consideración el anterior contexto normativo, podríamos concluir que en la JEP los derechos de las víctimas efectivamente están en el centro de esta jurisdicción especial, toda vez que existe un marco jurídico respetuoso de los estándares internacionales en materia de garantías y prevalencia de los derechos de las víctimas frente a la impunidad (ONU, 1997). En el siguiente apartado, se indaga a través de la revisión del Caso 2 cómo se refleja esta centralidad de los derechos de las víctimas y la incorporación del enfoque étnico-territorial.

La centralidad de los derechos de las víctimas en el Macrocaso Territorial 2

La costa Pacífica nariñense constituye un caso paradigmático de la presencia diferencial del Estado colombiano (González y Otero). Un territorio donde confluyen diversas identidades étnicas en medios de grandes dificultades socioeconómicas estructurales y de orden público, departamento en el cual la pobreza está por encima del promedio nacional (DANE, 2020), existiendo tasas altas en desnutrición, desempleo y deficiente cobertura en los servicios básicos en gran parte de las zonas rurales. La población con necesidades básicas insatisfechas llega al 43 %, cifra un 60 % más alta que el promedio nacional, el déficit de vivienda supera el 56 %, hay 82 % de hogares que no pueden cubrir los gastos básicos, las más afectadas son las comunidades afrodescendientes e indígenas (Gobernación de Nariño, 2019).

Por otra parte, pese a la fuerte presencia militar, el Estado no ha logrado mantener el control pleno de esta región históricamente marginada desde el proceso de la colonización española (Solarte, 1992, pp. 9-12). Un contexto ideal para las economías ilegales y la presencia de actores armados no estatales. A partir de los noventa, las FARC-EP, a través del Bloque Sur y sus diferentes frentes (2, 13, 32, 48), y del Suroccidental (frentes 8 y 29), ingresan a Nariño en desarrollo del orden de expansión territorial dada por el Secretariado General de esa guerrilla, incrementando sus acciones armadas y la confrontación con la fuerza pública y, posteriormente, con grupos paramilitares (Echandía, 1999, p. 4).

La disputa territorial entre los actores armados mencionados se intensificó a partir de mediados de la década de 1990 y se sostiene hasta finales de 2016. Dicha confrontación armada se desarrolló principalmente en tres municipios de Nariño: Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. Por consiguiente, no

es de sorprender que en estos mismos tres municipios se evidencie por medio de diferentes informes gubernamentales una serie de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y, en general, la prevalencia de una situación compleja en materia de garantía de los derechos humanos (Salas, 2019).

Los hechos y efectos notorios de la guerra durante el período señalado y el impacto al tejido social comunitario, aunado a las graves afectaciones sobre los derechos de las víctimas en su mayoría con pertenencia étnica, ha llevado a la JEP a abrir el primer macrocaso territorial (Caso 2), priorizando el trabajo investigativo sobre la violencia en los municipios mencionados, mediante el Auto 4:¹⁰

[...] la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) luego de aplicar los criterios de selección y priorización correspondientes y bajo un enfoque étnico territorial, decide abrir el Caso N° 002, este prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH perpetrados presuntamente por parte de la antigua guerrilla de las FARC-EP y la Fuerza Pública colombiana entre el 1 de enero del 1990 y el 1 de diciembre del 2016. Estas graves violaciones a los derechos humanos y al DIH afectaron principalmente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI, ocurridas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño (Auto 4 de 2018).

Con la emisión del Auto 4 de 2018, se abrió la oportunidad para que todos los sujetos que individual o colectivamente hayan padecido graves violaciones a sus derechos humanos o victimizaciones en el marco de infracciones graves al DIH realicen el trámite para el reconocimiento de sus derechos como víctimas y su acreditación para participar como intervinientes especiales, iniciando la etapa de contribución a la verdad y responsabilidad de los hechos victimizantes ocurridos en el marco del Caso 2.

¹⁰ Mediante el Auto 4 de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas avoca conocimiento del Caso 2 de 2018, correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) respecto de los graves hechos victimizantes presuntamente cometidos por integrantes de las FARC-EP y la fuerza pública entre 1990 y 2016.

La participación del pueblo awá en la Jurisdicción Especial para la Paz a través del Caso 2

Contexto general

En el departamento de Nariño, una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado han sido las comunidades indígenas pertenecientes al pueblo awá de Colombia, que habita la cordillera y la costa Pacífica nariñense (véase figura 8.1).¹¹ Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por la violencia desatada en sus territorios ancestrales; además, sus integrantes se han visto también afectados por carencias socioeconómicas y la presencia de economías y actores ilegales que violan su territorio colectivo.

Gran parte del territorio awá en Nariño se encuentra ubicado en la zona fronteriza con el Ecuador, en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, territorios donde precisamente la JEP investiga graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en el marco del Caso Territorial 2.

En la ruralidad de estos municipios se sitúa gran parte del territorio awá, donde confluyen varios afluentes de agua, como los ríos Mira, Patía, Telembí, Rosario, convirtiéndose en una zona geoestratégica importante para los grupos armados insurgentes y para el crimen organizado que desarrolla negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal (Salas, 2019).

Por más de 20 años los(as) comuneros(as) de los resguardos indígenas del pueblo awá han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos por parte de diferentes grupos armados ilegales que se han disputado este territorio, tales como los frentes 29 y 48 de las FARC-EP, el Frente Comuneros del Sur del ELN, los Bloques Libertadores del Sur de las AUC, los grupos paramilitares Águilas Negras y Los Rastrojos. De la misma forma, por parte del Estado colombiano han hecho presencia militar las tropas de la fuerza pública, como el Grupo Mecanizado N° 3 José María Córdoba y la Brigada III del Ejército (González, 2008).

¹¹ El pueblo indígena awá es un pueblo binacional presente en Colombia y en el Ecuador. En Colombia se ubica en el piedemonte costero nariñense y comprende los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán, Santacruz y la zona rural de Tumaco y algunos municipios del departamento de Putumayo tales como Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón (ONIC, 2019).

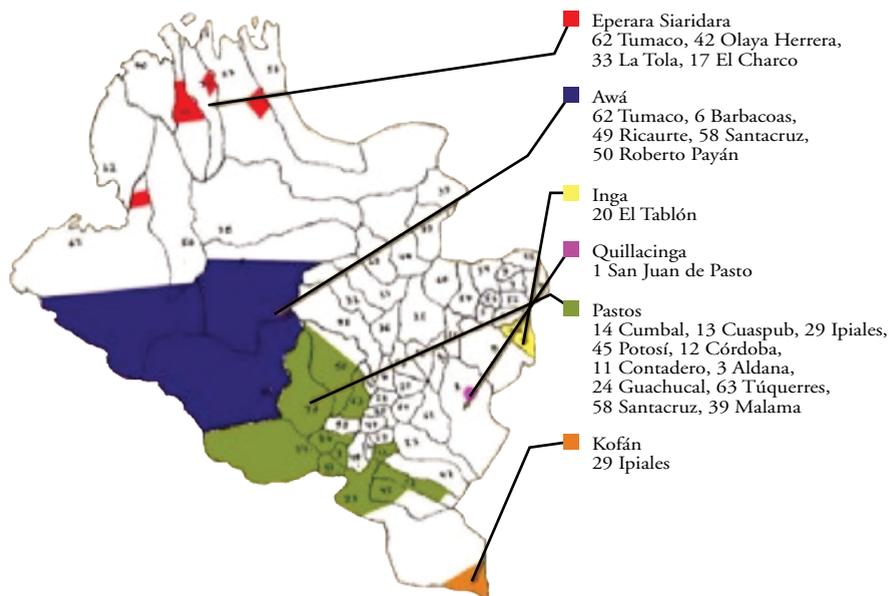


Figura 8.1. Pueblos indígenas del departamento de Nariño

En azul se representa el territorio awá en Nariño.

Fuente: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (2010).

A partir del año 2000, el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio awá incrementó escenarios de múltiples vulneraciones a los derechos humanos, tales como homicidios, torturas, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento y violencia sexual, contribuyendo además a la profundización de las condiciones de vulnerabilidad, pobreza y discriminación en estas comunidades indígenas.¹² A tal punto llegó la vulneración de sus derechos que la Corte Constitucional colombiana declaró a este pueblo, entre otros, en grave peligro de exterminio físico y cultural a causa del conflicto armado y otros factores de exclusión estructural.¹³

¹² El 17 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad del pueblo indígena awá ante el riesgo inminente que afronta por el empeoramiento del conflicto armado en sus territorios colectivos. La Comisión Interamericana puntualizó al Estado colombiano que las medidas cautelares y su implementación deben ser consensuadas con el pueblo awá (CIDH, 2011).

¹³ Específicamente en su Auto 4 de 2009 sobre desplazamiento forzado, declaró al pueblo awá en peligro de exterminio físico y cultural ante el conflicto armado y el desplazamiento

El pueblo awá se constituye en una de las principales víctimas de la violencia del conflicto armado por el control territorial en la costa Pacífica nariñense, han sido objeto de desplazamiento forzado, sumando en las últimas dos décadas más de 3000 desplazados, prácticamente 1 de cada 10 se ha visto obligado a abandonar su hogar (Auto 4 de 2009).

Los líderes awás han sido asesinados, sus territorios sembrados de minas antipersonales. Solo en 2009 se reportaron tres masacres que dejaron un total de 33 muertos, por los que el pueblo awá de Nariño responsabiliza a los paramilitares, a las FARC-EP y al mismo Ejército colombiano. Frente a este hecho, la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre la responsabilidad del Estado en asumir medidas que tiendan a asegurar la vida y pervivencia de este y otros 34 pueblos indígenas; no obstante, el Estado ha adoptado una conducta omisiva que se ha reiterado en diversos llamamientos de la Corte Constitucional, principalmente a través de los autos de seguimiento 4 de 2009 y 174 de 2011.¹⁴

Desde entonces, el pueblo awá ha centrado sus esfuerzos en exigir el cumplimiento del Auto 4 y la continuidad de las mesas de concertación con delegados gubernamentales con poder de decisión para atender sus demandas. Particularmente en la concreción real del Plan de Salvaguarda, como mecanismo de protección y respeto de sus derechos colectivos y territoriales, y no como un documento más (Anaya, 2010).

Pese a las demandas de protección ante los distintos gobiernos y las medidas de autoprotección lideradas por las autoridades awás, la persistencia y escalamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y colectivos solo empezaron a tener visibilidad política a nivel nacional con el pronunciamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, en el cual llamaron la atención al Estado colombiano por la alarmante violación sistemática de los derechos humanos de esta comunidad por parte de diferentes actores armados, incluyendo la fuerza pública, solicitando al Estado “la adopción de medidas cautelares para proteger la vida

forzado, y, por ende, ordenó la formulación e implementación del Plan de Salvaguarda Étnica. Auto 4 del año 2009, emanado por la Corte Constitucional colombiana, el 26 de enero de 2009.

¹⁴ Estos autos corresponden al desarrollo de la Sentencia T-025 de 2004 emitida por la Corte Constitucional de Colombia en el marco del reconocimiento del estado de cosas inconstitucionales.

e integridad personal de los miembros del pueblo awá de los departamentos de Nariño y Putumayo” (Anaya, 2010).

No obstante, el anterior llamado, diez años después las comunidades indígenas awás siguen siendo violentadas por viejos y nuevos actores de la guerra interna que no acaba de terminar. El pueblo indígena awá se ha resistido a abandonar su territorio ancestral, siendo una y otra vez víctimas de todo tipo de violaciones a los derechos humanos de sus integrantes como también a sus derechos colectivos en tanto pueblo indígena (Unipa, Camawari y Acipap, 2012).

Las autoridades de este pueblo indígena siguen solicitando medidas reales de protección al Estado colombiano, denunciando públicamente la violencia que viven diariamente en su territorio, sin obtener una respuesta estatal congruente; de igual forma, en varias ocasiones han pedido que en respeto a sus derechos colectivos se creen espacios continuos de diálogo intercultural para trabajar medidas conjuntas de protección individuales y colectivas con la institucionalidad gubernamental, sin recibir mayores respuestas ni interés por parte del gobierno central (Unipa, 2019).

La centralidad y garantía de los derechos de las víctimas indígenas en la Jurisdicción Especial para la Paz

En el anterior contexto y abierto el Caso 2, en la incesante búsqueda de justicia y protección a sus derechos individuales y colectivos afectados por el conflicto armado, deciden participar a través de un informe preliminar presentado ante la JEP el 14 de septiembre de 2018 por la Unidad Indígena del Pueblo Awá-Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá (Unipa).¹⁵

En este informe preliminar se plasmaban las graves afectaciones colectivas y territoriales sufridas por el pueblo y las comunidades pertenecientes a los 32 cabildos awás, asociados en la Unipa (Caso 2 de 2018). Posteriormente, el 20 de septiembre de 2019, la Unipa, en el marco del Caso 2, solicitó a la Sala de Reconocimiento la acreditación del territorio y del pueblo indígena

¹⁵ La Unipa agrupa y representa 32 cabildos asociados, que corresponden a 27 resguardos y 5 territorios ancestrales en titulación por parte del Incoder. Fue creada en 1990 con el objetivo de proteger, promover y defender los derechos humanos y colectivos del pueblo indígena awá de Colombia (Unipa, Camawari y Acipap, 2012).

como víctimas en calidad de sujetos colectivos de derechos, teniendo en cuenta “[...] el reconocimiento y la acreditación del territorio como víctima considerando las afectaciones ocasionadas en el marco del conflicto armado de manera grave, sistemática, desproporcionada, diferenciada y directa, que el mismo tiene una identidad y dignidad que lo constituye como sujeto de derechos” (Caso 2 de 2018).

Finalmente, el 12 de noviembre de 2019 la JEP acredita como víctimas en calidad de sujetos colectivos de derecho al *Katsa Su*, el gran territorio awá, y a los 32 cabildos indígenas, asociados y representados por la Unipa (Auto SRVBIT de 2018). Se reconoce también el derecho a participar efectivamente en todas las instancias del proceso en calidad de intervinientes especiales en el marco del Caso 2 (Corte Constitucional, 2018).

En cuanto a la participación y centralidad de las víctimas con pertenencia étnica, podemos establecer que, fruto de la consulta previa de las normas e instrumentos del SIVJRNR con la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC),¹⁶ la JEP creó el 5 de junio de 2019 un instrumento nuevo denominado: *Protocolo 1 para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz* (Protocolo 1 de 2019, pp. 9-21). En el punto 8 de dicho protocolo, la JEP asume, entre otros, el deber de “[...] garantizar información completa para que, en el marco de la autonomía, cada pueblo decida su participación, esto implica: [...] garantizar escenarios de diálogo amplios y suficientes en los cuales se respeten las formas, tiempos y procedimientos culturales, espirituales y territoriales de los pueblos” (Protocolo 1 de 2019).

Frente a la protección física, territorial y espiritual, el punto 6 del referido protocolo establece que

a partir del inicio de la actuación procesal, la JEP y las autoridades indígenas evaluarán el nivel de riesgo, efectos y afectaciones de las mismas sobre los pueblos, comunidades, sus integrantes, autoridades,

¹⁶ Esta consulta previa fue protocolizada el 19 de enero de 2019 en la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) (Protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz, 2019).

así como sobre el territorio ancestral y su espiritualidad. En caso de que la actuación implique un riesgo, la JEP y las autoridades indígenas concertarán las medidas de protección más efectivas, entre las cuales podrán incluirse capacitaciones, formas de protección espirituales y demás estrategias que los pueblos y comunidades estimen cultural y territorialmente apropiadas para salvaguardar su pervivencia física y permanencia cultural colectiva e individual (Protocolo 1 de 2019, p. 10).

En igual sentido, en el capítulo étnico incorporado al Acuerdo Final de Paz, se instituye que se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, tales como garantizar el fortalecimiento de la guardia indígena (capítulo étnico, 2016). Y además que, en concordancia con el principio de equidad y el derecho a la igualdad material, se aplicará a los pueblos indígenas el máximo estándar de protección en cada caso correspondiente, de acuerdo con sus particularidades y tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural (punto 8 del Protocolo 1 de 2019). Para el respectivo cumplimiento de lo citado, el reglamento interno de la JEP, en su artículo 97, determina una serie de garantías presupuestales, de la siguiente forma: “El proyecto de presupuesto de inversión de la Secretaría Ejecutiva debe incluir un rubro diferencial que garantice la disponibilidad presupuestal para garantizar el acceso y accesibilidad efectiva a la JEP, de forma que se materialice lo establecido en el capítulo étnico de este reglamento” (JEP, Acuerdo 1, 2018, p. 23).

El contenido normativo analizado realmente es innovador y eleva el estándar legal interno respecto de los derechos colectivos y la protección de los pueblos indígenas. Además, destina un presupuesto específico para el desarrollo de los diálogos interculturales, cuestión que siempre ha quedado por fuera de los marcos legales de la justicia ordinaria; no obstante estos avances, es necesario confrontar el contenido normativo con su implementación real y práctica en los territorios colectivos indígenas donde se encuentran las víctimas del conflicto armado.

Debido a que la participación del pueblo awá en el SIVJRN está por el momento concentrada principalmente en la JEP, en lo que sigue analizaremos cómo la centralidad de los derechos de las víctimas —especialmente de las mujeres indígenas— establecida en el referido marco normativo de

la JEP se ve seriamente afectada por la persistencia de la violencia armada y las desigualdades sociales estructurales en el territorio awá de Colombia. Elementos que limitan la efectiva participación y garantía de sus derechos, y además inciden negativamente en las iniciativas de construcción de paz en el territorio indígena awá.

Barreras específicas que limitan la participación plena y garantía de los derechos de los(as) víctimas indígenas acreditadas como sujeto colectivo en la JEP¹⁷

Las desigualdades estructurales y la intensificación de la violencia a través de viejos y nuevos actores armados en los territorios rurales donde habita el pueblo indígena awá generan nuevos retos para la implementación real del principio de centralidad de los derechos de las víctimas establecidos en los instrumentos y marcos jurídicos de la JEP, más aún cuando en ellas se imbrican factores asociados a la discriminación estructural, como la raza, el género, la adscripción étnica, la procedencia geográfica y económica, como es el caso de las mujeres awás (Rivera y Peters, 2016).

A continuación, se esbozan algunos obstáculos que están limitando sus derechos y garantías como parte del sujeto colectivo y del territorio acreditado como víctima en la JEP. Dichos obstáculos, además, impiden a largo plazo la concreción de iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social comunitario indígena.

Existe un conocimiento dispar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz

Con el Boletín de Prensa 1 de 4 de septiembre de 2012, las FARC-EP hicieron pública la determinación de iniciar una nueva fase de diálogos de paz con el gobierno colombiano a través del anuncio titulado “La Mesa de Conversaciones, un triunfo del clamor nacional por la paz y la solución política”, comunicado que fue leído desde la ciudad de La Habana por Timoleón Jiménez, excomandante de esa guerrilla (FARC-EP, 2012), y replicado a su

¹⁷ En aras de proteger la identidad de los(as) entrevistados(as) frente al contexto de violencia política que vive el departamento de Nariño, se ha obviado el nombre y apellido de los(as) participantes.

forma por los integrantes de las FARC-EP que aún ocupaban y ejercían control territorial en parte de la costa Pacífica nariñense (líderesa awá, 2020).

Desde ese entonces, los campesinos(as), afrodescendientes e indígenas, en medio del anhelo de paz, vivenciaron durante cuatro años el cese al fuego y el incremento de las hostilidades armadas en sus territorios como reflejo de los encuentros y desencuentros de las partes en la negociación y de las contradicciones y diferencias en las estructuras propias de la antigua guerrilla de las FARC-EP (*La Silla Vacía*, 2016). De ahí que las comunidades indígenas awás tengan un cierto conocimiento general sobre lo que fue el proceso de paz y las negociaciones que se llevaron a cabo en Cuba, mas no sobre el contenido de los puntos negociados y menos las estructuras institucionales creadas para la implementación del Acuerdo Final de Paz (líder awá, 2020).

Respecto a las autoridades indígenas, líderes, lideresas, consejeros(as), mayores, gobernadores(as) y asesores(as) profesionales de la Unipa, existe un conocimiento más avanzado sobre las competencias, estructura (unidades, salas, tribunales, comisiones), vigencia y procedimientos de la JEP; asesoras profesionales de la Unipa estiman que, si bien en la etapa previa de diálogos se han realizado encuentros para socializar una información general básica sobre el SIVJRN, dichas socializaciones han sido esporádicas, breves y discontinuas, de tal forma que no se enmarca dentro de un proceso pedagógico intercultural, acorde con la diversidad lingüística, más aún cuando el lenguaje técnico jurídico utilizado es desconocido para la mayoría de la población indígena awá, en su mayoría desescolarizada. Así mismo, la metodología y contenidos adolecen de un enfoque intercultural, que puede ser producto del desconocimiento de las formas particulares de aprehensión cognitiva tradicional de los(as) comuneros(as) awás (Consejería de Mujer y Familia-Unipa, 2020).

La precaria socialización y pedagogía sobre la JEP conduce a la ausencia de conocimiento previo del colectivo indígena y en particular de las mujeres que han sido víctimas de diferentes delitos en el marco del conflicto armado, desconocimiento que incide para poder tomar una decisión informada frente a la participación en los mecanismos judiciales del sistema.¹⁸ Ello conlleva

¹⁸ Las actividades de socialización y pedagogía con las diferentes comunidades son una función específica de la Secretaría Ejecutiva de la JEP a través de sus enlaces territoriales y étnicos (JEP, Acuerdo 1 de 2018).

la ausencia de un proceso de sensibilización colectivo, el cual constituye un requisito previo para luego someter las decisiones colectivas ante las asambleas generales, donde se toman las decisiones finales que legitiman y refuerzan la necesidad de participación en espacios institucionales como la JEP (Consejería de Mujer y Familia-Unipa, 2020).

Otro de los mayores problemas que perciben los(as) líderes(as) awás radica en la ausencia de un presupuesto concreto destinado a la socialización y difusión de contenidos dentro de las comunidades indígenas para dar legitimidad a la participación en la JEP. Como consecuencia, el desconocimiento y la ausencia de presupuesto imposibilitan la eficaz circulación de información de los(as) líderes(as) a sus bases territoriales, que se encuentran dispersas en 32 resguardos asociados a la Unipa con sus respectivos cabildos, conformados por más de 20 200 comuneros(as).¹⁹

Lo anterior limita la difusión de la información, requisito clave para las decisiones colectivas que se realizan a través de las asambleas generales, las cuales se constituyen en el mayor órgano de decisión colectiva, un proceso que otorga la legitimidad a las actuaciones posteriores del colectivo (Rivera, 2019).

La ausencia de garantías de seguridad y mecanismos de protección frente a la persistencia del conflicto armado

A cuatro años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la violencia no se detiene. Es más, en 2020 se han incrementado las acciones de violencia armada en los territorios ancestrales colectivos de este pueblo. Al menos 31 834 personas (Barbacoas: 8270, Ricaurte: 13 625 y Tumaco: 9939) pertenecientes al pueblo indígena awá están en riesgo por diferentes amenazas, en hechos que se han registrado en varios resguardos ubicados en estos municipios. De igual forma, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA-Colombia):

¹⁹ De acuerdo con los listados censales aportados por la Unipa, se registran 20 968 personas. Cinco resguardos awás aún están en proceso de titulación. Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas, a favor de las cuales se constituyen y, conforme con los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables (Unipa, 2012).

No hay garantías de seguridad para el ingreso de funcionarios de la administración pública y organizaciones humanitarias a zonas con presencia de grupos armados organizados (GAO) donde se debe dar respuesta a las emergencias humanitarias. Insuficientes medidas de protección que garanticen la vida de las poblaciones afectadas por el conflicto y la violencia armada. Existen barreras para la documentación, censo y registro de las comunidades afectadas por los hechos victimizantes ya mencionados (desplazamientos y confinamientos), que limitan la capacidad de respuesta institucional y las acciones de complementariedad que se puedan realizar en los territorios (2020).

Aparte de la presencia de nuevos actores armados, también influyen las malas experiencias vivenciadas por esta comunidad indígena con los esquemas de seguridad proporcionados por el Ministerio del Interior a través de la Unidad de Protección a integrantes amenazados por grupos armados. Estas medidas, al carecer de un enfoque étnico territorial, pueden incluso llegar a visibilizarlos más frente a los actores armados, tal como lo manifestó un exgobernador de un resguardo awá: “Nuestro trabajo es trochar en el campo, entonces voy a explicarle: imagínese yo echando pala con ese peso del chaleco, es que mire doctora un plan de minutos, un *avantel* (teléfono móvil con línea Avantel) y un chaleco antibalas allá en el territorio en vez de protegernos nos pone más rápido en la tumba [...]” (exgobernador de la Unipa, 2020).

Igualmente, hay quejas frente al desconocimiento de las realidades territoriales de los integrantes del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem),²⁰ que realiza los análisis y valoración del riesgo para otorgar las medidas de prevención y protección. Así mismo, la ausencia del enfoque étnico ha incidido en una errónea implementación de medidas, tales como el apoyo para la reubicación temporal,²¹ que han

²⁰ El Cerrem entró en funcionamiento a través de la promulgación del Decreto 4912 de 2011. Según la ACNUR, desde el año 2015 existe un enfoque de evaluación de riesgos para colectivos (Cerrem, 2020).

²¹ Apoyo de reubicación temporal: constituye la asignación y entrega mensual al protegido de una suma de dinero, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo (Portafolio de servicios y trámites, UNP, 2018).

promovido el abandono del territorio, del liderazgo comunitario, y el debilitamiento de procesos comunitarios:

[...] primero que mi situación la evaluaban esos señores del comité de Bogotá que desde allá sin conocer decían que no tengo riesgo alto, bueno cuando la cosa se puso más difícil ahí me dieron una ayuda para mantenerme acá en la capital, pero, entonces, yo ya no soy lo que era antes, he dejado el territorio, ya no puedo participar como awá en las decisiones ni saber cómo está mi familia, cómo está mi comunidad, por todo esto mi familia se ha desintegrado y hasta la misma comunidad lo empieza a mirar como feo, yo creo que piensan que si uno regresa trae el peligro [...] triste, muy triste ese rechazo²² (exgobernador awá, 2020).

Estas experiencias negativas con la institucionalidad pueden ser referentes para que la JEP pueda desarrollar espacios y mecanismos pensados desde el contexto, territorialidad y cosmovisión indígena awá, para incorporar medidas de protecciones individuales y colectivas adecuadas y pertinentes al escalamiento de la violencia en los territorios colectivos indígenas.

El miedo a ser revictimizados(as)

El miedo a ser revictimizados(as) personal, familiar y comunitariamente ante la eminente persistencia del conflicto armado en sus territorios colectivos es uno de los principales motivos para permanecer en silencio y abstenerse de participar en el SIVJRNR. Esto se debe a que los actores armados ilegales, bajo nuevos nombres e insignias, continúan ejerciendo control territorial en la zona rural de la costa Pacífica nariñense (asesora profesional de la Unipa, 2020).

Esta información ha sido corroborada por el informe de la Defensoría del Pueblo. En dicho documento se alerta e informa que, en este último año, se han vuelto a reagrupar disidencias y reincidencias en el territorio rural de Tumaco (Defensoría del Pueblo, 2020). Así mismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en 2019, denunció la presencia de disidencias

²² Entrevista con un exgobernador de un resguardo costero del pueblo awá, víctima del conflicto armado, que lleva ya más de tres años desplazado en Pasto.

de las FARC-EP y quince actores más, incluyendo bandas delincuenciales y el ELN, quienes, antes del Acuerdo Final de Paz de 2016, no hacían presencia en territorio awá. Hoy, estas estructuras armadas se disputan las zonas que antes ocupaban predominantemente las FARC-EP (Quintero, 2020).

La ausencia de garantías de seguridad para la vida de las víctimas constituye uno de los principales aspectos que vienen limitando la participación, especialmente de las mujeres awás en la JEP; estas mujeres, como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, tienen miedo, ya que persiste la amenaza de los actores armados frente a todos(as) aquellos(as) que acuden a la justicia oficial, pues se los considera como informantes o “sapos(as)” (exgobernador awá, 2020).

Otro de los precedentes negativos instalados en la memoria del pueblo awá es la ausencia de medidas de protección para las víctimas, principalmente mujeres awás que han participado en los procesos de la justicia ordinaria; y la revictimización que han sufrido en los procesos penales bajo la Ley 975 de 2005, la ineficacia de las medidas cautelares para los victimarios y, además, el incumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares decretadas por la CIDH²³ para proteger al pueblo awá en medio del conflicto armado abren dudas e incertidumbres frente a la JEP (defensora de Derechos Humanos, 2020).

Por otra parte, la infiltración de personas afines a los actores armados en el sistema judicial, la Fiscalía y la fuerza pública en el pie de monte costero y el litoral Pacífico nariñense se ha evidenciado en las denuncias y los procesos jurídicos adelantados en la justicia ordinaria y, particularmente, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. En esta última los(as) comuneros(as) indígenas awás han sido revictimizados(as) toda vez que sus declaraciones y testimonios ofrecidos bajo reserva sumarial han llegado a oídos de sus agresores individuales y colectivos, que ejercen nuevas amenazas y agresiones sobre las víctimas y comunidades (defensora de Derechos humanos, 2020).

De ahí que estas experiencias insatisfactorias generen temor y desconfianza frente al manejo de sus testimonios tanto en procesos judiciales

²³ Bajo el artículo 25 del reglamento de la CIDH, el 16 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena awá de los departamentos de Nariño y Putumayo (Colombia).

posteriores como en la JEP. Ello vuelve a demostrar el desconocimiento que se tiene ante el contenido y funcionamiento de la JEP, que, en el reglamento general, estableció una obligación de confidencialidad acorde con los principios rectores de la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto de los magistrados como de sus equipos frente a la información allegada a sus despachos (Ley 1922 de 2018).

La denegación o negligencia en las garantías de seguridad colectiva e individual para el pueblo awá y, en particular, para las mujeres que participan en los diferentes momentos procesales de la JEP puede causar el efecto contrario al objetivo del contenido restaurativo de esta justicia especial (Ley 1922 de 2018). Incluso, puede profundizar la situación de vulnerabilidad previa, aprovechada por los actores armados para la comisión de los graves crímenes investigados por esta jurisdicción y que puede ser explotada por nuevos actores armados que quieran ejercer el control territorial, normar y reglamentar las conductas de los(as) comuneros(as) indígenas, grupos ilegales a los que la contribución con la justicia transicional e institucionalidad oficial no les conviene (defensora de Derechos humanos, 2020).

Los precedentes negativos descritos fundamentan el miedo y la desconfianza en la diligencia del Estado y sus instituciones de justicia en la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual que participen en procesos judiciales. Las experiencias negativas y el desconocimiento de las herramientas y mecanismos que les garanticen seguridad en la JEP refuerzan los temores de las mujeres a la revictimización de su familia y de su comunidad, obviando, por ejemplo, que pueden participar activamente en las etapas procesales mediante representantes y, en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales, tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor (Auto SRVBIT de 2019). Del mismo modo, desconocen que tienen el derecho a solicitar las medidas de protección a sus derechos fundamentales cuando se vean amenazados por su participación en la JEP, y que las medidas de protección deben concretarse a través de la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural con la JEP.²⁴

²⁴ De acuerdo con los artículos 1º y 70 de la Ley 1922 de 2018, y el punto 6 del Protocolo de coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz (Ley 1922/2018, p. 13).

Desigualdades socioeconómicas estructurales

En el departamento de Nariño, antes de la violencia generada por el conflicto armado ya existía una violencia primigenia y estructural, reflejada en el distanciamiento histórico, geográfico y político del resto del país, propiciado por la segregación espacial y el alto componente racista de las políticas públicas y de ordenamiento territorial desarrollado desde la Colonia (Solarte, 1991, pp. 9-12). Lo anterior tiene un reflejo histórico en el mayor porcentaje de indígenas y comunidades negras en la ruralidad del departamento de Nariño con relación al resto del país, ya que este territorio al no ser importante para el poder central fue por muchos años abandonado a su suerte, convirtiéndose en refugio para grupos étnicos y otros sectores perseguidos y excluidos en la Colonia.²⁵

El vacío de poder, junto a la ausencia de políticas públicas, propició que los territorios indígenas, incluyendo el awá, se convirtieran a partir de la década de los noventa en un escenario fructífero y geoestratégico para el desarrollo de la guerra y de economías ilícitas.²⁶ Con el Acuerdo Final de Paz el gobierno tampoco pudo llenar el vacío de poder dejado por las antiguas FARC-EP, de tal forma que el control territorial que siguen ejerciendo grupos armados no estatales dentro de los entornos tradicionales comunitarios habitados ancestralmente por el pueblo awá, aunado a las condiciones socioeconómicas históricamente desventajosas, refuerza las barreras que

²⁵ De conformidad con el último censo oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2005), el 10,8% de los habitantes de Nariño se reconocen como población indígena, de los cuales el 50% son mujeres (awás, eperara siapidara, ingas, pastos, cofán, quillacinga). Un 18,8% se identifica como población afro, y se asienta principalmente en la costa Pacífica nariñense hasta el piedemonte andino, distribuida en más de 50 consejos comunitarios, y el 49% son mujeres. En el departamento se reconoce en total un 29,6% de los habitantes como población étnica y afro, lo cual denota su acentuada pluralidad étnica y multicultural. Para 2005 se identificaron 65 resguardos indígenas legalmente constituidos distribuidos en 20 municipios y 40 territorios colectivos de comunidades negras titulados, los cuales se encuentran principalmente en la subregión costa Pacífica y occidente.

²⁶ Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado-adopción de medidas cautelares para proteger al pueblo indígena awá en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025/04, el Auto A004/09 y el Auto 174/2011; el Auto 004 del 26 de enero de 2009 ordena que se diseñen e implementen planes de salvaguarda étnica para 34 pueblos indígenas, así como el diseño e implementación de un Programa Nacional de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas, respetando para los dos casos el derecho fundamental a la consulta previa que tenemos los pueblos indígenas.

impiden un acceso real y efectivo a la justicia, a la verdad y a las garantías de no repetición (Rivera, 2015).

En los municipios donde habita la comunidad indígena awá, existe una precaria cobertura institucional en materia de salud, educación y justicia, que contrasta con un excesivo despliegue militar, por ejemplo; la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules en la zona rural de Tumaco (Fuerza Tarea Conjunta Hércules, 2020), lo cual refleja que del vacío de poder se pasó a una presencia diferencial del Estado, centrada en una estrategia contrainsurgente y en la doctrina de seguridad interna, desligada de las causas sociales y económicas de la violencia e ilegalidad como síntomas de las necesidades básicas insatisfechas relacionadas con una violencia estructural-institucionalizada (OIA y Cecoin, 2016).

La desigualdad estructural económica, política y social afecta especialmente y en forma diferencial a las poblaciones más vulneradas, como mujeres, niñas, adolescentes, indígenas, con la particularidad de que implica la brecha entre lo urbano y lo rural, lo que a su vez ha generado un distanciamiento político, social y cultural entre las comunidades indígenas que viven en la ruralidad y el resto de Nariño.²⁷

Las desigualdades socioeconómicas estructurales se ven reflejadas en la imposibilidad real de acceder a la justicia y, en este caso concreto, de ejercer su derecho de participación en la JEP, derecho que pierde su relevancia en los resguardos más alejados donde las familias no logran reunir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, tales como alimento, salud, y donde no existe la cobertura necesaria para la educación, educación sin la cual no se pueden entender los avanzados marcos jurídicos que desconocen las particularidades de estos pobladores cuya lengua materna no es el español y que en gran parte se encuentran desescolarizados.

Debido a esto, el enfoque diferencial étnico de la JEP debe llevarse a la práctica reconociendo que en los contextos indígenas las relaciones asimétricas se hacen patentes por las desigualdades estructurales y denegación de derechos fundamentales, como, por ejemplo, la educación interétnica, que

²⁷ En la lucha por la subsistencia y la generación de ingresos, Nariño, como departamento fronterizo y marginado del centro del país, ha desarrollado una vinculación funcional en aspectos de su economía con el Ecuador, por lo que la principal actividad económica son las transacciones comerciales con este país.

les permitiría traducir y entender el contenido del lenguaje tecnicista del derecho que usan los funcionarios(as) de la JEP, que a la vez impide llevar a cabo un diálogo intercultural de tipo igualitario con las bases indígenas, y menos en los tiempos que impone esta jurisdicción, toda vez que el orden y los tiempos de las comunidades indígenas difieren de los tiempos y el orden establecido y pensados desde el centro urbano de la capital colombiana.

Se debe entender que el pueblo awá de Colombia sigue siendo afectado no solo por la reconfiguración del conflicto armado, sino también por la intensificación de las desigualdades estructurales en su territorio ancestral debido a la pandemia por la covid-19, reflejadas en la falta de cobertura de internet y carencia de equipos informáticos y recursos telemáticos en los resguardos más alejados e imposibilidad económica (no tienen dinero para recargas) en los que están más cerca de la cabeceras municipales, sin olvidar el analfabetismo digital, que ha limitado el desarrollo normal de su vida organizativa interna y la comunicación con la JEP.

Para revertir a corto plazo estas desigualdades y lograr a futuro que las iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social comunitario sean factibles, las sanciones de tipo restaurativo que imponga la JEP deben tener los presupuestos necesarios para lograr la participación activa del colectivo indígena acreditado y la centralidad de los derechos de las víctimas indígenas incorporadas en la normatividad de la JEP (Ley 1922 de 2018, art. 1º, par. a).

Desigualdades socioterritoriales

Uno de los obstáculos para el acceso de las comunidades indígenas y, en particular, de las mujeres awás a la justicia ordinaria han sido las grandes distancias que tienen que recorrer para asistir a los tribunales judiciales que se instalan en las cabeceras municipales (Rivera y Peters, 2016, p. 90), situación que no ha variado sustancialmente en la estructura actual de la JEP. Si bien existen sedes territoriales que, para el caso de Nariño, se encuentran en Pasto, su ubicación centralista deriva *per se* en un obstáculo material y objetivo muchas veces insalvable por las grandes distancias y por la carencia de dinero para viajar hacia la capital del departamento, sumado al reducido personal que brinda acompañamiento psicojurídico con un enfoque étnico.

El personal en su mayoría lo componen abogados(as) y psicólogos(as). Este grupo territorial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) cubre 147 municipios en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, que en conjunto cuentan

con más de mil víctimas (JEP, comunicados 26 y 128). No obstante, pese a la idoneidad profesional del equipo, se vislumbra una ausencia de un enfoque étnico-territorial, que impide la creación de lazos de confianza previos que faciliten la interlocución con la institucionalidad, problemática que en parte se ha solucionado parcialmente con la concreción y funcionamiento de la Comisión Étnica de la JEP,²⁸ y con ella la posterior incorporación del respectivo enlace étnico para Nariño, que, sin embargo, no logra superar la barrera lingüística existente, puesto que ningún funcionario habla ni entiende la lengua materna awapit y tampoco existe un(a) traductor(a) en la oficina territorial, lo que limita la interlocución con la comunidad awá fuera de sus miembros bilingües (Rivera, 2019).

La JEP ha tratado de cerrar estas brechas espaciales haciendo presencia en el territorio. A la fecha, en el marco del Caso 2, se han realizado trece jornadas de aproximación del caso a las víctimas en territorio (JEP, 2019a). En el caso del pueblo awá, delegados(as) de la JEP han llegado hasta la cabecera municipal de Barbacoas, zona de El Diviso, para establecer diálogos con autoridades y representantes del pueblo awá; no obstante, esta apuesta positiva contrasta con la ausencia de disponibilidad presupuestal para que representantes de los 32 resguardos acreditados puedan asistir a esos diálogos, participar, informarse y, así mismo, transmitirlos al resto de la comunidad para las posteriores consultas y decisiones colectivas propias (asesora profesional de la Unipa, 2020).

Escepticismo frente a garantía de sus derechos en tanto víctimas del conflicto armado

Este escepticismo se acentúa más en el caso de las mujeres indígenas awás, víctimas de diversas formas de violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual; los factores de discriminación basados en la pertenencia étnica, las desigualdades socioeducativas y el género se articulan, imbrican, recrean, reforzando las barreras que limitan la participación en el SIVJRN.

²⁸ La Comisión Étnica de la JEP es una instancia permanente que se encarga de promover la efectiva implementación del enfoque étnico-racial en el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN) y la efectividad de la coordinación entre la JEP y las diferentes justicias étnicas.

Esto se manifiesta una vez más en los obstáculos evidenciados por las mujeres awás frente a su participación en la JEP como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, situación que ha obstaculizado, por ejemplo, la inclusión de casos de violencia sexual en el primer informe presentado ante la JEP (Rivera, 2019).

En las bases indígenas y sobre todo en las mujeres que han sido víctimas en el marco del conflicto armado, persiste el desconocimiento y preocupación frente a cómo se garantizarán sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, en especial frente a los hechos constitutivos de violencia sexual. Ante la garantía de sus derechos como víctimas colectivas e individuales, dentro de la comunidad se plantean un dilema entre las expectativas de justicia que se puedan generar en las mujeres awás y el desgaste emocional que pueden llegar a sufrir durante el proceso judicial enmarcado en la JEP. Siendo prevalente el escepticismo frente a que las sanciones con contenido restaurador en relación con sus derechos en tanto víctimas no pueden producirse si se perpetúa la guerra en su territorio, las prácticas de discriminación, vejámenes, estereotipos y exclusiones de las que siguen siendo víctimas como colectivo y como comuneras indígenas lo ratifican. Además, como ya se enunció antes, el miedo a la revictimización es latente (asesora profesional de la Unipa, 2020).

Lo anterior, aunado al desconocimiento de los lineamientos básicos que guían el proceso de priorización de casos y situaciones en la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), genera confusiones tales como pensar que, así como en la justicia ordinaria, los hechos y victimizaciones individuales presentados en el informe preliminar van ser individualmente investigados, esclarecidos y sancionados por parte (Auto SRVBIT-07912-Caso 2, 2018) de la JEP en tanto que ya han sido acreditados como víctimas en el Caso 2. El desconocimiento y escepticismo originan que, en ese ejercicio de ponderación frente a la participación en la JEP, pesen más las experiencias y consecuencias negativas de su participación que el anhelo por el cumplimiento de sus derechos en tanto víctimas del conflicto armado. En consecuencia, un proceso pedagógico enfático, sumado a una ruta de concertación de las medidas de protección con un enfoque de género y étnico apropiado para las víctimas y sus familias, resulta urgente.

Ausencia de una perspectiva étnica ante la contención y asistencia psicológica de las víctimas

La persistencia del trauma físico, emocional y espiritual, aunada a las afectaciones psicosomáticas en el pueblo awá y, en particular, en las mujeres que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo de violencia sexual, es patente. Ello se manifiesta en el abordaje que ha hecho la Consejería de Mujer y Familia de la Unipa sobre la problemática de la violencia de género mediante talleres en algunos resguardos indígenas awás. Al respecto manifiestan la preocupación por abrir heridas espirituales en un proceso judicial sin la debida contención psicológica individual, comunitaria y colectiva, acorde con la pertenencia étnica y con la cosmovisión awá (asesora profesional de la Unipa, 2020).

Existe también temor, preocupación y desconocimiento frente a los procedimientos por seguir para la recolección de pruebas, pues se parte de la experiencia en el proceso ordinario penal, donde la práctica inmediata de las pruebas, forenses, patológicas y psicológicas, necesarias para adelantar los procesos, suele ser revictimizante y profundamente dolorosa para las mujeres, más cuando, por la ubicación geográfica, la inexistencia de rutas de atención con un enfoque étnico y el control territorial que ejercen los actores armados en los resguardos awás, no se ha brindado la atención médica, sanitaria y psicológica requerida (defensora de Derechos Humanos, 2020). Por esto, no se han reducido las consecuencias psicosomáticas de la victimización, factores que ya han incidido en el desistimiento a participar en los procesos judiciales ordinarios (Rivera y Peters, 2016, p. 90).

Otro de los temores manifestados, en especial por las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, son las consecuencias que traiga para su entorno inmediato saber que han sido agredidas sexualmente. Se inquietan cuando imaginan la percepción que podría tener la comunidad, sus familias y parejas frente a su valía, toda vez que en la figura de la mujer se encarnan muchos valores colectivos que se transgreden con la violencia sexual. Cabe resaltar que el rol de la mujer es un pilar fundamental de la vida comunitaria y la reproducción de la cultura awá es muy fuerte (Rivera y Peters, 2017, p. 90).

Desde pequeñas las mujeres ejercen roles fundamentales para la pervivencia de la cultura awá, siendo las principales transmisoras de la cosmogonía

indígena en el principal entorno de socialización que es la cocina, lugar donde no solo se ejercen labores de cuidado, sino también se recrean y mantienen vivas las historias ancestrales fundantes de la comunidad. De tal manera que su rol como hermanas, compañeras sentimentales, madres y abuelas es muy valorado. Hechos victimizantes como la violencia sexual opacan este lugar asignado dentro de la vida comunitaria y más aún si la violencia sexual proviene de los actores armados con los cuales han tenido enfrentamientos por la violación permanente de sus derechos territoriales y autonomía.

Muchas de las victimizaciones sufridas por las mujeres awás son desconocidas para el círculo familiar y comunitario, y, otras, aun siendo conocidas por las familias por haberse perpetrado de forma pública, no quieren reabrir heridas, dado el miedo al señalamiento, al desprecio de sus parejas, familia y comunidad. En el sentido anterior, las bases indígenas no avizoran garantías claras para recomponer los desequilibrios sociales comunitarios, familiares y de seguridad que se deriven a futuro por la participación dentro de la JEP; no obstante, las autoridades guardan cierta esperanza y optimismo en este nuevo escenario de justicia transicional (asesora profesional de la Unipa, 2019).

Conclusiones

Si bien se negoció la paz entre la antigua guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano, la guerra continúa en muchos territorios indígenas. Esto también es cierto para el territorio awá en el suroccidente colombiano. Esta realidad de una ‘paz violenta’ que vive el territorio incide en las iniciativas de paz y la reconstrucción del tejido social comunitario, que depende en gran parte de la garantía de los derechos en tanto víctimas, del cumplimiento del enfoque restaurador de las sanciones que imponga la JEP, pero también de la puesta en marcha de los PDET, que deben garantizar el paulatino mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

La reconfiguración del conflicto armado en el territorio que habita el pueblo indígena awá ha potencializado sus efectos negativos para la población (*Verdad Abierta*, 2020). Este hecho, sumado a las diferencias culturales y desventajas socioeconómicas, articula diferentes factores de discriminación, como la raza, adscripción étnica, procedencia geográfica y género, intensificando las barreras materiales y subjetivas a la hora de agenciar sus derechos ante los sistemas de justicia, incluyendo la JEP (Rivera y Peters, 2017, p. 90).

La implementación de la justicia transicional en un país que aún se encuentra en medio de la violencia, con una diversidad de actores armados ilegales que continúan al acecho, genera múltiples obstáculos para la garantía de los derechos de las víctimas y la participación efectiva en la construcción de paz y reconstrucción del tejido comunitario, lo que se acentúa en el caso de las mujeres awás, pues en ellas se imbrican factores asociados a la discriminación estructural como la raza, el género, la adscripción étnica, la procedencia geográfica y económica (Rivera y Peters, 2017, pp. 84-89).

A su vez, la persistencia del conflicto y de las desigualdades sociales estructurales intensifican e inciden en la denegación de justicia, produciendo un caldo de cultivo para la reproducción y recreación de nuevos escenarios de violencia que afectan principalmente a las mujeres y niñas indígenas awás, quienes ven disminuida su capacidad de agencia y participación en la concreción de iniciativas de paz y reconstrucción del tejido social comunitario en medio del llamado posconflicto.

En relación con lo anterior se hace necesario sostener y dar continuidad a los espacios de diálogo intercultural entre las autoridades indígenas del pueblo awá y la JEP (Protocolo 1 de 2019), y mantener espacios que permitan evaluar los niveles de riesgo, afectaciones y efectos que perciban las autoridades y mujeres indígenas en su territorio. Ello en aras de garantizar la integridad e integralidad del sujeto colectivo de derecho y, sobre todo, la seguridad de las mujeres víctimas que participen en la JEP y que mantienen condiciones particulares de vulnerabilidad debido a su género y pertenencia étnica (Ley 1922 de 2018).

En un futuro próximo la consolidación de iniciativas de paz depende de la capacidad que tenga el Estado y la JEP de brindar mecanismos efectivos de protección a las víctimas, a sus familias y a la comunidad awá, para lo cual la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP debe contar con la participación y evaluación de los niveles de riesgo reales a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección o por expertos que establezcan con las autoridades indígenas awás y delegados de la JEP los protocolos de seguridad más convenientes para garantizar la vida y, posteriormente, en un futuro la esperada paz territorial que cada día se ve más lejana.

Referencias

- (2008). *Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad*. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia.
- (18 de diciembre de 2014). Víctimas en La Habana: los que fueron y los que faltaron. *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/victimas-en-la-habana-los-que-fueron-y-los-que-faltaron/>
- (11 de febrero de 2016). ¿Por qué están muriendo los niños en La Guajira? *El Espectador*. Recuperado de <http://www.elespectador.com/opinion/editorial/estan-muriendo-los-ninos-guajira-articulo-616011>
- (31 de octubre de 2016). ‘Don Y’, el disidente de las FARC que azota a Tumaco. *La Silla Vacía*. Recuperado de <https://lasillavacia.com/historia/don-y-el-disidente-de-las-farc-que-azota-tumaco-58539>
- (5 de diciembre de 2018). ‘Arde’ la cordillera de Nariño y el Estado no hace mayores esfuerzos para evitarlo. *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/arde-la-cordillera-de-narino-y-el-estado-no-hace-mayores-esfuerzos-para-evitarlo/>
- (4 de septiembre de 2019). Uno de cada tres municipios en Colombia está en riesgo electoral por grupos armados. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/politica/uno-de-cada-tres-municipios-en-colombia-esta-en-riesgo-electoral-por-grupos-armados-article-879435/>
- (24 de septiembre de 2019). . La JEP es un ejemplo internacional según la CPI. *Canal institucional TV. Noticias-JEP*. Recuperado de <https://www.canalinstitucional.tv/noticias/jep-es-ejemplo-internacional-segun-corte-penal-internacional>
- (10 de febrero de 2020). Diálogo con asesora profesional de la Consejería de Mujer y Familia-Unipa. Pasto, Nariño.
- (s. f.). *El conflicto armado en Tumaco no terminó*. Recuperado de <https://www.savethechildren.org.co/articulo/el-conflicto-armado-no-acab%C3%B3-en-tumaco>
- Acuerdo Final de Paz. (2016). Capítulo étnico.
- Acuerdo Final de Paz. (2016). *Justicia Especial para la Paz*. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx>
- Anaya, J. (2010). *Relator especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Capítulo XIII. Colombia. La situación de violencia en contra del pueblo indígena awá en el departamento de Nariño*. Al HRC/15/37/Add.1. ONU. Recuperado de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9697.pdf?view=1>

- Auto SRVBIT-07912-Caso 2 (2018).
- Auto SRVBIT-Caso 2-079 del 12 de noviembre de 2019.
- Bret, R. (2017). *La voz de las víctimas en la negociación: sistematización de una experiencia*. PNUD.
- Castilla, C. E. (1999). *Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República*.
- Cerón, B., Morales, J., Ulloa, A., & Chaves, A. (1992). *Geografía humana de Colombia. Región del Pacífico*. Tomo IX. Pasto: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Colombia, Congreso de la República. Ley 1922 de 2018, “por medio de la cual se adoptaron unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”.
- Colombia, Congreso de la República. Ley 1957 de 2019.
- Colombia, Corte Constitucional. (2018). Sentencia C-080.
- Colombia, DANE. (2020). *Perspectivas territoriales de desarrollo socioeconómico*. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/280120-Info-Regional-Pasto.pdf>
- Colombia, Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. Recuperado de <https://www.cgfm.mil.co/es/conocenos/fuerza-de-tarea-conjunta-hercules>
- Colombia, Gobernación de Nariño. (2019). *El departamento de Nariño frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Programa Nacional de Desarrollo Humano (PDH)*.
- Colombia, JEP, Comisión Étnica. Protocolo 1 del 24 de julio de 2019. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/DocumentosJEPWP/protocolo.pdf>
- Colombia, JEP, comunicados 26 y 128 .
- Colombia, JEP. Auto 4 del 10 de julio de 2018, Sala de Reconocimiento de Verdad. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Auto%20004%20de%202018%20AVOCA%20CONOCIM>
- Colombia, JEP. Auto SRVBIT-Caso 2-079 del 12 de noviembre de 2019. Recuperado de https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/sala_de_reconocimiento/20191112-Auto_SRVR-079_12-noviembre-2019.pdf
- Colombia, JEP. (2018a). Acuerdo 1. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/salaplenujep/Acuerdo%20ASP%2001%20de%202018.pdf>
- Colombia, JEP. (2018b). *Reglamento general de la JEP*. Bogotá. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/salaplenujep/Acuerdo%20ASP%2001%20de%202018.pdf>
- Colombia, JEP. (2019a). *Boletín informativo*. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/02.html>

- Colombia, JEP. (2019b). *Protocolo para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz*. Bogotá. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/documentosjepwp/protocolo.pdf>.p.10
- Colombia, JEP. (2019c). *Protocolo 1-Comisión Étnica*. Recuperado de <https://www.jep.gov.co/DocumentosJEPWP/protocolo.pdf>
- Colombia, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2020). *Registro Único de Víctimas*. Recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>
- Colombia., Corte Constitucional. Sentencia T-126/18, M. P. Cristina Pardo Schlesinger. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-126-18.htm>
- Defensoría del Pueblo. (2020). *Alerta Temprana N° 001-20*. Pasto. Recuperado de <https://www.defensoria.gov.co/attachment/3033/AT%20N%C2%B0%20001-20%20NAR-Tumaco.pdf>
- Echandía, C. (1999). Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.
- Entrevista a asesora profesional de la Unipa, 10 de febrero de 2020, L. Rivera, entrevistador.
- Entrevista a Awá-Unipa, profesional de apoyo-Unipa, 2 y 3 de marzo de 2020, L. Rivera, entrevistador, Nariño, Colombia.
- Entrevista a defensora de Derechos Humanos, r. 1.-2, 3 de marzo de 2020, Pasto.
- Entrevista a defensora de Derechos Humanos, r. 1.-2, 5 de mayo de 2020, L. Rivera, entrevistador.
- Entrevista a exgobernador de un resguardo costero del pueblo awá, v. d., 13 de marzo de 2020, L. Rivera, entrevistador.
- Entrevista a líder indígena awá, 13 de febrero de 2020, Pasto, Nariño, Colombia.
- FARC-EP. (2012). *Boletín de prensa 1*. Recuperado de <http://www.cedema.org/index.php?ver=verlista&grupo=110&nombrepais=Colombia&nombregroupo=Fuerzas%20Armadas%20Revolucionarias%20de%20Colombia%20-%20Ej%E9rcito%20del%20Pueblo>
- González, M. A. (2008). *Confinamiento: la otra cara de la crisis humanitaria y de derechos humanos*. Bogotá: Codhes. Recuperado de <http://www.codhes.org/-codhes/images/biblioteca/DocCODHES12-Confinamiento.pdf>

- González, F., & Otero, S. (2006). *La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza*. Recuperado de <http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html>
- Joinet, L. (1997). *Informe final del relator especial*. E/CN.4/Sub.2/1997/Rev.1. Naciones Unidas.
- OCHA. (2020). *Colombia: impacto humanitario en Nariño. Informe de situación N° 1*. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/28082020_final_-_informe_situacion_humanitaria_narino_vf.pdf
- OEA. (2011). Ley 1257 de 2008 en conformidad con la Ley 906 de 2004.
- OEA. *Corte IDH, acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual: la educación y la salud*. OEA/Ser. L/V/II.Doc.6528. Bogotá.
- ONU. (2005). *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones al DIH a interponer recursos y obtener reparaciones*. Resolución 60/174.
- Quintero, C. P. (2020). En Tumaco nada ha cambiado para bien después del Acuerdo de Paz. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/en-tumaco-nada-ha-cambiado-para-bien-despues-del-acuerdo-de-paz-alcaldesa-articulo-900140>
- Rivera, L. (2019). *Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado: el caso awá*. Presentada en el Taller “Justicia transicional y memoria: Colombia en perspectiva latinoamericana”, Justus-Liebig-Universität Gießen, KU Eichstätt, Alemania.
- Rivera, L. (2015). El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas: una dicotomía entre Próspero y Calibán. *Resistencia*, 4, 28-31.
- Rivera, L., & Peters, S. (2016). Desigualdades, justicia transicional y posconflicto en Colombia. En S. Blanke & S. Kurtenbach (Coords.), *Violencia y desigualdad*. Buenos Aires: ADLAF Congreso 2016-Nueva Sociedad-Friedrich Ebert Stiftung.
- Salas, L. G., Wolf, J., & Camelo, F. E. (2018). *Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después del acuerdo de paz con las FARC-EP. Estudio de caso: municipio de Tumaco, Nariño*. Bogotá: Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz). Recuperado de <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2018/11/Capaz-7-baja.pdf>

- Sierra, L. (22 de mayo de 2019). Los Awá de Nariño están viviendo una nueva guerra en carne propia. *Pacifista*. Recuperado de <https://pacifista.tv/notas/los-awa-de-narino-estan-viviendo-una-nueva-guerra-en-carne-propia/>
- Unipa, Camawari, & Acipap. (2012). *Actualización Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá*. Nariño. Recuperado de https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_awa_1
- Unipa. (2012). *Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá*.
- Unipa. (2019). *Comunicado 2: Los pueblos indígenas en pie de lucha, frente a los incumplimientos y el olvido histórico del Estado, alzamos nuestros bastones y defendemos la vida y el territorio*. Pasto. Recuperado de <https://www.colectivodeabogados.org>
- Walsh, C. (30 de marzo de 2021). *Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir*. Recuperado de www.maxwell.vrac.puc-rio.br

Capítulo 9

**Lo que se teje mientras se teje:
sanación, reinterpretación desde el
presente y participación política
El caso de Asomeht en el sur del Tolima**

María del Pilar Salamanca Santos, Cristina Sala Valdés,
María Escilda Ramírez, Alixe Ulcue Albarracín

*Estar en la Asociación es estar en
familia, no sentirme sola, ser libre.*

BERTHA BARBOSA (Asomeht, 2019)

Introducción

Las mujeres han sido actores clave en la reconstrucción temprana de sus comunidades, del tejido social, y en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. En contextos de violencia y conflicto interno, como es el caso de Colombia, las mujeres son quienes, a través de prácticas solidarias de organización en redes de apoyo (Brito, 2010), asumen, de manera más decidida, diferentes roles y acciones para superar dicha violencia. En momentos de conflicto y posconflicto, las mujeres han desarrollado importantes iniciativas organizacionales, generando así nuevos imaginarios que apuestan por la construcción de paz, fomentando nuevos proyectos, muchos de ellos amparados en la memoria, que facilitan la creación de espacios locales de resistencia, resiliencia y reparación (Grupo de Memoria Histórica, 2009). En estos espacios se produce la interacción, la relación y las conversaciones en torno a cursos y temáticas de interés para las asociadas, como son sus proyectos de vida, autoconocimiento y autovaloración, elaboración de duelo, relaciones

interpersonales, derechos humanos, gestión. Es allí donde las mujeres debaten y elaboran sus reclamaciones como electoras potenciales, además de fomentar la participación ciudadana y pedir la rendición de cuentas de instituciones nacionales y multinacionales (Ferrert y Mueller, 2002, en Ahmed Ali, 2015, p. 154). Y así, poco a poco, las prácticas consideradas demasiado triviales o privadas para la discusión pública las mujeres las van convirtiendo en asuntos de toda la comunidad (Young, 1987, en Ahmed Ali, 2015, p. 154), en asuntos políticos. Esta relación que se va tejiendo entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo privado y lo público, toma diferentes formas: la forma de tejido, la forma de conversaciones intergeneracionales e interculturales para rescatar las memorias, la forma de marchas colectivas en las calles, etc.

Uno de los pilares de las organizaciones de mujeres constructoras de paz es el trabajo colectivo con otras organizaciones, apoyos y alianzas para unir fuerzas y conseguir acciones efectivas, sin buscar protagonismos o luchas individuales. La base de ello está en el reconocimiento de que los logros son fruto del trabajo conjunto con otros sectores de la sociedad civil o con el Estado. La paz se convierte en un objetivo colectivo que suma esfuerzos (Marulanda, 2018).

La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima (Asumeht) es una fuerza organizativa sobresaliente de mujeres constructoras de paz, ubicada en el corregimiento de Herrera (Rioblanco, Tolima, Colombia). Esta región está marcada por el surgimiento de la guerrilla, las violencias derivadas del conflicto, la semaforización institucional y la estigmatización por ser oriundos y residentes de esta zona. Desde 2017, y gracias al proceso de paz en Colombia, Asumeht está facilitando espacios para el encuentro entre mujeres que, teniendo al bordado como excusa, reflexionan y cuestionan el papel de la mujer en su comunidad y su participación política. Así mismo, en una apuesta por el diálogo intergeneracional que permita la reconstrucción de la memoria, se han aliado con el grupo juvenil del corregimiento, Herrera Juvenil, para resignificar su identidad, la cultura y la vida en comunidad.

El proyecto “Escuela, territorio y posconflicto: construyendo una cultura de paz local en el sur del Tolima” ha facilitado parte de estos encuentros y ha permitido aflorar con más fuerza los procesos de construcción de paz desde este tejido organizativo del sur del Tolima.

Organizaciones de mujeres: cuidado, interdependencia y participación política en medio de la violencia

Tradicionalmente, las mujeres han sido consideradas como creadoras de vida y cuidadoras en el marco de normas culturales, de modo que juegan un papel central en la formación de la sociedad y de la protección de sus propias familias (Moola, 2006).

La teoría política de Sevenhuijsen (Comins, 2015) propone el cuidado como un tema de ciudadanía con importantes implicaciones prácticas y políticas, en donde se reconoce la relevancia de las relaciones, las emociones y la empatía en el contexto de la formación moral y ética inherente a la ciudadanía (Comins, 2015, en Cruz, Calderón, Flórez y Córdoba, 2018). Visibiliza así el concepto de ciudadanía cuidadora y argumenta que el cuidado debe reconciliarse con la justicia y las preocupaciones democráticas.

Las relaciones y emociones de las que hablamos no suceden en el plano de la horizontalidad, como lucha del sujeto moderno por alcanzar sus derechos (Cavarero, 2014, p. 35). Son relaciones que suceden en el plano del nosotras, en un plano inclinado que nos pone a dialogar con los otros y con las otras asumiendo diferentes lugares de enunciación que nos otorgan también distintas agencias de cambio y roles (el de relatar las memorias, el de conocer los saberes ancestrales, el de la lucha por el futuro, etc.). Las mujeres se inclinan hacia el tejido, hacia la huerta, hacia el cuidado de los más jóvenes, hacia el cuidado de los bebés, creando relaciones de interdependencia que las hacen vulnerables.

Decir que cualquiera de nosotros es un ser vulnerable es, por tanto, establecer nuestra dependencia radical no solamente respecto a los otros, sino respecto a un mundo continuo. Y esta cuestión tiene implicaciones en el momento de comprender quiénes somos, como seres apasionados, sexuales y ligados a los otros por necesidad, pero también como seres que intentamos persistir, entendiendo que esa persistencia puede y está en peligro cuando las estructuras sociales, económicas y políticas nos explotan o malogran (Butler, 2014, p. 48).

En contextos de violencia y posconflicto, esta interdependencia en la construcción del quiénes somos, en el acto de persistir, está asociada a la

memoria que se tiene de la vida creada en medio del conflicto violento, pero también a los sueños de futuro, a preguntarnos qué proyectos de vida y de ciudadanía queremos. En definitiva, qué tipo de continuidad queremos darle al mundo. En esta línea, Emma Wills (2011) resalta la importancia de construir relaciones entre conciudadanos y conciudadanas porque desde allí se genera un actuar por y con el otro y la otra para que las experiencias no sean solo compartidas, sino también sentidas, a partir de las que se fomente empatía y se posibilite el “surgimiento de una ciudadanía actuante que exprese su condición política en la acción persistente por la no repetición” (Wills, 2011, en Cruz, Calderón, Flórez y Córdoba, 2018). Por lo tanto, el cuidado, la construcción de ciudadanía, la interdependencia en contextos de conflicto violento y posconflicto genera espacios en donde lo político queda definido como “la capacidad de decisión de los actores sociales dentro de sus vidas y tradiciones, sobre sus relaciones, sus bienes y espacios, su economía personal y privada, y su ética, en medio de un conjunto de significados y relaciones más amplios que el de la política” (Acevedo Arango, 2012, p. 57). En otras palabras, la ética del cuidado rompe la dicotomía entre lo público y lo privado, y eleva el asunto a la reflexión política.

De todo esto dan cuenta organizaciones de mujeres en todo el mundo que están construyendo paz. Como *Femme au Fone* (República Democrática del Congo), un proyecto innovador que creó un mecanismo para resaltar los incidentes de seguridad contra las mujeres y generó un sistema de información que permitiese a un equipo radiofónico hacer presión e interpelar a las autoridades, en un lugar (Kivu del Norte y Kivu del Sur) donde el conflicto entre distintos grupos armados ha ocasionado una ola de violencia contra las mujeres, pero también permitió las conversaciones, el aprendizaje del autocuidado, etc.; las mujeres arpilleras en Chile, quienes encontraron en el tejido una función reparadora y sanadora que les permitió establecer de nuevo relaciones de confianza, y poder vivir en los desacuerdos (Bacic, 2016); o los ‘Círculos de Paces’ en Colombia, una organización que le apuesta a la construcción de paz a partir del diálogo generacional y la formación de mujeres, son otros ejemplos de ello.

En muchas ocasiones, las organizaciones de mujeres representan un saber, sentir y hacer transformador no violento, que busca revertir las condiciones de violencia directa, estructural o cultural, como una respuesta

desde sus capacidades individuales y colectivas hacia la paz y la búsqueda de alternativas hacia una vida más justa (Sandoval, 2015).

Por lo tanto, las organizaciones de mujeres que favorecen espacios de encuentro que permiten a estas ser oídas y ayudar a sus semejantes, a su vez promueven el bienestar personal, el reconocimiento de fortalezas individuales y grupales, la exigencia de sus derechos y la participación con incidencia política (Salamanca y Uribe, 2019). La reflexión colectiva sobre sus condiciones de vida facilita una mejor comprensión de las condiciones que afectan su cotidianidad y las motiva a actuar en el ámbito público-local (Rincón et al., 2017). Cada una de las relaciones y de los espacios ganados va acercando a las mujeres a procesos de autonomía material, social y personal, lo que las conduce al cuidado propio, a la defensa, al desarrollo personal, a la consolidación social, a la autoconfianza, a la voluntad de superación y al acceso a recursos materiales, simbólicos y cognitivos. Se trata de un salto desde lo íntimo, desde el cuidado, al reconocimiento de la interdependencia, de lo colectivo y del fomento de una vida de participación y lucha políticamente entendida. En este momento se abre un abanico de acciones políticas, de procesos de cambio que facilitan, desde la ciudadanía cuidadora, la reinterpretación de la vida desde el presente. Bien lo señala Chantal Mouffe (1999) al afirmar que ciudadano(a) es aquel(la) capaz de nombrar al mundo en sus propios términos.

Metodología

El proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” ha apostado por la utilización de metodologías participativas que generan conversaciones en espacios íntimos, de confianza. Partiendo desde una serie de herramientas metodológicas propuestas por un equipo de investigación coordinador, como son la cartografía social y el video participativo, este equipo y las organizaciones coinvestigadoras que participan en el proyecto, en este caso Asomeht y Herrera Juvenil, han ido explorando las tensiones, las necesidades, los deseos de cada una de las organizaciones en su territorio para poder garantizar un diálogo metodológicamente fluido.

Ha sido un reto abordado desde metodologías participativas, indisciplinadas, activistas y comprometidas. Siguiendo a Haber (2011), se ha descompuesto la propuesta lineal-temporal para producir un conocimiento

de secuencia y se ha perdido autonomía práctica para generar conocimiento desde las relaciones sociales.

Cinco han sido los momentos de esta secuencia, asociados cada uno de ellos a distintas propuestas que permitieran avanzar en la investigación. En el primer momento, se plantearon las preguntas de ¿quiénes somos?, ¿quiénes éramos?, ¿cuál es nuestra historia? Y se dieron respuesta a partir del dibujo de caminos de vida y de la realización de una cartografía social del núcleo urbano del corregimiento de Herrera. El objetivo consistía en hablar sobre el pasado para construir conocimiento en el presente. En un segundo momento, se propusieron los anclajes del proceso de investigación. Estos anclajes, que tomaron la forma de un relatograma de Herrera a los ojos particulares de cada coinvestigador y coinvestigadora pretendían responder a las preguntas de ¿cuáles son nuestros tiempos?, ¿qué tenemos a la mano para hablar de Herrera?, ¿cuáles son nuestros intereses? y ¿por qué nos unimos? El tercer momento fue el momento de la narración. A partir del diseño de un traje típico los(as) coinvestigadores(as) comenzaron a hablar sobre su experiencia vital más íntima, pero también sobre las historias del conflicto y del desplazamiento, y las historias de la colonización del corregimiento. Las preguntas que guiaban esta conversación giraban en torno a ¿cuáles son los símbolos y los significados que nos identifican?, ¿por qué un traje típico para hablar de historia?, ¿qué nos dice el traje de Herrera?, ¿se identifican con el traje?, ¿qué tradiciones rescatar y cuáles transformar? En el cuarto momento, las preguntas se interesaban por ¿cómo enseñaríamos a otras personas los aprendizajes en torno a los diálogos intergeneracionales en este proceso?, ¿de qué forma estas memorias del territorio interpelan las visiones que la población herreruna tiene sobre él?, ¿cómo entendemos la resignificación de la identidad desde la paz y la cultura?, ¿cómo todo esto se convierte en una estrategia de resistencia? Desde la lectura del propio proceso de investigación recorrido conjuntamente por coinvestigadores y coinvestigadoras e investigadoras coordinadoras, este momento se convirtió en un espacio de sanación, donde se creó un espacio colectivo para hablar del dolor como herramienta para reconstruir y crear memoria. Finalmente, el quinto estuvo centrado en las preguntas: ¿cómo queremos narrar nuestra historia, nuestras luchas, la historia de Herrera? A partir del video participativo como herramienta de investigación se ha podido realizar un ejercicio

biográfico de Herrera que sirve para resignificar cada uno de sus lugares desde la visión intergeneracional mujeres adultas-jóvenes.

Paralelamente se produjeron encuentros con las restantes organizaciones que formaban parte del proceso. Hablamos de tres encuentros donde las organizaciones comenzaban a conocerse, reconocerse para después aliarse y empezar a reinterpretar su pasado y su futuro en común en clave colectiva.

Cada uno de los pasos en este caminar metodológico reformulaba la pregunta guía anterior para ampliar las reflexiones y los hallazgos y convertirlos en respuestas hacia las preguntas radicales de Asomeht y de Herrera Juvenil: ¿qué tipo de continuidad queremos darle a nuestro mundo, a Herrera? La respuesta a esta pregunta se encuentra parte en este artículo, parte en mapas parlantes y parte en un video participativo.

Asomeht: bordar para sanar, reinterpretar desde el presente y soñar el futuro

La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht) es una de las fuerzas organizativas del sur del Tolima que han vivido de manera directa o indirecta las acometidas de la guerra en Colombia. Las quince mujeres componentes de la Asociación reconocen que el conflicto, en su máxima expresión, lo vivieron individual, no como asociación, por los controles territoriales que los grupos armados ejercían en la zona.¹ “A causa de la guerra, la guerrilla nos tenía muy, no sé cómo decirlo. Si Ud. pelea con ella ¡multa! Un millón de pesos o ¡lo amarro al palo! Entonces, nadie peleaba, nadie mataba, nadie asesinaba, nadie vendía droga [¡solo ellos!, dicen en el fondo], nadie le quitaba la mujer al otro, porque era el castigo, todo era paz relativamente” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2019).

A pesar de las circunstancias mencionadas, generalmente guiadas por su responsabilidad como cuidadoras, las mujeres se aliaron con otras y generaron dinámicas que terminaron convirtiéndose en espacios de apoyo emocional y de resolución de asuntos de supervivencia. El grupo Asomeht y su labor inicialmente no eran visibles y, según lo expresan, gracias al proceso de paz en 2017 pudieron hacer público el trabajo que venían adelantando. “Nosotras hemos desarrollado un sentido de pertenencia muy grande, nos sentimos

¹ Según sus experiencias, incluso cuando formaron la Asociación una integrante tuvo que irse desplazada porque le vendía comida a un general del Ejército.

orgullosas, nos queremos visibilizar, de que somos la única asociación de mujeres que está funcionando en Herrera” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2019).

La Asociación ha sido espacio de encuentro, de compartir experiencias, solidaridades, trabajo por la comunidad y, sobre todo, de fortalecimiento y empoderamiento de sus asociadas, quienes se conciben como ‘mujeres berracas’, mujeres cabeza de familia, mujeres que son padre y madre, con un sentido de ‘hermandad’. Se trata de mujeres que manejan de forma malabar el cuidado, la empatía, la participación política, etc.

Una de las ‘excusas’ de encuentro de las asociadas a Asomeht es el tejido. En este espacio las mujeres tienen la oportunidad de escuchar, comprender, acompañar la situación de otras mujeres y, así mismo, generar lazos de confianza y empatía entre ellas. “Al principio Asomeht era un medio de sosiego, para buscar una relajación, encontrar algo y no pensar tanto en la guerra que se estaba viviendo en ese momento” (María Escilda Ramírez, Asomeht, 2020). El tejido tiene un poder para sanar, cohesionar, unir y organizar grupos humanos. Este oficio en particular tiene características meditativas al ser repetitivo, introspectivo, y ayuda a despejar el pensamiento y a aclarar ideas (Rivera, 2017). “Yo siento acá un desahogo, una palabra de aliento, una terapia para reírme, para estar en confianza” (Marleny Quilguanás, Asomeht, 2019).

El tejido conecta a las personas: tejer es entregarse a otras, es regalar el tiempo de creación a un ser amado, pero también es un medio de subsistencia, de resiliencia, resistencia y de empoderamiento. Por ello, es posible afirmar que el tejido hoy en día se ha vuelto un acto ‘revolucionario’ que subvierte los principios que lo identificaban al tejido como acto doméstico o como un pasatiempo, sobre todo porque era una actividad que se le ha atribuido las mujeres (Rivera, 2017), convirtiéndolo en un acto político.

“El tejido me relaja, pero también me hace recordar”, afirmaba Marleny Quilguanás (Asomeht, 2020). Recuerdos que están atravesados por el dolor de la violencia del conflicto, pero también por la esperanza, por la recuperación de las historias que transcurrían mientras sucedía la violencia. Por ejemplo, “cómo la mujer se capacita a pesar del conflicto que había. La señora Escilda nos cuenta que cuando vinieron a hacer talleres de artesanía, a los profesores del SENA los tuvieron que traer escoltados por el Ejército, pues todavía estábamos en conflicto” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2020), pero igualmente la propia fundación del corregimiento de Herrera, como territorio

al que muchos y muchas llegaron desplazados por la violencia en sus lugares de origen. Así pues, “Herrera, a pesar de la guerra, ha sido territorio de paz en todo momento. Cuando la gente vino a colonizar Herrera fue porque buscaba paz. Fueron desplazados. Y entonces en Herrera encontraron paz. Fue visto como un refugio por lo aislado y por lo productivo de sus tierras” (María Escilda Ramírez, Asumeht, 2020). Incluso destaca “el papel de la mujer, desde tiempos inmemoriales, desde que entraron los colonos acá, hubo mujeres arrieras, hubo mujeres ganaderas y mujeres que trabajaban en la porcicultura; y ellas mismas sacaban los cerdos por el páramo. Mujeres líderes ha habido desde hace mucho tiempo acá, pero nuestra cultura paisa, de machistas... Entonces ha sido como un paso también para nosotras ese respeto” (María Escilda Ramírez, Asumeht, 2020).

Poco a poco, este compartir de recuerdos en el encuentro con las otras, estas conversaciones generan una conexión con el grupo. El recuerdo del pasado se torna, en el presente, en toma de conciencia política. Y es en el encuentro con Herrera Juvenil que esta misión política se cristaliza, se torna visible. Hablemos de todo ello.

Relevo generacional: colectivizar la memoria

La representación y la percepción del presente entran a condicionar el pasado. Quienes poseen el poder de definir el pasado, de darle los contenidos de historia, definen gran parte del campo de la reproducción del sentido social e individual, constituyen el poder de una tradición, una forma de colonizar el ser; en consecuencia, definen la sedimentación simbólica, la arena sobre la cual se orientan grupos y culturas hacia el futuro, su modo de proyectar sus esperanzas, el modo de esperar y tener una actitud ante lo por venir.

ACEVEDO ARANGO (2012, p. 54)

El grupo Herrera Juvenil se creó para visibilizar a los(as) jóvenes del territorio, su trabajo por el medio ambiente, por la danza y la cultura, como también por la recuperación de su memoria histórica. Les interesa conocer su corregimiento, saber cómo eran antes, qué les pasó, cuáles son sus raíces,

para así poder construir su presente y futuro. En esa búsqueda, se encontraron con las mujeres de Asomeht, con quienes iniciaron un trabajo de diálogos intergeneracionales. Las dos agrupaciones empezaron a reconocer preocupaciones e inquietudes que tenían en común. Desde ese momento han buscado espacios de encuentro, para compartir y buscar estrategias para visibilizar a los(as) jóvenes del territorio, alternativas y sensibilización para el cuidado del medio ambiente, espacios culturales para la comunidad, como también la recuperación de la memoria histórica de Herrera. “Todo surgió de la pregunta de los jóvenes: quiénes somos, por qué somos así, de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, y las mujeres teníamos el saber de plasmar esas ideas de los jóvenes, porque ellos no vivieron la época dura de conflicto, estaban muy niños” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2019). A partir de estas necesidades de rescatar la identidad y la historia del territorio comenzó el trabajo conjunto. Este espacio ha ido permitiendo la interpelación entre la visión de las mujeres y la de los jóvenes, desde su propia interpretación de la historia, del pasado, el presente y el futuro, convirtiéndose en una construcción colectiva, en un acto político, de cuidados, de ciudadanía, nombrando al mundo desde sus interpretaciones de este.

“Traer el pasado al presente ya no es solo un tema de recuerdos y olvidos, sino que, en primer lugar, es una práctica política” (Ramos, 2011, p. 141). Una práctica política que en nuestro caso parte de un ejercicio de asimetría, desde la vulnerabilidad, desde la dependencia radical con los otros y otras más jóvenes y con las otras mujeres. Interdependientes, no desde la horizontalidad, sino desde la asimetría de roles que se interpelan. El reconocimiento de la interdependencia permite que el pasado sea redefinido ya no solo desde una visión que existe en el presente, sino desde otras interpretaciones del presente. Se convierte en un ejercicio de resignificación que no podría producirse de otro modo. Mujeres adultas y jóvenes se han ido tejiendo en un proceso que tiene por objetivo colectivizar la memoria reinterpretándola desde el presente. Una búsqueda por ‘retomar raíces’, por construir un relato de lo que fueron y lo que son, desde la esperanza y no desde el duelo (Sala Valdés et al., 2020). “No puede haber entonces un simple ‘retorno’ o una ‘recuperación’ del pasado que no sea reexperimentado a través de las categorías del presente: no existe una enunciación de las identidades del presente” (Hall, en Acevedo Arango, 2012, p. 45). Estas categorías desde Asomeht, a pesar de que están relacionadas con la violencia, se resignifican

para dar paso a la resistencia, la resiliencia, el empoderamiento y las nuevas ciudadanías que están construyendo los(as) jóvenes.

El traje, apuesta por reconstruir la identidad

Nosotros en Herrera no tenemos traje típico, porque nuestra cultura no es tolimense netamente. Somos descendientes de vallunos, caldenses, antioqueños e indígenas nasas, y tenemos una tradición distinta. Por eso, decimos que no tenemos un traje propio, porque no sentimos que el traje del Sanjuanero o del bambuco nos identifique.

ALIXE ULCUE (Asomeht, 2019)

Asomeht y Herrera Juvenil están apelando a un modo de ordenar y estructurar las ideas en recuerdos y a un modo de transmitirlos a los demás que revela quiénes son (Fentress y Wickham, 1992, citados por Ramos, 2011), cómo quieren representarse, más allá de los estigmas de la violencia: le apuestan a mostrar, a través del vestido, su cultura, saberes, resistencias y la lucha por sus sueños.

El anhelo por diseñar y bordar un traje típico se ha venido cristalizando en los espacios de encuentro enmarcados por el proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” como una forma de albergar la memoria y reconstruir una identidad como comunidad. “[...] uno no quiere que ellos vivan lo que uno vivió, pero sí que lo sepan a través del traje, y qué hemos hecho para estar acá” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2019).

El traje tiene una doble finalidad: por un lado, cuenta las historias de Herrera, de las personas, los paisajes, etc.; por otro, es el proceso de la elaboración, en el cual las mujeres de Asomeht, bordando las calles y los símbolos del territorio, han dejado plasmada sus memorias, sus dolores y resistencias. De esta forma, el traje, a diferencia de otros trajes típicos, cuenta un proceso colectivo participado por mujeres y jóvenes, un proceso de investigación, reflexión, sanación y de resignificación de la identidad, de lo que es ser ‘herrerunas y herrerunos’. “Nosotras estamos haciendo este vestido para darlo a conocer, lo vamos a mostrar a todos los países y al mundo entero para que se den cuenta de que nosotros [las personas de Herrera] no

portamos violencia, ni muerte, ni guerra. Que somos una lucha por nuestros sueños, que tenemos diversidad” (Marleny Quilguanás, Asumeht, 2019).



Figura 9.1. Mujeres de Asumeht bordando el traje típico de Herrera

Fuente: equipo coinvestigador proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Centrarse en la elaboración del traje típico es una oportunidad que les permite hablar de Herrera desde la cultura, los ancestros, los recursos naturales, y que, a su vez, reivindique la presencia política de las mujeres y los jóvenes en la transformación del territorio y en la construcción de paz. Una iniciativa de construcción de paz que, desde el cuidado, facilita la gestión de la cultura, de la memoria, de los procesos colectivos de intercambio generacional, de la vida en comunidad.

Simbolismo del traje: un ejercicio continuo de resignificación

El traje es un legado cultural vital e importante para pensar la identidad y el patrimonio, que las organizaciones dejarán a los herrerunos y herrerunas, al Tolima y al país. En él se recogen cronológicamente cada uno de los capítulos de la biografía de Herrera. Desde las categorías del presente (empoderamiento, fuerza política, recuperación de la cultura, paz, etc.) los componentes del traje son cartografías del pasado y del presente. “Como podemos ver estamos recopilando historias. Este es nuestro centro poblado.

Esta es la parte de donde venimos, por donde entraron nuestros antepasados. Este es nuestro... donde residimos, nuestro lugar de vivienda y cada cosita de estas amarillitas cuenta una historia” (comunicación personal, Asomeht, 2019).



Figura 9.2. Falda traje típico de Herrera

Fuente: equipo coinvestigador proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.



Figura 9.3. Blusa traje típico de Herrera

Fuente: equipo coinvestigador proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

El traje está compuesto por dos piezas bordadas por las mujeres de Asomeht, una blusa y la falda. A continuación, describimos cada una de las imágenes bordadas, su simbolismo y metáforas.

Simbolismos presentes en la blusa²

- **Casa del auxilio:** construida hace años por una familia del territorio, ubicada vía al páramo; hace parte de la historia del corregimiento, ya que allí se hospedaban los arrieros y caminantes, también los lugareños cuando subían a revisar el ganado y los cultivos de papa y yuca. Aunque actualmente se encuentra en ruina, sigue siendo lugar de paso hacia el páramo.
- **Las mulas y los arrieros:** ellos forman parte del origen de Herrera. Representan el medio de transporte y colonización, y el apoyo a las familias que emigraron al sur del Tolima. Actualmente se siguen utilizando las mulas. Desean preservar esa tradición y consideran importante realizar acciones como un monumento al arriero o una galería histórica para preservar la memoria.
- **El camino que bordea las lagunas:** por ese trayecto se encuentran frailejones, osos, venados, dantas. Bordea la montaña del Serrucho. Su nombre deriva de que la cima tiene forma de los dientes de un serrucho. Dentro de las tradiciones orales es muy reconocida la que recae sobre una de las lagunas ubicada cerca al páramo y que genera misterio entre los lugareños. Al pasar por la laguna no se debe hacer ruido, porque al hacerlo sus aguas se mueven y comienza a rugir, y la mayoría de las veces es acompañada de una niebla.
- **Las nubes, el sol, el agua y el aire:** considerados ejes fundamentales para preservar el páramo y su riqueza en flora y fauna. Anteriormente, abundaban los animales, agua. Los bosques ‘estaban vivos’. Hoy en día, existen algunas lagunas y poca flora y fauna. Visualizan un páramo con abundancia en sus recursos naturales, para ello es

² Recogido en un taller realizado en diciembre de 2019, todo el contenido de esta sección recupera, casi de manera exacta, las palabras de las personas que conforman Asomeht y Herrera Juvenil.

vital establecer alianzas con entidades cuyo eje sea ambiental, tal como la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

- **Árbol con una mujer en estado de gestación dentro del tronco:** ubicado en el vientre o parte baja de la blusa, simbolizando el origen de la vida, las raíces, la sabiduría de las personas mayores y toda su experiencia. También representa el renacer y empoderamiento femenino. Es un reconocimiento a las mujeres luchadoras y guerreras que marcaron e influyeron en la historia herreruna. En la actualidad, se han abierto espacios para conocer y generar nuevas historias de empoderamiento femenino. Se espera seguir motivando el emprendimiento e ideas innovadoras que produzcan cambios en el entorno. El árbol representa *al árbol de la vida*. Antes denominado el árbol de la muerte, este árbol significa la resistencia y la resiliencia que ha tenido Herrera. El árbol tiene aproximadamente 80 años, y es una ceiba; los lugareños consideran que es un árbol “muy emocional”, ya que en la época fuerte del conflicto sus hojas se marchitaron y su aspecto cambió, tornándose enfermizo. Cuando empezaron ‘mejores tiempos’ en el territorio, volvió a ponerse frondoso. Consideran que como toda planta es receptiva a las palabras. Durante mucho tiempo se le denominó “árbol de la muerte” por los sucesos ocurridos allí, pero luego la comunidad quiso darle otra simbología y fue nombrado el “árbol de la vida”.

*Simbolismos presentes en la falda*³

- **Agua:** representa la riqueza hídrica en el territorio, que es bañado por los ríos Saldaña y Hereje, y varias quebradas y acueductos que se extienden por él. Antiguamente, en el territorio se evidenciaba gran cantidad de agua porque en ese tiempo “las montañas no eran talladas, eran espesas”. Poco a poco las personas fueron “abriendo monte”. Se veían pozos, arroyos, aljibes. Actualmente los caudales han bajado su nivel de agua, debido a la tala de bosques y al

³ Recogido en un taller realizado en diciembre de 2019, todo el contenido de esta sección recupera, casi de manera exacta, las palabras de las personas que conforman Asoemht y Herrera Juvenil.

calentamiento global. Son conscientes de la necesidad de tomar conciencia ambiental, sembrar árboles y reforestar las cuencas hídricas. El agua también se asemeja al relevo generacional. “La corriente del agua cada día es nueva, así como cada generación cambia. Cada época hay determinados jóvenes, jóvenes líderes que aprenden del conocimiento de los demás y van renovando lo que es la comunidad en sí” (María Escilda Ramírez, Asomeht, 2020).

- **Cultivos:** el corregimiento cuenta con variedad de cultivos como el café, la caña y el maíz. Los cultivos simbolizan el buen comercio en la región como forma de subsistir. Se reconoce que hace algunos años las tierras eran mucho más fértiles, se veía abundancia de cultivos, sin necesidad de químicos, “los cultivos eran más sanos”. Hoy, la agricultura es más escasa, debido al clima, a los químicos y a las tierras infértiles.
- **Ganadería:** hace parte de la economía del territorio y la producción de leche, queso y carne. Anteriormente la ganadería no requería vacunas y no necesitaban mucho cuidado. La ganadería está escaseando porque no hay abundancia de pastos.
- **Árbol de las garzas:** simboliza el ser libre, el volar y el esparcimiento. La ubicación en la falda permite entender que se esparce, también representa la historia del desplazamiento y del cambio climático, pero, así mismo, hospitalidad, como se dice, es un árbol que acoge.
- **La orquídea:** flor nativa de la región. Se encuentra en los árboles de monte. Representa la belleza de la naturaleza y de las mujeres.
- **La caléndula:** planta representativa de la medicina tradicional, de esos saberes ancestrales. Utilizada para curar variedad de enfermedades; simboliza a todas las plantas aromáticas y medicinales. Antes había abundancia de plantas medicinales junto a la medicina natural y tradicional. En la actualidad, han disminuido a causa de la deforestación y poca siembra de plantas medicinales. Asomeht, con su huerta colectiva, le apuesta a no dejar perder esos saberes ancestrales sembrando y multiplicando el conocimiento de las plantas medicinales.
- **El croquis de Herrera:** paraíso escondido, tierra natal, último pueblo del sur del Tolima. Tierra hermosa de gente pujante, trabajadora. Hace algunos años era un pueblo pequeño, sin pavimentación, poco

poblado y con más violencia derivada del conflicto. Hoy en día, se evidencia más población y desarrollo en la comunidad, pero más destrucción en el campo. En un futuro ven a Herrera reconocido como un municipio, y con mayor desarrollo, más productivo, con mayor visibilidad del empoderamiento femenino.

- **Bandera:** símbolo patrio de la identidad regional.

Recuperación de saberes ancestrales, un ejercicio de resistencia colectiva

Las memorias que las comunidades poseen pueden ser compartidas y ser mantenidas a través del tiempo porque se basan en prácticas transmitidas como tradición por medio de conmemoraciones, del arte, de la gastronomía y de los saberes ancestrales. La persistencia de estas imágenes y conocimientos del pasado son imprescindibles para nuestro desenvolvimiento social. Estas son comunicadas por medio de prácticas más o menos rituales e incorporadas como hábitos en nuestras acciones cotidianas (Ramos, 2011).

Para Asomeht, es importante que la identidad cultural, expresada en los saberes ancestrales y prácticas tradicionales, pueda pervivir en las nuevas generaciones y que estas se motiven a aprovechar la riqueza del entorno que los rodea, como es el caso del conocimiento y uso de las distintas plantas medicinales que brinda la naturaleza y que cultivan en la huerta colectiva. Esto se convierte en un ejercicio de resistencia al olvido, a perder la memoria del territorio, con el fin de recuperar y fortalecer la identidad como habitantes del corregimiento de Herrera.

Asomeht hace una apuesta activa por no dejar perder tradiciones culturales, gastronómicas y otros saberes ancestrales que se transmiten de generación en generación desde la tradición oral. Parte de esa memoria colectiva e identitaria está en la recuperación de sus espacios, tal como lo expresan: “Resulta que en Herrera se hacían muchas ferias y muchas fiestas, pero a partir de la violencia que hubo tan fuerte ya ni salíamos, ni decorábamos las casas en Navidad. Por eso, nosotras queremos que nuestros jóvenes se atraigan al territorio y por medio de la cultura. Esa también es la función de nuestra asociación” (Alixé Ulcue, Asomeht, 2019).

La violencia ocupó la mayor parte de las tradiciones de Herrera, de las tradiciones que los colonizadores habían llevado consigo durante el desplazamiento. En este sentido, destaca su objetivo por rescatar la historia

de las mujeres mayores de Herrera, sus abuelas y bisabuelas, de recuperar saberes desconocidos del territorio: desde las recetas, las tradiciones, el origen de los nombres de lugares de encuentro o de referencia en el territorio, los primeros pobladores; en fin, todo aquello que permita dar respuesta a preguntas que se han venido planteando: de dónde vinimos, quiénes somos y qué nos identifica.

Y no solo lo que tiene que ver con las fiestas y la gastronomía, sino también con los cultivos aromáticos y medicinales. Según ellas, la tierra de Herrera es muy productiva, con buen clima, buenas aguas, buen suelo, aspectos que son fortaleza para el cultivo de estas plantas. En este sentido, las mujeres de Asomeht han venido trabajando en una pequeña huerta de plantas medicinales, ubicada en la casa de una de sus asociadas, en la que cada una aprende y aporta sus saberes sobre las plantas medicinales, sus características y usos.

El acto de compartir estos saberes tradicionales sobre el uso de las plantas, que se han transmitido de generación en generación, les trae de nuevo la memoria de las abuelas y su sabiduría en la variedad de plantas medicinales, en cómo usarlas y en qué tipo de circunstancias, en una apuesta por seguir preservando ese legado. “Hay unas [plantas] para las heridas, para las quemaduras, hay cremas que se preparan para la sequedad de la piel, para eso estamos haciendo el cultivo de las aromáticas y las plantas medicinales en la huerta” (Ofelia Ramírez, Asomeht, 2019).

Participación política: “Bajar la política a lo cotidiano”

Tenemos que abrir la política a las mujeres y los jóvenes. Nosotros ya hacemos política. Podemos y debemos llegar a más personas, especialmente combatir el machismo en todos los espacios porque, por eso, muchas veces las mujeres pierden el interés en participar en espacios políticos. Hay que bajar la política a lo cotidiano.
 MARÍA ESCILDA RAMÍREZ (Asomeht, 2019)

La participación puede estar definida desde una perspectiva sociológica, y entonces tiene que ver con tomar parte. Sin embargo, la participación

también puede estar definida desde una perspectiva política, y entonces se relaciona con compartir el poder, compartir la toma de decisiones. Asomeht desde sus movilizaciones proyecta un esfuerzo por compartir el poder dentro de una sociedad patriarcal: tanto en su trabajo por tejer un vínculo generacional como en su labor de recuperación de la cultura. Así definen en lo cotidiano “[...] lo político como la capacidad de decisión de los actores sociales dentro de sus vidas y tradiciones, sobre sus relaciones, sus bienes y espacios, su economía personal y privada, y su ética, en medio de un conjunto de significados y relaciones más amplios que el de la política” (Acevedo Arango, 2012, p. 57).

No obstante, la labor de Asomeht, como se ha podido intuir en líneas anteriores, va más allá, pues hay una búsqueda por la transformación de esa construcción cotidiana de lo político. Así, se han organizado para llevar a cabo diferentes marchas en el día de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre). “Ahora estamos empezando como un empoderamiento de la mujer [...] somos más ‘degeneradas’, le decimos al marido: ‘¡Me voy para tal parte y arréglese como pueda!’. Viajamos, vamos a los talleres, aprendemos y tenemos cómo decirles ‘no me maltrate’, a tal punto de que lideramos una marcha en el día de la no violencia nunca antes visto en Herrera” (Bertha Barbosa, Asomeht, 2019).

Porque no se trata solo de indagar en el pasado, en el conflicto armado, sino en proyectarse en el presente y en el futuro, “entonces nosotras hemos querido como tomar la iniciativa de hacer unas marchas hacia las calles, hacia la mujer. Hemos hecho tomas de iniciativas en las marchas, hemos tenido participación y mantenemos el apoyo de lo que hacemos” (María Escilda Ramírez, Asomeht, 2019).

En este sentido, y desde su accionar hacia lo público, Asomeht se ha preguntado y viene trabajando sobre el papel de la mujer en la sociedad, desde una agencia política. “Nosotras como asociación hemos querido que las mujeres no tanto que seamos reconocidas, sino que luchemos por sentirnos líderes, que tengamos una independencia económica en lo posible, que aprendamos a defendernos y que nos apoyemos en las leyes que nos protegen, que no existían tampoco. De ahí que la mujer acá en estos territorios fue muy violentada por las tradiciones” (María Escilda Ramírez, Asomeht, 2020).

Conclusiones

[...] al terminar el pueblo hay un árbol, divide lo que es la zona de tolerancia y el resto de Herrera, se llamaba el árbol de la muerte, no siempre se llamaba el árbol de la vida; se llamaba el árbol de la muerte, porque allí era donde iban y mataban en tiempos de violencia, los colgaban, los mataban, entonces, por eso, lo llamaban el árbol de la muerte. La comunidad tomó la decisión de poder cambiar, no solo el nombre, sino de empezar una transformación desde el cambio del árbol de la muerte al árbol de la vida. Entonces, se hizo una oración, se hizo como un ritual... como para que cambiáramos ese pensamiento... de que allí sucedieron cosas supremamente negativas.

SANDRA MENDIETA (Asomeht, 2019)

“Tomar la decisión de poder cambiar” es el espíritu que define a las mujeres que convierten asuntos domésticos-privados en acciones políticas. En Asomeht la agencia proviene de mujeres que se organizan y resignifican el territorio, transformándolo desde la cotidianeidad. Desde la Asociación están orientando su accionar a recuperar su voz, sus derechos como ciudadanas, rescatando su autonomía y autodeterminación. Desde su colectivo han trazado esperanza y sueños a otras mujeres en el territorio, en especial hacia las más jóvenes, como agentes de cambio, a través de diferentes estrategias: desde las conversaciones informales, los encuentros hasta las marchas, que buscan visibilizar y rechazar la violencia estructural, como es la ocasionada por el machismo y la violencia intrafamiliar que han padecido históricamente las mujeres, y particularmente las que habitan las zonas rurales.

Es importante apostarle a que las comunidades tengan espacios para poder reconstruir su identidad y saberes ancestrales, y que desde allí puedan construir el futuro. Esto permite el remitirse a la idea de la necesidad de reconstrucción de tejidos sociales y tradiciones que la violencia destruyó o modificó, sobre todo en lo que tiene que ver con la memoria, con el legado, con la cultura. En este sentido, el accionar de las mujeres de Asomeht busca

recuperar esa identidad, apostando por la necesidad de trabajar en comunidad, con las instituciones, con los otros, con las otras.

Asomeht representa la construcción de una ciudadanía cuidadora que teje lazos desde el reconocimiento de la interdependencia con las nuevas generaciones, con los ancestros, con la forma de contar la historia, de reinterpretarla desde el presente. *Lo que se teje mientras se teje* da cuenta de las luchas y los logros de las mujeres en los procesos de construcción de paz desde sus territorios, siendo este un proceso continuo e inacabado que inicia, en muchas ocasiones, casi paralelo con el conflicto armado, con la presencia de violaciones a los derechos fundamentales.

Centrarse en la elaboración del traje típico es una oportunidad que les permite hablar de Herrera desde la cultura, los ancestros, los recursos naturales y que, a su vez, reivindica la presencia política de las mujeres y los jóvenes en la transformación del territorio y en la construcción de paz. Una iniciativa de construcción de paz que, desde el cuidado, la interdependencia, las vulnerabilidades y asimetrías, facilita la gestión de la cultura, de la memoria, de los procesos colectivos de intercambio generacional, de la vida en comunidad. Asomeht, como actor colectivo, abre la posibilidad de ser cocreador de un presente y un futuro de esperanza.

Referencias

- Acevedo Arango, O. F. (2012). *Geografía de la memoria. Posiciones de las víctimas en Colombia en el período de justicia transicional (2005-2010)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Ahmed Ali, F. (2015). *Mujeres y guerra. Deconstruyendo la noción de víctimas y reconstruyendo su papel de constructoras de paz*. Castellón: Universitat Jaume I.
- Bacic, R. (2016). *Notas de la ponencia “Tejiendo la vida y la dignidad a través de los hilos de la memoria”*. Bogotá: Centro de Memoria y Paz.
- Britto, D. (enero-junio, 2010). El desplazamiento forzado tiene rostro de mujer. *La Manzana de la Discordia*, 5(1), 65-78. Recuperado de <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53736>
- Butler, J. (2014). Vida precaria, vulnerabilidad y ética de cohabitación. En B. Saez Tajafuerce (Ed.), *Cuerpo, memoria y representación. Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo*. Madrid: Icaria Editorial.
- Cano Isaza, T. A., & Arroyave Álvarez, O. A. (2014). Procesos de empoderamiento de mujeres: subjetivación y transformaciones en las relaciones de

- poder. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 42, 94-110. Recuperado de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/497/1033>
- Cavarero, A. (2015). Inclinationes desequilibradas. En B. Saez Tajafuerce (Ed.), *Cuerpo, memoria y representación. Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo*. Madrid: Icaria Editorial.
- Cruz, A., Calderón, A., Flórez, S., & Córdoba, L. (septiembre-diciembre, 2018). El papel del cuidado en la sanación del dolor. Experiencia desde víctimas sobrevivientes de violencia sexual en el contexto colombiano. *Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe*, (36), 128-145.
- Grupo de Memoria Histórica (GMH). (2009). *Memorias en tiempos de guerra. Repertorio de iniciativas*. Bogotá: Puntoaparte Editores.
- Haber, A. (2011). Nometodología payanesa: notas de metodología indisciplinada. *Revista Chilena de Antropología*, 23(primer semestre), 9-49.
- Jiménez, M. (2016). Las memorias “maricas” en el conflicto armado reciente en los Montes de María: territorio, identidades y testimonio. *Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica*, (24). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5888292>
- Lederach, J. (2008). *La imaginación moral*. Bogotá: Editorial Norma.
- Marulanda, A. F. (2018). *Construcción de paz desde abajo: acciones de paz de mujeres en Guatemala y Colombia* (Trabajo de obtención de grado, Maestría en Derechos Humanos y Paz, ITESO, Tlaquepaque, Jalisco, México).
- Moola, S. (2006). Women and peace-building: the case of Mabedlane women. *Agenda*, 20(69), 124-133.
- Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político*. Barcelona: Paidós.
- Muñoz, F., & López, M. (2000). El poder pacifista. En *Jornadas de Investigación para la Paz* (pp. 1-12). Barcelona: Asociación Española de Investigación para la Paz.
- Pineda, E. K. (enero-junio, 2017). La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica. *Península*, 12(1), 9-30.
- Ramos, A. (2011). Perspectivas antropológicas sobre la memoria en contextos de diversidad y desigualdad. *Revista Alteridades*, 21(42), 131-148.
- Rincón, A. G., Vizcarra, B., Thomé Ortiz, H., & Gascón, T. (2017). Empoderamiento y feminismo comunitario en la conservación del maíz en México. *Estudios Feministas*, 25(3), 530.
- Rivera, M. (2017). Tejer y resistir. Etnografías audiovisuales y narrativas textiles. *Universitas*, XV(27), 139-160.

- Saez Tajafuerce, S. (2014). El cuerpo en diálogo o de la inclinación. En B. Saez Tajafuerce (Ed.), *Cuerpo, memoria y representación. Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo*. Madrid: Icaria Editorial.
- Sala Valdés, C., Barros Navarro, N., Salamanca Santos, M. P., Rodríguez, I., Álvarez Bustos, M., Uribe Sarmiento, J. J., & Padilla Quintero, S. (2020). *Entre poderes integradores y transformadores: paces locales de las mujeres, los jóvenes, los cafeteros y los ambientalistas en el sur del Tolima*. En proceso de publicación.
- Salamanca, P., & Uribe, J. J. (2019). Aprendiendo a ser fuertes y emprendedoras. Estrategias de supervivencia en mujeres desplazadas víctimas del conflicto armado. En *Gobierno y gobernanza. Desplazamiento forzado, análisis para la prevención y la restauración de los vínculos sociales rotos* (pp. 49-77). Bogotá: Universidad Externado de Colombia-Cátedra UNESCO Derechos Humanos y Violencia.
- Sandoval, E. (2015). Empoderamiento pacifista para otros mundos posibles. *Revista de Paz y Conflictos*, 8(2), 75-95.

Capítulo 10

Las guardias indígenas y cimarronas y sus aportes en la construcción de paz en el Cauca*

Axel Alejandro Rojas Martínez, Leydi Vanessa Useche Acevedo

Introducción

El 19 de octubre de 2020, la Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, o minga del suroccidente colombiano, caminó por las calles de Bogotá hasta llegar a la Plaza de Bolívar. La masiva movilización, de la que participaron miles de personas pertenecientes a numerosas organizaciones sociales del departamento del Cauca, llamó la atención de los habitantes de la ciudad y los medios de comunicación, además de generar gran expectativa en varios de los municipios por los que se desplazó antes de llegar a la capital. Las guardias han tenido un rol crecientemente visible en la minga; estos cuerpos organizados de comuneros, encargados de mantener el orden en las movilizaciones, coordinar

* Este capítulo es producto de un trabajo que inició con el proyecto “¿Fortalecimiento de autonomía o del Estado? El reconocimiento diferencial de las guardias de autoprotección en el Acuerdo de Paz y su cooperación en el territorio en el marco del posacuerdo”, financiado por el Instituto Capaz en su convocatoria de apoyo a estudios exploratorios 2018; el estudio fue adelantado en coinvestigación por los autores junto con los colegas María Cárdenas, MA, PhD Student del Graduate Center for the Study of Culture, Justus-Liebig-Universität Gießen (Alemania); y Sergio Coronado, PhD, investigador del Otto-Suhr-Institut, Freie Universität (Berlín, Alemania), e investigador asociado del Cinep. En 2019, los autores continuamos el proyecto gracias a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, que financió el proyecto de desarrollo interno “Las guardias indígenas, campesinas y cimarronas en el departamento del Cauca. Estrategias de construcción de autonomía en el contexto del posconflicto” (ID 5062).

aspectos logísticos de los desplazamientos y participar de la coordinación entre organizaciones sociales participantes de la minga, se han constituido en una de las imágenes representativas de las luchas indígenas, campesinas y afrodescendientes de la última década. Si bien es cierto cuentan con una trayectoria histórica amplia, en algunas ocasiones más visibles que otras, es claro que hoy se constituyen en un actor fundamental en los procesos de construcción de paz: desde la movilización hasta el ejercicio de autonomía territorial.¹

La historia de las guardias podría remontarse mucho tiempo atrás. No obstante, las entendemos como resultado de un proceso novedoso, que adquiere su forma y sentido actual en las últimas décadas, articulado a organizaciones sociales cuyas luchas asignan centralidad a los reclamos de defensa de territorios y a la autodeterminación. Estas organizaciones se han constituido en este proceso como fuerzas políticas determinantes para la definición de las configuraciones locales del (pos)conflicto.

Los antecedentes más cercanos de esta estrategia se encuentran en las guardias cívicas, creadas dentro de organizaciones campesinas como la ANUC en los años setenta y presentes en las organizaciones indígenas desde entonces, con diferentes niveles de centralidad. Las comunidades negras, por su parte, formalizaron la creación de la guardia cimarrona en el marco del Primer Congreso Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, realizado en agosto de 2013 en Quibdó (Chocó), como parte de la conmemoración de los 20 años de promulgación de la Ley 70 de 1993, teniendo como antecedente la guardia cimarrona creada en San Basilio de Palenque en 2009.

Luego de cumplir funciones de carácter más operativo, han tomado una renovada fuerza en las dos últimas décadas, vinculándose a labores de control territorial y coordinación entre sectores organizados. En el departamento del Cauca, dicha coordinación se expresa tanto en las movilizaciones en las que se participa conjuntamente, como sucede en la minga, como en las acciones de control territorial y de formación que se llevan a cabo a nivel

¹ Para no ir muy lejos, el 8 de octubre, pocos días antes de llegar a Bogotá, la guardia indígena del norte del Cauca había sido notificada como ganadora del Premio Front Line Defenders y el 2 de diciembre los *kiwe thegnas* del Plan de Vida Proyecto Nasa fueron homenajeados con el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2020.

regional. En este contexto, su crecimiento se ha acelerado, incrementando el número de miembros y adquiriendo mayor visibilidad en las dinámicas de las organizaciones en la región.

Más recientemente, después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la salida y el desarme de las FARC-EP significó una progresiva reconfiguración de los poderes regionales armados. Para las poblaciones rurales indígenas, afrodescendientes y campesinas del Cauca, esto implicó que el control que ejercían las FARC sobre aspectos como el ingreso y circulación de personas a estos territorios o sobre formas de comportamiento regulados por su orden moral fueran objeto de disputa por otros actores armados, como el ELN, las AGC, el EPL y grupos disidentes de las FARC. Ante tales reconfiguraciones, las organizaciones sociales y autoridades étnicas han respondido con renovadas estrategias que incluyen el afianzamiento del control sobre el territorio y el fortalecimiento de sus planes de vida, contando con las guardias como actor protagonista.

El propósito de este texto es mostrar algunas de las acciones de fortalecimiento de estas guardias, incluyendo procesos de formación, iniciativas de coordinación interétnica y actividades conjuntas de control territorial, centrándonos en la experiencia de dos procesos indígenas y un proceso afrodescendiente. Nos parece importante conocerlas para comprender mejor cómo se construyen proyectos alternativos de paz desde las comunidades locales, sus organizaciones sociales y autoridades étnicas, entre las cuales tienen un rol cada vez más importante y visible. Con este fin, mostraremos algunas de las dinámicas organizativas y de sus labores cotidianas, a partir del trabajo de campo realizado en el proceso de investigación apoyado por el Instituto Capaz y la Universidad del Cauca.²

A partir del acompañamiento a espacios de encuentro y de formación, se logró establecer un diálogo con miembros de las guardias, conociendo y acompañando algunos de sus proyectos y prácticas cotidianas. En ese sentido, el capítulo se estructura en gran medida a partir del análisis de ‘categorías emergentes’ enunciadas y elaboradas en las escuelas de formación, en las discusiones políticas que tienen lugar en diferentes espacios de conversación y en el acompañamiento a algunos recorridos territoriales.

² Un primer producto de esta investigación se encuentra en Rojas y Useche (2019).

Autoridades étnicas y de vida

La desigual tenencia de la tierra, los impactos ocasionados por la extracción de recursos naturales y el uso de la violencia como medio de acceso a estos recursos pueden ser vistos como algo que siempre ha sucedido y que hoy sucede igual que hace siglos. No obstante, a pesar de las continuidades, tanto las formas de organización social como los modos de producción o las estrategias de resistencia han respondido a condiciones cambiantes. Desde los inicios del proceso de colonización, el departamento del Cauca ha estado marcado por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la explotación de recursos naturales y el gobierno de las poblaciones indígenas y afrodescendientes (Chaves, 2019; Taussig, 2019). En consecuencia, las formas de resistencia y organización política también han respondido a estos contextos cambiantes (Gros, 2019; Hurtado, 2001).

Las estrategias de protección territorial del presente son producto de luchas a lo largo de las cuales las movilizaciones agrarias han trazado caminos diversos. Las organizaciones contemporáneas, conformadas a partir de la década de los sesenta del siglo xx, retoman elementos de luchas pasadas al tiempo que responden a nuevos conflictos (Gros, 2019). Una característica de estas organizaciones a finales del siglo xx es el paso de las luchas por la tierra a la defensa de los territorios, el peso de las identidades y la diferencia cultural, y la orientación de las nuevas propuestas políticas hacia la construcción de autonomía (Escobar, 2007). Además de una modificación en las retóricas con las que se nombra el quehacer político colectivo, este responde a nuevas circunstancias producto de la acción política que se construye en confrontación o en alianza con otros.

La incorporación de las nociones como territorio, comunidad y, en algunos casos, autoridad y gobierno, no ocurre de manera homogénea en todos los casos. Las trayectorias históricas de indígenas, campesinos y afrodescendientes son disímiles, al igual que sus formas de organización y los recursos disponibles para la acción colectiva. Sin embargo, también existen elementos comunes, que muestran que los distintos proyectos pueden compartir tanto los problemas como concepciones sobre las alternativas y en la práctica establecen alianzas a partir de estos elementos. Podríamos decir que se constituyen en evidencias de los elementos en común y aspectos singulares de cada uno de estos procesos organizativos.

En diferentes espacios organizativos se afirma con insistencia que “las guardias no nacen solas, sino que hacen parte de procesos organizativos, obedeciendo a la comunidad de cada territorio”.³ Es decir que no surgen de manera independiente y que no son todas iguales; surgen articuladas a procesos mayores de organización, aunque manteniendo una especificidad asociada al lugar y los procesos organizativos. A continuación, nos referiremos a tres asociaciones de autoridades étnicas: Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Çxhab Wala Kiwe (ÇWK-ACIN) y Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Çxhab (del municipio de Caldono). Las tres tienen en común el estar ligadas a dos figuras territoriales y de autoridad étnica: los consejos comunitarios de comunidades negras y los cabildos indígenas.

Las asociaciones de cabildos indígenas

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) se creó en 1994 como “unidad de coordinación entre doce autoridades (cabildos)” de la región norte del Cauca. Fueron doce los cabildos que se asociaron inicialmente: Toribío, Jambaló, Tacueyó, San Francisco, Munchique-Los Tigres, Canoas, La Paila, La Concepción, Las Delicias, Huellas, Corinto y La Cilia-La Calera; en ese momento algunos no contaban con titulación de tierras bajo la forma de resguardo o “territorios ancestrales”.⁴ A partir de su primer congreso, realizado en 2002, fue denominada Çxhab Wala Kiwe ACIN. Con el tiempo, la estructura y funciones de la ACIN han cambiado.

A partir de los años ochenta, inicialmente bajo el liderazgo del sacerdote Álvaro Ulcué, se crearon los planes de vida, como proyectos de desarrollo a nivel municipal, en los que se basa la estructura actual de ÇWK-ACIN. Hoy en día, cada plan de vida es representado por un thuthena o figura de autoridad,

³ Declaración I Encuentro Interétnico de Guardias, 20 de septiembre de 2018.

⁴ Escuela de guardia indígena ACIN, sesión 2, 20 de mayo de 2019. Según la página de la ACIN, “el territorio de la Çxhab Wala Kiwe está conformado por 19 cabildos indígenas (autoridades indígenas tradicionales), de estos, dieciséis están constituidos como resguardos: Tacueyó, Toribio, San Francisco, Jambaló, Huellas Caloto, Tóez, Miranda, Corinto, López Adentro, Nasa Kiwe Tehekshw, Munchique, Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Kite Kiwe. Otros tres no se han logrado constituir, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral y Alto Naya” (<https://nasaacin.org/quien-lo-conforma/>). Al agregar Nasa Wala, Wejxia Kiwe y el cabildo de Santiago de Cali, son en total 22 autoridades asociadas.

que conforma la consejería de la Asociación. La estructura operativa está compuesta por ‘tejidos’, cada uno de los cuales se ocupa de distintos temas: mujer, educación, salud, comunicación, defensa de la vida, justicia y armonía, económico ambiental.⁵ En términos políticos, el Consejo Territorial de la Çxhab Wala Kiwe es la “instancia de mayor jerarquía y autoridad máxima en las decisiones de vida” a nivel de la región norte del Cauca;⁶ está constituido por las directivas o gobernadores(as) de los 19 cabildos indígenas, acompañados de directivos de los siete proyectos comunitarios, que se eligen cada cuatro años, el 21 de junio, con la iniciación del nuevo año nasa, que se rige por el calendario solar. A nivel regional, hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), conformado en 1971.

Dentro de esta estructura, la guardia aparece como uno de los componentes del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos según los mandatos del tercer congreso de ACIN realizado en 2017 acerca del fortalecimiento cultural del pueblo nasa. En la práctica, los *kiwe thegnas* (como son llamados los guardias por mandato del I Congreso de la ACIN en 2002) están estrictamente bajo las directrices de la autoridad, a través de las coordinaciones de guardia veredales, de cabildo, de plan de vida y zonal, aunque esto tiene matices según las circunstancias y los cabildos.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Çxhab, que agrupa a las autoridades indígenas de la zona nororiente, se conforma con una estructura similar a la de otras asociaciones de cabildos. Al frente de esta se encuentra la Consejería Mayor, de la que hacen parte las autoridades de los seis resguardos indígenas ubicados en la jurisdicción del municipio de Caldon: San Lorenzo, Pueblo Nuevo, Las Mercedes, La Aguada, Las Mercedes y Pioyá. Los seis cabildos integran el Plan de Vida Sa’t’h Tama Kiwe y se articulan al CRIC.

Dentro de la estructura de Ukawe’sx Nasa Çxhab, existe un enlace con la guardia a través de las coordinaciones. “Esta coordinación hace parte del cabildo y, bajo la coordinación de los cabildos, la guardia indígena se articula a las actividades de la movilización indígena acompañando las marchas, la liberación de la Madre Tierra, las asambleas y los congresos de

⁵ <https://nasaacin.org/tejidos-y-programas/>

⁶ <https://nasaacin.org/estructura/>

las asociaciones de cabildo o de la organización regional misma” (Caviedes, 2007, p. 66). En Sa'th Tama Kiwe, los(as) guardias indígenas reciben el nombre de *kiwe puyaksa*.

Desde el Congreso Territorial de la Zona Nororiente realizado en 2006, los mandatos de la asamblea dieron prioridad al fortalecimiento de la guardia indígena en cada cabildo. Es de resaltar que en esta zona, especialmente en los cabildos de alta montaña, se conserva de manera extendida el uso del nasayuwe (idioma del pueblo nasa). Como parte de sus orientaciones, la guardia ha dado prioridad a su fortalecimiento, por lo cual muchas de las reuniones y códigos se realizan netamente en el idioma indígena. Nombrar a los miembros de la estructura de autoridad indígena y a los territorios en lengua propia hace parte de los mandatos del CRIC sobre fortalecimiento del nasayuwe. Más allá de esta decisión política, en los resguardos de la parte alta de Sa'th Tama Kiwe, el alto porcentaje de población nasayuwe hablante genera condiciones favorables para que dentro de la guardia se den instrucciones y se realicen reuniones exclusivamente en este idioma.

La asociación de consejos comunitarios de comunidades negras

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca se presenta como una ‘autoridad de segundo nivel’, que asocia a las autoridades locales de 43 consejos comunitarios de esta región; la mayoría de estos consejos fueron creados en las dos últimas décadas y unos pocos en los años noventa. Desde 2009, la ACONC desempeña funciones de coordinación y su misión es: “Acompañar el fortalecimiento de los procesos organizativos de las organizaciones afros y los consejos de comunidades negras, inspirados en la defensa del territorio ancestral, exigibilidad de los derechos humanos, el rescate y desarrollo propio, acorde con los principios establecidos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales en función del bienestar de la población afrodescendiente” (Proclama, 2019).

Si bien la Ley 70 de 1993 reconoce a los consejos comunitarios como figura de autoridad para ‘comunidades negras’, dicha autoridad requiere de la existencia de titulación colectiva de un territorio para ser reconocida formalmente. Esta situación se ha constituido en un obstáculo para que los consejos comunitarios del norte del Cauca ejerzan algunas de sus funciones; no obstante, gozan de amplia legitimidad, tanto local como a nivel nacional, para representar a sus comunidades e interlocutar con el

gobierno. Una muestra de las limitaciones jurídicas mencionadas es que el ejercicio de autoridad y de justicia desde los consejos comunitarios y sus estructuras organizativas no cuenta con el mismo desarrollo normativo y reconocimiento social que el de las autoridades indígenas. Aun así, la ACONC ha avanzado en la construcción de un sistema de justicia ancestral del pueblo negro del norte del Cauca, que reivindica prácticas de justicia y autoridad comunitarias. Dentro de la estructura del sistema, la guardia cimarrona se encuentra bajo la autoridad del Tribunal de Ética y Justicia Ancestral, que está al mismo nivel de la Junta de Control Interno y del Consejo Mayor, que conforman la Asamblea General.

Como parte de un proceso de reorganización reciente, los 43 consejos comunitarios han sido agrupados en cinco microzonas. En Asamblea General de diciembre de 2019, se posesionaron once consejeros, dos por cada microzona y un representante de los jóvenes (quien debe haber asistido a la escuela de liderazgo juvenil), seleccionado en una asamblea previa. Según esta estructura, los límites municipales pasan a un segundo plano y las relaciones entre consejos cercanos, así como los ríos, toman mayor relevancia en este esquema de ordenamiento territorial. En síntesis, en la estructura de autoridades de la ACONC, se tienen tres niveles:

1. Consejo comunitario. Composedores veredales, guardia cimarrona, juntas de mayores por consejo comunitario, asamblea consejo comunitario.
2. Microzona. Junta de mayores microzona, asamblea autoridades microzona.
3. Región. Asamblea ACONC (Consejo Mayor, Junta de Control Interno y Tribunal de Ética y Justicia Ancestral); coordinación regional guardia cimarrona.⁷

La construcción del sistema de justicia propia se desarrolla de manera conjunta con el sistema de gobierno propio y el sistema de protección territorial, a los cuales responden cinco escuelas que la ACONC inició a partir de 2019; todo ello con base en el Plan de Buen Vivir 2015-2035 “Cambios para

⁷ Relatoría, sesión 3, escuela de guardias Kekelo Ri Tielo Prieto, 2 de agosto de 2019.

vivir mejor”. La nueva estructura mantiene una organización por palenques, relacionados con los ejes del Plan de Buen Vivir: gobierno, gobernanza y control social; fortalecimiento económico; mujer, víctimas y posconflicto; género y generación; bienestar social y buen vivir; derechos humanos e integridad; ética; territorio y ambiente; salud y medicina ancestral; comunicaciones; educación y etnoeducación.

Escuelas y procesos de formación

Con base en el acompañamiento efectuado en 2019 a las escuelas de guardia indígena y cimarrona en el norte del Cauca, nos acercamos a sus proyectos de formación, así como a las temáticas, dinámicas y metodologías que se desarrollan en cada caso. Es importante tener en cuenta que la formación de las guardias es fundamental, debido a que no se pretende que estas sean un cuerpo de choque y mucho menos armado, sino que sean un grupo capacitado para orientar bajo los lineamientos políticos de cada organización y sus autoridades, al igual que para responder ante situaciones de riesgo en pro de la defensa de la vida y el territorio.

Escuela de guardia indígena Pedro Pascué

La escuela de guardia indígena toma su nombre en honor a Pedro Pascué, un guardia asesinado en el marco de la Cumbre de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Vida, el Territorio y los Procesos Sociales, llevada a cabo en La María (Piendamó) en 2006. La escuela, que inició sus actividades en 2003, realizó sus sesiones de 2019 en el Centro de Armonización de Gualanday. El lugar de reunión es un espacio techado, en el que resalta un mural que muestra el rostro de un hombre que lleva en su cuello una pañoleta roja y verde, colores insignia del CRIC; la imagen presenta un paisaje montañoso, con un árbol, plantas de maíz e instrumentos musicales (guitarra, maracas y tambora). En la parte superior, al centro, se lee: *Kwesx uuste kaayat xnxxi yat*, que, según nos explicaron, traduciría algo similar a: “Casa donde vinimos a aprender desde el corazón”.

El Centro de Armonización, cuyo papel es similar a las cárceles dentro del sistema de justicia ordinaria, ocupa una amplia extensión de terreno. Los espacios más próximos son ocupados por cultivos de yuca, arveja, plátano, aguacate, y una huerta donde se observan sembradas cebolla, lechuga y otras hortalizas; algunas veces hay ganado. Tres casas grandes se ubican

en la parte alta de la montaña más próxima, en dirección norte. Cerca de las casas, donde se encuentran los armonizados, hay árboles de gualanday, y allí se cuelga un letrero que identifica el lugar: *Centro de Armonización de Gualanday, Resguardo Munchique Los Tigres*. Cerca hay una carretera con un pequeño tramo pavimentado, que hace parte de las adecuaciones realizadas para el funcionamiento del centro.

La escuela tiene su propia rutina: cerca de las 9:00 a. m., los coordinadores usan el micrófono para convocar al espacio de estudio. Después de la bienvenida hacen una pequeña introducción sobre los contenidos, aspectos logísticos o temas de contexto actual; antes de terminar se lee la programación, que ha sido escrita previamente en el tablero para que podamos visualizar los puntos de trabajo en la jornada. El himno del pueblo nasa y el himno de la guardia indígena dan inicio al primer día. En seguida se hace una presentación; por cada resguardo, un representante (generalmente el coordinador de guardia si está presente) pasa adelante, toma el micrófono, se presenta a sí mismo, menciona cuántas personas conforman su grupo y en ocasiones da unas palabras de agradecimiento o menciona algún aspecto que considera relevante. Este acto, que podría parecer inoficioso y repetitivo, facilita a los coordinadores llevar control de la asistencia, reconocer a las personas que llegan al espacio e identificar qué cabildos están ausentes, pues no siempre hay representación de los 22 ‘territorios ancestrales’. Además, funciona como un momento de relacionamiento más cercano y de interacción entre quienes se presentan y quienes escuchan o hacen comentarios, pues, aunque todos hacen parte de Çxhab Wala Kiwe, no todos se conocían antes de iniciar la escuela.

Un punto importante en la escuela es el análisis de contexto, en el que se estudian sucesos recientes ocurridos en Çxhab Wala Kiwe, problemas que afectan a las poblaciones indígenas a nivel local/regional/nacional, decisiones políticas de la organización, fechas de reuniones, asambleas o festividades, entre otros. De esta forma, los asistentes se informan sobre lo que ocurre en el norte del Cauca y los asuntos que afectan a las poblaciones indígenas. Los análisis que allí se presentan y la discusión colectiva que se genera son una importante guía para la formación; además, se abordan temas como el contexto político organizativo, el pensamiento y la espiritualidad nasa, el derecho propio, la ley de origen, los derechos humanos, la historia y los

mandatos de los congresos de la ACIN, la educación y economía propia, los primeros auxilios médicos y psicológicos, y la jurisdicción especial indígena.

Escuela de guardia cimarrona Kekelo Ri Tielo Prieto

Kekelo ri tielo prieto es una expresión en lengua palenquera que traduciría algo como “autoridad que cuida los territorios del pueblo negro”, según explica Víctor Hugo Moreno. Desde 2018 esta expresión es usada por la ACONC para referirse a la guardia cimarrona; las pañoletas y chalecos que emplean los guardias y autoridades de la Asociación llevan inscrita esta insignia, que fue usada como parte de una incipiente iniciativa para incorporar el uso del palenquero en los procesos de recuperación de prácticas culturales.⁸ La escuela de guardias de la ACONC realizó su primera versión en 2019, hace parte de una iniciativa amplia de formación, junto a cuatro escuelas más: escuela de justicia ancestral, escuela de protección territorial, escuela recordando la memoria y escuela de liderazgos juveniles, cada una con diversas fuentes de financiación.

Quienes participan son representantes de la guardia cimarrona de cada consejo comunitario. Trece de los 43 consejos comunitarios tienen una guardia activa: Pureto, Mindalá, Las Brisas, Bellavista, La Toma, La Alsacia, Río Cauca, Cuenca Cauca, Cerro Teta, Zanjón de Garrapatero, Aires de Garrapatero, CURPAQ y Barranco; algunos tienen entre 60 y 80 guardias, otros menos. En la escuela participan guardias y un representante de cada consejo comunitario que aún no tiene guardia, como forma de incentivar su creación.

Durante 2019 el lugar de realización de la escuela fue la finca La Trinidad en Lomitas (Santander de Quilichao). Para la ACONC, es importante reivindicar el uso de esta finca, cuyas tierras fueron entregadas por el Incoder en 2015 a los consejos comunitarios del sector. Lomitas se ubica en la vía Santander de Quilichao-Timba, a unos 20 minutos por carretera pavimentada. En este lugar, el 4 de mayo de 2019, miembros de la ACONC y del PCN que se encontraban reunidos para analizar y preparar los diálogos con el

⁸ Los consejeros de la ACONC manifiestan la importancia de realizar procesos de formación acerca de la lengua palenquera, pues ven en ella la única expresión lingüística “auténtica” que queda actualmente entre afrodescendientes, históricamente sometidos a discriminación y aculturación.

gobierno nacional relacionados con los compromisos de la minga fueron atacados con granadas y disparos de fusil (*Proclama*, 2019).

La escuela Kekelo Ri Tielo Prieto tiene una rutina; en principio, se efectúa cada mes, pero esto varía según las circunstancias. La escuela aborda temas como la estructura organizativa y el Plan de Buen Vivir de la ACONC, el sistema de justicia ancestral del pueblo negro del norte del Cauca, el contexto histórico de los afrodescendientes en la región, aspectos físicos y políticos-administrativos de los consejos comunitarios (veredas, límites, ríos), protección colectiva, primeros auxilios y cartografía de la violencia. La rutina inicia con una oración a las 9:00 a. m., seguida por una introducción a cargo de la coordinadora de la escuela; luego se hace un llamado a lista y verificación de los asistentes por consejo comunitario y se da inicio a la sesión. Las jornadas únicamente se interrumpen por dos refrigerios y un almuerzo, momentos en los cuales los participantes se dirigen hacia la cocina, ubicada cerca de la caseta que oficia como espacio de estudio. La agenda de trabajo finaliza entre las tres y cuatro de la tarde para que los asistentes tengan tiempo suficiente de regresar a sus hogares.

En la rutina de la escuela, no se cuenta todavía con un himno, pero el himno de la guardia cimarrona y del pueblo afrocolombiano están en proceso de composición y han sido socializados en algunas de las sesiones.

El ejercicio del control territorial

El control territorial es una de las principales labores de las guardias. Si bien esta es una función que se ejerce de manera cotidiana a partir de los puntos de control o puntos de armonización, así como de los recorridos a nivel veredal o de cabildo/consejo comunitario y las acciones puntuales de control frente a situaciones de riesgo, también existen recorridos territoriales regionales que se realizan de manera esporádica, puesto que implican grandes esfuerzos económicos y logísticos, pero son de gran importancia por cuanto permiten el reconocimiento del territorio que cuidan los(as) guardias, al tiempo que generan visibilidad y legitimación en sus comunidades. Relataremos dos experiencias de acompañamiento a estos recorridos territoriales regionales que aportan insumos para la comprensión de su labor en los contextos actuales, marcados por el recrudecimiento de violencias armadas, que caracterizan las reconfiguraciones propias del posconflicto.

‘Recorriendo el territorio del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca’

Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené son los diez municipios en los cuales se encuentran los consejos comunitarios asociados en la ACONC. Comúnmente, los recorridos territoriales se hacen en los consejos comunitarios; sin embargo, a finales de 2019 se organizó uno a nivel regional: dos días para visitar 43 consejos comunitarios en el marco de la escuela de guardia cimarrona, con el apoyo financiero y el incentivo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

En vista de que no sería posible abarcar ni la mitad de los consejos comunitarios en tan solo dos días, la coordinación de la escuela decidió trazar el recorrido por las cabeceras municipales. Allí, un representante de cada consejo comunitario esperaba a la comitiva para conversar acerca de su historia y otros aspectos considerados de importancia. El objetivo era que los(as) guardias participantes en la escuela ampliaran su conocimiento del territorio del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca, por lo general limitado al consejo comunitario en el que habita cada uno. Esto, junto a temas abordados en la escuela acerca de límites, recursos, historia, valores culturales, entre otros, son considerados aspectos centrales en la formación de los miembros de las guardias, de quienes se espera un profundo conocimiento de sus territorios dado su rol como protectores.

Desde Santander de Quilichao, rumbo a Caloto, inició el recorrido con alrededor de 30 guardias. Visitamos, además, otros seis municipios: Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené. Con pequeñas visitas a los parques centrales de cada cabecera, recorrimos la zona plana del norte del Cauca. Una bandera blanca con el logo de la ACONC en verde, amarillo y negro ondeaba a un costado de la chiva; los chalecos, gorras, pañoletas y berraquillos con las insignias de la ACONC llamaban la atención de los transeúntes, que saludaban, sonreían, gritaban o se extrañaban al ver pasar el vehículo en el que se transportaban los miembros de las guardias.

Al pasar por El Palo, en el municipio de Caloto, se lee “Seguridad campesina y popular”; a medida que se avanza, aparecen con mayor frecuencia marcas de pintura roja y verde en postes, vallas y muros, simbolizando la bandera del CRIC y como evidencia de la presencia territorial de la guardia indígena. En esta vía y en las que conectan a Corinto con Miranda y Miranda

con Padilla, se observan también soldados del Ejército nacional, al tiempo que pueden verse grafitis marcados sobre las señales de tránsito, aludiendo a la presencia del ELN, EPL y las disidencias de la exguerrilla FARC-EP.

El segundo día inició temprano en la mañana y contó con la compañía del entonces consejero mayor de la ACONC, Víctor Hugo Moreno. La ruta mostró paisajes que contrastaban con los del día anterior; nos adentramos en la cordillera Occidental, recorriendo vías sin pavimentar y caminos ascendentes que dejaban atrás el verde monótono de la caña, predominante en la zona plana, dando paso a cultivos de café, plátano, frutales y también a montañas erosionadas por actividades mineras. Los grafitis del ELN, EPL y FARC-EP continuaron acompañando los caminos, sumándose los de las AGC. También la simbología del CRIC se hacía visible en el camino Buenos Aires-Suárez, en áreas de resguardo indígena.

‘Revitalizando el territorio Sa’th Tama Kiwe’

Entre el 10 y el 13 de febrero de 2020, los *kiwe puya’ksa* llevaron a cabo un recorrido territorial por los seis resguardos que hacen parte de la Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Çxhab, en la jurisdicción del municipio de Caldono, territorio ancestral Sa’th Tama Kiwe. El punto de encuentro fue el resguardo La Laguna, en la casa del cabildo, ubicada en Siberia. Aunque iniciamos alrededor de 40, en el camino se fueron sumando más personas.

El primer tramo, entre el resguardo La Laguna y el de Pueblo Nuevo, requirió alrededor de cinco horas de camino sobre la cordillera Central y un gran esfuerzo físico, aunque también permitió observar un paisaje con variedad de cultivos, en el que resaltaba la simbología del CRIC con sus colores verde y rojo en distintos puntos del recorrido y puestos de control de la guardia, identificados con una guadua atravesada sobre la carretera. También pasamos por un tramo del río Ovejas, en cuya orilla se podía observar la erosión causada por la minería ilegal, que fue desmantelada por la guardia indígena en 2016; el coordinador zonal de la guardia explicó que una retroexcavadora que allí se encuentra es un recuerdo de la maquinaria decomisada en su acción de control territorial, que llevó a un proceso de justicia propia en asamblea (*El País*, 2016).

La caminata avanzó entre música interpretada por mujeres y hombres del Movimiento Joven de Sa’th Thama Kiwe, chicha de maíz para la sed, mambo de coca y conversaciones. Habiendo entrado ya al resguardo de

Pueblo Nuevo, en la vereda Los Monos, el ETCR Carlos Perdomo transformaba un poco el paisaje con su infraestructura. “Cerca de 40 familias viven en el ETCR Carlos Perdomo, y 238 personas están vinculadas a los proyectos productivos desarrollados a través del espacio” (*La Paz en el Terreno*, 2020). Varias de las personas que están en proceso de reincorporación en este ETCR y en otros lugares de Caldono son indígenas nasas que han regresado a sus hogares. Recientemente, en el resguardo de Pueblo Nuevo un grupo de jóvenes, en su mayoría excombatientes, se ha organizado para cumplir el rol de guardias; en los espacios de integración realizados en las noches, se comentó que esto ha generado algunas tensiones dentro de las comunidades. Sin embargo, de otra parte, para los jóvenes que intentan volver a la vida en sus comunidades y afianzar su identidad como indígenas, es claro que deben seguir las directrices de sus autoridades y, por ende, participar de todo tipo de actividades, según les sean mandatadas.

Ascender a las montañas de la cordillera Central, caminando durante cuatro días, en un grupo que al llegar a Pueblo Nuevo alcanzaba las 80 personas, no fue sencillo y no habría sido posible sin contar con una compleja operación logística, que implicaba una ordenada división de tareas por equipos. Incluso, las autoridades en sus intervenciones de recibimiento a la guardia reconocían los esfuerzos físicos, emocionales y espirituales que implica el recorrido territorial. Mayores, jóvenes, niños y niñas avanzaron, algunos con gran facilidad, otros con mayores esfuerzos, pero en general con la tranquilidad de contar con un equipo de dinamizadores de la salud que monitoreaban constantemente el estado de salud de quienes mostraban alguna dolencia, así como medios de transporte disponibles para llevar a aquellos que ya no pudieran caminar.

El segundo día visitamos la vereda Andalucía en el resguardo de Caldono y, finalmente, Granadillo en el resguardo de Pioyá. En la mañana siguiente emprendimos camino rumbo al resguardo La Aguada y el último día caminamos hasta el resguardo Las Mercedes (Kwet Kina). En cada resguardo al que llegamos hubo un recibimiento por parte de autoridades y pobladores, además de los niños de las escuelas que hacían un corredor con símbolos del CRIC por el cual pasaban los *kiwe puya'ksa*, una vez recibían la armonización del *kiwe thë'j* con plantas y agua rociada sobre sus cabezas. El acto era acompañado con el fondo sonoro del himno de la guardia indígena, mientras el equipo de comunicaciones se encargaba de registrar

el recibimiento, así como otros puntos del recorrido, para compartir en internet y otros medios de comunicación.

Las escuelas fueron parte fundamental del recorrido, pues uno de los objetivos de los *kiwe puya'ksa* era realizar pedagogía sobre su labor y, como mencionó uno de los gobernadores, “fortalecer a Sa'th Tama Kiwe como un solo territorio, sin divisiones”. Como estrategia pedagógica, a lo largo del camino se entregó un folleto para enseñar elementos básicos sobre los *kiwe puya'ksa*, su labor y su lugar en la historia de luchas indígenas. Sin embargo, la evaluación efectuada sugirió que a esta labor pedagógica no se le dio la importancia esperada y debe mejorarse para el próximo recorrido territorial.

En algunos resguardos se hizo evidente la labor que la guardia indígena debe ejecutar con respecto al narcotráfico, pues, si bien las autoridades han logrado impedir hasta el momento que se cultive coca y marihuana a través de medidas como la erradicación, Sa'th Thama Kiwe se ve expuesto al tránsito de grupos armados que usan ampliamente la zona para el transporte de insumos y mercancía ilegal. Finalmente, una vez llegamos a Las Mercedes, se organizó una asamblea en la que se destruyó un arma que portaban una mujer y dos hombres juzgados en días anteriores por transportar marihuana.

Enfrentar la pandemia

Tanto las escuelas de formación como los recorridos territoriales y otras labores de las guardias y sus procesos organizativos se vieron afectadas durante 2020 por la crisis sanitaria que generó la pandemia de la covid-19. Aunque estas dinámicas fueron trastocadas, su permanencia en el cuidado de la vida y el territorio fue fundamental durante los períodos de cuarentena decretados por el gobierno nacional con efectos particulares a nivel local y regional. De manera que, aun cuando la norma era el aislamiento preventivo obligatorio, hombres y mujeres guardias apoyados por otras personas de la comunidad tuvieron que permanecer fuera de sus hogares haciendo controles, que esta vez se enfocaron en la prevención de la llegada del virus y sus afectaciones.

El CRIC resaltó que la guardia indígena sería la primera línea en la estrategia “Minga hacia adentro” de su plan de contingencia (CRIC, 2020, p. 32), que sirvió como orientación para las diferentes asociaciones de cabildos del departamento. Las medidas adoptadas por cabildos y consejos comunitarios incluyeron puntos de control sanitarios, pero también atención primaria en

salud, pedagogía preventiva, acompañamiento político organizativo a las comunidades, propuestas de intercambio de productos propios y fortalecimiento de huertas; todas estas actividades apoyadas por las guardias.

Los puntos de control o puntos de armonización fueron definidos como “[...] espacios de planeación, protección, monitoreo, evaluación y prevención establecidos por las autoridades en acompañamiento con el Consejero Regional Indígena del Cauca” (CRIC, 2020, p. 31). La directriz planteada en el plan “Minga hacia adentro” fue que en cada punto de control se llevaran a cabo tres turnos diarios, cada uno de ocho horas, con nueve guardias (CRIC, 2020, p. 31); en total se instalaron 398 puntos de control en el departamento. Por su parte, el tejido de comunicaciones del CRIC difundió en redes sociales y medios de comunicación las actividades de la guardia en estos puntos de control durante la pandemia y el tejido de salud de la organización entregó insumos de bioseguridad y dictó capacitaciones preventivas en cada una de las zonas indígenas del Cauca. Por su parte, cada asociación de cabildos, como Chxab Wala Kiwe y Ukawe’sx Nasa Çxhab, efectuó iniciativas propias en coordinación con el CRIC, respondiendo a sus dinámicas y necesidades propias.

Por su parte, la ACONC informa que las acciones desarrolladas en los 37 ‘puntos de desinfección y pedagogía’ que instalaron en el norte del Cauca incluyeron la desinfección de automóviles y zapatos, lavado de manos, pedagogía comunitaria, promoción de la aplicación de medidas de excepción del gobierno nacional y las administraciones municipales; también se controló el ingreso de foráneos a los consejos comunitarios para reducir el contagio por covid-19. En esta estrategia de puntos de desinfección y pedagogía, participó también el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), que apoyó a la guardia cimarrona a través del acompañamiento psicosocial y la entrega de insumos de bioseguridad como alcohol y tapabocas.

En ese contexto, distintas organizaciones sociales del Cauca alertaron que las medidas implementadas por el gobierno nacional, incluyendo los “Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de coronavirus para población étnica en Colombia”, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, no tuvieron en cuenta el recrudecimiento de la violencia generada en el posconflicto en regiones como el norte del Cauca, donde guardias indígenas, afrodescendientes y campesinas continuaron su

labor de control territorial y fueron objeto de múltiples violencias en medio de la pandemia.

Sin duda, las guardias han tenido un rol activo y visible en el manejo y contención de la pandemia para las comunidades rurales del departamento. En momentos en los que el mensaje generalizado fue de manera central ‘quédate en casa’, sus integrantes tuvieron que hacer caso omiso para ponerse en ‘primera línea’ en los puntos de control sanitario que funcionaron de forma similar a los puntos de control territorial, previamente reconocidos como parte de sus actividades. La participación de las guardias también fue importante en actividades como la “minga de la comida”, en la que el CRIC recolectó alimentos y los repartió en Popayán y Cali, así como actividades similares de solidaridad con indígenas y afrodescendientes, dentro y fuera de los resguardos y consejos comunitarios.

No debe perderse de vista que la pandemia de la covid-19 ocurre en momentos en que muchos de los contextos aquí mencionados atraviesan una grave situación de amenaza a la vida, tanto a nivel individual como comunitario. El aislamiento preventivo obligatorio decretado desde marzo hasta septiembre de 2020, al igual que la regulación de la movilidad que significan los puntos de control establecidos por las autoridades étnicas, en algunos casos coincidieron en tiempo y lugar con controles armados de estructuras armadas ilegales y recibieron ataques por parte de dichas estructuras. Pese a que instituciones estatales, organizaciones sociales y grupos armados han coincidido en una regulación de la movilidad para reducir los impactos de la pandemia, los grupos armados que buscan dar continuidad a rutas y dinámicas de las economías ilegales incrementaron los atentados, amenazas y asesinatos a guardias y autoridades étnicas, tomando provecho de estas restricciones.

A esto se suman señalamientos de parte del Ejército y de la Policía Nacional hacia algunas guardias indígenas, cimarronas y campesinas en el Cauca, y las directrices del gobierno nacional sobre erradicación de cultivos ilícitos durante la pandemia, que generaron nuevos focos de violencia hacia estas poblaciones.

En términos generales, la coyuntura de la covid-19 pone en evidencia problemas de vieja data. Las disputas por el control territorial incluyen tensiones con actores armados, pero también relaciones conflictivas entre el Estado y las autoridades étnicas. Es así que, en un comunicado reciente

frente a los abusos de la fuerza pública, la ACONC expresó: “Los controles territoriales son un mecanismo que implementamos en el marco de nuestro ejercicio a la identidad cultural, gobierno propio y justicia ancestral del Pueblo Negro del norte del Cauca, por medio de la guardia cimarrona. Se realizan bajo los principios de autonomía, independencia, servicio a la comunidad para la protección de la vida y el territorio” (comunicado ACONC, 10 de abril de 2020). Por su parte, la ACIN ha reiterado que el control territorial es un “un ejercicio amparado desde el derecho propio y la autonomía de los pueblos indígenas”.

En junio de 2020, la ACONC tomó la decisión de suspender la mayoría de sus ‘puntos de desinfección y pedagogía’ ante las acciones violentas de las que fueron objeto. Al parecer, la fortaleza política y jurídica de las organizaciones representa una amenaza para estos grupos armados, pues pone en cuestión su intención de ejercer coerción sobre la población y controlar el acceso a los territorios y la circulación de bienes y recursos a su interior.⁹ Mientras esto ocurría, el Estado insistía en su retórica de confinamiento al tiempo que se mantenía ajeno al control y la protección de territorios y poblaciones.

Desafíos y horizontes en la construcción de paz

Para cerrar el capítulo, nos parece importante hacer referencia a algunos de los desafíos que enfrentan las guardias en relación con la construcción de paz. Hemos intentado mostrar cómo se conforman, sus procesos de formación y algunos ejercicios de control territorial adelantados en comunidades indígenas y afrodescendientes. Al centrarnos en las prácticas cotidianas intentamos dar peso a las formas concretas en las que las comunidades locales, sus autoridades y organizaciones responden a los desafíos del posconflicto. Nos interesa aportar a los análisis sobre construcción de paz desde la perspectiva de iniciativas ciudadanas, comunitarias o de la sociedad civil, para dar a conocer las formas en que la población toma decisiones sobre sus recursos, su territorio y sus modos de organización y gobierno. Esta mirada no desconoce las tensiones, dificultades y retos que enfrentan quienes deciden

⁹ Pese al reconocimiento realizado por la Asamblea Departamental del Cauca a la guardia indígena, campesina y cimarrona por su labor durante la pandemia, esto no se materializó en acciones más allá de dicho reconocimiento, hecho en sesión ordinaria el 1º de julio de 2020.

actuar con autonomía y aportan a la construcción de paz desde sus visiones de cuidado y colectividad.

Son muchos los asuntos no abordados y las preguntas por resolver. En primer lugar, aunque en esta ocasión no nos referimos a ellas de manera directa, es de resaltar que, además de las organizaciones étnicas, existen organizaciones campesinas que han retomado la figura de las guardias como forma de protección territorial, que mantienen diferencias respecto de las propuestas indígenas y afrodescendientes. Estas diferencias obedecen a diversos factores, entre los que se encuentran algunos de orden legal, puesto que el marco jurídico que respalda a unas y otras guardias es diferente; tras la reforma constitucional de 1991, el campesinado ocupa un estatus distinto en términos de derechos, dado que se le define como “trabajadores agrarios”, según el artículo 64 de la Constitución Política.

Organizaciones campesinas como Ordeurca y CIMA (que hacen parte del CNA) han conformado guardias y grupos de custodios que en los últimos años han desempeñado roles de autocuidado, protección territorial y defensa del medio ambiente. Tal como menciona uno de sus líderes: “La guardia como un proceso que ayuda a resolver conflictos, que cuida el territorio, que defiende las movilizaciones sociales, que tiene un sentido político pero se enfoca en las labores propias de la guardia” (guardia campesina, Ordeurca). En el caso campesino, las guardias están bajo la orientación de la dirección política, que define las acciones por realizar bajo los principios definidos en el proyecto de cada organización; al mismo tiempo, deben responder a las demandas de su comunidad en cuanto al apoyo a los procesos organizativos o la solución de problemas cotidianos.

En este sentido, las guardias hacen parte de las organizaciones y las fortalecen, en tanto funcionan como proceso formativo que gira en torno a intereses colectivos y del que participa gran parte de sus miembros. Retomando parte del trabajo que hacía la guardia cívica de la ANUC en los años setenta y las guardias rurales en el movimiento emergente del macizo colombiano entre los años ochenta y noventa (CNMH, 2017, p. 230), pero también apelando a discursos, simbologías y prácticas similares a los de la guardia indígena del CRIC, las organizaciones campesinas ganan cada vez mayor legitimidad, aunque no sean reconocidas por el Estado, como lo evidenció su no inclusión como forma de autoprotección en el Acuerdo de Paz.

En segundo lugar, son importantes las iniciativas de encuentro e intercambio entre guardias indígenas, afrodescendientes y campesinas que se han realizado recientemente, pues muestran esfuerzos de articulación en el marco de una iniciativa aún joven. En menos de un año se han organizado tres encuentros interétnicos,¹⁰ con participación del CIMA y Ordeurca del CNA, la ACONC y el CRIC. Las dinámicas de estos encuentros han permitido mantener un vínculo con procesos de coordinación y articulación más amplios como la minga del suroccidente colombiano. Por ejemplo, el II Encuentro Interétnico de Guardias se dio en la antesala de la minga de 2019, lo que permitió que allí se debatieran las exigencias que se plantearían al gobierno nacional. Algunos de estos puntos fueron:

1. Cuidar, proteger, defender territorios.
2. Defensa de la vida, los derechos humanos y la paz.
3. Autoridad propia y organizaciones.
4. Modelo de salud, educación, comunicación.
5. Economía propia para la vida.
6. Defensa de bienes públicos y comunitarios.
7. Acuerdos incumplidos.
8. Respeto a la autonomía de los pueblos y las naciones del Abya Yala.
9. Agenda legislativa del despojo del gobierno nacional.¹¹

Tras las negociaciones de la minga del suroccidente colombiano, las organizaciones sociales del Cauca continuaron sus dinámicas de trabajo. En julio se efectuó el III Encuentro Interétnico de Guardias en el territorio ancestral Sa'th Thama Kiwe. Pocos días después, varios hechos violentos pusieron en vilo a las poblaciones rurales del norte del Cauca, marcando el rumbo de lo que restaba del año. Si bien el asesinato y las amenazas a

¹⁰ Aunque este es el nombre con el cual se convoca al evento, aún se presentan discusiones, pues algunos campesinos piden que se agregue la palabra intercultural para sentirse realmente incluidos; otros proponen que se vincule la dimensión regional en el título porque al encuentro no asisten guardias de todo el país; y recientemente también se propuso que se especificara que es un encuentro de guardia indígena, campesina y cimarrona. Los eventos han sido apoyados por Broederlijk Delen (BD) como espacios de articulación entre guardias.

¹¹ Relatoría, II Encuentro Interétnico de Guardias, febrero de 2019, Antón Moreno, Sotará, Cauca.

líderes sociales no habían dado tregua y venían en aumento en el norte del Cauca, desde julio de 2019 se intensificaron luego de la activación de un ‘plan pistola’ en contra del proceso organizativo indígena. Las amenazas ya se habían presentado desde hace varios meses, pero la sistematicidad de las agresiones se develó durante el segundo semestre de 2019 y al llegar 2020. La pandemia como hecho global se reflejó en las dinámicas organizativas, pero desde su interior se buscaron alternativas y mecanismos de respuesta al nuevo contexto. Fue así que la minga del suroccidente colombiano se reactivó en octubre de 2020, ante la necesidad de visibilizar y posicionar en el debate la aguda situación de derechos humanos en el suroccidente y el estado de incumplimiento del Acuerdo de Paz; de allí que la minga se articulara bajo los ejes de vida, territorio, democracia y paz. “En medio del espacio instalado, el gobierno nacional se niega a atender al pueblo colombiano argumentando la no presencia de los nueve consejeros del CRIC, olvidando que quien ha convocado a un debate político no es el CRIC, sino la minga del suroccidente, que recoge a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, sector estudiantil, entre otros” (CRIC, 2020).

Al igual que lo ocurrido en las movilizaciones de los años noventa, la guardia indígena tuvo gran importancia, en la medida en que “[...] permitió que las comunidades resistieran a la acción de la fuerza pública por impedir la protesta, obligando al gobierno a establecer una mesa de negociación con la organización indígena regional” (Caviedes, 2007, p. 68). Hallamos entonces puntos de articulación entre guardias indígenas, cimarronas y campesinas, tanto en el ámbito formativo y político como en el ámbito de la movilización.

De la misma manera, es de resaltar que la reconfiguración de poderes armados en el Cauca ha implicado un recrudecimiento de la violencia hacia la población civil, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales, líderes y lideresas. Las disputas por el control de ciertas áreas, así como los circuitos del narcotráfico y la minería ilegal que allí se han desarrollado, han puesto como objetivo de violencias a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de una forma más directa. Los procesos de defensa y cuidado del territorio que se lideran desde la ruralidad son confrontados, amenazados y violentados por los distintos actores armados, que ven en ellos obstáculos para la consolidación de su dominio territorial.

En este nuevo contexto, las guardias han tenido un rol fundamental en la defensa de la vida, principalmente a través de las acciones de control territorial étnico y campesino, pero también en la formación política y acompañamiento a sus autoridades y organizaciones, al igual que su importante rol en la convivencia y la protección ambiental como parte de la defensa de la vida y el territorio. A pesar de que el capítulo étnico del Acuerdo de Paz estableció el apoyo al fortalecimiento de la guardia indígena y la guardia cimarrona con el apartado “En materia de garantías de seguridad del punto 3.4” (Acuerdo Final, 2016, p. 188), las acciones que vienen realizando las guardias han sido bajo sus propias dinámicas organizativas, sin un apoyo visible que sea producto de lo acordado en La Habana.

Si bien para garantizar la materialización del capítulo étnico se crearon espacios como la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y rutas concertadas como el Plan Marco de Implementación (PMI), los informes de seguimiento indican que no se han brindado las condiciones logísticas, financieras y políticas para que la IEANPE y el PMI tengan un funcionamiento adecuado. En cuanto a la dimensión de protección de comunidades étnicas, los decretos 2078 de 2017 y 660 de 2018 han permitido algún avance, pero no se han logrado implementar efectivamente (Instituto Kroc, 2021, p. 37). Por otro lado, se desarrolla el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, pero este “no contempla medidas específicas para los pueblos étnicos, ni tampoco medidas de fortalecimiento para las guardias indígenas y cimarronas, lo que representa un incumplimiento del capítulo 5 del A. F.” (ST, 2020, p. 8). El fortalecimiento de las guardias se ha centralizado en la Unidad Nacional de Protección (UNP) con escasas acciones concretas:

[...] según la UNP, se ha avanzado en el fortalecimiento material de la guardia Indígena, por ejemplo, mediante la provisión de dotaciones (bastones de mando, transporte de tracción animal, vehículos, uniformes, papelería) para el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la contratación de la guardia como esquema de seguridad en el Cabildo Mayor Embera en el resguardo Uradá Jiguamiandó. Sin embargo, no se ha avanzado en acciones de fortalecimiento con la guardia cimarrona, pues no se han incluido actividades ni recursos en

los planes de acción del Ministerio del Interior y de la UNP (Instituto Kroc, 2021, p. 38).

Numerosos análisis sobre el posconflicto han mostrado cómo algunas regiones del país se han visto especialmente afectadas por los reacomodos en las relaciones de poder mediadas por el uso de las armas. El suroccidente del país y, en particular, el departamento del Cauca han sido algunos de los lugares donde las nuevas dinámicas del conflicto armado se expresan con mayor fuerza. La ausencia militar de las FARC luego de la firma de los acuerdos, la disputa entre ‘nuevos y antiguos’ grupos armados por las rentas de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico y minería, el ejercicio de la fuerza por parte de estos grupos armados contra la población y otras acciones destinadas a consolidarse como poderes locales, el uso de los poderes armados para incidir en la política electoral regional, la débil acción institucional del Estado y las respuestas ciudadanas de autoprotección son aspectos sobre los cuales es necesario prestar atención.

En este capítulo analizamos el contexto actual del posconflicto en el Cauca, poniendo especial atención a la región norte del departamento, para comprender los desafíos de una de las formas de organización ciudadana para la defensa territorial que ha cobrado más fuerza y a la vez ha sido objeto de algunos de los ataques más notorios por parte de los grupos armados: las guardias indígenas y afrodescendientes. Aunque estas guardias tienen una larga trayectoria previa al acuerdo, su inclusión en el capítulo étnico en las negociaciones de La Habana muestra la relevancia de estos procesos organizativos en la construcción de paz territorial.

Los desafíos que enfrentan las organizaciones locales parecen superar las expectativas imaginadas en 2016. La reincorporación de los miembros de las FARC ha sido un proceso bastante lento y lleno de tensiones; sin embargo, los desafíos que plantea el posacuerdo no se limitan a su reincorporación. A lo largo de los últimos cuatro años, la ausencia de las FARC no se revirtió en una mayor presencia estatal; las economías ilícitas, principalmente relacionadas con minería y narcotráfico, no disminuyeron y, sobre todo, no desaparecieron las acciones de grupos armados ilegales. Las formas del conflicto se transformaron e incrementaron en la mayoría de sus expresiones más críticas.

En este escenario, las disputas por el control de territorios, recursos y poblaciones se agudizaron y las poblaciones rurales han sido las más afectadas. Se ha incrementado el número de asesinatos de personas vinculadas con el proceso de paz, miembros de organizaciones sociales y autoridades étnicas. Los cultivos de uso ilícito no solo se expandieron, sino que numerosas poblaciones locales han sido amenazadas para que dediquen sus tierras a estas actividades, y se han generado disputas relacionadas con el uso de servicios públicos, como la energía eléctrica en aquellos lugares donde es empleada para el sostenimiento de invernaderos de marihuana.

Uno de los principales conflictos en el posacuerdo es la renovación de las formas de despojo. El crecimiento de grupos armados y la expansión de economías ilícitas operan sobre la base de la apropiación violenta de tierras, bienes comunes y servicios públicos, además del uso de la fuerza contra las formas colectivas de construcción de autonomía y gobierno propio. El despojo opera como control sobre los recursos materiales, políticos y culturales de las poblaciones. Quienes se apropian de estos recursos no solo buscan posesión sobre bienes materiales, sino también control sobre las decisiones y tejidos sociales de las poblaciones locales. Requieren del debilitamiento de la capacidad organizativa y de los sentidos de vida que apuntan a la construcción de proyectos colectivos o que se opongan a sus intereses. En consecuencia, es posible sostener que el conflicto continuará luego de la firma de los acuerdos mientras no se proteja la existencia de proyecto alternativos de construcción de paz.

En este sentido, también es posible afirmar que en el (pos)conflicto la movilización social y las articulaciones interculturales y populares se han revelado necesarias y productivas. La minga del suroccidente ha permitido la confluencia de sectores campesinos, afrodescendientes e indígenas para exigir al Estado las garantías para el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la protección de la vida. Aquí, las guardias ocupan un rol crucial en la defensa de los proyectos políticos indígenas, negros y campesinos que buscan construir colectivamente iniciativas alternativas ante el conflicto social y político persistente. Además, desde las organizaciones sociales se adelantan procesos de articulación que permiten pensar y construir trabajos conjuntos por la defensa de la vida y el territorio entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, más allá de las exigencias al Estado y en consonancia con labores de construcción de paz que lideran desde hace varios años. Ejemplo de

ello son los encuentros interétnicos e interculturales, el consejo territorial interétnico e intercultural del norte del Cauca y múltiples iniciativas que no se formalizan en espacios de impacto regional, pero que han permitido en la cotidianidad que pueblos vecinos resuelvan tensiones y construyan en colectivo alternativas de paz frente a las múltiples problemáticas que amenazan sus proyectos de vida.

Referencias

- Caviedes, M. (Ed.). (2007). *Paz y resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía*. Bogotá: OIA.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, Comité de Integración del Macizo Colombiano, & Fundación del Suroccidente Colombiano (Fundesuma). (2017). *Crecer como un río. Volumen 2. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del macizo colombiano, Cauca Nariño y Colombia*. Bogotá: CNMH.
- Chaves, M. [1958] (2019). Los indígenas del Cauca en la Conquista y la Colonia. En E. Jaramillo & A. Rojas (Eds.), *Pensar el suroccidente. Antropología hecha en Colombia* (tomo III, pp. 59-82). Cali: Editorial Universidad Icesi-ALA.
- Escobar, A. (2007). La cultura habita en lugares: reflexiones sobre el globalismo y las estrategias subalternas de localización. En *Más allá del Tercer Mundo. Globalización y diferencia* (pp. 157-193). Bogotá: ICANH-Universidad del Cauca.
- Gros, C. [1981] (2019). Una organización indígena en lucha por la tierra: el Consejo Regional Indígena del Cauca. En E. Jaramillo & A. Rojas (Eds.), *Pensar el suroccidente. Antropología hecha en Colombia* (tomo III, pp. 831-852). Cali: Editorial Universidad Icesi-ALA.
- Hurtado, T. (2001). Treinta años de protesta social: el surgimiento de la movilización “étnica” afrocolombiana en el norte del Cauca. En M. Pardo (Ed.), *Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano* (pp. 95-122). Bogotá: ICANH-Colciencias.
- Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. (2021). *Informe especial del Instituto Kroc sobre el estado efectivo de la implementación del enfoque transversal étnico del Acuerdo Final de Paz de Colombia*. Notre Dame-Bogotá: Universidad de Notre Dame.
- Rojas, A., & Useche, V. (2019). *Guardias indígenas, afrodescendientes y campesinas en el departamento del Cauca. Historia política y estrategias de defensa*

- territorial*. Popayán: Semillero de Investigación Taller de Etnografía, Grupo GELPS, Universidad del Cauca.
- Secretaría Técnica (ST) del Componente Internacional de Verificación, Cinep/PPP-Cerac. (2020). *Primer informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz en Colombia*.
- Taussig, M. [1977] (2019). Evolución del trabajo asalariado rural en el Valle del Cauca, Colombia, 1700-1970. En E. Jaramillo & A. Rojas (Eds.), *Pensar el suroccidente. Antropología hecha en Colombia* (tomo III, pp. 685-724). Cali: Editorial Universidad Icesi-ALA.

Artículos y páginas web

- (1° de marzo de 2016). Indígenas dismantelaron mina ilegal de oro en Caldono, Cauca. *El País*. Recuperado de <https://www.elpais.com.co/colombia/indigenas-desmantelaron-mina-ilegal-de-oro-en-caldono-cauca.html>
- (4 de mayo de 2019). Atacan con granadas y disparos a líderes afro del Cauca. *Proclama. Cauca y Valle*. Recuperado de <https://www.proclamadelcauca.com/atacan-con-granadas-y-disparos-a-miembros-de-aconcl/>
- (26 de febrero de 2020). Una semana de toda una vida. *La Paz en el Terreno*. Recuperado de <https://lapazenelterreno.com/especiales/reincorporacion-nortecauca/toda-una-vida.html>
- (6 de noviembre de 2020). Excombatiente de las FARC fue asesinado en Caldono (Cauca). *RCN Radio*. Recuperado de <https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/excombatiente-de-las-farc-fue-asesinado-en-caldono-cauca>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (13 de octubre de 2020). *Pronunciamento Minga del Suroccidente*. Recuperado de <https://www.cric-colombia.org/portal/pronunciamento-minga-suroccidente-declaramos-que-el-presidente-ivan-duque-marquez-le-incumplio-al-pueblo-colombiano-asi-mismo-rechazamos-la-noticia-publicada-en-la-revista-semana/>
- Página oficial ACIN: <https://nasaacin.org/>

Capítulo 11

**Paz ambiental y juventud alternativa:
un aporte desde la experiencia de la Fundación
Protectora Ambiental de Planadas Tolima**

**Santiago Andrés Padilla Quintero, María del Pilar Salamanca Santos,
Jeferson Rodríguez Yate, Yeison Ricardo Castellanos Rincón**

[...] con procesos orgánicos de los campesinos, que se pueden realizar en todas las fincas, podemos hacer trabajos amigables con el medio ambiente, sin contaminar y sin deteriorar el suelo.

YEISON CASTELLANOS (comunicación personal, 9 de noviembre de 2019)

Yo creo que el tema de que empiece a surgir una nueva comunidad juvenil como una alternativa distinta a lo que ya se venía dando es supremamente importante y es algo que está en una transición y más en el contexto del municipio.

JEFERSON RODRÍGUEZ (comunicación personal, 9 de noviembre de 2019)

Introducción

El presente texto es resultado del proyecto de investigación “Escuela, territorio y posconflicto: construyendo una cultura de paz local en el sur del Tolima”, específicamente del trabajo liderado por su línea comunitaria, un ejercicio investigativo que se propuso producir conocimiento y cultura para la paz en el sur del Tolima, un territorio que históricamente ha sufrido el conflicto armado colombiano, pero en el que también se han gestado diversas iniciativas de paz. Para ello, academia y organizaciones sociales provenientes de la

región emprendimos un diálogo sobre las visiones de paz que estas últimas han formado desde su quehacer y su habitar el territorio, allí fungimos el rol de facilitadores de la discusión, aprendices e interlocutores.

En ese marco se da la participación de la Fundación Protectora Ambiental de Planadas Tolima (Fupapt), una organización de jóvenes ambientalistas fundada en el año 2014 en el municipio de Planadas (Tolima). Este capítulo busca relatar la visión ambiental y de paz de Fupapt sobre la cual transcurrió el diálogo durante el desarrollo del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”.

Con el ánimo de enriquecer el contexto del relato, lo vinculamos con el marco investigativo propuesto por Dresse *et al.* (2019), esta es una propuesta emergente que busca acercarse a experiencias de paz ambiental de manera sistemática, aportando un conjunto de herramientas conceptuales útiles para su análisis. Desde allí, también aportaremos la visión que hemos construido desde la academia sobre la realidad regional del sur del Tolima en lo que concierne a su situación medioambiental, de conflicto armado y paz.

Un marco investigativo para la paz ambiental: una visión compleja y múltiple

Teorías sobre la paz ambiental

Los primeros aportes teóricos vinculados a la noción de paz ambiental emergen de experiencias y estudios relacionados con la cooperación asociada al sostenimiento y cuidado de fuentes hídricas en América Central y el sur de África (Ide y Detges, 2018). Desde entonces, la paz ambiental sugiere la potencialidad de los ecosistemas compartidos para propiciar la cooperación entre actores en contextos de conflicto; esta potencialidad surgiría del carácter transfronterizo que pueden adquirir los problemas medioambientales, representando una oportunidad para pasar de la competencia a un tipo de cooperación que priorice las fronteras ecosistémicas sobre las administrativas-territoriales (Carius, 2006).

Desde los estudios fundacionales en esta área, realizados por Conca y Dabelko (citados por Darst, 2003), se comparte la noción de que hay una falta de consenso en la literatura sobre los efectos de la cooperación ambiental en el sostenimiento de condiciones de paz (Dresse et al., 2019).

En esta línea, análisis como el de Ide (2017) hacen una fuerte crítica a algunos modelos de paz ambiental que tienden a despolitizar la cooperación

para la administración de recursos ambientales. Para el autor, el objetivismo detrás de los discursos de la cooperación ambiental, que la señalan como resultado de la dependencia material de grupos y comunidades, pasa por alto la existencia de diversidades subjetivas-colectivas, que en medio de la interacción entre actores sociales le van dando forma. Tal es el caso de diferentes ‘escalas de sentido’ (nacionales, regionales y locales) y lugares identitarios que juegan un rol importante en la disposición que puede tener un actor para cooperar.

Para Ide (2017), esta noción objetivista de la cooperación se encuentra presente en la iniciativa palestino-israelí Good Water Neighbors (GWN), la cual busca generar puentes para una administración transnacional de los recursos hídricos del río Jordán. Su crítica se fundamenta en la capacidad reducida que tiene la noción de dependencia material y escasez de recursos para sostener la cooperación, de esa forma muestra cómo ambos conceptos son socialmente contruidos y pueden no corresponder a las visiones de activistas que hacen parte de la iniciativa misma. Por ejemplo, expone cómo algunos discursos dominantes a nivel nacional sobre el conflicto entre Palestina e Israel pueden permear la visión de locales, reproduciendo prejuicios y dificultando la cooperación; también, da cuenta de opiniones que entienden a Medio Oriente como un lugar de abundancia hídrica, en contraposición a la representación que hace de él la GWN como un lugar de escasez.

A pesar de lo anterior, el autor rescata la voluntad de la GWN de construir una administración del río de carácter transnacional, dando prioridad a la “escala hídrica” (Ide, 2007, p. 554) sobre la nacional; igualmente, resalta la importancia que la iniciativa le ha dado a los procesos locales, pues ha propiciado el acercamiento entre palestinos e israelíes y ha contribuido a tender puentes (simbólicos y materiales) entre ambos. Estos elementos, comenta, aumentan las posibilidades de cooperación.

Para dar una respuesta a esta ausencia de consenso, Dresse *et al.* (2019) proponen en su texto “Environmental peacebuilding: towards a theoretical framework” un marco analítico para acercarse de manera sistemática a iniciativas concretas de paz ambiental y recabar evidencia que aporte a superar la situación de estancamiento en la que se encuentra el campo; en ella se delinear algunos conceptos clave que inciden en la forma que pueden tomar estas iniciativas en su despliegue y una clasificación general de estas. A continuación, se menciona brevemente.

‘Bloques’ que definen las iniciativas de paz ambiental

- **Condiciones iniciales:** se refiere a las condiciones iniciales en las cuales emergen las iniciativas de paz ambiental. Una primera condición tiene que ver con las características generales del ecosistema concreto donde se despliega una iniciativa, esta puede ser la percepción de abundancia o escasez de recursos, la interdependencia a través de fronteras políticas y la falta de sostenibilidad. Una segunda condición está asociada con las relaciones previas entre partes: nivel de violencia, asimetrías de poder o los valores compartidos.
- **Mecanismos:** según las condiciones iniciales en las que se formula una iniciativa de paz ambiental, se definen los medios que utilizan para alcanzar sus fines. Entre ellos se encuentra: primero, la intervención técnica, preferida cuando hay presencia de altos niveles de violencia; segundo, la creación de espacios neutrales de interacción, cuando hay posibilidad de contacto directo y entendimiento entre las partes; tercero, la formación de un fondo común de administración de recursos, cuando se priorizan las fronteras ambientales sobre las políticas.
- **Resultados:** se refiere a la expectativa en términos de costos y beneficios de la puesta en marcha de una iniciativa de paz ambiental.

Trayectorias de las iniciativas de paz ambiental

De acuerdo con sus condiciones iniciales, mecanismos y resultados, una iniciativa de paz ambiental puede ser ubicada en uno de los siguientes modelos:

- **Técnica:** implica una división del trabajo en la administración y cuidado de los entornos ambientales, posibilita minimizar la interacción cuando existen relaciones previas conflictivas e incentivos pobres.
- **Restaurativa:** posibilita la creación de espacios para el reconocimiento de injusticias y de la legitimidad de los otros como interlocutores válidos.
- **Sostenible-distributiva:** le apunta a visibilizar y a atacar las causas estructurales que posibilitan el conflicto a través de una distribución igualitaria de recursos.

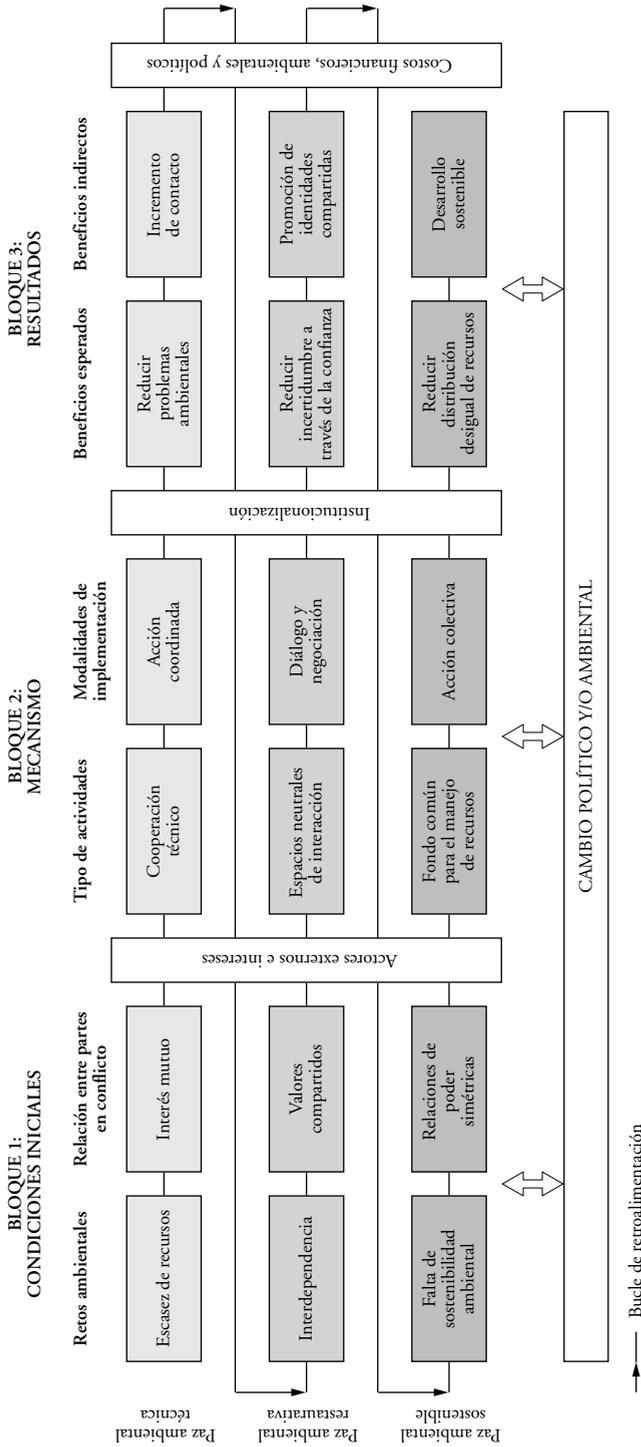


Figura 11.1. Trayectorias de la paz ambiental

Fuente: Dresse *et al.* (2019) (traducción propia).

Los autores afirman que este no es un marco rígido que pretende definir la multiplicidad de iniciativas de paz ambiental y las realidades que las afectan, en su lugar se plantea como una herramienta útil para el análisis de estudios de caso concretos, lo que puede dar lugar a hibridaciones entre categorías. En general, con esto se busca allanar el camino para investigar la complejidad de la cooperación y la competencia asociada a ecosistemas compartidos, un proceso dinámico que puede involucrar diversos actores e identidades con sus respectivos intereses y expectativas, además de condiciones sociopolíticas y ambientales cambiantes.

Con lo anterior se buscaría un punto medio entre nociones que privilegiaban el análisis de la construcción de paz ambiental de arriba hacia abajo (*top-down*) o viceversa, de abajo hacia arriba (*bottom-up*). Lo que se busca entonces es hacer posible un análisis relacional, que dé cuenta de escenarios complejos y fluidos, en los que la interacción entre actores se reconstruye según las dinámicas políticas y medioambientales que afectan un territorio a diferentes niveles.

Cabe también hacer una crítica al modelo que proponen Dresse *et al.* (2019) y los autores que escriben sobre paz ambiental referenciados en este texto; en ese sentido, se puede mencionar como un obstáculo para el entendimiento de las iniciativas de paz ambiental la paz que subyace a su producción conceptual, pues esta se limitaría a la cooperación para la resolución y trámite de conflictos asociados a recursos medioambientales. Sin embargo, nociones como la de “paz positiva” (Galtung, citado por De Vera, 2016) van más allá del trámite de conflictos, entendiendo la paz como resultado de una transformación de las condiciones estructurales y culturales que hacen posible una situación de violencia. De este modo, algunas acciones que le apuntan a transformar políticas, relaciones o imaginarios, percibidos como violentos para ciertas poblaciones y ecosistemas, podrían ser señaladas como acciones pacíficas.

Así mismo, cabe añadir que a este marco para la paz ambiental le sería útil acuñar la noción de paces imperfectas (Delgado, 2009), concepto que se refiere a aquellas iniciativas de construcción de paz “que se construyen en el día a día, mediante procesos perfectibles, generalmente inmersos en escenarios donde hacen presencia diversas violencias, y a partir de mediaciones constantes entre conflictos y prácticas pacifistas” (p. 181). Esto con el propósito de alejarse de las nociones que evalúan la eficacia de las acciones

de cooperación en términos de estabilización y normalización, que priorizan intervenciones lineales, securitizadoras e indiferentes a instituciones y procesos organizativos locales no liberales,¹ asunto que puede ser perjudicial para el entendimiento de los contextos conflictivos en los cuales se gestan iniciativas de paz.

Identidad y medio ambiente

Para la comprensión de casos concretos como el de Fupapt y retomando el aporte de Dresse *et al.* (2019), que resalta el papel clave que tienen las identidades en la definición de estas propuestas, vale la pena traer a colación la relación entre identidad y medio ambiente.

Porras y Pérez (2019) precisan que, en los últimos años, la articulación entre la identidad y el ambiente se ha convertido en un tema de reflexión que permite aunar esfuerzos en el campo ambiental. Esta identidad ambiental se asocia con la representación social que tienen las personas que habitan un territorio sobre sí mismos y el ambiente; esto incluye las dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental, y que en conjunto influyen en la manera como las personas se desenvuelven, organizan su vida y toman decisiones frente al propio ambiente. Autores como Stets y Biga (2003), citados por Porras y Pérez (2019), conciben la identidad ambiental como los significados que las personas se atribuyen a sí mismas en relación con el entorno; de esos significados surgen las relaciones con el ambiente y determinan las actitudes que se asumen y el comportamiento ambiental que exhiben en el territorio.

En general, la identidad ambiental describe la conexión que se establece con el ambiente natural a partir de las experiencias biográficas, y esto influye en los modos en que las personas perciben y actúan en relación con su ambiente inmediato (Clayton, 2003, citado por Cruz y Estrada, 2019). Es de resaltar en esta línea lo expresado por Lacasse (2016, citado por Cruz y Estrada, 2019), quien evidencia que cuando las personas cuentan con una identidad ambiental en la que se asumen como ambientalistas, es más probable que amplíen la diversidad de conductas proambientales en distintos ámbitos de sus vidas, generando estilos de vida sustentables, mientras que aquellos con baja identidad ambiental se conforman moralmente al hacer únicamente conductas proambientales de bajo impacto.

¹ O híbridos, como podría llamarlos Mac Ginty (2010).

Condiciones iniciales: nuevas realidades de paz y conflicto en el sur del Tolima

Acuerdo de Paz, desarme de las FARC y disminución de la violencia

En el año 2016 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano firman los Acuerdos de Paz del Teatro Colón, dando paso a un escenario político que se conocería en el país como ‘el posacuerdo’. Poco tiempo después de la firma de los acuerdos, las FARC dejan sus armas y empiezan un proceso de transición a la vida civil que les implica decir la verdad sobre sus actuaciones durante el conflicto armado y comparecer ante la justicia transicional.

La ausencia de las FARC como actor armado en varios territorios del país fue un factor clave que generó cambios en su situación de guerra y paz, pero que se han expresado de manera diferenciada. Por ejemplo, en casos como los de Tumaco (Nariño), Cauca o el Catatumbo (Norte de Santander), tales cambios se han caracterizado por el surgimiento de nuevas disputas por territorios desocupados por la disuelta guerrilla, los cuales después de un breve período de calma han sido tomados por actores armados emergentes y antiguos, lo que ha implicado un alto nivel de violencia armada.

En el sur del Tolima, la retirada de las FARC, la baja en la confrontación armada y el cambio en la estrategia de intervención estatal de la estabilización a la paz acordada y territorial, que se dio con el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018), tuvo resultados positivos, siendo uno de ellos el retiro de la clasificación como ‘zona roja’ impuesta por el Estado al territorio. Esta clasificación habría impedido la presencia de instituciones de carácter civil y aumentado la de las fuerzas armadas en la región, algo que en el contexto de confrontación armada y el ambiente de polarización nacional (impulsada por actores armados y políticos del nivel central) habría dado como resultado una fuerte estigmatización por parte del Estado a la población civil (*Pacifista*, 2015).

A pesar de estos avances, la región se encuentra actualmente en riesgo, desde el año 2017 se han registrado atentados y amenazas a líderes sociales, asesinatos de excombatientes de las FARC en proceso de reintegración y la posibilidad latente de que grupos posparamilitares y posibles disidencias de la guerrilla de las FARC vuelvan a tomar fuerza en el territorio (*Verdad Abierta*,

2017; *Semana Rural*, 2019; *RCN Radio*, 2020; *Caracol*, 2020; *La Silla Vacía*, 2020); sin embargo, la violencia armada no ha alcanzado la magnitud de los casos mencionados anteriormente, ni tampoco el nivel que presenció la región desde finales de los años noventa y hasta la primera década de 2000.

Sumado a lo anterior, ha existido un cambio en la política de paz del actual gobierno, el cual ha propuesto el discurso de la “paz con legalidad”, que retorna a la noción de estabilización del antiguo gobierno. Esto se ha reflejado en transformaciones institucionales, como es el caso de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, que, por decisión presidencial, pasó a llamarse Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. No obstante, se han mantenido algunas iniciativas propias de la paz territorial, como son los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que, no exentos de críticas, aún siguen en curso.

Entre los factores que podrían estar frenando el aumento de la violencia en la región, se puede mencionar la mínima presencia de cultivos ilícitos, que desincentiva una confrontación fuerte entre actores armados por el control de este eslabón de la economía ilícita en el territorio.

Nuevas oportunidades: presencia institucional y reconstrucción del tejido social

De manera concomitante a este escenario, alrededor del año 2012, con la presidencia de Juan Manuel Santos y el desescalamiento del conflicto en la región, se impulsan una serie de políticas de construcción estatal y de mercado en el territorio que, a diferencia del gobierno predecesor, se acercaron a una visión más civil y menos militar de la presencia estatal. Este proceso se refuerza con los Acuerdos de Paz y el desarme de las FARC, lo que resultó en una mayor conexión entre los municipios del sur y la capital del departamento, además de un incremento en la presencia de institucionalidad civil del nivel regional, nacional e internacional con programas de derechos humanos, paz, desarrollo, acceso a la justicia, entre otros.

Otro efecto del decrecimiento en la violencia armada y la ausencia de las FARC como actor armado ha sido la posibilidad de reconstrucción del tejido social, un asunto que no ha pasado exclusivamente por la intervención del Estado, sino que también tiene que ver con la capacidad de resistencia e inventiva de los habitantes de la región frente a las posibilidades que abrió un momento concreto de guerra y paz.

La disminución del miedo y la desconfianza, que en parte fueron producto de estrategias violentas de actores armados contra sus contrapartes armadas y contra civiles, abrió una mayor posibilidad de reunión, deliberación y movilización, situación que se ve reflejada en la creación de asociaciones productoras de café (Romero Vargas, 2019) y otras organizaciones de carácter civil. A partir del año 2016 esta situación se refuerza con la salida del Frente 21 de las FARC y el aparato de justicia *de facto* (llamado popularmente ‘El Juzgado 21’), el cual habían construido para tramitar conflictos y mantener el control de la población, asunto que generó incertidumbre, pero también la necesidad y la posibilidad de encontrar soluciones propias y colectivas.

La reconstrucción del tejido social se ha expresado en los últimos años en el fortalecimiento de organizaciones que venían trabajando en el territorio y en la conformación de nuevas organizaciones campesinas, de víctimas, productivas, de defensa de los derechos humanos, de las mujeres y población LGBTI+, y, por supuesto, ambientales, entre las que destaca Fupapt.

Efectos colaterales: posacuerdo y conflictos ambientales en el sur del Tolima

El nuevo escenario que hemos venido relatando no solo trajo consigo oportunidades para la población, también implicó la visibilización de una serie de conflictos territoriales antiguos y el surgimiento de otros nuevos. Tal es el caso de los conflictos socioambientales en el sur del Tolima.

Herz (2013) conceptualiza los conflictos socioambientales como conflictos “relacionados con el impacto que tienen sobre las poblaciones ciertas estructuras de desigual acceso y el aprovechamiento de recursos de la naturaleza necesarios para la supervivencia de las sociedades, así como también las contrapuestas percepciones e intereses alrededor de los mismos” (p. 14, citado por Rodríguez et al., 2019). Estos conflictos están muchas veces atravesados por el accionar de actores armados, aunque no necesariamente se dan en el marco de un conflicto armado como es entendido el colombiano.

En el sur del Tolima se evidencian conflictos socioambientales tanto en el escenario de guerra más intenso como en el de posacuerdo. En el primero, aparecen conflictos como el denunciado por ILSA (2014) sobre la vinculación entre la avanzada contrainsurgente del Estado colombiano en el cañón de Las Hermosas y la construcción de la hidroeléctrica Hidroamoyá de la empresa Isagén durante la primera década del siglo XXI; según la organización, este

proyecto energético habría sido acompañado de una fuerte militarización del territorio y la criminalización por parte del Estado de líderes que se oponían a su realización, todo esto en el marco de una avanzada militar del Estado contra las FARC, quienes tenían uno de sus bastiones más fuertes en el territorio y que terminó siendo lugar de operaciones de quien habría sido máximo líder de la guerrilla, Alfonso Cano.

En el escenario del posacuerdo, dos casos dan cuenta del surgimiento de nuevos conflictos ambientales: el primero, el proyecto para construir una hidroeléctrica sobre el río Ambeima, ubicado en el municipio de Chaparral, el cual ha sido rechazado de múltiples maneras por las comunidades del sector de La Marina; este rechazo incluyó la realización de un cabildo abierto que contó con la participación de instituciones estatales del nivel municipal, departamental y nacional. El segundo es el caso de la construcción de torres de energía por parte de la empresa Grupo Energía Bogotá en el páramo aledaño al corregimiento de Herrera en el municipio de Rioblanco. Este proyecto ha enfrentado la resistencia de varios campesinos, quienes se manifestaron en el año 2018 con un plantón, bloqueando la vía al páramo como protesta por su construcción (*Ecos del Combeima*, 2018).

Otra fuente de conflictos en los territorios se encuentra en la explotación de minería ilegal por parte de actores armados ilegales, a la que son propensos municipios como Ataco, Chaparral o Planadas; así se puede evidenciar en un mapa construido en el año 2016 en el que participaron comunidades del sur del Tolima, la Universidad de Ibagué y el Consejo Nacional de Paz, el cual evidencia la presencia de este fenómeno en estos municipios (figura 11.2).

Con la salida de las FARC, grupos armados posdesmovilización paramilitar e incluso las disidencias de las FARC podrían querer explotar yacimientos mineros en los espacios no ocupados por el Estado, con el objetivo de financiar sus actividades bélicas. Como se mencionó antes, ambos grupos han sido identificados en el territorio por autoridades oficiales y han amenazado con volver a instaurar su control sobre el sur del Tolima.

En el caso de la explotación minera legal, según la web Tierra Minada (2018), que toma como base los registros del Catastro Minero Nacional, en el sur del Tolima se evidencia un aumento en la concesión de títulos mineros en el período entre 2006 y 2010 (ver figuras 11.3, 11.4 y 11.5); vale la pena recordar que varias de estas concesiones mantienen su vigencia muchos años después del momento de su asignación, por esa razón,

aunque en el período 2013-2017 el territorio experimentó una disminución en las concesiones, no necesariamente hubo una reducción real en el total de títulos mineros concedidos. Varios de los títulos fueron concedidos

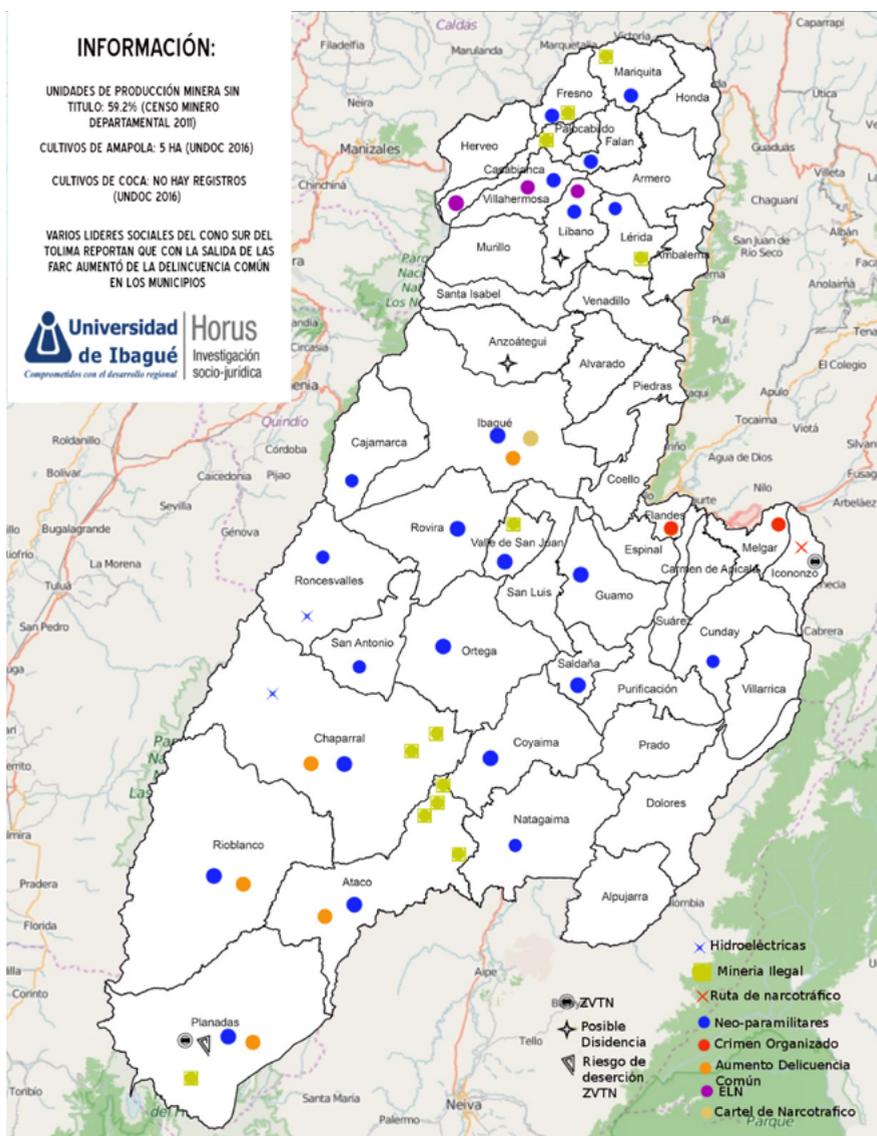
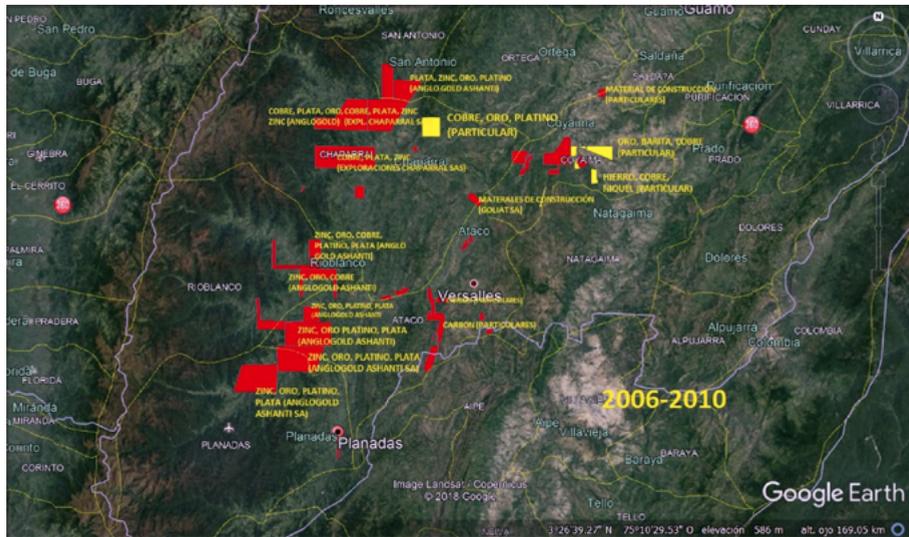
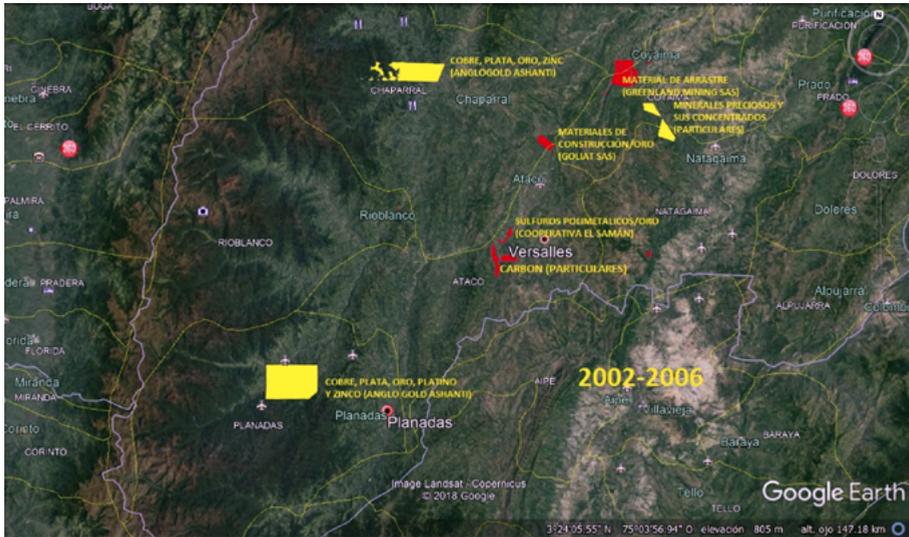


Figura 11.2. Mapa de conflictividades ambientales en el sur del Tolima

Fuente: mesas de paz (2016).

a multinacionales como la sudafricana AngloGold Ashanti, empresa que ha sido fuertemente cuestionada en el departamento por el proyecto de explotación minera a cielo abierto La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima).





Figuras 11.3, 11.4 y 11.5. Mapas de concesiones mineras en el sur del Tolima producidos a partir del Catastro Minero Nacional

Fuente: Tierra Minada (2018).

En este sentido, las comunidades del sur de Tolima, especialmente en el municipio de Planadas, siguen pendientes de los procesos que se gestan sobre los recursos naturales en el territorio, así lo expresan: “[...] lo que pasa es que siempre hay un protocolo y en la medida de que eso vaya avanzando, como los títulos, como las exploraciones, no hay una intervención minero-energética en el momento, por eso han avanzado procesos como, por ejemplo, algunos títulos que se han otorgado u otras exploraciones, que eso es como una introducción a una explotación, entonces no podemos decir que han hecho presencia, pero ya” (comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

Por último, en el territorio se han expresado conflictos ambientales vinculados a la expansión de la frontera agrícola a terrenos montañosos a los que antes la población no tenía acceso, estas prácticas vienen acrecentando el riesgo de deforestación y de afectación de fuentes hídricas. Este conflicto se ha dado debido a la profundización de la producción cafetera en el territorio. Sus protagonistas serían campesinos cultivadores de café que tienen este tipo de producción como sustento y autoridades ambientales a nivel regional que buscarían aplicar la normativa existente.

La salida de las FARC, aunque positiva en otros aspectos, paradójicamente abrió la puerta para que estos nuevos conflictos ambientales se comenzaran a dar en el territorio; la guerrilla, quien controlaba zonas rurales en estos municipios en conflicto, impedía el acceso a recursos naturales por parte del Estado, empresas u otros actores armados ilegales.

Identidades: juventudes rurales en el sur del Tolima

Como se mencionó en páginas anteriores, desde el año 2012 en el sur del Tolima se ha adelantado un proceso de conexión de la región con el centro del departamento en razón al cambio en el orden de guerra y paz en él, asunto que posibilitó la construcción de infraestructura vial y de mercado, dando paso a una comunicación más activa de la región con la capital del departamento y con otras regiones del país. Ejemplo de esto es la construcción de la vía Ataco-Planadas, que disminuyó tiempos y costos de transporte.

También, en ese escenario instituciones de carácter estatal y no estatal incrementaron su presencia territorial, ofreciendo programas de derechos humanos, reactivación económica, justicia, entre otros. Este proceso se vería reforzado con la firma de los Acuerdos de Paz Estado-FARC en 2016, llegando a ser un hecho notorio para los habitantes del territorio, tanto así que el año 2018 fue referido por varios de sus habitantes como “el año de los chalecos”, por la cantidad de organizaciones e instituciones que arribaron al municipio.

Estos nuevos escenarios de aumento en la apertura regional, junto al acceso a tecnologías digitales de la información, pueden haber tenido una repercusión en cómo los jóvenes del sur del Tolima entienden el rol que deben jugar en su territorio.

En ese sentido se encuentran estudios como los de Pardo (2017), que en su diagnóstico de los(as) jóvenes rurales en Colombia indica cómo estos “presentan un mayor nivel educativo que sus generaciones previas [...] tienden a presentar una mayor cercanía y manejo de las nuevas tecnologías de información y formas de socialización y adquisición del conocimiento, razón por la cual se les puede considerar potenciales actores de sus territorios” (p. 1). A pesar de ello, este autor también señala cómo las juventudes rurales son más vulnerables en comparación con sus contrapartes urbanas, pues en el campo cuentan con menos posibilidades de acceder a un empleo o a educación básica, media y alta de calidad, lo que ha ocasionado una

migración a ciudades o cabeceras municipales, generando un paulatino envejecimiento del campo.

Metodología

Este capítulo hace parte del trabajo desarrollado en el marco del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto: construyendo una cultura de paz local en el sur del Tolima”, que orienta su proceso desde la investigación participativa y le apuesta a ese diálogo de saberes entre coinvestigadores de las instituciones coordinadoras y las organizaciones participantes, procedentes de los municipios de Araco, Chaparral, Rioblanco y Planadas. En este contexto, con Fupapt, compartimos tres encuentros *in situ* y tres generales. Los encuentros generales fueron vislumbrados como espacios para compartir las experiencias de cada organización, y cómo estaban resignificando la construcción de paz en sus territorios.

Apoyados en metodologías participativas, propiciando un ambiente de confianza y apertura, se llevaron a cabo los encuentros *in situ* con los(as) integrantes de Fupapt. En el primero, a través de un ejercicio de lluvia de ideas, se exploró sobre las conflictividades presentes en el territorio; surgieron temas asociados con la inseguridad, relación con la autoridad y la explotación de los recursos naturales y los impactos ambientales. En este espacio, el proceso de Fupapt se narró a través de una línea de tiempo, que facilitó el reconocimiento de los eventos relevantes que llevaron a la creación de esta fundación y su razón de ser. En un segundo encuentro, y apoyados en las cartografías elaboradas por los(as) integrantes de Fupapt y mapas impresos de concesiones mineras en el sur del Tolima producidos a partir del Catastro Minero Nacional, se exploraron con mayor detenimiento las conflictividades ambientales presentes en el territorio, así como las iniciativas proambientales que se vienen desarrollando. Las preguntas que ayudaron a motivar la discusión estuvieron en la línea de explorar los recursos naturales que existían, qué ha pasado con ellos y cómo han cambiado, y los proyectos o actividades que se vienen adelantando en beneficio del medio ambiente. En el tercer encuentro, a partir de la fotografía participativa, se propició el hablar sobre los conceptos de ‘paz ambiental’ y ‘juventudes alternativas’; para ello se motivó hacia una mirada desde sus historias personales y colectivas, de cómo han adquirido su conocimiento y acercamiento a lo ambiental,

pero también cómo definen la paz ambiental y las juventudes alternativas en el territorio.

La propuesta de Fupapt: paz ambiental y juventud

La Fundación Protectora Ambiental de Planadas Tolima (Fupapt) es una organización fundada por jóvenes ambientalistas en el año 2014, esta ha dirigido sus esfuerzos a implementar acciones que fomenten la sostenibilidad ambiental del municipio de Planadas (Tolima). Dichas acciones se han formulado desde su identidad como jóvenes y como respuesta al surgimiento reciente de retos y posibilidades vinculados a los cambios sociopolíticos y ambientales en el territorio, consecuencia del decrecimiento del conflicto armado, la intervención estatal e internacional, las nuevas posibilidades para la extracción minero-energética y la profundización del modelo de producción de café regular y especial. Estas acciones hacen parte de lo que Fupapt resumió en el marco del proyecto como “paz ambiental” y “juventud alternativa”.

La iniciativa de la paz ambiental que propone Fupapt tiene en su centro una noción de bienestar personal y colectivo vinculado con el equilibrio medioambiental del territorio, esto es posible mediante el aprovechamiento de recursos ambientales de manera sostenible y sustentable. Así lo explica la organización desde un concepto construido de manera colectiva: “Paz ambiental es el momento en que una persona tiene lo suficiente para vivir con dignidad y tranquilidad, aprovechando el territorio y sus riquezas de forma sostenible y sustentable” (Fupapt, taller del 2 de diciembre de 2019).

Este concepto ha sido aterrizado por la organización en la creación de espacios en los que actores comunitarios e instituciones locales se unen en torno a la búsqueda de soluciones a algunas problemáticas socioambientales que aquejan al municipio de Planadas. En ese trabajo, la Fundación ha posibilitado la integración de la sociedad civil e instituciones armadas a nivel local como el Ejército o la Policía, hecho que, según sus miembros, puede contribuir a la superación de desconfianzas y a la construcción colectiva de una visión territorial. De este modo lo enuncia uno de los líderes de Fupapt: “[...] paz ambiental implica que a todas esas problemáticas que surgen y ya estaban se les pueda dar solución de manera colectiva, y eso hace que también sea como un punto de partida o proyección a cómo se piensa el territorio” (Jeferson Rodríguez, comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

Como se ha expuesto anteriormente, las condiciones de partida de esta iniciativa se alinean con la situación de disminución de la violencia armada y de posacuerdo que vive la región; el surgimiento de una iniciativa de construcción de confianza y reconocimiento concretamente entre fuerza pública y población civil no habría sido posible en el ambiente de confrontación que vivió la región en los momentos más álgidos del conflicto, en el que, como se apuntó anteriormente, estuvo presente una fuerte estigmatización contra la población civil por parte del Estado.

De ahí que una de las acciones escogidas por la organización para la cooperación ambiental sea la construcción de espacios donde se dé el reconocimiento y diálogo entre actores locales, en términos de Dresse *et al.* (2019), inclinándose a una perspectiva vinculada a una visión restaurativa de la paz ambiental.

Sin embargo, la organización no solamente ha creado nuevos espacios de interacción entre actores sociales, también ha vinculado el trabajo realizado en estos con espacios de toma de decisión institucionales preexistentes. Tal es el caso de la formulación de la política pública ambiental del municipio de Planadas, que la organización habría construido a partir de un diagnóstico amplio con la población rural y urbana del municipio. Esta propuesta apuntaba a la resolución de varias problemáticas ambientales a nivel municipal y fue objeto de un proceso de cabildeo, mediante el cual la organización logró el compromiso de actores políticos locales para su ejecución.

Asociado a la creación de espacios de construcción colectiva entre actores locales y la vinculación de la organización con los existentes, se encuentra el concepto de ‘juventud alternativa’, que entiende a los jóvenes como agentes activos en las decisiones colectivas y políticas de sus territorios. En ese sentido, desde la plataforma juvenil del municipio se ha evidenciado su participación en las políticas y decisiones a nivel municipal: “Entonces, empezamos a tener incidencia política no solo como líderes comunitarios, sino ya dentro de la alcaldía municipal desde la administración para empezar a contribuir y hacer como el enlace de los jóvenes, [...] lo político tiene que ver mucho con el desarrollo del municipio y pues esa era la idea, como de incentivar que los jóvenes participen y no estén a un lado como ‘no, eso no es lo que me conviene, yo no tengo nada que ver con eso’” (Yeison Castellanos, comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

En esta línea, Gudynas (citado por Porras, 2014) rescata la importancia del fortalecimiento de la ciudadanía a partir de la participación en el debate público, en su papel activo en los procesos de toma de decisiones, abiertas a otra sensibilidad ambiental y a otras valoraciones del entorno. Aspectos ejemplificados en el territorio con las decisiones de algunos grupos sociales de contemplar otras alternativas de desarrollo frente a las prácticas extractivistas que han socavado los recursos y amenazan la diversidad biológica y cultural en los territorios. Desde otro accionar, Fupapt, a través de estrategias pedagógicas, viene fortaleciendo esa ciudadanía con talleres de sensibilización a jóvenes y las juntas de acción comunal (JAC), encaminados al cuidado del medio ambiente, a promover prácticas amigables de cultivo y al uso adecuado de los recursos naturales presentes en el territorio.

Para Fupapt, el ejercicio ambiental ha posibilitado un reconocimiento de las riquezas naturales del territorio por parte de los jóvenes y también ha reforzado su capacidad de agencia para apuntarles a las problemáticas que afectan al territorio. Los jóvenes representan una generación con conciencia ambiental, lo que significa que han sido capaces de cambiar sus hábitos y reconocer que sus acciones tienen efectos directos en el medio ambiente, y, como se ha vislumbrado, reconocen su papel activo en cuidar y preservar el planeta (*El Espectador*, 2017).

[...] básicamente lo que se busca generar es un empoderamiento por parte de estos muchachos para con el medio ambiente. De pronto ningún muchacho se cuestiona, por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa a mí del territorio? Pero cuando va a tomar una fotografía es algo que permite realizar una lectura de los intereses que tiene cada persona del territorio y qué quiere resaltar. Entonces, se podrían evidenciar nuestros paisajes, porque cuando los muchachos entregan las fotografías siempre tratan de resaltar el tema medioambiental, las montañas, el nevado... empieza a surgir como una iniciativa juvenil todo este tema de medio ambiente desde la institución educativa (Jeferson Rodríguez, comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

La idea de ‘juventud alternativa’ también se ha vinculado a un cambio generacional con respecto a la visión sobre las formas predominantes de producción en el territorio, como lo es el monocultivo de café, a la vez que

retoma conceptos tradicionales y los transforma con el objetivo de crear oportunidades en su contexto; ejemplo de esto es la idea de las fincas sostenibles e integrales que se asemejan a las de sus generaciones pasadas. Así lo anota Yeison Castellanos, miembro de Fupapt:

Estamos también incentivando el tema asociativo ecoturístico, la asociación está ahí, más o menos conformada, la idea era que los jóvenes se empoderaran de esta economía, pero no teníamos los conocimientos base para poder trabajar en eso; junto con el SENA empezamos a traer una serie de cursos y capacitaciones, y eso ha dado que ya se hayan visibilizado algunos lugares donde se pueda hacer turismo sostenible, avistamiento de aves y todo eso en torno a la juventud, porque yo ya sé que mis abuelos y mis papás no van a creer en una economía de este tipo porque están en ese monocultivo del café (Yeison Castellanos, comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

El crecimiento del mercado de cafés especiales en el municipio de Planadas y los programas de catación de café, ambos fenómenos impulsados por asociaciones de campesinos productores de café, con apoyo reciente de instituciones del Estado y de cooperación, ha posibilitado la inclusión como catadores de café de jóvenes miembros de las asociaciones, un eslabón que en la cadena productiva del café juega un rol importante en la identificación de estándares de calidad y la negociación de precios. De esa manera, un miembro de Fupapt menciona cómo esto ha sido de gran inspiración para la Fundación y su intención de aportar al desarrollo municipal:

Digamos son hijos de productores que se están capacitando en temas de catación, de reconocer los atributos del café, para ellos, como hijos, decirles a sus padres como, vea, estamos produciendo este tipo de café, el precio puede variar entre esto y esto, para que, como dicen, no nos den en la cabeza. Entonces, son asociaciones que están fortaleciendo a los jóvenes, no solo en café, sino también en temas de turismo, y como fundación, nos fortalece y nos anima a seguir trabajando, porque hay gente que sí quiere trabajar en cambios de la economía (Yeison Castellanos, comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

En consonancia con el interés de la Fundación en fortalecer el accionar de los jóvenes en el territorio, investigaciones dan cuenta de que el agro y el ecoturismo han demostrado ser formas sostenibles y alternativas de empleo para los habitantes que aprovechan el conocimiento que tienen de su territorio. Experiencias internacionales como las de Ruanda, Uganda e Indonesia son algunos de los ejemplos de cómo el ecoturismo ha ayudado a reactivar economías locales y a integrar a poblaciones vulnerables tras el fin del conflicto, y también a impulsar la recuperación del medio ambiente (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017).

Ello da cuenta del posicionamiento identitario desde el cual se visiona la paz ambiental, en el que los jóvenes han adquirido una conciencia acerca de su lugar en el territorio, su responsabilidad en su cuidado medioambiental, así como las posibilidades que este ejercicio les abre para incidir en el rumbo de su municipio y hacer parte de economías que los favorezcan. Los miembros de Fupapt han puesto en marcha esta visión mediante diferentes acciones, entre las que se cuenta: la formulación de una política ambiental, que incluyó un ejercicio amplio de diagnóstico ambiental con varias comunidades del municipio y un ejercicio de cabildeo para ponerla en marcha; acompañada, como se mencionó anteriormente, de una pedagogía ambiental, de sensibilización y concientización respecto a la relación que se tiene con el medio ambiente y el uso de los recursos naturales.

Para Fupapt, la juventud alternativa, y desde el enfoque de la construcción de paz, está movilizada por una conciencia que surge de las relaciones que establecen los jóvenes con el medio ambiente que los rodea, aspecto que lleva a tener respeto por todos los seres vivos que habitan el territorio, es decir, la flora y fauna. Implica reconocer y tener una apertura a las diferentes formas de ver el mundo, a las representaciones que nos hacemos del entorno, y entender las diferencias existentes entre las propias percepciones y las de los otros. Esta forma de estar y de relacionarse posibilita ser activo ante las problemáticas y sucesos, actuando a partir de proyectos políticos que permiten atender las necesidades detectadas en el territorio.

[...] la idea es seguir contribuyendo en la medida de mis capacidades, de lo que voy conociendo. No solo hay gente que se mete a un liderazgo por un beneficio económico [...], el placer de ver algo que se hizo por la gestión o trabajo propio, por la constancia en algo, eso es más

que satisfactorio. Entonces, eso es como mi vida con Fupapt, con el medio ambiente y con las iniciativas en las que he podido participar, y pues espero seguir participando hasta que el tiempo me dé (Yeison Castellanos, comunicación personal, 9 de noviembre de 2019).

Como se ha podido mostrar, el accionar de Fupapt no se limita solamente a la creación de espacios para la cooperación ambiental en su territorio y la creación de confianza entre actores, también ha buscado generar acciones dirigidas a incidir en las decisiones que se toman a nivel municipal sobre temas medioambientales; en ese sentido, su quehacer organizativo se da desde un lugar social concreto, con intereses propios. Por ello, es pertinente resaltar su iniciativa ambiental, en la que se conjuga la generación de espacios de diálogo, no solamente vinculados a la cooperación, sino también nutridos por la contradicción entre intereses diferentes. Es claro que el tema ambiental puede ocupar un lugar importante en las interacciones sociales en los territorios, pues involucra la participación de diversos actores, desde el accionar privado como público, quienes en el mismo escenario desarrollan una serie de acciones que en ocasiones son sinérgicas, aunque en otras pueden ser contradictorias (Severiche, Gómez y Jaimes, 2016).

Esto último, que, en resumidas cuentas, constituye un proceso democrático, hubiera sido un ejercicio difícil de llevar a cabo (por no decir imposible) en el marco de una confrontación armada, en el que las partes en conflicto buscarían ganar la obediencia de la población a través de la violencia para sus fines bélicos.

De esa manera, la apuesta política de la organización ha contribuido a reformar las relaciones de poder entre actores locales, por medio del empoderamiento de los jóvenes frente a las generaciones más viejas, las administraciones municipales y las autoridades regionales. Sin duda, la cooperación entre jóvenes y otros actores territoriales, así como el ejercicio de su diferencia, es posible gracias a que los primeros han venido ganando espacio en las decisiones que competen al futuro y desarrollo de su territorio. No tener en cuenta esta realidad sería despolitizar la cooperación, pasando por alto el lugar desde donde habla un actor político y las disparidades de poder que atraviesan el ejercicio cooperativo.

Conclusiones

La experiencia expresada por Fupapt en el marco del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto” permite vislumbrar varios elementos que integran un contexto complejo caracterizado por elementos políticos y ambientales cambiantes, y la respuesta que la organización les da.

Esto ha resultado en una labor que ha hecho posibles nuevos espacios de intercambio e interacción con actores diversos en territorio, tanto jóvenes, comunidades y organizaciones civiles como actores que en el marco del conflicto armado contribuyeron a la generación de una fuerte desconfianza en la población. En otros casos, la organización ha aprovechado la institucionalidad existente, como el concejo municipal, para impulsar sus reivindicaciones ambientales

Esta interacción ha tomado diversas formas, entre las que se puede contar precisamente la cooperación ambiental y modos de incidencia política, que ponen de presente intereses concretos sobre la definición del uso de recursos medioambientales y, en general, las políticas que regulan la interacción de la población con su medio ambiente.

En ese sentido, a diferencia de lo que sugieren algunos autores en el campo del *environmental peacebuilding*, quienes han construido sus perspectivas teóricas desde el examen de los conflictos transnacionales y entre Estados por el uso de los recursos naturales, en el caso de Fupapt la iniciativa nace a nivel municipal en un territorio que ha experimentado un descenso en la violencia armada, con instituciones que han permitido cierto nivel de participación democrática, de allí que la administración de los recursos ambientales no solamente se dé en términos de reconocimiento, también como incidencia política y empoderamiento de actores locales.

Las acciones que dirige la organización se formulan desde sus identidades como jóvenes rurales, encontrando en el camino resistencias y acuerdos con otros grupos generacionales que entienden su relación con los ecosistemas de manera diferente. Estas diferencias generacionales han sido documentadas por autores que se han referido a las juventudes rurales como poblaciones que presentan una mayor flexibilidad, disposición al cambio y apertura para la innovación, que además muestran mayor cercanía y disposición al manejo de nuevas tecnologías de información, formas de socialización y adquisición de conocimiento vinculadas a plataformas digitales, uso de redes, acceso

a diferentes modalidades de educación virtual, entre otras, razones por las cuales estas juventudes ‘alternativas’ se pueden considerar actores clave en la transición de prácticas agrícolas tradicionales a otras relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

En esa línea, la vinculación de los jóvenes ambientalistas como productores y catadores en el mercado internacional de cafés especiales y agroecológicos ha posibilitado la cooperación entre actores estatales, de cooperación internacional y locales, abriendo espacios para la construcción de bienestar asociado, por un lado, a los rentables dividendos de la comercialización de cafés especiales en comparación con los cafés regulares (cuya comercialización ha sido limitada por las imposiciones de intermediarios en el mercado nacional); y, por otro lado, a la generación de acercamiento y confianza entre población e instituciones.

En el territorio se mantienen preocupaciones relacionadas con el medio ambiente, como son la minería extractiva, la construcción de infraestructura energética de alto impacto ambiental o prácticas agrícolas contaminantes. Ejemplos concretos de estas preocupaciones se pueden encontrar en la construcción de hidroeléctricas sobre ríos, torres de energía en zona de páramo o la existencia de prácticas dañinas como el uso de agroquímicos, la quema de tierras, la tala de árboles o la contaminación de las cuencas, ríos o quebradas.

Además, la amenaza del conflicto armado permanece latente en el territorio, hechos de violencia asociados a amenazas a líderes sociales y a actores en proceso de reintegración, asesinatos selectivos o secuestros ocasionales generan incertidumbre sobre el futuro del territorio y los espacios de interacción que se han venido gestando.

Es importante para el sostenimiento de las condiciones de paz relativa en el territorio el mantenimiento de iniciativas como la de Fupapt, pues buscan, por un lado, responder a conflictos que nacen con el escenario de posacuerdo y las debilidades y consecuencias de la intervención estatal; y, por otro lado, han propiciado el encuentro y el diálogo entre actores que habían visto disminuida su confianza y posibilidad de interacción. Adicionalmente, es fundamental la continuación del análisis a diversos niveles y con un enfoque relacional del panorama de construcción de paz ambiental o de las iniciativas medioambientales en el sur del Tolima a partir de las voces de actores comunitarios, estatales e institucionales sobre su desarrollo.

Referencias

- Arias, L. M. (2020). Representaciones del territorio. Una visión desde la juventud rural campesina e indígena del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio del departamento de Córdoba. *Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales*, VII(13), 75-106.
- Carius, A. (2006). Environmental peacebuilding. Environmental cooperation as an instrument for crisis prevention and peacebuilding. Conditions for success. *Adelphi Report*, 3(7).
- Cruz, C. A., & Estrada, C. (2019). Identidad ambiental, sentido de lugar y la percepción del contexto en agricultores. *Revista de Sociología*, 34(2), 50-71. doi: <https://doi.org/10.5354/0719-529X.2019.54716>
- Darst, R. G. (2003). Environmental peacemaking's catch-22. *Global Environmental Politics*, 3(3), 116-118.
- De Vera, F. H. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. *Cuadernos de Estrategia*, 183, 119-146.
- Dresse, A., Fischhendler, I., Østergaard, J., & Zikos, D. (2019). Environmental peacebuilding: towards a theoretical framework. *Cooperation and Conflict*, 54(1), 99-119.
- Ide, T., & Detges, A. (2018). International water cooperation and environmental peacemaking. *Global Environmental Politics*, 18(4), 63-84.
- ILSA. (2014). *Tolima | Las Hermosas: hidroeléctrica del río Amoyá y luchas por el territorio*. Bogotá D.C.: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos-Misereor. Recuperado de <https://issuu.com/ilsaenred/docs/tolima>
- Pardo, R. (2017). *Diagnóstico de la juventud rural en Colombia. Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia*. Santiago de Chile: Rimisp. Recuperado de https://rimisp.org/wp-content/files_mf/1503000650Diagn%C3%B3sticodelajuventudruralenColombia.pdf
- Porras, Y. (2014). *Retos y oportunidades de la educación ambiental en el siglo XXI*. Bogotá D.C.: Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional, CIUP.
- Porras, Y. A., & Pérez, M. R. (2019). Identidad ambiental: múltiples perspectivas. *Revista Científica*, 34(1), 123-138.
- Rodríguez, C., Rodríguez, D., & Durán, H. (2017). *La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo*. Bogotá D.C.: Dejusticia.
- Rodríguez, I., Inturias, M., Volker, F., Robledo, J., Sarti, C., & Borel, R. (2019). *Conflictividad socioambiental en Latinoamérica: aportes de la transformación*

- de conflictos socioambientales a la transformación ecológica*. Ciudad de México: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Romero Vargas, J. C. (2019). *La diferenciación de productores de café y el acceso al mercado mediante esquemas de certificación: el caso del departamento del Tolima (Colombia)* (Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València, España). Recuperado de <http://hdl.handle.net/10251/125708>
- Severiche, C., Gómez, E., & Jaimes, J. (mayo-agosto, 2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible. *Telos*, 18(2), 266-281.
- Tierra Minada. (2018). Recuperado de <https://sites.google.com/site/tierraminada>

Notas de prensa

- (24 de enero de 2017). ¿Quién responde por las intimidaciones contra líderes sociales del sur de Tolima? *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/quien-responde-por-las-intimidaciones-contra-lideres-sociales-del-sur-de-tolima/>
- (23 de octubre de 2017). El infinito universo del café. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-infinito-universo-del-cafe/>
- (1º de noviembre de 2017). El compromiso de las nuevas generaciones con el medio ambiente y la sociedad. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-compromiso-de-las-nuevas-generaciones-con-el-medio-ambiente-y-la-sociedad/>
- (24 de enero de 2018). Se busca implementar una escuela de catación de café en el sur del Tolima. *Alerta Tolima*. Recuperado de <https://www.alertatolima.com/noticias/se-busca-implementar-una-escuela-de-catacion-de-cafe-en-el-sur-del-tolima>
- (26 de febrero de 2019). Sin FARC, pero con otros actores armados: la nueva amenaza en el sur del Tolima. *Semana Rural*. Recuperado de <https://semanarural.com/web/articulo/sur-del-tolima-amenazas-a-lideres-sociales/840>
- (octubre-diciembre, 2019). ¡Por el agua y por la vida!: conflictividades socioambientales y defensa territorial en el Tolima. *Revista 100 Días*, 97. Recuperado de <https://www.revistaciendiascinep.com/home/por-el-agua-y-por-la-vida-conflictividades-socioambientales-y-defensa-territorial-en-el-tolima/>
- (28 de septiembre de 2019). Cultivadores de Planadas son reconocidos con el premio Emprender Paz. *El Olfato*. Recuperado de <https://www.elolfato.com/cultivadores-de-planadas-son-reconocidos-con-el-premio-emprender-paz>

- (28 de febrero de 2020). ¿La violencia hacia los líderes sociales es despolitizada? *La Silla Vacía*. Recuperado de <https://lasillavacia.com/silla-llena/404>
- (4 de abril de 2020). Asesinaron a un excombatiente de las FARC en el sur del Tolima. *RCN Radio*. Recuperado de <https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/asesinaron-un-excombatiente-de-las-farc-en-el-sur-del-tolima>
- (20 de octubre de 2020). Líderes sociales reclaman mayor atención de las autoridades en Tolima. *Caracol Radio*. Recuperado de https://caracol.com.co/emisora/2020/09/08/ibague/1599533691_510312.html

Capítulo 12

Formación entre caficultores tolimenses: una herramienta para la superación del conflicto armado

Vicente Vega Reina

Los territorios rurales son los receptores primarios de las acciones violentas y tensiones políticas entre diferentes bandos, allí se han enraizado condiciones de desigualdad y vulnerabilidad. Afortunadamente, aun con falencias estatales y presencias recurrentes de grupos armados, en el presente se desarrollan diversas apuestas productivas y formativas que apuntan a superar los atrasos que desencadenó la violencia. En ese sentido, el dar visibilidad a los modelos educativos de comunidades campesinas para el mejoramiento en su calidad de vida en términos sociales, ambientales y productivos es una necesidad. Por ello, de la mano de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (Asopep), se profundizará en la formación ‘campesino a campesino’ como una estrategia local para la transformación de las implicaciones de la violencia armada del sur del Tolima. Como se sabrá, ese territorio vio nacer a la guerrilla de las FARC y tuvo su propio frente paramilitar y distintas operaciones miliares, razones por las cuales hoy Planadas está dentro de los 170 municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).

En ese sentido, se explicará la razón por la que la pedagogía es una herramienta fundamental para el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado. Por eso, este capítulo empezará por reconstruir el contexto de violencia armada que marcó al sur del Tolima. En segundo orden, las experiencias de Radio Sutatenza y la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña hablarán de problemáticas

para el campesinado desde el panorama formativo. El modelo formativo propuesto por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y los testimonios de campesinos que se dieron a la tarea de formarse y formar a otros con Radio Sutatenza serán el preámbulo de las discusiones actuales sobre la educación rural y su papel en la superación del conflicto armado.

Así, con este breve capítulo se invita al lector a reconocer que el territorio rural colombiano cuenta con sus propias particularidades, las cuales requieren de procesos formativos pensados desde y para los actores campesinos. Se espera que al reconocer los antecedentes que afectaron al departamento, en términos productivos, bélicos y formativos, se vea la urgencia de virar el volante y construir mejores proyectos de la mano de las comunidades. Después de todo, el ahondar en las pedagogías campesinas no es cosa distinta que un esfuerzo por visibilizar y promover una educación rural que responda a las necesidades contextuales y visiones a futuro de los actores locales. Como se demostrará, el sur del Tolima ha sufrido las implicaciones de ser un contexto de violencias e intereses político-comerciales, razones que han motivado a los productores a gestar procesos formativos para mejorar su calidad sin tantas injerencias externas. La pedagogía popular y campesina es la voz de este texto.

Sobre el sur del Tolima

Teniendo su fundación para el año 1861, las tierras de Chaparral acogieron a dos poblaciones disímiles política y materialmente hablando. Por una parte, llegan campesinos de Cauca y Valle del Cauca huyendo de la Guerra de los Mil Días, así como colonos campesinos del Viejo Caldas en busca de tierras para trabajar. Por otro lado, son los hacendados liberales ávidos de tierra y poder político quienes empiezan a ejercer una presión para la explotación de tierras antes deshabitadas (Aponte, 2019, p. 57). El encuentro entre esos dos grupos apuntó a la construcción de un modelo económico sustentado en la producción cafetera. Los políticos liberales incentivaron un proyecto nacional para la extracción de materias primas como el caucho y el café, lo cual les permitió crear grandes plantaciones a manera de haciendas. Sin embargo, los campesinos no contaron con un panorama tan favorable.

Mientras que los segundos tuvieron ayuda del gobierno liberal, los campesinos quedaron a la merced del trabajo servil que les plantearon las haciendas.

Por medio de migraciones dirigidas de campesinos cundiboyacenses,¹ los liberales construyeron un sistema productivo donde los campesinos entregaban su fuerza de trabajo a cambio del arrendamiento de una parte de la tierra que comprendía toda la plantación. Chaparral fue un municipio definido por la figura de la hacienda. Esa precaria condición de empleo, donde el campesino no podía trabajar una tierra propia o enriquecerse para hacerse con una, incentivó la organización de cuadrillas para la colonización de otros territorios del sur del Tolima (Palacios, 2011, p. 123). El escogido fue Planadas. Así, la geografía del departamento se vio dividida entre diferentes visiones políticas y sus modelos productivos. Los campesinos que dejaron el trabajo en las haciendas se oponían claramente al discurso de la propiedad privada y de los monocultivos que manejaban los liberales.

No obstante, la ruptura dejó a los campesinos en una posición desventajosa, ya que el Estado colombiano no prestó ningún tipo de ayuda para su reubicación. Fueron campesinos permeados por los discursos del comunismo los que ayudaron a establecer los asentamientos y colonizaciones por fuera del trabajo servil (Vargas, 2019, pp. 18-19). Las consignas por el derecho al trabajo generaron un rechazo total desde los partidos tradicionales, ya fuera Conservador o Liberal. Así, el sur del Tolima quedó dividido entre campesinos liberales o ‘limpios’ y campesinos comunistas o ‘comunes’. Las disparidades entre pensamientos llegaron al punto en que los limpios se armaron con tal de erradicar a los campesinos que promovieran la expropiación de tierras improductivas en el interior de las haciendas. Como resultado, cada actor decidió ejercer control en su espacio, Chaparral o Planadas, y desde allí seguir con su modelo político-productivo.

Con la subida al poder del presidente Laureano Gómez, las divisiones entre comunes y limpios debieron tener una tregua a fuerza. El contexto de violencia partidista que incentivó dicha presidencia se encarnó en el asesinato de limpios y comunes a manos de chulavitas y pájaros.² Con tal

¹ Los hacendados lograron instrumentalizar una mano de obra; mientras que los campesinos colonos ya tenían experiencias de lucro individual debido a sus trabajos en la industria tabacalera del Líbano, los campesinos cundiboyacenses estaban habituados al régimen señorial y feudal de trabajo (Aponte, 2019, p. 59).

² Al igual que los chulavitas, los pájaros eran personas de filiación conservadora venidas del vecino departamento del Valle del Cauca, sobre todo de Tuluá. La denominación obedece a su comportamiento furtivo, pues asesinaban y huían rápidamente (Aponte, 2019, p. 79).

de defender la esquina sur, los bandos antes enemigos decidieron conformar un frente unido de defensa en contra de los conservadores armados. Manuel Marulanda, Isauro Yosa y Jacobo Prías Álape serían algunos de los comunes que se aliaron con los limpios dentro de la finca El Davis (Rutas del Conflicto, 2017). Para lograr evitar la incursión de asesinos conservadores, se incrementaron las armas, los controles fronterizos y los patrullajes locales. La organización no solo permitió defender a la población, sino que fomentó la instrucción en prácticas de guerra por parte de los actores involucrados.

Ante tal defensa conjunta, el gobierno colombiano no tuvo otra opción que plantear una amnistía a las personas que decidieran dejar El Davis y entablar una negociación con el gobierno de Rojas Pinilla. Los limpios no fueron reacios a tal propuesta, estos decidieron dejar el centro conjunto y empezaron un proceso de negociación que les permitiera seguir ejerciendo un control territorial en Chaparral y sus alrededores. Por su parte, los comunes fueron escépticos a las insinuaciones del gobierno. Reconociendo que el contexto político no pretendía aceptar ninguna expresión del comunismo, los comunes decidieron mantener su posición en El Davis. No se equivocaron, con tal de acabar con el foco de ideas comunistas en el Tolima, a los limpios amnistiados se los cobijó bajo la figura de defensa civil y se les dio la potestad de trabajar de la mano con la Policía y el Ejército entre las intermediaciones de Planadas (Aponte, 2019, p. 46).

Los enfrentamientos contra los comunes no cesaron, en el año 1964 se efectuó un ataque conjunto entre limpios y fuerzas armadas estatales en contra de los comunes focalizados en Marquetalia. Dicho golpe incitó a generar el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para 1966. Para entonces, lo que comenzó como una disputa entre campesinos ávidos de trabajo y hacendados enfocados en la expansión de cultivos se transformó en una confrontación armada directa; los limpios se aliaron con la familia Castaño y su política de defensa de la propiedad privada se tornó en una vinculación al paramilitarismo. Como resultado, el sur del Tolima y sus cultivos de café se vieron afectados. El paramilitarismo insertó una economía amapolera que le fue difícil controlar. El incremento de los robos, la prostitución y la llegada de nuevos colonos sedientos de dineros fáciles tensionó aún más el contexto (entrevista a docente rural, 2019).

Con el fin de regular las prácticas ilícitas y comportamientos de las personas asentadas en Planadas, las FARC empezaron a ejercer un control en la

economía de la amapola e hicieron uso de actores locales en los procesos de veeduría. Se estipuló un impuesto a la venta de estupefacientes, la exclusión de los jóvenes del consumo de sustancias, así como la participación de las JAC en el control a los establecimientos comerciales en general y con mayor atención a los de prostitución. Sin embargo, los caficultores vieron permeados sus cultivos tradicionales. En el caso de Chaparral se llegaron a tener 18 cultivos ilícitos y casi 30 cafetales para los años comprendidos entre 1995 y 2000 (Aponte, 2019, p. 149). Con el cambio productivo y el fortalecimiento del actor armado, los campesinos de Planadas se empezaron a leer como un problema de seguridad nacional.

La población civil sufrió una fuerte criminalización a raíz de la vinculación de los limpios a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con la llegada de los paramilitares externos, se comenzó a tildar de guerrillera a toda persona que residiera en las cercanías de Planadas. El asesinato selectivo se focalizó en dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), 7 en Planadas, 4 en Rioblanco, 2 en Chaparral y 1 en Ataco (Aponte, 2019, p. 140). En igual medida, los docentes rurales del Tolima también se encuentran entre la población afectada. Como lo evidencia el informe de docencia rural,³ los docentes de los PDET⁴ sufrieron asesinatos selectivos en un 68,8 %, desaparición forzada en un 11,8 %, secuestro en un 9,1 % y masacres en un 6,8 % (Bautista y González, 2019, p. 272).

Siendo innumerables los conflictos entre paramilitarismo y guerrilla, el sur del Tolima se volvió un foco de violencia al cual el Estado colombiano tuvo que prestar su entera atención. Ya que los paramilitares no lograron romper con las estructuras guerrilleras y estas tenían la intención de cercar la capital del país, la esquina sur vio desarrolladas diferentes incursiones militares a sus cabeceras municipales. Planadas fue un centro de vital interés para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su antecesor, Andrés Pastrana Arango, reconociendo que las fuerzas farianas contaban con gran pie de fuerza en el corregimiento de Gaitania, les permitió tener una zona de

³ Para 2019 la Fundación Compartir entregó el informe *Docencia rural en Colombia. Educar para la paz en medio del conflicto armado*.

⁴ Los programas de desarrollo con enfoque territorial tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

distensión allí. Así, las fuerzas militares, comandadas por la presidencia de Vélez, empezaron a cercar a los guerrilleros en las partes altas de Planadas.

La política contrainsurgente estigmatizó y violentó la vida cotidiana de los tolimenses, pues a ellos se los rotuló indiscriminadamente como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Y, si bien en los primeros años de colonización los campesinos fueron afines a las ayudas y discursos políticos de los compañeros comunes, luego del recrudecimiento del conflicto preferían estar alejados de cualquier actor armado. Entre las prácticas militares se menciona el control a los suministros de la población, falsos positivos, judicializaciones y capturas arbitrariamente masivas (Aponte, 2019, pp. 262-267). Ante ese panorama, los caficultores y población en general vieron afectadas sus prácticas de vida y trabajo cotidiano. No obstante, luego de las políticas represivas se pensó en otras políticas públicas que posibilitaran mejorar la calidad de vida de los pobladores a la par que se mejoraba la valoración estatal a ojos locales.

Proyectos de intervención internacional apostaron por ayudar con maquinarias y capacitación a los caficultores, dado que dicho producto seguía siendo característico del municipio. También se colocaron puestos de salud temporales, se invirtió en zonas escolares y se cumplió con promesas anteriores de pavimentar vías de acceso principales.⁵ Sin embargo, aunque se invirtió en la caficultura, la realidad de los campesinos que se dieron a la tarea de colonizar nuevos espacios fuera de las haciendas no vio cambio sustancial. De allí que los productores campesinos tuvieran que desarrollar unos procesos organizativos y formativos desde la autogestión para mejorar sus realidades, tema que se tocará más adelante. Afortunadamente, con el cambio de mandato, para 2016 se firmó un acuerdo de paz que reconoció las múltiples afectaciones a la población civil y la necesidad de invertir en sus territorios.

Afincados en ese acuerdo, los caficultores de Planadas, así como muchas otras organizaciones, se han dado a la tarea de visibilizar sus proyectos y mostrar experiencias de transformación, acciones de cambio y mejoría para esos lugares que se vieron afectados por las disputas armadas y políticas de

⁵ Un exsecretario de educación, hoy directivo docente del colegio de Gaitania, comenta que en la primera visita de Álvaro Uribe a Planadas este se extrañó porque las vías aparecían pavimentadas en el papeleo, pero no en la realidad.

este país. Desde la organización intergeneracional se ha logrado ir más allá de las disputas entre hacendados y campesinos, entre limpios o comunes, todo con tal de proyectar una vida digna desde el trabajo y la participación local. Ya sin una presencia constante de actores armados, ahora son las ciudadanías rurales las que piensan las mejores vías para salir de la opresión y las desigualdades que implica la violencia. Por esa razón, aquí se hablará de la vía educativa, sobre la formación como herramienta para la transformación.

Formación campesina desde la ANUC y Radio Sutatenza

En este punto, ya teniendo claro que los campesinos colombianos han visto atentadas sus formas de vida desde mediados de 1900, se tiene por objetivo el mostrar dos experiencias formativas que permitieron cambiar un poco el contexto de opresión. Desde Radio Sutatenza y la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña se empezará a reconocer en la formación entre campesinos una herramienta fundamental para la transformación de las condiciones de desigualdad que afectan a pequeños y medianos productores agrícolas. En esos procesos formativos, se encontrarán herramientas para contrarrestar el acaparamiento de tierras, la mercantilización del campo, la no inclusión de las apuestas campesinas en la política, al igual que la falta de ofertas educativas acordes a las posibilidades de pequeños productores. Con ello, se espera llegar a reconocer que los campesinos no son actores pasivos, sino agentes que diseñan y desarrollan procesos para mejorar su calidad de vida.

Comprendiendo el período de 1947 a 1989, se encuentra una experiencia pedagógica rural a gran escala. Fue Radio Sutatenza una apuesta formativa promovida por el sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín. Con la intención de disminuir el analfabetismo, la pobreza, la insalubridad y la falta de asistencia al campesinado, Salcedo se dio a la tarea de desarrollar un modelo formativo que respondiera a las capacidades de la población rural. Buscando ir más allá de las disputas partidistas, decidió que formar al campesinado era más útil que abrir una crítica directa a la política rural estatal. Como tal, se pensó que el remedio para la desigualdad inoculada en el campo era “actuar y actuar ya en la línea de capacitar al pueblo, porque solo de esa manera se consigue dejar de ser objeto de dominación” (Vaca, 2017, p. 79). No obstante, la creación de un modelo educativo que lograra transmitir y promover el desarrollo de conocimientos al campo contaba con una dificultad en términos de cobertura.

Si bien ese proceso formativo no surgió del trabajo específicamente campesino, sí contó con el interés de reconocerlo. Salcedo, en su categorización del campesinado, logró dilucidar parte de las características de la población rural, ya que de ello dependía el buen recibimiento de los contenidos. El proyecto se construyó para atender las condiciones de explotación que sufría el campesino y, para ello, se reconoció a este como laborioso, religioso, resistente al cambio y falto de formación en general (Vaca, 2017, p. 134). Gracias al trabajo realizado entre la parroquia de Sutatenza y los líderes campesinos, se pudo configurar un modelo educativo que permitiera formar al campesino aun en sus condiciones de desconexión. No solo se pensó en un sistema radial, este se vería complementado con un sistema combinado de medios y centros de formación de líderes campesinos. El modelo llegaría a estar en la capacidad de exponer radiofónicamente formas de cultivar, a la par que se desarrollaban ejercicios en cartillas formativas.

El campesino era profundamente religioso, cumplidor de sus prácticas piadosas, con un respeto muy grande por el sacerdote como enviado de Dios [...]. Por otra parte, él tenía resistencia a todo lo que significara cambio, transformación, progreso, etc. Estas resistencias fueron vencidas con el llamado al imaginario religioso, se tiene que aprender a leer y a escribir porque la Santísima Virgen de Fátima pidió eso: “Quiero que recéis el rosario y que aprendáis a leer”. Ella es proclamada la patrona de las escuelas radiofónicas. San Isidro Labrador se transforma en San Isidro Agricultor, el símbolo del “progreso de los campesinos”, porque él comprende la importancia de las nuevas técnicas agrícolas (Gutiérrez, 2011, p. 262).

Así, reconociendo que las escuelas radiofónicas lograron formar en matemáticas, lectura, modistería, agricultura y manejo de finanzas aplicadas al campo,⁶ se decidió expandir su cobertura. Para 1948, Salcedo es invitado a las Naciones Unidas y, allí, hace un llamado de atención para promover el uso de los medios de comunicación de masas en pro de las comunidades rurales (Vaca, 2017, p. 219). Su propuesta fue escuchada y empezó a contar

⁶ De querer profundizar en temas específicos de cada cartilla, entrar al archivo virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango: <https://proyectos.banrepcultural.org/radio-sutatenza/>

con ayudas económicas de la Misión de Asistencia Técnica de la UNESCO. Se fundó la Acción Cultural Popular (ACPO), una entidad jurídica autónoma que buscaría desarrollar un proceso formativo rural basado en la educación fundamental integral (EFI). De este modo, se construyó un cambio fundamental, uno que permitiría que el campesino se formara y formase a otros en temas necesarios para el entendimiento de la desigualdad desde su cotidiano.

Entre el repertorio de modalidades formativas dispuestas al campesinado se encontraba el *profesor-locutor*, el cual se encargaba de guiar todo el proceso educativo por medio de guías y descripciones sencillas de los procesos de siembra, manejo de cuentas, lectura y afines. Ese mismo docente también respondía las cartas que enviaban los campesinos a la Radiodifusora Nacional, donde expresaban inquietudes o agradecían la labor. Así mismo, los recursos de la ACPO contribuyeron a la creación de cartillas formativas, las cuales comprendían distintas áreas para la formación integral: 1) noción del alfabeto (lectura y escritura); 2) noción del número (cuentas básicas y planeación); 3) noción de salud (bienestar físico); 4) noción de economía y trabajo (bienestar material); 5) noción de espiritualidad (bienestar espiritual).⁷ Igualmente, la emisora contó con espacios para reivindicar las prácticas campesinas. Por medio de la creación de escuelas musicales, se permitió el contar con espacios que producían y emitían productos artísticos. “Se promovió la creación de conjuntos musicales, de bandas [...]. La música recuperó el espacio de la fiesta en el mundo campesino, despertó la alegría y la diversión, y apoyó el desarrollo de la competencia comunicativa” (Vaca, 2017, p. 263).

Por ello, la ACPO y Radio Sutatenza, contando con un diversificado portafolio para la prestación de procesos formativos rurales, permitió generar espacios dispuestos para la socialización y diálogo de saberes entre campesinos. Los espacios anteriormente destinados para el culto comenzaron a representar lugares para la reunión, debate, ejecución de talleres o transmisión de experiencias entre pares. Se resalta que espacios como las parroquias empezaron a permitir la interacción entre líderes campesinos y el profesor-locutor. De la misma forma, “lugares informales de interacción mediática social amplia fueron la plaza de mercado, los campos deportivos,

⁷ Para acceder a las cartillas divididas entre las diferentes nociones, remitirse a: <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll24>

los trabajos comunitarios, sugeridos por las campañas de la radio” (Gutiérrez, 2011, p. 265). Así, poco a poco se fue formando a una masa de campesinos que requería habilidades prácticas para el desarrollo de su vida. Después de todo, diferentes juntas de acción comunal y asociaciones campesinas se sumarían a todo el proceso formativo a lo largo del tiempo.

Sin embargo, aun con la fuerte intención de dotar a los campesinos de saberes para la superación de sus condiciones, Radio Sutatenza vería su desarticulación para el año 1989. Los que fueron grandes apoyos para los años comprendidos entre los cuarenta y los sesenta, en los setenta se convirtieron en inversiones para mejorar la cobertura educativa estatal en el territorio rural. Para entonces, se dejó de ayudar monetariamente a la ACPO, ya que los discursos de desarrollo lograron conquistar la política educativa. Si para 1940 se pensó ayudar al campesino desde la alfabetización y formación para sus propios proyectos productivos, tres décadas después se apuntó al mejoramiento de la calidad de vida nacional desde la masificación de un sistema educativo pensado para la formación de mano de obra calificada (Osses, 2015, p. 267). Afortunadamente, aunque Radio Sutatenza se finiquitó, ella representó la capacidad de organización campesina para su propia formación, algo que no desperdiciarían las generaciones futuras.

Por su parte, la ANUC decidió implementar su propio modelo formativo. Aunque se continuó con un enfoque alfabetizador, debido a que el campesinado necesitaba salir de su precaria condición, en esta ocasión hubo una fuerte motivación política en el proceso formativo. Mientras el modelo de la ACPO evitó posicionarse desde una apuesta política, la ANUC pensó un proceso formativo que articulara las necesidades del campesino con las apuestas por una reforma agraria por medio de la organización campesina popular. Así, para 1987 nace la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña.⁸ Esta fue enmarcada en un modelo formativo que retomase el papel protagónico de las bases sociales en la organización y cambio de la vida rural colombiana.

⁸ “Pablo Acuña fue un dirigente de base, nacido en la costa Atlántica (municipio de Sucre, departamento de Sucre), quien emigró como jornalero al Magdalena Medio y hacia el año de 1981 se vinculó a la organización campesina de tiempo completo. Además, se le describe como una persona que abrazó la lucha por la tierra y en dicha lucha cae asesinado el 25 de julio de 1985 por orden del terrateniente Enrique Barreto en Vijagual corregimiento de Puerto Wilches, Santander” (Méndez, 2014, pp. 2-4).

En esta ocasión se integró al campesinado en el proceso de planeación y diseño. Buscando atender a las necesidades específicas de los campesinos cercanos a la ANUC, se desarrolló un proceso de exploración previo al inicio del modelo. De esta manera, “la campaña de alfabetización arrancó con un censo veredal, en el que casa a casa en las veredas donde tenía presencia la ANUC se realizó un trabajo de investigación para conocer cuántos de los habitantes eran iletrados y a su vez indagar cuántos de estos sentían la necesidad de aprender a leer y a escribir” (Méndez, 2014, p. 30). Ya una vez recolectada la información, las mesas municipales y departamentales de la Asociación se dieron cita en la capital del país con la Coordinadora Distrital de Educación Popular (CDEP). Contando con el apoyo de la Coordinadora, una vez más se ratificó el interés por construir un modelo formativo que no solo enseñase a leer y escribir, sino que permitiera al receptor reconocer y poder actuar en contra de los abusos de los terratenientes y políticas agrarias enfocadas al mercado privado (Méndez, 2014, p. 56).

No obstante, teniendo presente que este no sería un modelo radiofónico, se decidió hacer una convocatoria abierta a todas aquellas personas que desearan contribuir con la transformación de la vida rural. Ya que se reconocía que la labor de trabajo agrícola podía llegar a impedir el desarrollo de procesos formativos, también se decidió diseñar unas cartillas para su libre intercambio entre campesinos. Por lo tanto, se crearon dos colaboraciones para iniciar la campaña. Por medio de la participación del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), se diseñaron cuatro cartillas, entre sus temas estaba la educación, las políticas agrarias, la historia político-organizativa de la ANUC y la organización de la comunicación popular (Méndez, 2014, pp. 34-35). Estas fueron repartidas entre los denominados maestros populares de las diferentes veredas, quienes eran campesinos letrados con conocimientos de las acciones políticas-reivindicativas gestadas en la ANUC desde sus inicios.

En ese sentido, se avanzó una vez más en el desarrollo de un modelo formativo pensado desde campesinos y diseminado por ellos. Con el propósito de brindar herramientas para ejecutar análisis económicos y políticos concernientes a la vida del productor agrícola, se presentaron temas de normativa agraria y el papel del campesinado en la construcción de esta. Igualmente, reconociendo que ese debía ser un proceso que fomentara una identidad campesina crítica, se complementó el desarrollo de habilidades de

lectura y escritura por medio de ejercicios atados a los procesos de organización popular. Por ello, las cartillas recurrían a personajes de importancia para la vida rural: “Personajes del movimiento campesino que han tenido trascendencia por sus actuaciones, todo esto con la intención de mantener viva la memoria histórica del movimiento campesino, con referencias a la dirigente campesina Juana Julia Guzmán, a El Boche, inclusive a Quintín Lame” (Méndez, 2014, pp. 56-57).

Como tal, este fue un modelo formativo que atendía a necesidades educativas a la par que permitía reconocer el papel de la lucha popular en la construcción de país.⁹ Como se resalta, no solo fue un modelo pensado para el desarrollo de habilidades comunicativas, se trató de un proceso de politización del campesinado por medio de la pedagogía:

La campaña alfabetizadora nace con la intención de no solo enseñar a leer y a escribir, sino que además los campesinos estuvieran al tanto y entendieran las formas en que los terratenientes los engañaban o estafaban para pagar menos de lo que era por el producto del trabajo de un campesino, o incluso para evitar que estos robaran tierras a campesinos. Otro eje fundamental era enseñarle al campesino a desenvolverse, a no tener miedo de salir a denunciar y enfrentar a aquellas personas que se acercaban a ellos con malas intenciones (Méndez, 2014, p. 30).

Lastimosamente, aunque la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña logró llegar a 73 veredas, contando con 36 maestros populares repartidos entre Antioquia, Cauca, Sur de Bolívar, Magdalena y Atlántico (Méndez, 2014, p. 43), esta se vería desarticulada por las implicaciones del conflicto armado interno. No en vano Radio Sutatenza prefirió evitar una filiación política. Así como se mencionó en el caso del Tolima, aquí también se segregó al campesino independiente. No obstante, para finales de los noventa ya habían surgido movimientos guerrilleros y paramilitares. Los primeros cercanos a los discursos del comunismo y con referentes como la Revolución

⁹ Cabe mencionar que en las cartillas también se hacía referencia a las “recuperaciones” de tierras en mano de terratenientes, ya que esto fue de suma importancia para la consolidación y diseminación de la ANUC a lo largo de la vida rural colombiana (Pernett, 2015, pp. 29-31).

cubana; los segundos, financiados por terratenientes y defensores acérrimos de la propiedad privada. Si bien las guerrillas vieron su nacimiento inspiradas en la lucha armada como mecanismo para la transformación de la vida rural, en muchos casos llegaron a ayudar a los campesinos en sus procesos de colonización.

Con ese vínculo, a la ANUC se le comenzó a rotular como guerrillera, encontrando en ello justificaciones para el asesinato y amedrantamiento a manos del paramilitarismo. Como se menciona en las memorias del movimiento, la presencia de las FARC en Sucre permitió que el mismo Estado pensara a la organización como un actor guerrillero, lo cual resultó en el debilitamiento del movimiento (Pérez, 2010, p. 166). Y es que, difícilmente, el campesinado de finales de los noventa podía hacerle frente a una guerra tan sangrienta y extensa. Aunque se habla de una distancia entre guerrilla y asociaciones de campesinos, ambos eran actores que podían llegar a compartir un mismo municipio. Debido a esa cercanía espacial, eran los campesinos amenazados en caso de no prestar algún servicio al actor armado. Así, en ese tipo de actuaciones impuestas, se gestaron falsas razones para relacionar al campesinado con la guerrilla. Sin la intención siquiera de inmiscuirse en la lucha armada, la ANUC empezaría a sufrir el asesinato sistemático de sus líderes.

Por esa razón, la campaña de alfabetización fue menguando sus actuaciones; lo que inició como una apuesta político-educativa terminó en una persecución armada. Con la intención de cobrar las recuperaciones desarrolladas por los usuarios campesinos, los paramilitares ejecutaron asesinatos selectivos. Ramiro Jiménez, Moisés Narváez, Isidro Mercado, José Ortega y Gary Suárez fueron apenas cinco entre los más de cinco millones de líderes campesinos asesinados en el transcurso de la violencia colombiana (Pérez, 2010, p. 170).

De esta forma, aceptando que su capacidad de acción se disminuyó, la ANUC cesó su actividad formativa para finales de los noventa. Ante tal panorama, se pensó en reconocer lo existente e idear acciones posibles a futuro: “El problema de la dirección campesina es que ahora la gente no puede pronunciarse. En la actualidad, si alguien habla de los problemas de la tierra o de los terratenientes, al día siguiente aparece alguien a las puertas de su casa [...]. Es necesario que se vire la lucha hacia el aprovechamiento de la economía y la construcción de pequeñas empresas” (Pérez, 2010, p. 174).

No obstante, aunque los procesos formativos de la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña y Radio Sutatenza no lograron cambiar todos los daños estructurales impuestos a las poblaciones rurales, sí permitieron incrementar la capacidad de acción del sujeto campesino. No solo por aprender a leer y escribir, sino porque desde el trabajo conjunto entre campesinos se logró atender una necesidad no escuchada por los gobiernos colombianos. Gracias a los trabajos entre diferentes organizaciones como la ACPO, el Cicom y la CDEP, se consiguió profundizar en la educación desde su concepción popular. Como lo indicó esa corriente educativa de inicios de los ochenta, se necesitaba construir relaciones más horizontales en los espacios formativos, donde los sujetos fueran consultados en sus necesidades y los contenidos pedagógicos fueran útiles para la transformación de las condiciones de opresión (Freire, 1970, cap. 1). De este modo, ambas experiencias son fuentes ricas en insumos para pesar una formación rural contemporánea, una donde el trabajo campesino sigue apuntando a mejorar las condiciones de vida de los diferentes productores agrícolas desde la labor pedagógica.

Formación campesino a campesino

En este punto, teniendo en mente los procesos organizativos nacionales, se profundizará en la formación campesino a campesino desde apuestas contemporáneas. Avanzando aún más en los procesos de educación popular, aquí se tendrán presentes las lógicas y metodologías que se especializan en la conformación de espacios formativos para los pequeños y medianos productores. Buscando hacer una distinción con otras corrientes educativas, se resaltaré cómo dicho modelo promueve la organización y arraigo frente a constitutivos de la agricultura campesina. Siendo este un modelo surgido desde las experiencias compartidas entre diversas organizaciones latinoamericanas, se ahondará en la necesidad de desarrollar modelos productivos en el seno de comunidades oprimidas por las políticas neoliberales aplicadas al campo y sus diferentes violencias. Con todo ello, se espera construir una base lo suficientemente contextualizada para la posterior exposición del contexto tolimense y sus caficultores.

Se debe empezar diciendo que la formación campesino a campesino tiene el objetivo fundamental de contrarrestar y sentar un precedente contra las diferentes campañas de formación transmitida desde intereses privados a las poblaciones rurales. Así como se presentaron modelos educativos pensados

para las necesidades campesinas, también se crearon otros enfocados en la diseminación y conquista de entornos productivos desde los intereses privados y multinacionales. A esa formación de corte científico-técnico que promovió el uso de organismos genéticamente alterados y paquetes tecnológicos ajenos a las tradiciones rurales se le publicitó como 'Revolución verde'. Esta tuvo dos momentos: para 1950 se enfocó en la producción extensiva y uso de tecnologías, lo que solo podía beneficiar a terratenientes y hacendados; mientras, para 1990, el modelo se pensó desde la implementación de biotecnología aplicada a las semillas con la ayuda de la ingeniería genética, hecho que venía acompañado por su privatización (Ceccon, 2008, p. 21).

Los procesos formativos de corte intervencionista se desarrollaron de la mano de agrónomos y de más profesionales relacionados con las producciones agrícolas, sin embargo, en su interior no se contó con saberes nacidos en las realidades del campo. Motivados en la creación de explotaciones agrícolas, los discursos del desarrollo y privatización sesgaron la educación rural. En el denominado *extensionismo rural* se instauró un proceso de capacitación de la mano de agentes del desarrollo, el modelo se caracterizó por manejar un sistema jerárquico en pro de las apuestas de la Revolución verde por encima de las necesidades de pequeños y medianos productores (Landini, 2012, p. 157). Así, viendo la necesidad de plantar cara, distintas asociaciones productivas empezaron a diseñar un modelo formativo que les permitiese hacer uso de los saberes empíricos y tejer redes de experimentación entre campesinos. Se requirió un modelo que no partiera de la privatización de semillas, monocultivos o agroquímicos, ya que ello implicaba un capital de inversión lejano a la realidad del campesinado.

En ese sentido, la formación campesino a campesino toma una identidad propia dentro de las apuestas educativas populares. Se va más allá de la alfabetización, diseñando procesos de aprendizaje destinados a los proyectos productivos de pequeños y medianos agricultores. Por ello, buscando posicionar a la persona campesina en el centro, se elaboran siete principios para los procesos formativos: 1) experimentación y apropiación campesina, 2) intercambios desde los saberes locales, 3) diálogo productivo, 4) horizontalidad del diálogo, 5) promoción y organización de hechos productivos, 6) miras a la innovación según contexto y 7) surgimiento de líderes locales (Cuéllar y Kandel, 2007, p. 17). Con ello, se construyó una base para que el campesino reemplazara la labor del extensionista rural y prestara una

asesoría basada en las posibilidades y facultades de los saberes locales. Se comenzaron a generar “procesos sociales de transformación, considerando sus dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política [...] a la vez que se persigue la recuperación de los conocimientos y la cultura local” (De Gonzalo, 2010, p. 37).

Un referente de dicho modelo se encuentra en las experiencias de campesinos nicaragüenses. Para finales de 1900, en Siuna, la pedagogía campesino a campesino fue una forma de contrarrestar el apoyo político-institucional destinado a los agroindustriales. Por medio del trabajo entre campesinos que había logrado colonizar unas zonas de ladera, se permitió retomar y mejorar las formas de regeneración de los suelos a la par que se promovía la siembra de alimentos para el autoconsumo y venta. Por medio del frijol de abono,¹⁰ se desarrollaron procesos de formación basados en los siete principios. Gracias a la “dinámica local de intercambios, visitas y días de campo en el municipio, en los primeros dos años, los productores que adoptaron la tecnología del frijol abono fueron visitados por más de 300 campesinos del municipio” (Cuéllar y Kandel, 2007, p. 20). Gracias a los intercambios se percataron rápidamente de que esa variedad era óptima para su territorio, dado que contrarrestaba la erosión de los suelos. Fue tal el apego de los campesinos a este tipo de experiencias compartidas, que para inicios de 2000 ya se contaba con casi 3000 campesinos que habían replicado el modelo formativo en 60 comunidades distintas (Cuéllar y Kandel, 2007, p. 23).

No obstante, ya contando con experiencias, se requirió complementar los siete principios con la creación de figuras clave para el desarrollo de acción-reflexión-acción dentro de la práctica formativa. Con la intención de diferenciarse de otros modelos desarrollistas o deslocalizados, se hizo uso de las distintas figuras que componían el panorama organizativo de las comunidades rurales. En vez de depender únicamente de las instituciones

¹⁰ “Se dice que el frijol abono llegó a Mesoamérica por medio de las compañías bananeras para alimentar las mulas usadas en el transporte del banano. Las bananeras dejaron de sembrarlo, pero los agricultores ante la necesidad de forrajes, la pérdida de fertilidad del suelo y la invasión de malezas, iniciaron su empleo como abono verde”. Entre sus virtudes se encuentra el “mejorar la fertilidad y estructura del suelo: la biomasa del frijol terciopelo se descompone rápidamente liberando su nitrógeno. La contribución al aumento de la materia orgánica en el suelo es lenta y se nota después de varios años de intercalar el frijol terciopelo en los cultivos. La cobertura del frijol terciopelo mejora a mediano plazo la estructura del suelo” (Cuéllar y Kandel, 2007, p. 19).

gubernamentales, se ancló el proceso a los líderes y lideresas campesinas, a las autoridades tradicionales de las diferentes comunidades y juventudes rurales. Desde allí surgieron las tres figuras complementarias: los promotores, los facilitadores y los coordinadores. El primero es un campesino que presenta buenos resultados productivos de la mano de la sostenibilidad ambiental; el segundo es una persona con habilidades pedagógicas, quien está en la capacidad de sintetizar y compartir el modelo del primero; por último, es la asociación o comunidad la que se encarga de disponer los recursos y espacios para el diálogo de saberes (García y Mauricio, 2016, p. 30).

Gracias a la conjugación entre los siete principios y actores, la pedagogía campesino a campesino se caracterizó por ser un modelo formativo que permitía mejorar las apuestas productivas desde los saberes locales y espacios horizontales de diálogo. Las pedagogías, siendo desarrolladas por productores afectados por el agronegocio de las multinacionales, se centraron en generar una ruptura en los paradigmas de formación planteados por la Revolución verde. Con ello, se “pretende cambiar radicalmente el papel desempeñado por los y las campesinas-os (receptores-as pasivos-as del conocimiento) y los técnicos-as extensionistas (promotores-as activos de la agricultura), para quebrar la división vertical de estas relaciones de poder: el que sabe versus el que no sabe” (De Gonzalo, 2010, p. 37). Como resultado, esta expresión mejoró y sigue promoviendo proyectos productivos de pequeños productores desde sus propias epistemes.

Sin embargo, se debe aclarar que el libre desarrollo de dicha metodología formativa requiere unas garantías organizativas. La principal de ellas es la capacidad de desplazarse y reunirse sin ningún tipo de represalia por parte de un actor armado, sea estatal o no. Como se evidencia, los mismos procesos formales de educación no cuentan con la protección e insumos necesarios para desarrollar el ejercicio pedagógico. La docencia rural apenas posee infraestructuras mínimas para la prestación del servicio, salones sin aire acondicionado en climas que superan los 28 grados, falta de conectividad a redes de información y escasez de materiales didácticos para el aprendizaje son apenas la punta del iceberg de la educación rural (entrevista a docente rural, 2019). En lo expresado por docentes rurales, se manifiesta el reclutamiento de menores, desplazamientos completos de comunidades, abandono de establecimientos educativos, amenazas a docentes, asesinatos selectivos y daños materiales a centros educativos.

Se recalca que “el 50 % de los integrantes de las bandas criminales son menores de edad. 5708 menores de edad son provenientes de guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales, que habían dejado la escuela” (Caro y Kárpava, 2020, p. 6). Ya sea por reclutamiento forzado o voluntario, el panorama formativo institucional y la organización campesina para la formación se ven atentados por los contextos de violencia. Los resultados de los hostigamientos armados se reflejan en estudiantes con deserción, extraedad,¹¹ constantes repitencias por grados escolares y cierres temporales o indefinidos de establecimientos educativos. Por no ir muy lejos, en el caso de Gaitania un docente comenta: “No, que si usted no es de esta política entonces le va a tocar irse de esta región, porque aquí todos somos de este grupo. Eso me llevó a enfrentarme con una profesora, que primero era secretaria y después profesora, tanto que me envían boletas amenazándome bajo el nombre de las Águilas Negras o la Mano Negra” (entrevista a docente rural, 2019).

En el mismo sentido, el Observatorio de Memoria y Conflicto¹² evidenció que “entre 1958 y 2018 en todo el país 1579 maestros han sido víctimas directas del conflicto armado, y 1063 (67,3 %) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población [...]. Siguiendo el orden, 201 (12,7 %) docentes sufrieron secuestros, y 200 (12,6 %), desapariciones” (Bautista y González, 2019, p. 271). Y si ese es el caso para docentes amparados por las secretarías o el Ministerio de Educación Nacional, se puede intuir el panorama al que se ven sujetos las(os) campesinas(os) que deciden organizarse para crear procesos formativos independientes. Así como se criminalizó a las personas que hicieron parte de la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña, a muchos otros líderes sociales se les cobró con la vida el proceso organizativo.

En los datos presentados por la Secretaría de Agricultura del Tolima en 1959 se menciona:

Con base en una encuesta aplicada a una muestra estadística de 400 damnificados, los autores de dicho informe estimaron los costos “en

¹¹ La extraedad es el desfase entre la edad y el grado, y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más por encima de la edad promedio esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior teniendo como base la Ley General de Educación.

¹² Dependencia del Centro Nacional de Memoria Histórica.

capital humano” que dejó La Violencia. En primer lugar, estimaron “16 219 muertos entre 1949 y 1957, sin incluir los muertos habidos con fuerzas regulares del Ejército, ni en masacres colectivas, que generalmente eran abandonados a los animales, o arrojados a los ríos y precipicios, y tampoco las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas”. En segundo lugar, cuantificaron que 321 621 personas (es decir, el 42,6 % de la población del Tolima) sufrieron “el exilio en forma permanente o transitoria”. En tercer lugar, encontraron que “40 176 propiedades, o sea el 42,82 % del total, pertenecientes a 32 400 propietarios [...], han sido abandonadas transitoria o permanentemente”. El 46 % de estas tierras fueron abandonadas entre 1955 y 1956 (CNMH, 2013, p. 113).

Así como limpios asesinaron a comunes y viceversa, fueron masacrados y desplazados otros campesinos solo por la sospecha de pertenecer a algún bando. Por ello, las cadenas de odio y deseos de venganza también afectan los procesos de formación. En el caso del sur del Tolima, se narra cómo estudiantes dejaron las aulas de clase con tal de ingresar a un actor armado que les permitiera vengar la muerte de un familiar o cercano. Afortunadamente, aun con dificultades, en el presente se ha posibilitado el construir proyectos de vida por fuera de la vida armada, se han gestado movimientos y organizaciones que invitan a tener una vida desde el trabajo lícito y la pacífica resolución de conflictos. Al respecto se manifiesta:

La mentalidad de la población con el proceso de paz ha cambiado. Ya los estudiantes no hablan tanto de irse para la guerrilla, para ya no sembrar la amapola, sino que están buscando otros horizontes. Ya no es ese llamativo, que me pongo el camuflado, que me pongo el fusil, ya es como algo ridículo para ellos hablar de eso, de que se van para la guerrilla. Y más, porque se les ha contado todo ese proceso que han vivido, el sufrimiento... que sea bueno o sea malo, eso la historia lo dirá, pero ellos ya son conscientes de ello, que no es la vida para ellos (entrevista a docente rural, 2019).

Caficultura y formación campesino a campesino en el sur del Tolima

Sumado a los procesos de confrontación entre paramilitarismo y guerrilla, los pequeños productores cafeteros fueron afectados por campañas formativas surgidas desde lógicas extractivas e intereses hacendatarios. Agregándose a las políticas y postulados de la Revolución verde, se desarrolló un proceso de extensionismo con todos los productores de la esquina sur. Para 1927, las campañas formativas de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y su Centro Nacional de Investigación de Café (Cenicafé) se enfocaron en garantizar una productividad y competitividad desde un modelo extensivo. Su investigación científica vio en la variedad Caturra de Borbón Brasileiro la posibilidad de tener plantaciones de hasta 10 000 tallos de café por hectárea, ya que los fertilizantes y pesticidas así lo permitían (Cadena y Gaitán, 2006, p. 90). No obstante, el modelo productivo solo era de utilidad para el hacendado o terrateniente, pues el campesino no podía equiparar los costos de producción con los ingresos de su parcela.

Sumándose al desapego de los pequeños caficultores ante el modelo planeado por la FNC, para 1980, se gestaría otro proceso que ayudaría a tomar distancia y a pensar en la organización de asociaciones productivas y modelos formativos entre campesinos. Con la llegada de la broca y la roya, la producción cafetera pasó de 14 sacos de 60 kg cultivados por hectárea a tan solo 9 sacos de 60 kg, golpe al cual pudieron sobreponerse únicamente los grandes productores (Cano et al., 2012, p. 27). Por ello, viendo que los monocultivos presentados como la mejor opción habían fomentado el incremento de la emergencia fitosanitaria, los caficultores empezaron a crear procesos de experimentación entre especies. Por medio del trabajo conjunto, entre los caficultores experimentados y la FNC, se lograron compartir las variedades Tabi y Castillo, ya que estas presentaban un 80 % de resistencia a las enfermedades derivadas de plagas o pesticidas (Cano et al., 2012, p. 25).

Sin embargo, al ver que la labor de la FNC no tenía presentes las capacidades de los pequeños productores y que estos habían encontrado en las afectaciones de la roya y la broca una oportunidad para experimentar, germinó la intención de iniciar proyectos desde el trabajo asociativo. A buena hora, el Estado colombiano se vio obligado a ejercer su presencia directa en el sur del Tolima. Si bien los caficultores habían podido desarrollar sus actividades aun con confrontaciones armadas entre paramilitarismo

y guerrilla, para el final de la primera década de 2000 se presentaría un cambio fundamental. Dado que las FARC tenían planeado sitiar a Bogotá y su posición en el Tolima era estratégica para ello, el Estado se vio obligado a desplegar su fuerza militar (Aponte, 2019, p. 204). Por medio de la Política de Seguridad Democrática¹³ se logró desarticular al actor armado. Tal proceso de desmantelamiento vino acompañado de la inversión en vías, puestos de salud y centros educativos. Por esa razón, de una u otra forma se amplió la capacidad de acción del caficultor.

Con la posibilidad de moverse libremente por el territorio y empezar a gestar encuentros campesinos, para 2014, se decidieron organizar diferentes caficultores bajo la figura de asociación productiva. No obstante, el surgir vino acompañado de una intención, el no replicar el modelo planteado por las haciendas y la federación, sino el pensar en formas sostenibles de trabajar con el grano. Gracias a ello, nació la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (Asopep). Esta, reconociendo que en la formación del caficultor se encontraba la posibilidad de tejer redes de comercio directo y un buen manejo productivo a pequeña y mediana escala, decidió construir su propio proceso formativo. Dicho modelo educativo es el que se verá a la luz de los siete principios y tres roles característicos de la formación campesino a campesino. Con esta apuesta contemporánea se invita a reconocer e impulsar procesos en los propios términos de cada contexto productivo rural.

Aunque en la práctica los siete principios se interconectan y dialogan entre sí, para fines prácticos y explicitación de las metodologías, aquí se plantea una tríada. El primer grupo lo compone la experimentación campesina, los intercambios desde los saberes locales y la horizontalidad del diálogo; en segundo lugar, está el diálogo productivo, la promoción y organización de hechos productivos con miras a la innovación según contexto; por último, y como resultado de todo el proceso, resalta el surgimiento de líderes locales. En este sentido, para lograr hablar de la formación campesino a campesino desde la apuesta de Asopep, se tendrán presentes los recorridos por fincas demostrativas, entrevistas a caficultores, docentes y un taller de diálogo de saberes en el que participaron diferentes actores productivos y ambientales.

¹³ Se denomina Seguridad Democrática al tipo de política manejada para la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Esta fue marcada por una militarización masiva del campo y recurrentes escándalos por el uso desmedido de la fuerza militar, entre ellos los falsos positivos.

Sobre todo, se hará alusión al espacio formativo creado desde la Asociación, la Escuela Construyendo Futuro (ECF), ya que allí se materializa la intención de mejorar la vida de los pequeños productores por medio de la formación.

Para la primera década de 2000, los caficultores reconocen no estar en la capacidad de valorar sus cargas de café, no se tenían conocimientos de las propiedades morfológicas del grano o su valoración en taza. Como lo expresa un caficultor, la falencia de los productores campesinos estaba en la falta de cercanía con su producto: “Producíamos el café, pero no sabíamos lo esencial porque nunca lo probamos, nosotros solo vendíamos a productores acá en la región. Ahora estamos empezando a ver que nosotros mismos podemos probar y tener un control de la calidad de la región” (entrevista a Andrés Enciso, 2019). En respuesta a esa carencia, Asopep empezó a promover la creación de proyectos afines a la catación y recorridos por fincas demostrativas. Replicando prácticas de los productores antioqueños, se vio en el manejo de cafés especiales la posibilidad de experimentar y compartir experiencias entre los caficultores.

Por medio de experimentación y diálogo entre los productores de Asopep, se fue construyendo una forma de valorar el café. En principio se tenían métodos rústicos, oler el café una vez tostado era la forma de llegar a saber qué tan bueno sería este al servirse en taza. Sin embargo, poco a poco se fue sofisticando el modelo. Una de las mejoras estuvo al empezar a reconocer las afectaciones directas en los granos sin ser tostados. Revisando uno por uno se percataron de que algunos eran picados al despulparse, otros no se recolectaban en su punto de maduración y se reseocaban, también se podían presentar granos muy húmedos por falta de tiempo en secado. No obstante, ¿cómo darse cuenta de qué generaban esos tipos de granos en la taza una vez servida? En palabras de un joven de la ECF: “Se recolectaban granos según el tipo de afectación y con ellos preparábamos una infusión, luego de ser bebida, todos podíamos empezar a reconocer si las cargas estaban siendo afectadas por la presencia de granos degradados o dañados” (entrevista a Eduar Huepe, 2019).

Algo tan sencillo como comenzar a probar el café y reconocer sus propiedades permitió acercar los productores a la catación. También, el degustar ayudó a empezar a reconocer campesinos que presentaban buenas valoraciones con relativa frecuencia. Con la intención de seguir aprendiendo, se promovió la creación de redes de intercambio de experiencias entre

saberes locales. Siendo la figura de las fincas demostrativas una estrategia para invitar a productores de la región al aprendizaje y diálogo en igualdad de condiciones, se lograron compartir formas para recolectar y procesar de forma óptima el producto. Algo tan sencillo como reconocer el grano en su punto de maduración permitió grandes avances. Anterior al proceso de experimentación e intercambio de saberes, los recolectores se encargaban de tomar todo grano de la cosecha. Sin embargo, viendo que el café de color cereza o uva tenía mejores propiedades en taza, se invitó a tomar solo estos y dejar los otros para posteriores recolecciones (entrevista a Katherine Villamil, 2019). Hecho que indirectamente contribuyó a desacelerar los ciclos productivos impuestos por el modelo hacendatario.

En ese mismo sentido, las fincas demostrativas fueron una manera de responder al empobrecimiento del caficultor dependiente de insumos químicos. Viendo que Asopep empezó a manejar un sobreprecio para las cargas certificadas bajo procesos agroecológicos,¹⁴ los campesinos comenzaron a promover formas de abono orgánico y diversificación dentro de las fincas productivas. Mientras que el paisaje ambiental fomentado por los hacendados estaba compuesto por monocultivos de café, en la actualidad se cuenta con diversos árboles nativos a manera de sombrío para los cafetales, procesos de apicultura y huertas familiares (recorrido finca demostrativa, 2020). Con ello, no solo se garantiza el sustento alimentario familiar, sino que se han compartido formas de abono para los cultivos en general. Entre los más comunes se encuentra el uso de la cacota,¹⁵ y, dado que esta se presenta en buenas cantidades, ha ayudado a disminuir el uso de capital dispuesto para abonos preparados químicamente.

Con los procesos de catación experimental y las visitas a fincas demostrativas, desde 2014, se ha permitido mejorar la calidad del café. Por medio de los diálogos entre campesinos caficultores se han superado los discursos

¹⁴ Entre ellas se encuentran: USDA Organic, Alimentos Ecológicos, Normativa Japonesa Orgánica, Normativa Coreana Orgánica, Fairtrade, CO-BIO-160 Normativa Europea Orgánica, Con Manos de Mujer y Biosuisse.

¹⁵ Cáscara de café resultante del proceso de despulpe del grano. “Lo que hacemos es dejarla ahí y agregarle todos los desechos orgánicos que se tienen en la finca: cáscaras de papa, cáscaras de limón, de lima, mandarina, de naranja, todos los desechos de la finca se agregan acá, ah y cartón también. Todo se deja aquí y lo orgánico se descompone con el tiempo” (entrevista a Katherine Villamil, 2019).

de la Revolución verde y las campañas formativas de la FNC. Al ser espacios gestados desde la misma asociatividad, los actores que participan en sus campañas o escuela cuentan con la plena libertad para expresar sus inquietudes o dar sus opiniones del proceso formativo. Aunque el saber del agrónomo también es bien recibido en los procesos de estandarización del producto, este no subordina la participación campesina, por el contrario, dialoga con ella. Aportando al desarrollo de tres pilares de la formación campesino a campesino, dichas experiencias son muestra de los modos de adecuación y aprendizaje posible entre el trabajo asociativo, el técnico y el científico. Una manera de construir una epistemología participativa.

Gracias a la ECF se ha organizado el proceso formativo en cuatro módulos: 1) morfología del grano de café, 2) propiedades de la planta y su siembra, 3) comercialización y certificaciones orgánicas, y 4) catación y barismo (recorrido instalaciones Asopep, 2019). En su interior se gesta un diálogo de saberes entre lo tradicional y moderno, permitiendo la innovación y promoción de hechos productivos. Con el intercambio de experiencias entre los campesinos y la lectura de sus procesos desde la agronomía, se forma al campesino desde su propia praxis. Partiendo del proceso de refinamiento en la producción cafetera, se apunta a la construcción de una red de venta directa. Encontrando su base en las personas formadas allí, se organizan ferias de catación y barismo, espacios construidos para la comercialización del café a vendedores extranjeros y locales. Un lugar sin la intermediación de la FNC o imposición de precios injustos.

En comparación con las redes de comercio de finales de los noventa e inicios de 2000, el caficultor ya no está sujeto a la valoración externa de sus cargas de café. Por medio de la formación, se sabe que se tiene un sobreprecio al contar con certificaciones, que el café no solo se paga por los sacos vendidos, sino por la calidad de estos, y que no se requiere incurrir en sobrecostos por la compra de paquetes tecnológicos. Con esos cambios significativos, los caficultores buscan mejorar sus modelos productivos y así empezar a recibir un mejor pago por su trabajo. Una expresión del cambio está en el concurso Taza de la Excelencia, en el cual diferentes asociaciones productivas se reúnen y ponen a competir los cafés de la región. El ganador de este premio es reconocido como un productor de alta talla, llegando al punto de vender su café a un alto precio y establecer su marca personal.

No obstante, el lograr un proceso de estandarización óptimo para tener una alta valoración en taza toma varios procesos de experimentación. Por esa razón, como una forma de promover a sus caficultores, Asopep mantiene otro sobreprecio a los cafés que presenten una buena calidad. Para mejorar las habilidades de las personas de la ECF, se disponen los cafés de la Asociación para su catación. Con ello, cuando un café resalta sus propiedades en taza, se le retribuye al caficultor. Como lo expresa un integrante de la escuela:

El precio del café ya está definido, lo que le valió al productor, pero si el productor le dio un buen proceso desde la finca, puede que a alguien que le guste le compre y ya le está comprando a un millón de pesos por carga o dos millones dependiendo de cómo esté el café. Digamos, acá se le está pagando a \$90 000 bulto, pero si al señor le da taza se le tiene que llamar para informarle y ver qué se sube. Digamos que de los 10 lotes que trajo 5 le dieron taza, entonces ya se le tiene que dar una bonificación al señor por la cantidad de taza que le dio (entrevista a Eduar Huepe, 2019).

Así mismo, otra manera de fomentar los proyectos productivos es por medio de la prestación de equipos para la experimentación. En este punto no se desarrolla un diálogo de saberes como tal, sino es la intención individual de cada productor por mejorar su proceso. Puesto que no todos los caficultores cuentan con las máquinas para descascarar el grano, tostadora o las prensas para su catación, es el laboratorio de la Asociación el lugar idóneo para desarrollar prácticas. Tanto cada participante de la ECF como cada uno de los asociados puede llevar muestras de café a los ensayos y poner a prueba los resultados de su proceso. Igualmente, el buscar ayuda de personas experimentadas es otra forma de obtener mejorías. El caso de Katherine Villamil es muestra de ello, para obtener un honey¹⁶ buscó la ayuda de su primo e hizo uso de la valoración del proceso en un laboratorio. Lo que resalta de esta última experiencia es “el interés de lograr tener otro tipo de proceso de café para mejorar un poco más la calidad y que también al momento de venderlo haya un sobreprecio, para que los administradores y

¹⁶ Proceso por el cual se eliminan la piel y la pulpa del grano, pero parte o todo el mucílago (miel) permanece.

los recolectores también tengan unas garantías [en sus ingresos]” (entrevista a Katherine Villamil, 2019).

Siendo otro motor para el desarrollo de proyectos productivos, la Asociación busca invertir en la adecuación de sus espacios por medio de tecnologías e infraestructura. El encuentro realizado a inicios de 2020 logró poner en evidencia la intención de invertir en maquinarias para el procesamiento del grano. Una tostadora es fundamental para el proceso de transformación, pero ese tipo de maquinaria sobrepasa los costos de cualquier pequeño o mediano productor. Así, logrando reunir las contribuciones de los más de 160 afiliados, la inversión en maquinarias y espacios para usos colectivos es una de las mejores estrategias para superar los atrasos. En la actualidad, se está construyendo una planta con la capacidad de acoger a todos los asociados y comerciantes extranjeros, un espacio con tres edificaciones. Expansión y herramientas para los laboratorios de catación, un centro de eventos en el que se pueden organizar más de tres presentaciones de barismo en simultáneo y un centro de reuniones para los asociados es fruto del esfuerzo conjunto entre los caficultores del sur del Tolima (taller “Diálogo de saberes”, 2020).

Como resalta, el trabajo constante de los caficultores tolimeses ha logrado cambiar el modelo productivo hacendado, mejorando las condiciones de vida de los campesinos afectados por la violencia armada. Por medio del trabajo colectivo se construyeron cambios estructurales en la forma de comercializar con el café. Transformaciones que a su vez han permitido valorar la labor de actores clave para la transmisión de experiencias y articulación del trabajo campesino con el contexto actual. La catación y el barismo, prácticas contemporáneas para la formación, venta y promoción de formas de vida atadas al café, no serían nada sin los actores que se motivan y motivan a otros a inmiscuirse en la vida cafetera. Aunque aquí no se pueda hablar de todos los líderes y lideresas de la caficultura, sí se debe reconocer la labor constante de los participantes de la ECF. Gracias al proceso formativo horizontal, se ha conseguido inocular un sentimiento transformador en las generaciones del presente. Por medio de la asociatividad y pedagogías entre campesinos productores de café se desarrollan procesos de transformación en toda la cadena productiva, desde el catador hasta el recolector.

Me gusta cuando llegan los niños al laboratorio y yo poder brindarles conocimientos. No lo hago como de manera de exaltarme, sino como

de ayudar a las personas que tienen esa pasión que tengo yo y poderles brindar mis conocimientos, o lo poco que yo sé, para que ellos tengan las bases para seguir trabajando. Entonces, eso me alegra, y me alegra pues también tengo la iniciativa de seguir trabajando en las fincas y mejorar el café, ya que, si mejora mi café y tengo un sobreprecio, también pueden mejorar mis recolectores, porque sé que no es un trabajo fácil; entonces que ellos también tengan unas garantías, como me va bien a mí, que a ellos también (entrevista a Katherine Villamil, 2019).

Cumpliendo labores de promotores, facilitadores y coordinadores, cada parte de la Asociación es y será fundamental para el posicionamiento de las organizaciones campesinas como un frente contra la privatización y colonización del campo desde intereses privados o intereses de actores armados. Mientras los caficultores experimenten en sus parcelas, los jóvenes se formen y formen a otros, más fácil le será a la organización pensar en estrategias para garantizar un comercio fluido y justo del café tolimense. A través de la ECF se ha permitido reconocer la capacidad de agencia de los actores campesinos al momento de construir nichos de productos. En Asopep se encuentra una de las formas de construir procesos formativos para el posicionamiento de apuestas productivas agrícolas, encarna un ejemplo de la formación campesino a campesino. Allí está “la habilidad de alcanzar, adaptar, crear, usar y defender el conocimiento agroecológico en sus propios términos [...], es una comunidad epistemológica que accede, genera y comparte conocimiento para alcanzar sus propios fines” (Holt-Giménez, 2008, p. 109).

A manera de conclusión

La esquina sur del Tolima es un territorio nacido desde diferencias políticas y económicas, acogió en un inicio a campesinos desplazados y hacendados liberales. Las diferencias partidistas y la poca o nula ayuda del Estado colombiano a los campesinos colonos gestó las bases para una confrontación armada. Las disputas por el manejo que se les daban a las plantaciones de café y la nula distribución de las riquezas resultó en la división entre limpios y comunes. De no ser porque la violencia bipartidista empezó a armar grupos del conservadurismo, limpios y comunes no hubieran tenido que armarse y trabajar en simultáneo. Sin embargo, esa tregua no cambió las relaciones de desigualdad ni el sistema productivo que propendieron los hacendados cafeteros.

Al contexto de confrontación armada se le sumó el ingreso del cultivo ilícito. La amapola se tomó el sur del Tolima a la par que los cafetales. Con ello no solo se incrementa el poder de financiación de las insurgencias y paramilitares, también se empezó a estigmatizar fuertemente a la población y esta tuvo que tratar de tramitar las dificultades de inseguridad y tensiones armadas. Entre combates, posturas políticas y distintas visiones de futuro se siguió desarrollando la vida del caficultor. Lamentablemente, cuando los limpios se alían con las AUC, el sur del Tolima comienza a presentar un momento de confrontación directa, de violencias, agresiones y atropellos a los derechos humanos.

El panorama tolimese no ve gran cambio en su situación de confrontación sino hasta dos momentos coyunturales. Con la presidencia de Vélez se desarrollan diferentes operaciones militares que debilitan al actor armado a la par que reprimen y juzgan arbitrariamente a la población civil. Por otro lado, con la firma del Acuerdo de Paz, se empieza a hablar de una deuda histórica con los territorios afectados por guerrillas y paramilitarismo. Así, se abre el debate y se comienzan a poner sobre la mesa el tipo de políticas públicas que deben atender y reparar daños estructurales en las comunidades rurales. Uno de los puntos que se tratan es la educación, pues de ella depende la construcción de nuevos horizontes, y, por sobre todo, cómo entran las asociaciones locales en los procesos de formación.

El papel de la ciudadanía rural es de vital interés para los procesos de cambio, dado que en este caso se habla de modelos formativos que apoyan una mejor planeación y distribución de las riquezas resultantes del mercado cafetero. Al salir de las disputas entre terratenientes cafeteros y campesinos sin tierra, se permite crear y apoyar modelos productivos anclados en las realidades de pequeños productores. Al no estar bajo hostigamientos por actores armados, los cafeteros están en la libertad de moverse por las diferentes veredas y compartir experiencias sobre el cultivo, producción y venta del producto. Aún más, sin amenazas a docentes, daños a planteles estudiantiles, sin desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, se empiezan a presentar formas de articulación entre la institución educativa formal y los distintos proyectos municipales.

Así mismo, el silencio de los fusiles permite comenzar a hablar de temas fundamentales como el mal manejo dado a los proyectos de formación rural, cuestionar las lógicas desde donde son pensados y quiénes son los verdaderos

beneficiarios de ello. Desde la crítica interna y la visualización de un nuevo horizonte es que se plantea la formación campesino a campesino, formación que contribuye a una vida digna para el caficultor por fuera de lo ilícito y cadenas de venganza armada. Contando con apoyo dentro de las escuelas y espacios de comercialización, ya no dependerá de una lucha territorial el empezar a trabajar con el café, mucho menos de modelos extensionistas o campañas formativas desde el extensionismo rural.

Como lo evidencian las expresiones de Radio Sutatenza, la Campaña de Alfabetización Pablo Acuña y la pedagogía campesino a campesino, son las disputas entre pequeños productores campesinos un tema de carácter político-económico que tiene que repercutir de alguna manera en los procesos organizativos del campesinado colombiano. La educación para la emancipación de las relaciones de subordinación de las comunidades rurales es fundamental al momento de evitar la vía del conflicto armado. La apuesta aquí es formarse entre y para campesinos a fin de atender las necesidades productivas, asociativas y generales del contexto local. Si los proyectos de formación externos no atienden las peticiones campesinas, con tal de evitar enfrentamientos, se deben tomar como ejemplo los ejercicios de organización aquí expuestos.

Así, encontrando en la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas un ejemplo contemporáneo del modelo campesino a campesino, se invita a reconocer insumos para la organización y promoción de modelos productivos contrahegemónicos. En Planadas (Tolima), se ha desarrollado un modelo que estimula la experimentación desde el saber campesino, el diálogo horizontal entre diferentes actores y la promoción de apuestas productivas sostenibles ambientalmente. Por ello, se invita a seguir pensando la formación entre campesinos como una estrategia para combatir el agronegocio y el empobrecimiento de las comunidades rurales y sus luchas internas. En ese modelo se materializan las esperanzas pasadas y futuras de transformar el campo en un espacio sin violencia armada.

Referencias

- Albán, Á. (2011). Reforma y contrarreforma agraria en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, 13(24), 327.
- Antentas, J. M., & Vivas, E. (2013). Resistiendo a la privatización de las semillas. *Ecología Política*, (46), 108-111.

- Aponte, F. (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. Bogotá: Fundación de Investigación y Educación Popular, Programa para la Paz (Cinep/PPP).
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). (1971). *Acta de constitución de la ANUC*. Recuperado de <http://anuc.co/historia.asp>
- Bautista, M., & González, G. (2019). *Docencia rural en Colombia. Educar para la paz en medio del conflicto armado*. Bogotá. Fundación Compartir.
- Borras, S. (2004). *La Vía Campesina: un movimiento en movimiento*. Ámsterdam: Transnational Institute.
- Cadena Gómez, G., & Gaitán Bustamante, A. (2006). *Las enfermedades del café: logros y desafíos para la caficultura colombiana del siglo XXI*. Chinchiná, Caldas: Cenicafé.
- Cano Sáenz, C. G., Vallejo Mejía, F. C., Caicedo García, E., Amador Torres, J. S., & Tique Calderón, E. Y. (2012). El mercado mundial del café y su impacto en Colombia. *Borradores de Economía*, (710).
- Caro, F. E., & Kárpava, A. (2020). La calidad educativa, un análisis desde la violencia en Colombia. *Revista Espacios*, 27-37.
- Ceccon, E. (2008). La Revolución verde: tragedia en dos actos. *Ciencias*, 91(91), 21-29.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2018). *Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico*. Bogotá: CNMH.
- Cuéllar, N., & Kandel, S. (2007). Programa Campesino a Campesino de Siuna, Nicaragua. Jakarta: Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor).
- De Gonzalo Aranoa, I. (2010). *Sistematización de la experiencia vivida en un proceso de campesino a campesino en El Salvador*. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía.
- Entrevista a Andrés Enciso. Duración 40:32. Planadas, 2019.
- Entrevista a docente rural. Duración 1:46:12. Gaitania, 2019.
- Entrevista a Eduar Huepe. Duración 1:43:25. Planadas, 2019.
- Entrevista a Katherine Villamil. Duración 34:16. Planadas, 2019.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI.
- Harvey, D., & Mateos, A. V. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Holt-Giménez, E. (2008). *Campesino a campesino: voces de Latinoamérica. Movimiento de campesino a campesino para agricultura sustentable*. Managua: Agroecología.

- La Vía Campesina. (2002). *Via Campesina: histórico, naturaleza; linhas políticas internacionais, projeto popular para a agricultura brasileira*. Brasil: Via Campesina Brasil.
- Maristella, S., & Enrique, V. (2014). *Maldesarrollo: la Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Méndez Chaux, Á. E. (2014). *La ANUC-UR, la educación como estrategia de lucha popular*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Morales Rojas, D. M. (2016). *La cuestión de la tenencia de la tierra en Colombia. Una revisión histórica a sus horizontes de intervención*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Osses Rivera, S. L. (2015). Cincuenta años de radio comunitaria en Colombia. Análisis sociohistórico (1945-1995). *Rev. Cient. Gen. José María Córdova*, 13(16), 263-283.
- Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra?: *propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Pérez, J. M. (2010). *Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la costa Caribe*. Bogotá: Puntoaparte Editores.
- Pernett, V. (2015). De cómo Moisés Banquett y Orlando Fals Borda hablan de la ANUC. *Tabula Rasa*, (23), 23-36.
- Recorrido finca demostrativa, 2020.
- Recorrido instalaciones Asopep.
- Rosset, P. M. (2016). La reforma agraria, la tierra y el territorio: evolución del pensamiento de La Vía Campesina. *Mundo Agrario*, 17.
- Rutas del Conflicto. (2017). *El Davis. El nacimiento de las FARC*. Recuperado de https://rutasdelconflicto.com/especiales/nacimiento_farc_davis/
- Taller “Diálogo de saberes”, 2020.
- Vaca Gutiérrez, H. (2017). *Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia (1947-1989)*. Valle del Cauca: Universidad Autónoma de Occidente.

Los autores

Carlos Mario Perea Restrepo

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia; ha participado en proyectos internacionales que involucran a centros de investigación de Colombia, México y Brasil, entre otros. Experto en el conflicto urbano y la sociedad contemporánea, la violencia y la construcción de paz desde los territorios, temas que desarrolla desde una perspectiva cultural histórica mediante investigaciones en Colombia y América Latina. Entre sus libros se encuentran *Porque la sangre es espíritu. Imaginario y discurso político en las élites capitalinas, 1942-1949*; *Limpieza social. Una violencia mal nombrada*; y *Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder*.

John Jairo Uribe Sarmiento

Investigador en estudios de paz, ocio, recreación, juventud y cuerpo desde la perspectiva del análisis de las relaciones de poder. Antropólogo. Especialista en Administración y Planeación del Desarrollo Regional. Magíster en Ciencia Política. Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Coeditor del libro *Pluriverso de paz en el Tolima: sistematización de una investigación-acción transformadora*; coautor con César Augusto Velandia del capítulo de libro “Intangible heritage in Colombia in the midst of armed conflict and unreached peace” en *Transcultural diplomacy and international law in heritage conservation: a dialogue between ethics, laws and culture*, editado por Springer; coautor con María del Pilar Salamanca del capítulo de libro “Aprendiendo a ser fuertes y emprendedoras. Estrategias de supervivencia

en mujeres desplazadas víctimas del conflicto armado”, en *Cátedra UNESCO. Derechos humanos y violencia. Gobierno y gobernanza. Desplazamiento forzado, análisis para la prevención y la restauración de los vínculos sociales rotos*, editado por la Universidad Externado de Colombia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6816-0631>

Iokiñe Rodríguez Fernández

Socióloga venezolana, especialista en transformación de conflictos y justicia ambiental con un enfoque decolonial y en metodologías de investigación acción participativas. Magíster y doctora en Estudios Ambientales y del Desarrollo para América Latina. Actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia, del Reino Unido. Dentro de sus publicaciones recientes destaca *Pluriverso de paz en el Tolima: sistematización de una investigación-acción transformadora* (<https://pluriversodepazentolima.net/wp-content/uploads/2021/10/Pluriverso-de-Paz-en-el-Tolima.pdf>). También ha sido coeditora de siete obras más, ha escrito una variedad de capítulos de libros y ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas internacionales del tema de conflictos socioambientales y su transformación.

Jairo Baquero Melo

Doctor en Sociología de la Freie Universität Berlin. Actualmente, es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (Bogotá). Trabaja en investigaciones relacionadas con conflictos armados, construcción de paz, desigualdades sociales, estudios regionales, desarrollo rural, DD. RR., reincorporación socioeconómica de excombatientes, conflictos por la tierra, asociaciones rurales y estudios sociales del conocimiento. Tiene experiencia de trabajo en varias regiones de Colombia, incluyendo Chocó, Urabá, Huila, Tolima y Putumayo. Es becario doctoral del proyecto desiguALdades.net (BMBF). Entre sus publicaciones se destacan los artículos “Middle classes and rurality: the expansion of urban middle classes and new social inequalities in Colombia”, en *Journal fur Entwicklungspolitik* (2017); y “Regional challenges to land restitution and peace in Colombia: the case of the Lower Atrato”, en *Journal of Peacebuilding and Development* (2015); así como el libro *Layered inequalities*, de 2014. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8174-4524>

Santiago Andrés Padilla Quintero

Politólogo de la Universidad de Ibagué. Especialista en Acción sin Daño y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es investigador del Grupo Pluriverso de Paz en Tolima. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1837-9795>

Ulrike Theuerkauf

Es profesora (*lecturer*) de Políticas y Desarrollo Internacional en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia (Reino Unido). Es politóloga especialista en los efectos formales e informales de las instituciones políticas en la emergencia de guerras étnicas. Obtuvo su PhD in Political Science en la London School of Economics and Political Science (LSE) en 2012. Ha desarrollado su actividad académica en los campos de la política comparada y la teoría de las relaciones internacionales, al igual que en estudios sobre las guerras civiles y la violencia política, instituciones políticas formales e informales, sistemas electorales, estructuras estatales, corrupción, democracia y democratización. Entre sus publicaciones resaltan “Cultural violence in the aftermath of the Brexit referendum: manifestations of post-racial xeno-racism” (en coautoría con M. Abranches, C. Scott y C. White), en *Ethnic and Racial Studies* de 2021; “Economic well-being and self-placements on a left-right scale: evidence from undergraduate students in seven countries” (en coautoría con L. Esposito), en *Journal of Political Ideologies* de 2021; y “Visual and oral narratives of place and belonging during Brexit” (en coautoría con M. Abranches), en *Visual Anthropology* de 2021.

Cristina Salas Valdés

Investigadora en estudios de paz y desarrollo, desde una perspectiva feminista y decolonial. Doctora en Antropología Social y Cultural, dentro del Programa de Migraciones y Conflictos en la Sociedad Global de la Universidad de Deusto (España). Ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Paz y Conflictos de la Universidad de Upsala (Suecia) y en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal). En la actualidad es asociada de investigación sénior en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia (Reino Unido). Su publicación más reciente es *Pluriverso de paz en el Tolima: sistematización de un proceso de investigación-acción transformadora* (editora y coautora con

I. Rodríguez, N. Barros Navarro, y J. J. Uribe Sarmiento; 2021, DEV-UEA). Ha escrito principalmente sobre la relación que existe entre la comunicación, la paz y el desarrollo. Sus artículos pueden ser consultados en línea en <https://uea.academia.edu/CristinaSalaValdés>

Nohora Isabel Barros Navarro

Politóloga de la Universidad de Ibagué. Activista lesbianofeminista. Investigadora del proyecto “Escuela, territorio y posconflicto”. Coautora del libro *La retaguardia en disputa. Monográfico de la provincia sur del Tolima*; coeditora de los textos *Tejidos de paz y sororidad. Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz y Pluriverso de paz en el Tolima: sistematización de un proceso de investigación-acción transformadora*. Miembro del grupo de investigación Laboratorio Feminista de la Universidad del Tolima y de Zoon Politikón de la Universidad de Ibagué. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6867-4138>

María del Pilar Salamanca Santos

Psicóloga. Magíster en Psicología de la Universidad del Norte. Especialista en Docencia Universitaria CEPES La Habana (Cuba)-Universidad de Ibagué. Actualmente es investigadora y docente catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Ha escrito en coautoría varios artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con programas socioeducativos en contextos carcelarios, construcción de paz desde las víctimas, las mujeres y los territorios, entre otros. Publicaciones recientes: “Maternidad entre rejas: una mirada desde la legislación, la jurisprudencia y la experiencia en un centro penitenciario”, en *Pluralismo jurídico y derechos humanos: perspectivas críticas desde la política criminal* (Cátedra de Investigación Científica del Centro de Investigación en Política Criminal, número 11, 2020, Universidad Externado de Colombia); “Gestionar los odios para obtener la paz: paradojas de la construcción de la paz en Colombia”, en *revista Alteridades*, volumen 58, número 3, 2019; “Aprendiendo a ser fuertes y emprendedoras. Estrategias de supervivencia en mujeres desplazadas víctimas del conflicto armado”, en *Cátedra UNESCO. Derechos humanos y violencia. Gobierno y gobernanza. Desplazamiento forzado, análisis para la prevención y la restauración de los vínculos sociales rotos* (Bogotá: Universidad

Externado de Colombia, 2019); “Café, conflicto y posconflicto: la disputa por las retaguardias en el sur del Tolima”, en *Territorios, conflictos agrarios y construcción de paz: comunidades, asociatividad y encadenamiento en el Huila y sur del Tolima* (Bogotá: Universidad del Rosario, 2019). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7403-1705>

Mónica del Pilar Álvarez Bustos

Comunicadora Social y magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Es coordinadora académica del programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué. Ha trabajado en el desarrollo de estrategias participativas de comunicación, así como en la construcción participativa de procesos de paz en Colombia. Coautora de la obra *40 años construyendo región* (2020).

María Teresa Armijos Burneo

Es profesora (*lecturer*) de Recursos Naturales y Desarrollo Internacional en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia. Se graduó en Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Virginia, y de la Maestría en Investigación en Estudios del Desarrollo en Oxford. Obtuvo su doctorado en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Ha trabajado con grupos de mujeres de las zonas rurales del norte de Argentina, e investigado movimientos sociales en favor de los recursos naturales, promoción de los derechos indígenas y responsabilidad social corporativa en Ecuador, Perú y Guayana. Su investigación aborda la relación entre los humanos y el entorno, indagando por las políticas de gestión de los recursos naturales, los riesgos ambientales, desde una perspectiva jurídica, ciudadana, de derechos humanos y medioambiental. Entre sus publicaciones se destacan “Encuentros y desencuentros con la fórmula del riesgo y los desastres: tiempos para el cuidado y la reciprocidad”, en coautoría con Viviana Ramírez Loaiza, en *REDER* de 2021; “Moving with risk: forced displacement and vulnerability to hazards in Colombia”, con Roger Few, Viviana Ramírez, Lina Zambrano, Hazel Marsh, en *World Development* de 2021; y “Environmental justice and transformations to sustainability”, con Adrian Martin, Brendan Coolsaet, Neil Dawson, Gareth Edwards, Roger Few, Nicole Gross-Camp, Iokiñe Rodríguez Fernández, Heike Schroeder, Mark Tebboth y Carole White, en *Environment* de 2020.

Germán Augusto Pachón Gantiva

Docente-becario doctoral de la Universidad del Rosario. Cuenta con una maestría en Investigaciones Comparadas del Desarrollo de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París). Ha trabajado en el análisis de políticas de desarrollo rural y construcción de paz. Publicó el libro *Políticas de desarrollo rural y colonización: zona de la antigua Reserva Natural de la Macarena*.

Emmanuel Quiroga Rendón

Joven investigador de la Universidad del Rosario. Sociólogo. Magíster en Estudios Sociales. Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas. Se ha enfocado en la realización de procesos de investigación e intervención en dos áreas temáticas: desarrollo rural y población juvenil. Publicó un capítulo del libro *Territorios, conflictos agrarios y construcción de paz: comunidades, asociatividad y encadenamientos en el Huila y sur del Tolima* en el año 2020.

Vicente Vega Reina

Profesional en sociología de la Universidad del Rosario. Investigador de temas educativos dentro del proyecto “Conocimientos y saberes de comunidades y organizaciones sociales como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles”, de Minciencias, así como dentro del libro *Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del conflicto armado*, publicado por la Fundación Compartir. Entre mis escritos sobresale “Una apuesta pedagógica: caficultura y construcción de paz en el sur del Tolima” (<https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/31442>).

Juan David Ardila Suárez

Magíster en International Development de la Universidad de East Anglia. Magíster en Filosofía de la Universidad de los Andes. Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador editorial de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea de Colombia. Editor científico y gestor de proyectos editoriales en universidades. Ha trabajado en el análisis de políticas públicas, monitoreo y evaluación de proyectos. Publicó “Can technology address the challenges for refugee primary education in the Aegean Islands?” en 2020.

Martha Ibeth Cardona Bonilla

Lideresa social, activista y defensora de los derechos de las mujeres. Jefa de hogar, microempresaria y estudiante de Administración Pública en la ESAP. Excandidata al Concejo de Chaparral. Coeditora y autora del libro *Tejidos de paz y sororidad. Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz*. Coordinadora de Derechos Humanos de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz.

María Ximena Figueroa Olaya

Lideresa indígena, activista por la paz, defensora de los territorios y de los derechos de las mujeres rurales e indígenas. Administradora de Negocios Internacionales. Coeditora y autora del libro *Tejidos de paz y sororidad. Memorias de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz*. Coordinadora general y representante legal de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz.

Laura Yaneth Rivera Revelo

Abogada y socióloga de la Universidad de Nariño. Magíster en Derecho Constitucional y doctora en Derecho de la Universidad Andina. Investigadora becaria de la Universidad de Kassel (Alemania). Ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ibarra) y de la Facultad de Derecho y Posgrados de la Universidad Mariana (Pasto, Colombia). Actualmente es docente de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes. Dentro de sus publicaciones resalta la obra *El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas: una dicotomía entre Próspero y Calibán* (Editorial Académica Española, 2016); y los artículos “Violencia sexual e inserción de la mujer en la vida guerrillera en América Latina” (*Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 2017); y “Memoria, reparación simbólica y arte: la memoria como parte de la verdad” (*Revista de Derecho Foro*, número 33, 2020).

María Escilda Ramírez

Miembro de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht). Lideresa en el territorio, que, a través de la enseñanza del tejido, trabaja por la emancipación de la mujer en lo personal, económico y político; por medio de la Asociación lidera marchas y demás acciones en contra de la

violencia en el territorio; desde allí también lucha por rescatar los saberes ancestrales que los identifican como herrerunos y por compartirlos con las nuevas generaciones.

Alixé Ulcue Albarracín

Miembro de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht). Trabaja por la construcción de paz e identidad en el territorio y por el reconocimiento de la mujer y su papel en la sociedad; a través de la Asociación lidera marchas y demás acciones en contra de la violencia en el territorio, así como intenta rescatar los saberes ancestrales que los identifican como herrerunos y compartirlos con las nuevas generaciones.

Axel Alejandro Rojas Martínez

Sociólogo de la Universidad del Valle. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeña como profesor titular en el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca. Recientemente participó en la edición de tres tomos sobre *Antropología hecha en Colombia* (2017 y 2019) y en 2020 publicó con Eduardo Gudynas el artículo “Informal, ilegal, artesanal, tradicional, ancestral: desentrañando el entramado de los extractivismos por el oro en los ríos sudamericanos”, en la revista *Yeiyá* (volumen 1, número 1, pp. 21-45). Actualmente realiza trabajo de campo sobre diversas dimensiones del conflicto en el suroccidente colombiano.

Leidy Vanessa Useche Acevedo

Antropóloga. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y del Caribe del Clacso. Investigadora del “Semillero taller de etnografía” y del Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del Suroccidente Colombiano (GELPS) de la Universidad del Cauca. Ha participado en proyectos de investigación en el departamento del Cauca junto a organizaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, abordando las relaciones entre conflicto armado y minería, resistencias y construcción de paz, protección colectiva y seguridad. Coautora de la cartilla *Guardias indígenas, afrodescendientes y campesinas en el departamento del Cauca. Historia política y estrategias de defensa territorial* (con Axel Rojas, Universidad del Cauca, 2019).

Jeferson Rodríguez Yate

Tecnólogo en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales de la Universidad del Tolima. Diplomado en Elaboración de Proyectos y Gestión de Recursos de la Universidad Santo Tomás. Diplomado en Asociatividad, Emprendimiento y Habilidades Gerenciales de la Universidad de Santander. Estudiante de Ciencia Política de la UNAD. Actualmente es gestor ambiental en la Fundación Protectora Ambiental Planadas Tolima (Fupapt) y enlace de coordinación regional en Fudesco.

Yeison Ricardo Castellanos Rincón

Postulante a administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública. En la actualidad es coordinador para la gestión del riesgo en la Alcaldía de Planadas (Tolima) y miembro de la Fundación Protectora Ambiental Planadas Tolima (Fupapt).

Las paces construidas desde los territorios son resultado de la interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas de autonomía local. Los capítulos que componen este libro amplían, profundizan y problematizan estos ejes. Cada capítulo aborda y ofrece un panorama muy rico de los modos como se construyen las paces locales. Con especial énfasis en el departamento del Tolima, este libro pretende contribuir a crear una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades locales vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

El recorrido muestra la necesidad de reconocer otras formas de construir la paz, más allá de las narrativas oficiales y de los arreglos institucionales centrados en la reincorporación, la reducción de la violencia y la reparación a víctimas. Las tensiones regionales que se analizan evidencian que, a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y comunidades han logrado construir múltiples propuestas que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la academia, con los medios de comunicación, con activistas, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional.



Universidad del
Rosario



**Universidad
de Ibagué**
Comprometidos con el desarrollo regional



University of East Anglia
**SCHOOL OF
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**